CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1993

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

LICDO. RODRIGO MOLINA A. LICDO. RAÚL TRUJILLO MIRANDA

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTA

LICDO. JOSÉ MANUEL FAUNDES DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
PRESIDENTE

DRA. AURA E. GUERRA DE VILLALAZ DR. ARTURO HOYOS

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

ÍNDICE

PLENO . . . . . 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES . . . . . 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR LA LICDA. LIDIA C. DE TORRES EN REPRESENTACIÓN DE LA LICDA. ISELA ALANIZ DE CHIARI, EN CONTRA DE LA ORDEN CONTENIDA EN EL OFICIO NO. PGN-SGN 1360-93 DE LA SECRETARÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA SE ENTREGUE LA FISCALÍA DEL CIRCUITO DE DARIÉN AL NUEVO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 3

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICDA. MARÍA DEL PILAR AGUILERA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TEODORO JAÉN Y EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 3

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROSMERY LOO ARAÚZ EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN (CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RODRIGO MIRANDA MORALES EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GUERRA FUENTES EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 6

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ, MURILLO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANKLIN LEZCANO CONCEPCIÓN, EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 7

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR AGUSTÍN SELLHORN EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. Panamá, catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993). . . . . 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE RUBIO & RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA BETULIA GÓMEZ DE MARÍN Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 3. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 9

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DAVID CÓRDOBA BATISTA EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR TOMAS EMILIO DE SEDAS RAMOS EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993). . . . . 13

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. JULIO A. EFFIO T. EN REPRESENTACIÓN DE DAYKA MARISSA LAUCHU, CONTRA LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 14

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. EDGAR O. VARGAS EN REPRESENTACIÓN DE ARTHUR DAVIS B. Y LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 16

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO JAIME DE FREITAS EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PAULA PÉREZ DOMÍNGUEZ Y CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 17

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CANDELARIO HERNÁNDEZ AGUILAR EN CONTRA DE LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO

JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN) MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 19

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL E. ROBINSON V., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MANUEL GILBERTO VENCE PASTOR Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 20

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROJOMA, S. A. EN CONTRA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICAS Y ELECTRIFICACIÓN (I.R.H.E.), APELACIÓN, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 21

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA IRASEMA A. TIJERINO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAMUEL HERNÁNDEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 23

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR VIRGILIO QUIÑONES MORALES Y EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 24

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA LA JUEZ PRIMERA DEL CIRCUITO DE HERRERA. APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 26

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS EN AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MELÉNDEZ-CRUZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE EDILDA M. DE ROBINSON, REPRESENTANTE DE SOC. IND. DE CALZADOS PANAMÁ, S. A., CONTRA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR MAGISTRADO ARTURO HOYOS. (PROC. CONT. ADMVO.,DE PLENA JURISD. CALVIN KLEIN INDUSTRIES, INC -VS- MAGISTRADO ARTURO HOYOS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 27

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL, POR MEDIO DE APODERADO LEGAL Y EN CONTRA DE LA JUEZ PRIMERA DEL CIRCUITO DE HERRERA, (DISTRIBUIDORA CINCUENTENARIO, S. A. EN CONTRA DE JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL Y FERNANDA SOLÍS DE VEGA). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 28

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CEDEÑO MEREL EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 29

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO VICENTE GARIBALDI CAMACHO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L., (ANTIGUA COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS ANCÓN), CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR MARIO L. SMALL Y EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 31

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANTONIO LOAIZA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENTINO UREÑA LÓPEZ Y LORIELA COMBES EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 34

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE AISEMANN & AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME CUCALÓN D'ANELLO Y ENRIQUE MONTENEGRO PAREDES ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE LA SOCIEDAD CUBRAMOS, S. A. Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO DE 31 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 34

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ELÍAS DOMÍNGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL LICDO. CESAR H. BROCE HERRERA Y EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 35

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO ABREGO TORRES EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL RAMÓN SOSA GARCÍA DE PAREDES, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD COMERCIO INTERNACIONAL, S. A. Y EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ.

PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 36

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR VIRGILIO E. VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA G., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 38

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EDUARDO N. BERNARD Q., EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LUIS GIL A., REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MARINER, S. A. Y EN CONTRA DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 41

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. JUSTINIANO CÁRDENAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MARCOS BARRERA BOTELLO Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 41

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES MANUEL ALVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MAYORISTA DE AZUERO, Y AURELIO DOPESO CARREIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S. A.; GONZÁLEZ FOYO, S. A. Y SUPER COMERCIAL LA GARANTÍA, S. A. Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 42

RECURSO DE HABEAS CORPUS . . . . . 42

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO LÓPEZ ESPINOZA CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 42

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 43

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN DAVID, CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 45

HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUI MING (USUAL) CHUNG QUIK MING ZHONG EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 46

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ZHONG WEI BIN EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE:ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 47

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR DIVALDO CANO SAAVEDRA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 48

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR RUBÉN DARÍO COYA CUETO EN CONTRA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN POLICIAL (D.I.I.P.). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 48

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR SILVIO MORALES EN CONTRA DE LA FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 50

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO FRUTOS BATISTA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 51

HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ & VÁSQUEZ A FAVOR DE JAIME SIMONS BRAGIN CONTRA LA ORDEN DE DETENCIÓN DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 51

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAS SEÑORAS ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ, MARISOL MARTÍNEZ Y NUBIA MARTÍNEZ EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 53

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO JOSÉ MATA ZÚÑIGA Y EN CONTRA DE LA FISCAL SEXTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE

VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 54

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 57

HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAIRA ESTHER RIVERA DE BERMÚDEZ EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993. . . . . 58

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JEAN ERNEST BOSKET EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 59

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR BOLÍVAR IGLESIAS CABAL Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 59

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL EN CONTRA DEL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 61

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JESÚS HOQUEE MORALES Y EN CONTRA DE LA FISCAL QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA.PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 62

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES JAIME GONZÁLEZ Y RODOLFO BONILLA CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 63

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES ALCIDES CAMARENA ORTEGA Y ELVIA MARÍA ORTEGA DE CAMARENA EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 65

HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO FLECHER Y EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 66

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA CLAIZIDOR LYYSE EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 67

RECURSO DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PATRICIO CABALLERO, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 68

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD . . . . . 68

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. LEOPOLDO CASTILLO G., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UBALDO A. BARRÍA M. CONTRA EL ARTICULO 76, PÁRRAFO FINAL, DE LA LEY 106 DE 8 DE OCTUBRE DE 1973 "SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL". MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 68

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICDA. MARIBLANCA STAFF W., EN CONTRA DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1 DE 17 DE MARZO DE 1986. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 69

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR VIRGILIO QUIÑONES MORALES Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA NO.62 DE 30 DE JUNIO DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 72

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL R. VANEGAS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL ACÁPITE "A" DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO N°112 DE 17 DE JUNIO DE 1980, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DEPORTE AFICIONADO POST ESCOLAR EN PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 74

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS AROSEMENA Y AROSEMENA EN CONTRA DEL AUTO DE 19 DE OCTUBRE DE 1990, DICTADO POR LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL CASO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INSTAURADA CONTRA FREDERICK KEMPE POR LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE JORGE KRUPNIK. MAGISTRADA

PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 78

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR EL LICENCIADO MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1991 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 80

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEX H. GONZÁLEZ FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES NO.1 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y NO.5 DEL 26 DE MAYO DE 1992, DICTADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 85

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RIVERA Y RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE WELLINGTON FUNG LOW, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, EN CONTRA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE PANAMÁ POR MEDIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL OIRSA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FUMIGACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 90

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1990 DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 95

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN MOLINA R., CONTRA LOS ARTÍCULOS 20 Y 32 DE LA LEY 31 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1991, QUE MODIFICA EL PARÁGRAFO 6 DEL ARTÍCULO 1057-V DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 99

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LEGISLADOR LICENCIADO MILTON HENRÍQUEZ SASSO EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL AROSEMENA JAÉN, JOSÉ D. TORRES, RAÚL JERÓNIMO OSSA Y GUILLERMO COCHÉZ EN CONTRA DEL DECRETO DE GABINETE No.1 DE 2 DE ENERO DE 1993, DEL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 102

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL DR. CARLOS E. MUÑOZ POPE EN CONTRA DEL ARTICULO 2181 DEL CÓDIGO JUDICIAL (PROCESO PENAL: FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR IVÁN ANTONIO CARLUCCI SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ENRIQUE MELAMED). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 106

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. OLMEDO CÓRDOBA QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO DELGADO EN CONTRA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N°103 DE 6 DE AGOSTO DE 1991, EXPEDIDA POR LA ALCALDEA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T.PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 108

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 110

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS EN RAZÓN DE DENUNCIA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR LEO GONZÁLEZ Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 110

INCIDENTE DE CONTROVERSIA PRESENTADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) DENTRO DEL PROCESO PENAL PROPUESTO EN CONTRA DE RUBÉN DARÍO CARLES POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES OFICIALES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 112

ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA POR FEDERICO EDUARDO BARRIOS BARRIOS CONTRA EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 113

DENUNCIA CRIMINAL PROPUESTA POR EL DR. MAURO ZÚÑIGA, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 113

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LCDO. JUAN MATERNO VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA. MAYÍN CORREA DELGADO Y EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR INFRACCIÓN DE SUS DEBERES DE

SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 114

SALA PRIMERA DE LO CIVIL . . . . . 118

APELACIÓN MARÍTIMA . . . . . 119

HAPAG-LLOYD, A.G., APELA CONTRA EL AUTO DE 20 DE ABRIL DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COINPA EXPORT, C.A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 119

MULTI REPUESTOS, S. A. APELA CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE MAYO DE 1993 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE A NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE, CO. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 120

GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES Y OTROS, APELAN DE LA SENTENCIA DE FECHA DE 15 DE MAYO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE A FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (FLOPEC). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 120

APELACIÓN INTERPUESTA POR WEMBLEY MARINE CO. CONTRA EL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ATLANTIC LIGHT CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 124

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL . . . . . 125

SAMUEL CATTAN VERGARA RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A AUREA EMILIA RODRÍGUEZ ARRIETA Y DIÓGENES GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 125

PASTAS NACIONALES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE RESCISIÓN DE SECUESTRO EN LA SOLICITUD DE SECUESTRO PROMOVIDO POR PRODUCTOS ENGOMADOS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA BURISA ENTERPRISE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 126

CLAUDIO LACAYO ALVAREZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MIGUEL CASTILLO M. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 127

F. ICAZA Y COMPAÑÍA, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A RALPH ANDERSON Y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 129

ISSA INTERNACIONAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR COSMOS ENTERPRISE, S. A. CONTRA BRAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 130

JOSÉ H. HERRERA CRUZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SAMUEL MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 130

RENE ARISTIDES PICOTA CASTILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A MARÍA DEL ROCÍO VALLARINO CASTRELLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 131

CORAL MINERA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIONES PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR CORAL MINERA, S. A. CONTRA CHINA UNITED TRADING CORPORATION (PANAMÁ), S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 132

VÍCTOR AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 132

JORGE AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 133

DAK EXPORTERS, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. CONTRA DAK EXPORTERS, INC. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 136

MILLER, VÁSQUEZ Y ASOCIADOS RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD PROPUESTA POR LA DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS LE SIGUEN AL BANK OF INVESTMENT AND TRADE,INC. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 137

ELÍAS CASTILLERO DÍAZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A RUBÉN DARÍO CASTILLERO CASAS. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 142

LIDIS ARGELIS LASSO LASSO RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO PRESENTADO POR JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LIDIS ARGELIS LASSO LASSO CONTRA BALBINO ULLOA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 143

MUEBLERÍA LA GARANTÍA DE CHITRÉ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN PREVIA DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE JESÚS GARCÍA VILLAVERDE. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 147

ANGÉLICA EDA ESPINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE MATRIMONIO DE HECHO POST-MORTEM PROPUESTO POR PORFIRIA BARTUANO, HABIDO CON FABIO AROSEMENA MOLINA (FALLECIDO). MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 148

PASTAS NACIONALES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO EN LA SOLICITUD DE SECUESTRO PROMOVIDA POR PRODUCTOS ENGOMADOS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA BURISA ENTERPRISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 149

INVERSIONES RIAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INVERSIONES ARAVAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 149

FLORENCIO SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RODABER, S. A. CELSO SERRANO Y SATURNINO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 150

JUAN JOSE CONCEPCIÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ESPECIAL -EXCEPCIÓN DE DOLO Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, NULIDAD DEL ACTO Y FALTA DE IDONEIDAD DEL DOCUMENTO PRESENTADA COMO TITULO EJECUTIVO QUE LE SIGUE A JOSE ISABEL CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 151

CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO Y ELSA E. TORRES DE GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PROMOVIDO CONTRA JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 151

F. ICAZA Y COMPAÑÍA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A RALPH ANDERSON Y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 155

REINALDO VICENTE CHOHN MALEK RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE DECLARACIÓN DE NUEVO HEREDERO PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE VICENTE MALEK LÁZARO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 156

MIRIAM RIVAS SÁNCHEZ DE AIZPURÚA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INTERPUESTO POR JAIME AIZPURÚA FRANCESCHI Y MIRIAM RIVAS SÁNCHEZ DE AIZPURÚA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . 156

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y AGROPECUARIA DE LAS TABLAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ETELVINA DOMÍNGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 157

HERCILIA ORTEGA LASSO RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR JOSEFA BALLESTERO DE RAMOS EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO INCOADA POR HERCILIA ORTEGA LASSO CONTRA ARMANDO RAMOS BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 158

MARIELA MEDINA DE MONTES Y BELISARIO MONTES MONTES RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN JACINTA PÉREZ SANTANA Y LUIS CARLOS PÉREZ SAAVEDRA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 158

ISABEL FLORES BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A EDUARDO FLORES BARBA, PEDRO FLORES BARBA Y ZOILA FLORES BARBA.

MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 160

SAMUEL RIQUELME MORENO,RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE LILIA GONZÁLEZ GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 160

RECURSO DE REVISIÓN . . . . . 164

ALJADIS PÉREZ URRIOLA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA NUMERO 251 DE 27 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL, DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR SAMUEL GAITÁN LEWIS CONTRA TRANSPORTE PUEBLO NUEVO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1º) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 164

MARTA RODRÍGUEZ INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE MAYO DE 1989, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMEROS DEL CIRCUITO DE HERRERA, RAMO CIVIL EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTO POR TOMAS ALONSO G., CONTRA MARTA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 165

SICK LEAVE, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL JUZGADO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO DE COCLÉ DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO PROMOVIDO POR CARLOS TAPIA URRIOLA CONTRA SICK LEAVE Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 169

SICK LEAVE, S. A. Y MIRIAM RUTH BAUMAN YIELDING INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL JUZGADO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO DE COCLÉ, EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO PROMOVIDO POR CARLOS TAPIA URRIOLA CONTRA SICK LEAVE, S. A. MIRIAM RUTH BAUM YIELDING, FRED JACOB BAUM, PHILIP JACOB BAUM McGREGOR, ELVA BAUMAN ADAMS Y GEORGE JOEL MARCEAU. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 171

SALA SEGUNDA DE LO PENAL . . . . . 174

ACUSACIÓN PARTICULAR . . . . . 175

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA CARLOS MANUEL ARZE MORENO, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DE JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 175

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO . . . . . 175

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DICTADO DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A ERICK MACHUCA ARAÚZ POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEXANDER CALIXTO CHÁVEZ ESPINOSA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 175

SUMARIO SEGUIDO CONTRA AGRIPINO TORO LOZANO POR DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOAQUÍN ESPINO D. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 176

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO . . . . . 178

SUMARIO SEGUIDO A JOSÉ VIRGILIO QUIROZ FERRO, SINDICADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DE AURORA AROSEMENA GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 178

AUTO CONSULTADO . . . . . 179

SUMARIO SEGUIDO A PEDRO ROMERO MOLINAR POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ANDRÉS AVELINO CEBALLOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 179

SUMARIO SEGUIDO A ALBERTO AYARSA MURILLO, DOMINGO GONZÁLEZ Y ENRIQUE ORIEL CORTEZ CUPAS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUARDO FRANCISCO CAMPBELL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 180

CASACIÓN PENAL . . . . . 183

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA DANIEL HUMBERTO PALMA PINTO, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, EN PERJUICIO DE ZORAYA

IBETH AGUILAR VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 183

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA ABDIEL ANTONIO SAUCEDO HENRÍQUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE ESTHER NEIRA VILLALAZ SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 184

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA JUAN EDILBERTO VERGARA FRÍAS, SINDICADO POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE FERDINANDO RAFAEL ARAÚZ NIETO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 184

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA TERENCE OWENS, POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DE LA SECCIÓN CONSULAR DE LA EMBAJADA DE PANAMÁ EN CUBA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) . . . . . 187

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA HELMER CARRASCO CARRASCO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE CLAUDIO PERALTA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 187

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A NORIEL ADRIÁN REVELLO MORALES, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE EDUARDO APARICIO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 191

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LINETH GAYLE DE WILSON, DIANA BEATRIZ WILSON GAYLE Y EDWARDS WILSON AUSTIN, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) . . . . . 192

SENTENCIA APELADA . . . . . 192

JUICIO SEGUIDO A ERIC ELÍAS NAVARRO JIMÉNEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PRUDENCIO GÓMEZ GILL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 192

JUICIO SEGUIDO CONTRA ROGELIO MATOS ZAPATA SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ARCENIO CASTILLO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 194

JUICIO SEGUIDO CONTRA HILARIO ÁNGEL GUERRA ESCOBAR, GILBERTO SANTOS SUÑE GÓMEZ Y CARLOS ENRIQUE MORALES MORALES, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CAMILO GALINDO MARTÍNEZ Y EMÉRITO ARAÚZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 196

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN . . . . . 197

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN FORMULADA A FAVOR DE EDUARDO HARMODIO BERBEY POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE. CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 197

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA YOLANDA BENALCÁZAR DE RODRÍGUEZ A FAVOR DE ERASMO RODRÍGUEZ CRUZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN CARLOS CALDERÓN BATISTA. PROCEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 199

SOLICITUD DE FIANZA A FAVOR DE OMAR RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN PERJUICIO DE ANDRÉS PRADO Y LUIS A. TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 200

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL . . . . . 201

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NATIVIDAD CENTENO RODRÍGUEZ POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 201

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO Y APREHENSIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A ARTURO ANTIOCO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993) . . . . . 201

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA BERTHA JANETH MARMOLEJO Y MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO

PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 203

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA POR LA SECRETARIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIÓN CON DROGAS, PROCURADURÍA GRAL. DE LA NACIÓN, SOBRE DOS (2) LOCALES (DEPÓSITOS) CONSTRUIDOS SOBRE LA FINCA N°21,202 DE PROP. DE RICHARD D. BILONICK ARRENDADOS A LA EMPRESA QUINCLEANER DE PANAMÁ, S. A., CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES PEDRO CASTREJÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 204

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DE VEHÍCULO DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE SIGUEN CONTRA FRANCISCO JAVIER CARDONA CASTRO, ALIRIO CRUZ, MANUEL JIMÉNEZ PATIÑO, CARLOS HERRERA BUITRAGO Y CARLOS FERNANDO MONTILLA CASTRO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 205

SOLICITUD DE APREHENSIÓN PROVISIONAL DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A JOSÉ DE LA CRUZ ARAÚZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 206

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA . . . . . 207

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA RUGIERE DEL VALLE RÍOS, SINDICADO POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE CARLOS IVÁN GONZÁLEZ CRUZ. MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 207

INCIDENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO CONTRA ROGELIO CRUZ RÍOS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EDILBERTO VÁZQUEZ ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 208

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA JERRY WILSON SALAZAR, DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS, COMETIDO EN PERJUICIO DE JACOBO BRAWERMAN BARRANTES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 208

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO . . . . . 210

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN . . . . 211

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VIRGILIO E. VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1463-86 DE 19 DE FEBRERO DE 1986, Y LA RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 1989, DICTADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 211

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN MOLINA RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE BONLAC, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.2876-DG-90 DE 24 DE AGOSTO DE 1990, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 212

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ORLANDO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINA ROBLES AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.6 DE 26 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 215

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ E. HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.6009 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDO POR LA DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 217

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE GARIBALDI CAMACHO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSORCIO SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. Y CIRES DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGAL LA NOTA DE 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 219

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BATISTA, CASTILLO Y LOAIZA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO CHECA

MENDIETA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.384-AJ-DG-DAC DE 15 DE DICIEMBRE DE 1992, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 220

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD, EN REPRESENTACIÓN DE HORTENCIA RAQUEL FLORES ZAMBRANO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO.337 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1990, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 222

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID CALVO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00001 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 225

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00016 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 230

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MIREYA URIBE PRADA, EN REPRESENTACIÓN DE ROSA JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N.22-92 DE 22 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 234

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO FÁBREGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD PRESENTADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1990, ANTE EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 235

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN REPRESENTACIÓN DE ISRAEL DE GRACIA CABALLERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1-89 S/F EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 237

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCELINO JAÉN, EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA RICHA DE TORRIJOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 58-93 DE 12 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 237

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE UNIROYAL, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 187 DE 16 DE OCTUBRE DE 1992, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 239

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR ASCANIO MORALES GUERRERO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO LÓPEZ AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.005 S/F, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 240

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE GERMÁN GÁLVEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00010 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 241

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MELÉNDEZ CRUZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CYNTHIA GRAHAM DE SAMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 2 DE 3 DE ENERO DE 1992, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 244

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS F. MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO E. RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 155 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EXPEDIDO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 244

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR RODOLFO ERMOCILLA BELLIDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO POR LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS, REALIZADA ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1990, POR LA COMISIÓN CALIFICADORA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 246

INCIDENTE DE TACHA DE DOCUMENTO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RICAURTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 44 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 247

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE RIVAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00014 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 248

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ALDO D'ANDREA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00007 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 250

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EUCLIDES MADRID, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00013 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 253

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA JOVANÉ, BIEBERACH & VALDÉS ROCA, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE BIENES RAÍCES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.13-93 DE 7 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 255

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ENRIQUE MON PINZÓN, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO CALDERÓN PALOMINO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.220-PH-39 DE 19 DE FEBRERO DE 1992, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE HERRERA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 257

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE TAYDE ARIADNA GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO.159 DE 21 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 258

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.DP-37-93 DE 31 DE MARZO DE 1993, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA ESTATAL DE CEMENTO BAYANO, OTROS ACTOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 259

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P.A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.3122-91 DG DE 21 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 260

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GEOMARA GUERRA DE JONES, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLAREN NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1989, EMITIDA POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ALBERTO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0042-90 DE 4 DE ENERO DE 1990, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CITIBANK,N. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. FECI N°1-90 DE 9 DE AGOSTO DE 1990, DICTADA POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 263

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BENEDETTI Y BENEDETTI, EN REPRESENTACIÓN DE CALVIN KLEIN INDUSTRIES INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN, N°157 DE 21 DE OCTUBRE DE 1991, DICTADA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS VILLAMONTE, EN REPRESENTACIÓN DE ORNILDA JIMÉNEZ PITTÍ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.0045-90 DE 1 DE ENERO DE 1990, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL AMILCAR GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1024 DE 4 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 265

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS MARRUGO ACOSTA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL DECRETO DE PERSONAL NO.348 DE 9 DE JULIO DE 1993, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 266

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE EIRA DEL C. CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL DECRETO DE PERSONAL NO.158 DE 21 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 267

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE LINA YOLANDA MONTEVERDE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.603-04-212-ALCN DE 31 DE JULIO DE 1992, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 269

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARMSTRONG, COLLAZOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL DEL VASTO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ELECTORAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, FECHADO 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 270

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MINERA REMANCE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DEDC-GNAP-012-93 DE 24 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 271

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL MARTÍNEZ GARCÉS, EN REPRESENTACIÓN DE TELIA THOMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 14 DE ENERO DE 1988, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL PRIMER CICLO FRANCISCO BECKMAN, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 6 DE JUNIO DE 1988, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 2 DE FEBRERO DE 1989, ,EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 272

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LILIANA PINILLA EN REPRESENTACIÓN DE CALIXTO HIM ARCIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. 29 DE ABRIL DE 1991, DICTADA POR EL JEFE DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 273

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR GUILLERMO MORENO DE GRACIA, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS MÉNDEZ Y MARITZA QUINTERO DE POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 329-93 DE 20 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 275

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE MÁRTIRES MARINO BAQUE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA PROVIDENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ. VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 276

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO WALKER, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.2366 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1990, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, DEMÁS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 276

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00009 DE 4 DE ENERO DE 1991, DICTADA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, DEMÁS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 278

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN RENÉ MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELECTRÓNICA COMERCIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 265-AJ-DG-DAC DE 16 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR ENCARGADO DE AERONÁUTICA CIVIL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 280

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE AMINTA PELLICOT, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 156 DE 21 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 281

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ÁNGEL PADILLA BÉLIZ, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA R. LÓPEZ DE MARTÍN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1 DE 29 DE MARZO DE 1989, Y LA NO.2 DE 10 DE ABRIL DE 1989, DICTADA POR LOS FISCALES SUPERIORES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 283

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE LÁZARO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE A.NASHBOURNE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 13-91 DE 12 DE ABRIL DE 1991, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 3, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 284

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ORLANDO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINA ROBLES AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.6 DE 26 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 285

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. PEDRO PABLO AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE EMELBA DE REPETTO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA NO.439 D.R.C. DE 30 DE AGOSTO DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA REGIÓN CENTRAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO (IPACOOP), ZONA DE VERAGUAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 286

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR CANO EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILO MORENO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 1991, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO SECUNDARIO PRIMER CICLO DE DAVID, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 289

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN . . . . . 290

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CEDEÑO MEREL, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD Y VALOR LEGAL DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HA NEGADO A REFRENDAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 290

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL, EN REPRESENTACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE ACERCA DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 291

INCIDENTE DE DESACATO, INTERPUESTO POR EL LCDO. PABLO HASSÁN ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL EDUCADOR, R. L., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR NO CUMPLIR CON EL FALLO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDO POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, PROMOVIDA POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE ÉSTA SE PRONUNCIARA SOBRE LA VALIDEZ LEGAL DE CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 294

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD . . . . . 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE SANTANA, LEYDA COCIO, ALMA DE ARAÚZ Y LIDIA CABALLERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 14 DE 2 DE JUNIO DE 1988, DICTADO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. EDNA RAMOS CHUE, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 38, 39, 40, 41 Y 42 DE LA RESOLUCIÓN N°.05 DE 4 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR LA JUSTA DE CONTROL DE JUEGOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 297

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ENRIQUE PITTY CEBALLOS, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS DECISIONES DE 2 DE

ABRIL Y DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DE LA COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO WILL GUERRERO, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL RESUELTO DE PERSONAL NO.154-93 DE 6 DE MAYO DE 1993, MOVIMIENTO DE PERSONAL NO.5292 DE 3 DE MAYO DE 1993, NO.4144 DE 1 DE JUNIO DE 1993, NO.4142 DE 1O. DE JUNIO DE 1993, Y EL MOVIMIENTO DE PERSONAL DEL NOMBRAMIENTO DE IVÁN ZURITA CORDERO, SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA N° 686 DE 13 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN ARANCELARIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 299

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS ESCRITURA N° 9845 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1989 Y N° 10030 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1989, AMBAS DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO C. MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO.11 DICTADO EL 20 DE ABRIL DE 1990 POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 301

JURISDICCIÓN COACTIVA . . . . . 304

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. ELÍAS DOMÍNGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA BAYANO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 304

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CECILIO GERARDO STERLING Y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 307

EXCEPCIÓN DE NOVACIÓN Y DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTAS POR EL LICDO. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ CORNEJO, EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BALBOA, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL A LA EMPRESA ASTILLEROS BALBOA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 307

INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE PERSONERÍA E INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, INTERPUESTOS POR EL LICENCIADO MIRLAN DE SONSA VIERA, EN REPRESENTACIÓN DE INGRID SÁEZ DE CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS A RICARDO L. DURAN GARCÍA, NELSON NOVARRO Y ANTONIO VECCHIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 309

INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERÍA DE LA PARTE DEMANDANTE, INTERPUESTO POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR COTTER & COMPANY, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 309

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL . . . . . 310

RECURSOS DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL:INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) -VS- RÓMULO ROMERO VELÁZQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 310

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. AURELIO GUZMÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TABACALERA NACIONAL, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TABACALERA NACIONAL -VS- TABACALERA NACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 311

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PLINIO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE CLEMENTE CONDE DEGAIZA, CONTRA LA SENTENCIA DE 17 DE OCTUBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: PESCADORES UNIDOS, S. A. -VS- CLEMENTE CONDE DEGAIZA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 312

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA TRISTÁN, MORALES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS RAMÓN APARICIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HOTELES CONTINENTALES, S. A. -VS- LUIS RAMÓN APARICIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 315

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES . . . . . 318

CARTA ROGATORIA . . . . . 319

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE BAYANO, SECCIÓN DE LO CIVIL, CUBA, DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA ODALLIS EMILIANA MOGNA NAVARRO CONTRA PABLO GAINA ALVEO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 319

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO INCOADO Nº 894-88 RANCHO SAN RAFAEL S. A. CONTRA JEAN JACQUES HENNIN NICOLÁS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 319

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE QUEEN S BENCH DIVISION DEL TRIBUNAL COMERCIAL, PARA QUE SE EMPLACE A NEW OXFORD CARRIER AND SHIPPING CORP., CON DOMICILIO EN CALLE 34 ESTE, EDIF. VICTORIA, 4O. PISO, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 320

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL DE LA REINA, EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR LIMITED Y HICKORY LIMITES CONTRA IFCODEAN BUSINESS INC. MAGISTRADA PONENTE: AURA G. DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . 321

COMISIÓN ROGATORIA DENTRO DE LA DEMANDA CARATULADA WELTOVER INC., CONTRA LA REPÚBLICA ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 321

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO NO.1 DE LA CIUDAD DE LA PLATA, ARGENTINA, DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL EXPEDIENTE CARATULADO CASTRO RODOLFO C/TECHINT, S. A. S/DESPIDO, CUYO EXPEDIENTE SE ADJUNTA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 322

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL COMERCIAL PRIMERO DE ALEXANDRÍA. EGIPTO, EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA CONTRA INGLISIDE PANAMÁ CON PROPIETARIOS DE OLYMPIC STAR LINER. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 323

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA . . . . . 324

EL SEÑOR ÓSCAR NELSON VIERA-RUIZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DE LA CIUDAD DE NEWPORT NEWS, ESTADO DE VIRGINIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA CUAL VERSA SOBRE LA FINALIDAD DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA CON LA SEÑORA VIELKA DEL ROSARIO GREEN ARAÚZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 324

MIROSLABA ALICIA CASTILLO DE CORBETT, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE ARIZONA, CONDADO DE PIMA, DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNE A OTIS LEE CORBETT. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 325

JUSTA ZENAIDA GARCÍA ARIAS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE LOUISA, ESTADO DE VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL NÚMERO 3161 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1984. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 326

NILS JANSON, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE ADOPCIÓN PROFERIDA POR LA ALTA CORTE DE BOMBAY, INDIA, NUMERADA CASO 52. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 327

ANA ISABEL VILLAVERDE PÉREZ, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUZGADO UNDÉCIMO DE CIRCUITO DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 328

EYRA VIVECA ORTEGA CERRUD, SOLICITA RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE RICHMOND, ESTADOS UNIDOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 329

ISAMU MANUEL MATSUYAMA HOYOS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, EL ACTO NO. 30 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 1992 CONTENIDA EN LA ESCRITURA NO. 1402 DEL 31 DE MAYO DE 1993 Y ACLARADA CON LA ESCRITURA N°1843 DEL 14 DE JULIO DE 1993 DE LA NOTARÍA 16 DEL CIRCUITO NOTARIAL DE BOGOTÁ, REPÚBLICA DE COLOMBIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 331

EXHORTOS . . . . . 332

EXHORTO NO. 21268, LIBRADO POR EL JUZGADO DE MENORES DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, CHILE, DENTRO DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL SEÑOR ALBERTO ANTONIO ECHEVERRÍA PUMARINO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 332

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO TURNO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO INSTAURADO POR FIRESTONE INTERNATIONAL CORPORTION CONTRA UVERAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 333

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL DE LETRA "LL" DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DEL PROCESO DE QUERELLA INSTAURADO POR ROBERTO RANDO CONTRA WASERSZTROM, POR EL DELITO DE ESTAFA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 333

TRIBUNAL DE INSTANCIA . . . . . 334

INCIDENTE DE OPOSICIÓN, PRESENTADO POR EL LICDO. MARCO HERRERA MOW, EN REPRESENTACIÓN DE LA LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY Y DENTRO DE LA DENUNCIA POR IRRESPETO A LA AUTORIDAD Y AGRESIÓN FÍSICA QUE INTERPUSIERA ANTE EL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . 334

DENUNCIA INTERPUESTA POR HILDA ESTHER HERRERA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRA LA LICENCIADA MARYBEL ESTRIBÍ DE ABREGO (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 335

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE IDONEIDAD DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 335

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES ELIOFE QUINTERO, BALTAZAR QUINTERO, MARÍA QUINTERO Y JORGE QUINTERO, POR PRESUNTA FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL EN CONTRA DEL LICENCIADO ORLANDO ALONSO RODRÍGUEZ (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993). . . . . 337

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

DICIEMBRE 1993

# AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a conocimiento de la Corte la acción de amparo constitucional interpuesta por **FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ**, mediante apoderado judicial, en contra de la Resolución de 27 de agosto de 1992, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá en el Incidente de Rescisión de Embargo propuesto por el amparista dentro del Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto por **VICTOIRE UNIVERSEL, S. A.** contra **CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A. Y KREPORT INVESTMENTS, INC.**

La acción de amparo de garantías fue presentada inicialmente ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, el cual resolvió mediante Resolución de 31 de agosto de 1993 (fojas 204), lo siguiente: **DENIEGA** el Amparo de Garantías Constitucionales formulado por **FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ** contra el **JUEZ PRIMERO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ**, por haber proferido el Auto de fecha 27 de agosto de 1992 en el Proceso Ejecutivo Hipotecario propuesto ...".

Contra la precitada resolución el amparista interpuso en tiempo oportuno recurso de apelación, el cual ha de ser decidido en la presente resolución.

El principal cargo que alega el amparista contra la sentencia de primera instancia, consiste en que el presupuesto en que concluyó para denegar el amparo, no coincide con la realidad procesal. Esta parte de la sentencia es transcrita en los siguientes términos:

> "Siendo así, concluimos que los cargos que le formula el amparista a la resolución no son atendibles, toda vez que la misma accede a la calificación de un proceso ejecutivo hipotecario y los reparos formulados a la resolución objeto del amparo por el amparista constituyen juicio de valoración de pruebas aportadas para la dictación del auto en cuestión y no actos procesales o violaciones a los trámites establecidos para este tipo de procesos, como lo establece la norma constitucional invocada".(Subrayado del apelante)Fs.203-204)

Expresa el apelante, su desacuerdo con el razonamiento expuesto, indicando que, "no se trata de valorar pruebas aportadas por parte del juzgador que dictó el Auto de 27 de agosto de 1992, sino de la comisión de actos arbitrarios mediante los cuales se viola el debido proceso en este tipo de juicio ejecutivo.

Los aludidos actos arbitrarios por los que se considera violado el debido proceso son los contenidos en el auto que decretó embargo, ordenó la inscripción de éste en el Registro Público y ordenó la venta de determinadas fincas, que según señala el amparista, no son las que aparecen gravadas, con la respectiva hipoteca, en las Escrituras Públicas (No.9329 de 9 de noviembre de 1988 y No.3105 de 18 de abril de 1991) que sirvieron de recaudo ejecutivo. Por lo que el juzgador violó el procedimiento que establece el artículo 1760 en concordancia con el 1785 del Código Judicial.

Así, se solicita a esta Corporación, en este recurso de apelación sobre la acción de amparo, que sea revocado el auto de 27 de agosto de 1992, para que únicamente sean embargadas las fincas que aparecen individualizadas en las Escrituras de Hipotecas.

La Corte observa, que además de lo expuesto en el escrito de apelación respecto a la resolución impugnada, ésta última realiza una explicación señalando, que a través de la extraordinaria acción de amparo no se pueden reparar los errores de juicio, en que se considere, ha incurrido el juzgador, bien sea al interpretar o aplicar la ley o al valorar las pruebas. En ese orden de ideas se considera que los errores in-iudicando o de juicio "no son formas que puedan vulnerar el debido proceso.

Por lo que se debe recordar que no se puede utilizar el amparo de garantías constitucionales para crear una instancia más del proceso, como acertadamente, además, se sostiene en la sentencia apelada.

Sin lugar a dudas, el objeto debatido se centra en errores de índole procesal atribuidos al juzgador sobre determinadas normas. Por lo que no se puede pretender solucionar este tipo de situaciones, que se ubican dentro del ámbito de la legalidad, mediante un proceso de amparo. Es decir, que el tribunal de amparo no puede formular juicios de valor ante hechos que por su naturaleza no conforman algún tipo de violación constitucional.

Por todo ello, la Corte al compartir los razonamientos del Primer Tribunal Superior, en el caso bajo examen, considera que no le asiste razón al apelante, y por tanto, no hay razón para variar en resolución apelada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 31 de agosto de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por FRANCISCO SOLÍS GÓMEZ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTO POR LA LICDA. LIDIA C. DE TORRES EN REPRESENTACIÓN DE LA LICDA. ISELA ALANIZ DE CHIARI, EN CONTRA DE LA ORDEN CONTENIDA EN EL OFICIO NO. PGN-SGN 1360-93 DE LA SECRETARÍA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA SE ENTREGUE LA FISCALÍA DEL CIRCUITO DE DARIÉN AL NUEVO FISCAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Licda. Isela Alaniz de Chiari, ha promovido, mediante su apoderada judicial especial, la Licda. Lidia de Torres, proceso de amparo de garantías constitucionales contra diversos Fiscales Superiores.

La orden impugnada, sin embargo, es la Nota No. DGM-SG-1360-93 suscrita por el Licdo. Guillermo Pianeta, Secretario General de la Procuraduría General de la Nación, mediante la cual notifica a la demandante que mediante el Decreto No.41 de 16 de septiembre de 1993, se ha nombrado al Licdo. Críspulo Leoteau Lee como nuevo Fiscal del Circuito de Darién y le pide que entregue formalmente el despacho al nuevo fiscal.

Estima la Corte, en primer lugar, que si la orden que se dice impugnada en la demanda es la citada nota suscrita por el Licdo. Guillermo Pianeta no puede plasmarse en la demanda como parte demandada a los Fiscales Superiores, Licdo. Adolfo Montero, Licdo. Collado Mitre, Licdo. Milciades Méndez y Licda. Marielena Valdés de Alvarez. Es evidente que éstos no expidieron la nota que se impugna en la demanda. Por otro lado, no es correcto afirmar, como lo hace la demandante, que no existe un acto administrativo mediante el cual se le destituye, ya que el Decreto No.41 de 16 de septiembre de 1993, en el cual se nombra al Licdo. Críspulo Leoteau para el cargo que ocupaba la demandante es un acto administrativo tácito de destitución de la demandante. Así lo reconoce la doctrina, y en ese sentido el administrativista colombiano Gustavo Penagos señala que "normalmente el acto administrativo consta por escrito pero la legislación ... admite los actos tácitos ejemplo, declarar insubsistente a un empleado de un cargo de libre nombramiento y remoción con el solo nombramiento de otro empleado, sin mencionar el anterior" (El acto Administrativo, Ediciones Librería del Profesional, Cuarta Edición, Bogotá, 1987, Tomo I, pág. 60). Es contra este acto que la demandante debió recurrir en la vía gubernativa y, posteriormente, ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales promovida por la Lcda. Isela Alaniz de Chiari contra la orden contenida en el Oficio No.PGN-SG 1360-93 dictada por la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICDA. MARÍA DEL PILAR AGUILERA EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR TEODORO JAÉN Y EN CONTRA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Teodoro Jaén, a través de su apoderada judicial especial, la Licda. María del Pilar Aguilera, ha promovido proceso de amparo de garantías constitucionales contra la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

En la demanda se solicita al pleno que revoque la orden de hacer contenida en la Resolución No. 236-93-L, proferida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda, la cual confirma en todas sus partes la Resolución de Lanzamiento No.47-93 emitida por la Comisión de Vivienda No.4 del 3 de septiembre de 1993, la cual

ordena el lanzamiento del señor Teodoro Jaén del Apartamento No.23 del Edificio No. 193, ubicado en el Corregimiento de Calidonia, en la ciudad de Panamá.

Considera el Pleno, en primer lugar, que la orden impugnada consiste en un acto administrativo que puede ser impugnado mediante una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como lo ha señalado la Corte Suprema en diversas ocasiones. En ese sentido, el Pleno ha reiterado que el proceso de amparo de garantías constitucionales tiene un carácter extraordinario y que sólo debe acudirse a él cuando no existan otros medios de impugnación, lo cual no se configura en este caso porque existen otros medios para impugnar el acto administrativo objeto de la presente demanda de amparo.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la Licda. María del Pilar Aguilera en representación del señor Teodoro Jaén en contra de la Resolución No. 236-93-L proferida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROSMERY LOO ARAÚZ EN CONTRA DEL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, APELACIÓN (CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Raúl Trujillo Miranda se ha manifestado impedido para conocer del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la señora ROSMERY LOO ARAÚZ contra el Gobernador de la Provincia de Chiriquí.

Señala el Magistrado Trujillo que uno de sus hijos forma parte de la firma forense que atendió el caso que ha llegado en amparo a esta Corporación, por lo que de acuerdo con el artículo 2619 del Código Judicial debe manifestarse impedido de conocer del mismo.

Efectivamente, el artículo 2619 invocado señala que los magistrados y jueces que conozcan de esta clase de procesos deben manifestarse impedidos si guarden parentesco en segundo grado de consanguinidad o primero de afinidad con los demandantes o los apoderados legales de éstos. En vista de lo anterior el magistrado sustanciador considera legal el impedimento manifestado por el Magistrado Raúl Trujillo y así lo declara.

En consecuencia la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado Raúl Trujillo Miranda en este proceso, y DISPONEN que se llame al Magistrado Suplente tal como lo establece el artículo 37 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA EN CONTRA DEL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce esta Corporación el amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma forense Guerra, Sierra & Villalaz, que actúa como apoderada del ciudadano **LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA.**

La acción de amparo va dirigida contra la orden de hacer contenida en la Resolución de fecha 22 de marzo de 1993, dictada por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial Penal, en la que se ordenó abrir causa criminal contra el señor Luis Alberto Arias y

Otros, por el delito genérico contemplado en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal (diferentes formas de peculado).

Este amparo se fundamenta en los siguientes argumentos: Que en las sumarias que originalmente se seguían contra Aristides Pinzón Torres y Cirilo Castillo Barrera por el supuesto delito de peculado y, dentro de las cuales, Arias intervino como testigo, el Juez Primero del Circuito Penal de Panamá ordenó, mediante resolución de 30 de noviembre de 1992 la ampliación del sumario que instruía la Fiscalía Séptima del Circuito de Panamá para que se le recibiera indagatoria al prenombrado Arias; que la Fiscalía Séptima mediante proveído del 12 de febrero de 1993 ordenó recibirle declaración indagatoria a Arias, diligencia que a la postre no se cumplió porque, según alega la Fiscalía, Arias se encontraba fuera del país. Esta circunstancia ha sido negada por el apoderado de Arias, argumentando que la única diligencia que realizó la Fiscalía fue la de solicitar al Departamento de Inmigración el movimiento de entradas y salidas al país de Arias, (lo cual, a juicio de su apoderado no prueba que Arias estuviera ausente) y sin que se dejara constancia de que se hizo gestión alguna para notificarlo o citarlo con este propósito; que tal omisión dio lugar a que el proceso prosiguiera sin que se le permitiera a Arias defenderse o aclarar durante la indagatoria los cargos que se le formularon, todo lo cual culminó con el auto de llamamiento a juicio dictado por el Juez Primero el día 22 de marzo de 1993, conforme al cual se abre causa criminal contra Luis Alberto Arias, Aristides Pinzón y Cirilo Castillo Barrera por el supuesto delito de peculado cometido en perjuicio del Banco Nacional de Panamá. Precisamente contra este auto de llamamiento a juicio presenta el apoderado de Arias el presente amparo de garantías constitucional luego de que el mismo resultó confirmado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante resolución del 3 de septiembre de 1993.

En el amparo sujeto a examen que fue presentado originalmente ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, alega el demandante que aquella resolución vulnera el artículo 32 de la Constitución Nacional y el 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos.

**Decisión de Primera Instancia**

El Tribunal de primera instancia decidió no admitir la acción por considerarla manifiestamente improcedente, en base a las consideraciones que se transcriben a continuación:

> "Estima esta Superioridad, que del planteamiento esbozado por el impulso del amparo, se infiere que se ataca una eventualidad de índole procesal: que se haya cumplido o no con la norma de aplicación correcta para una notificación. Dicho en otra forma, los errores in iudicando no son materia a debatirse en un Amparo de Garantías Constitucionales. (Sentencia de 21 de Enero de 1992. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA)."(FS.78)

Contra esta decisión el demandante formalizó y sustentó oportunamente recurso de apelación.

**Criterio de la Corte**

Antes de entrar a considerar la cuestión de fondo que se plantea en el amparo bajo estudio, el Pleno considera necesario advertir que, ciertamente, y tal como lo alega el recurrente, el supuesto en que se fundamenta la acción propuesta no puede calificarse como error in iudicando, ya que lo que realmente plantea el amparista es la posible violación del debido proceso que surge de omisiones de carácter procedimental en que incurrió la Fiscalía Séptima al no realizar esfuerzo o gestión alguna para citar o notificar a Arias de la providencia que le ordenaba rendir indagatoria y confrontar así los cargos que se le formulaban.

Ya al entrar a analizar la acción de amparo interpuesta por el apoderado de Luis Alberto Arias, el Pleno observa que la misma va dirigida contra una orden de hacer dimanante de una resolución en virtud de la cual se califica el sumario levantado por la Fiscalía en este caso, resolución esta de carácter interlocutorio que no puede ser impugnada mediante amparo de garantías constitucionales, tal como lo ha dejado consignado la Corte en repetidos fallos. Sin pretender agotar la enumeración de precedentes que acreditan esta afirmación, basta mencionar las Resoluciones de 18 de noviembre de 1993, bajo la ponencia del Magistrado Fabián Echevers; de 15 de enero de 1993 y 16 de noviembre de 1992, ambas bajo la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola.

Por otra parte, sin que signifique entrar en consideraciones de oportunidad, que no es del caso examinar, advierte el Pleno que de ser ciertas las afirmaciones del apoderado de Arias en el sentido de que a su defendido se le privó de la oportunidad de intervenir en la diligencia indagatoria y confrontar de esta manera los cargos que se le formulan, bien podría hacer valer esta omisión mediante los medios arbitrados por el ordenamiento procesal para alegar las causales de nulidad previstas en cualquiera de los numerales contenidos en los artículos 2297 y 2298 del Código Judicial.

Por lo pronto al Pleno no le queda otra alternativa que la de reiterar el criterio ya expuesto en el sentido de que contra el auto de llamamiento a juicio no procede la acción de amparo, por cuanto éste no conlleva una orden de hacer. De allí que, aunque por otras razones, la acción impetrada no debe ser admitida.

Por lo tanto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución del 8 de octubre de 1993, emitido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de amparo interpuesto por LUIS ALBERTO ARIAS GARCÍA contra la Resolución de 22 de marzo de 1993, dictada por el Juzgado Primero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. RODRIGO MIRANDA MORALES EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR LUIS ALBERTO GUERRA FUENTES EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Doctor **RODRIGO MIRANDA** ha presentado Amparo de Garantías Constitucionales, en representación de **LUIS ALBERTO GUERRA FUENTES**, en contra del Director General de la Caja de Seguro Social.

La Corte procede al análisis de la acción presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los requisitos formales que hagan posible su admisión.

En este punto se percata el Tribunal, que la acción instaurada adolece de defectos que impiden su admisión.

En primer lugar, la orden expedida por el Director de la Caja de Seguro Social que es atacada por el amparista, no ha sido individualizada, ni especificada. Además desconocemos el contenido exacto de la orden y si la misma fue verbal o escrita. Este máximo Tribunal de Justicia ha reiterado en innumerables fallos, que de acuerdo al artículo 2610, numeral 1 del Código Judicial, debe hacerse mención expresa de la orden impugnada. Es decir, especificar los detalles del acto emitido por el funcionario público. En este mismo orden de ideas, el actor al no identificar claramente el acto impugnado, ni siquiera reposa en el expediente contentivo de este amparo, copias debidamente autenticadas, tal como puede observarse de foja 1 a 19 y de foja 22 a 30. Además, si bien es cierto que el demandante solicita que se le requiera a la autoridad competente que les autentique dichas copias, no es procedente acceder a ello, en virtud de que no ha demostrado que haya llevado a cabo gestiones para su consecución; sólo obra a foja 30 fotocopia de una solicitud que ni siquiera tiene sello de recibido por parte de la institución antes citada.

De igual manera se observa, que el interesado tampoco cumple con lo preceptuado en el numeral 4, de la norma antes mencionada, dado que sólo se menciona la garantía fundamental conculcada, mas no sustenta o explica de manera diáfana el concepto en que ha sido vulnerada. Veamos que dice el precepto legal:

> "ARTICULO 2610: Además de los requisitos comunes a todas las demandas, la de amparo deberá contener:
> ...
> 4. Las garantías fundamentales que se estimen infringidas y el concepto en que lo han sido."

Por último se percata el Pleno, que el actor no ha demostrado que agotó las instancias dentro de la Caja de Seguro Social, lo que le impedía dirigir su acción ante esta Superioridad. Y es en este caso la instancia se agota cuando se recurre a la Junta Directiva de esa Entidad Autónoma. Esta situación ha sido también prevista por este Tribunal colegiado en reiteradas sentencias en las que se señaló básicamente lo siguiente:

> ... "No consta que el Dr. Galo Ortiz haya agotado los medios de impugnación que establece la ley para obtener la revocatoria del acto que lo perjudica. Ha sido jurisprudencia constante de la Corte Suprema, que la acción de amparo requiere previamente se hayan agotado los medios ordinarios de impugnación, pues sabido es que ningún acto ni resolución puede surtir efecto, hasta que esté debidamente ejecutoriado ..." (sentencia de 23 de junio de 1992)
>
> "Y por último, el amparista en ningún momento ha demostrado que ejerció contra la resolución administrativa impugnada, los recursos gubernativos que procedían ni las acciones contenciosas administrativas del caso." (sentencia de 26 de noviembre de 1992).

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo propuesto por el Dr. RODRIGO MIRANDA MORALES, en representación del Señor LUIS ALBERTO GUERRA FUENTES, en contra del Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE QUIROZ, MURILLO Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANKLIN LEZCANO CONCEPCIÓN, EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN PENONOMÉ, PROVINCIA DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Quiroz, Murillo y Asociados ha propuesto acción de amparo de garantías constitucionales con el objeto de que se revoque auto de 10 de septiembre de 1993, dictado por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

A pesar de que al formular la "Mención expresa de la Orden Impugnada" no se precisa tal orden, sino que se alude a la **totalidad** del auto en mención, en el libelo se precisa:

> "CUARTO: El Segundo Tribunal Superior de Justicia en fallo de la Magistrada Ponente, Licenciada DELIA CARRIZO DE MARTÍNEZ, anula todo el proceso realizado por la Fiscalía del Circuito de Coclé y el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé argumentando una tesis que el momento que se efectuó la apropiación el valor de los bhilletes (sic) eran sólo de B/.10.00, cosa ésta irrelevante a fin de argumentar que el Tribunal Superior no tiene la competencia para resolver el conflicto y lo correcto es remitirlo a la Alcaldía Municipal de Penonomé".

Se trata de investigación penal que por el delito de apropiación indebida de cosa extraviada ajena fuera iniciada por denuncia que presentara Franklin Lezcano Concepción contra Julio Rodríguez Rodríguez.

En tanto que "garantías fundamentales que se estiman infringidas y el concepto en que lo han sido", en el libelo se mencionan los artículos 32 de la Constitución Nacional y 234 del Código Judicial, norma esta última que no se encuentra incluida dentro del catálogo de las "garantías fundamentales", de índole constitucional, por lo que debe ser desestimada.

Como concepto de la alegada infracción de la norma superior en cita, el demandante se limita a expresar únicamente, como fuera de contexto (f.9), "Por cuantía tanto la Fiscalía del Circuito de Coclé, como el Juzgado Segundo del Circuito de Coclé y el Segundo Tribunal Superior de Justicia", redacción escueta que visiblemente no cumple la finalidad de explicar el concepto de la violación que se alega, y que, por su insuficiencia, impide al Tribunal de amparo tomar conocimiento de las razones jurídicas que pudieran acreditar la violación de "los derechos y garantías que la Constitución consagra" en favor del amparista.

En el informe de conducta que rindiera la autoridad demandada, se alude de manera expresa a dos componentes legales de la procedibilidad de la acción, cuales son la "gravedad e inminencia" del daño atribuido a la orden contra la cual se reclama, así como el del perjuicio que eventualmente con ella se produce. Sobre el particular, el informe expresa:

> "Es viable indicarle, Honorable Magistrado Sustanciador, que ningún daño grave e inminente se le produce al recurrente mediante la decisión impugnada mediante el amparo, ya que la autoridad policiva, o sea la Alcaldía, debe aplicar la misma ley o Código Penal que el Juzgado Segundo del Circuito, pues sólo cambia la autoridad competente para juzgar el caso.
>
> Por otra parte, tampoco se afecta el derecho del interesado a reclamar, por las vías que sean conducentes, el resarcimiento de todos los perjuicios que crea le hayan sido causados, incluyendo el pago o reemplazo de los B/.20.000.00 que aduce haber perdido".

Es importante llamar la atención sobre el hecho de que en el manejo de la causa a que diera lugar la denuncia presentada por Lezcano Concepción, como viene dicho la acción de amparo ha sido propuesta por Quiroz, Murillo y Asociados, firma forense a la que se le sustituyó la representación que tenía de Lezcano en la acusación particular constituida por éste dentro del proceso penal (f.162 de los antecedentes). Lo trascendente de esta particular situación procesal es que, **de manera paralela**, mientras que en el libelo del amparo se solicita la suspensión de "cualquier tipo de trámite sobre el presente caso a fin de evitar perjuicios mayores", en la actuación penal, una vez radicado el negocio en la Alcaldía del Distrito de Penonomé, el licenciado Cajar Molina, nuevo acusador particular, en escrito visible a folio 165 del cuaderno de antecedentes le recuerda al titular de ese despacho que, con vista en el artículo 1714 del Código Administrativo, puede "fallar en el acto, sin conceder el término de pruebas y siempre que se conozca que este se pide solo con el objeto de eludir o demorar la pena" ... pues "el caso va a tener un año en el mes de noviembre de 1993".

Teniendo en cuenta el principio de la unidad de la representación judicial, aun cuando se exprese a través de más de un apoderado, resulta a todas luces incongruente la

sustentación, por una misma representación, de dos pretensiones antagónicas -por una parte la alegación del posible perjuicio que pudiera originarse en la actuación penal y, por la otra, el reclamo a la autoridad administrativa para que falle **en el acto**- en escrito que sin lugar a dudas entraña un allanamiento o admisión de la decisión que la propia representación cuestiona como perjudicial por vía de la iniciativa constitucional. De esta manera se confirma lo alegado en el auto que se recurre, en cuanto a la falta de acreditación, por inexistencia, del daño "grave e inminente" que exige la ley y alega el amparista.

Con vista de las anteriores razones LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo propuesta por Franklin Lezcano, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR AGUSTÍN SELLHORN EN CONTRA DEL JUEZ SEGUNDO DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. Panamá, catorce (14) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Lcdo. Agustín Sellhorn ha presentado recurso de apelación dentro del proceso de amparo de garantías constitucionales promovido por el mismo contra el Juez Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

El Primer Tribunal Superior de Justicia señaló en sentencia de 11 de noviembre de 1993 que el artículo 17 de la Constitución Nacional no es susceptible de violación por no contener derecho subjetivo constitucional alguno y porque dicho artículo no es de carácter normativo. Por otro lado, agrega, respecto al artículo 32 de la Constitución Nacional, que no procede la acción de amparo constitucional contra la indagatoria ordenada en auto que decreta la ampliación de sumarias, porque la orden está dirigida al funcionario de instrucción para que complete la investigación. Tal criterio, señala el Primer Tribunal Superior de Justicia, fue establecido por la Corte Suprema de Justicia en la sentencia de 21 de junio de 1993 en la acción de Amparo de Garantías constitucionales propuesta por el señor David E. Rodríguez contra el auto No. 41 de 29 de enero de 1993 dictado por el Juez Quinto del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en sentencia de 16 de julio de 1993 y en sentencia de 10 de septiembre de 1993 en la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesto por Mayín Correa Delgado contra la resolución fechada el 2 de agosto de 1993 proferida por la Fiscal Cuarta del Primer Circuito Judicial que ordenaba recibirle indagatoria.

El Pleno comparte el razonamiento del Primer Tribunal Superior de Justicia por cuanto, ha sido jurisprudencia constante del pleno de esta Corporación en torno al artículo 17 de la Constitución Nacional el que por ser el mismo de carácter programático, no es susceptible de ser alegado como norma infringida. Igualmente acertado, considera el Pleno, ha sido el criterio del Primer Tribunal en relación a la indagatoria, puesto que la misma fue ordenada dentro de una resolución que decreta la ampliación sumarial, y esta última es irrecurrible conforme lo indica el artículo 2205 del Código Judicial por cuanto constituye una orden girada al funcionario de instrucción para que complete la investigación por lo que el amparista no posee legitimación activa para impugnarla. En este sentido, ha sido jurisprudencia constante de esta Corporación el que la acción de amparo no procede contra la indagatoria ordenada en un auto que decreta la ampliación de las sumarias, ya que la orden de hacer, en todo caso, está dirigida al funcionario de instrucción, puesto que es a este último a quien corresponde cumplir los puntos concretos y claros sobre que versa la ampliación y no a la persona que se ordena tomar declaración indagatoria por las razones que motivaran al juzgador a ordenar la ampliación, para completar la investigación. Cabe agregar que, la indagatoria constituye un acto de impulso procesal y por lo tanto, de mero trámite, que no viola ningún derecho constitucional, por lo que la acción de amparo deviene manifiestamente improcedente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, reforma la sentencia de primera instancia expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 11 de noviembre de 1993, y en este sentido, DECLARA NO VIABLE la demanda de amparo de garantías constitucionales promovido por el Lcdo. Agustín Sellhorn en contra del Juez Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO

(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE RUBIO & RUBIO EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA BETULIA GÓMEZ DE MARÍN Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN NO. 3. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense RUBIO & RUBIO, actuando como apoderados legales de la señora **BETULIA GÓMEZ DE MARÍN**, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer proferida por la Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N° 3, en el proveído de mero obedecimiento fechado 16 de abril de 1993.

Toda vez que el libelo de la demanda cumplía con los requisitos establecidos en la ley, el magistrado sustanciador la admitió, mediante resolución del 22 de noviembre de 1993 y solicitó a la autoridad demandada que remitiera un informe de su actuación dentro del término establecido por la Ley.

La Presidenta de la Junta de Conciliación y Decisión N°3 remitió el expediente contentivo de la actuación dentro de todo el proceso.

ANTECEDENTES

El presente recurso se dirige contra el proveído de mero obedecimiento mediante el cual la Junta de Conciliación y Decisión N°3 rechazó el recurso de apelación presentado por la señora Betulia Gómez de Marín contra la Sentencia PJ-3 de 3 de septiembre de 1991, de esa misma Junta, por considerarlo extemporáneo.

Para rechazar tal recurso la Junta invocó como fundamento de derecho los artículos 540 y 873 del Código Trabajo, en relación al informe que reposa a fojas 205 del expediente en el que la Secretaría del Tribunal dejó constancia que el apoderado legal de la señora de Marín se había apersonado al Despacho Judicial (el 11 de marzo de 1993) "con el fin de notificarse del expediente contentivo de la demanda interpuesta ... y se le proporcionó para dicho acto y luego de analizarlo nos manifestó que se le facilitara la copia de la sentencia y que él regresaría el lunes 15 de marzo de 1993, para notificarse.", por lo que el 11 de marzo de 1993 el Despacho dio por notificada la sentencia, aplicando conducta concluyente (artículo 885 del Código de Trabajo).

El 16 de abril de 1993 el apoderado legal de la demandante interpuso escrito de apelación, el cual fue recibido por insistencia a las 3:41 de la tarde, tal como dejó constancia la Secretaria del Tribunal.

La resolución que rechazó el recurso fue dictada el mismo día en que se presentó el escrito de apelación.

En vista de lo anterior interpuso un recurso de Hecho ante el Tribunal Superior de Trabajo, el que fue rechazado de plano, por considerar que sí hubo notificación, por cuanto que "El acto de notificación conclusiva es inmediato e instantáneo" y que éste se dio cuando el abogado llegó al Tribunal solicitó copia del expediente y prometió regresar l 15 de marzo de 1993, además, la promesa de volver es improcedente, pues la apelación debió hacerse en el mismo momento.

**EL RECURSO**

El demandante señala que la actuación de la Junta de Conciliación y decisión viola los artículos 17, 18 y 32 de la Constitución Nacional. El primero porque si la funcionaria hubiera aplicado la ley de procedimiento no habría dictado la resolución que se impugna, la segunda por inaplicación ya que no se encuentra entre las funciones de la Secretaria de una Junta de Conciliación y Decisión no dar por notificada una resolución si no se han cumplido los trámites de la ley.

En cuanto a la violación del debido proceso, advierte que se pretende dar por notificada una resolución en base a lo establecido en el artículo 885 del Código de Trabajo cuando no se han cumplido los presupuesto procesales exigidos, que los resume de la siguiente manera:

> ". Que la parte que se pretende dejar notificada, se haya referido a la resolución que se pretende notificar en escrito suyo posterior a la misma o que en otra forma se manifieste sabedora o enterada de la misma por cualquier medio escrito.
>
> . Que haga gestión en relación con la resolución que se pretende dar por notificada." (Fs. 62)

**CRITERIO DE LA CORTE**

La Corte procede a analizar la demanda interpuesta de la siguiente manera:

Lamenta esta Corporación que el demandante no comparta la jurisprudencia en el sentido que el artículo 17 de la Constitución Nacional contiene principios programáticos que no son susceptibles de ser amparados por una acción de como la que se impetra, no obstante es la Corte Suprema de Justicia quien establece los criterios de interpretación de la Constitución Nacional por lo que se ratifica en él, igualmente en relación al artículo 18 constitucional invocado.

Finalmente, la Corte considera que sí le asiste razón al demandante en cuanto a la violación del artículo 32 de la Carta Magna, criterio que se explica:

El artículo 885 del Código de Trabajo, efectivamente, se refiere a la conducta concluyente como medio para tenerse por notificada una resolución, no obstante ese mismo artículo señala cuándo se entiende que existe conducta concluyente, a saber:

1. Cuando la persona a quien deba notificarse se refiera a la resolución mediante un escrito suyo, o,

2. Por cualquier otro medio escrito en el que manifiesta ser sabedora del contenido de la resolución que se va a notificar, y,

3. Cuando hace gestión en relación a dicha resolución.

Por otro lado, la misma norma agrega lo siguiente: "dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal."

En el expediente laboral que accede a este amparo no hay escrito alguno de parte de la señora de Marín en el que haga las manifestaciones que se describen en el artículo 885 comento.

Todo indica que la Secretaria de la Junta de Conciliación y Decisión N°3 consideró que cuando el abogado de la señora de Marín solicitó una copia del expediente estaba ejecutando una conducta concluyente, si bien es cierto que la conducta concluyente es un mecanismo para agilizar el proceso de notificación y la conducta de aquellos que no desean realizar este acto procesal personalmente, ésta debe ser cierta y tal actividad de la parte debe constar en el expediente y el artículo 885 es claro al exigir que la actuación conste por escrito.

En el caso presente si el abogado se encontraba en el Tribunal el Secretario debió aplicar el artículo 886 del Código de Trabajo, intentando la notificación personal, de lo contrario redactar el informe secretarial en el que constara la reticencia de éste a notificarse, hacer que lo firmaran dos testigos e incorporarlo al expediente, con el propósito de que hiciera las veces de notificación personal.

Esta situación trajo como consecuencia que la Junta considerara que el término para presentar la apelación correspondiente había pasado, por lo que al ser presentada fue rechazada por extemporánea, conculcándosele a la trabajadora el derecho a la defensa, pues se resolvió en base a un informe que da por notificada una resolución sin seguir los trámites legales y que por tanto es ilegal.

En vista de lo anterior el Pleno de la Corte considera que se viola el debido proceso, al aplicarle a la parte una norma sancionadora cuando el Tribunal no ejecutó acciones conducentes para que se le notificara personalmente la sentencia de marras, teniendo la oportunidad para hacerlo, por lo que procede la revocatoria del proveído de mero obedecimiento demandado en esta acción.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo propuesto, REVOCA el proveído de mero obedecimiento dictado por la Junta de Conciliación y Decisión N°3, fechado 16 de abril de 1993 y ORDENA a la Junta de Conciliación y Decisión N°3 conceder la apelación presentada.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR DAVID CÓRDOBA BATISTA EN CONTRA DEL JUEZ SÉPTIMO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **José Pío Castillero** presentó Recurso de Apelación contra la sentencia de Amparo de 12 de noviembre de 1993 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, mediante la cual se deniega la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta

por **DAVID CÓRDOBA BATISTA** contra la Juez Séptima del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, que pretendía la revocatoria del Auto de llamamiento a juicio a **DAVID CÓRDOBA BATISTA**, proferido por el Juez Séptimo de Circuito el 26 de agosto de 1992.

Sostiene el Tribunal Superior, para denegar el Amparo solicitado, los siguientes razonamientos:

> "Para comenzar, este Tribunal Colegiado debe dejar aclarado, en cuanto a la primera norma constitucional a que se alude en este Amparo de Garantías Constitucionales, o sea, el artículo 22, que ella no puede ser invocada como sustentáculo jurídico de dicha acción de carácter extraordinaria, por cuanto su violación no es susceptible de ser remediada mediante esta vía, por tratarse de una norma que garantiza la libertad de las personas, que encuentra una especial tutela en el Instituto de Habeas Corpus, criterio este que aparece avalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia de fecha 31 de Mayo de 1993, dictada en ocasión de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la señora IRMA DE ZAMBRANO contra el JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL. Amén de que, según lo ha dejado declarado esa alta Corporación de Justicia en sentencia de fecha 16 de Noviembre de 1992 "no debe perderse de vista que el auto de enjuiciamiento es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia" (Acción de amparo propuesta por el señor ÁNGEL LAM ARCHER -vs- JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, RAMO PENAL).
>
> Haciendo ahora referencia al artículo 32 de la Constitución Nacional, que aparece también señalado en el amparo que nos ocupa como violentado por la Juez Séptima del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, al expedir el auto de fecha 26 de Agosto de 1992, por cuyo conducto se abre causa criminal al Amparista por el delito de peculado en contra del Estado Panameño, conviene destacar, en relación a dicha norma constitucional, que en ella se consigna la garantía individual al debido proceso legal, garantía ésta que comprende tres (3) aspectos fundamentales que son:
>
> 1). El derecho a ser juzgado solamente por autoridad competente,
>
> 2). El derecho a ser juzgado mediante los trámites legales previamente establecidos; y,
>
> 3). El derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.
>
> En adición a lo anteriormente señalado en torno a la garantía al debido proceso legal enmarcada en el artículo 32 de nuestro estatuto fundamental, el Tribunal considera conveniente reproducir interesantes comentarios vertidos por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia sobre la materia. En ese sentido tenemos que nuestro máximo Tribunal de Justicia, dejó declarado lo siguiente:
>
> `El Pleno considera conveniente reiterar que la garantía constitucional del debido proceso legal consagrada en el artículo 32 de la Constitución es una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso-legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas-oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a Derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos.'
>
> Al confrontar las razones a través de las cuales el apoderado legal del proponente del amparo explica la violación de que fue objeto el artículo 32 de la Constitución nacional por parte de la funcionaria de la jurisdicción penal acusada, no se advierte mención a transgresión de ninguno de los aspectos relevantes que conlleva la garantía al debido proceso legal, anteriormente señalados, muy por el contrario, la argumentación desarrollada por el Licenciado JOSÉ PÍO CASTILLERO está encaminada a desvirtuar los criterios de evaluación probatoria e interpretación legal que dieron pie a la Juez demandada para calificar el delito que se le imputa a su representado, lo que es totalmente ajeno a la garantía consignada en la citada norma constitucional. Aparte de que, se observa, que las razones de disconformidad contra la decisión proferida por la Juez Séptima del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, que pretende hacer valer el apoderado legal del señor DAVID CÓRDOBA BATISTA mediante el presente amparo, ya fueron expuestas por dicho profesional del Derecho en el escrito de sustentación del recurso de apelación que interpusiera en su oportunidad contra el auto de fecha 26 de Agosto de 1992, dictado por la Juez demandada (ver fs. 3161-3170 de los antecedentes) y que resultaron desestimadas por el Segundo Tribunal Superior de Justicia a través del auto de fecha Primero (1°) de Septiembre de 1993, (ver fs. 3182-3194 de los antecedentes).

Como quiera pues, que de lo expresado en el párrafo que antecede, queda claramente evidenciado, que lo que realmente se persigue mediante la interposición de esta acción de Amparo de Garantías Constitucionales es convertir la institución del Amparo en una tercera instancia revisora de actuaciones de los funcionarios jurisdiccionales proferidas en ambas instancias, lo que desnaturaliza tal institución constitucional, se impone denegar el amparo propuesto por el señor DAVID CÓRDOBA BATISTA contra la JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL."

El amparista apelante sostiene, en contra de la Resolución apelada, lo siguiente:

"Recurrimos a este medio extraordinario precisamente porque en **"ambas instancias"** jurisdiccionales, no se advirtió aún cuando así se observó mediante el recurso de apelación en la vía ordinaria, la violación de las garantías constitucionales de presunción de inocencia y del debido proceso legal en perjuicio de **DAVID CÓRDOBA BATISTA.**

**QUINTO:** El auto de enjuiciamiento como resolución interlocutoria conforme al artículo 2224 del Código Judicial, consta de una parte motiva y otra resolutiva. La primera implica una narración sucinta y fiel de los hechos que hubieren dado lugar a la investigación, con expresión de la forma o modo como el hecho llegó a conocimiento del funcionario de instrucción; el nombre completo del imputado y demás y el análisis de las pruebas que demuestren el hecho punible y aquellas en que se funda la imputación del hecho, así como la competencia del juzgador.

**SEXTO:** Las frases consignadas en la parte motiva de la resolución de 26 de agosto de 1992, proferidas por la Juez Séptima de Circuito Penal, objeto del Amparo de Garantías Constitucionales, no se compadecen de ninguna manera con el mandato de la norma jurídica antes invocada. Por el contrario, califica anticipadamente la conducta de mi representado **DAVID CÓRDOBA BATISTA** como autor del delito de **peculado Doloso**; violándose así el debido proceso legal desde el momento en que no se le está juzgando **"mediante los trámites legales previamente establecidos"**.

**SÉPTIMO**: Si bien es cierto que el auto de enjuiciamiento como interlocutorio, **"no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia**," en este caso la violación de la garantía de presunción de inocencia y del debido proceso legal, ocurre precisamente porque la Juez entra a analizar un aspecto concerniente a la culpabilidad al identificar el tipo de delito específico dentro de las distintas formas de Peculado.

**OCTAVO**: La resolución cuestionada mediante la presente acción extraordinaria, se convierte en un prejuzgamiento de la conducta de mi representado **DAVID CÓRDOBA BATISTA**, por lo tanto se viola la garantía de presunción de inocencia y sobretodo del debido proceso legal. Lamentamos que los esfuerzos del Primer Tribunal Superior de Justicia, en este caso, estén encaminados a justificar que la acción imputada no se encuadra en la garantía del debido proceso legal, en vez de analizar si la calificación anticipada con las frases transcritas en la acción y contenidas en la resolución, en efecto constituye violación del debido proceso legal y de presunción de inocencia.

**NOVENO**: El proceso penal debe ser un cúmulo de garantías hacia el sujeto sometido al poder jurisdiccional del Estado, más que una acción resultante del poder sancionador. De allí que al imputado no sólo objetivamente el Estado debe garantizarle un juicio justo sino que subjetivamente el imputado debe estar convencido de que en efecto, está sometido a un proceso rodeado de todas las garantías a que tiene derecho.

**DÉCIMO**: El auto de enjuiciamiento proferido por la Juez Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, desde el momento en que califica la conducta de mi representado como **"hechos dolosos perpetrados por los funcionarios públicos de este entonces"** no ofrece la garantía de imparcialidad que debe rodear a la sagrada misión de administrar justicia. Sencillamente porque hablar de **hecho doloso** implica desde ya, a todas luces, una calificación anticipada del proceso y una violación de las normas procesales penales que reservan la calificación para otro momento procesal distinto al debatido en la etapa actual del proceso."

Un examen de la actuación demuestra a fojas 3109 y 3110 del Tomo 7 del expediente penal, que el señor **DAVID CÓRDOBA BATISTA** fue llamado a juicio por ser supuesto transgresor de las disposiciones legales contenidas en el capítulo 1 Título X, Libro II del Código Penal Panameño o sea por el delito genérico de peculado. Lo anteriormente expresado desvirtúa lo sostenido por el amparista, de que se calificó la conducta de su representado dentro del artículo 322 del Código Penal.

Como se puede observar, estamos en presencia de un amparo contra un auto de llamamiento a juicio y la Corte ha sostenido reiteradamente, en fallos de 16 de noviembre de 1992, de 15 de enero de 1993 y de 18 de noviembre de 1993 que el auto de llamamiento a juicio es interlocutorio por excelencia, es decir, que no decide el fondo del negocio y no entra por tanto a considerar la inocencia o culpabilidad del procesado, que sigue conservando a su favor el principio de presunción de inocencia, aparte de que no es

necesario esperar el auto de enjuiciamiento para tomar medidas cautelares contra el imputado. El auto de proceder tiene por objeto calificar el sumario, es decir, ponderar si existe algún indicio racional de criminalidad en contra de determinada persona y esta apreciación es una facultad inherente a la de juzgar, a fin de declarar si se abre o no la fase plenaria del proceso penal.

El Primer Tribunal Superior denegó el amparo cuando lo correcto era que no debió admitirlo, por lo que debe modificarse la decisión en tal sentido.

Por lo dicho, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa revocatoria de la sentencia de 12 de noviembre de 1993 del Primer Tribunal Superior de Justicia, NO ADMITE EL AMPARO propuesto contra el auto de enjuiciamiento proferido por la JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO PENAL contra DAVID CÓRDOBA BATISTA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR TOMAS EMILIO DE SEDAS RAMOS EN CONTRA DEL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. Panamá, diez (10) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El doctor **ROLANDO VILLALAZ**, presentó recurso de apelación contra la sentencia de amparo de 29 de octubre de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, que niega la acción de amparo propuesta por **TOMAS EMILIO DE SEDAS RAMOS** contra el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección.

Con base en el artículo 2617 del Código Judicial, el Tribunal pasa a resolver, sin más trámite, la controversia planteada.

Sostiene el doctor **ROLANDO VILLALAZ** lo siguiente:

> "Señores Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, la garantía del debido proceso consagrada en nuestra Constitución, establece el cumplimiento de los trámites legales pertinentes.
>
> Al IRHE se le permitió utilizar el recurso de apelación contra el Auto No.22 de 8 de marzo de 1993, tal cual lo permite, el proceso de ejecución de sentencia delimitado en el Código de Trabajo.
>
> Pero al haberse confirmado por el Tribunal Superior de Trabajo el Auto apelado, no le cabía al IRHE poder efectuar ninguna gestión, hasta tanto indemnizara al trabajador por el perjuicio que le causó al interponer dicho recurso.
>
> Al presentar el IRHE una 'solicitud de reconsideración de multa' ante el Juzgado Cuarto de Trabajo, sin haber previamente indemnizado al trabajador afectado, hacía nula toda gestión, por lo cual, la 'modificación o reajuste' que se establece en el auto No.60 de 30 de marzo de 1993, a petición hecha por el IRHE, desconoce el trámite que la ley establece para estos casos.
>
> El IRHE interpuso injustificadamente un recurso de apelación y luego, se le permite presentar una reconsideración a una multa, la cual es acogida en el auto No.60 ya descrito. A pesar de estar en mora en el pago de la indemnización de perjuicios por presentar una apelación injustificada, se le permitió en el Juzgado Cuarto de Trabajo, gestionar al IRHE.
>
> Ya en Fallo de esta Honorable Corte Suprema de Justicia del 5 de junio de 1990 se señaló que la inobservación de los trámites legales correspondientes a una determinada jurisdicción, viola el debido proceso y coloca en estado de indefensión a la otra parte.
>
> En el caso que nos ocupa, el Juzgado Cuarto de Trabajo concedió una reconsideración (fojas 288-290) o medio de impugnación, que no está establecido, en los procesos laborales de ejecución de sentencia".

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial consideró, para negar el amparo impetrado, lo siguiente:

> "En primer lugar, vale la pena señalar lo dispuesto por la disposición laboral aplicada por el Tribunal laboral en la decisión impugnadas, y que es el artículo 1062 del Código de Trabajo, el cual reza así:

'Artículo 1062. Sin perjuicio de las normas previstas en este Código o en cualquier otra ley sobre apremio corporal por desacato, el Juez podrá, en lugar del apremio corporal, imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que su cumplan sus mandatos u órdenes, cuyo importe será a favor del litigante afectado por el incumplimiento.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y **podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste**, si el afectado justifica parcial o totalmente la causa o causas de su renuencia o resistencia'. (Resaltado del Tribunal).

Obsérvese entonces que la parte demandada en el proceso laboral lo que está solicitando es 'que **sin variar la declaratoria de DESACATO** que cumple por orden superior, utilice el criterio que **le concede el artículo 1062, DEJANDO SIN EFECTO LA MULTA**, fijada al Director del IRHE'. (Resaltado del Tribunal)

Entiéndase que no se trata de reconsideración de la resolución anterior (Auto N°22), sino de la aplicación del artículo arriba transcrito, para los efectos de dejar sin efecto la multa, tal como la misma lo prevé.

Como es sabido, la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 Constitucional, puede ser violada en cualesquiera de los tres supuestos que ella contiene, o sea, no ser juzgado más de una vez por la misma causa; ante tribunales competentes; y con el cumplimiento de los trámites legales pertinentes.

Este último es el supuesto que alega el amparista se ha violado con la decisión impugnada en Amparo.

Sin embargo, como se deja ver claramente, las imputaciones que se hacen sobre dicha orden, no son de orden procesal, sino de aplicación de normas sustantivas, lo cual, como ha sido reiterado por nuestra jurisprudencia, no puede ser materia de esta extraordinaria acción de amparo de garantías constitucionales.

No encuentra este Tribunal razón alguna para acceder al amparo impetrado por el señor De Sedas".

Un análisis de la actuación nos demuestra, que estamos ante la figura jurídica conocida por los autores Franceses como **Astreintes** y por los Argentinos **sanciones conminatorias** y que nuestro Código de Trabajo regula a propósito del desacato en el artículo 1062. Esta figura supone la existencia de una decisión judicial de condena, ejecutoriada, como en el presente caso. Y permite, la mencionada disposición legal, que a petición de parte o de oficio, el Juez pueda dejar sin efecto, o ser objeto de reajuste, las sanciones que por apremio corporal o desacato, haya impuesto para que se cumplan sus mandatos. El hecho de que el apoderado legal del IRHE haya denominado incorrectamente Recurso de Reconsideración, a la solicitud que permite el artículo 1062 del Código de Trabajo, no era óbice para que el Juez dejará de considerarla, con base en el artículo 908 del mismo Código, que permite su admisión, si del mismo se deduce claramente sus propósitos, y se cumplen las disposiciones del Código.

La razón de esta figura jurídica es asegurar la ejecución de una decisión judicial y no tiene propósitos indemnizatorios. Por lo expuesto la Corte se muestra de acuerdo con el Tribunal **a-quo**.

En razón de lo dicho la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **CONFIRMA** la sentencia de Amparo de 29 de octubre de 1993, dictada en este caso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. JULIO A. EFFIO T. EN REPRESENTACIÓN DE DAYKA MARISSA LAUCHU, CONTRA LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Julio A. Effio presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra orden de hacer contenida en resolución N° 634 SA, dictada por el Tribunal Tutelar de Menores el 11 de agosto de 1993, por considerar que la orden atacada infringe los artículos 17 y 32 de la Constitución Política, que consagran los deberes generales de las autoridades públicas y el principio del debido proceso, respectivamente.

La demanda fue admitida por cumplir con los requisitos que exigen los artículos 654 y 2610 del Código Judicial. En consecuencia, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación y el informe correspondiente a los hechos materia de la presente iniciativa procesal-constitucional (artículo 2611 C.J.).

Mediante Nota N° 192 D.J. de 25 de octubre de 1993 el Tribunal Tutelar de Menores remitió los antecedentes solicitados, que constan en 16 fojas útiles, así como el informe requerido. En su parte medular el informe de conducta expresa:

> "Sobre el particular es pertinente informar o hacer del conocimiento de la Honorable Corte que esta Jurisdicción Especial homólogo mediante la referida resolución N° 634 SA, el Convenio o Acuerdo de Guarda Crianza y Educación y Reglamentación de Visitas a favor de los menores HARRIS LAUCHU en mención, luego de analizar la solicitud como las pruebas aportadas por el Lcdo. Ariel Quijano portador de la Cédula N° 8-219-661, apoderado judicial en ese entonces de los señores DEYKA M. LAUCHU DE HARRIS y EMILIO E. HARRIS G."

Más adelante el informe continúa expresando:

> "... fácilmente la Honorable Corte podrá observar la suscripción del Fiscal de Turno y su Secretario (sic) de la referida Resolución N° 634 SA lo cual permitió al representante de la Vindicta Pública, hacer o manifestar su desacuerdo en el momento oportuno de su modificación y a través del recurso correspondiente por todos conocidos en estos procesos, sin embargo, el representante del Ministerio Público se limitó a plasmar su anuencia y acuerdo con su firma; por ello la ausencia de su notificación de la providencia fechada el veintiséis (269 de abril del presente año, a nuestro juicio no tiene la mayor relevancia, puesto que si el agente del Ministerio Público hubiera observado la falta al debido proceso de seguro hubiera interpuesto en tiempo oportuno su desacuerdo al momento de notificarse" (Subraya la Corte).

Sostiene el amparista que la resolución atacada infringe el artículo 17 de la Carta Magna, pues el Tribunal Tutelar de Menores, "al atender un negocio de guarda, crianza y educación sin notificar al Ministerio Público para que éste defendiera los derechos de los menores de edad ...", incumple un deber que señala la ley, con lo que incurre en una omisión en el desempeño de funciones (folio 8 del cuaderno de amparo).

Con respecto a la violación del artículo 32 de nuestra Carta Fundamental, que consagra el principio del debido proceso, el recurrente indica que el "juicio" de guarda y crianza adolece de vicios insubsanables que lo hacen "nulo de toda nulidad" (folio 9 del cuaderno de amparo). Afirma que la conculcación del debido proceso ocurre cuando el Tribunal Tutelar a) no ordenó de oficio la corrección de los poderes y escritos presentados, que desconocen lo preceptuado en el artículo 654 del Código Judicial; b) omitió notificar al Ministerio Público, exigencia contemplada -según el amparista- para esta clase de procesos en el artículo 1283 del Código Judicial y c) pretermitió otros trámites procesales, todo lo cual en abierta infracción del mandato de las disposiciones 974 y 977 de la excerta procesal, por lo que incurrió en violación del debido proceso.

**DECISIÓN DE LA CORTE**

En relación al artículo 17 de la Carta Fundamental, la Corte Suprema tiene establecido que esta disposición es de naturaleza programática o directiva, pues contiene principios y valores atinentes a todo el sistema normativo. Tal precepto no establece derechos subjetivos susceptibles de ser violados, por lo que, aisladamente invocado, no puede servir para sustentar por esta vía la pretensión que se considera.

Con respecto al artículo 32 de la Constitución vigente, las garantías objetivas del debido proceso han sido claramente delimitadas por jurisprudencia reiterada de esta Superioridad. En ese sentido, de acuerdo al concepto de estricta legalidad procesal, la función de administrar justicia debe ejercitarse conforme los trámites preestablecidos en la ley.

Ese concepto hace imperativo el respeto del principio del debido proceso, lo que implica el acatamiento de las formalidades básicas que rigen la actividad jurisdiccional, entre ellas la de asegurar la comunicación del libelo al demandado, con plazo razonable para comparecer y defenderse, la garantía de incorporación de medios probatorios lícitos, de conformidad con lo que a este respecto establece el Código Judicial, así como la utilización de las excepciones y medios impugnativos legalmente autorizados.

De lo anterior se desprende, como consecuencia lógica, que el desconocimiento de la legalidad procesal, tanto en los procesos contenciosos como en los no contenciosos, entraña de manera inevitable violación al debido proceso.

Con meridiana claridad se aprecia que la resolución impugnada tiene su origen en un proceso no contencioso de guarda y crianza. De esta comprobación se desprende que era obligante la aplicación, por el Tribunal Tutelar de Menores, del artículo 1447, numeral 4, en la sustanciación del referido proceso. De conformidad con la norma mencionada es imperativo, en los procesos no contenciosos de Guarda Crianza y Educación, que se notifique al Ministerio Público de la petición de aprobación del Acuerdo de Guarda y Crianza, quien "podrá aducir pruebas y recurrir", debiendo el Juez escuchar su concepto antes de fallar.

El citado artículo estatuye:

> "ARTÍCULO 1447. Salvo lo dispuesto para casos especiales los procesos no contenciosos estarán sujetos a las siguientes reglas:
> ...
> 4. En caso de que se afecte relaciones de familia, el estado civil o bienes de incapaces o ausentes se notificará al Ministerio Público la petición y éste podrá aducir pruebas y recurrir. Antes de fallar el juez oirá su concepto" (Subraya la Corte).

La oportuna intervención del Ministerio Público se encuentra instituida a los efectos de que actúe en representación del interés del menor. De allí que, al omitir el tribunal el cumplimiento de tal formalidad, ello se traduce en desmedro de una tutela indeclinable y, por lo tanto, en desconocimiento de una garantía de las plurales que conforman el concepto del debido proceso.

Sobre todo porque se trata -como viene dicho- de un trámite no contencioso relativo al orden de la familia, desprovisto por lo tanto de los modos y medios ordinarios de impugnación, se incurre igualmente en vulneración de este principio cardinal cuando la autoridad jurisdiccional de menores expide una resolución invocando como fundamento probatorio fotocopias de documentos públicos desprovistos de autenticación adecuada, en lo que sólo aparece un sello en el que se lee: Tribunal Tutelar de Menores + República de Panamá+ Vo. Bo. (Visto Bueno) y una firma completamente ilegible (ver documentos que constan en los antecedentes a fs. 6-8), los que no podían ser oportunamente redargüidos de falsos, según el procedimiento ordinario. De otra parte, en el evento de que dichas pruebas hubieren sido desglosadas, deberían constar en el expediente la correspondiente solicitud de desglose así como con la providencia que lo autoriza.

Todo lo anterior, además de violar las formalidades que la ley establece en materia probatoria, constituye un grave error secretarial. Las fotocopias de documentos públicos, para que tengan valor en el proceso, deben ser autenticadas por el secretario del tribunal mediante un sello que exprese que la reproducción o copia es conforme con su original. El artículo 820 del Código Judicial sobre este punto, expresa:

> "ARTÍCULO 820. Los documentos se aportarán al proceso en originales o en copias, de conformidad con lo dispuesto en este Código. Las copias podrán consistir en transcripción o reproducción mecánica, química o por cualquier otro medio científico. Las reproducciones deberán ser autenticadas por el funcionario público encargado de la custodia del original, a menos que sean compulsadas del original o en copia auténtica en inspección judicial y salvo que la ley disponga otra cosa". (El subrayado es de la Corte).

En cuanto al poder consultable al inicio de los antecedentes, llama la atención el hecho de que las firmas de los poderdantes aparecen en folio distinto de aquél que da cuenta del mandato supuestamente otorgado (folio 2 del cuaderno administrativo). Esta práctica, peligrosa a pesar de no ser inusual, incorpora a esta causa un elemento adicional de duda, sobre todo cuando en este proceso la amparista, uno de los supuesto signatarios del poder, "jamás lo ha visto" (f. 6, cuaderno del amparo), todo ello complementado por el hecho de que, nuevamente por tratarse de un procedimiento no contencioso, no debía ser cumplida la formalidad del traslado que habría hecho posible la impugnación del documento por los medios ordinarios.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo demandado por el licenciado Julio A. Effio, actuando en representación de Dayka Marissa Lauchu y REVOCA la Resolución N° 634 S. A., de 11 de agosto de 1993, dictada por el Tribunal Tutelar de Menores.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LCDO. EDGAR O. VARGAS EN REPRESENTACIÓN DE ARTHUR DAVIS B. Y LA ORDEN DE HACER PROFERIDA POR EL MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edgar O. Vargas T., quien actúa en representación de Arthur S. Davis B., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden verbal de hacer emitida por el Ministro de Obras Públicas, que consiste, según el amparista, en ordenar "que se retire la estructura de los seis (6) policías muertos colocados desde el día 14 de noviembre de 1993, en la Calle Los Pinos, Urb. Chanis, ciudad de Panamá."

Según afirma el demandante, la orden vulnera los artículos 17 y 32 de la Constitución vigente, que consagran los deberes de las autoridades públicas y el principio del debido proceso, respectivamente.

Corresponde, en esta oportunidad, determinar si la demanda presentada cumple con los requisitos formales que establece la ley, particularmente los que señala el artículo 2610 del Código Judicial, a lo que se procede de inmediato.

En primer lugar es importante señalar que la acción de amparo de garantías constitucionales ha sido instituida con la finalidad de enervar órdenes de hacer o de no hacer individualizadas que contengan una amenaza o una violación efectiva de derechos subjetivos de naturaleza constitucional. En el caso que nos ocupa el retiro de los denominados policías muertos de la vía pública afecta, sin lugar a dudas, a una categoría de personas en este momento indeterminadas pero determinables (los residentes de la Calle Los Pinos, Urbanización Chanis), por lo que el demandante debió escoger la vía objetiva del contencioso administrativo. En este mismo orden de ideas es preciso observar que el libelo de amparo no trae alusión alguna a la legitimación activa de la que se considera investido el demandante, derivada de la eventual violación de "los derechos y garantías que la Constitución consagra" en su favor, exigencia a la que se refiere el inciso primero del artículo 2606 del Código Judicial.

Finalmente, conforme al inciso segundo del numeral 4 de la citada norma resulta fundamental que se encuentre debidamente acreditada la existencia de la orden que se dice impartida. En caso de que ésta fuere de naturaleza verbal es imperativo cumplir con un presupuesto que tiene establecido esta Corporación de Justicia en jurisprudencia reiterada, en el sentido de que cuando la orden atacada es de naturaleza verbal resulta preciso presentar prueba documental preconstituída -consistente en dos testimonios hábiles-que acredite la existencia de la orden, siguiendo el mandato del artículo 48 de la ley 135 de 1943, aplicado por analogía (Cfr. Sentencias de 10 de julio de 1992 y de 5 de agosto de 1993).

El examen detenido del cuaderno de amparo permite determinar que el demandante no ha cumplido con esta formalidad. Lo anterior hace que la presente iniciativa se enmarque dentro de la calificación de manifiestamente improcedente que establece el artículo 2611 de la excerta procesal.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo propuesto por el licenciado Edgar O. Vargas T., en representación de Arthur S. Davis B.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO CARLOS ALBERTO JAIME DE FREITAS EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA PAULA PÉREZ DOMÍNGUEZ Y CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS ALBERTO JAIME DE FREITAS, actuando en nombre y representación de PAULA PÉREZ DOMÍNGUEZ, ha promovido acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la sentencia de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, el 14 de octubre de 1993, dentro del Proceso Laboral promovido por DANIA M. CASTRO DE CABALLERO contra el SALÓN DE BELLEZA PAULITA Y/O PAULA PÉREZ DOMÍNGUEZ. Mediante la sentencia impugnada el tribunal reformó la sentencia condenatoria de primera instancia dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 4 de Panamá "en el sentido de que los salarios caídos corren desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación y la CONFIRMA en todo lo demás".

En los hechos de su demanda, la parte actora señala que el 27 de septiembre de 1990 la señora Dania M. Castro de Caballero demandó a la empresa Salón de Belleza Paulita y/o Paula Pérez; corrigió su demanda el 22 de octubre de 1991, trece meses después de su presentación; la notificación de la demanda ocurre el 3 de enero de 1992, diecisiete meses después de presentada la demanda; la audiencia practicó el 28 de enero de 1992; y el 8 de enero de 1992 la demandada solicitó la declaratoria de prescripción de la acción, fundamentada en los artículos 12 y 12A del Código de Trabajo y dicha excepción fue considerada no probada en primera instancia.

De acuerdo a la parte actora, la orden de hacer viola el ordinal 7 del artículo 12 del Código de Trabajo ya que el 27 de septiembre de 1990 se interrumpió la prescripción de la acción con la presentación de la demanda, y a partir de ese momento comenzó a correr nuevamente el término de prescripción. Si se va a corregir la demanda, debe hacerse en el término de tres meses, lo que no ocurrió en el presente negocio, ya que la corrección se hizo el 22 de octubre de 1991, trece meses después de presentada, lo que constituye una violación a la citada norma "ya que lo que se toma en la audiencia es la demanda corregida, y no la primaria que sólo sirvió para interrumpir el término de prescripción de tres meses". Otro tanto se ve en la notificación de la demanda, que se hizo el 3 de enero de 1992, veintiocho meses después de presentada la demanda. Agrega la demandante

que se prolonga el proceso por varios meses más y en consecuencia, aumenta la cuantía a pagar.

Señala además el demandante que el Tribunal Superior de Trabajo violó el artículo 218 del Código de Trabajo, ya que esta norma contiene un término fatal de tres meses para que las Juntas de Conciliación y Decisión fallen, y en el presente caso este término "se venció en demasía ya que el fallo de la demanda ocurre el día 4 de septiembre de 1992, a escasos 23 días de cumplir dos (2) años de presentada la demanda", hecho que se llevó a cabo el 27 de septiembre de 1990. Esta norma señala que la sanción por la infracción a este plazo será reglamentada por la Ley, y el Tribunal Superior de Trabajo sólo opta por suspender los salarios caídos hasta el día que se interpuso la apelación a la sentencia de primer grado. No ve la demora perjudicial que cometió el juzgador de primera instancia. Si el Ejecutivo no ha creado nuevas Juntas para evitar estas demoras, no deben los demandados pagar en dinero la falta de las Juntas.

Termina señalando el demandante que el Tribunal Superior de Trabajo infringió el artículo 218 ibidem, porque determinó que los salarios caídos a pagar corren hasta la fecha de la apelación, o sea más de treinta y seis meses a razón de B/.450.00 mensual, y el artículo 218 habla de 3 meses para fallar, y por lógica los salarios caídos deben estar al rango de esos tres meses.

Admitida la presente acción de amparo de garantías constitucionales, se solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o en su defecto un informe acerca de los hechos materia de amparo, en el término de Ley.

Dicho informe fue rendido mediante oficio No. 1513 de 26 de octubre de 1993, y con el mismo se envió el expediente contentivo del proceso laboral promovido por Dania M. Castro Caballero contra Salón de Belleza Paula y/o Paula Pérez Domínguez.

Evacuados los trámites de Ley, el Pleno de la Corte Suprema procede a resolver la acción de amparo propuesta, previas las siguientes consideraciones.

Mediante Sentencia PJ-4 de 28 de enero de 1992, la Junta de Conciliación y Decisión No. 4 declaró injustificado el despido de Dania M. Castro de Caballero, y condenó a Salón de Belleza Paula y/o Paula Pérez a pagarle a la trabajadora la indemnización de 31 semanas por un total de B/.3,221.70, más los salarios caídos que van desde el momento del despido hasta la ejecutoria de la sentencia, y fijó las costas en un 10% del total de la condena.

La parte demandada apeló de esta decisión y el Tribunal Superior de Trabajo reformó la sentencia apelada, en el sentido de que los salarios caídos corren desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación, confirmándola en todo lo demás, y fijando las costas en el 15% del total de la condena de ambas instancias.

Con referencia a la prescripción alegada por el amparista, el Pleno de la Corte estima que no le asiste razón, ya que de acuerdo a las constancias procesales la demanda fue presentada, contra la empleadora que fue condenada, el 27 de septiembre de 1990, un mes y doce días después del despido, por lo que no había prescrito el derecho de la demandante para reclamar la indemnización por despido injustificado y el pago de los salarios caídos, costas, gastos e intereses, ya que según el artículo 221 del Código de Trabajo subrogado por el artículo 5 de la Ley 8 de 1981, tenía un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la separación para ejercer este derecho.

El ordinal 7 del artículo 12 del Código de Trabajo señala que la prescripción de la acción se interrumpe por el reconocimiento de la obligación, el reclamo extrajudicial o en la vía administrativa, **y por la sola presentación de la demanda**.

Es mediante el simple ejercicio de la acción, mediante la presentación de la demanda que se interrumpe la prescripción de la acción. El jurista Jorge Fábrega Ponce en su obra Derecho Procesal de Trabajo (Individual y Colectivo), expone que "si la demanda es rechazada por defectos formales -aunque sea por incompetencia del Juez- la interrupción opera, en vista de que se ejercitó la pretensión". Continúa diciendo este autor que "el efecto de la interrupción es que se borra el tiempo transcurrido. El plazo se reinicia inmediatamente **-salvo el caso de la presentación de la demanda, que dura la interrupción mientras se substancia el proceso**" (Ob. Cit., pág. 495-496). (Acentúa el Pleno)

De manera que en el presente caso el término de la prescripción se interrumpió con la presentación de la demanda el 27 de septiembre de 1990, y dicho término no empezó a correr nuevamente como lo indica el amparista, porque se estaba substanciando el proceso laboral, el cual terminó con el fallo de segunda instancia.

Por lo expuesto, debe desestimarse el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución Nacional por el fallo de primera instancia.

Además, como la sentencia de primera instancia, en la cual se desestimó la excepción de prescripción fue dictada por la Junta de Conciliación y Decisión No. 4 de Panamá, contra dicha autoridad debió promoverse la acción de amparo y no contra la autoridad judicial que confirmó el fallo.

Con referencia al cargo que le hace el amparista a la orden de pago de los salarios caídos "desde la fecha del despido hasta la interposición del recurso de apelación", orden dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, el Pleno de la Corte debe señalar que dicha orden se expide con fundamento en lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 218 del Código de Trabajo. Si bien el tercer inciso de la referida norma señala que las Juntas de Conciliación y Decisión deberán fallar en término de tres (3) meses, a partir de la presentación de la demanda, esa norma no indica que en el caso de que se expida el fallo

después de vencido dicho término sólo se pagará los salarios vencidos por el término de 3 meses.

Por tanto, debe rechazarse el cargo de violación del artículo 32 de la Constitución Nacional por el fallo impugnado, dictado en segunda instancia, y en consecuencia, debe denegarse la acción de amparo promovida.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado Carlos Alberto Jaime De Freitas en representación de Paula Pérez Domínguez, contra la orden de hacer contenida en la sentencia de 14 de octubre de 1993 dictada por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR CANDELARIO HERNÁNDEZ AGUILAR EN CONTRA DE LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. (APELACIÓN) MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Contra la resolución de 20 de octubre de 1993, expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que "**DENIEGA** el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el DR. JORGE CHEN FERNÁNDEZ contra la Orden de Hacer expedida por la Juez Séptima del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, y contenida en el Auto de 5 de octubre de 1992", se presentó recurso de apelación , que al ser concedido en efecto suspensivo, motivó su ingreso al Pleno de esta máxima Corporación de Justicia.

La orden atacada mediante la acción constitucional impetrada aparece contenida, según el accionante, en la resolución de 5 de octubre de 1992, que abre causa criminal contra CANDELARIO HERNÁNDEZ AGUILAR (amparista), por el delito de violación carnal tipificado en el Capítulo I, Título VI, Libro II del Código Penal. Por lo que, en este caso se trata de un auto de proceder o de llamamiento a juicio dictado en un proceso penal de competencia de los tribunales de la jurisdicción penal.

Así las cosas, el examen de la actuación emanada como antecedente por la autoridad penal demandada, revela lo que el Primer Tribunal Superior, en este caso, sostiene en la sentencia apelada cuando dice:

> "...
> El Segundo Tribunal Superior, al conocer el negocio penal, en virtud de la apelación interpuesta contra la sentencia condenatoria por el delito de violación carnal agradada (f. 147), observó que existía en ese proceso la causal de nulidad recogida en el numeral 4 del artículo 2297 del Código Judicial, en consecuencia, decretó la nulidad de lo actuado a partir del Auto de Llamamiento a Juicio, en vista de que se incurrió en un error en la denominación genérica del delito; evidentemente, porque fue llamado a responder por rapto y fue condenado por violación carnal agradada.
>
> Partiendo de lo anterior, tenemos que el Juez de la causa se ajustó al cumplimiento de lo ordenado por el Superior; es decir, llamar a juicio al señor HERNÁNDEZ AGUILAR por el delito genérico de violación carnal, sin que con ello se haya vulnerado el principio del doble juzgamiento, puesto que el auto de proceder anulado lo llamó a responder por rapto, es decir, otro tipo penal distinto al que evidencian las sumarias levantadas en este proceso.
>
> No resulta entonces, que el Auto de Llamamiento a Juicio, dictado por la Juez Séptima del Circuito Penal, violente el artículo 1969 del Código Judicial ya que precisamente, la labor agradada del Segundo Tribunal Superior (art. 2301 C.J.) evitó, al decretar la nulidad de lo actuado, que la Sentencia fuera incongruente con los cargos formulados en el auto de proceder.
> ...
> La actuación del Segundo Tribunal Superior, en reponer el curso normal del proceso fue procedente, ya que está demostrado que la Sentencia condenatoria, que fue declarada nula, no responde a los cargos formulados en el auto de Llamamiento a Juicio por Rapto, por lo que se conviene en aceptar que era indispensable cumplir con el requisito que señala el artículo 2412 del Código Judicial. ...

El apelante sostiene que la posición del a-quo, antes transcrita, carece de fundamento. Que se proyecta a persuadir que la orden de hacer no infringe la prohibición

constitucional consagrada en el artículo 32, de juzgar a una persona más de una vez por la misma causa penal policiva o disciplinaria.

En ese sentido, expresa que este caso, el sindicado "ha sido llamado a juicio dos veces en el mismo proceso", al haber la juzgadora abierto causa criminal contra el acusado mediante auto calendado el 10 de agosto de 1988 y posteriormente la misma funcionaria, mediante auto de 5 de octubre de 1992 "volvió a abrir causa criminal contra nuestro representado".

Alega, que en base a los artículos 1969 del Código Judicial y 2 del Código Penal, ese doble juzgamiento no puede prosperar aunque se modifique la calificación del delito, como ocurrió en este caso.

Por tanto, el recurrente reitera su aseveración de que se ha violado el artículo 32 de nuestra Carta Política y solicita se revoque la orden de hacer impugnada.

Ante las argumentaciones de la parte apelante, el Pleno de la Corte considera que no le asiste la razón y comparte el criterio y derecho que externados por el a-quo para no conceder el Amparo.

Es evidente que la orden de hacer impugnada, consistente en abrir causa criminal contra sindicado Hernández por el delito genérico de violación carnal, no conculca sus derechos y garantías de un debido proceso, pues la sentencia inicialmente dictada adolecía de un vicio de nulidad, ya que la misma no sancionaba al procesado en base a las disposiciones que fundamentaron su enjuiciamiento.

Así el artículo 2421 del Código Judicial claramente establece que la "sentencia no podrá recaer sino sobre los cargos por los que se ha declarado con lugar el seguimiento de la causa".

Cómo se desprende en auto, se llamó a juicio por un tipo penal distinto al consagrado en las sumarias levantadas en el proceso. Es decir, por el delito de RAPTO contenido en el Capítulo II, Título IV, Libro II del Código Penal. Cuando la denuncia presentada fue por el delito de violación carnal, en base al cual y por el cual se levantaron las sumarias y se dictó sentencia condenatoria, establecido en el Capítulo I, del mismo Título y Libro del Código Penal.

Por tanto, efectivamente, dicho supuesto se encuentra enumerado entre los contenido en el artículo 2297 del Código Judicial, como causal de nulidad en los procesos penales. Específicamente en el numeral 4 que expresa: "Haberse incurrido en error relativo a la denominación genérica del delito, a la época y lugar en que se cometió o con respecto a la persona responsable o del ofendido" (Subrayado es nuestro).

A juicio del Pleno no se ha violado la garantía fundamental del debido proceso, sino que por el contrario, es evidente que el procedimiento se llevó a cabo de la manera en que lo prescribe la ley. Por ello procede confirmar la resolución apelada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución Apelada, de fecha 20 de octubre de 1993, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA dentro del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por CANDELARIO HERNÁNDEZ AGUILAR contra LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO RAFAEL E. ROBINSON V., EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MANUEL GILBERTO VENCE PASTOR Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado RAFAEL E. ROBINSON V., actuando en su calidad de apoderado judicial de MANUEL GILBERTO VENCE PASTOR, ha presentado amparo de garantías constitucionales con el propósito que se revoque la orden de no hacer, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, contenida en la resolución de segunda instancia, de 23 de septiembre de 1993, que consiste en declarar inadmisible la acusación particular presentada contra el señor RAMÓN ABDIEL CABEZA S. por el supuesto delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes y derechos de los servidores públicos.

Sostiene el amparista que el Jefe de Personal del Hospital Santo Tomás, a quien pretende acusar penalmente por el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, ha infringido la ley penal al negarle copia autenticada de

"la acción de personal" del 1 de abril de 1992 sobre su destitución injusta, por lo que la copia de la solicitud que se le hiciera a ese funcionario constituye la prueba sumaria exigida para acusarlo penalmente. Pretende además que la exigencia de presentar la prueba quedaba convalidada con aducir las pruebas testimoniales en su libelo acusatorio.

Al admitir la acción de amparo de garantías se corrió el traslado al Magistrado Sustanciador del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. En el informe el magistrado señala a la Corte que el artículo 2471 del Código Judicial establece como requisito para la acusación contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, el acompañamiento de la prueba sumaria de su relato, lo que no hizo el presunto acusador. En la parte pertinente expresa:

> "B. La excerta legal citada define como prueba sumaria cualquier medio probatorio que acredite el hecho punible atribuido. En el negocio bajo examen el delito al cual hace referencia el libelo acusatorio es el de infracción de los deberes de servidores públicos y no fue acompañada la prueba respectiva, la parte acusadora se concreta a aducir pruebas testimoniales, pero la norma no se refiere a que debe aducirse, es necesario acompañar la prueba."

Por último, al reiterar que la decisión adoptada por el tribunal reúne todas las condiciones y exigencias procesales, observa que ese auto tenía el acceso a la Sala Segunda mediante el recurso de casación, que el demandado no formuló.

Considera el Pleno, antes de adentrarse al meollo del problema, importante dejar claro sí, tal como lo señala el Tribunal Superior, la resolución impugnada podía ser o no objeto del recurso de casación.

El artículo 2435 del Código Judicial expresa que son recurribles en casación los autos dictados en materia penal "Sí rechazan una acusación o denuncia por delito público o privado, cuando se haya quebrantado alguna ley expresa al declarar que el hecho acusado o denunciado no constituye delito o que el acusador o denunciante no tiene facultad para acusar o denunciar, por su calidad o circunstancias o por las de la persona acusada o denunciada".

El auto en donde consta la orden que se impugna, en su parte expositiva indica que cuando se presenta un libelo acusatorio contra un servidor público por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, y no se acompaña la prueba sumaria del delito imputado, debe declararse inadmisible "... porque no podrá iniciarse el proceso, pues ese es un requisito de procedibilidad, el cual significa, en palabras elementales, una formalidad que debe cumplir el acusador, porque de lo contrario, no se inicia el proceso y ello obliga al tribunal competente evaluar la prueba para determinar si, en efecto, es demostrativa de que el acusado está vinculado a un hecho punible cuya existencia queda demostrada". En otras palabras, la carencia de la prueba sumaria sirve de fundamento para declarar inadmisible la acusación lo que implica que para el tribunal no se ha demostrado la existencia del hecho punible a fin de dar inicio al proceso. En consecuencia debe concluirse que efectivamente la resolución de 23 de septiembre de 1993, admitía el recurso de casación, el cual debió usar la parte afectada al no compartir el criterio del tribunal.

El numeral 2 del artículo 2606 del Código Judicial textualmente expresa que contra una resolución judicial "sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate."

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado RAFAEL E. ROBINSON V., en representación del señor MANUEL GILBERTO VENCE PASTOR y en contra de la orden de no hacer dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROJOMA, S. A. EN CONTRA DEL DIRECTOR PROVINCIAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICAS Y ELECTRIFICACIÓN (I.R.H.E.), APELACIÓN, DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN DAVID, PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ PIMENTEL, en su condición de apoderado judicial de la persona jurídica conocida como ROJOMA, S. A., promovió amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de no hacer emitida por el Gerente Regional del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de la provincia de Chiriquí, que consiste en negar la conexión del servicio de energía eléctrica a un establecimiento comercial de su propiedad. Para probar la orden verbal, acompañó la Escritura Pública N°770, por la cual se hace un acta notarial en donde consta que efectivamente, en presencia del Notario Público Segundo del Circuito de Chiriquí, por órdenes de la Gerencia, no se podía instalar dicha conexión hasta tanto no se presentara el permiso de ocupación expedido por el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales de David. En esa acta se hizo constar los documentos que el peticionario había presentado al solicitar la prestación del servicio eléctrico.

Admitida la acción de amparo de garantías constitucionales por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, se le corrió traslado al Ingeniero ROGER CERRUD, quien oportunamente rindió el informe correspondiente al Magistrado Sustanciador.

El tribunal de primera instancia decidió el recurso denegando el amparo. Al referirse a la violación que atribuye el amparista a los artículos 41 y 44 de la Constitución Política de la República, el tribunal expresa que la violación de dichas normas no se ha dado, por cuanto que el funcionario demandado, al no permitir que se realice la conexión del fluido eléctrico solicitado, lo hace con fundamento a la falta de la expedición del permiso de ocupación del Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales de David. Entiende que la certificación que acompañó el demandante y que fue expedida por el Jefe del Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales de David, no reúne las condiciones indispensables para la instalación del servicio de energía eléctrica. El agravio, según ese tribunal, lo produce el funcionario municipal y no el demandado, así lo expone:

> "...
> Es claro que en el caso bajo estudio y como lo atesta el documento legible a foja 40 la autoridad competente no ha emitido el permiso para la ocupación de la obra construida sobre la finca ya mencionada. La razón para esto y así debe exponerlo el tribunal resulta ciertamente inexplicable si se parte de la premisa de que los elementos consignados en la certificación legible a foja 13 son precisamente los que debe tomar en cuenta el funcionario encargado para proceder con la emisión del permiso requerido. Esta conducta por parte del funcionario municipal competente es la que origina a juicio del tribunal, el agravio que pretende el amparista solventar por la vía de la acción extraordinaria intentada pero que no resulta atribuible al funcionario que aparece en este negocio como demandado. ...".

El apelante, al sustentar el recurso, manifiesta, entre otras cosas, que el documento aportado reúne las condiciones exigidas por el artículo 8° del Acuerdo N°20 de 3 de septiembre de 1980 que posteriormente fue adicionado mediante Acuerdo N°11 de 25 de mayo de 1983. Agrega que una correcta interpretación de esta disposición determina que el certificado o permiso de ocupación que ha exigido el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) no es indispensable para la instalación del servicio de energía eléctrica, ya que corresponde a la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, con sede en David, extender los permisos para las instalaciones de medidor, una vez que el interesado le presente el certificado o permiso de ocupación expedido por el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales.

Para resolver el Pleno reproduce la disposición municipal que ha servido de fundamento al funcionario demandado para abstenerse de realizar la instalación solicitada:

> "ARTICULO OCTAVO: Toda construcción, reconstrucción o reparación deberá obtener un certificado o permiso de ocupación que será otorgado por el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales luego de una inspección ocular a la propiedad después de finalizada la obra.
>
> PARÁGRAFO: La Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí con sede en David, no extenderá el permiso para las instalaciones de medidores para nuevas construcciones, reconstrucciones o reparaciones, mientras el interesado no presente el Certificado o Permiso de Ocupación del Departamento de Urbanismo y Obras Municipales ...".

De la transcripción anterior salta a la vista que la norma contenida en el acto municipal exige la obtención para toda construcción, reconstrucción o reparación de las edificaciones dentro del distrito, de un certificado o permiso de ocupación que va a expedir el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales, después que haya finalizado la obra. En dicha disposición se habla de certificado o permiso de ocupación indistintamente, esto es, la exigencia de uno u otro: el certificado o el permiso de ocupación. Nótese que ambos están separados por la conjunción disyuntiva "o" que denota diferencia, separación o alternativa entre dos cosas, tal como lo señala el Diccionario de la Real Academia Española.

Por otro lado, en el parágrafo anejo al artículo octavo transcrito, se dispone que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, con sede en David, expedirá el permiso para la instalación de medidores cuando se presente el certificado o permiso de ocupación expedido por el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales. No corresponde, como pretende el Director Regional del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de la provincia del Chiriquí, a esa entidad la exigencia del certificado o permiso de ocupación de la construcción para hacer la instalación sino que a esa entidad le bastará con que la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí extienda el permiso para la instalación de medidores. Ese requisito, tal como

consta en el acta notarial, fue presentado a los funcionarios del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) y ha sido acompañado, además, a este amparo.

Interesante es también señalar que el Jefe del Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales de David, en la certificación que se vio obligado a realizar por mandato del artículo 41 de la Constitución Política de la República y que se ha acompañado, al ser presentada a la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí llenaba los requisitos exigidos por el citado acuerdo municipal, por lo que se expidió el permiso de instalación del medidor que el Director Regional del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) se niega a instalar. Su proceder, al negar la petición hecha por el amparista, limita el uso y disfrute de la propiedad privada garantizado por el artículo 44 de la Carta Fundamental y, como consecuencia, violenta lo dispuesto en los artículos 17 y 18 de la Constitución.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 28 de octubre de 1993, y CONCEDE el amparo de garantías constitucionales y, a su vez, REVOCA la orden de no hacer emitida por el Gerente Regional del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) de la Provincia de Chiriquí que consiste en negar la conexión del servicio de energía eléctrica a la persona jurídica ROJAMA, S. A.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(con salvamento de voto) (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

**SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA**

Disiento de la decisión tomada por el resto de los Honorables Magistrados porque si bien la Oficina de Seguridad del Cuerpo de Bomberos de Chiriquí, con sede en David, dio el 26 de julio de 1993 permiso para la instalación del medidor de energía eléctrica en la construcción de propiedad de la amparista ROJOMA, S. A. (folio 12), consta en autos que el 14 de octubre de 1993 el Departamento de Urbanismo y Obras Municipales certificó que no había otorgado el permiso de ocupación (folio 40) y si esto es así, la autorización para la instalación del medidor no debió expedirse.

Hago esta afirmación, en primer lugar, porque la certificación de terminación de la obra expedida por el Departamento de Urbanismo y Obras Públicas Municipales, que obra en autos a folio 14, fechada el 31 marzo de 1993, no constituye la certificación o permiso de ocupación de la misma, que debe expedirse "luego de una inspección ocular a la propiedad después de finalizada la obra", tal como lo preceptúa el artículo 8 del Acuerdo Municipal No. 20 del 3 de septiembre de 1980, adicionado por el Acuerdo No. 11 de 25 de mayo de 1983, transcrito en la sentencia de segunda instancia. Tan es así, que el Jefe del Departamento Municipal que extendió el certificado de terminación de la obra el 31 de marzo de 1993, certificó varios meses después, el 14 de octubre de 1993 que no había extendido el correspondiente permiso de ocupación. Si a juicio del amparista esta negativa viola algún derecho o garantía constitucional, contra la misma debió promoverse la acción de amparo tal como se afirma en la sentencia de primera instancia.

En segundo lugar, el parágrafo del artículo 8 comentado claramente preceptúa que la Oficina de Seguridad antes mencionada "no extenderá el permiso para las instalaciones de medidores para nuevas construcciones, reconstrucciones o reparaciones, mientras el interesado no presente el Certificado o Permiso de Ocupación del Departamento de Urbanismo y Obras Municipales". Como este certificado o permiso de ocupación no ha sido aún extendido, la Oficina de Seguridad no podía autorizar al IRHE para la instalación del medidor, y el funcionario demandado, con su negativa, no ha violado ningún derecho o garantía constitucional del amparista.

En mérito de lo expuesto, estimo que debió confirmarse la sentencia de primera instancia, mediante la cual se denegó el recurso de amparo, y por ello, respetuosamente, salvo mi voto.

Fecha: ut supra.

(fdo.) MIRTZA ANGELICA FRANCESCHI DE AGUILERA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA LICENCIADA IRASEMA A. TIJERINO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SAMUEL HERNÁNDEZ Y EN CONTRA DEL DIRECTOR GENERAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada IRASEMA A. TIJERINO R., en nombre y representación del señor SAMUEL HERNÁNDEZ, promueve amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de hacer dictada por el Director Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre.

Corresponde establecer si la acción está debidamente formulada y no fuera manifiestamente improcedente, conforme lo pauta el artículo 2611 del Código Judicial, a fin de proceder a su admisibilidad.

Conviene recordar que por mandato expreso del artículo 102 del Código Judicial, todo memorial formulado a la Corte Suprema de Justicia debe ser dirigido al Presidente de la misma, si compete al Pleno, requisito que no ha sido cumplido en el presente escrito.

Por otro lado, se observa que la orden impugnada se refiere a una nota s/n de 7 de septiembre de 1993, y se recurre en acción de amparo de garantías constitucionales cuando han transcurrido más de dos meses de su expedición. El artículo 2606 del Código Judicial prevé que la acción de amparo procede contra un acto que vulnere o lesione derechos y garantías fundamentales consagradas en la Constitución que revistan la forma de hacer o no hacer, cuando por la gravedad que representa requieran de una revocación inmediata.

La naturaleza del caso que nos ocupa, tal como señala el accionante en el hecho sexto, es de carácter típicamente administrativo. Si bien es cierto, el funcionario que expidió la orden, tiene jurisdicción en todo el territorio nacional, no menos cierto es que contra ella caben recursos para agotar la vía gubernativa y recurrir, en caso necesario, a la vía de lo contencioso administrativo. No es la acción de amparo el camino para resolver cuestiones de legalidad.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso que ha presentado la licenciada IRASEMA A. TIJERINO R., en representación del señor SAMUEL HERNÁNDEZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR VIRGILIO QUIÑONES MORALES Y EN CONTRA DEL JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Resolución de 24 de septiembre de 1993, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no acogió la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense PITTY Y ASOCIADOS, en representación del señor **VIRGILIO QUIÑONES**, contra la orden de hacer contenida en la Sentencia de Amparo de Garantías Constitucionales No.62 de 30 de junio de 1993 expedida por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, en primera instancia, mediante la cual se revoca la resolución de 1o. de septiembre de 1992 dictada por el Juez Tercero Municipal de Panamá, Ramo Penal, que ordenó la apertura de causa criminal contra la señora Elida de Rucker como presunta infractora de las disposiciones penales contenidas en el Título I, Capítulo II del Libro II del Código Penal, delito genérico de lesiones personales culposas en perjuicio de Ahron Shech.

Esta decisión fue apelada por el amparista y el negocio ha ingresado a esta superioridad para resolver la alzada.

En la resolución de primera instancia el Primer Tribunal Superior estimó improcedente la acción promovida porque la sentencia impugnada decidió una acción de amparo de garantías constitucionales, y en reiterados fallos de esta Corporación de Justicia se ha advertido que el amparo sobre un amparo previo no puede ser admitido.

El Pleno de esta Corporación estima que la decisión de primera instancia se ajuste a derecho, en primer lugar, porque la sentencia No.62 de 30 de junio de 1993 dictada en primera instancia, por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá era susceptible de recurso de apelación (art.2616, Código Judicial), y al no promoverlo, la parte actora no agotó los medios de impugnación para atacar la decisión proferida, por lo que no se cumple con el requisito exigido en el ordinal 2 del artículo 2606 del Código Judicial para la admisión de la demanda de amparo.

En segundo lugar, en la presente acción de amparo de garantías constitucionales se está atacando una decisión dictada en un proceso constitucional de amparo de garantías, y como lo expresó esta Corporación de Justicia en fallo de 17 de mayo de 1991 dictado en la demanda de inconstitucionalidad promovida por el Consejo Municipal de Los Santos contra varias resoluciones del Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, "en tal circunstancia no le es posible a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de sentencias de

amparo que resuelven controversias constitucionales, porque sería un doble examen sobre la constitucionalidad del caso, ya que el sistema en materia de amparo es difuso y no centralizado o concentrado".

También se expresó este mismo criterio en el fallo de 18 de marzo de 1993, dictado en el amparo de garantías constitucionales promovido por Swiss Bank Corporation (Overseas), S. A. contra el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Por las anteriores consideraciones, el Pleno de esta Corporación estima que la resolución de primera instancia se ajusta a derecho, y debe ser confirmada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 24 de septiembre de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en la acción de amparo promovida por VIRGILIO QUIÑONES contra el Juez Quinto de Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ — (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ — (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA — (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS — (Con Salvamento de Voto)
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAÚL TRUJILLO MIRANDA

Conocida es la influencia del modelo de jurisdicción constitucional, nacida en la Constitución de los Estados Unidos de América de 1787, en los países latinoamericanos. Este sistema, conocido como americano, consiste en otorgar a todos los jueces la facultad para resolver cualquier problema de tipo constitucional que las partes le planteen, o aún de oficio, dentro de un caso concreto, con afección exclusiva a ese negocio. Este sistema se contrapone al principio Kelseniano, conocido como austriaco, en donde la cuestión jurisdiccional sólo compete a un órgano especializado o tribunal constitucional con decisiones que afectan erga omnes.

La Constitución Política de la República establece en su artículo 203, numeral 1, que la guarda de la integridad de la Constitución es atribución exclusiva del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Sus decisiones adquieren la categoría de finales, definitivas y obligatorias. Este concepto de control constitucional se asemeja al sistema austriaco. El constituyente panameño, sin embargo, al establecer el amparo de garantías constitucionales expresó que el mismo se tramitará mediante procedimiento sumario y "... será de competencia de los tribunales de justicia". El legislador al desarrollar esta garantía constitucional del amparo consideró que la expresión utilizada en el artículo 50 de la Constitución, sobre competencia de los tribunales judiciales, se apartaba del principio general del control constitucional consagrado en el artículo 203 mencionado y que, como consecuencia, este precepto otorgaba la facultad a los otros tribunales judiciales para el conocimiento de amparos. Así lo entendió, no sólo durante la vigencia de la actual Constitución sino conforme a las Constituciones anteriores, en donde se reconoció la existencia de esta institución.

La jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia ha sido, tal como expresa la mayoría en el caso subjúdice, de no aceptar demandas relativas a la constitucionalidad de sentencias y amparos. El fundamento de esta jurisprudencia estriba en el hecho que el amparo resuelve una cuestión constitucional por lo que al aceptar una revisión de esa sentencia, se permite el doble examen sobre aspectos constitucionales. En estos casos, según el criterio que ha mantenido la jurisprudencia, debe imperar el principio sobre la decisión final, definitiva y obligatoria dada para las decisiones de la Corte en materia constitucional.

En términos generales tal apreciación debe tener validez. Es necesario evitar en el ámbito judicial las contradicciones jurídicas, como dijera el Presidente del Tribunal Supremo de España "... cuando los Tribunales de Justicia, cualesquiera que sea su grado y el orden jurisdiccional al que pertenezcan, lleguen a soluciones distintas, e incluso enfrentadas, en presencia de presupuestos jurídicos y de hechos sustancialmente iguales". Es derecho fundamental del ser humano obtener igual trato cuando acude ante los tribunales de justicia en procura de la protección de sus derechos e intereses.

En este orden de ideas, sabida es la necesidad del efecto vinculante para que el precedente jurisprudencial tenga el valor indispensable para su aplicación al caso concreto, esto es, que no existan diferencias sustanciales entre ellas. Si las mismas están afectadas por situaciones y hechos que las hacen diferentes, no podrá hablarse de discriminación en la solución al nuevo problema planteado porque es la ausencia de esa identidad lo que determina el aparente alejamiento de la jurisprudencia.

El amparo de garantías constitucionales que el señor VIRGILIO QUIÑONES MORALES ha presentado en contra del Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá no pretende discutir si la orden a que se contrajo el amparo de garantías dictado por ese funcionario, violenta o no las garantías y derechos constitucionales. La protección que solicita QUIÑONES MORALES radica en el hecho que ese juzgado no era competente para conocer del amparo que resolvió. Mantiene como principio básico que se violentó el debido proceso por parte del Juez Quinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial

de Panamá al conocer de algo que no es de su competencia. Son estas las modalidades y circunstancias que determinan la carencia del factor vinculante con las otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la no admisión de amparos contra decisiones adoptadas en otros amparos.

Situaciones como la planteada podrían presentarse y es indispensable pensar en ello. El artículo 2607 del Código Judicial establece cuales son los tribunales competentes en las acciones de amparo. En esta norma se establece como tribunales competentes para conocer de amparos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Jueces de Circuito, en el caso de estos dos últimos deben ser tribunales que conozcan de casos civiles. Se excluye a los jueces municipales.

Siguiendo el criterio jurisprudencial que se pretende mantener, en un futuro pudiera un juez municipal, sin competencia alguna, acoger un amparo de garantías constitucionales y fallarlo. Su decisión, contraria totalmente al debido proceso siguiendo la tesis sostenida en la sentencia, debería mantenerse puesto que, tratándose de un fallo sobre materia constitucional es intocable. La verdad es que el mandato del artículo 203 de la Constitución Política de la República se refiere expresamente a las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y, si bien, en términos generales pudiera aceptarse como buena el planteamiento que las decisiones sobre aspectos constitucionales son inmutables, ello pudiere tener valor respecto a la orden impugnada, pero no en cuanto a los vicios de otro orden, como en el caso en estudio. De lo anterior se desprende que en estos casos, cuando la acción se dirige contra una resolución acusándola de violar el debido proceso, es procedente el amparo.

Todo esto hace que se disienta del respetado criterio de la mayoría de los Honorables Magistrados.

FECHA UT SUPRA.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ CONTRA LA JUEZ PRIMERA DEL CIRCUITO DE HERRERA. APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante Resolución de 11 de noviembre de 1993, el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, DENEGÓ el amparo de garantías constitucionales propuesto por el señor JOSÉ MARÍA RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ contra la orden de hacer contenida en el auto dictado por la señora Juez Primera del Circuito de Herrera, el 7 de julio de 1993, mediante el cual ordenó la venta en pública subasta de la finca No. 9234, inscrita al tomo 1157, folio 270 de la sección de Propiedad, Provincia de Herrera, y fijó la base y fecha del remate.

La decisión fue apelada por el amparista y el negocio ha ingresado a esta Superioridad para resolver la alzada.

Al sustentar el recurso de apelación, la parte recurrente reiteró los hechos de su demanda, manifestando que se ha violado el artículo 32 de la Constitución Política que contiene el principio del debido proceso, ya que en el proceso seguido contra su mandante se ordenó la venta en pública subasta de la finca de su propiedad, sin aportarse la certificación del Registro Público a la que se refiere el artículo 1676 del Código Judicial, y sin cumplirse con las formalidades legales previas a la celebración del remate.

De acuerdo al Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, a fojas 3 del juicio ejecutivo promovido contra José María Rodríguez Rodríguez consta la certificación del Registro Público sobre propiedad, medidas, linderos y restricciones de ley de la finca embargada, y a fojas 12 se acredita su valor catastral, por lo que no se ha incumplido con el artículo 1676 del Código Judicial.

Agrega el Tribunal a-quo que en el artículo 690 en concordancia con el artículo 1720, ambos del Código Judicial, se contempla la interposición de un incidente para dilucidar cuestiones accidentales que surjan en un proceso y requieran decisión especial, el cual debe interponerse tan pronto como el hecho llegue a conocimiento de la parte respectiva, debiendo rechazarse de plano el que se presenta con posterioridad, si consta en el proceso que el hecho llegó a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado otra gestión antes de promoverlo. Indica el Tribunal que en el negocio en estudio, el amparista tuvo conocimiento ab-initio de las irregularidades acusadas, no obstante realizó gestiones posteriores (fs. 31, 35 vta., 37 vta. y 46 vta.) que convalidaron su actuación, por lo que no se ha producido la violación del artículo 32 de la Constitución Nacional.

Para resolver la alzada interpuesta el Pleno de esta corporación estima que, en cuanto a la no aportación del certificado de Hacienda exigido por el artículo 1676 citado, el valor catastral del inmueble gravado, debe advertirse que dicha norma es aplicable a los procesos ejecutivos comunes, y no a los ejecutivos hipotecarios, como el examinado.

De acuerdo a las constancias procesales, la ejecución en estudio ha sido promovida en virtud de la Escritura Pública No. 1005 de 22 de agosto de 1986 de la Notaría Pública del Circuito de Herrera, que contiene el contrato mediante el cual el Banco Interoceánico de Panamá, S. A. concedió al ejecutado un préstamo garantizado con segunda hipoteca sobre la finca No. 9234, inscrita al folio 270, tomo 1157 de la sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, Registro Público, de propiedad del ejecutado. En la cláusula décimo novena de dicha escritura el deudor renunció al protesto, al domicilio y a los trámites del juicio ejecutivo hipotecario, y convino en que en caso de remate, sirviera de base para el mismo la suma por la cual el Banco presentara la demanda.

Conforme lo preceptuado en los artículos 1758 y 1768 del Código Judicial para promover una ejecución por virtud de título ejecutivo hipotecario, en la que se persiga el bien hipotecado, es necesario que con la demanda ejecutiva se acompañe el instrumento en el cual conste el gravamen hipotecario y una certificación del Registro Público en la cual conste que la hipoteca está vigente, si hay o no otros gravámenes sobre el mismo bien, y quién es el actual propietario del inmueble; y en estos procesos, sí en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos antes mencionados, ordenará la venta del inmueble hipotecado, con la notificación del dueño actual del bien hipotecado, y sin permitir que se propongan incidentes, ni excepciones distintas de las de pago y prescripción.

En el proceso ejecutivo hipotecario en referencia se cumplieron los requisitos previstos en el artículo 1758 del Código Judicial, ya que de fojas 3 a 11 obra la escritura contentiva del contrato de préstamo con garantía hipotecaria a favor del Banco Interoceánico de Panamá, S. A., que sirvió de recaudo ejecutivo, y el certificado del Registro Público en el cual consta que la referida hipoteca está vigente, que existe un primer gravamen a favor de la Caja de Ahorros y que el propietario del inmueble es el ejecutado José María Rodríguez Rodríguez. Esta certificación estaba vigente al momento de su presentación en el Tribunal del conocimiento. Y además, el remate del inmueble hipotecado se ordenó en la forma establecida en el artículo 1768 del Código Judicial.

El artículo 1772 del Código Judicial preceptúa que los derechos que tengan los ejecutados o el tercero propietario con título inscrito, contra el acreedor por causa de la venta sin trámite de proceso ejecutivo, deben hacerlos valer mediante proceso sumario.

Observa el Pleno de la Corte que en este proceso debe cumplirse con la notificación que ordena del artículo 1766 del Código Judicial ya que, según consta a fojas 3 del cuaderno principal, el bien que se persigue está gravado con primera hipoteca y anticresis a favor de la Caja de Ahorros.

Es evidente, por tanto, que en el negocio en estudio no hay violación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política, y que el amparo promovido por el apoderado judicial del ejecutado es una acción dilatoria con la que está en desacuerdo esta Corporación de Justicia, ya que constituye una actuación procesal desleal, que debe rechazarse y sancionarse al tenor de lo dispuesto en los artículos 462 y 199 ordinal 15 del Código Judicial.

Por tanto, el Pleno de esta Corporación considera que debe confirmarse, aunque por motivos distintos a los expuestos por el Tribunal de primera instancia, la sentencia de amparo proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y amonestarse al apoderado judicial del amparista.

Por todo lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 11 de noviembre de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que deniega el amparo de garantías constitucionales propuesto por el señor José María Rodríguez Rodríguez contra la señora Juez Primera del Circuito de Herrera; y **AMONESTA** al apoderado judicial del amparista, licenciado Efraín Erick Angulo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACION DE IMPEDIMENTO DEL MAGISTRADO ARTURO HOYOS EN AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR MELÉNDEZ-CRUZ Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DE EDILDA M. DE ROBINSON, REPRESENTANTE DE SOC. IND. DE CALZADOS PANAMÁ, S. A., CONTRA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR MAGISTRADO ARTURO HOYOS. (PROC. CONT. ADMVO.,DE PLENA JURISD. CALVIN KLEIN INDUSTRIES, INC -VS- MAGISTRADO ARTURO HOYOS). MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Arturo Hoyos ha formulado solicitud para que se le separe del conocimiento de acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por la firma forense Meléndez-Cruz y Asociados contra orden de no hacer que fuera dictada por él dentro

de proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por Calvin Klein Industries, Inc. contra Industria del Calzado, S. A.

La orden atacada corresponde a resolución dictada en Sala Unitaria el 31 de mayo de 1992, mediante la cual el magistrado Hoyos admite la demanda contencioso administrativa en referencia.

Como fundamento legal de su solicitud, el petente invoca el numeral 2 del artículo 2562 del código Judicial, el cual prevé el impedimento por razón de haber dictado el funcionario el auto que se acusa o intervenido en su preparación o expedición.

Como quiera que se encuentra debidamente fundada la solicitud formulada, el PLENO DE LA CORTE, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA IMPEDIDO AL MAGISTRADO ARTURO HOYOS para conocer del proceso de amparo de garantías constitucionales a que se refiere la solicitud de impedimento.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL SEÑOR JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL, POR MEDIO DE APODERADO LEGAL Y EN CONTRA DE LA JUEZ PRIMERA DEL CIRCUITO DE HERRERA, (DISTRIBUIDORA CINCUENTENARIO, S. A. EN CONTRA DE JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL Y FERNANDA SOLÍS DE VEGA). MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JAVIER GONZÁLEZ SOLÍS, actuando en su condición de apoderado judicial del señor **JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL**, promovió ante los Magistrados del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, Amparo de Garantías Constitucionales contra el auto de fecha de 23 de septiembre de 1993, en el cual se ordena la venta en pública subasta de la finca número 9403, inscrita al folio 178, del Tomo 1185, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Herrera, dentro del juicio ejecutivo propuesto por DISTRIBUIDORA CINCUENTENARIO, S. A., contra JUAN ANTONIO VILLARREAL Y FERNANDA SOLÍS DE VEGA. (fs. 2-5) El Tribunal de primera instancia declaró no viable el amparo impetrado mediante sentencia de 29 de octubre de 1993, contra la cual el amparista interpuso el recurso de apelación que el Pleno de esta Corporación de Justicia debe resolver.

En el fallo apelado el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial consideró, que si bien la acción de amparo de garantías fundamentales presentada reúne los requisitos formales que consagran los artículos 2606, 2607, 2608 y 2610 del Código Judicial, en cuanto al poder para la representación, la competencia, la identificación del servidor público demandado, los hechos en que se fundamenta la pretensión y las garantías fundamentales presuntamente vulneradas, el amparista no agotó los remedios legales procedentes contra la **orden de hacer** contenida en la resolución judicial de 23 de septiembre de 1993. Esta decisión fue notificada personalmente al apoderado legal de la parte demandada (fs. 122 vta. de los antecedentes), quien tenía el derecho de debatir las cuestiones a que la decisión se refiere mediante un incidente, conforme al segundo párrafo del Artículo 688, o apelar la resolución al tenor del Artículo 1116, numeral 5o., ambos del Código Judicial. Como el agotamiento de los recursos legales contra las decisiones judiciales que se impugnen por la vía de amparo, es un requisito señalado en el artículo 2606, párrafo 4 ordinal 2 ordinal del Código Judicial, la acción de amparo fue declarada no viable.

El licenciado EFRAÍN ERIC ANGULO, actuando en representación del amparista **JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL**, sustentó el recurso de apelación interpuesto en los siguientes términos:

> "... estimamos que los hechos especificados en el amparo, fácilmente comprobables con la sola lectura del proceso original, legalmente imposibilitan que se efectúe el remate decretado y de hacerlo, se estaría conculcando el artículo 32 de la Constitución Nacional, que es la norma constitucional que se estima infringida en la presente demanda de amparo de garantías constitucionales.
>
> De otro modo, estimamos que si en el proceso ejecutivo no se hizo uso, en su momento de los recursos ordinarios a que se alude en la sentencia apelada, ello no puede servir de fundamento para que se decrete no viable el presente amparo, por cuanto que estimamos que lo fundamental es determinar si al procederse al remate de la finca 9403 se está violentando en contra de mi mandante la norma constitucional citada en la interposición del amparo." (fs. 21)

Tal como lo afirma el Tribunal de primera instancia, el artículo 2606 del Código Judicial establece que la acción de amparo de garantías constitucionales procede contra

resoluciones judiciales y exige como requisito para su admisión **que se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.** Este requisito no fue cumplido por la parte actora y el mismo resulta esencial para la admisión de la acción por disposición legal.

Y esto es así, porque la acción de amparo tiene como fin la revocación inmediata de órdenes de hacer o no hacer que violen derechos y garantías constitucionales, cuando ello es necesario por la gravedad e inminencia del daño que causan.

Cuando las violaciones de derechos y garantías se dan en los procesos, la revocación de tales actos debe darse mediante los recursos ordinarios y si la reparación no se obtiene por estos medios, puede entonces pedirse a través del recurso extraordinario de amparo.

Además de los remedios contra la resolución impugnada a que se refiere el Tribunal a quo, conforme el artículo 727, ordinal 2 del Código Judicial, si el remate se celebra sin cumplir los requisitos ordenados por la ley o estando suspendido el proceso por ministerio de la ley, se produce su nulidad, la cual puede alegarse **antes de la ejecutoria del auto que aprueba el remate.**

No le asiste por tanto, razón al amparista cuando afirma que lo fundamental en el caso en examen es determinar, mediante la presente acción de amparo, si al celebrarse el remate se está violando el debido proceso, porque de existir esa violación es reparable mediante los remedios legales ordinarios.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, estima que debe confirmarse la Sentencia de primera instancia.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 29 de octubre de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por JUAN ANTONIO VEGA VILLARREAL, mediante apoderado legal, en contra de la orden de hacer contenida en el auto de 23 de septiembre de 1993, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO LUIS CEDEÑO MEREL EN REPRESENTACIÓN DEL INGENIERO HÉCTOR M. MONTEMAYOR A., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ Y EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La **UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ**, mediante apoderado especial, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer expedida por la Contraloría General de la República, consistente en no refrendar las planillas emitidas por esa entidad docente en reconocimiento y cumplimiento de la escala salarial aprobada por los órganos de gobierno interno y las normas de ejecución presupuestaria.

Sostiene el amparista que se trata de un caso de consideración especial y alta gravedad por la inminencia del daño que representa, por razón de que faltan pocos días hábiles para finalizar el presente año y ello significa que las partidas presupuestarias asignadas para respaldar la escala salarial se declararían de vigencia expirada, lo que tornaría ilusorias las aspiraciones de mejoras económicas del personal en servicio.

La orden de no hacer que se impugna consta en la nota D.C.1714-93, calendada el 28 de julio de 1993, procedente del despacho del Señor Contralor General de la República, en la que sostiene que su responsabilidad en el manejo de las finanzas públicas lo conducen a impedir el incremento del gasto público ya sea que provenga del aumento de salarios o de cualesquiera otras erogaciones.

El accionante en apoyo al amparo propuesto se refiere a las 47 resoluciones emitidas por el Departamento de personal de la Universidad Tecnológica, en las que se disponen los ajustes, reclasificaciones y nombramientos del personal, todas ellas aprobadas por el Ministerio de Planificación y Política Económica y respaldadas con la respectiva partida presupuestaria dentro de la vigencia fiscal correspondiente al presente año. También expresa el amparista que ante la renuencia de refrendo de las planillas contentivas de mejoras de la escala salarial del personal,fue presentada una acción prejudicial sobre la viabilidad y valor legal de los actos administrativos ejecutados en cumplimiento de la Ley, pero hasta el presente no se ha producido la decisión final, dado el procedimiento de ley a que se someten estos casos.

Admitida la acción de amparo de garantías constitucionales, se le puso en conocimiento a la autoridad acusada, quien en el término de ley, remitió la nota N° 7360-Leg- de 17 de diciembre de 1993 (fs. 250-251) en la que expresa que la Contraloría General de la República no se ha negado a refrendar y pagar las planillas correspondientes a los salarios del personal en servicio en la Universidad Tecnológica de Panamá, sino que ha "tomado las medidas de prudencia sobre las erogaciones adicionales en las instituciones públicas en general y en especial en el aumento de salarios, por razón de orden económico". Agrega en su informe, que esta medida de carácter fiscal obedece al hecho de que no se recibieron los aportes externos de las IFIS por el orden de 238 millones de balboas, lo que produjo un desequilibrio en el presupuesto aprobado, obligando a la reducción del gasto público, incluyendo los aumentos de salarios y los ascensos.

Para resolver el fondo de esta acción, cabe considerar si la orden de no hacer censurada y que data de julio de este año, reviste la inminencia del daño o lesión directa a los derechos y garantías que nuestra Carta Fundamental consagra a favor de los ciudadanos, especialmente cuando la parte afectada ha recurrido a otras vías para la revisión de la situación planteada.

En fallos recientes, esta Corporación Judicial al resolver pretensiones de la misma naturaleza que la que nos ocupa, interpuestas por al Universidad de Panamá, frente a la negativa de refrendo por la Contraloría de la República de las planillas contentivas de los aumentos salariales, se sostuvo el criterio de que en materia fiscal rigen normas especiales que le imponen a la Contraloría la adopción de otras medidas y recursos como lo es el de pedir a la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto. También deben considerarse las previsiones de la ley presupuestaria, en este caso, del Decreto de Gabinete N°1 de 2 de enero de 1993 que contiene pautas a seguir cuando surjan dificultades económicas serias, que registren sensibles disminuciones en los ingresos de caja (véase artículos 96 y concordantes de la excerta citada).

La Contraloría General de la República bajo la dirección del profesor Carles, al igual que en la actualidad, a cargo del licenciado Chen Barría, ha aducido la necesidad de moderar y reducir el gasto público para mantener el equilibrio presupuestario. Ambos Contralores Generales han coincidido en justificar la omisión de refrendo de toda planilla que contenga aumentos, ascensos o reconocimiento de sobresueldos del sector público, alegando que no basta la autorización del Ministerio de Planificación y Política Económica, ni el respaldo de la partida asignada en el presupuesto, ya que los ingresos de caja han sido sensiblemente afectados ante la falta de apoyo externo proveniente de las IFIS, en suma superior a los doscientos treinta y ocho millones de balboas, sumas que se incluyeron en el presupuesto de 1993, pero que no se materializó su ingreso en el curso del año fiscal.

Lo que llama la atención del Pleno es la reiterada omisión de la institución oficial de control fiscal en ajustarse a los trámites, métodos y recursos previstos en la ley presupuestaria y en la de la Contraloría (ley 32 de 1984), provocando el pronunciamiento de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia o adoptando, con la autorización del Consejo de Gabinete, las reformas de los renglones presupuestarios que no alcanzaron los ingresos programados, coordinando de esta manera las acciones requeridas en la orientación de los recursos disponibles, el uso racional de las partidas según las necesidades de cada sector y la asistencia técnica oportuna para el manejo científico del presupuesto estatal y con ello la buena marcha de la Administración Pública, sin los traumas de las huelgas y presiones del sector público, registradas durante este año, exigiendo el pago de sus salarios, aumentos, ascensos y sobresueldos apoyados en las partidas presupuestarias asignadas dentro de la vigencia fiscal.

Se indican como infringidas las normas constitucionales contenidas en los artículos 17 y 99 de la Constitución Política y se alude además el desarrollo normativo que del artículo 17 de la Carta Fundamental hace el artículo 752 del Código Administrativo.

Con relación al artículo 17, su carácter general y programático, no permite advertir en la orden de no hacer impugnada una lesión a su contexto, ya que en esa norma no aparecen garantías o derechos individuales o sociales de rango constitucional.

Respecto al artículo 99, que consagra la autonomía de la Universidad Oficial de la República, cabe tomar en consideración el texto del artículo 1° de la ley 17 de 1984, el cual le confiere a la Universidad Tecnológica de Panamá, carácter oficial y le hace extensivos todas las garantías y principios contenidos en la Constitución referentes al patrimonio, personal y a la dirección académica, que son válidos y aplicables a la Universidad de Panamá.

La negación del refrendo de las planillas que reconocen los aumentos del personal en servicio en esa institución docente, sin ajustarse a los trámites de controles fiscales que la Constitución y la ley le asigna claramente a la Contraloría General de la República, resulta violatoria de la autonomía económica de la Universidad Tecnológica.

En el presente caso el amparista ajustó la elaboración de las planillas al manejo de los recursos asignados en el Presupuesto y a los trámites y exigencias que la ley prevé, mientras que la Contraloría al momento de negar el refrendo a dichas planillas de aumentos de salarios, omitió seguir el procedimiento que las normas fiscales señalan en estos casos. Por razones de oportunidad, pudiera considerarse que a estas alturas cronológicas sólo se está luchando por la vigencia de un principio, pues los recursos disponibles se agotan en esta etapa final del año fiscal, no obstante, el derecho adquirido trasciende y puede ser objeto de reconocimiento una vez se superen las restricciones o limitaciones en los activos de caja que se argumentan.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales promovido por la UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ y en consecuencia revoca la orden de no hacer contenida en la nota N° D.C. 1714-93 suscrita por el Contralor General de la República, calendada el 28 de julio de 1993.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO VICENTE GARIBALDI CAMACHO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L., (ANTIGUA COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITOS ANCÓN), CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES EL SEÑOR MARIO L. SMALL Y EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado VICENTE GARIBALDI CAMACHO, en su condición de Apoderado General para pleitos de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (antigua Cooperativa de Ahorros y Créditos Ancón), interpuso demanda de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden de hacer contenida en la resolución judicial de 31 de mayo 1993, dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA dentro del proceso ordinario que ANTONIO LATIFF le sigue a la entidad accionante.

Por cumplidas las reglas de reparto el despacho sustanciador dispuso admitir la demanda de amparo por encontrarla debidamente formulada de conformidad de la Ley, y a su vez solicitó de la autoridad judicial demandada el envío de la actuación o, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso.

Al cumplir el Primer Tribunal Superior de Justicia con el primero de los requerimientos ordenados, el negocio de amparo constitucional de que conoce el Pleno de la Corte encuentra en estado de decidir, por lo que a ello se procede previas las consideraciones siguientes:

**LA ORDEN IMPUGNADA SEGÚN EL RECURSO**

La demanda de amparo constitucional en estudio, según el amparista, está enderezada en contra de la supuesta orden de hacer contenida en la resolución de 31 de mayo de 1993, que en su parte resolutiva dispone:

> "...
> ORDENA la práctica de una inspección a través de la diligencia exhibitoria con asocio de peritos a los archivos, registros y libros contables de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO ANCÓN, R. L.) a fin de determinar los siguientes puntos:
>
> 1. Si el señor ANTONIO LATIFF mantiene fondos en la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO ANCÓN, R. L.) y en caso afirmativo a cuánto ascienden los mismos; y,
>
> 2. De existir fondos a nombre del señor ANTONIO LATIFF SE DETERMINE si sobre los mismos pesa algún gravamen que impida su devolución.
>
> Designen las partes su perito. ...".

La orden acusada se refiere por tanto a una resolución judicial proferida en un proceso ordinario de naturaleza civil que se encuentra surtiendo la segunda instancia, y contra la cual no cabe ningún recurso por ser irrecurrible conforme a lo ordenado por la ley procedimental. De allí la procedencia de la presente acción de amparo propuesta por el accionante según lo dispuesto por el último inciso del artículo 2606 del Código Judicial (numerales 1 y 1).

**SÍNTESIS DE LA DEMANDA Y LOS HECHOS**

Según los hechos de la demanda de amparo el señor Antonio Latiff presentó demanda de mayor cuantía contra la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R. L., la que fue admitida por el Juez a-quo, procediéndose a la vez a emplazar por edicto a la Cooperativa de Servicios Múltiples Ancón, R. L. demandada y al no comparecer la demandada al proceso durante el término del emplazamiento edictal el tribunal le nombró un defensor de ausente, quien contestó el traslado de la demanda negando tanto la pretensión así como los hechos formulados por el demandante.

El accionante sostiene además, que, luego de practicarse las pruebas aducidas por el demandante, encontrándose el proceso para decidir en la primera instancia la parte demandada se hizo presente por medio del Apoderado General, procediendo el juzgador de

esta instancia a dictar sentencia a favor de la pretensión de la parte demandante, decisión que fue apelada por la Cooperativa demandada.

Por otra parte, el amparista expresa también, que, al apelar de esta decisión del tribunal de primera instancia, el Primer Tribunal Superior abrió la causa a pruebas, aportando ambas partes pruebas en sus defensas, y en esta etapa probatoria la demandante tampoco solicitó "... que se practica el reconocimiento expreso del documento que aparece a fojas 64 del expediente, actividad procesal que necesita este documento para ser considerado como auténtico, según el artículo 849 del Código Judicial, cosa que no se lograría tampoco por la falta de la firma.

Finalmente, el accionante en los referidos hechos sostiene que concluida de esa manera la etapa probatoria de la segunda instancia, el Primer Tribunal Superior de Justicia "... decretó la práctica de una prueba de oficio en la cual se ORDENA la práctica de una inspección judicial a través de la diligencia exhibitoria con asocio de peritos a los archivos, registros y libros contables de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (Cooperativa de Ahorros y Créditos Ancón, R. L.)".

**GARANTÍA FUNDAMENTAL INFRINGIDA**

De esa manera el apoderado general de la Cooperativa demandada alega que la orden de hacer acusada viola la garantía del debido proceso legal consagrada por el artículo 32 de la Constitución Política de la República, entre otras razones por las siguientes:

Porque el artículo 1270 del Código Judicial si bien faculta al Tribunal de segunda instancia para practicar aquellas pruebas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o para aclarar puntos dudosos, el Tribunal de segunda instancia no está facultado para suplir la falta de prueba de una de las partes cuando esta tenga la carga de la prueba, según el artículo 773 del Código Judicial que dice que "Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de la norma que le son favorables".

En este sentido, el amparista, en el concepto de la acusada infracción de la garantía constitucional, en síntesis sostiene, que la parte demandante no aportó las pruebas necesarias para probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables, teniendo la carga de la prueba", "... porque el defensor de ausente que se nombró a la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. al contestar la demanda negó la pretensión y el fundamento de derecho invocado por la parte demandante"; y en la primera instancia la parte demandante "... aportó una serie de documentos fotocopiados y un documento fotocopiado sin firma, que es el caso del documento que aparece visible a fojas 64 del expediente que determina que dicho documento debió ser firmado y reconocido en los términos de los artículos 844 y 849 del Código Judicial. El reconocimiento en los términos señalados no fue solicitado por la parte demandante, ni está firmado, por lo que dicho documento no llegó a tener valor probatorio de un documento auténtico".

Por otra parte, alega que en la segunda instancia al abrirse el proceso a pruebas el demandante no presentó el documento firmado ni solicitó que se procediera al reconocimiento del mismo en los términos de los artículos 844 y 849 del Código Judicial. Por lo que, en conclusión, en este supuesto nos encontramos ante un caso de falta de pruebas, por lo tanto el Tribunal de segunda instancia no estaba facultado para suplir esa falta de prueba, so pretexto de aclarar puntos dudosos, en base al artículo 1270 del Código Judicial.

Para concluir, expresa que la violación del trámite legal señalado en los artículos 844 y 849 del Código Judicial, conduce directamente a la violación del artículo 32 de la Constitución Política que consagra la garantía fundamental del debido proceso, la cual consiste en que 'nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Así las cosas, por expuestas las consideraciones que anteceden veamos, entonces, si le asiste o no razón al amparista en el caso del proceso de amparo constitucional en estudio.

**CRITERIO DE LA CORTE**

De salida resulta conveniente dejar sentado que la cuestión concreta que se plantea en el proceso de amparo constitucional sometido al conocimiento del Pleno de la Corte, se reduce a la facultad o poder discrecional que el Código Judicial vigente le otorga al juzgador de segunda instancia, para que de esa manera decrete "pruebas de oficio" de conformidad con lo dispuesto por el artículo 1270 que a la letra reza, así:

> "Puesto el proceso en estado de dictar sentencia y antes de dictar ésta el Tribunal de segunda instancia deberá decretar la recepción de cualquier documento público que estime necesario para esclarecer los hechos controvertidos o aquellas pruebas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o para aclarar puntos dudosos.
>
> La respectiva resolución es irrecurrible".

El transcrito artículo del Código Judicial, por lo demás, es concordante del artículo 782 idem, el cual igualmente dispone:

> "Además de las pruebas pedidas y sin perjuicio de lo dispuesto en otras disposiciones de este Código, el Juez de primera instancia debe ordenar, en el expediente principal y en cualquier incidente que surja, en el período

> probatorio o en el momento de fallar, la práctica de todas aquellas que estime procedentes para verificar las afirmaciones de las partes y el de segunda practicará aquellas que sean necesarias para aclarar puntos oscuros o dudosos en el proceso.
>
> La respectiva diligencia se practicará previa notificación a las partes para que concurran a la diligencia si así lo estiman conveniente.
>
> Los gastos que impliquen la práctica de estas pruebas serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.
>
> El Juez debe, en cualquier momento, ordenar de oficio la repetición o perfeccionamiento de cualquier prueba, cuando ha sido mal practicada o sea deficiente".

En este orden de ideas, cabe señalar que, ciertamente, como sostiene el proponente de la acción de amparo, el Pleno de la Corte en ocasión a una demanda de inconstitucionalidad propuesta por la firma de abogados GONZÁLEZ RUIZ & ALEMÁN, en contra del auto de 20 de abril de 1990 dictado por el Juez Tercero del Circuito, Ramo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en sentencia de 29 de enero de 1991 tuvo oportunidad de pronunciarse en relación con el alcance de las facultades o poderes inquisitorios que los transcritos artículos del Código Judicial conceden al juez en materia probatoria, al declarar inconstitucional el auto de la referencia dictado por el citado juzgador circuital del Primer Circuito Judicial de Panamá. (Reg. Judicial Enero 1991, pág.65)

No obstante, conviene antes dejar sentado que, si bien en el caso en estudio la cuestión planteada también gira en torno a las facultades atribuidas a los juzgadores de ambas instancias del proceso, para decretar pruebas de oficio dentro de las limitaciones impuestas por los transcritos artículos 1270 y 782 del Código en cita, sin embargo, la situación en relación con el ejercicio de estos poderes inquisitorios en el campo probatorio del proceso es totalmente distinta en cada uno de los casos mencionados.

En efecto, en el caso de la sentencia de inconstitucionalidad proferida por el Pleno de la Corte era evidente, y así quedó demostrado, que el juzgador de primera instancia al decretar la práctica oficiosa de pruebas mediante el auto declarado inconstitucional, en ejercicio de esta facultad o poder excedió los límites establecidos por el artículo 782 del Código Judicial, o sea que no se limitó a ordenar la práctica de "aquéllas pruebas que sean procedentes para verificar las afirmaciones de las partes ...", esto es, sin "suplir la falta de pruebas de las partes", como se sostiene en el fallo de declaratoria de inconstitucionalidad.

En cambio, el análisis de la actuación procesal enviada a esta Superioridad por el Primer Tribunal Superior de Justicia en este caso, contrariamente a los argumentos esgrimidos por el amparista, revela que la recepción de oficio de la prueba decretada por el juzgador de la segunda instancia mediante auto el 31 de mayo de 1993, consultable a fojas 268 y 269 del expediente contentivo de la actuación del proceso ordinario, a juicio del Pleno de la Corte se ajusta a los requerimientos de la normativa procesal del tantas veces citado y transcrito artículo 1270 del Código de Procedimiento Civil vigente; toda vez que, encontrándose el proceso en estado de dictar sentencia y antes de dictarse ésta, el Tribunal Superior demandado con la única finalidad de aclarar puntos oscuros o aclarar puntos dudosos de la controversia como reza la excerta legal en comento, de oficio decretó "... la práctica de la inspección judicial a través de diligencia exhibitoria con asocio de peritos a los archivos, registros y libros contables de la COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (COOPERATIVA DE AHORROS Y CRÉDITO ANCÓN, R. L.)", a fin de determinar si el demandante ANTONIO LATIFF mantiene fondos en dicha Cooperativa y en caso afirmativo a cuanto ascienden los mismos, y de existir dichos fondos determinar si sobre los mismos pesa algún gravamen que impida su devolución.

De lo cual queda claro entonces, que, sin incursionar en la valoración e eficacia probatoria de los documentos a que alude el amparista en los razonamientos que aparecen a fojas 10, 11, 12 y 13 del expediente contentivo del proceso de amparo constitucional de que conoce el Pleno de la Corte, porque esta no es tarea que corresponde al tribunal de amparo, la acusada orden de hacer de la forma como ha sido expedida por juzgador de la instancia, no desborda los límites de la facultad o el poder atribuido al juez para ordenar de oficio la práctica o recepción de aquellas pruebas que sean necesarias para aclarar, como en el caso concreto, puntos oscuros o para aclarar puntos dudosos de la controversia, principio que hoy orienta la legislación procesal panameña atinente a pruebas, y el cual ha sido receptado por el Código Judicial vigente.

Por todo ello, la orden impugnada por el amparista no viola la garantía del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de la República, toda vez que, como está visto, la misma no tiende afectar el derecho de defensa de las partes, ni el principio de contradicción y publicidad de la prueba en su producción en el proceso, ni tiende a "... romper el equilibrio de neutralidad ..." en el proceso que se dictó en la referida orden.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto por el Apoderado General de la sociedad COOPERATIVA DE SERVICIOS MÚLTIPLES ANCÓN, R. L. (Antigua Cooperativa de Ahorros y Créditos Ancón), contra la ORDEN DE HACER expedida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ANTONIO LOAIZA BATISTA, EN REPRESENTACIÓN DE FLORENTINO UREÑA LÓPEZ Y LORIELA COMBES EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **ANTONIO LOAIZA BATISTA** interpuso amparo de garantías constitucionales en representación de **FLORENTINA UREÑA LÓPEZ** y de **LORIELA COMBES**, contra la orden de no hacer ejecutada por el señor Contralor General de la República. Dicha orden impide que las precitadas cobren los aumentos de salarios o los que afirman tener derecho, en virtud de que ambas tomaron posesión de los cargos para los que fueron nombradas mediante los Decretos Ejecutivos No.48 del 26 de enero de 1993 y 1107 del 2 de diciembre de 1992, respectivamente, a través de si reclasificaba el cargo de los amparistas dentro del Ministerio de Salud.

El recurrente señala la orden de no hacer se ha ejecutado de facto, por cuanto no media orden escrita negando la autorización para pagar los incrementos salariales objeto del recurso. De igual forma sostiene que el Contralor General de la Nación se ha negado a darle cumplimiento a un Decreto firmado por el Presidente de la República y por el Ministro de Salud todo lo cual violenta los artículos 32, 61, 181 y 297 de la Carta Fundamental, el Decreto de Gabinete No.1 de 1971 y la Ley 32 de 1984.

Ahora bien, cumpliendo el procedimiento establecido por la ley, esta instancia requirió a la autoridad demandada el envío de la actuación a esta Superioridad, en su defecto, un informe acerca de los hechos materia del recurso.

A consecuencia de ello, la autoridad recurrida envío la Nota No.2685-D.C. -93, en la que hace del conocimiento de la Corte que se ha dado curso a los ajustes retroactivos a los salarios de las actoras, así como a la inclusión de esos ajustes en la planilla correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre de 1993 del Ministerio de Salud, dejando sin efecto la orden de no hacer que se impugna a través de la presente acción. Acompaña el Contralor la nota expuesta, con fotocopia autenticada de los formularios correspondientes a las notificaciones de acciones de personal del Ministerio de Salud, en donde consta lo anotado.

En vista de que se ha dado curso en la Contraloría a los ajustes retroactivos al salario de las actoras al igual que la inclusión de dichos ajustes en la planilla del 15 de noviembre último, observa la Corte que el proceso que nos ocupa ha perdido su objeto, motivo por el cual procede la declaratoria de sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, reunida en PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que se ha dado el fenómeno jurisprudencial de SUSTRACCIÓN DE MATERIA.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA FORENSE AISEMANN & AROSEMENA EN REPRESENTACIÓN DE JAIME CUCALÓN D'ANELLO Y ENRIQUE MONTENEGRO PAREDES ACCIONISTAS MAYORITARIOS DE LA SOCIEDAD CUBRAMOS, S. A. Y EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN SIN NÚMERO DE 31 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense Eisemann y Arosemena en representación de los accionistas mayoritarios de la sociedad anónima denominada **CUBRAMOS, S. A.** presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la resolución calendada el 31 de agosto de 1993, proferida por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia**, mediante la cual se expide la Orden de No Hacer que revoca la admisión de la acusación particular de sus representados en el juicio penal seguido a **JACOBO BRAVERMAN BARRANTES** por infractor del Capítulo V, Título IV del Libro II del Código Penal.

Según los hechos que fundamentan la acción presentada, en el mes de diciembre de 1992 se promovió ante el Juzgado Tercero del Circuito, Ramo Penal de Panamá, acusación particular contra el señor JACOBO BRAVERMAN BARRANTES por el delito de apropiación indebida en perjuicio de la sociedad CUBRAMOS, S. A. de la cual son accionistas mayoritarios los señores JAIME CUCALÓN y ENRIQUE MONTENEGRO PAREDES. La acusación fue admitida por el Juzgado Tercero de Circuito Penal, pero al ser impugnada por la defensa el Segundo Tribunal Superior revocó la decisión del Juzgado Tercero señalando que se incumplieron las exigencias del artículo 2013 del Código Judicial, referentes a la legitimación activa del acusador, la denominación del delito, la fecha y lugar de ejecución.

Con relación a las disposiciones constitucionales infringidas, se anotó los artículos 32 y 212 que se refieren al debido proceso y a los principios que deben inspirar las leyes procesales.

Por admitida la acción de amparo de garantías constitucionales a que se contrae el presente caso se solicitó del Segundo Tribunal Superior de Justicia el envío de la actuación correspondiente o en su defecto de un informe sobre los hechos en que se fundamenta esta acción. Mediante Oficio #214 de 23 de noviembre, la magistrada Elvia Batista Solís informó a este despacho que la Resolución censurada se expidió como consecuencia de la revisión en segunda instancia a que diera lugar el recurso de apelación presentado por la firma forense Vallarino, Rodríguez y Asociados, en la que se advirtió "que el libelo acusatorio no cumple con los requisitos del artículo 2013 del Código Judicial" y a ello se suma el hecho de que uno de los poderdantes no figura como directivo ni dignatario con facultades para promover acción judicial.

Como a la fecha en que se presentó esta acción la actuación objeto del amparo había sido devuelta al Tribunal de origen, se le pidió a la Juez Tercera de Circuito que remitiera el expediente contentivo de la acusación particular interpuesta por Jaime Cucalón y Enrique Montenegro Paredes contra Jacobo Braverman Barrantes, solicitud que fue satisfecha con el envío del expediente de 144 folios útiles, contentivo del negocio penal antes descrito.

Al examinar los antecedentes remitidos se puede apreciar que los poderdantes son accionistas mayoritarios de la sociedad anónima Cubramos, S. A. y que en el texto del libelo de la acusación no sólo se indica el Título y el Capítulo que se considera infringido por la conducta asumida por Jacobo Braverman Barrantes, sino que en el fundamento de derecho, aparece con toda claridad la mención del artículo 194 del Código Penal que describe el hecho punible conocido como apropiación indebida. Además la acusación se propuso por escrito, expresando claramente los nombres del acusador y del acusado y haciendo un señalamiento cronológico, preciso, sobre los acciones continuadas realizadas por el acusado al expedir una pluralidad de cheques de la sociedad Cubramos, S. A. para pagar obligaciones personales.

En cuanto a la legitimidad activa del señor Montenegro Paredes basada en el documento procedente del Registro Público, cabe anotar que fue su calidad de accionista mayoritario conjuntamente con el Presidente de la empresa lo que generó la presentación de la acusación particular, hecho que se acredita con los certificados de acciones aportadas.

El debido proceso no solo comprende la competencia del tribunal, el acatamiento al procedimiento legal y el respeto a la prohibición de doble juzgamiento, sino también la garantía de accesibilidad como sujeto procesal legítimo a las distintas instancias del proceso y a los consiguientes principios de publicidad, inmediación, contradicción y bilateralidad. Por ello, la negación de ese acceso, sin firme apoyo legal, infringe la norma constitucional que consagra dicha garantía.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales y por tanto REVOCA la resolución judicial de 31 de agosto de 1993.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICENCIADO ELÍAS DOMÍNGUEZ EN REPRESENTACIÓN DEL LICDO. CESAR H. BROCE HERRERA Y EN CONTRA DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ELÍAS DOMÍNGUEZ, en su condición de apoderado especial del licenciado CESAR H. BROCE HERRERA, ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales en contra de la orden de hacer que consiste en la destitución del cargo de Juez Noveno del

Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, contenida en la Resolución del 11 de noviembre de 1993 y la cual fue confirmada el 26 de noviembre de 1993.

En el libelo de demanda, al fundamentar la acción, se señalan una serie de fallas ocurridas, según el amparista, en la sustanciación del proceso disciplinario, las cuales constituyen la violación de la garantía constitucional consagrada en el artículo 32 de la Constitución Política de la República.

También reclama la infracción del artículo 208 de la Constitución Política de la República, en donde se expresa que los Magistrados y Jueces no serán depuestos sino en los casos y con las formalidades que dispone la ley, procedimiento que no se siguió para su destitución. Continúa afirmando que como consecuencia de la violación de las dos normas constitucionales expresadas, se violenta el artículo 17 de la Carta Fundamental.

Sabido es que el Órgano Judicial, además de sus funciones jurisdiccionales, tiene funciones administrativas. Entre ellas están contemplados los actos mediante el cual se designan, trasladan, destituyen las personas que trabajan en esta entidad. Frente a esta situación, la destitución de un funcionario judicial es típicamente un acto de carácter administrativo.

Como expone el amparista, en la expedición de las resoluciones que lo destituyen se han cometido irregularidades que chocan con disposiciones legales. En otras palabras, imputa a estas resoluciones violaciones de orden legal que caen dentro del campo de lo contencioso administrativo. Si bien es cierto que está agotada la vía gubernativa, no es menos cierto que el recurrente tiene a su haber el recurso contencioso de plena jurisdicción, vía que es la adecuada para atacar las resoluciones en que se declara su cesantía. En el proceso extraordinario de amparo de garantías constitucionales, el tribunal de amparo no puede adentrarse al estudio de hechos y situaciones que deben probarse en los términos y conforme a las formalidades establecidas para cada proceso, en los cuales todas las partes tienen la oportunidad de ser oídos.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el amparo de garantías constitucionales propuesto por el licenciado ELÍAS DOMÍNGUEZ, en representación del Licdo. CESAR H. BROCE HERRERA contra la orden de hacer, contenida en la Resolución del 11 de noviembre de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR ROBERTO ABREGO TORRES EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL RAMÓN SOSA GARCÍA DE PAREDES, REPRESENTANTE DE LA SOCIEDAD COMERCIO INTERNACIONAL, S. A. Y EN CONTRA DEL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La sociedad anónima **COMERCIO INTERNACIONAL, S. A.**, a través de su representante legal, el señor Gabriel Ramón Sosa García De Paredes, concedió poder especial al licenciado Roberto Abrego Torres, quien presentó amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en el auto de 5 de noviembre de 1993, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia, dentro del proceso ordinario promovido por Comercio Internacional, S. A. contra el Banco Exterior, S. A. .

Una vez cumplidos los trámites de reparto, el Despacho al que se asignó el expediente consideró que el libelo reunía los requisitos establecidos para las demandas en general, al igual que los fijados para los amparos de garantías en particular y por ello, dispuso admitir la demanda y ordenar a la autoridad acusada que enviara el informe correspondiente o la copia de la actuación para los fines de rigor.

Dentro del plazo concedido, se recibió el Oficio 1894, visible a fojas 27-28, en el se informó que el expediente que contiene el proceso ordinario donde se dictó la orden impugnada, había sido devuelto al Tribunal de origen, o sea, al Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, desde el 16 de noviembre de 1993.

A fin de obtener una mejor información sobre los antecedentes del caso, se hizo la solicitud correspondiente al Juzgado Cuarto de Circuito y como consecuencia de ello se recibió el expediente que contiene el juicio ordinario antes mencionado, el cual consta de 461 folios útiles.

Según el texto de la demanda, la orden de hacer está contenida en una resolución judicial de segunda instancia, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia de Panamá, al resolver el recurso de apelación formalizado contra auto de 14 de mayo de 1993, dictado por la Juez de primera instancia, referente a la aprobación de la liquidación

efectuada por la Secretaría de ese Tribunal. Entre los hechos en que se fundamenta la acción se anota que el Primer Tribunal Superior al revocar el auto que aprueba la liquidación, se excedió de las atribuciones que la ley le señala, en virtud de que dicha materia no era objeto del medio de impugnación interpuesto por la parte demandada, dado el contenido del artículo 1065 del Código Judicial.

En cuanto a las garantías constitucionales que se consideran infringidas con la emisión de la resolución impugnada, el accionante anota el artículo 32, en el concepto de violación directa por omisión, al expedirse una resolución con desconocimiento de los trámites legales del debido proceso que, en el caso de autos, lo regula los artículos 470, 1024 y 1065 de Código Judicial.

La resolución judicial objeto de censura mediante la presente acción, tal como se ha expresado antes, al decidir el recurso de apelación presentado por la parte demandada, concluye revocando el auto el auto de 14 de mayo dictado por la Juez Cuarta del Circuito de lo Civil y no aprueba la liquidación efectuada por la Secretaría de ese Tribunal. Para llegar a esa decisión el Tribunal tomó en cuenta las tres sentencias dictadas en el negocio principal y que en su orden corresponde al siguiente:

a) La Sentencia N°157 de 18 de agosto de 1989 (fs.273-280), en virtud de la cual el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial, Ramo Civil, niega la demanda de reconvención propuesta por el Banco Exterior, S. A. contra Comercio Internacional, S. A. y condena al Banco Exterior, S. A. a reingresar los fondos depositados en la Cuenta Corriente No.030-09-4-00-12169-0 de propiedad de la sociedad Comercio Internacional, S. A. consistentes en la suma de TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES BALBOAS CON VEINTE CENTÉSIMOS (B/.38,433.20), con los respectivos intereses causados a partir del 5 de septiembre de 1986 y condena en costas que, en cuanto a honorarios profesionales, se fijan en SIETE MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO CON NOVENTA Y OCHO CENTÉSIMOS (B/.7,264.98).

b) Apelada esta decisión de primera instancia se produce la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia en segunda instancia, el día 26 de junio de 1992 (fs.312-337 vuelta), mediante la cual "se reforma la Sentencia N°157 de 18 de agosto de 1989 proferida por el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá de manera que en su parte resolutiva se lee así: CONDENA al Banco Exterior, S. A., a reingresar en la Cuenta Corriente N°030-09-4-00-12169-0, de propiedad de la sociedad anónima Comercio Internacional, S. A. la suma de DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DIECISÉIS CON SESENTA CENTÉSIMOS (B/.19,216.60), la cual representa la mitad del cheque N°1223, girado por Malone & Hyde Inc., a favor de Productos Alimenticios, S. A. y Banco Exterior, S. A., por la suma de B/.38,433.20 y CONDENA al Banco Exterior, S. A. a pagar a Comercio Internacional, S. A. la suma de B/.4,093.32 en concepto de costas. Los gastos e intereses se liquidarán a través de la Secretaría de primera instancia".

c) Con motivo del recurso extraordinario de casación interpuesto por ambas partes, la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante sentencia de 26 de marzo de 1993 casó la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 26 de junio de 1992 y en su lugar reformó la sentencia N°157 proferida el 18 de agosto de 1989, en el sentido de negar la demanda de daños y perjuicio presentada por Comercio Internacional, S. A. contra Banco Exterior, S. A. y absolvió a las partes de costas, confirmándola en todo lo demás.

Según el texto de la resolución impugnada, la decisión final de la Corte al absolver a las partes de las costas y negar la demanda interpuesta contra el Banco Exterior, S. A. elimina el sustento de la liquidación efectuada por la Secretaría del Juzgado Cuarto de Circuito y por tanto, en ningún momento debió haber sido aprobada por no estar acorde ni a derecho, ni con las decisiones que recayeron con posterioridad a las decisión de primera instancia en el presente caso.

El Pleno al examinar la procedencia de la violación constitucional alegada se percata de que el error de procedimiento en que se incurrió en este caso que ingresó a la jurisdicción civil desde el mes de agosto de 1987 se sustenta en un descuido secretarial al liquidar las costas con base a la sentencia de primera instancia, ignorando la evolución procesal del caso y las reformas vitales que se dieron tanto en la segunda instancia como por el Tribunal de Casación que conocieron finalmente del mismo. Ese error no se puede avalar con las normas que regulan el trámite de liquidación de costas ordinarias, tal como se pretende a través de esta acción de amparo de garantías constitucionales. No se ha dado, pues, la violación de la norma constitucional invocada y de allí que la resolución judicial expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia mantenga su juridicidad y su apego al debido proceso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DENIEGA la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Roberto Abrego Torres, en representación de COMERCIO INTERNACIONAL, S. A., contra orden de hacer expedida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en su auto de 5 de noviembre de 1993.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR VIRGILIO E. VÁSQUEZ PINTO, EN REPRESENTACIÓN DEL DR. CARLOS IVÁN ZÚÑIGA G., RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, EN CONTRA DE LA ORDEN DE NO HACER DICTADA POR EL SEÑOR CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Virgilio E. Vásquez Pinto, mediante poder especial otorgado por el señor **RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ**, presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de no hacer dictada por el señor **CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA**, en virtud de la cual dispone no dar curso, ni refrendar, la planilla para el pago de los salarios de los funcionarios administrativos de la Universidad de Panamá, correspondiente a la primera quincena del mes de septiembre de 1993.

Admitida la demanda por la Corte al considerar que la misma reunía los requisitos establecidos en la Ley, y además se ponía en conocimiento del Tribunal de amparo la situación grave a la que estaban sometidos los empleados administrativos de la Universidad de Panamá al no recibir su salario quincenal, se solicitó a la autoridad acusada el informe sobre los hechos de la demanda.

En su oficio N°2242-D. C.-93 de 20 de septiembre, el señor Contralor General de la República ofreció un detallado informe en el que se refiere a una noticia que apareció en los medios de comunicación escritos antes de que se le notificara de la admisión de la presente acción de amparo de garantías constitucionales y seguidamente cuestiona la orden de suspensión provisional, pues considera que la negación del refrendo de la planilla correspondiente a la primera quincena de septiembre de 1993 de los empleados administrativos de la Universidad de Panamá, se sustenta en las facultades legales que tiene la Contraloría General de la República en esta materia. Tales objeciones son del tenor siguiente:

> "El acto impugnado es el de no dar curso a una planilla, mientras existan pagos incluidos en la misma, respecto de los cuales de modo específico, se ha negado el refrendo. El refrendo respecto de esos pagos específicos, es el que ha sido negado, Al decretarse en este caso la suspensión provisional diciendo que se suspenden los efectos de la orden impugnada, así vistas las cosas, hay que entender que la orden de no hacer comprende dos actos: negar el refrendo de ciertos cheques y no procesar la orden de pago que incluya la emisión de esos cheques, pero sólo con relación a los últimos. Si se suspende provisionalmente la negativa del refrendo, ello estrictamente quiere decir que el refrendo queda sin ser negado, pero no quiere decir a su vez que se deba entender otorgado o que deba otorgarse.
>
> El refrendo es un requisito indispensable para que se pueda proceder con cualquier desembolso de fondos públicos. En cambio, cuando lo que se suspende provisionalmente es "la orden de no tramitar la planilla correspondiente", ello necesariamente implica darle trámite a la orden de pago en la totalidad de esa planilla, incluyendo los pagos ordenados respecto de los cuales no se ha otorgado el refrendo de la Contraloría General, el cual es indispensable, de acuerdo con la Constitución y la Ley, para incurrir en un desembolso a cargo de un tesoro público. En consecuencia, al decretarse la suspensión provisional, en los términos en que ha sido dictada, ésa es la orden que está recibiendo la Contraloría General de la República.
>
> Es por esto, se vuelve a repetir lo que ya se ha expresado en otros informes, que estas controversias no se pueden deslindar al conocer en el fondo amparos de garantías constitucionales para desatar esas controversias. Cuando estos amparos se acogen, por decisión del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en el fondo lo que se le ordena a la Contraloría General, cuando se revoca el acto de esta última, es que permita el desembolso correspondiente a cargo del Tesoro Nacional o de cualquier otro tesoro público, es decir, que no impida el desembolso, por falta de refrendo. Y es que no se le ordena a la Contraloría General de modo expreso que otorgue obligatoriamente el refrendo negado. Por eso, tales decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia aunque no pueden técnicamente violar la Constitución ni la Ley (ya que no son susceptibles de demandas de inconstitucionalidad), no por ello dejarían de ser contrarias al texto y al espíritu de ambas.
>
> Con relación a un refrendo negado, las cosas se deciden de modo muy distinto sin la controversia es desatada a favor del funcionario que ordena el pago, cuando la decisión emana de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en ejercicio de la jurisdicción contencioso-administrativa, por haberse llevado el conocimiento de la controversia ante esa jurisdicción, al utilizarse para ello, las vías previstas por la Ley. En esa decisión, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia le ordena a la Contraloría General de la República que otorgue el refrendo negado".

Sobre la negativa del refrendo de la planilla que contiene los aumentos automáticos de los empleados, el Contralor señaló que la Universidad de Panamá no acató las normas existentes en el Reglamento de Carrera Administrativa del personal administrativo de esa

institución docente, específicamente los artículos 50 y 160, que condicionan los aumentos en las distintas etapas salariales al resultado de la evaluación del desempeño en cada caso en particular y, como quiera que se descubrió que no hubo un cumplimiento completo de los procedimientos y normas para dicha evaluación, con base en la facultad conferida por el artículo 74, literal a) de la Ley 32 de 1984, no quedaba otra alternativa que la negativa del refrendo.

Posteriormente, se recibió en adición al informe presentado, una nota de 21 de septiembre en la que se informa que la Contraloría en cumplimiento de la orden de suspensión dada por el Magistrado Sustanciador de esta acción de amparo de garantías constitucionales, procedió a pagar la totalidad de las planillas de la Universidad de Panamá, incluyendo "la emisión y entrega de los cheques objeto de la negativa de contrafirma por parte de la Contraloría General".

En la misma fecha en que se remite el informe, el abogado de la Universidad de Panamá presentó un escrito de advertencia de inconstitucionalidad del artículo 2549 del Código Judicial, norma supuestamente aplicable al caso, y ello dio lugar a que se elevara en consulta al Pleno de la Corte para los efectos consiguientes y se suspendiera el proceso.

El Pleno decidió la consulta reiterando los razonamientos que ya se habían dado en casos precedentes, en el sentido de que las demandas de amparo de conformidad a una correcta interpretación del sentido y alcance del artículo 2620 del Código Judicial, sólo admiten los incidentes de recusación por impedimentos y, desde el instante en que la Corte Suprema de Justicia se convierte en Tribunal constitucional no es posible introducir advertencias de esta índole, por cuanto el examen normativo que se realiza es de rango constitucional y se desnaturalizaría dicha función constitucional si el Tribunal introduce apreciaciones de carácter legal al entrar a resolver simultáneamente los casos de advertencia.

Al ingresar el expediente para resolver el fondo del recurso, una vez decidida la consulta de inconstitucionalidad, se pasa a examinar el contenido de la pretensión que impugna la orden de no hacer contenida en la Nota N°D.C. 2163-93, del 9 de septiembre de 1993, en la que el Contralor General de la República expresa claramente que "a la planilla de los administrativos no se le dará curso, por incluir ajustes automáticos de salario" y que "para procesar el pago regular del personal administrativo, debe excluirse de la planilla los aumentos automáticos a los cuales se ha hecho referencia".

De conformidad al informe secretarial que aparece a fojas 18 de este cuaderno, el 31 de agosto del año en curso, el Rector de la Universidad de Panamá, a través de su asesor legal, presentó una acción de amparo de garantías constitucionales, similar a ésta, en contra de la orden de no hacer consistente en la negativa de la Contraloría General de la República en refrendar la planilla de pago de los profesores de la Universidad de Panamá, que contiene el aumento bienal por el monto de cinco por ciento sobre el salario regular, efectivas desde la primera quincena del mes de julio de este año. Esa demanda fue resuelta mediante sentencia de 19 de noviembre que en lo tocante a la presente acción expresa lo siguiente:

> "... no cabe la menor duda que la Universidad de Panamá está entre las dos únicas instituciones del Estado que goza de autonomía a nivel de la Constitución Política de la República, porque así lo dispuso el poder constituyente.
>
> En el caso de la Universidad de Panamá, por ser el que interesa, tíenese, entonces, que la autonomía universitaria vista dentro del ámbito del ordenamiento constitucional constituye un derecho social fundamental, el cual, precisamente, aparece consagrado en las normativas del Capítulo 5. "EDUCACIÓN", del Título III de los "DERECHOS Y DEBERES INDIVIDUALES Y SOCIALES", de la Carta Política.
>
> De allí que la propia Constitución a la par que concede autonomía a la Universidad, igualmente le reconozca personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo, para que dicha autonomía sea realmente efectiva.
>
> De lo cual resulta, en consecuencia, que a tenor de lo estatuido por el artículo 17 de la Carta Política, ninguna autoridad de la República debe intervenir en el normal desarrollo de la Universidad de Panamá, no sólo en cuanto al aspecto de su organización interna sino también en lo respecta a su patrimonio y el derecho de administrarlo, siempre que los actos que expidan los Órganos de Gobierno que la conformase, se enmarquen dentro de la Constitución y la ley. Es por ello, además, que la Constitución panameña al consagrar la acción de amparo de garantías constitucionales en el artículo 50, precisamente, en armonía con lo dicho sobre los derechos sociales fundamentales, dispuso que el amparo puede dirigirse no sólo contra eventuales infracciones de las garantías de las garantías sino también contra violaciones de los derechos fundamentales que tengan su origen inmediato y directo de un acto u omisión emitido por cualquier servidor público.
>
> En este orden de análisis del caso examinado, de los documentos allegados al proceso resulta fácil comprobar:
>
> La Universidad de Panamá, a través del máximo organismo de Órgano de Gobierno en asuntos de su competencia legal, y en acatamiento además a lo resuelto por una de las Salas de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 30 de septiembre de 1992), mediante Resolución 710.-8-93 de 6 de abril de

> 1993 de 6 de abril de 1993 autorizó el pago bienal del personal docente; y, ante la improbación del pago por la Contraloría, la accionante recurrió al procedimiento fiscal establecido en el primer párrafo del artículo 77 de la Ley 32 de 1984 anteriormente citada, es decir, insistir en el cumplimiento de la orden de pago, por lo que la Contraloría General, en ese caso, debió cumplir la orden de pago o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto, como lo hizo en el caso de la aludida sentencia de 30 de septiembre de 1992, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte.
>
> Por otra parte, según certificado que aparece a fojas 34 expedido por el Director General de la Planificación Universitaria, en el presupuesto vigente de la Universidad de Panamá existe la partida correspondiente para afrontar el gasto que se requiere para pagar el ajuste bienal docente en el año de 1993.
>
> De donde se colige que la Contraloría al interferir o limitar el libre desenvolvimiento de la Universidad de Panamá, impidiendo el cumplimiento de un acto expedido por el organismo superior de Gobierno conforme a sus facultades legales, viola el derecho fundamental consagrado en el artículo 99 de la Constitución Política, y por ende la regla estatuida en el artículo 17 del mismo Estatuto fundamental, que impone a todas la autoridades el deber de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley".

En el caso sub-judice se anotan como infringidas las disposiciones constitucionales individualizadas en los artículos 17 y 99. Respecto al primero de los artículos citados, la Corte ha expresado en pluralidad de ocasiones que se trata de una norma programática, que no consagra en si derechos en favor de los particulares y en reciente fallo de 3 de septiembre de 1993, en una acción de amparo interpuesta por el Director de la Lotería Nacional de Beneficencia contra el Contralor General de la República, se amplió el concepto de dicha interpretación en los términos que siguen:

> "Una interpretación del artículo 17 de la Constitución, conforme al desarrollo legal del párrafo segundo del artículo 752 del Código Administrativo, revela que las autoridades de la República tienen el deber y el derecho de realizar sus labores con la apetecida regularidad, a fin de administrar correctamente sus obligaciones con el propósito de contribuir al progreso y engrandecimiento nacional.
>
> En el presente caso, la apetecida regularidad, en la administración y fomento de los intereses públicos, está conformada por el estricto apego a las normas de la Constitución y a la Ley, en el desarrollo de la funciones que le atribuyen esa misma Constitución y la Ley a las autoridades de la República que corresponda en cada caso particular".

Con relación al artículo 99, fundamento de la autonomía jurídica, económica, administrativa y académica de la Universidad de Panamá, la Corte mantiene el criterio que ya expuso en su sentencia de 19 de Noviembre de 1993, en el sentido de que tanto la Contraloría General de la República como la Universidad de Panamá son entes autónomos con rango constitucional, pero cada uno de ellos, funcionan en sus respectivos ámbitos de acción y competencia, sin interferencias indebidas y dentro del marco que fija la Constitución y la Ley. En este caso, se había autorizado la partida presupuestaria correspondiente, la Rectoría de la Universidad había reiterado la solicitud de contrafirma a la Contraloría en relación con las planillas contentivas de los salarios y aumentos automáticos de los empleados administrativos, no obstante, se omitió el trámite previsto por el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, obligando a la Universidad de Panamá a recurrir a la acción de amparo de garantías constitucionales para someter el caso a conocimiento del Pleno de la Corte.

Como quiera que se dan los presupuestos normativos y fácticos de la sentencia citada, cabe decidir en consecuencia.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales propuesto por la UNIVERSIDAD DE PANAMÁ contra la orden de no hacer de la CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, que niega el refrendo de las planillas del personal administrativo de esa institución de educación superior sobre aumentos automáticos y por tanto REVOCA la orden contenida en la Nota D.C. 2163 de 9 de septiembre de 1993 impugnada.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EDUARDO N. BERNARD Q., EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ LUIS GIL A., REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MARINER, S. A. Y EN CONTRA DE LA GERENCIA GENERAL DE LA ZONA LIBRE DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E.

GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Eduardo N. Bernard O. en representación de la sociedad MARINER, S.A presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer emanada de la Gerencia General de la Zona Libre de Colón, en virtud de la cual suspendió la actividad de la clave de operación de dicha empresa.

Admitida la demanda,se pidió el informe correspondiente a la autoridad acusada y ésta, mediante el documento que aparece de fojas 24 a 28 de este expediente, explicó que la empresa accionante había firmado un contrato de arrendamiento con la Zona Libre de Colón desde febrero de 1991 y que con fecha anterior -1987- ya se había autorizado la operación de la sociedad ALCÁZAR TRADING IMPORT AND EXPORT, S. A. Añade, que fue con motivo de una orden de allanamiento proveniente de la Procuraduría General de la Nación, a través de la Secretaría General Especializada en Delitos relacionados con Drogas, practicada en el local arrendado por Mariner, S. A. a la empresa antes mencionada, que tomó la decisión de cooperar en las investigaciones adelantadas, suspendiendo provisionalmente la clave de operación de ambas empresas, pues ese había sido el comportamiento de su despacho en casos similares ocurridos con anterioridad.

En el informe que venimos comentando, se señala también que la medida adoptada fue comunicada a los abogados de las empresas afectadas el día 13 de octubre y que a partir del día 26 del mismo mes se había acordado con ellos reactivar las claves de operación.

El 30 de noviembre, el apoderado del amparista presentó un documento al que adjuntó una diligencia en la que el Notario Segundo del Circuito de Colón asistido de testigos instrumentales, expresa que no es cierto que las empresas Mariner, S. A. y Alcázar Trading Import and Export, S. A. estén operando, ya que se pudo percatar e informar por la persona responsable del Departamento de Comercialización de la Zona Libre de Colón, que la clave de operación de estas empresas se mantenía suspendida completamente desde septiembre de 1993.

El accionante señala como violadas varias disposiciones constitucionales, entre ellas, los artículos 17, 18, 32 y 44. Sin hacer mayores comentarios sobre las dos primeras normas, por su carácter general y programático, salta a la vista la importancia de los artículos siguientes, especialmente del artículo 32 en lo referente a la competencia de la institución para asumir, "motu propio", sin que mediara solicitud previa de los funcionarios de instrucción, la adopción de la medida censurada en esta acción, que afecta también el derecho a la propiedad legítimamente adquirida a través del contrato de arrendamiento que permite el uso del local para la realización de las operaciones comerciales propias de la empresa afectada.

A la Corte no escapa el hecho de que a pesar de mediar una orden de suspensión provisional de la medida, con base al artículo 2612 del Código Judicial, y de la manifestación escrita hecha por el Gerente General en el sentido de que ya se había autorizado la activación de la clave de operaciones desde el 26 de octubre, un mes después esto aún no había ocurrido.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales presentado por MARINER, S. A. y revoca la orden de suspensión de la clave de operaciones dada por la Gerencia General de la Zona Libre de Colón.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR EL LICDO. JUSTINIANO CÁRDENAS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR MARCOS BARRERA BOTELLO Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **MARCOS BARRERA BOTELLO** representado por el Licenciado **Justiniano Cárdenas,** presentó acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra sentencia confirmatoria de segunda instancia, expedida por el Tribunal Tutelar de Menores el 28 de septiembre de 1993.

Un análisis de la acción presentada demuestra que no es posible admitirla en vista de que la Corte ha sostenido reiteradamente "para la procedencia de la acción de amparo, no menos cierto es que la acción tiene que dirigirse contra el funcionario que expidió

la orden y no contra el funcionario que la confirmó. Prueba de que lo anterior es lo correcto es que, al solicitar el amparista que se suspenda la orden impugnada, ningún efecto se conseguiría con dicha suspensión, ya que la resolución que la confirma es de la misma índole." En casos similares anteriores la Corte ha sostenido que el demandado es el funcionario que ha dictado la orden cuya revocatoria se pide, sentencias de 27 de agosto de 1990 en el Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el señor **HÉCTOR FRUTO -vs- DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN;** sentencia de 9 de noviembre de 1990, en el Recurso de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por **OLMEDO GONZÁLEZ ALVENDRAS Y LUIS ALBERTO VILLEROS VÁSQUEZ -vs- DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTO DEL MINISTERIO DE VIVIENDA** y sentencia de 5 de diciembre de 1990; en el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por el Licenciado **EDGARDO CERRUD AYALA** en contra del Señor Director de arrendamientos del Ministerio de Vivienda.

Por las razones expuestas la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la presente Acción de Amparo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR LA FIRMA DE ABOGADOS BERRÍOS Y BERRÍOS EN REPRESENTACIÓN DE LOS SEÑORES MANUEL ALVAREZ, REPRESENTANTE LEGAL DE LA SOCIEDAD MAYORISTA DE AZUERO, Y AURELIO DOPESO CARREIRO, REPRESENTANTE LEGAL DE LAS SOCIEDADES SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S. A.; GONZÁLEZ FOYO, S. A. Y SUPER COMERCIAL LA GARANTÍA, S. A. Y EN CONTRA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **RAÚL A. CÁRDENAS V.** ha presentado Recurso de Reconsideración contra la sentencia de 19 de noviembre de 1993, mediante la cual el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia **CONCEDIÓ** el Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la firma de Abogados **BERRÍOS Y BERRÍOS** en representación de los señores **MANUEL ALVAREZ**, representante legal de la Sociedad **MAYORISTA DE AZUERO, S. A.** y **AURELIO DOPESO - CARREIRO**, representante legal de las Sociedades **SUPERMERCADO LA GARANTÍA, S. A.; GONZÁLEZ FOYO, S. A.**, y **SUPER COMERCIAL LA GARANTÍA, S. A.**, y en contra del Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Sin entrar en mayores consideraciones, el Pleno de este Alto Tribunal observa que el recurrente pretende que se examine nuevamente la controversia instaurada, y que fue resuelta mediante sentencia de 19 de noviembre de 1993, pese a que debe ser del conocimiento del licenciado **CÁRDENAS** que contra las sentencias emitidas por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia o de sus Salas no cabe ningún recurso. Tal como ha reiterado esta Superioridad, sus decisiones son finales, definitivas y obligatorias, y así lo ha expresado en situaciones como la que nos ocupa. (v.g. sentencia de 12 de julio de 1993).

En virtud de lo anotado resulta palmario la improcedencia del recurso presentado, y que fue recibido por insistencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 476 del Código Judicial, tal como se aprecia a foja 92 del expediente.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA DE PLANO, el recurso de reconsideración interpuesto por el licenciado RAÚL A. CÁRDENAS contra la sentencia emitida el 19 de noviembre de 1993, que CONCEDIÓ el Amparo de Garantías Constitucionales presentado por la firma BERRÍOS Y BERRÍOS contra el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR FERNANDO LÓPEZ ESPINOZA CONTRA LA JUEZ SEGUNDA DEL CIRCUITO DE VERAGUAS. APELACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de habeas corpus promovida por la señora Gladys L. de Quintero a favor de FERNANDO LÓPEZ ESPINOZA.

El Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial resolvió, en primera instancia, la acción instaurada mediante sentencia fechada el 18 de octubre de 1993, por la cual declaró legal la detención de FERNANDO LÓPEZ ESPINOZA.

El Tribunal a-quo motivó su fallo afirmando que "es evidente que el arresto del señor Fernando López Quintero es legal ya que dicho arresto ha sido ordenado por funcionaria competente para juzgarlo, y en lo relativo a la orden de arresto no se ha vulnerado ningún derecho legal del arrestado. Puede observarse a ese respecto que ni siquiera la proponente del recurso alega violación legal alguna en perjuicio del arrestado. Sin embargo, la proponente indica que el detenido tiene 85 años de edad. Es cierto que de acuerdo con el artículo 2147D no se ordenará la detención de personas que han cumplido los 65 años de edad. Sin embargo, esa disposición, aplicable en asuntos penales, es sólo con respecto a imputados de delitos a quienes se les decreta detención preventiva indefinida. En este caso no se trata de asunto penal sino de un proceso civil, y no de una detención preventiva, sino de una sanción debidamente ejecutoriada. Ahora bien, si el afectado tiene problemas de salud entonces corresponde a sus familiares probar ese hecho debidamente, en cuyo caso la Juez que ordenó su arresto podría ordenar que sea trasladado detenido a un hospital mientras se resuelven esos problemas de salud. Por lo demás, como no se advierte ninguna violación legal en el arresto del recurrente debemos concluir que dicha detención es legal" (fs. 14-15).

Al estudiar el presente negocio jurídico esta Superioridad observa que el funcionario demandado, al rendir informe sobre el presente caso (fs. 8-10), manifestó que al señor FERNANDO LÓPEZ ESPINOSA se le ordenó mediante resoluciones de fecha 11 de septiembre de 1992 y 5 de enero de 1993, consignar a nombre del Tribunal un Certificado de Garantía por la cantidad de seiscientos cincuenta y siete balboas (B/.657.00), dinero que había sido embargado por el Juzgado Segundo Municipal de Santiago y que estaba consignado en el Tribunal mediante el Certificado de Garantía No.172746 de 1o. de septiembre de 1992, extendido por el Banco Nacional de Panamá, por la suma de B/.2,144.75. Este certificado fue entregado al señor López Espinosa para que cobrara la diferencia entre la suma de dinero por la cual fue extendido el certificado y la suma de dinero embargada. Como el señor LÓPEZ ESPINOSA no cumplió la orden que le impartió el Juzgado, éste emitió la resolución No. 73 de 15 de marzo de 1993, mediante la cual se declara que el señor FERNANDO LÓPEZ ESPINOSA incurrió en desacato al Tribunal y lo sancionó con la pena de 30 días de arresto, mientras dure su renuencia a cumplir la orden que le fue impartida.

De lo expuesto se infiere que le asiste la razón al Tribunal de primera instancia al determinar que en este caso la detención es legal, **porque no se trata de asunto penal sino civil, y no de una detención preventiva, sino de una sanción por desacato dictada por autoridad competente, cumpliendo las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley**. Por tanto, no es aplicable en este negocio jurídico el artículo 2147 D del Código Judicial, el cual determina no se decretará detención preventiva, salvo que existan exigencias cautelares excepcionales, cuando la persona imputada sea una mujer embarazada, o que amamante a su prole, o una persona que se encuentre en grave estado de salud o que haya cumplido los sesenta y cinco años de edad.

Como se ha comprobado que la resolución impugnada no viola los artículos 21, 22 y 23 de la Constitución Política, el Pleno de esta Corporación debe confirmar la resolución de primera instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia dictada el 18 de octubre de 1993 por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la cual se declara LEGAL la detención del señor FERNANDO LÓPEZ ESPINOSA, ordenada por la Juez Segunda del Circuito de Veraguas, Ramo de lo Civil; y DISPONE poner al detenido a órdenes de la funcionaria demandada.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ORLANDO ALONSO RODRÍGUEZ ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO y en contra del Procurador General de la Nación, debido a que, según expresa, "ha sido privada de libertad en merma de las garantías procesales estatuidas en el artículo 22 de la Constitución Nacional.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, ésta contestó dentro del término legal, informando lo que a continuación se transcribe:

"...

1o. Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de la señora **CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO**, mediante Resolución fechada 15 de octubre de 1993, la cual obra a fojas 17 - 18 del sumario.

2o. La orden emitida se fundamentó en el hecho de que el pasado 14 de octubre de 1993, se realizó cumpliendo con todas las formalidades legales, diligencia de Allanamiento en el cuarto No.6, ubicado en el edificio Renovación No.5, Calle No. 17, del Corregimiento de Santa Ana, en el cual luego de haberse explicado los motivos de la diligencia, la prenombrada **MARTÍNEZ JULIO**, voluntariamente puso a disposición del despacho `... una carterita de material sintético verde cuyo contenido son: 41 sobrecitos de plástico transparente (pases) contentivos de una sustancia en forma de polvo de color blanco, 10 sobrecitos de mayor tamaño que los anteriores, de plástico transparente contentivo de una sustancia igual a la anterior y una (1) bolsita de plástico transparente conteniendo el mismo tipo de sustancia'.

La conducta realizada por la referida dama es indicativo de ella (sic.) tenía conocimiento que dicha sustancia era ilícita, y ello es así, toda vez que la misma manifestó que `... la sustancia se la da a guardar el señor ARMANDO, vecino de la Renovación No.6, cuarto No.3, quien le paga por el favor, ...'

Posteriormente, **CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO**, en su declaración injurada se ratifica de lo expresado en la diligencia de allanamiento al señalar que `yo fui a la estufa y le saqué una cartera de color verde que contenía (sic) en su interior DROGAS, pero no se qué cantidad.'. (El énfasis es nuestro).

Consideramos en ese momento procesal, que la sustancia encontrada y la confesión de la presunta inculpada, eran elementos suficientes para ordenar su detención preventiva, como en efecto se hizo.

Ahora bien, dadas las aseveraciones, y por la particularidad que presentaba la sustancia encontrada, la cual daba muestras evidentes de que la misma era droga, existen dudas, en relación al resultado de la pericia psicotrópica, las cuales están pendientes de resolver, al igual que en otros casos en los cuales se ha dado la misma situación, siendo estas las razones por las cuales el despacho a nuestro cargo mantuvo, hasta que se realicen las investigaciones de rigor, la orden emitida en la Resolución fechada 15 de octubre de 1993.

No obstante lo anterior, la detención preventiva de la aludida inculpada fue emitida antes de que se obtuviera el resultado del análisis de la sustancia, y hemos de aceptar que es cierto que en los DELITOS CONTRA LA SALUD PUBLICA, el hecho punible se comprueba fehacientemente con el examen que los facultativos o peritos hagan a la sustancia que se presume ilícita (DROGA), por lo que tenemos que reconocer, que el haberse obtenido resultados negativos en este caso, y pese a que nos encontremos realizando investigaciones al respecto, la orden de detención proferida deviene ilegal, ya que no se encuentra configurado el **`CUERPO DEL DELITO'**.

En razón de lo antes expuesto solicitamos se decrete ilegal la orden de detención emitida en la resolución fechada 15 de octubre de 1993, no sin antes haber dejado plasmadas las razones de hecho y de derecho que motivaron la misma.

3o. La señora **CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO** se encuentra recluida en el Centro Femenino de Rehabilitación, a órdenes de este despacho, pero de inmediato es puesta a disposición de ese Tribunal de Justicia. ..." (fs.5 -7).

En virtud de lo expuesto, es obvio que la detención preventiva decretada contra la acusada debe ser revocada, pues los resultados obtenidos respecto a la sustancia que presumiblemente era droga, que le fue incautada en el allanamiento, fueron negativos. Como consta en el dictamen pericial realizado por el Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, visible a fojas 27 de los antecedentes adjuntos.

De allí, que el mismo Jefe del Ministerio Público recomienda en el transcrito informe "se decrete ilegal la orden de detención emitida en la Resolución fechada 15 de octubre de 1993 ..."

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva decretada contra CARMEN ARGELIS MARTÍNEZ JULIO, y ORDENA su inmediata libertad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN DAVID, CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor **LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA** presentó Acción de Habeas Corpus en su propio nombre y en contra del Fiscal Primero Superior del Tercer Distrito Judicial, por considerar que su detención es ilegal.

Acogido el Recurso de Habeas Corpus se libró el respectivo mandamiento el cual fue contestado por el funcionario demandado de la siguiente forma:

> "1. La detención del recurrente la ordenó el suscrito mediante Providencia de fecha veintinueve (29) de octubre del presente año, visible a fojas 67 a 69 del cuaderno penal.
>
> 2. MOTIVOS O FUNDAMENTOS DE HECHO Y DE DERECHO PARA ORDENAR LA DETENCIÓN:
>
> La Policía Técnica Judicial, hacia meses seguía tras la pista de una mujer conocida como "LA COLOMBIANA" de la cual se había tenido conocimiento se dedicaba a la venta ilícita de drogas por lo que se hicieron seguimientos, vigilancias y estacionarias, a fin de verificar la información; se recibió además información de que "LA COLOMBIANA" recibía la mercancía los días martes y viernes de cada semana, a horas tempranas de la mañana, que la mercancía llegaba a su casa ubicada en le IVU - Pueblo Nuevo por intermedio de otras personas, utilizando para ello transporte selectivo o taxi.

En virtud de lo anterior, la Policía Técnica Judicial, solicitó la práctica de una diligencia de allanamiento y registro a la citada residencia en donde además se tenía información de que vivía KATIA MONTES quien también se estaba dedicando a la actividad ilícita. Una vez instalada la Secretaría de Drogas en el inmueble se percataron de que se aproximaba al mismo un taxi color azul, marca Toyota Tercel, matrícula No.4T-315, dentro del cual viajaban dos (2) sujetos, un varón como conductor y una dama como acompañante, el Detective ROBERTO VALDÉS se encontraba próximo a la entrada del inmueble, por lo que salió a la calle dando voz de alto al conductor quien hizo caso omiso, por lo que el Detective procedió a hacer dos (2) disparos al aire con su arma de reglamento, logrando que el conductor detuviera la marcha y procediendo luego su acompañante a arrojar por una de las ventanas del vehículo un envoltorio o bolsa plástica conteniendo cierta cantidad de sustancia en polvo color blanco, que al ser sometida a la prueba de campo resultó positiva para la determinación de sustancia proveniente de la COCA.

> Al ser registrado el dormitorio de la señora MARÍA DEL CARMEN ALARCÓN O REMIGIA CÓRDOBA GONZÁLEZ (a) "LA COLOMBIANA", se encontró un envoltorio o evidencia que al ser sometida a la prueba de campo correspondiente resultó positiva para la determinación de COCAÍNA y dinero en efectivo. Además dentro del inmueble se encontró un recibo de SERVICIO DE TAXI F.M. distinguido con el NO.49295, mediante el cual se hace contar que se recibió de OMAR CABALLERO la suma de dos balboas (B/.2.00) en concepto de RADIO de la unidad 31. (ver fs.43)"

La versión de los hechos de parte de la persona afectada, quien es conductor de Taxi, que puede apreciarse de fojas 96 a 100 del sumario, es en forma resumida la siguiente:

> "Yo venía del IVU cementerio hacia calle octava por la Elisa Chiari, cuando me silbaron, me detuve y recogí un muchacho que se montó y me dijo que lo llevara a la calle octava final. Allí llamó a una muchacha a la que le dijo que se montara que la señora la llamaba y luego me dijo que regresara al lugar donde lo había recogido. En ese lugar la joven y el muchacho se bajaron y entraron a la casa. Luego salió sólo la muchacha y me dijo que íbamos a hacer una carrera que cuando regresaba me pagaba. Me dijo que la llevara a la Fe de calle quinta. Después de eso me dijo que la llevara al IVU Pueblo Nuevo, que es el mismo lugar donde los llevé la primera vez a ella y al otro muchacho, cuando íbamos llegando a la casa donde ella iba a unos cincuenta (50) metros cambió de idea y me dijo déle directo que voy a hacer otro mandado, seguí directo cuando escuché dos (2) detonaciones me llamó la atención, miré por el retrovisor y vi a un señor que reconocí que es funcionario público que con el revolver en la mano derecha y con la mano izquierda me decía que me detuviera, yo lo hice a ver que (sic) quería sin saber que (sic) ocurría, cuando iba deteniendo el vehículo la joven me gritó tres (3) veces que no me detuviera pero yo me detuve porque yo no hallaba razón para no hacerlo, si mi conciencia y mi corazón están tranquilo (sic) porque (sic) no me detendría, al detenerme levanté la cabeza para ver por

> el espejo, se aproximó el señor por el lado de la joven encañonándonos con el revólver, cuando de repente me puse nervioso porque no sabía que (sic) pasaba, después dio vuelta al carro y mostró una bolsita blanca plástica de tienda, no se (sic) que era, de allí nos dijo que estabamos (sic) arrestados me dijo que retrocediera, me quitaron mi dinero que era de mi trabajo desde las cuatro (4) de la mañana que eran catorce dólares (14.00).

La versión de los detectives ROBERTO FABIÁN VALDÉS que aparece a foja 106 a 109 y del detective DUAY ORIEL LIZONDRO GUERRA que aparece a foja 127 a 130 del expediente que contiene el sumario, ambos manifiestan, en forma conteste, más o menos lo siguiente:

> "Siendo las siete y cuarenta y cinco de la mañana (7:45 a.m) observamos que un sujeto de tez morena salía de la residencia de "CARMEN" regresando a los pocos minutos en un TAXI Toyota Tercel, color azul, matrícula 4T-315, en compañía de una mujer a la cual conocemos como KATHIA MONTES, ambos se bajaron del taxi y se introdujeron dentro de la casa de "CARMEN", a los pocos minutos KATHIA salió ya que el taxi estaba esperando afuera; abordandolo (sic) y retirandose (sic) luego de transcurrir unos diez minutos, acción esta que nos pareció sospechosa, por lo que decidimos apersonarnos a la casa para realizar el allanamiento y registro del mismo, estando en el lugar citado observamos que regresaba nuevamente el taxi con "KATHIA", al momento que se aproximo (sic) a la altura de la puerta principal de la residencia de CARMEN, el (sic) taxi redujo la velocidad y al percatarse de que en ese momento había personal de la Policía Técnica Judicial en la residencia, el taxi se dío (sic) a la fuga por lo que le hice señal de que se detuviera, a lo cual el taxi hizo caso omiso, teniendo que realizar dos (2) disparos de advertencia al taxi y acto seguido el mismo se detuvo, de igual forma observamos que la persona cuando la persona quien aparentemente se identifica como KATHIA, lanzó hacía (sic) fuera del vehículo por la ventana una bolsa pequeña bolsa plástica de color blanco, la que contiene otra pequeña bolsa plástica transparente la cual en su interior contiene cierta cantidad de polvo blanco que presumimos fuera la droga conocida como "COCAÍNA", luego de esto ambos sujetos se bajaron del taxi y fueron introducidos dentro del inmueble donde se les informó que se realizaba un allanamiento."

Un examen de las constancias procesales demuestra que el conductor de taxi, **LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA**, fue contratado por primera vez por el joven ROBERTO AMITH ALMENGOR, quien declara a foja 102 del expediente que le pidieron que fuera a buscar a KATHIA y que él salió de la casa y paró el primer taxi que venía. La versión de ROBERTO AMITH ALMENGOR concuerda en gran parte con todo el conjunto de las declaraciones del expediente, en el sentido de que fue transportado por el taxista acusado, de la casa que posteriormente fue allanada, a otros lugares de la ciudad de David, y que fue al regreso, que traía nuevamente a la señora KATHIA a la mencionada casa, cuando lo detuvieron. Lo cierto es que considera este Tribunal que no hay suficiente evidencia para considerar al taxista **LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA** como vinculado al delito que se investiga, siendo a nuestro juicio una víctima inocente de las circunstancias en que se desarrollaron los hechos delictivos objeto de esta investigación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES ILEGAL la detención de LEODEGARIO AUGUSTO GUERRA QUEZADA, y ORDENA su inmediata libertad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE GUI MING (USUAL) CHUNG QUIK MING ZHONG EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Alfonso Fraguela González, actuando en representación de **GUI MING (USUAL) CHUNG QUIK MING ZHONG**, presentó en la Secretaría General de esta Corporación Judicial, acción de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República por mantener la detención preventiva de su representado.

En cumplimiento de la ley y dado el carácter sumario de este proceso, se libró el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada quien mediante Oficio 13269, recibido el 15 de noviembre del año en curso, expresó en forma positiva que la Agencia del Ministerio Público a su cargo había ordenado la detención de CHUNG QUIK MING ZHONG, mediante proveído calendado el 1° de noviembre de 1993 por el delito de secuestro en perjuicio de **LIAO YE CHONG**. Señaló además en su informe, que la detención se fundamentó en las previsiones normativas de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial y que en

la actualidad, el accionante se encuentra recluido en una de las celdas de la Cárcel Modelo.

Adjunto al oficio contentivo del informe, el Fiscal Auxiliar de la República remitió el expediente principal de 62 folios útiles, que recogen las diligencias realizadas hasta el presente con miras a la instrucción del sumario a que dio lugar la denuncia presentada por la señora Elena Fu de Liao el 28 de octubre del año en curso, por razón del secuestro de su esposo, el asiático LIAO YE CHONG.

El licenciado Alfonso Fraguela González, en el escrito en que formaliza la acción de habeas corpus, manifiesta que la ilegalidad de la detención de su representado consiste en la omisión de la orden de detención por la autoridad competente y por la falta de accesibilidad al idioma oficial de los Tribunales porque su cliente, de origen asiático, no fue informado inmediatamente de una manera comprensible sobre la razón de su privación de libertad y tampoco se le dieron a conocer sus derechos constitucionales y ni se le concedió la asistencia de un abogado para que lo representara en la diligencias policiales y judiciales.

Al examinar las distintas diligencias que aparecen en el expediente principal que recoge la instrucción sumarial, se advierte a folios 35-37 la declaración indagatoria que demuestra que el indagado fue asistido de intérprete y se le dieron a conocer los derechos que le otorgan los artículos 22 y 25 de la Constitución de la República y a fojas 38 a 40 hay un proveído que decreta la detención preventiva del sindicado al tenor de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La participación del señor Gui Ming se desprende no sólo de su declaración, sino también de las distintas disposiciones hechas por su primo Zhong Wei Bin que lo vinculan al delito de secuestro de Liao Ye Chong.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de GUI MING (USUAL) CHUNG QUIK MING ZHONG desde el 28 de octubre de 1993 y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes del Señor Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR ZHONG WEI BIN EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE:ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Lcdo. Alfonso Fraguela González ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor de ZHONG WEI BIN y en contra del Fiscal Auxiliar de la República.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Auxiliar de la República de Panamá, dicho funcionario contestó, mediante Oficio No. 13271 de 12 de noviembre de 1993, lo siguiente:

> "A. Si es cierto que esta Agencia del Ministerio Público, ordenó la detención preventiva de ZHONG WEI BIN, sindicado por el delito de SECUESTRO, en perjuicio del señor LIAO YE CHONG, mediante proveído calendado primero (1°) de noviembre de 1993.
>
> B. La detención preventiva de ZHONG WEI BIN, se fundamentó en lo que establecen los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.
>
> C. El recurrente se encuentra recluido en una de las celdas de la Cárcel Modelo a órdenes de esta Fiscalía, y desde este momento ha sido filiado a órdenes de esa alta corporación de justicia."

También fue enviado a esta Corte el expediente que contiene el sumario que se sigue a los señores GUI MIN (U) CHUNG QUIK MING y ZHONG WEI BIN por delito de secuestro en perjuicio de LIAO YE CHONG, el cual tiene origen en la denuncia presentada por la señora Elena Fu de Liao, esposa de Liao Ye Chong. En dicha denuncia, visible a fojas 1 y 2 del expediente contentivo de las sumarias, la denunciante señala que el día 27 de octubre de 1993, aproximadamente a las tres de la tarde, su esposo el señor LIAO YE CHONG salió de su casa con dirección al muelle de Llano Bonito Juan Díaz, en su vehículo Toyota Four Runner, color gris, con matrícula 100-966, vistiendo pantalones cortos color gris, sweter de color blanco y zapatos color negro; agrega la denunciante que alrededor de las diez y diez de la noche (10:10 p. m.) recibió una llamada telefónica en la cual un hombre con acento asiático, el cual no se identificó, le manifestó que tenía a su esposo y que la esperaría en el restaurante LUNG FUNG al cual tenía que presentarse con la suma de un

cuarto de millón de dólares, sin darle aviso a la Policía ni a la P.T.J. Señala la denunciante que le volvieron a llamar a la diez y veinte de la noche (10:20 p. m.) para indicarle que cuando se presentara al restaurante, lo hiciera en el estacionamiento donde se pide la comida para llevar. Finalmente, la denunciante agregó, al darse cuenta de que el señor ZHONG WEI BIN se encontraba bajo investigación en ese despacho, que la voz del antes mencionado le resultaba muy parecida a la que escuchó del sujeto que la llamó por teléfono pidiéndole el dinero.

Por otro lado, consta a fojas 25 a 27 y 31 a 34 la declaración indagatoria y la ampliación de esta última del señor ZHONG WEI BIN en la cual el sindicado admite su participación en el secuestro del señor Liao Yue Chong.

La Corte observa que existe una orden de detención escrita, visible a fojas 38 a 40 del expediente contentivo de las sumarias, expedida por autoridad competente como lo es el Fiscal Auxiliar de la República y en la cual se ordena la detención preventiva de ZHONG WEI BIN y otros en virtud de que en contra del sindicado existe la denuncia interpuesta por la señora Elena Fu de Liao, así como la ampliación de la declaración jurada rendida por Zhong Wei Bin que lo implican en hechos que tipifican el delito de secuestro.

El delito de secuestro tiene fijada pena de prisión de 5 a 7 años, por lo cual, dado que la pena es superior a los dos años, en la detención preventiva del señor ZONG WEI BIN no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, y, por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención del señor ZHONG WEI BIN, y por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS INTERPUESTO A FAVOR DEL SEÑOR DIVALDO CANO SAAVEDRA CONTRA LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE ADUANAS, ZONA ORIENTAL. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Durante el trámite de lectura del proyecto de resolución de la acción de habeas corpus interpuesto a favor de DIVALDO CANO SAAVEDRA, el proponente de la acción, doctor Carlos Enrique Muñoz Pope, ha presentado escrito mediante el cual desiste de la acción propuesta.

Al analizar la situación planteada, la Corte nada tiene que objetarle, por lo que estima debe accederse a lo pedido.

Por ello, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus que había sido presentada a favor de DIVALDO CANO SAAVEDRA; en consecuencia, DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes del Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR RUBÉN DARÍO COYA CUETO EN CONTRA DEL DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN POLICIAL (D.I.I.P.). MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ENRIQUE MON PINZÓN ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de **RUBÉN DARÍO COYA CUETO** y en contra del Director del Departamento de Investigación e

Información Policial (D.I.I.P.), debido a que "se le mantiene ilegalmente detenido" en las instalaciones de dicha institución desde el 11 de noviembre de 1993, sin que a la fecha se hayan "presentado cargos en su contra" ni se haya "puesto a órdenes de las autoridades competentes".

Librado el mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, ésta indicó, entre otras cosas, mediante oficio visible a fojas 4 que el prenombrado COYA CUETO se encontraba a órdenes del Fiscal Auxiliar de la República. Por tanto, se libro, nuevamente el mandamiento, ahora contra dicho agente del Ministerio Público, quien rindió el informe de rigor dentro del término legal, como se observa a fojas 13, en que contesta lo siguiente:

"...
A) Si es cierto que ordenamos la detención preventiva del recurrente, a través de una providencia del dieciséis(16) de los corrientes.

B. Los motivos que dieron como resultado tal ordenamiento, se basaron en el hecho de que mediante diligencia de Allanamiento efectuada por el señor Corregidor de Pedregal, en la casa No.28 de calle M., corregimiento de Pedregal, se encontraron una serie de documentación, tales como cédulas, pasaportes, etc, que eran falsificados. Como quiera que se trataba del delito de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PÚBLICOS y en base a lo estipulado por el artículo 265 del Código Penal, que tiene señalada pena de prisión mínima superior a los dos años de prisión.

C. Actualmente el prenombrado Coya Cueto se encuentra recluido en la Cárcel Modelo a órdenes de este despacho.

Del Señor Magistrado,
Lic. OMAR A. MACÍAS SALINAS
Fiscal Auxiliar de la República."

El transcrito informe, a su vez fue acompañado de los siguientes documentos: copia de nota por la cual el Director de Información e Investigación Policial pone al ciudadano detenido a órdenes de la autoridad competente o sea el Fiscal Auxiliar de la República; copia de la orden de allanamiento; copia de la lista (inventario) de los objetos encontrados en el lugar allanado. Además, se adjuntó el cuadernillo contentivo de las sumarias que hasta el momentos se siguen en este caso.

Así las cosas, la Corte procede a resolver si la detención en el presente caso, está fundamentada legalmente, conforme lo señala los artículos 2565 y 2566 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 22 de la Constitución Nacional.

El examen de la actuación realizada hasta el momento en el caso sub-judice, contrario a lo que sostiene el accionante no evidencian la ilegalidad de la detención preventiva del sindicado.

Consta en el expediente antecedente, de fojas 1 a 8 el allanamiento realizado a la residencia de RUBÉN D. COYA, por la autoridad correspondiente, en virtud de información de que en dicho lugar residían personas indocumentadas y se dedicaban a la falsificación de documentos. En ese sentido, como consta en el acta de allanamiento se encontraron documentos y equipos que aparentemente se utilizaban para tal efecto.

Visible a fojas 9 se encuentra el auto, dictado por el agente del Ministerio Público, por el cual se inicia la instrucción sumarial para acreditar la existencia del hecho punible y su autoría. Ordenando también, las diligencias necesarias.

De fojas 11 a 17 consta la declaración indagatoria efectuada al detenido RUBÉN DARÍO COYA CUETO, y declaración jurada de otros vecinos (fs.18-21).

Posteriormente, la autoridad competente ordena la detención preventiva del sindicado, mediante resolución motivada y fundamentada en el artículo 2148 del Código Judicial.

Efectivamente, la Corte ha podido comprobar que hasta el momento existe mérito para mantener la detención preventiva pues el delito imputado, falsificación, tiene pena de 2 a 5 años de acuerdo al artículo 265 del Código Penal. El autor fue encontrado en el lugar de los hechos y se ha cumplido con las formalidades que exige el Código Judicial, conforme lo determina sus artículos 2148 y 2159.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra RUBÉN DARÍO COYA CUETO, y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR SILVIO MORALES EN CONTRA DE LA FISCAL SEGUNDA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en grado de apelación, ha llegado a esta Corporación de Justicia la sentencia de 25 de octubre de 1993, mediante la cual ese tribunal DECLARO LEGAL la detención preventiva del señor SILVIO MORALES, decretada por la Fiscal Segunda del Circuito de Chiriquí.

El apelante, al sustentar su recurso, lo fundamenta en tres aspectos:

1. Que su representado negó toda participación en el acto delictivo en el que ROGER MORANTES PÉREZ, mediante declaración jurada lo señala como participante, ya que el día de los hechos se encontraba en otro lugar jugando dominó con un grupo de personas.

2. Que la diligencia de allanamiento no involucra a su defendido, en virtud de que la misma se hizo en la residencia del Sr. Marcelino Saldaña, en la que se encontraron las armas y el Pick Up, con los cuales supuestamente se cometió el ilícito.

3. Que la orden de detención de su representado fue decretada por autoridad carente de competencia.

Por su parte, la sentencia apelada hace una relación de los hechos que tuvieron su origen en la denuncia formulada por el señor FILIBERTO BEITÍA QUINTERO ante la Sub-Agencia de la P.T.J. de Bugaba, con motivo del asalto a mano armada que fue objeto su establecimiento comercial "Motel La Tropicana", en horas de la madrugada del día 28 de septiembre de 1993. En cuanto a la vinculación del señor MORALES con el caso en estudio, señala la resolución, surge de las "declaraciones, jurada e indagatoria de uno de los partícipes en la comisión del delito que lo vinculan a la perpetración del ilícito investigado, lo que a juicio del instructor, motivó la dictación de la medida cautelar que se impugna" (f. 10).

Observa el Pleno que se está en presencia del delito de robo que se perpetúa por sujetos armados en contra del establecimiento comercial denominado MOTEL LA TROPICANA y que según el denunciante, le substrajeron armas, licores y dinero en efectivo. Se trata del delito de robo, el cual conlleva detención cuyo mínimo es superior a los dos años de prisión.

El Pleno al revisar el expediente que ha sido remitido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante Oficio N°1675 el 8 de noviembre de 1993, encuentra que la declaración jurada e indagatoria del señor ROGER MORANTES PÉREZ vincula al señor SILVIO MORALES como participante en el robo a mano armada perpetrado contra el establecimiento comercial MOTEL TROPICANA. Por otra parte, no existe en el expediente constancias probatorias que eximan de responsabilidad al señor SILVIO MORALES.

Consta a fojas 186, 187 y 188 del expediente que la Fiscal Segunda del Circuito de Chiriquí ordenó la detención preventiva del señor SILVIO MORALES y otros, por existir los elementos probatorios en su contra. Se indica en esa diligencia que el hecho punible se encuentra acreditado con las armas, licores y dinero que fueron incautados en la diligencia de allanamiento realizada en la residencia de uno de los participantes en el hecho delictivo.

Termina la Fiscalía sosteniendo que se han reunido los requisitos que exigen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para ordenar la detención de los sindicados.

El referido artículo 2148 expresa que:

> "Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito, se podrá decretar su detención preventiva".

Por su parte, el artículo 2159 ibidem indica que en toda diligencia de detención se debe expresar:

> 1. El hecho imputado;
>
> 2. Los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible; y
>
> 3. Los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

En el caso en particular, la Fiscalía Segunda del Circuito de Chiriquí, ha ordenado la detención de SILVIO MORALES y otros, llenando todas las formalidades exigidas por el Código de Procedimiento Penal. Así también, en las diligencias expedidas por el representante del Ministerio Público, constan los elementos probatorios que incriminan a SILVIO MORALES con el hecho punible.

El Pleno considera, tal como lo expone la resolución proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el 25 de octubre de 1993 (visible a fojas 8-12), que la detención del señor SILVIO MORALES está plenamente justificada y debe mantenerse mientras su situación no haya variado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR EDUARDO FRUTOS BATISTA EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado OMAR DIEPPA PÉREZ, presentó ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en nombre y representación del señor EDUARDO FRUTOS BATISTA, acción de habeas corpus en contra del Fiscal Auxiliar de la República de Panamá.

Después de llenar toda la ritualidad que para esta clase especial de proceso extraordinario establece el Libro IV, sobre Instituciones de Garantía del Código Judicial,habiendo recibido el informe del notificador de la Secretaría General en la cual comunicaba que hizo entrega de las copias autenticadas del cuadernillo distinguido con el N°798-93 contentivo de la presente acción, dado que el Fiscal Auxiliar no se encontraba (f.6), se presentó un memorial en donde el peticionario desiste de la acción presentada ante esta Corporación. Dentro de las normas que regula la acción de habeas corpus, no existe ninguna que prohíba desistir de la acción instaurada, por lo que debe acogerse tal solicitud.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ACEPTA el desistimiento del recurso de habeas corpus promovido por el licenciado OMAR DIEPPA PÉREZ a favor del señor EDUARDO FRUTOS BATISTA.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS INTERPUESTO POR LA FIRMA FORENSE VÁSQUEZ & VÁSQUEZ A FAVOR DE JAIME SIMONS BRAGIN CONTRA LA ORDEN DE DETENCIÓN DICTADA POR LA JUEZ OCTAVA DE CIRCUITO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense VÁSQUEZ y VÁSQUEZ interpuso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia acción de habeas corpus a favor del señor JAIME SIMONS BRAGIN con el objeto de que se declare ilegal la detención decretada por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La razón fundamental que sustenta la acción promovida estriba en que, conforme a la firma recurrente, de las motivaciones que sustentan el auto de llamamiento a juicio de JAIME SIMONS BRAGIN se deduce que el delito de peculado que se le imputa a su patrocinado es de índole culposo, pues su conducta "permitió o dio ocasión a que se extraviaran o perdieran valores de la Caja de Ahorros; o que otras personas los sustrajeran o malversaren."

Ahora bien, mediante resolución de 28 de octubre de 1993, el tribunal de habeas corpus estimó que la detención cuestionada se ajustaba a derecho y que, en consecuencia, no padecía de vicios de injuridicidad.

Entre las razones que esgrimió el Segundo Tribunal Superior de Justicia, se tiene aquélla que dice relación con el hecho de que el imputado fue llamado a juicio de manera genérica como supuesto infractor de normas contenidas en el Capítulo I, Título X, Libro II del Código Penal.

A juicio del tribunal ad quem esta particularidad no hace posible que se determine en esta oportunidad cuál es la norma concreta que el sindicado infringió, pues para tales

efectos es necesario que medie un pronunciamiento del tribunal de la causa sobre la culpabilidad y grado de participación del justiciable. Y concluye: "No es presumible entonces, sin la determinación del grado de responsabilidad, la pena que cabe o no a un encausado por delito de peculado que en su variedad conlleva pena que va desde los treinta (30) días multa hasta diez (10) años de prisión, según el tipo o modalidad de la infracción y máxime cuando a SIMONS se le señala de haber recibido dineros en efectivo provenientes de cheques que por órdenes suyas se cambiaban obviando los procedimientos que para ello había establecido la Caja de Ahorros."

Contra el anterior pronuciamiento, se interpuso oportunamente recurso de apelación, motivo por el cual ingresó el negocio al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En el escrito de sustentación del recurso interpuesto, la firma recurrente manifiesta que no es cierto que el tribunal de habeas corpus no pueda calificar provisionalmente el delito que se le imputa a su defendido, pues ello es necesario cuando se decide un habeas corpus o una fianza de excarcelación.

Por otro lado, sostiene que el tribunal ad quem hace afirmaciones sobre hechos que no constan en el proceso, tales como que su representado recibió dinero en efectivo proveniente de cheques que, por órdenes suyas, fueron cambiados obviándose los procedimientos establecidos previamente por la Caja de Ahorros.

Para fallar se adelantan las siguientes consideraciones:

En primer lugar es necesario destacar que le asiste razón al apelante cuando indica que es necesario que el tribunal de habeas corpus realice una calificación provisional del delito, toda vez que ello es indispensable para determinar la pena con que el ilícito es sancionado y, en consecuencia, para determinar si la detención es ilegal o no. Así lo ha entendido alguna jurisprudencia de la Corte, y ello se deduce, contrario sensu, de las disposiciones que regulan lo relacionado a las circunstancias que debe tomar en cuenta el funcionario al momento de ordenar una medida cautelar, pues la concurrencia de dichas circunstancias, además de las previstas en el artículo 2158 del Código Judicial, son las que debe verificar y valorar el tribunal de habeas corpus para poder decidir sobre la legalidad de la medida cautelar.

Lo anterior exige que esta Corporación de Justicia realice un somero examen sobre las piezas procesales, a efectos de determinar si concurren los aspectos de fondo y de forma que han de fundamentar una orden de detención preventiva.

Así se observa que mediante auto N°49 de 26 de junio de 1992, el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial abrió causa criminal contra JAIME SIMONS BRAGIN por infractor de normas legales contenidas en el Capítulo I, Titulo X, del Libro II del Código Penal, esto es por el delito genérico de peculado. En esa resolución el juzgado de la causa ordenó la detención del imputado. Elevado el proceso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia, éste, mediante resolución de 5 de octubre de 1993, confirmó tanto el enjuiciamiento como la orden de detención decretada por el juez de la causa.

Al estudiar el auto de enjuiciamiento, no se advierte lo manifestado por la firma recurrente, en el sentido de que de los considerandos de dicha resolución se desprende que JAIME SIMONS BRAGIN fue enjuiciado por delito de peculado culposo. Por el contrario, las imputaciones que se le endilgan en dicha pieza procesal parecen apuntar a un delito doloso, tal como se puede observar en el siguiente extracto:

> "Con este ilícito se encuentran vinculados JAIME SIMONS BRAGIN, OSVALDO SINISTERIA, ÁNGEL SANTOS BUITRAGO, UBALDO DAVIS, ya que de las pruebas que emergen del proceso tales como el informe de Auditoría que señala y que demuestra las personas que autorizaron las solicitudes de pagos de los cheques de gerencia objeto de este proceso, de las declaraciones juradas de los testigos y aún de las declaraciones de parte, que en forma clara y concordante permiten vislumbrar cual era el sistema que se seguía, como se originaban éstas órdenes que concluían en la obtención fraudulenta de un dinero proveniente de las arcas de la Caja de Ahorros, el cual fue sustraído sin justificación satisfactoria debido a órdenes emanadas supuestamente de los más altos niveles, las cuales activaban todo un proceso dentro del engranaje que culminaba supuestamente con el acto ilícito en mención" (sic).

Ahora bien, al analizar las piezas procesales se observa que el señor JAIME SIMONS BRAGIN, al igual que un número plural de personas, fue investigado por delito de peculado cometido en detrimento de la Caja de Ahorros.

Los elementos de convicción demuestran que el ilícito mencionado fue cometido durante un período de tiempo, y que el medio ideado para consumarlo consistía en lo siguiente: se expedían unos cheques de gerencia en favor de una empresa inexistente (la cual no aparecía inscrita en el Registro Público), los cuales, previa orden emanada de altas autoridades de la Caja de Ahorros, eran cambiados en diversas sucursales de dicha institución. Esta operación provocó una gran lesión al patrimonio de la citada empresa estatal, según se deduce del correspondiente informe de auditoría.

De la declaración de FLOR DE GRACIA (fs. 190 - 197) se deduce que varias de las órdenes dirigidas con el objeto de que se accediera al cambio de cheques de gerencia, provenían de la Gerencia General de la Caja de Ahorros.

Las circunstancias anotadas, unidas al hecho de que el cargo de Gerente General era desempeñado por el señor JAIME SIMONS BRAGIN en la época en que se cometió el ilícito, y al hecho de que todo parece indicar que los implicados ejecutaban sus actos con base

en plan preconcebido, conducen a la conclusión de que ciertamente el sindicado no ha sido enjuiciado por una conducta culposa, sino que, por el contrario, los medios probatorios indican más bien que se trata de un delito doloso.

En consecuencia, tratándose de delito de peculado doloso, y siendo que, por su penalidad, la ley autoriza la detención de las personas que estén implicadas con el mismo, la Corte concluye que, al haber observado el juez de la causa los requisitos formales inherentes a la medida cautelar impugnada, la detención preventiva decretada es legal y, por tanto, procede la confirmación de la resolución apelada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución dictada el 28 de octubre de 1993 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, que declaró legal la detención decretada contra JAIME SIMONS BRAGIN por el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LAS SEÑORAS ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ, MARISOL MARTÍNEZ Y NUBIA MARTÍNEZ EN CONTRA DEL SEÑOR PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Edilberto Koocssy Pérez, actuando en representación de la señora Elvecia Valdivieso de Martínez, Marisol Martínez y Nuvia Martínez, ha interpuesto recurso de habeas corpus en contra del Procurador de la Nación.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Procurador de la Nación, dicho funcionario contestó, mediante Vista No. 47 de 30 de noviembre de 1993, lo siguiente:

> "1ª Si es cierto que se ordenó la detención preventiva de las señoras **ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ**, **MARISOL MARTÍNEZ VALDIVIESO**, **NUBIA MARTÍNEZ VALDIVIESO**, y de **AQUILINO MARTÍNEZ VALDIVIESO**, mediante Resolución fechada 19 de octubre de 1993, la cual obra a fojas 36 - 39 del sumario.
>
> 2ª La orden emitida se fundamentó en el hecho de que el pasado 16 de octubre de 1993, se realizó, cumpliendo con todas las formalidades legales, diligencia de allanamiento de la residencia No. 27-B67, ubicada en Calle Altamira, distrito de San Miguelito, en la cual se encontró 95 carrizos plásticos, transparentes, contentivos de una sustancia en polvo, color blanco, 21 fragmentos de una sustancia sólida, color crema, compatible con la droga conocida como Crack o "PIEDRA", cierta cantidad de sustancia compacta de color blanco. En la diligencia en comento hubo resistencia (violencia física y psíquica) a la práctica de la misma, y finalmente cuando se encontró la sustancia antes descrita, ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ, manifestó al despacho que la droga encontrada "... tiene que ser del que se fue", refiriéndose a AQUILINO MARTÍNEZ VALDIVIESO, a quien las tres damas protegieron para que se diera a la fuga.
>
> Es cierto que las prenombradas ciudadanas negaron toda vinculación con la sustancia encontrada, más sin embargo, AQUILINO MARTÍNEZ VALDIVIESO, luego de haberse entregado voluntariamente, acepta que la sustancia era de su propiedad y que se trataba de "COCAÍNA".
>
> Como quiera que las señoras VALDIVIESO DE MARTÍNEZ y MARTÍNEZ VALDIVIESO, con la conducta realizada en el allanamiento dieron muestras que tenían conocimiento certero de la existencia de la sustancia que fue encontrada, se ordenó la detención de las mismas. Aunado a ello la diligencia en mención tuvo su origen, luego de que se tuviera pleno conocimiento, que en el lugar allanado se dedicaban a la venta de sustancias ilícitas.
>
> En razón de que existen dudas, en relación al resultado del análisis de la sustancia encontrada, las cuales están pendientes de resolver, para lo cual el despacho a nuestro cargo está realizando las investigaciones de rigor, se ha mantenido la situación jurídica de las mismas.
>
> No obstante lo anterior, la orden fue emitida antes de que se obtuviera el resultado del análisis de la sustancia, y hemos de aceptar que es cierto que en los delitos contra la salud pública, el hecho punible se comprueba fehacientemente con el examen de que los facultativos o peritos hagan a la sustancia que se presume ilícita (DROGA), por lo que tenemos que reconocer, que al haberse obtenido resultados negativos en este caso, la orden de

detención proferida deviene ilegal, ya que no se encuentra configurado "EL CUERPO DEL DELITO".

En razón de lo antes expuesto solicitamos se decrete ilegal la orden de detención emitida en la Resolución fechada 19 de octubre de 1993, no sin antes haber dejado plasmadas las razones de hecho y de derecho que motivaron la misma.

3. Las señoras ELVECIA MARTÍNEZ VALDIVIESO, MARISOL MARTÍNEZ VALDIVIESO Y NUBIA MARTÍNEZ VALDIVIESO, se encuentran recluidas en el Centro Femenino de Rehabilitación, el señor AQUILINO MARTÍNEZ VALDIVIESO, en la Cárcel Modelo a órdenes de este despacho, pero de inmediato son puestos a disposición de ese Tribunal de Justicia."

La Corte observa que existe una orden de detención escrita, visible a fojas 36 a 39 del expediente contentivo de las sumarias, expedida por autoridad competente como lo es el Procurador General de la Nación y en la cual se ordena la detención preventiva de AQUILINO MARTÍNEZ VALDIVIESO, ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ, MARISOL MARTÍNEZ VALDIVIESO y NUBIA MARTÍNEZ VALDIVIESO por cuanto, a juicio de dicho funcionario, constaban en autos suficientes elementos probatorios que vinculan a los antes mencionados, los cuales emergen a su vez de lo plasmado en el acta de allanamiento, del Informe de Comisión presentado por los colaboradores de instancia, los miembros de la Policía Técnica Judicial, que participaron en la diligencia. De igual forma de las propias declaraciones de los inculpados, se desprenden elementos lógicos y que son contradictorios para la justificación de la conducta típica que se le imputa.

Sin embargo, se observa, a foja 49 del expediente contentivo de las sumarias el informe rendido por la Sección de Sustancias Controladas del Departamento de Criminalística de la Policía Técnica Judicial en relación al análisis de la evidencia incautada, consistente en 95 carricitos plásticos transparentes, pegados en ambos extremos, contentivos de una sustancia en polvo, color blanco y 21 sustancias compactas de color crema, un pedazo de papel plástico transparente, contentivo de cierta cantidad de sustancia compacta de color blanco. El resultado del análisis de las muestras fue negativo, por droga ilícita.

En vista de la situación antes expuesta y de que el propio Procurador General de la Nación en su vista solicita que se decrete ilegal la orden de detención emitida en la Resolución fechada el 19 de octubre de 1993 por no encontrarse configurado el cuerpo del delito, esta Corporación encuentra procedente decretar la ilegalidad de la detención por carecer, esta última, de fundamento legal, por cuanto la evidencia incautada resultó negativa al examen de droga ilícita.

Por último, no deja de causar cierta extrañeza a esta Corte la posición del Ministerio Público en este caso de mantener la detención preventiva de las demandantes a sabiendas de que la detención es ilegal, tal como se señala en el informe contenido en la Vista No.47 de 1993, antes citada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención de las señoras ELVECIA VALDIVIESO DE MARTÍNEZ, NUBIA MARTÍNEZ Y MARISOL MARTÍNEZ y ORDENA la libertad inmediata de las detenidas siempre que las mismas no tengan otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO JOSÉ MATA ZÚÑIGA Y EN CONTRA DE LA FISCAL SEXTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ (APELACIÓN). MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresa a la Corte Suprema de Justicia el proceso constitucional de habeas corpus promovido por el licenciado JOSÉ PICO CASILLERO en favor del señor **MARIO JOSÉ MATA ZÚÑIGA** y en contra de la Fiscal Sexta del Circuito de Panamá, decidido en forma contraria a las pretensiones del demandante por el **Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial** mediante resolución de 9 de noviembre de 1993.

El habeas corpus preventivo promovido por el demandante tiene por objeto que se declare la ilegalidad de la detención preventiva ordenada por la Fiscal demandada mediante proveído de 25 de octubre de 1993, ya que a juicio del accionante la misma fue decretada en violación de la ley procesal penal y sin que existieran los elementos probatorios necesarios para adoptar tal medida.

Al resolver en primera instancia la demanda de habeas corpus el Segundo tribunal Superior, mediante resolución que aparece a fojas 26-31 del expediente, declaró legal la orden de detención dictada por la Fiscal en contra de Mario José Mata Zúñiga, decisión que fue apelada por el demandante.

En su fallo el Tribunal Superior, luego de efectuar un análisis de los distintos requisitos consagrados en el artículo 2159 del Código Judicial, considera que esta comprobado el hecho punible imputado con el informe que aparece a foja 84 del expediente principal; los elementos allegados al expediente que comprueban el hecho punible los ubica en el mismo informe, que pone en evidencia la existencia de 197,800 gramos de COCAÍNA que fueron hallados dentro de treinta y cinco compresores que fueron llevados a la sección de carga en el aeropuerto internacional de Tocumen y la vinculación del sujeto con el hecho punible se acredita con:

> "... los testimonios de MILVIA MARÍA TEJADA, ALEJANDRO OTTO LITTMAN ARCIA, KARL JOSÉ COOMBS (L) KARLO HERON (U), OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ ALZAMORA, LEONIDAS CASTILLO GONZÁLEZ, REINIER ALBERTO TENAS GUADALUPE y CARLOS ALBERTO TEM LORENZO, quienes en sus respectivas deposiciones han indicado a MARIO JOSÉ MATA ZÚÑIGA, como la persona que enviara la droga objeto de la investigación a través de la Compañía Sicsa, en su condición de "Gerente General" y, de igual manera, han expresado que con respecto a la forma en fueron llenadas y firmadas las guías, las cuales sólo basta revisar lo actuado a fojas 3, 4, 5 y 6, se notará la falta de cuidado en dicha confección, ya que no coinciden en tiempo y hasta existe, según el testigo Palma (Fojas 167) alteración en la firma de las mismas".

El recurrente, por su parte, en extenso escrito de sustentación de su recurso, en lo medular, sostiene que "la resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia que resulta apelada, no está precedida de un análisis de las pruebas testimoniales que dicen vinculan a Mario José Mata Zúñiga con el delito de "Tráfico Internacional de Drogas" (f.34).

Más adelante, en su escrito el apelante señala que "las declaraciones citadas por el Segundo Tribunal Superior para declarar legal la detención, también fueron invocados (sic) por la Fiscal Sexta de Circuito para decretarla, pero no vinculan a mi representado con el delito bajo estudio" (f.34).

Para decidir el recurso de apelación, la Corte debe analizar si se encuentran reunidos o no los requisitos establecidos en el artículo 2159 del Código Judicial, para lo que se hace imprescindible analizar los argumentos utilizados por el juzgador de primera instancia sobre el particular.

La Corte concuerda con el Segundo Tribunal en que estamos en presencia de un delito de tráfico internacional de drogas, ya que se pretendió sacar del territorio nacional una importante cantidad de drogas dentro de unos compresores que pretendían ser exportados hacia Puerto Príncipe, Haití.

No cabe duda que la tipificación del delito ha sido correcta y que la sustancia encontrada dentro de los treinta y cinco compresores era COCAÍNA.

Están reunidos, por tanto, los dos primeros requisitos del artículo 2159 antes mencionado.

Para establecer la vinculación de Mata Zúñiga con el delito objeto de la investigación que se adelanta en la Fiscalía Sexta del Circuito de Panamá, es necesario analizar el contenido de las declaraciones testimoniales que reposan en el expediente principal, así como de los restantes elementos probatorios que aduce el Segundo Tribunal Superior de Justicia en su resolución de 9 de noviembre de 1993.

La declaración testimonial de MILVIA MARÍA DE TEJADA, visible a fojas 57-61 y 62-66, evidencia que a la residencia del señor Mata se presentó un sujeto con acento extranjero que quería enviar una carga fuera del país, que la misma era muy pesada y no pudo ser subida hasta el octavo piso del edificio en donde funcionaba momentáneamente la oficina, que la misma consistía en compresores y que tenía que ser pesada en otro lugar y sellada en forma correcta para su envío aéreo.

Reiner A. Tenas G., mensajero y ayudante de oficina en la empresa SICSA, en declaración visible a fojas 145-150, señaló que el día de los hechos, a eso de las 5:30 p. m., llegó un cliente, que dijo ser un turista, y que quería enviar una mercancía para JAMAICA o HAITÍ, y que el señor fue a buscar la mercancía y que luego regresó con dicha mercancía y la trajo a Vía Argentina, donde estaban haciendo la remodelación de la oficina de M.D. Cargo y que "cuando el turista llegó con la mercancía nos dijo que le armáramos las cajas de madera para meter los compresores de aire acondicionado. Luego cerramos las cajas de madera con los compresores dentro, las marcamos y las sunchamos, las llevamos al aeropuerto las entregamos como a un cuarto para las once de la noche " (f.146).

En esa misma declaración, dicho testigo señala más adelante (fs.148) que en compañía de su compañero Carlos Tem hicieron la labor antes descrita, en el sentido de empacar los compresores dentro de cajas de madera y llevarlas al aeropuerto, momento en que luego se confeccionó la guía en el aeropuerto, ya que la máquina de escribir se había dañado por el secuestro que habían tenido en la empresa y que por esa razón la guía llegó en blanco al aeropuerto.

Carlos Tem Moreno en su declaración, visible a fojas 154-157, concuerda en todo con lo expresado por Reiner Tenas, al tiempo que añade que el día de los hechos estuvieron en el aeropuerto esperando a los agentes de narcóticos unas dos horas más o menos, pero

que los mismos no llegaron pues no tenían un vehículo para transportarse hasta la terminal de carga (f.155).

En sus declaraciones Sergio Palma (fs.50-53 y 166-167) describe cómo llegó la mercancía al depósito de carga de COPA, las indicaciones que hizo sobre la necesidad de que agentes de narcóticos revisaran las cajas y las razones por lo que a su juicio la carga en cuestión no fue manejada en forma normal o usual por el señor Mata Zúñiga, pero no aporta mayores elementos que incriminen gravemente al imputado.

Igual ocurre con la declaración del señor Alejandro Otto Littman, gerente de Carga de Copa, quien proporciona detalles que no vinculan a Mata Zúñiga con el ilícito que se intentaba cometer al enviar droga hacia Haití dentro de compresores de aire acondicionado (fs.168-169).

Las restantes declaraciones que aparecen en el expediente principal contienen las versiones de los agentes de narcóticos y de Aduanas que han intervenido en la investigación, pero que no aportan nada significativo en contra de Mario José Mata Zúñiga.

Los hechos antes relatados evidencian que un sujeto trató de utilizar los servicios de la empresa SERVICIOS INTERNACIONALES DE CARGA PANAMÁ, S. A. para sacar del territorio nacional una cuantiosa cantidad de COCAÍNA, que estaba introducida dentro de treinta y cinco compresores de aire acondicionado embalados para ser enviados hacia Puerto Príncipe, Haití.

No cabe duda que la carga que se pretendió enviar a nombre de los señores Iván David González y Juan José Uribe y cuyos destinatarios eran Maurice Polinis y Joseph Cler Vil, en Haití, contenía una importante cantidad de COCAÍNA, pero de las declaraciones allegadas al expediente no se deduce grave vinculación de Mario José Mata, quien como Gerente de la empresa SERVICIOS INTERNACIONALES DE CARGA PANAMÁ, S. A. tramitó el envío de la carga por Copa.

El sumario adelantado en la Fiscalía Sexta del Circuito evidencia que la mercancía fue llevada primero a la planta baja del edificio en donde funcionaba, de forma temporal, la oficina de la empresa SICSA y luego a Vía Argentina, donde fue embalada y cerrada por los empleados de la compañía de carga que luego la transportaron al aeropuerto.

Nada indica, por el momento, que Mata Zúñiga tenía conocimiento del contenido de los compresores, ya que dicha mercancía esta sellada y nadie notó nada fuera de lugar en el momento de recibir dicha carga.

Pretender justificar la detención preventiva de Mario José Mata Zúñiga es inaceptable, por lo menos con las constancias procesales reseñadas, ya que su comportamiento no puede ser tenido como delictivo.

Está comprobado que la empresa no tenía oficinas para el día de los hechos, que estaban remodelando un nuevo local, que habían sido secuestrados por CONSOLIDADA CUBANA DE AVIACIÓN, S. A., tal como se aprecia en diligencia cuya copia reposa a foja 137 y siguientes, por lo que se desvanece el indicio apreciado por la instructora y que surgía de la forma poco usual en que se entregó la mercancía en la terminal de carga de Copa.

La orden de detención dictada por la Fiscal demandada carece de fundamento en cuanto a la vinculación de Mario Mata Zúñiga con el ilícito investigado, ya que los elementos probatorios reseñados no lo vinculan directamente con el ilícito en cuestión.

Es obvio, por tanto, que la detención preventiva ordenada por la Fiscal Sexto debe revocarse, ya que de lo contrario se estaría atentando seriamente contra la seguridad jurídica en todo el mundo comercial si el transportista o embarcador pudiese ser, por ese solo hecho, responsable de los ilícitos que se pretendan cometer por medio de la carga transportada o embarcada.

No en vano la misma Corte Suprema de Justicia en fallo reciente, a propósito de un transportista que llevaba tanques de pintura para un barco ubicado en Coco Solo, decretó ilegal la detención del mismo, ya que había sido utilizado en forma inocente y sin responsabilidad alguna, por quien le entregó la mercancía para que la llevara hacia un barco que estaba en Colón.

El negocio de la droga debe ser combatido por todos y sin claudicar, pero no puede llegarse a extremos como los que motivan esta actuación, a menos que se tengan serios elementos probatorios en contra del sujeto que, como en esta ocasión, sólo recibe la mercancía por medio de sus empleados que la embalan y llevan, junto a él, al aeropuerto.

Las consideraciones que anteceden ponen en evidencia que debe revocarse el fallo recurrido y declararse que no es legal la orden de detención preventiva dictada el 25 de octubre de 1993 en contra de Mario José Mata Zúñiga por la Fiscal Sexta del Circuito de Panamá, dentro de las sumarias iniciadas por razón del intento de sacar droga del territorio nacional con destino a Haití por medio de mercancía enviada a través de la empresa SERVICIOS INTERNACIONALES DE CARGA, S. A. y la línea aérea Copa.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, previa revocatoria de la resolución impugnada, DECLARA ILEGAL la orden de detención decretada en contra de MARIO JOSÉ MATA ZÚÑIGA expedida por la Fiscal Sexta del Circuito de Panamá.

Derecho: Artículos 2159, 2592 y 2602 del Código Judicial y artículo 21 de la Constitución Nacional.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD EN CONTRA DEL FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Cecilio César Castillero Carrasco**, defensor de oficio de la Provincia de Colón, presentó Recurso de Apelación contra la sentencia de Habeas Corpus de 25 de noviembre de 1993 del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial mediante el cual se declara legal la detención preventiva del señor **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** por el supuesto delito contra la Salud Pública.

El Segundo Tribunal Superior consideró, para arribar a la conclusión de la legalidad de la detención, los siguientes argumentos:

> "El sumario bajo estudio nos demuestra que estamos ante la presencia de un delito de posesión de drogas con el propósito de suministrarla en venta o traspaso, lo cual infringe lo estipulado por el artículo 260 párrafo segundo del Código Penal y el cual contempla para sus transgresores sanción de cinco (5) a diez (10) años de prisión.
>
> En atención a que el hecho imputado contempla sanción principal de prisión para sus posibles transgresores, prevé detención preventiva según lo establece el artículo 2148 del Código Judicial. Es importante indicar que la detención preventiva procede, cuando esté comprobado que se ha llevado a cabo un comportamiento contrario a la Ley penal vigente al momento de la comisión del delito o cuando el autor es sorprendido en flagrante delito y existen elementos probatorios que vinculan a la persona imputada con el hecho punible que se investiga, como lo señala el artículo 2159 del Código Judicial.
>
> El Representante del Ministerio, no ordenó la detención preventiva del señor TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD MASTERS, pero sí mantuvo la misma en providencia de fecha 16 de septiembre de 1993.
>
> Adecuando la evaluación jurídica planteada al negocio que tenemos bajo examen, observamos que a través de los medios de pruebas examinados quedó demostrada la nocividad del material encautado a los imputados.
>
> En cuanto al grado de responsabilidad que le cabe al imputado TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD, consideramos que ésto será debatido en la etapa procesal correspondiente, en vista que tales aspectos rebasan el radio de acción de un juicio especial constitucional de habeas corpus.
>
> Por lo examinado concluimos que no ha sido violentada garantía procesal penal alguna, porque el negocio fue conducido por autoridad competente y está debidamente comprobada la nocividad del material incautado, además de que constan elementos que vinculan al imputado con el hecho punible, por lo que se observa que se han respetado los principios rectores del proceso penal. El imputado fue sorprendido mientras que en compañía de otros sujetos, trataba de vender drogas.
>
> Los argumentos desarrollados permiten concluir que la detención preventiva del señor TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD es legal."

El licenciado **Castillo**, defensor de **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** expone en favor de su patrocinado los siguientes argumentos:

> "Discrepamos jurídicamente con el fallo recurrido, porque somos del criterio que la orden de detención, vulnera el principio de inocencia, como también el precepto legal que establece que para mantener la detención en contra de un ciudadano, además de la orden escrita dictada por una autoridad competente, debe existir elementos de pruebas en contra del sindicado.
>
> Como lo expresamos en la demanda de HABEAS CORPUS, al iniciarse la investigación sumarial existía un leve indicio en contra de nuestro defendido, pero al adelantarse las mismas, surgieron elementos de pruebas que hacen resaltar la inocencia del acusado, por ende conceptuamos, que el Ministerio Público debe ordenar su libertad o en todo caso, concederle una medida cautelar mas tolerable que la detención preventiva.

> Con el debido respeto al Señor Fiscal, le corresponde al Ministerio Público probar la culpabilidad del acusado y este tiene el derecho que se le presuma su inocencia, no obstante en el proceso, pareciera sustentarse lo contrario.
>
> Somos conscientes del empeño e interés de todas las Autoridades de combatir el delito de drogas, que tanto mal ocasiona a la sociedad y la familia, no obstante convivimos en un estado de derecho, donde se exige a los Jueces y Fiscales cumplir y garantizar un debido proceso y dictar fallos conformes a los principios rectores, consagrados en nuestra Constitución y normas procesales."

Un análisis de las constancias procesales indican que los hechos ocurrieron de la siguiente manera: que la policía llegó al lugar en que se encontraban varios jóvenes sentados en una escalera, en la calle 12 y 13 de la Avenida Herrera de la Ciudad de Colón. A continuación se le pidió la cédula a los que se encontraban en el lugar y se les permitió retirar a los que portaban el documento, entre los que se encontraba el joven **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD**. Se mantuvo detenido a Roberto Ortiz Fox quien no portaba cédula. Fue entonces cuando **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** fue a buscar la cédula de Ortiz Fox y cuando regresó la policía detuvo a **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** porque mientras éste buscaba la cédula encontraron cocaína en cantidad de 4.40 gramos en diez sobrecitos en un orificio de la pared a la subida de la escalera.

Como se puede apreciar no se encontró en la persona de **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** ninguna cantidad de droga y a éste la policía lo había dejado ir por esta misma razón y fue posteriormente que lo detuvieron cuando encontraron droga en la escalera donde ellos se encontraban sentados.

Consideramos que no existen pruebas lo suficientemente fuertes para vincular a la persona de **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** en la comisión del delito que se investiga aparte que la conducta de éste al regresar al sitio, demuestra por lo menos que no se sentía culpable de ningún hecho delictivo. También consta a foja 17 del expediente penal que **TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD** no tiene antecedentes penales de ninguna clase.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 25 de noviembre de 1993 del Segundo Tribunal Superior de Justicia y en su lugar DECLARA ILEGAL la detención de TORIANO ALEJANDRO ARCHIBOLD.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE OMAIRA ESTHER RIVERA DE BERMÚDEZ EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993.

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El abogado EMILIO ROYO LINARES, mediante escrito presentado a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, solicitó que se decretara la libertad de la señora **OMAIRA RIVERA DE BERMÚDEZ** a favor de quien presentó una acción de habeas corpus y contra el Procurador General de la Nación.

Librado el mandamiento de habeas corpus, se recibió la Vista N°48 de 6 de diciembre y que obra de folios 7 a 9 de este cuaderno, mediante el cual el Jefe del Ministerio Público señala que en efecto, ordenó la detención provisional de la señora Rivera Bermúdez mediante resolución emitida el 21 de octubre, fundamentada en una diligencia de allanamiento que se practicó en su residencia en Las Acacias, calle 3ª y al lado de la misma, en el patio, encontraron estacionado un yate que en su interior tenía un cargamento de la sustancia ilícita conocida como cocaína. Sostiene el señor Procurador en su informe, que tanto la señora Omaira como su esposo, han guardado un hermetismo en cuanto a la procedencia de la embarcación y de su contenido y tampoco han dado información sobre la o las personas que les encomendaron el cuidado o estacionamiento del yate, ubicando su actuación dentro de los presupuestos de la Ley 23 de 1986, especialmente cuando la cantidad de sustancia ilícita asciende a 633.150.0 gramos.

En otros casos registrados recientemente en los que han aparecido vehículos de toda clase con grandes cargamentos de droga, los dueños de los estacionamientos han asumido la misma actitud de negar toda vinculación o conocimiento sobre los dueños de tales vehículos y demuestran una total ignorancia sobre la sustancia ilícita decomisada. La Procuraduría califica tales silencios como indicadores de complicidad y de falta de colaboración en la investigación del hecho delictivo.

Al examinar las diligencias que se han adelantado en esta investigación se puede apreciar que en el acta que recoge las incidencias y que fue firmada por los residentes de la casa 402 en la que se practicó el allanamiento, no aparece objeción alguna sobre

el contenido del documento levantado de parte del señor Bermúdez en cuanto a la procedencia de la embarcación de lujo que se encontró en el patio de su residencia. Respecto a la supuesta participación de la señora Omaira Esther Rivera de Bermúdez, los elementos de juicio incorporados al sumario, a juicio del Pleno, no son suficientes para vincularla directamente en la incorporación de la droga o al conocimiento del contenido del yate en el que se encontró esa gran cantidad de cocaína. La situación es distinta en cuanto a Eduardo Alberto Bermúdez, pero la presente acción no se promovió a su favor.

El Pleno anota empero, que esta apreciación preliminar no impide que si en el curso de la investigación aparecieran indicios graves u otros medios probatorios que acrediten la participación de la señora Rivera de Bermúdez en cualquiera de las conductas que dieron lugar a que el yate "Guayabo" fuera estacionado en su residencia con el cargamento de sustancias ilícitas, se reunirían entonces los indicios de criminalidad para sustentar la medida cautelar adoptada en su contra.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de la señora OMAIRA ESTHER RIVERA DE BERMÚDEZ y ordena su inmediata libertad si no existe otra causa penal en contra.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE JEAN ERNEST BOSKET EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez en representación de JEAN ERNEST BOSKET presentó a la Secretaría General de ésta Corporación Judicial, recurso de habeas corpus contra el Procurador General de la Nación, con motivo de la privación de libertad en que se encuentra, investigado por el supuesto delito de tráfico internacional de drogas.

Al librarse el mandamiento de habeas corpus, la autoridad acusada remitió el Oficio N°DPG-SD-8877-93 de 15 de diciembre del año en curso en el que manifiesta que desde el 14 de diciembre el señor Bosket se encuentra a órdenes de la Fiscalía Primera de Circuito de turno, a fin de que las sumarias que se adelantan en su contra sean sometidas a las reglas de reparto correspondiente.

La información anterior demuestra que la autoridad jurisdiccional competente para conocer de la acción de habeas corpus, lo es el Segundo Tribunal Superior de Justicia y dada la naturaleza de estos recursos en donde esta en juego la libertad individual, según los preceptos legales vigentes cabe declinar de inmediato el conocimiento del caso a fin de que se le impriman los trámites de rigor.

Por tanto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA el conocimiento del presente caso ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia y DISPONE que se haga la remisión del expediente en el término de la distancia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR BOLÍVAR IGLESIAS CABAL Y EN CONTRA DEL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Castor Sánchez Dyamond, actuando como apoderado judicial del señor **BOLÍVAR IGLESIAS CABAL**, ha presentado acción de habeas corpus en contra del señor Fiscal Auxiliar de la República.

La presente acción de habeas corpus accede al sumario que se adelanta en la Fiscalía Auxiliar de la República, contra los señores Bolívar Iglesias Cabal y Luis González Báez, por el supuesto delito de hurto cometido en perjuicio del ciudadano panameño Roberto Durán Samaniego, cuya cuantía se estima en B/.150,000.00 (ciento cincuenta mil balboas). En dicho sumario se ordenó la detención de los supuesto involucrados.

Señala el demandante que su representado, Bolívar Iglesias Cabal, se encuentra injustamente detenido en la Cárcel Modelo a órdenes de la Fiscalía Auxiliar. Alega el demandante, que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, al resolver apelación de la fianza de excarcelación solicitada por la defensa técnica de Luis González Báez en el supuesto delito que se investiga, consideró lo siguiente:

> "El artículo 204 del Código Penal señala que no se instruirá sumario en los casos en que los delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y usurpación, se comentan en detrimento de un cónyuge o pariente cercano. Mientras que el Código Judicial, en su artículo 2023, numeral 2°, establece que no podrán ejercer acción penal entre sí los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o fines; con excepción de aquellos delitos cometidos por uno contra la persona del otro.

De las normas mencionadas se desprende que nos encontramos ante una causa de no punibilidad, cuya característica principal consiste que el hecho punible se cometa en detrimento de un pariente cercano; en el caso que tenemos bajo estudio, el autor principal del hecho que se investiga, es hermano por afinidad del ofendido, por lo tanto, consideramos que con relación a ese sujeto el sumario no debe continuarse. En cuanto al señor GONZÁLEZ BÁEZ, la situación es distinta, ya que el mismo no tiene ningún vínculo de parentesco con el ofendido, por lo tanto, somos del criterio que la investigación debe seguir su curso" (fs. 49 y 50).

Lo cierto es que el Segundo Tribunal Superior, al resolver la apelación interpuesta contra el Auto que fijaba fianza de excarcelación a favor del sindicado González Báez dispuso declinar competencia, ya que a juicio de dicha colegiatura, el delito atribuible a González Báez era el de aprovechamiento de cosas provenientes del delito, tipificado en el artículo 364 del Código Penal, cuya competencia está asignada a los Juzgados Municipales.

Pese a todo lo anterior, se alega en la acción de habeas corpus, el señor Iglesias Cabal aún se encuentra detenido en la Cárcel Modelo.

Recibido el escrito se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad acusada, quien respondió mediante oficio N°13760 del 23 de noviembre de 1993, en la que confirma que sí ordenó la detención del demandante mediante proveído de 8 de octubre de 1993 y que aún está detenido en la Cárcel Modelo a órdenes de su Despacho.

Considera el señor Fiscal Auxiliar que en el cuadernillo del sumario existen suficientes elementos de juicio para vincular al señor Iglesias con el hecho que se le imputa, por lo que ordenó su detención, señaló como fundamento de Derecho los artículos 2148 y 2559 del Código Judicial.

**CRITERIO DE LA CORTE**

Revisado el cuaderno en el que se encuentra parte de la actuación de la Fiscalía Auxiliar en el presente proceso el Pleno de la Corte ha podido constatar que, efectivamente, de fojas 2 a 6 del cuadernillo de Habeas Corpus reposa copia auténtica de la Resolución del 8 de noviembre de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial la cual concluye que el proceso penal que se le sigue al señor Bolívar Iglesias Cabal debe ser suspendido en base a lo establecido por los artículos 204 del Código Penal y el 2023, numeral 2 del Código Judicial.

Efectivamente, los artículos citados por el Tribunal Superior prohiben que se instruya sumario por los delitos de hurto, estafa, apropiación indebida y usurpación, si estos se cometen entre parientes cercanos, artículo 204 del Código Penal, y el numeral 2 del artículo 2023 del Código Judicial señala que no ejercerán acción penal entre sí los ascendientes, descendientes y hermanos consanguíneos o afines, a no ser que se trate de delitos cometidos uno contra la persona del otro. Esta situación se presenta en el caso bajo estudio, pues el señor Iglesias Cabal es cuñado del denunciante, es decir, son parientes en segundo grado de afinidad.

A las consideraciones expuestas, la Corte observa que en este caso la calificación hecha por el Fiscal Auxiliar de los delitos que preliminarmente se le atribuyen tanto al sindicado Iglesias Cabal, como al sindicado González Báez, no corresponden a las constancias que obran en autos. En el último caso, todo parece indicar que, conforme lo advirtió el Segundo Tribunal Superior, González Báez pareciera haber incurrido en el ilícito tipificado por el artículo 364 del Código Penal, que se refiere a la conducta de todo aquel que sin tomar parte en el hecho punible, oculte, adquiera o reciba dinero, valores u objetos que sabía o presumía provenientes de un hecho punible, lo cual descarta el de asociación ilícita para delinquir.

En lo que concierne al sindicado Iglesias Cabal, la relación de los hechos conforme la presentó el denunciante y las pruebas que se ha logrado aportar al sumario, parecen indicar que se está ante la comisión del delito de hurto agravado que contempla el artículo 183, numeral 5 del Código Penal, que hace referencia al hurto que se cometa "con abuso de confianza, resultante de relaciones recíprocas, ... o del hecho de habitar en una misma casa el autor y la víctima del hurto y cuando éste es de cosas que, por consecuencia de esas relaciones, se confían al que se apodera de ellas".

Hecha esta aclaración, el Tribunal de Habeas Corpus observa que la sanción prevista para esta clase de delitos es de veinte a cincuenta meses de prisión, lo que indica que no estamos ante un supuesto que permita decretar la detención preventiva, conforme lo dispuesto en el artículo 2148 del Código Judicial, según fue subrogado por la Ley 3 de 1991.En otras palabras, tratándose de un delito que no tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, que pareciera ser lo que corresponde al caso que nos ocupa, no procede la detención preventiva, por lo que se impone decretar la ilegalidad de la medida impuesta al sindicado Bolívar Iglesias Cabal.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención del señor BOLÍVAR IGLESIAS CABAL y ORDENA que sea puesto en inmediata libertad, siempre que en su contra no milite otra causa.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL EN CONTRA DEL FISCAL SEGUNDO SUPERIOR DEL TERCER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte, la acción de Habeas Corpus interpuesta por **MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL**, en su propio nombre y representación, y en contra del Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial.

Una vez admitida la demanda, se libró mandamiento de habeas corpus contra la autoridad demandada, de conformidad con lo previsto en el artículo 2583 del Código Judicial.

El Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial en el informe correspondiente manifestó que efectivamente ordenó la detención preventiva de MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL, mediante providencia de fecha 2 de diciembre de 1993. Los fundamentos de hecho para ordenar la citada detención, se resumen a continuación:

1. Se ordenó diligencia de allanamiento y registro de la habitación N° 6 de la Pensión Fanita, en la ciudad de David, Chiriquí, la cual ocupaban al momento, la imputada y el señor ALVIN EDGARDO DE LEÓN JONES.

2. En dicha habitación se encontró un envase negro con tapa gris que contenía cierta cantidad de hierba seca, presumiblemente marihuana; dentro de un libro había una hoja verde seca, presumiblemente marihuana también; un paquetito de papel de arroz marca "Smoking" y la suma de ciento sesenta y ocho balboas (B/.168.00) en efectivo.

3. El allanamiento se realizó en virtud de que la Policía Técnica Judicial tuvo conocimiento de que los imputados se encontraban en la citada pensión desde el 16 de noviembre de 1993 y que presumiblemente, se dedicaban a la venta de drogas.

4. MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL aceptó que las sustancias encontradas fueron adquiridas por ella cuando se las proporcionó un joven en el puesto de artesanías donde ella trabajaba; y que el dinero en efectivo hallado en la habitación era el producto de la venta de artesanías por ella realizadas.

5. Señaló igualmente que ella consume droga esporádicamente, pero que no depende física ni psíquicamente de ella.

6. ALVIN EDGARDO DE LEÓN JONES coincide en manifestar que fue MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL quien adquirió la marihuana y que ésta la consume durante su período menstrual. Igualmente, aceptó que él la consume esporádicamente.

Antes de resolver la presente acción de habeas corpus, es preciso determinar si la detención preventiva que se impugna, se ajusta a los requisitos establecidos en el artículo 2148 del Código Judicial, a propósito de este tipo de medida cautelar, específicamente el que señala que la misma no procede cuando se trata de un delito con pena de prisión mínima, inferior a los dos años.

De la evidencia existente en autos, resulta claro por la cantidad de droga incautada (un envase de los que se utilizan para guardar rollos de fotografía), que la imputada pretendía utilizarla para su consumo particular y no intentaba comercializarla ilícitamente.

Siendo así, el delito cometido es el de posesión ilícita de drogas que, de conformidad con el primer párrafo del artículo 260 del Código Penal, modificado por la

ley 23 de 30 de diciembre de 1986, tiene contemplada pena de prisión de uno (1) a tres (3) años y de cincuenta (50) a doscientos cincuenta (250) días multa.

Del texto del citado artículo 260 del Código Penal se desprende el hecho de que la detención preventiva en este caso es ilegal, ya que el delito cometido no tiene señalada pena mínima de dos años de prisión, como requiere el artículo 2148 del Código Judicial.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de MARÍA DEL MAR HERNÁNDEZ CARBONELL y ORDENA ponerla en inmediata libertad.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DEL SEÑOR JESÚS HOQUEE MORALES Y EN CONTRA DE LA FISCAL QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA.PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Corte la sentencia de Habeas Corpus de 17 de noviembre de 1993 del Segundo Tribunal Superior de Justicia en el caso de **ANTONIO JESÚS HOQUEE MORALES**, quien es sindicado por el delito de hurto de un automóvil Nissan Sunny, de 1987 de propiedad del señor Carlos Arquimedes Herrera Cedeño.

El Tribunal Superior consideró que la detención que sufre el sindicado es legal, en base a los siguientes argumentos:

> "Con respecto al vehículo objeto de esta encuentra penal, tenemos que el justiciable fue detenido en posesión del mismo y éste acepto (sic) haberle realizado un trabajo de chapistería y pintura, situación que a nuestro juicio, nos lleva a la conclusión de que la orden atacada de ilegal lleva inserto los elementos contenidos en el artículo 2159 del Código Judicial.
>
> Si bien es cierto la resolución aportada por el recurrente, emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia, calendada 17 de julio de 1992, en donde se plasma una situación jurídica similar a la que nos ocupa, cabe acotar que entre ambas existe una variante determinante, que radica en el hecho de que el ciudadano Hoquee Morales fue detenido en posesión del vehículo hurtado, o sea en flagrancia, circunstancia que lo involucra seriamente con la comisión del ilícito endilgado, razón suficiente para decretar la legalidad de la detención.
>
> Otro aspecto que vale la pena destacar es el hecho que, si bien es cierto el color del vehículo decomisado a Hoquee Morales, no es el mismo del denunciado por Herrera Cedeño, de la diligencia de avalúo suscrita por los peritos Damaris Rodríguez y Emiliano Cruz (ves fojas 26), se colige que el carro incautado tenía el número de chasis alterado y el número de motor es el mismo que el del motor del vehículo del denunciante, tal cuál se colige del documento que prueba la propiedad y preexistencia de fojas 28."

Sostiene el abogado apelante, en contra de la sentencia recurrida, lo siguiente:

> "Con relación a dicho razonamiento, si bien es cierto que nuestro representado fue detenido en posesión del auto, el artículo 2148 del Código Judicial, le exige a las autoridades competentes ordenar la detención preventiva contra aquellas personas que estuvieran sindicadas como autoras o partícipes en hechos punibles que tengan señaladas pena mínima de dos años de prisión o que sean sorprendidos en flagrante delito. (El subrayado es nuestro).
>
> Entonces cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado.

El artículo 2147F del Código Judicial establece que para los efectos de la aplicación de una medida cautelar personal solo se tendrá en cuenta la pena prevista por la ley para cada delito, no así la continuación, reincidencia o circunstancias del mismo, salvo la atenuante común prevista en el artículo 66, numeral 4 del Código Penal.

> CUARTO: En las constancias procesales no se aprecia ningún tipo de señalamiento directo que incrimine directamente a nuestro poderdante como el autor material e intelectual del ilícito bajo investigación.

> QUINTO: Con relación a lo planteado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en lo referente a el Fallo de la Corte Suprema de Justicia aportado por nosotros, señala que entre ambos casos existen variantes determinantes, que radican en el hecho de que nuestro defendido fue detenido en flagrancia delito.
>
> Con relación a dicha tesis discrepamos de la misma, debido a que los Honorables Magistrados que conocieron del presente Recurso, no se percataron de que se trata del mismo delito, es decir el de HURTO tipificado en el Título IV, Capítulo I del Libro II del Código Penal, cuya pena mínima conforme lo establece su artículo 183 es de 20 meses de prisión y por ende es viable en cuanto a derecho la aplicación de unas de las medidas cautelares contenidas en el artículo 2147-B del Código Judicial y así lo han establecido los Honorables Magistrados que componen la Corte Suprema de Justicia a través del fallo aportado por la defensa."

Un análisis de las constancias procesales nos demuestran que estamos frente a un hurto calificado agravado con base en lo dispuesto en el artículo 184 Numeral 3 del Código Penal. Si apreciamos, a foja 19 del sumario, la ampliación de la denuncia del dueño del automóvil Carlos Arquimedes Herrera podemos apreciar que dice lo siguiente:

> "Efectivamente se trataba de mi vehículo denunciado ya que el número de motor es el mismo, el número de chasis se encuentra alterado en tres (3) de sus dígitos, el color del vehículo fue cambiado, ya que era de color gris y ahora ésta (sic) de color verde, los limpia para brisas (sic) se los cambiaron, le hace falta la tapa filtradora de agua en su parte delantera, cabe mencionar que mi vehículo tenía rines de lujo y ahora tiene rines corrientes, dentro del vehículo en momentos que se lo hurtaron, en su parte interior había un juego de llaves de residencia y se distinguía ya que tenía una correita de color chocolate, hace falta una cadena que yo utilizaba para seguridad del vehículo, Señor Fiscal el cilindro de la puerta del conductor fue cambiado no así el cilindro del encendido."

Lo anterior demuestra que para apropiarse del automóvil hurtado, necesariamente se tuvo que, "destruir, romper o forzar obstáculos de cualquier naturaleza establecidos para proteger a la persona o a la propiedad", tal como lo describe el numeral 3 del artículo 184 del Código Penal. Lo anterior, aunado al hecho de que el detenido se encontraba en posesión del automóvil hurtado desde el 5 de julio de 1993 y que se encontraron en dicho automóvil, con base en las declaraciones del policía que hizo la detención, Alcides Alberto Henríquez Velásquez, a foja 53 del sumario, que a parte que el detenido le dijo que **ese era su auto**, encontró en su interior (del auto) un revólver calibre 38 con municiones en su recámara, específicamente 3 municiones, también había 21 municiones calibre 38 calibre especial, 6 municiones de pistola 9 milímetros, 5 municiones de revólver 38, 1 munición de calibre 38 de perdigones entre otra cosa, por lo que al tener el reporte de la riña, se procedió a su arresto ya que portaba el arma sin permiso.

Todo lo anterior demuestra que hay suficientes méritos para mantener la decisión apelada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia del 17 de noviembre de 1993 del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES JAIME GONZÁLEZ Y RODOLFO BONILLA CONTRA LA FISCAL PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, CON SEDE EN LAS TABLAS, PROVINCIA DE LOS SANTOS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado José Luis Varela G. ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de los señores JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA y contra la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, Provincia de Los Santos.

Acogido el recurso y librado el mandamiento de habeas corpus contra la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, dicho funcionario rindió el informe solicitado con fecha 23 de noviembre de 1993, el cual reposa de fojas 6 a 7 del presente expediente. En dicho informe expuso lo siguiente:

> "1o. No hemos ordenado la detención de Jaime Raúl González y Rodolfo Bonilla Sánchez; la misma fue decretada por el señor Personero Municipal del

> Distrito de Las Minas, de manera escrita, ya que así aparece a fojas 40 y 41 del negocio penal.
>
> 2o. La precitada detención de los imputados JAIME RAÚL GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, tuvo motivos o fundamentos en las siguientes pruebas: EL Protocolo de Necropsia, consultable a fojas 169-180, prueba científica que acredita la muerte de ROSAURA CAMPOS, a consecuencia de disparo de arma de fuego en cráneo; además las testificaciones de RAQUEL SOTO (fs. 13-14); CATALINA VÁLDEZ GONZÁLEZ (fs. 16-18), INÉS MURILLO NORIEGA (fs. 24-26); ABILIO CRUZ QUINTERO (fs. 27-30) y JOSÉ MORAN MARTÍNEZ (fs. 300); hechos que los incriminan además de los indicios y presencia física en el lugar del crimen; como también, la existencia del Contrato de Arrendamiento de un vehículo Lada, rojo, donde aparece JAIME GONZÁLEZ, como arrendador (ver fs. 8-9).
>
> 3o. Actualmente los señores JAIME RAÚL GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, se encuentran filiados a disposición del despacho de la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, en la cárcel pública de la ciudad de Chitré, Provincia de Herrera.
>
> No está de más, indicar que anteriormente se nos ha interpuesto Recursos de Habeas Corpus, por los mismos imputados; ,sin que hayan sido favorecidos, y actualmente no han aportado pruebas que disipen su autoría en los hechos que en su contra se investigan" (fs. 6-7).

A fojas 607 del expediente que contiene la encuesta penal que se le sigue a los señores JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA por los delitos de robo en perjuicio de José De La Cruz Ojo y Bolívar Araúz y de homicidio en perjuicio de Rosaura Campos, el ofendido José De La Cruz Ojo Cruz relató los hechos ocurridos el día 29 de diciembre de 1992 en su residencia, en declaración rendida ante el funcionario investigador. Según el señor Ojo Cruz ese día de su residencia se sustrajo dinero y otros objetos entre los cuales está un foco de mano de pilas, de color verde en el centro y blanco en el cabezote donde está el bombillo.

La Personería Municipal del Distrito de Las Minas mediante diligencia de 30 de diciembre de 1992, que reposa de fojas 621 a 622 del expediente penal, ordenó la detención preventiva de los señores JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA con fundamento en lo que establecen los artículos 2038, 2073, 2148 y 2159 del Código Judicial. En dicha diligencia la referida funcionaria de instrucción expuso que "en el momento de ser detenidos los señores anteriormente mencionados, se les encontró en poder de ellos un vehículo marca Lada Niva, color franja gris y blanca, tipo Jeep, con matrícula No. 8-18053, así como también un revólver marca Charter Arms Corp. Stratford Conn, calibre 38 corto, ,serie 67-1625, con seis (6) municiones dentro del cilindro y dinero en efectivo, una gorra y prendas de vestir". "Por otro lado podemos señalar que según las características del vehículo que le fuera encontrado a los señores JAIME RAÚL GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, sobre dicho vehículo declaran las siguientes personas: RAQUEL SOTO (fs. 13-14), CATALINA VÁLDEZ GONZÁLEZ (fs. 16-17-18), INÉS MURILLO NORIEGA (fs. 24-25-26), y de ABILIO CRUZ QUINTERO (fs. 27-28-29-30), del presente sumario, donde todas estas personas declaran bajo la gravedad del juramento haber visto pasar por los lados del Corregimiento de Chepo y luego regresar en horas de la noche del día 28 de los corrientes al vehículo que anteriormente se ha mencionado y que se le encontrara a los señores JAIME RAÚL GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ, aunado a la diligencia de Inspección Ocular que se hiciera al mencionado vehículo donde se encontró una linterna de mano, la misma que fuera reconocida por el ofendido Ojo Cruz y que según él es de su propiedad, así como también a otras piezas procesales que reposan en el expediente" (fs. 621-622) (Subraya la Sala).

Adicionalmente, en diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos, el señor Bolívar Díaz, quien se encontraba en la casa del señor De La Cruz el día del robo, identificó al señor RODOLFO BONILLA SÁNCHEZ como uno de los sujetos que, el día 28 de diciembre de 1992, se introdujeron a la residencia propiedad de José De La Cruz Ojo Cruz, con la finalidad de cometer el ilícito de robo en perjuicio tanto del propietario del inmueble como del propio señor Díaz.

El artículo 2148 del Código Judicial preceptúa que se podrá decretar la detención preventiva, previo cumplimiento de las formalidades previstas en la Ley, cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En el caso en estudio puede decretarse la detención preventiva porque se investiga la comisión de dos hechos punibles, uno contra el patrimonio y el otro contra la vida y la integridad personal, ya que durante la comisión del robo en la residencia del señor José De la Cruz Ojo Cruz, resultó herida de gravedad la señora Rosaura Campos, quien posteriormente murió, según consta a fojas 138 del este expediente, y ambos delitos tienen pena mínima superior a los dos años de prisión (art. 186 y 131 del Código Penal). De acuerdo con el artículo 2147-A ibidem, nadie podrá ser sometido a medidas cautelares (verbigracia: detención preventiva prevista en el literal e) del artículo 2147-B ibidem), si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra y el artículo 2159 ibidem establece que en todo caso la detención preventiva deberá ser decretada, so pena de nulidad, por medio de diligencia escrita en la cual el funcionario de instrucción expresará el hecho imputado, los elementos probatorios allegados para la comprobación del hecho punible, y los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena.

A juicio del Pleno lo preceptuado en estas dos normas ha sido cumplido por el funcionario de instrucción que decretó la detención preventiva de los señores JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA mediante diligencia de 30 de diciembre de 1992 (fs. 621), en

la cual expresó, que los señores GONZÁLEZ y BONILLA se les investigaba por los delitos de asalto a mano armada y contra la integridad personal en perjuicio del señor José De La Cruz Ojo Cruz y Rosaura Campos, o sea, que se expresan los hechos imputados. Además, en esa diligencia se indican los elementos probatorios allegados al sumario para la comprobación de los hechos punibles y los hechos que constituyen graves indicios de la responsabilidad de los imputados.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la detención preventiva decretada contra los imputados JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA es legal y así debe declararlo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra los señores JAIME GONZÁLEZ y RODOLFO BONILLA, a quienes se les imputa la comisión de delitos contra el patrimonio y la integridad personal en perjuicio de José De La Cruz Ojo Cruz, Bolívar Araúz y Rosaura Campos y ORDENA que sean puestos a órdenes de la Fiscalía Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial, con sede en Las Tablas, Provincia de Los Santos.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LOS SEÑORES ALCIDES CAMARENA ORTEGA Y ELVIA MARÍA ORTEGA DE CAMARENA EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Edilberto Vásquez Atencio ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Alcides Camarena Ortega y Elvia María Ortega de Camarena, sindicados por delito de tráfico de estupefacientes. El primero de los imputados se encuentra en la Cárcel Modelo a órdenes del Procurador General de la Nación y la segunda persona en la Cárcel de Mujeres a órdenes del mismo funcionario.

El demandante sostiene que la detención preventiva de sus patrocinados es ilegal; pues Alcides Camarena Calderón (esposo y padre de los investigados), al ampliar su declaración indagatoria, "acepta lisa y llanamente la comisión del ilícito bajo investigación y explica con lujos de detalle (sic) a lo que se dedicaba, eximiendo por completo de cualquier tipo de responsabilidad penal a los encartados." (ver foja 3 del cuaderno de habeas corpus).

Concedido el mandamiento de habeas corpus, el informe de conducta remitido por la autoridad demandada señala que es cierto que ordenó la detención de Alcides Camarena Ortega y de Elvia María Ortega, mediante resolución de 25 de agosto del año que decurre (ver foja 31 de la sumarias); que los fundamentos de hecho y de derecho que originaron su detención surgen del allanamiento practicado en la residencia de la familia Camarena Ortega, que se encuentra ubicada en calle segunda, Panamá Viejo, Corregimiento de Parque Lefevre, donde encontraron los elementos que comprueban el delito. La diligencia dio como resultado la recuperación de los billetes (dólares) que utilizaron, como señuelo, los miembros de la Policía Técnica Judicial en la compra de las sustancias narcóticas y la aprehensión de cincuenta balboas con ochenta y tres centésimos (B/.50.83). Al efectuar una requisa exhaustiva del inmueble se encontraron, además, sustancias presumiblemente ilícitas, que al realizarse la prueba de campo dieron resultados positivos por cocaína con un peso total de 33.45 gramos de droga (crack y polvo). Asimismo, se incautaron instrumentos idóneos para la preparación de la droga (un banco con vidrio rectangular, una balanza, un cuchillo, un envase plástico color celeste, un rollo de bolsitas plásticas).

En este momento es preciso analizar si la orden de detención impugnada cumple con los requisitos previstos en el artículo 2159 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 21 de la Constitución Nacional.

De las sumarias remitidas se observa que los sindicados fueron detenidos mediante orden escrita expedida por autoridad competente, como lo es la providencia del 25 de agosto de 1993 (f.31 y vuelta); que el hecho imputado constituye delito contra la Salud, concretamente el tráfico ilícito de drogas previsto en el artículo 258 del Código Penal con sanción que va de 3 a 6 años de prisión.

En lo que respecta a los elementos que comprueban el hecho punible, ya mencionamos la droga, el dinero y los instrumentos aprehendidos (ver acta de allanamiento).

En cuanto a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra las personas cuya detención se ordena, quedan acreditadas las circunstancias de presencia y oportunidad que relacionan a los imputados con el hecho punible, circunstancias éstas que constituyen

graves indicios de responsabilidad justificativos de la medida cautelar decidida en su contra.

Llama poderosamente la atención el hecho de que el abogado Vásquez Atencio califique de "honorables" a sus representados cuando en la indagatoria la señora Elvia María Ortega de Camarena implica a su sobrino menor de edad, manifestando que él puede responder por la droga con la reprochable finalidad de eludir su responsabilidad (ver f.25 de los antecedentes). Igual conducta se le atribuye a su esposo Alcides Camarena Calderón que involucra al menor en su primera indagatoria (f.20) y luego en ampliación de la misma afirma "En cuanto porqué negaba que la droga no era mía sino de EDUARDO TORIBIO por la sencilla razón de que si el menor se echaba la culpa tanto mi esposa como mi hijo que son inocentes de lo que está sucediendo así como mi persona saldríamos libres ..." (ver f.70).

Por lo antes expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de Alcides Camarena Ortega y Elvia María Ortega de Camarena y dispone que sean puestos nuevamente a órdenes del Procurador General de la Nación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO FLECHER Y EN CONTRA DEL FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte conoce en grado de apelación de la sentencia de 25 de noviembre de 1993, dictada por el Segundo Tribunal Superior, con Salvamento de Voto de la Magistrada Sustanciadora, en la acción de Habeas Corpus instaurada por la licenciada NANNETTE GARCÍA a favor del detenido **GILBERTO FLECHER**, y en contra del FISCAL CUARTO DEL CIRCUITO DE COLON.

Para resolver el Pleno de la Corte considera antes:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante la sentencia apelada, declaró "...que es Legal la detención preventiva que sufre **GILBERTO FLECHER VALDÉS**, por proceso que se le sigue en torno a delito perpetrado en perjuicio del **MUNICIPIO DEL DISTRITO DE COLON**. Por tanto MANTIENE la misma y ORDENA filiarlo nuevamente a disposición del FISCAL CUARTO DE CIRCUITO DE COLON".

Para arribar a la anterior conclusión el Tribunal a-quo en lo esencial de las consideraciones de la sentencia apelada expresa:

> "...
> Una vez iniciada la investigación GILBERTO FLECHER fue detenido por estar señalado por HERNÁNDEZ, a través de documento consignado en el Municipio, como su cómplice y la misma fue mantenida por el Fiscal Primero del Circuito de Colón. (foja 21 y 52). Igualmente es mantenida por el funcionario acusado, quien es competente. (fojas 194-195).
>
> No hay entonces violación alguna de las normas legales en detrimento del detenido FLECHER, quien guarda detención preventiva en virtud de imputaciones que se le hacen por la supuesta comisión de un ilícito perpetrado en perjuicio de la entidad estatal a la cual prestaba servicios, cuya determinación no es posible en estos momentos en virtud de que la investigación no ha culminado. ..."

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Así las cosas, el examen de la actuación sumarial enviada como antecedentes al Tribunal Superior del conocimiento de la presente acción de Habeas Corpus, sin embargo, a juicio del Pleno de la Corte evidencia hasta el momento una realidad distinta a la sostenida por el A-quo en la sentencia apelada, esto es, en relación con los elementos probatorios que figuran en el Sumario en contra de **GILBERTO FLECHER VALDÉS** y el hecho punible.

En efecto, si bien es cierto que la orden de detención preventiva ha sido decretada, en este caso, mediante diligencia que consta a fojas 52 del expediente contentivo de las sumarias, no menos lo es que las pruebas allegadas a dicha investigación no acreditan que "...existen graves indicios de responsabilidad que comprometen la conducta de **GILBERTO FLECHER VALDÉS**, como autor del hecho punible denunciado por el señor **MIGUEL FONG RIVERA**, en representación del **MUNICIPIO DE COLON**, por la comisión del delito de " PECULADO en perjuicio de esa entidad publica ..." como se sostiene en la indicada diligencia del funcionario de instrucción.

Así, por ejemplo, basta señalar que la única prueba en la que hasta ahora se pretende justificar la detención preventiva del prenombrado **GILBERTO FLECHER**, es el documento que obra a fojas 21 del expediente de los antecedentes que dice:

"29 de septiembre de 1993.

DECLARACIÓN DE INSPECTOR RECAUDADOR JUAN HERNÁNDEZ.

En el despacho de Departamento de Facturación siendo las 10:05 a. m. del día 29 de septiembre de 1993, el inspector recaudador **Juan Hernández acepto su participación en relación a los cobros realizados y no reportados al Municipio de Colón**, además dio el nombre de su cómplice en el Departamento de Computo el Sr. **Gilberto Flecher.**

(fdo.) Licenciada Zoila Ríos
Auditora Interna.

(fdo.) Juan Hernández
Inspector Recaudador."
3-90-91

Sin mayor esfuerzo se advierte que el transcrito documento, por si sólo, carece de eficacia probatoria para justificar legalmente la detención preventiva decretada en contra del sumariado **FLECHER VALDÉS;** máxime cuando resulta extraño, como también se advierte en el Salvamento de Voto de la Magistrada que se manifiesta en desacuerdo con la sentencia apelada, que el mencionado Juan Hernández en ese momento no se le hubiese siquiera tomado una declaración, y siendo el supuesto autor de la comisión del hecho punible se encuentre en libertad. De allí que el Pleno de la Corte considere la detención preventiva decretada, en este caso, sin fundamento legal, sin que ello signifique que la situación del procesado pueda variar más adelante en relación con el ilícito.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO,administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia Apelada, y, en su lugar, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de GILBERTO FLECHER VALDÉS y ORDENA SU INMEDIATA LIBERTAD.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE LA SEÑORA CLAIZIDOR LYYSE EN CONTRA DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, se ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de la señora **LYZE CLAIRE ALTIDOR** y en contra el señor Procurador General de la Nación, quien mediante escrito visible a fojas 9 y 10 del expediente remitió su informe de conducta.

Mientras se surtía el trámite de lectura del proyecto de resolución, el licenciado **AUBREY OLIVER DAWKINS S.**, presentó escrito mediante el cual desiste de la acción de habeas corpus que presentara a favor la señora **LYZE CLAIRE ALTIDOR.**

Al analizar la situación planteada por el licenciado **DAWKINS**, el Pleno nada tiene que objetar y, por tanto, accede a su petición.

En tales circunstancias, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus interpuesta a favor de la señora LYZE CLAIRE ALTIDOR; en consecuencia, DISPONE que la detenida sea puesta nuevamente a ordenes del Procurador General de la Nación.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS PRESENTADO POR EL LICENCIADO DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR PATRICIO CABALLERO, POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. PANAMÁ, 29 DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Didacio Ibarra Sánchez presentó acción de habeas corpus a favor de Patricio Caballero, sindicado por delito contra la salud pública.

Encontrándose el negocio en la etapa de circulación del proyecto de sentencia, se recibió por secretaría escrito de desistimiento de la acción presentado por el accionante. El artículo 1073 del Código Judicial reconoce al demandante el derecho a desistir de su iniciativa procesal, de manera expresa o tácita, de donde resulta la consecuencia inevitable de la suspensión del trámite.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento de la acción de habeas corpus presentada por Didacio Ibarra Sánchez y ORDENA EL CESE de este procedimiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H.CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LIC. LEOPOLDO CASTILLO G., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UBALDO A. BARRÍA M. CONTRA EL ARTICULO 76, PÁRRAFO FINAL, DE LA LEY 106 DE 8 DE OCTUBRE DE 1973 "SOBRE EL RÉGIMEN MUNICIPAL". MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Leopoldo Castillo G., actuando como apoderado judicial de Ubaldo Antonio Barría Montero, ha presentado acción de inconstitucionalidad contra el párrafo final del artículo 76 de la Ley 106 de 1973, por considerar que contraviene lo dispuesto en el artículo 245 de la Constitución vigente.

La disposición constitucional en cita preceptúa:

> ARTICULO 245. El Estado no podrá conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales. Los municipios sólo podrán hacerlo mediante acuerdo municipal.

La demanda fue admitida por cumplir con los presupuestos formales que exigen los preceptos 654 y 2551 del Código Judicial y, con fundamento en el artículo 2554 de dicha excerta procesal, se corrió en traslado el negocio al Procurador General de la Nación para que rindiera concepto.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

Mediante Vista N°16 de 26 de marzo de 1993, consultable de foja 9 a 18, el Procurador General de la Nación emite una documentada opinión en la cual cita doctrina constitucional y jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

En la parte medular de su Vista el Procurador expresa que, de conformidad con el artículo 245 de la Constitución, la facultad de eximir del pago de derechos, tasas o impuestos municipales es **competencia exclusiva** del Municipio donde se causa el impuesto, tasa o gravamen, lo que sólo éste podrá hacer mediante acuerdo municipal.

En ese sentido indica la Vista:

> "En resumen, la única forma posible, por medio de la cual se puede conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales, lo es mediante acuerdo municipal, expedido, desde luego, por el propio Municipio que, por las razones o motivos que consideren a bien, así lo decidan. La misma disposición constitucional, artículo 245 de la Constitución, que prevé tal facultad a los Municipios, prohibe, a su vez, que el Estado pueda proceder de igual manera que éstos, con respecto a los medios o mecanismos que permiten que los municipios adquieran sus propias rentas, al establecer, de manera clara y taxativa, que "el Estado no podrá conceder exenciones de derechos, tasas o impuestos municipales."

DECISIÓN DE LA CORTE

Para una adecuada solución de esta controversia constitucional es preciso reproducir, para su análisis, el artículo 76 de la Ley N° 106 de 8 de octubre de 1973, que trata sobre el "Régimen Municipal".

La norma citada es del tenor siguiente:

> ARTICULO 76. Los Municipios fijarán y cobrarán derechos y tasas sobre la prestación de los servicios siguientes:
>
> ... Estarán exentos de derechos y tasas, la Nación, la Asociación Intermunicipal de la que forma parte el Municipio que la impone y los pobres de solemnidad. (Subraya la Corte).

Luego de un detenido examen del cuaderno que contiene esta iniciativa procesal, la Corte llega a la conclusión de que no existe contradicción alguna entre el acto impugnado y el artículo 245 de la Carta Fundamental.

Lo que establece el párrafo final del artículo 76 de la Ley N°106 de 8 de octubre de 1973 es una limitación legal a la potestad tributaria de los Municipios. El Estado, mediante ley formal, puede perfectamente limitar dicha potestad; lo que no puede es reconocer la exoneración de un impuesto municipal -establecido en base a la potestad tributaria que la Constitución instituye- con posterioridad a la expedición del acuerdo municipal que establece el tributo o contribución.

Es esta una interpretación con clara fundamentación en la jurisprudencia constitucional. En fallo reciente la Corte sentenció que:

> "El Estado puede limitar, mediante ley, la potestad tributaria de los Municipios, es decir que el legislador puede señalar las actividades que no pueden ser gravadas por éstos. Pero lo que no puede hacer el Estado es conceder exoneraciones de impuestos, tasas o contribuciones, debidamente establecidas por un Acuerdo Municipal. Este es el sentir del artículo 243 de la Constitución Nacional." (Sentencia de 15 de junio de 1993, acción presentada por Alcibiades González para que se declare inconstitucional el párrafo I del artículo 3 de la ley 9 de 1958).

Procede entonces reiterar en esta oportunidad el pronunciamiento ya emitido en el sentido de que el Estado no puede exonerar del pago de tributos establecidos de conformidad con un acuerdo municipal, circunstancia que no es a la que se refiere la norma que motiva la pretensión constitucional que se examina.

Por las consideraciones anteriores la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el inciso final del artículo 76 de la Ley 106 de 8 de octubre de 1973.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICDA. MARIBLANCA STAFF W., EN CONTRA DEL PARÁGRAFO DEL ARTÍCULO 8 DE LA LEY 1 DE 17 DE MARZO DE 1986. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **MARIBLANCA STAFF WILSON** presentó demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo del artículo 8 de ley 1 de 17 de marzo de 1986, por considerarlo violatorio de los artículos 17, 19 y 32 de la Constitución Nacional.

Admitida la demanda se le dio traslado al Procurador de la Administración quien se opuso a las pretensiones de inconstitucionalidad de la parte actora.

La licenciada **STAFF** considera que el artículo 17 de la Constitución es infringido por el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 1986, que establece que las sentencias dictadas en segunda instancia, por el Tribunal Superior de Trabajo en los casos de cuantía que excedan de Dos Mil Balboas, de conocimiento en primera instancia de las Junta de Conciliación y Decisión, tienen carácter definitivo, no admiten ulterior recurso y producen el efecto de cosa juzgada. Aduce la demandante las siguientes razones para explicar la violación constitucional que estima se produce:

> "Del principio constitucional transcrito se desprende claramente que una de las funciones de las autoridades de la República, entre otras, está la de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales; siendo violado en forma directa esta garantía constitucional por el

Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, al negar expresamente el derecho al recurso de casación laboral en los casos previsto en el artículo 8 de la mencionada ley".

El Procurador de la Administración al contestar este cargo se opone en los siguientes términos:

"Discrepamos del criterio externado por la demandante, toda vez que el artículo 17 de la Constitución, que ha sido citado no es susceptible de ser acusado de inconstitucionalidad; ya que se trata de una norma programática; es decir, meramente enunciativa que declara los fines para los cuales se instituyeron los funcionarios públicos y que no crea derecho subjetivo en beneficio de la colectividad.

La Corte Suprema de Justicia (Pleno) en reiteradas ocasiones ha señalado este criterio, veamos:

27 de abril de 1983:

"Se sostiene que esa sentencia es violatoria del artículo 17 de la Constitución Nacional. La Corte entiende, sin embargo, que el citado artículo se encarga de consagrar en términos muy generales, la función de las autoridades públicas, como una forma de declarar constitucionalmente el principio de la limitación jurídicas de la voluntad del Estado, -expresada a través del ejercicio del poder público- frente al conjunto de derechos y deberes de los particulares, creando un equilibrio jurídico entre gobernantes y gobernados.

El artículo 17 formula genéricamente la declaración, y los artículos subsiguientes, señalan las limitaciones de la voluntad Estatal mediante el establecimiento de garantías precisas ...

El artículo 18 de la Constitución participa de la misma característica, de declaración genérica, que distingue al artículo 17, cuyo motivo no admite, tampoco, su violación directa, en un caso concreto".

26 de julio de 1989.

'La Corte ha sostenido en forma reiterada que el artículo 17 de la Constitución Nacional no es una norma susceptible de ser violada en forma directa ya que se trata de una disposición de carácter programática que se limita a establecer los fines para los cuales han sido establecidas las autoridades de la República y que tiene como principal propósito 'asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir la Constitución y la Ley'.

15 de enero de 1987.

'Siendo la norma bajo estudio de índole programática, esto es, que sólo declara o enuncia los fines para los cuales han sido instituidos los funcionarios públicos, pero que no consagra derechos ni garantías individuales ni sociales, se estima que la misma no puede ser objeto de violación en forma directa como se arguye, sino únicamente en relación con otra norma creadora de según derecho. Procede, entonces, explorar en el ámbito fáctico y jurídico a objeto de determinar si en este proceso emerge esa especial situación'.

Conviene señalar y resaltar la confusión que existe en la exposición del concepto de la violación, por cuanto que no se hace diferencia entre la norma que contiene la disposición o señala el derecho alegado y la autoridad que debe hacerla efectiva. Al invocar el Artículo 17 de la Constitución que se refiere a la existencia y finalidad de las autoridades, no puede atribuirse a las mismas la negación de un derecho, que no emana de dichas autoridades, sino de disposición legal. Se arguye erróneamente que las autoridades niegan expresamente el derecho al recurso, cuando en realidad la exclusión del recurso de casación para los juicios que se ventilan ante las Juntas de Conciliación proviene de una norma legal y no del capricho de la autoridad, que no podría concederlo sin incurrir precisamente en violación de la Ley, pues al no estar contemplado no procede concederlo. Insistimos en que se refleja una inusitada confusión entre la finalidad que deben cumplir las autoridades en el cumplimiento del derecho, y la existencia del derecho que es cosa diferente y que en cuanto no exista no puede crearlo la autoridad en forma antojadiza.

En consecuencia, no se ha dado la infracción de la norma invocada".

Igualmente considera la demandante que el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 1986 viola el artículo 19 de la Constitución, lo cual explica de la siguiente manera:

"La violación consiste en que el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de l986 establece un fuero o privilegio para los casos que conocen las Juntas de Conciliación y Decisión contemplados en la disposición impugnada; privilegio que está expresamente prohibido por el artículo 19 de la Carta Magna".

El Procurador de la Administración al contestar el cargo anterior se manifiesta de la siguiente manera:

> "Yerra el actor en sus apreciaciones, toda vez que la norma acusada de inconstitucional no establece fuero o privilegio alguno; ya que se limita a determinar los casos en los que procede el Recurso de Apelación en contra de las decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión, sin que ello implique beneficio para alguna de las partes en un proceso determinado en detrimento de la otra.
>
> El artículo 19 de nuestra Carta Magna, en el que se fundamenta la presente demanda, contempla los privilegios o discriminaciones personales, por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión e idea políticas, elementos éstos que no fueron considerados para establecer el principio del Recurso de Apelación en contra de las decisiones de las Juntas de Conciliación y Decisión, su carácter definitivo y de cosa juzgada detallada en el artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, acusada de inconstitucional; toda vez que no se creó con fundamento a la raza a que pertenezcan las partes, por el lugar geográfico en el que hayan nacido, las clases sociales como ligadas a grupos de abolengo, el sexo, porque no ha sido la calidad humana de hombre o mujer lo que determina la obtención de esa facultad, así como tampoco el grupo religioso al que pertenecen, ni los ideales políticos que abrigan.
>
> En consecuencia, al no darse aquellas situaciones odiosas e injustificadas de ventajas exclusivas (en la norma acusada de inconstitucional) para un grupo de persona o personas determinadas, las cuales necesariamente no tienen por qué fundarse en la raza, el nacimiento, clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas, somos de la opinión que No se ha dado la violación de la norma conculcada".

Por último considera la demandante que el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 1986 viola el artículo 32 de la Constitución Nacional, lo cual explica de la siguiente manera:

> "Si conforme a la disposición constitucional transcrita se instituye el derecho de toda persona a ser juzgado por autoridad competente y conforme a los trámites legales, el Parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 1986 le pone cortapisa a esa garantía constitucional, por cuanto se estaría admitiendo el recurso de casación laboral para los casos provenientes de los Juzgados Seccionales de Trabajo y negándole para los casos provenientes de las Juntas de Conciliación y Decisión, lo cual a nuestro juicio, constituye una violación al debido proceso".

El Procurador de la Administración considera que no hay incongruencia entre los preceptos constitucionales y la disposición tachada de inconstitucional, y explica su posición, sintetizada por el ponente, de la siguiente manera:

> "Este Despacho considera que no hay incongruencia entre los preceptos constitucionales y la disposición tachada de inconstitucional, porque no existe indefensión en el artículo 8 de la Ley 1 de 1986, que pueda causar perjuicios a los litigantes y nada impide que pueda seguir vigente el precepto que se pretende declarar inconstitucional, porque no se trata de que se esté juzgando por autoridad incompetente o que el proceso no se ajustó a los trámites de ley o que se haya juzgado por la misma causa más de una vez.
>
> El hecho que el artículo 8 de la Ley 1 de 1986 disponga el Recurso de Apelación para las sentencias dictadas por las Juntas de Conciliación y Decisión, cuya cuantía exceda de Dos Mil Balboas (B/.2,000.00) tienen carácter definitivo y producen el efecto de cosa juzgada, no significa que se haya faltado al principio del Debido Proceso.
>
> Ello es así, porque existen dos procesos perfectamente definidos y que son distintos, a saber:
>
> 1- Los procesos que se ventilan ante la jurisdicción de las Juntas de Conciliación y Decisión, las que tienen competencia sobre las demandas por razón de despido injustificados, las demandas mediante las causas se reclamen cualesquiera prestaciones con una cuantía hasta Mil Quinientos Balboas (B/.1,500.00) y las demandas de cualquier naturaleza o cuantía de los trabajadores domésticos. (ver artículo 2 de la Ley 7 de 25 de febrero de 1975).
>
> 2- Los procesos que se ventilan ante la jurisdicción de los tribunales ordinarios de trabajo, que se entienden los demás casos contemplados en el artículo 956 del Código de Trabajo".
>
> Y más adelante agrega:
>
> "Con esa limitación, el legislador quiso que únicamente el Recurso de Casación proceda contra las Sentencias de Segunda Instancia provenientes de los procesos ventilables ante los Tribunales Ordinarios Laborales, no así de las Juntas de Conciliación y Decisión, según se colige del artículo 977 del Código de Trabajo.

> Siendo ello así, se establece la diferencia entre el procedimiento ordinario y el procedimiento de las Juntas de Conciliación y Decisión y que son, además de distintos, completamente independiente uno del otro. De allí que sí se ha dado cabal cumplimiento a las garantías que ofrece esta institución de carácter instrumental para asegurar a las partes de todo proceso laboral legalmente establecido, ser escuchado por Tribunal competente, p-redeterminado por la Ley en el trámite o proceso establecido para cada caso en particular para defender efectivamente los derechos de los particulares; por tanto, se da cabal cumplimiento al Debido Proceso".

El primer cargo de inconstitucionalidad que le hace la demandante al parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986, es que viola el artículo 17 de la Constitución Nacional, que hemos tenido oportunidad de conocer.

Como se puede apreciar, el principal reparo de inconstitucionalidad que se le hace a la norma acusada, es que no permite el Recurso de Casación en los negocios de conocimiento de las Juntas de Conciliación y Decisión, cuya cuantía exceda de dos mil balboas (B/.2,000.00) y que son apelables en segunda instancia ante el Tribunal Superior de Trabajo.

La Corte ha dicho en innumerables ocasiones que el artículo 17 de la Constitución, es una norma programática, no susceptible de violación en estos casos.

En cuanto al artículo 32 de la Constitución, sostiene la impugnante, que se admite el Recurso de Casación Laboral para los casos provenientes de los Juzgados Seccionales de Trabajo y se niega para los casos que se originan en las Juntas de Conciliación y Decisión, lo cual a juicio de la que demanda, constituye una violación del debido proceso.

En primer lugar debemos apreciar, que el requisito constitucional del debido proceso está formado, de acuerdo con el artículo 32 de la Constitución, por: autoridad competente, por los trámites legales y por el juzgamiento por una sola vez, en causas penales, policivas o disciplinarias. La jurisprudencia ha explicado a fondo la interpretación de este artículo. El debido proceso consiste en su mayor parte, **en los trámites que fije la ley**. La Constitución exige, repetimos, el requisito de la competencia, el trámite de la ley y el juzgamiento por una sola vez. Por tanto, si la ley señala para los procesos que se originan en las Juntas de Conciliación y Decisión que sólo cabe el recurso de apelación, cumpliendo con el principio de la doble instancia, que no lo señala de manera expresa nuestra Constitución, pero que lo reconoce la jurisprudencia, dicho procedimiento es el legal, es el que cumple el debido proceso en ese caso, por expresa determinación de la ley y por tanto, no puede violar el debido proceso de ley cuando se cumple con lo que dicho procedimiento señala.

Nuestra Constitución Nacional no regula el Recurso de Casación ni ningún otro del proceso ordinario. En materia procesal, nuestra Constitución sólo regula el control de la constitucionalidad mediante la Acción de Inconstitucionalidad, el Amparo de Garantías Constitucionales, el Habeas Corpus, la Objeción de Inexequibilidad, la Consulta y la Advertencia de Inconstitucionalidad. Regula así mismo en materia procesal, el control de la legalidad, a través de las acciones de nulidad, de plena jurisdicción, de interpretación y el de Apreciación de validez.

Lo expresado anteriormente demuestra que el Recurso de Casación, en nuestro país, es de creación legal, y sólo a la ley compete señalar en qué casos procede, mientras no adquiera rango constitucional, que determine su ámbito de aplicación. Por lo expuesto, no prospera el cargo contra los artículos 17 y 32 de la Constitución Nacional.

En cuanto a la violación del artículo 19 de la Constitución Nacional, que alega la demandante, la Corte considera, que no se configura ningún privilegio, ya que las partes en los procesos ante las Juntas de Conciliación y Decisión, gozan por igual de los mismos derechos procesales que se le confieren a ambos, en las mismas circunstancias legales, sin que se le de a uno lo que se le niegue a otro. Ambos están en un plano de igualdad procesal.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el parágrafo del artículo 8 de la Ley 1 de 17 de marzo de 1986.

Notifíquese y Publíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTY Y ASOCIADOS EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR VIRGILIO QUIÑONES MORALES Y EN CONTRA DE LA SENTENCIA NO.62 DE 30 DE JUNIO DE 1993, PROFERIDA POR EL JUZGADO QUINTO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense **PITTY Y ASOCIADOS** actuando en representación del señor **VIRGILIO QUIÑONES MORALES**, ha presentado acción de inconstitucionalidad contra la sentencia No.62 de 30 de junio de 1993 proferida por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Panamá.

La Corte procede al análisis de la demanda presentada, en vías de determinar si la misma cumple con los requisitos que hagan posible su admisión.

En este punto se percata el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia, que la sentencia acusada de inconstitucional fue dictada en un proceso de amparo de garantías constitucionales que concedió el Amparo promovido por **ELIDA SALERNO DE RUCKER** contra el auto proferido por el Juez Tercero Municipal, Ramo Penal de Panamá, al considerar que la referida resolución infringió la garantía constitucional del debido proceso.

Lo primero que observa la Corte, es que se pretende con la acción instaurada, atacar una decisión proferida en un proceso constitucional de amparo de garantías, lo que implicaría que este Tribunal tendría que pronunciarse sobre la constitucionalidad de una sentencia que había resuelto una controversia constitucional. Ello entrañaría un doble examen sobre la constitucionalidad del punto medular del negocio, equivaliendo esta actuación a concederle otra instancia indirecta a los procesos de amparo mediante demandas de inconstitucionalidad, y tal proceder es completamente incongruente con la naturaleza de los procesos constitucionales.

Así lo ha manifestado este Tribunal en situaciones similares a los que nos ocupan. Efectivamente, en resolución de 17 de mayo de 1991, en la demanda de inconstitucionalidad formulada por el Consejo Municipal del Distrito de Los Santos en contra de ciertas resoluciones dictadas por el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos, la Corte señaló:

> "En tal circunstancia no le es posible a la Corte pronunciarse sobre la constitucionalidad de sentencias de amparo que resuelven controversias constitucionales, porque sería un doble examen sobre la constitucionalidad del caso, ya que el sistema en materia de amparo es difuso y no centralizado o concentrado."

Sin perjuicio de lo anotado, se observa que la sentencia de amparo no fue objeto de apelación ante el Primer Tribunal Superior de Justicia, lo cual era perfectamente factible a tenor de lo dispuesto en el artículo 2616 del Código Judicial, por lo que evidentemente no se han agotado los medios de impugnación idóneos para atacar la decisión proferida. Esta Corporación de Justicia ha sido reiterativa, en el sentido de que para que este tipo de demandas sean admisibles, debe constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos (v.g. resolución de 12 de mayo de 1993, dentro de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por **MIGUEL ÁNGEL MOROS** contra la resolución de 15 de diciembre de 1992 dictada por el Juzgado Segundo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá).

Lo anterior pone de manifiesto, que aún en el caso de que no se pretendiese la revisión de una sentencia de amparo mediante la acción de inconstitucionalidad, que tal como hemos explicado resulta improcedente, tampoco se cumplió con el requisito del agotamiento de los medios de impugnación correspondientes, antes de acudir ante la Corte Suprema, lo cual es imperativo dado que la Corte actúa en estos procesos, no como Tribunal de Justicia, sino como un Organismo de Derecho Público garante de la integridad de la Constitución.

En vista de que el libelo no cumple con los presupuestos legales correspondientes, es procedente negarle curso legal a la demanda presentada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad presentada por la firma forense PITTY Y ASOCIADOS en representación de VIRGILIO QUIÑONES MORALES.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

**SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAÚL TRUJILLO MIRANDA**

Al no admitir el amparo de Garantías propuesto por VIRGILIO QUIÑONEZ MORALES en contra de la orden emanada por el Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, manifesté mi desacuerdo con la posición adoptada por el PLENO de la Corte Suprema. En el presente caso se impugna por inconstitucional la resolución judicial que contiene la orden que originó el amparo no admitido. Para no admitir la presente demanda de inconstitucionalidad, se mantiene el mismo criterio que utilizó para no admitir el amparo. En aquella ocasión expuse los siguientes conceptos que reproduzco como válidos:

> "La jurisprudencia que ha sentado la Corte Suprema de Justicia ha sido, tal como expresa la mayoría en el caso subjúdice, de no aceptar demandas relativas a la constitucionalidad de sentencias y amparos. El fundamento de

esta jurisprudencia estriba en el hecho que el amparo resuelve una cuestión constitucional por lo que al aceptar una revisión de esa sentencia, se permite el doble examen sobre aspectos constitucionales. En estos casos, según el criterio que ha mantenido la jurisprudencia, debe imperar el principio sobre la decisión final, definitiva y obligatoria dada para las decisiones de la Corte en materia constitucional.

En términos generales tal apreciación debe tener validez. Es necesario evitar en el ámbito judicial las contradicciones jurídicas, como dijera el Presidente del Tribunal Supremo de España" ... cuando los Tribunales de Justicia, cualesquiera que sea su grado y el orden jurisdiccional al que pertenezcan, lleguen a soluciones distintas, e incluso enfrentadas, en presencia de presupuestos jurídicos y de hechos sustancialmente iguales". Es derecho fundamental del ser humano obtener igual trato cuando acude ante los tribunales de justicia en procura de la protección de sus derechos e intereses.

En este orden de ideas, sabida es la necesidad del efecto vinculante para que el precedente jurisprudencial tenga el valor indispensable para su aplicación al caso concreto, esto es, que no existan diferencias sustancial-es entre ellas. Si las mismas están afectadas por situaciones y hechos que las hacen diferentes, no podrá hablarse de discriminación en la solución al nuevo problema planteado porque es la ausencia de esa identidad lo que determina el aparente alejamiento de la jurisprudencia.

El amparo de garantías constitucionales que el señor VIRGILIO QUIÑONES MORALES ha presentado en contra del Juez Quinto de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá no pretende discutir si la orden a que se contrajo el amparo de garantías dictado por ese funcionario, violenta o no las garantías y derechos constitucionales. La protección que solicita QUIÑONES MORALES radica en el hecho que ese juzgado no era competente para conocer del amparo que resolvió. Mantiene como principio básico que se violentó el debido proceso por parte del Juez Quinto del Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá al conocer de algo que no es de su competencia. Son estas las modalidades y circunstancias que determinan la carencia del factor vinculante con las otras decisiones de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a la no admisión de amparos contra decisiones adoptadas en otros amparos.

Situaciones como la planteada podrían presentarse y es indispensable pensar en ello. El artículo 2607 de Código Judicial establece cuales son los tribunales competentes en las acciones de amparo. En esta norma se establece como tribunales competentes para conocer de amparos al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, a los Jueces de Circuito, en el caso de estos dos últimos deben ser tribunales que conozcan de casos civiles. Se excluye a los jueces municipales.

Siguiendo el criterio jurisprudencial que se pretende mantener, en un futuro pudiera un juez municipal, sin competencia alguna, acoger un amparo de garantías constitucionales y fallarlo. Su decisión, contraria totalmente al debido proceso siguiendo la tesis sostenida en la sentencia, debería mantenerse puesto que, tratándose de un fallo sobre materia constitucional es intocable. La verdad es que el mandato del artículo 203 de la Constitución Política de la República se refiere expresamente a las decisiones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia y, si bien, en términos generales pudiera aceptarse como buena el planeamiento que las decisiones sobre aspectos constitucionales son inmutables, ello pudiera tener valor respecto a la orden impugnada, pero no en cuanto a los vicios de otro orden, como en el caso en estudio. De lo anterior se desprende que en estos casos, cuando la acción se dirige contra una resolución acusándola de violar el debido proceso, es procedente el amparo."

Sentencia de 13 de diciembre de 1993).

Los razonamientos anteriores me apartan del atendible criterio de la mayoría de los Honorables Magistrados.

FECHA UT SUPRA.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL R. VANEGAS, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, CONTRA EL ACÁPITE "A" DEL ARTICULO 8 DEL DECRETO N°112 DE 17 DE JUNIO DE 1980, POR EL CUAL SE REGLAMENTA EL DEPORTE AFICIONADO POST ESCOLAR EN PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Vanegas, actuando en su propio nombre y representación, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción para que se declare que es inconstitucional la frase "y residir en la ciudad capital", contenida en el literal A del artículo 8 del Decreto 112 de 17 de junio de 1980, "Por el cual se reglamenta el Deporte Aficionado Post-escolar en la República de Panamá". El citado artículo es del siguiente tenor:

> "ARTICULO 8o. Para ser miembro de la Junta Directiva de una Federación Nacional, se requiere:
>
> a) Ser de nacionalidad panameña y residir en la ciudad capital; ... " (La subraya es del Pleno).

Señala el licenciado Vanegas que el Decreto que contiene la norma impugnada "regula el deporte aficionado nacional por medio de la creación de una estructura organizativa similar, en su esencia, a la que existe en la división político-administrativa del país, esto es, mediante el reconocimiento de organizaciones bases que se constituyen en los corregimientos, a partir de las cuales se van integrando en mayor grado jerárquico los entes deportivos distritoriales, provinciales y, finalmente, las asociaciones de cáracter (sic) nacional, que son las Federaciones de cada deporte en particular", según se deduce del artículo 1.

Expresa que el Decreto 112 regula lo concerniente a las condiciones y requisitos para la constitución, integración y funcionamiento de las asociaciones deportivas afiliadas del país, aplicando un criterio basado en la exigencia de que los miembros de las juntas directivas residan en la circunscripción territorial correspondiente.

Así, por ejemplo, para integrar la junta directiva de una asociación deportiva (liga) de corregimiento ha de cumplirse, entre otros, con el requisito de residencia en la respectiva circunscripción territorial; y así sucesivamente se van conformando las organizaciones deportivas hasta llegar a las ligas provinciales, tal como se infiere de los literales A de los artículos 21 y 28 del mencionado Decreto.

De donde resulta, asevera el accionante, que "las organizaciones deportivas aficionadas están concebidas como entes cuya integración, dirección y representatividad se produce en forma democrática, con la participación de las personas residentes en el área de que se trate, que reúnan (sic) además el resto de los requisitos exigidos por el reglamento."

Sin embargo, este tratamiento normativo varía sustancialmente cuando se regula la conformación de los máximos órganos deportivos nacionales, que vienen a ser las denominadas Federaciones Nacionales, pues el literal A del artículo 8 del Decreto 112, establece que para ser miembro de la junta directiva de una Federación Nacional es necesario que el interesado resida en la ciudad capital.

Esta circunstancia constituye, a juicio del demandante, una prescripción favorable o privilegiada para los ciudadanos panameños que residen en la capital, y trae como contrapartida la exclusión absoluta de las personas que residen en las demás provincias y en áreas aledañas a la ciudad capital, quienes tienen vedada su participación en las directivas nacionales. "Así tenemos que encontrándose en la misma condición que las demás personas para aspirar a la dirección de la entidad nacional, por virtud de la norma impugnada los residentes del resto del país reciben un tratamiento desfavorable, discriminatorio e injusto que les impide dicha participación, por el simple hecho de no residir en la ciudad capital."

Todo lo expuesto viola los artículos 19 y 27 de la Constitución Nacional. El primero por cuanto "la disposición reglamentaria que se impugna, tiene una clara connotación discriminatoria contra todo ciudadano panameño en quien concurran los atributos de experiencia, capacidad técnica y cualidades personales para dirigir el deporte aficionado a nivel nacional que, por causas ajenas al deporte, pero no menos importantes y relevantes en lo que atañe a sus intereses, negocios y circunstancias sociales y familiares, deba residir en cualquier lugar de la República distinto de la ciudad capital".

Y el segundo porque, siendo que todo habitante de la República tiene el derecho a residir o tener su domicilio donde a bien tenga, sin más limitaciones que las relacionadas con el tránsito, con el fisco, con la salud y con la inmigración, la norma impugnada afecta la libertad de domicilio de quienes tienen necesariamente que trasladarse a la ciudad capital, en caso de que residan en cualquier otro punto de la República, para obtener la dirección y representatividad de alguna Federación Nacional.

**OPINIÓN DEL MINISTERIO PUBLICO**

Correspondió al Procurador General de la nación emitir concepto en este negocio constitucional, lo cual hizo mediante Vista N° 30 de 2 de julio de 1993.

A juicio del Procurador, la frase demandada es inconstitucional, pero no por las razones dadas por el demandantes. En efecto, este servidor público estima que dicha frase "no establece un fuero o privilegio personal alguno, que implique que se está favoreciendo con éste, a una o varias personas determinadas por razones personales ... que es la prohibición a la cual se refiere la disposición constitucional en comento (art. 19 de la C.N.)". Tampoco establece discriminación alguna por razones de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas, que son las razones previstas en el citado artículo constitucional, pues la frase impugnada se limita a determinar que para ser miembro de la Junta Directiva de una Federación Nacional se debe "residir en la ciudad capital".

Ello es así, aun cuando en sentencia de 27 de enero de 1993 y al referirse al contenido del artículo 19 de la Constitución, la Corte Suprema de Justicia haya expresado que "en materia de la tutela superior de los derechos fundamentales del individuo, una comprensión lógica y sistemática del ordenamiento constitucional autorizaría pensar que tal norma no contiene una lista o catálogo cerrado --numerus clausus-- de los tratos desiguales a los que los destinatarios del ordenamiento jurídico pudieran verse sometidos"; porque, según el Procurador, en el caso que nos ocupa, no se deduce "que se haya producido una discriminación por el hecho de que la norma cuestionada obliga a todas aquellas personas que deseen formar parte de las Juntas Directivas de las Federaciones Nacionales, a fijar su residencia en la ciudad capital."

Este argumento, advierte el agente del Ministerio Público, conduce igualmente a desechar el cargo de injuridicidad que se endilga con base en el artículo 27 de la Constitución Nacional, toda vez que la frase demandada "no establece ni restringe la libertad de tránsito de ninguna persona dentro del territorio nacional ... Decir que una persona, para ser miembro de una entidad o, en este caso de la Junta Directiva de una Federación Nacional, debe residir en la ciudad capital, no implica con ello, que se le está coartando su libertad de variar de domicilio o residencia, cuando a bien lo desee."

Por las razones que anteceden, el Jefe del Ministerio Público llega a la conclusión de que los artículos 19 y 27 de la Carta Magna no han resultado infringidos. Sin embargo, a juicio del Procurador, el artículo que deviene violado es el 20 de la Carta Política, el cual, según él, establece el principio de igualdad ante la ley.

Para fundar este punto de vista, el representante de la sociedad hace un análisis de la forma uniforme cómo el Decreto 112 regula lo relacionado a los requisitos que han de concurrir en la persona que desee ser miembro de Junta Directiva de alguna organización deportiva -particularmente los relativos al lugar donde debe residir el interesado- para luego destacar que ese trato uniforme varía cuando el Decreto procede a regular dicho requisito en el artículo impugnado.

Y es precisamente el trato desigual que se da en el acápite a) del artículo 8 del Decreto 112 lo que produce la infracción del artículo 20 de la Constitución Nacional, porque siendo que los artículos 21, 28 y 37 del Decreto 112 establecen que para ser miembro de la junta directiva de una liga provincial, distritorial o de corregimiento es necesario que el interesado resida en la respectiva circunscripción territorial, no existe justificación para que el criterio de la "circunscripción territorial" varíe en los términos que preceptúa el artículo impugnado.

Por todas estas razones, el Jefe del Ministerio Público estima que el acápite a) del artículo 8 del Decreto 112 viola el artículo 20 de la Constitución Nacional.

**ASPECTOS DE FONDO**

Vistos los argumentos dados por quienes han tenido participación en el presente negocio constitucional, el Pleno pasa a decidir la causa con base en las siguientes consideraciones.

No cabe la menor duda de que para poder fallar el presente negocio es necesario confrontar la disposición reglamentaria con los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional. Ello es así porque, contrario a lo que opina el señor Procurador General de la Nacional, la fusión de estos dos preceptos recoge lo que se conoce como el principio de igualdad ante la ley. Ello se deduce del derecho comparado, de un aspecto histórico de nuestro constitucionalismo y así lo ha reconocido recientemente el Pleno de la Corte en sentencia de 18 de marzo de 1993. Veamos primeramente el fundamento de este aserto, para pasar luego a expresar los argumentos de fondo.

El artículo 2 de la Constitución francesa de 1958 establece el principio de igualdad ante la ley en los siguientes términos:

> "Francia es una República indivisible, laica, democrática y social. Asegura la igualdad ante la ley (de) todos los ciudadanos sin distinción de origen, de raza o de religión y respeta todas las creencias" (artículo escrito por GÁLVEZ, Javier. en "Comentarios a la Constitución", segunda edición, Editorial Civitas, S. A., Madrid, 1985, p.255).

La Constitución española al abordar este tema dispone en el artículo 14 que:

> "Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social" (ibidem. p. 254).

Similar precepto contiene la Constitución Italiana de 1947, en el artículo 3:

> "Los ciudadanos tienen igualdad de derechos sociales y son iguales ante la ley, sin distinción de sexo, de raza, de lengua, de religión, de opiniones políticas y de condiciones personales y sociales" (ibidem).

Por su parte la Constitución colombiana de 1991, señala en el artículo 13 que:

> "Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o

> filosófica ..." (Gaceta Constitucional, Tomo I, publicación de la Corte Suprema de Justicia de Colombia, febrero-mayo, 1992, p. 159).

Las transcripciones de los preceptos anteriores ha tenido el propósito de dar a conocer cómo en legislaciones de avanzada se regula el principio de igualdad ante la ley. Cabe destacar que el citado principio es regulado de manera similar en casi todas las legislaciones en donde tiene vigencia, entre ellas la panameña, como podrá advertirse de seguido.

En efecto, si se confronta el contenido de las trasncripciones anteriores con el artículo 19 y el artículo 20 de la Constitución Nacional, se puede deducir que, a diferencia de lo que ocurre en las legislaciones donde rigen los preceptos transcritos, la actual Constitución panameña norma lo relacionado al principio de igualdad ante la ley en dos preceptos.

No obstante, es importante resaltar que la Constitución de 1946 reguló el principio de igualdad ante la ley en un sólo precepto (art. 21), cuyo texto era del siguiente tenor:

> "Artículo 21. Todos los panameños y extranjeros son iguales ante la Ley.
>
> No habrá fueros o privilegios personales ni distingos por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas ..."

Las circunstancias anotadas, unidas a lo establecido por el Pleno de la Corte en la reciente sentencia de 18 de marzo de 1993, son las que conducen a fundamentar el aserto antes manifestado, según el cual el principio de igualdad ante la ley aparece previsto en nuestra legislación en los artículos 19 y 20 de la Carta Magna. Para una mejor ilustración, veamos lo que sostuvo la Corte en la citada sentencia:

> "Los artículos 19 y 20 de nuestra Constitución consagran el principio de igualdad, en términos generales y prohibiendo la existencia de fueros o privilegios personales o de discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas."

Pues bien, en el contexto de aplicación del principio bajo estudio es importante tener en cuenta que la igualdad ante la ley no significa que entre los habitantes o grupos de habitantes de una nación no puedan existir personas que ostenten más derechos que otras, pues si en esto estribara la igualdad ante la ley, entonces, todos los panameños, sin importar su edad, podrían, por ejemplo, ejercer por igual los derechos políticos, cosa que es falsa porque los menores de edad no ejercen tales derechos. (Cfr. QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Tomo I, Librería, Litografía e Imprenta Antonio Lehmann, San José, Costa Rica. 1967. p. 137).

Se tiene entonces que la base del principio de igualdad ante la ley debe encontrarse en otra posición dogmática. En efecto, tal como puntualizó la Corte Suprema en la aludida sentencia de 18 de marzo de 1993, la igualdad ante la ley "no se refiere solo a los derechos y deberes cívicos-políticos sino que ordena al legislador que, como regla general, asigne las mismas consecuencias jurídicas a hechos que, en principio, sean iguales" o parecidos, añadimos nosotros.

De donde resulta que la igualdad ante la ley es el derecho que tienen todos los panameños de recibir trato igualitario, a los recibidos por quienes se encuentran en situaciones iguales, similares o parecidas; y la de no ser discriminados, **entre otras cosas**, por razones de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas, porque como bien afirma Javier Gálvez: la igualdad ante la ley supone "una igualdad de posibilidades de actuación." (op. cit. p. 258).

Ahora bien, lo expresado hasta este momento no supone que el principio de igualdad implique siempre que deba darse un tratamiento jurídico igual ante acontecimientos similares o iguales, porque existen circunstancias objetivas y razonables, que aconsejan y justifican un tratamiento legal diferente.

De ahí que la tarea de la Corte deba circunscribirse al análisis casuístico de los negocios que les son llevados a sus estrados, con el propósito de determinar si en la controversia que estudia existe un principio jurídico del cual se derive la necesidad de brindar un trato igualitario a los desigualmente tratados o, en su defecto, para determinar si existe una causa objetiva y razonable que justifique el trato desigual.

Si el análisis realizado conduce a la determinación del principio a que se ha hecho referencia en el primer supuesto anotado en el párrafo anterior, la Corte debe reconocer la infracción del principio de igualdad, y declarar la inconstitucionalidad del acto impugnado. En cambio, si el análisis conlleva a la conclusión de que existe una causa objetiva y razonable que justifica el trato desigual que se dice inconstitucional, el Pleno debe declarar constitucional el acto recurrido.

Ahora bien, al analizar la situación planteada en el negocio que nos ocupa, la Corte llega a la conclusión de que el literal a) del artículo 8 del Decreto 112 contradice el principio de igualdad ante la ley consagrado en los artículos 19 y 20 de la Constitución Nacional.

Un estudio del Decreto 112 pone de manifiesto que mientras que para ser miembro de la junta directiva de una liga de corregimiento, de distrito o de una provincia, los interesados deben residir en el respectivo corregimiento, distrito o provincia -lo cual significa que se acude al factor de residencia en la respectiva circunscripción territorial como requisito selectivo-, el literal A del artículo 8 del referido Decreto

revela un criterio de selección distinto, que hace referencia a la necesidad de que el interesado resida en la ciudad capital.

Lo anterior evidencia que existe un tratamiento desigual e injusto para quienes deseen pertenecer a la junta directiva de una federación nacional de deporte, tratamiento que, al no ampararse en una causa objetiva y razonable que lo justifique, produce la violación del principio previsto en los artículos 19 y 20 de la Ley Fundamental.

Ciertamente no existen justificados motivos que permitan coartarle a las personas que residen en áreas no comprendidas dentro del territorio de la ciudad capital, el derecho de poder aspirar a pertenecer a una junta directiva de una federación nacional de deporte. Tanto derechos tienen los del interior como los capitalinos, los del distrito capital como los de los demás distritos que componen la Provincia de Panamá. En fin, toda persona de nacionalidad panameña, sin importar el lugar donde tenga establecido su residencia en territorio panameño, tiene el derecho de aspirar a formar parte de la junta directiva de una federación nacional de deporte, con tal de que cumpla con los demás requisitos establecidos por la ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "y residir en la ciudad capital" contenida en el literal A del artículo 8 del Decreto 112 de 17 de junio de 1980, "Por el cual se reglamenta el Deporte Aficionado Post-Escolar en la República de Panamá".

Notifíquese y publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS AROSEMENA Y AROSEMENA EN CONTRA DEL AUTO DE 19 DE OCTUBRE DE 1990, DICTADO POR LA JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL CASO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INSTAURADA CONTRA FREDERICK KEMPE POR LOS DELITOS DE CALUMNIA E INJURIA EN PERJUICIO DE JORGE KRUPNIK. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados Arosemena y Arosemena, mediante escrito fechado el 23 de enero de 1991 presentó demanda con el fin de que se declare la inconstitucionalidad del auto dictado por la Juez Séptima del Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 19 de octubre de 1990, en el proceso que contiene la acusación particular promovida contra **FREDERICK KEMPE** por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de **JORGE KRUPNIK.**

En este negocio constitucional se cumplió con los trámites legales que los artículos 2554 y subsiguientes del Código Judicial disponen para estos procesos, por lo que se encuentra en estado de dictar sentencia.

La parte resolutiva del auto penal cuya inconstitucionalidad se plantea es del tenor siguiente:

> "Luego de analizado el cuaderno penal, considera la suscrita, que el hecho que motivó esta investigación no está plenamente comprobado en autos.
>
> Con respecto al aspecto subjetivo, es nuestro criterio de que si no existe delito, mal puede haber imputado debidamente vinculado. Aunado a lo anterior, acogemos el criterio vertido por la vindicta pública, en su Vista remisoria de fecha 31 de agosto de 1990, No. 313, en la que expresa que lo escrito por el señor **KEMPE** en su libro en relación con el acusado particular, proviene de un informe realizado por el Senado de los Estados Unidos. Consideramos entonces, que el imputado **KEMPE** lo que ha hecho es plasmar en su libro hechos que constan en un informe del Senado de los Estados Unidos.
>
> Es por las anteriores consideraciones, que procedemos a expedir un auto de sobreseimiento definitivo al tenor de lo dispuesto en el artículo 2210, numeral 2do., del Libro III del Código Judicial. En virtud de lo antes expuesto, la suscrita JUEZ SÉPTIMA DEL CIRCUITO DE LO PENAL, DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SOBRESÉE DEFINITIVAMENTE a FREDERICK KEMPE, varón, nacionalidad norteamericana, número de licencia de conducir 529-84-9064, hijo de Fritz Kempe y Johanna Kempe, localizable en Panamá en el Hotel Marriot habitación 1114, periodista. Fundamento de Derecho: Artículo 2210, numeral 2do., del Libro III del Código Judicial".

El demandante considera que el auto de 19 de octubre de 1990, dictado por la Juez Séptima del Circuito, Ramo Penal, viola el artículo 32 de la Constitución en forma directa, por omisión, porque -según él- "en el caso que nos ocupa ha sido violada la garantía sobre el derecho de nuestro mandante a que se cumplieran los trámites aplicables al negocio, previamente establecidos por la Ley, por lo que al no cumplirse con esa tramitación ha sido necesario recurrir al presente RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD" (fs. 32).

Agrega la parte actora que "en vez de ser resuelto previamente el incidente de Controversia por el Órgano Jurisdiccional (Tribunal Superior), se resolvió primero el fondo de la querella judicial por parte del Juez del conocimiento, mientras colgaba o pendía insoluta la decisión que debió haber recaído sobre el Incidente de Controversia" (fs. 33).

De conformidad con el procedimiento legal, se le corrió traslado del negocio al señor Procurador General de la Nación, quien mediante su Vista No.62 de 5 de agosto de 1991, emitió opinión en relación a la mencionada demanda.

En síntesis, el señor Procurador General de la Nación expuso lo siguiente:

"De la lectura del libelo contentivo de la demanda que nos ocupa podemos advertir que la misma resulta improcedente, toda vez que contra el Auto proferido por el Juzgador, ad-quo, la parte que se consideraba afectada pudo haber obtenido la enmienda deseada mediante la interposición del recurso de apelación, de conformidad en lo que dispone el Artículo 116 (sic) del Código Judicial" (fs. 42).

Observa, asimismo, el señor Procurador General que es conveniente anotar que "para que una resolución, emanada de un ente jurisdiccional, pueda ser objeto de análisis por la vía constitucional, es necesario que la misma haya agotado los medios de impugnación que consagra la ley" (fs. 42).

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima en el caso bajo estudio que no se ha producido la alegada violación del artículo 32 de la Constitución Nacional, que consagra la garantía del debido proceso legal, debido a que la resolución impugnada, dictada el día 19 de octubre de 1990 por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, cumplió debidamente con los tres principios fundamentales que consagra la referida garantía constitucional, los cuales son a saber:

1. Toda persona tiene derecho a ser juzgado por autoridad competente.

2. El proceso debe llevarse a cabo de acuerdo a los trámites establecidos en la Ley.

3. Nadie será juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

En los que respecta al primero de los principios antes enunciados, es decir, que toda persona tiene derecho a ser juzgado por autoridad competente, tenemos que la Resolución atacada fue dictada por el Juzgado Séptimo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que es autoridad competente con fundamento en el artículo 15 de la Ley No. 1 de 5 de enero de 1988, que es del tenor siguiente:

> "**Artículo 15**. Tendrán competencia privativa para conocer de los delitos contra el honor, los jueces municipales del domicilio del ofendido o del lugar donde se produjo el hecho punible, a elección del ofendido. Cuando estos delitos se cometieren a través de un medio de comunicación social, serán competentes los Jueces de Circuito" (Subraya la Corte).

Además, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha podido constatar que al emitirse la resolución impugnada se cumplieron los trámites establecidos en la Ley. Veamos por qué. El recurrente alega que la Resolución de 19 de octubre de 1990 proferida por la Juez Séptima del Circuito, Ramo Penal, en la cual se resolvió sobreseer definitivamente al señor FREDERIK KEMPE, imputado por el delito de Calumnia, en perjuicio del señor JORGE KRUPNIK, no cumple con los trámites establecidos en el Código Judicial, toda vez que dicha resolución fue emitida doce (12) días antes de que fuera decidido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, en resolución de 1o. de noviembre de 1990, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 27 de junio de 1990, proferido por el Juez de la causa, y mediante el cual se denegaba el Incidente de Controversia planteado por el doctor Diógenes Aníbal Arosemena Grimaldo contra la decisión de la Fiscal Primera del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá. El Código Judicial establece claramente en el artículo 2009 del Código Judicial vigente en la época que se emitió dicha resolución, que la apelación de la resolución que resuelve el incidente de controversia entre el agente del Ministerio Público y el Acusador Particular se concederá en el efecto diferido. El tenor literal de la referida disposición era el siguiente:

> "**Artículo 2009**. Toda controversia que surja entre el Agente del Ministerio Público, como funcionarios de instrucción y el imputado, su defensor o el acusador, si lo hubiere, la resolverá el tribunal competente para conocer del proceso, mediante incidente que ante él proponga el interesado.
>
> Esta tramitación se realizará en todos los casos en que el imputado o el acusador considere lesivo a sus intereses cualquier acto, mandato u orden del funcionario de instrucción, y se tramitará como los incidentes de previo y especial pronunciamiento.

> La apelación de la resolución que resuelve el incidente se concederá en el efecto diferido" (Subraya la Corte).

El Código Judicial en el artículo 1123, numeral 3, define la apelación en el efecto diferido, en los siguientes términos:

> "**Artículo 1123**. Las apelaciones podrán concederse en los siguientes efectos:
> ...
> 3. En el diferido, caso en el cual se suspenderá el cumplimiento de la resolución apelada, pero continuará el curso del proceso ante el inferior en lo que no dependa necesariamente de ella".

De lo antes expuesto se infiere que el recurso de apelación interpuesto por el acusador particular, doctor Diógenes Aníbal Arosemena Grimaldo contra el auto de 27 de junio de 1990, emitido por el Juez del proceso, mediante el cual se denegó el incidente de controversia propuesto contra la decisión de la Fiscal Primera del Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, **de negar la solicitud de detención preventiva contra el señor FREDERIK KEMPE**, fue concedido en el efecto diferido, que suspende el cumplimiento de la resolución apelada, que en este caso es el auto que denegó el incidente de controversia propuesto por el acusador particular contra la decisión del representante del Ministerio Público, pero cabe destacar que el curso del proceso continúa ante el inferior en todo lo que no dependa de la resolución impugnada.

Así, en el caso subjúdice el Juez competente para conocer del proceso, en atención a lo dispuesto en las disposiciones 1123, ordinal 3 y 2009 del Código Judicial continuó el proceso y en virtud de esto dictó la resolución de 19 de octubre de 1990 en la cual resolvió sobreseer definitivamente al señor FREDERICK KEMPE imputado por el delito de calumnia en perjuicio de JORGE KRUPNIK.

El incidente de controversia propuesto por el acusador particular, que fue denegado por la juez de la causa, pretendía que se decretara la detención preventiva del imputado FREDERICK KEMPE porque, según el acusador particular, se cumplían todos los requisitos establecidos en la ley procesal penal para que se decretara dicha medida. Lo pedido en el incidente fue negado por el Juez a-quo y esta resolución fue apelada. Esta corporación de justicia considera que los resultados de ese incidente en nada influían en la decisión que debía tomar el Juez del conocimiento y ello es así porque, el motivo de la apelación era determinar la procedencia o improcedencia de una medida cautelar personal contra el imputado y el Juez del conocimiento debía calificar el sumario para determinar si la investigación estaba o no completa y en caso afirmativo si procedía enjuiciar o sobreseer al imputado. Por tanto, la resolución atacada no incumplió con los trámites legales.

En adición a lo antes expuesto tenemos que, el artículo 692 del Código Judicial en materia de incidentes señala lo que a la letra dice:

> "**Artículo 692**. Los incidentes no interrumpen el curso del proceso ni ninguno de sus términos, salvo que su resultado pueda influir en la decisión, caso en el cual el término para dictar sentencia no comenzará a contarse sino desde que el incidente sea resuelto.
>
> Los incidentes cuyos resultados no influyen en la decisión, que no estuvieren fallados al tiempo de dictarse sentencia, serán declarados desiertos".

Además, tal como lo afirma el señor Procurador General de Nación, contra el auto de sobreseimiento definitivo impugnado en esta acción constitucional procedía el recurso de apelación ante el Superior, el cual no fue agotado (artículo 2219 del Código Judicial).

De consiguiente, la Resolución de 19 de octubre de 1990 emitida por el Juzgado Séptimo de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, contentiva de la decisión de sobreseer definitivamente al señor KEMPE, no infringe el artículo 32 de la Constitución Nacional, ni ninguna otra disposición constitucional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley **DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL** la Resolución de 19 de octubre de 1990, dictada por la Juez Séptima del Circuito Judicial de Panamá dentro de la acusación particular instaurada contra FREDERICK KEMPE imputado por los delitos de calumnia e injuria en perjuicio de JORGE KRUPNIK.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTO POR EL LICENCIADO MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 30 DE ABRIL DE 1991 PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Miguel Deen Rodríguez, en representación de la señora Pauline Brown Allen, ha demandado que la Corte Suprema de Justicia, que previo el cumplimiento de los trámites legales, declare que es inconstitucional la resolución proferida el 30 de abril de 1991 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en el proceso penal seguido a PULINE BROWN ALLEN ante el Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal.

Cumplidos los trámites señalados en los artículos 2554 y siguientes del Código Judicial para estos procesos, el negocio está listo para resolver, a lo que se procede previas las consideraciones que a continuación se expone.

**I. LA DEMANDA**

El demandante sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mediante sentencia de 13 de diciembre de 1990, el Juzgado octavo del Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial, condenó a PAULINE BROWN ALLEN, de generales descritas en autos, a cumplir la pena de treinta y dos (32) de prisión, por la comisión del delito de Tráfico Internacional de Drogas, en grado de tentativa.

SEGUNDO: A través de memorial de Febrero de 1991, demandé del Juzgado Octavo del Primer Circuito Judicial, Ramo Penal, el reemplazo de la Pena de 32 meses de Prisión impuesta a nuestra representada, por la reprensión privada a que se retire (sic) el artículo 82 del C.P., acorde con el Art. 70 de la Ley 3 del 22 de enero de 1991, la referida solicitud se presentó en el Tribunal de grado, en esa fecha debido a que en el momento que resultara condenada nuestra patrocinada, no existía la Ley 3 del 22 de enero de 1991.

TERCERO: El Tribunal que previo a lo solicitado y por considerarlo procedente decretó reemplazar la pena de treinta y dos (32) meses de prisión impuesta a PAULINE BROWN, por una reprensión privada, advirtiendo al Departamento Nacional de Migración que se encargue que ésta sea expulsada del Territorio Nacional y que no se le permita un nuevo ingreso al país, decretándose su libertad inmediata.

CUARTO: En la actualidad está en ejecución la sentencia dictada en contra de PAULINE BROWN ALLEN, tal como consta en el Certificado No. 40DNC, expedido por el Departamento de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia, el día 29 de enero de 1991.

QUINTO: El Segundo Tribunal Superior de Justicia, Ramo Penal, interponiendo un criterio subjetivo al querer de la Constitución y la ley, consideró que el delito por el que se procesó a nuestra representada, es un ilícito cometido por extranjero, que es de peligro social y que va en contra de la humanidad, por lo que dada la naturaleza del ilícito PREVIA REVOCATORIA DEL AUTO fechado 20 de febrero de 1991, MANTIENE la pena de 32 meses de prisión contra PAULINE BROWN ALLEN" (fs. 30-31).

Adicionalmente agrega el demandante que la Resolución impugnada, infringe los artículos 15, 17, 18, 19 y 43 de la Constitución Nacional.

En cuanto al concepto de la infracción de las referidas disposiciones constitucionales el recurrente estima que el artículo 15 fue infringido de manera directa, toda vez que la resolución atacada "enerva la aceptación del principio de territorialidad de la ley, proclamado en nuestro ordenamiento jurídico, como en la mayoría de los Estados modernos" (fs. 32).

En relación a los artículos 17 y 18 considera el demandante que dichas normas constitucionales han sido violadas en forma directa, ya que dichos artículos "recogen el principio de legalidad, aplicables a todos los actos públicos, en cuya virtud todas las entidades públicas deben ajustar su actuación a la Constitución y a la Ley, les está vedado incurrir en acciones u omisiones en violación al ordenamiento jurídico, ni por acción ni por omisión" (fs. 32-33).

El artículo 19 de la Constitución por su parte, expone el demandante, consagra el principio de igualdad ante la Ley, por tanto, prohíbe tanto las ventajas en beneficio de persona o personas determinadas, como la discriminación por razones de índole personal y los fueros o privilegios personales. Considera entonces el apoderado judicial de la señora Pauline Brown Allen, que a ésta le fue denegada la medida liberatoria, por ser de raza negra y extranjera, ya que según establece el recurrente en el libelo de demanda, "ha habido pronunciamientos en igual situación o peor que la que hoy nos ocupa donde se ha favorecido con medidas liberatorias de la naturaleza de la que hoy nos ocupa" (fs. 34).

La última de las normas constitucionales que la resolución impugnada infringe, según el demandante, es el artículo 43, y lo viola en forma directa por omisión.

**II. OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN**

De acuerdo con lo señalado en las normas de procedimiento, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación de la demanda, quien por medio de la Vista No. 8 de 11 de febrero de 1992, emitió su opinión en relación al presente negocio, en los siguientes términos:

"... En reiteradas ocasiones la jurisprudencia nacional ha sostenido que el artículo 15 de la Constitución Nacional, es de carácter declarativo, es decir, no consagra derechos subjetivos, por lo que en forma directa y de por sí no es susceptible de violación alguna.

Dicho precepto constitucional establece un principio general de que los extranjeros y nacionales están sometidos a la ley panameña dentro del territorio nacional, pero tal principio no resulta infringido cuando precisamente la resolución acusada de inconstitucionalidad está aplicando la ley ...

... Igual suerte corren los artículos 17, 18 y 19 de la Constitución Nacional, puesto que su carácter declarativo o enunciativo impide que puedan ser objeto de violación ...

... El artículo 18 de la Carta magna, enuncia en forma general las responsabilidades en que incurren los particulares y los servidores públicos, y en caso de que ello ocurra dichas responsabilidades no son objeto de un recurso de inconstitucionalidad, sino mediante otras acciones jurídicas ...

... la afirmación que hace el recurrente a fojas 34 referente a la discriminación por el color de la piel negra de su defendida, es un alegato de parte meramente subjetivo, sin asidero jurídico, que en ningún momento se ha contemplado en la resolución atacada de inconstitucionalidad.

A juicio de este Despacho, tampoco le asiste razón al recurrente sobre la supuesta infracción del artículo 43 de la Constitución Nacional que trata del efecto irretroactivo de las leyes, salvo algunos casos, que en nada se relacionan con el presente negocio, explicamos:

En la resolución denunciada, el Tribunal, ad-quem, modificó un error cometido por el inferior. Ello, porque fue concedida la sustitución de la pena de prisión, sin llenar los requisitos que establece la ley. Dichos requisitos, por un lado, se reúnan los elementos requeridos para suspender condicionalmente la pena, como son: tratarse de un sujeto que ha llevado una vida ajustada a derecho, sin antecedentes penales y que con posterioridad al acto delictivo haya demostrado arrepentimiento.

El Tribunal de Segunda instancia consideró que 'no se aprecian las condiciones necesarias para la suspensión condicional de la pena, lo cual es una exigencia de la norma aplicada por el juzgador ya que por ejemplo el arrepentimiento no ha quedado demostrado ...' (fs. ll).

Por otro lado, sostiene el Tribunal, tampoco se siguió el procedimiento establecido en el artículo 2398. Toda vez que a la vez de este precepto legal, es en la sentencia definitiva de la pena de prisión, y no un auto, como ocurrió en el proceso penal en comento ..." (fs. 44-47).

En apoyo a su criterio el funcionario en referencia cita tanto jurisprudencia de esta Corte, como doctrina de Derecho Constitucional del Dr. César A. Quintero.

**III. CONSIDERACIONES DE LA CORTE**

En cuanto a la alegada infracción por la resolución de 30 de abril de 1991 proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del artículo 15 de la Constitución Política, tenemos que el destacado jurista panameño, ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Dr. César Quintero ha manifestado sobre esta norma constitucional:

"El artículo, por demás, es un ripio constitucional, al menos en nuestro concepto. Se trata del artículo 16 (art. 15 de la Constitución Política de 1972) que dice:

'Tanto los nacionales panameños como los extranjeros que se hallen en el territorio de la República están obligados a vivir sometidos a la Constitución y a las leyes y a respetar y obedecer a las autoridades'.

Hemos dicho que el transcrito artículo es, en nuestra opinión, un ripio constitucional.

Veamos primero el significado de esta locución y luego las razones por las cuales tenemos del citado precepto la opinión que hemos avanzado.

En general, entiéndese por ripio todo conjunto de palabras inútiles que se incluyen en un escrito o discurso, las cuales constituyen simple material de relleno o de adorno innecesario.

En cuanto al derecho que estudiamos, llámase ripios constitucionales no sólo los preceptos que pretenden afirmar principios ya consagrados y evidentes, sino también aquellas disposiciones carentes de verdadero carácter normativo, cuya supresión, por tanto, en nada afectaría las demás disposiciones, ni el contexto general, de la Constitución.

Ripio constitucional puede ser cualquier fórmula que pretenda establecer un precepto impracticable y puede serlo también cualquier fórmula que contenga

> un truismo, es decir, una verdad demasiado evidente y trillada, cuya proclamación carece, por tanto, de trascendencia efectiva.
>
> Ahora bien ¿por qué estimamos que el referido artículo entra dentro de la explicada categoría de ripios? Por la sencilla razón de que es cosa obvia que la Constitución y las leyes de un Estado rigen para todas las personas que se hallan bajo su jurisdicción territorial, salvo excepciones generalmente aceptadas ..." (QUINTERO, César. Derecho Constitucional, Impresora Antonio Lehmann, t. I, San José, 1967, pp. 88-89) (Lo comentado y subrayado es de la Corte).

De lo antes expuesto, se colige que el artículo 15 de la Constitución Política es una norma que no consagra ningún derecho que no esté ya contenido en la Constitución y por tanto, debe desestimarse la alegada infracción de dicha norma constitucional por la resolución impugnada.

El demandante también estima infringidas las siguientes normas constitucionales: artículo 17, el cual se limita a establecer los fines para los cuales se instituyen las autoridades públicas; artículo 18, referente a la responsabilidad que recae sobre particulares por infracción de la Constitución o de la Ley, y sobre los servidores públicos por las mismas causas que los particulares y también por extralimitación de funciones o por omisión en el ejercicio de éstas; y por último, el artículo 19, el cual contiene la prohibición de fueros o privilegios personales y de discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas. Esta Corporación de Justicia se ha manifestado, sobre las dos primeras normas, en el sentido de que son disposiciones que no consagran derecho o garantía individual alguna, por ser normas de carácter meramente declarativas o programáticas, que no son susceptibles de violación de manera directa, sino en vinculación con otra norma constitucional que sí consagre derechos individuales o sociales. En cuanto a la alegada violación del artículo 19 de la Constitución Nacional, la Corte está de acuerdo con lo expresado por el señor Procurador de la Nación en su Vista Fiscal en cuanto a que "la afirmación que hace la recurrente ... referente a la discriminación por el color de la piel negra de su defendida, es un alegato de parte meramente subjetivo, sin asidero jurídico, que en ningún momento ha contemplado la resolución atacada de inconstitucionalidad" (fs. 46).

La última de las normas de la Constitución Nacional que el recurrente considera que ha sido violada es el artículo 43, el cual establece el principio de irretroactividad de la Ley, salvo cuando se trata de leyes de orden público o de interés social cuando en ellas así se exprese y en materia criminal la ley más favorable al reo.

En el caso subjúdice se puede apreciar en relación con la alegada violación del referido artículo, que la Juez de Primera Instancia mediante sentencia de 13 de diciembre de 1990, condenó a la señora PAULINE BROWN, a la pena de treinta y dos (32) meses de prisión por tráfico internacional de droga, en grado de tentativa. Posteriormente, el licenciado Miguel Deen Rodríguez, apoderado judicial de la procesada PAULINE BROWN solicitó a la Juez de la causa que se le reemplazara la pena de prisión por otra medida según lo especificado en el artículo 70 de la Ley No. 3 de 22 de enero de 1991, que subroga el artículo 2398 del Código Judicial, a lo que la Juez Ad-quo respondió afirmativamente reemplazando la pena de prisión por la medida de reprensión privada, según lo dispuesto en el artículo 2398 del Código Judicial que a la letra dice:

> "**Artículo 2398**. El juez del conocimiento, al dictar la sentencia definitiva, **podrá** reemplazar la pena de prisión no mayor de tres (3) años cuando no se encuentren reunidas las condiciones que le permitan suspender condicionalmente la ejecución de la pena, siempre que se tratare de delincuente primario. En estos casos podrá decretar, según proceda en derecho, cualquiera de las medidas previstas en los ordinales 1 y 2 del artículo 82 del Código Penal".
>
> El artículo 82 del Código Penal, por su parte expone:
>
> "**Artículo 82**. Cuando no proceda la suspensión condicional de la pena, el Tribunal **podrá** reemplazar la pena de prisión impuesta no mayor de un años por una de las siguientes:
>
> 1. Conversión a días-multa, y
> 2. Reprensión pública o privada" (Subraya la Corte).

La pena de prisión dictada contra la señora Brown fue reemplazada por la medida de reprensión privada, mediante resolución No. 29 de 20 de febrero de 1991 emitida por la Juez Octava de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, con fundamento de derecho en el artículo 70 de la Ley 3 de 22 de enero de 1991, (que modificó el artículo 2398 del Código Judicial y el artículo 82 del Código Penal en lo que al período de duración de la pena de prisión reemplazable, el cual aumentó a 3 años).

Esta Resolución fue impugnada por el representante del Ministerio Público, y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 30 de abril de 1991, resolvió la apelación interpuesta revocando el auto de 20 de febrero de 1991, dictado por el juez a-quo y manteniendo la pena de 32 meses de prisión impuesta a Pauline Brown Allen.

En dicha sentencia el Tribunal ad-quem expuso las siguientes consideraciones:

> "Observa el Tribunal, que el ilícito castigado es el de tráfico de drogas, se trata de un imputado extranjero y la medida de la sustitución no fue adoptada en la sentencia tal como lo ordena el artículo 2398 del Código Judicial ...

> Si como indica esta disposición es en el momento de dictar la Sentencia y en el presente caso se encontraba en cumplimiento tal como lo indica el Certificado No. 40-DMC. del Departamento de Corrección visible a fojas 89, considera este Tribunal que dada la naturaleza del ilícito, el peligro social que representan sus autores ya que ejecutan un delito contra la humanidad y así se ha establecido en múltiples convenios internacionales sobre la materia, resulta generoso conceder la solicitud formulada, liberando del cumplimiento real de la pena a partir de la dictación de la sentencia a quien merece cumplirla por las razones ya indicadas" (fs. 11-12).

En primer lugar hay que tomar en cuenta que el tribunal del conocimiento no está obligado en todos los casos a reemplazar la pena de prisión impuesta. Las normas transcritas lo autorizan a hacerlo, pero no lo obligan. Y ello es así porque en ambas normas se preceptúa que el Juez **podrá** reemplazar la pena. Esta facultad no constituye una obligación de acuerdo con el texto de las normas a que nos venimos refiriendo.

En segundo lugar, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que la alegada violación del artículo 43 de la Constitución Política por la sentencia del Tribunal ad-quem no se ha producido toda vez que, si bien dicho artículo consagra que en materia criminal se aplica la ley más favorable al reo, la Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, en sentencia de 11 de febrero de 1992, mediante la cual se resolvió "Solicitud de fianza de excarcelación interpuesta a favor de DIDIO ALBERTO RÍOS, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de RAYMOND MONROE DRAGSETH y FERNANDO ERNESTO BRATWAITE", ha establecido que en el ordenamiento jurídico panameño, la ley más favorable al reo en materia criminal que tiene carácter retroactivo es únicamente la ley sustantiva, y no la ley procesal. En el referido fallo se expone:

> "Nuestra legislación a diferencia de la de otros países consagra la retroactividad y ultractividad en materia penal, pero no la hace extensiva a la ley procesal, pues por el contrario, considera que las reformas procesales se aplican desde su promulgación y vigencia, por considerar al proceso de orden público y como el denominador común de impulso y aplicación de la ley sustantiva, además hay un interés social subyacente".

La Magistrada ponente del fallo antes parcialmente transcrito, Aura E. Guerra de Villalaz, en un artículo titulado "El Principio de Favorabilidad al Reo en la Legislación Panameña", se expresa sobre este tema lo siguiente:

> "Frente al acontecer nacional, todo indica que la ley procesal penal debe interpretarse a la luz del artículo 32 del Código Civil. Una nueva ley procesal penal que regule la sustanciación y ritualidades del proceso no afecta las consecuencias penales del caso, pero impulsa el mismo. Igual situación se plantea cuando la ley procesal deja al arbitrio del juez la concesión de una medida cautelar o sustitutiva de la detención preventiva, tal alternativa u opción del juzgador participa de una naturaleza jurídica distinta, no obliga a su retroactividad". (VILLALAZ, Aura E. G. de. "El Principio de Favorabilidad al Reo en la Legislación Panameña", Registro Judicial, Número Extraordinario, Publicación del Órgano Judicial de la República de Panamá, Primer Encuentro Jurídico de Cortes Supremas (Panamá-Costa Rica), 1992, p. 89).

De acuerdo con la interpretación de que no es retroactiva la ley procesal penal, la decisión del Juez de la causa, al reemplazar la pena de prisión por la medida de reprensión privada, no se ajustaba a derecho porque no era aplicable al caso en controversia el artículo 2398 del Código Judicial, modificado por el artículo 70 de la Ley 3 de 22 de enero de 1991, ya que dicha ley entró en vigencia cuando la Sentencia que condenaba a la señora PAULINE BROWN ALLEN, a treinta y dos (32) meses de prisión estaba debidamente ejecutoriada, y esa norma ordena que el reemplazo de la pena se haga en la sentencia.

Así pues, la resolución del Segundo Tribunal Superior de Justicia de 30 de abril de 1991, no viola nuestra Carta Fundamental porque, en primer lugar, si bien el Juez penal está facultado para reemplazar algunas penas, no está obligado a hacerlo en todos los casos en que se le solicite. En segundo lugar, la sentencia impugnada revoca la decisión del Juez a-quo de reemplazar la pena de 32 meses de prisión mediante un auto y no en la sentencia condenatoria y por último la sentencia en estudio fue fundamentada en una norma de carácter procesal, como lo es el artículo 2398 del Código Judicial, -el cual aumentó de 2 a 3 años de prisión, la pena reemplazable por días multa o reprensión pública o privada-, norma que como se ha expuesto, no puede aplicarse retroactivamente.

Por tanto, como la resolución judicial cuya declaratoria de inconstitucionalidad se demanda lo que hace es enmendar el error cometido por el tribunal a-quo y no infringe las disposiciones constitucionales que el recurrente alega fueron violadas, ni ninguna otra norma constitucional, debe negarse las pretensiones del actor.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL** la resolución dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el día 30 de abril de 1991, mediante la cual revocó el auto emitido por el Juzgado Octavo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, el día 20 de febrero de 1991, en el proceso penal seguido a PAULINE BROWN ALLEN.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEX H. GONZÁLEZ FRANCO, EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, EN CONTRA DE LAS RESOLUCIONES NO.1 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 1992 Y NO.5 DEL 26 DE MAYO DE 1992, DICTADAS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL MINISTERIO DE SALUD. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado ALEX H. GONZÁLEZ FRANCO, mediante poder especial otorgado por el señor **SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ**, interpuso demanda a fin de que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declare la inconstitucionalidad, por razones de forma o de fondo, las Resoluciones No.1 del 20 de noviembre de 1991 y No.5 del 25 de mayo de 1992, dictadas ambas por el CONSEJO TÉCNICO DE SALUD.

De la referida demanda de inconstitucionalidad se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien devolvió el expediente con Vista que corre de fojas 153 a 172.

Y por devuelto así el negocio se fijó luego en lista a fin de que el demandante y todas las personas interesadas presentaran argumentos por escrito sobre el caso, pero ninguna lo hizo dejando vencer dicho término.

De esa manera el caso de los actos demandados de inconstitucionales se encuentran en estado de resolver y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se pasan a exponer:

**ACTOS IMPUGNADOS**

Los actos que el demandante impugna de inconstitucionales, como se tiene antedicho, son:

A. La resolución No.1 de fecha 20 de noviembre e 1991 dictada por el Consejo Técnico de Salud, mediante la cual RESUELVE:

> "ARTICULO PRIMERO: MULTAR al señor SANTIAGO AUGUSTO DÍAZ, con la suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00) por infringir las normas correspondientes de la Ley 8a. de 1958.
>
> ARTICULO SEGUNDO: DECOMISAR de la óptica donde ejerce el señor SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, los instrumentos y materiales oftalmológicos que allí se encuentren.
>
> ARTICULO TERCERO: ORDENAR a los medios de comunicación la suspensión de toda cuña radiada o escrita donde se trasmite bajo el Título de Doctor e igualmente comunicar a las autoridades municipales de la región para la eliminación de cualquier afiche en donde el mismo aparezca como Doctor.
>
> Contra la presente Resolución procede Recurso de Reconsideración el cual deberá interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación.
>
> Notifíquese y Cúmplase.
>
> (fdo.) Dr. GUILLERMO ROLLA PIMENTEL
> Ministro de Salud y Presidente del Consejo Técnico de Salud.
>
> (fdo.) Dr.JOSÉ ÁNGEL PAREDES
> Director General de Salud y Secretario del consejo Técnico de Salud".

B. La Resolución No. 5 de 26 de mayo de 1992 dictada por el Consejo Técnico de Salud y por virtud de la cual "RESUELVE:

> "ARTICULO PRIMERO: MANTENER en todas sus partes la Resolución No.1 de 20 de noviembre de 1991.
>
> FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículo 171, 111 del Código Sanitario y Ley 8 de 1958.
>
> Notifíquese.
>
> (fdo.) GUILLERMO ROLLA PIMENTEL
> Ministro de Salud y Presidente del Consejo Técnico de Salud.
>
> (fdo.) Dr. JOSÉ ÁNGEL PAREDES
> Director General de salud y Secretario del Consejo Técnico de Salud."

**SÍNTESIS DE LOS ANTECEDENTES**

El CONSEJO TÉCNICO DE SALUD mediante Resolución No.100 de 16 de agosto de 1973, otorgó al señor **SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ**, graduado en OPTOMETRISTA en el Instituto Politécnico Nacional de los Estados Unidos Mexicanos, idoneidad profesional para ejercer en todo el territorio nacional, la profesión de OPTOMETRISTA.

Las autoridades del Sistema de Salud de la Región de Azuero levantaron una investigación contra el Optómetra señor **SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ** por el uso del título de **"DOCTOR"** en distintos medios de comunicación social, sin tener los conocimientos académicos que exige la profesión de la materia, expediente que fue remitido al Consejo Técnico de salud.

En Consejo Técnico de Salud por Resolución No.1 de 20 de noviembre de 1992, impuso al demandante la suma de B/.500.00 de multa "por infringir las normas correspondientes de la Ley 8a. de 1958" y de igual manera dispuso decomisar los instrumentos y materiales oftalmológicos de su clínica óptica, así como ordenar a los medios de comunicación social la suspensión de toda cuña radiada o escrita se transmita bajo el título de "DOCTOR" e igualmente comunicar a las autoridades municipales de la región para la eliminación de cualquier afiche en donde el optómetra **SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ** aparezca como "Doctor".

El demandante interpuso recurso de reconsideración en contra de la aludida Resolución y el Consejo Técnico de Salud, quien la mantuvo mediante Resolución No.5 de 26 de mayo de 1992, y entre otras consideraciones sostuvo que:

> "Que el recurrente presenta certificación de la Licencia Comercial a fin de determinar que la Empresa donde trabaja el Optómetra PEÑA DÍAZ lleva por nombre comercial, el nombre de sus cliente tiene como persona, alegando que dicha situación no está prohibida por las leyes, además a su vez funge como Representante Legal. Entendemos que lo señalado es una libertad que el mismo tiene. No obstante, observamos que las situaciones planteadas se encuentran fusionadas bajo un mismo nombre, con la diferencia de que antepone el nombre que utiliza la empresa el término `DOCTOR', por lo que conlleva a interpretaciones a crear en las personas desconocedoras de la profesión, engaño, lo cual le permite atraer clientes que posiblemente requieran de un examen de la vista más especializado, y que por desconocimiento académico de las enfermedades ópticas para detectarlas, no pueda percatarse o descubrir el verdadero mal, e ingenuamente sin propósitos dolosos o engaños proceda recetándole uso de lentes con la creencia que la solución del problema óptico se encuentra en la utilización de estos.

**LOS CARGOS QUE SE FORMULAN**

El demandante de acuerdo con la disposiciones constitucionales infringidas y el concepto de las violaciones como viene expuesto en la demanda en examen, acusa a los actos impugnados, parcialmente transcritos, de infringir los preceptos de la Carta Política siguiente:

> "Artículo 32. ...
> Según la disposición arriba transcrita, de la Constitución Nacional, para juzgar y condenar a una persona se requiere de una AUTORIDAD COMPETENTE y el CUMPLIMIENTO DE LOS TRÁMITES LEGALES.
>
> Sin embargo, el Consejo Técnico de Salud pretermitió el trámite legal previsto en el Código Sanitario y en las normas procesales, así como violó las normas sobre competencia, al imponer una sanción que está atribuida al Director General de Salud, por razón de decomiso de los instrumentos de trabajo que sólo procedería si alguien que no está debidamente facultado ejercer la profesión médica o afín; por razón también de que el Optómetra SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ está amparado por el escalafón sanitario y es miembro o funcionario de un hospital, por razón de que atendió sugerencias o presiones para un hospital, por sanción de quien probadamente tiene un interés económico y personal en dicha sanción, sin ser juez natural y sin escuchar al afectado. Por consiguiente se infringió el artículo 32 de la Constitución Nacional en forma directa, por omisión".
>
> "Artículo 32: ...
> Está norma señala la obligación de que exista una norma exacta y aplicable que contemple el delito o acto que justifique la sanción, la cual debe ser de fecha anterior a la norma al acto o hecho, sin embargo, sin que en el Reglamento de la Junta Técnica de Salud, ni en el Código Sanitario, exista alguna norma exactamente aplicable que justifique la sanción de una alta suma y el decomiso por razón del uso del término `Doctor' por parte que de quien con IDONEIDAD ejerce una profesión afín de la medicina, como es la Optometría, y sin que se compruebe que ejerce la profesión de médico, el Consejo Técnico de Salud impuso una pena a mi representado, violando con ello el artículo 31 de la Constitución Nacional en forma directa, por omisión"
>
> "Artículo 18: ...
> El artículo 18 de la Constitución Nacional ha sido infringido en forma directa, por omisión, por parte del Consejo Técnico de Salud, pues conteniendo dicha norma el principio de que los funcionarios públicos sólo pueden hacer lo que la Ley expresamente los autorice, no podía el Consejo de Salud proceder a establecer una sanción sin estar debidamente autorizado

para ello, como se ha expuesto en los hechos y en las postulaciones anteriores."

Artículo 40: ...
Esta norma fundamental señala la libertad, para toda persona, de ejercer cualquier profesión u oficio con sujeción a los reglamentos que establezcan la Ley en lo relativo a la idoneidad, moralidad, previsión y seguridad sociales, colegiación, salud pública, sindicación y cotizaciones obligatorias.

Sin embargo, a pesar de que el Optómetra SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ posee IDONEIDAD para el ejercicio de sus profesión en el Territorio Nacional, y que su profesión está reglamentada, sin que hubiese violado alguna norma del Reglamento o de la Ley, el Consejo Técnico de Salud le impone una pena o sanción rigurosa, coartando el libre ejercicio de su profesión puesto que dicha pena implica también el decomiso de sus instrumentos de trabajo. Por tanto, se violó el artículo 40 de la Constitución Nacional en forma directa, por omisión."

Artículo 44: ...
Esta norma obliga a las autoridades de garantizar la propiedad privada de todas las personas, cuando dicha propiedad ha sido adquirida con arreglo a la Ley. Sin embargo el Consejo Técnico de salud no está garantizado el disfrute de los instrumentos de trabajo que es propiedad de SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, al decomisarle los mismos satisfaciendo, quizás sin saberlo, el ego y el interés particular del Dr. ARRUE, su implacable perseguidor; por lo que también se pone en peligro su Óptica o lugar de confección y venta de lentes. Por consiguientes, se infringe el artículo 44 de la Constitución Nacional en forma directa, por omisión."

**OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN**

El Procurador General de la Nación, por su parte, al expresar su opinión manifiesta que las Resoluciones No. 1 de 20 de noviembre de 1991 y la No.5 de 26 de mayo de 1992, emitidas por el Consejo Técnico de Salud son contrarias a los artículos 32 y 44 de la Constitución Nacional, "... y así solicita, con el debido respeto, sea declarado por el Pleno de la Corte, al momento de fallar la presente demanda de inconstitucionalidad".

El funcionario del Ministerio Público para arribar a la anterior conclusión resalta en su comentada Vista los argumentos que a continuación se señalan:

Sostiene que el señor Peña Díaz le endilgan el uso indebido de un título que, a juicio de las autoridades de salud, no posee, es decir, no es idóneo, por lo que, al llamarse o anunciarse como tal, a través de los medios de comunicación social, induce a engaño y dolo, donde por consiguiente, como se establece en el acto demandado, la `explotación del público' porque su capacidad técnica está limitada e impedida para dar un tratamiento médico.

Agrega que, no obstante ello, a pesar de que en los considerandos de Resolución No.1 de 20 de noviembre de 1991, se señala que el señor Peña Díaz se anuncia como `doctor', sin ser idóneo, se termina sancionándolo `sin infringir las normas correspondientes de la Ley 8a. de 1958, es decir, por la supuesta infracción de la Ley que regula el ejercicio de la optometría en nuestro país, profesión para la cual, la misma autoridad sancionadora reconoce que puede desempeñar al haber acreditado sus estudios respectivos de optómetra.

Además destaca que el Consejo Técnico de Salud, a la luz del artículo 13 de la Ley 8 de 1958, por la cual se reglamenta el ejercicio de la Optometría, y los artículos 171, 218 y 196 del Código Sanitario, no tiene facultad ni competencia para imponer las sanciones disciplinarais a que aluden los actos impugnados de inconstitucionales, sino que ello corresponde a la Dirección General de Salud Pública.

Para así sostener que:

"... mediante las resoluciones demandadas, se infringió en forma clara, el artículo 32 de la Constitución, toda vez que, según la Ley 8a. de 1958, que es la que se dice violó el optómetra Peña Díaz, la autoridad competente para sancionar, lo es la Dirección General de Salud (efc. Art. 13 de la citada Ley) y no el Consejo Técnico de salud. Dicho precepto constitucional, que consagra el debido proceso legal, también resulta vulnerado, en la medida que en que se ha podido determinar, que en procedimiento disciplinario, de naturaleza administrativa, seguido a Peña Díaz, hubo en claro desconocimiento del trámite legal por una parte, para establecer cuál era la falta en que éste incurrió y, por otra, la norma aplicable a tal conducta prohibida. Ello porque, como ya se expresó, mal puede sancionarse una conducta que no está tipificada o prohibida por norma alguna. Es decir, no existe precepto alguno que prohíbe anunciarse como `doctor' y, en todo caso, qué tipo de `doctor'. Otra cosa es, que al optómetra sancionado se le hubiese probado que no sólo se anunciaba como médico oftalmólogo sino que, además, ejercía como tal, sin tener idoneidad para ello.

Finalmente la sanción aplicada al señor Peña Díaz está prevista en el artículo 13 de la Ley 8a. de 1958, pero resulta que esta norma señala que la misma será aplicada a `toda persona que ejerce la optometría o la óptica, o que se anuncie como optometrista o como óptico, sin poseer la respectiva idoneidad y no, desde luego, a quien se anuncie como `doctor'.

> La violación del artículo 32 de la Constitución, por parte del Consejo Técnico de Salud, al expedir las Resoluciones No.1 de 30 de noviembre de 1991 y la No. 5 de 26 de mayo de 1992, conlleva también, a su vez, la infracción del artículo 44 de la Constitución, puesto que se le ha privado de su propiedad privada, al decomisarle de la óptica donde ejerce el señor Peña Díaz, los instrumentos y materiales a través de un procedimiento arbitrario. Dicho en otros términos, si bien la Ley 8a. de 1958, prevé en su artículo 13, el comiso de los instrumentos y materiales usados en la infracción, para que esta sanción se ajuste a la Ley, previamente debió comprobarse la falta, situación que como ya se ha esgrimido, no se probó. Se privó así, en forma irregular, de la propiedad privada de un particular, lo cual según el artículo 44 de la Constitución, le está garantizada en la medida en que haya sido adquirida conforme a la Ley.
>
> En lo que respecta a los artículos 18, 31 y 40 de la Constitución y que, a juicio del demandante,también resultan infringidos, este despacho es de opinión contraria, en el sentido de que los mismos no han sido violados ..." (Fs.169 a 170)

**CRITERIO DE LA CORTE**

De las consideraciones y argumentaciones que anteceden se colige que, en síntesis, el demandante y el Procurador General de la Nación coinciden en señalar que los actos impugnados violan los artículos 32 y 44 de la Constitución Política, pero difieren en sus conclusiones en cuanto a los artículos 18, 31 y 40 alegados también como infringidos en la demanda de inconstitucionalidad en estudio.

Es del caso, entonces, que el Pleno de la Corte cumpla la confrontación constitucional concentrando el análisis en los artículos 32 y 44 de la Carta Política; pues, en estos dos preceptos tanto el accionante como el Procurador General de la Nación hacen recaer el vicio de inconstitucionalidad que se endilga a los actos impugnados.

Conviene señalar antes, como cuestión adicional a lo anteriormente expuesto, que el promotor de la acción de inconstitucionalidad, luego de interponer recurso de reconsideración y por agotado así la vía gubernativa, propuso demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Esta Sala de la Corte a pesar de que no admitió la referida demanda contencioso administrativa, sin embargo, en la resolución de 28 d abril de 1993 dejó sentado ciertos criterios en relación con la naturaleza jurídica de las Resoluciones proferidas por el Consejo Técnico de Salud, en el sentido de que:

> "... le asiste razón al Procurador de la Administración puesto que a la luz del artículo 855 Administrativo las resoluciones mediante las cuales se sanciona las infracciones al Código Sanitario se encuentran dentro de lo que se denomina actos de policías los cuales no pueden impugnarse en la vía contencioso administrativa, pues así lo prohíbe el artículo 17 de la Ley 13 de 1946 que modifica el artículo 2. de la Ley 135 de 1943. ..."

Definida la naturaleza jurídica de los impugnados actos mediante los cuales se sanciona al demandado Santiago Augusto Peña Díaz, y de regreso a la confrontación constitucional, cabe reiterar entonces que las sanciones a que se contraen dichas resoluciones son:

> "ARTICULO PRIMERO: MULTAR al Señor SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, con al suma de QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.500.00) por infringir las normas correspondientes de la Ley 8a. de 1958.
>
> ARTICULO SEGUNDO: DECOMISAR de la óptica donde ejerce el señor SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, los instrumentos y materiales de oftalmológicos que allí se encuentren.
>
> ARTICULO TERCERO: ORDENAR a los medios de comunicación la suspensión de toda cuña radiada o escrita donde se trámite bajo el Título de Doctor e igualmente comunicar a las autoridades municipales de la región para la eliminación de cualquier afiche en donde el mismo aparezca como Doctor."

El artículo 32 de la Constitución Política al receptar la garantía del debido proceso, ciertamente establece como presupuesto de esta fundamental garantía el juzgamiento por autoridad competente y conforme a los trámites legales.

En el caso que ocupa a la Corte, como se tiene visto de los planteamientos anteriores, se alega que el Consejo Técnico de Salud no tiene competencia para sancionar, como lo hizo por virtud de las resoluciones acusadas con el demandante. No obstante, si se analizan con criterio diferente e integral las normativas de la Ley No.66 de 10 de noviembre de 1947, por la cual se aprueba el Código Sanitario, se ha de arribar a una conclusión totalmente distinta a la que sostiene el proponente de la acción de inconstitucionalidad así como el máximo representante del Ministerio Público, en relación con el precepto constitucional invocado como infringido, en este caso. Veamos:

En efecto, el Consejo Técnico de Salud Pública visto desde la exégesis de la normativa del código en cita tiene como una de sus funciones principales la del "... control de la práctica de las profesiones médicas y afines y atribución de asesor en problemas de salubridad cuya naturaleza exija la acción conjunta organizada de distintas entidades del estado o de éstas con instituciones semi-oficiales o privadas que se ocupen de actividades preventivas o médicas en general", esto es, conforme al artículo 108 del Código en comento.

Por otra parte, si bien es cierto que el Consejo Técnico de Salud Pública a tenor de lo dispuesto por el artículo 112 ibídem, "... no tiene carácter ejecutivo y sus resoluciones se comunicaran por escrito al Director General de Salud Pública, quien deberá aplicarlas en el término recomendables en los casos de sanciones ...", no menos cierto es que dicho Consejo tiene "... facultad para aplicar multas de diez balboas (B/.10.00) a quinientos balboas (B/.500.00), a los infractores de sus reglamentos ...".

En igual sentido cabe resaltar que el Consejo Técnico de Salud Pública, también de conformidad con el numeral 2. del artículo 111 de la citada excerta legal, tiene como una de sus funciones precisamente la de "Investigar las acusaciones que se formulen contra los empleados del servicio, para lo cual recibirá los testimonios que se produzcan y requerirá los antecedentes que considere necesario", siendo que la única excepción que en el ejercicio de esa función dispone está contemplada en el último inciso del indicado numeral que dispone: "Se exceptúan los miembros de los escalafones sanitarios y de hospitales, quienes quedarán sujetos a las disposiciones correspondientes establecidas en este Código". Además, según el artículo 199 ibídem el Consejo Técnico de Salud Pública resolverá todo asunto relacionado con el "ejercicio, derecho, moral y secreto profesionales, honorarios, etc. Establecerá y aplicará las sanciones de amonestación, apercibimiento, multa y suspensión del ejercicio profesional (...)". (El énfasis de la Corte).

De los expuesto queda claro, entonces, que el Consejo Técnico de Salud Pública contrario a lo que sostiene el demandante y el señor Procurador General de la Nación, en el proceso de inconstitucionalidad de que conoce el Pleno, sí tiene competencia para aplicar la sanción de multa a que se contraen los actos impugnados. Pues, del análisis de la confrontación señalada resulta evidente que sin esa facultad sancionadora ningún sentido práctico tendría el Consejo Técnico de Salud Pública, creado por el legislador como uno de los principales organismos del Sistema de Salud en nuestro medio.

La abundante documentación aportada al proceso de inconstitucionalidad revela, por otra parte, que en el juzgamiento de carácter administrativo policivo del Optómetra Santiago Augusto Peña Díaz se cumplió con los trámites legales, inclusive el demandante interpuso recurso de reconsideración en contra del acto sancionador, y lo que es más, el demandante en el hecho "DÉCIMO CUARTO" de la demanda de inconstitucionalidad reconoce que sus anuncios serían modificados.

Ahora bien, en idéntico orden de análisis de la confrontación constitucional, en lo que respecta a la sanción de DECOMISO de los instrumentos y materiales oftalmológicos también impuesta al accionante **SANTIAGO PEÑA DÍAZ** mediante los actos impugnados, la situación de esta sanción a tenor de lo preceptuado por el artículo 219, numeral 4, del Código Sanitario, es diferente a la sanción de multa, toda vez que corresponde al Director de salud Pública y no al Consejo Técnico conocer y establecer las infracciones en que exista clausura o decomiso de valor superior a B/.100.00. Por lo que, en este sentido, el "Artículo Segundo" de la acusada Resolución No.1 de 20 de noviembre de 1991, confirmada por la Resolución No.5 de 26 de mayo de 1992, ambas dictadas por el Consejo Técnico de Salud Pública, infringe el artículo 32 de la Constitución Política, y de igual manera el artículo 40 de la misma Carta Fundamental, por no tener dicho Consejo Técnico competencia para imponer sanción de DECOMISO, en los términos como lo hizo en el caso del prenombrado Optómetra Peña Díaz.

Por otra parte, además de la infracción constitucional señalada por el Pleno de la Corte, considera que el aludido "Artículo Segundo" de la meritada Resolución también infringe el artículo 30 de la Carta Política que prohíbe "... la confiscación de bienes".

Para concluir, sólo resta expresar que, no obstante lo que se deja expuesto antes, el Pleno de la Corte comparte el criterio del señor Procurador General de la Nación, en el sentido de que los actos impugnados no violan los artículos 18, 31 y 44 de la Constitución Política.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INCONSTITUCIONAL sólo el ARTICULO SEGUNDO de la Resolución No.1 de 20 de noviembre de 1991, confirmada por la Resolución No.5 de 26 de mayo de 1992, dictada por el CONSEJO TÉCNICO DE SALUD PUBLICA que dice:

> "ARTICULO SEGUNDO: decomisar de la óptica donde ejerce el señor SANTIAGO AUGUSTO PEÑA DÍAZ, los instrumentos y materiales oftalmológicos que allí se encuentre."

Notifíquese, Archívese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS RIVERA Y RIVERA EN REPRESENTACIÓN DE WELLINGTON FUNG LOW, REPRESENTANTE LEGAL DE LA ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, EN CONTRA DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE PANAMÁ POR MEDIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL OIRSA PARA EL ESTABLECIMIENTO Y OPERACIÓN DE UN SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FUMIGACIÓN DE

PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La ASOCIACIÓN DE USUARIOS DE LA ZONA LIBRE DE COLON, por intermedio de la firma forense RIVERA Y RIVERA, presentó acción de inconstitucionalidad para que la Corte Suprema de Justicia declarara que el CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL GOBIERNO DE PANAMÁ POR MEDIO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y EL OIRSA PARA EL ESTABLECIMIENTO DE OPERACIÓN DE UN SERVICIO NACIONAL E INTERNACIONAL DE FUMIGACIÓN DE PRODUCTOS Y SUB-PRODUCTOS AGROPECUARIOS infringe los artículos 17, 48, 153 numeral 3, 179 numeral 9 y 274 de la Constitución Política de la República.

Antes de ser acogida la demanda, con fundamento en lo preceptuado por el artículo 2552 del Código Judicial, se oficio al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que compulsara y enviara a esta corporación copia auténtica del convenio impugnado en la demanda. Cumplida esta formalidad, se admitió la demanda y se le corrió traslado a la Procuraduría de la Administración para que emitiera concepto dentro del término de ley.

El representante del Ministerio Público, mediante Vista N°639 del 2 de diciembre de 1992, se mostró contrario a la pretensión de la demandante y consideró que el convenio de cooperación no era contrario a la Constitución.

Dentro del término de diez días en que fue fijado en lista el proceso constitucional, para que el demandante y todas las personas interesadas tuvieren la oportunidad de presentar argumentos por escrito sobre el caso, el actor consideró oportuno, en lo que llamó alegato de conclusión, refutar la opinión de la Procuraduría de la Administración. Ninguna otra persona hizo uso del término concedido.

Corresponde ahora decidir la acción promovida, para lo cual se hacen las consideraciones siguientes.

Sostiene el demandante que en el mes de noviembre de 1988 el Ministro de Desarrollo Agropecuario, representando al gobierno de Panamá, suscribió con el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) un convenio de cooperación que permitía el establecimiento y operación de un servicio nacional e internacional de fumigación (SIF) de productos y sub-productos agropecuarios. Este acuerdo se realizó sin la participación del Presidente de la República y sin que el mismo fuera ratificado por la Asamblea Legislativa. En dicho acuerdo, continúa exponiendo, OIRSA establecerá, previa aprobación del gobierno panameño, una tarifa para cada tratamiento o unidad de medida, efectiva al momento de prestar el servicio.

Aboga el pretensor que el procedimiento llevado a cabo para la firma de este documento, por parte del gobierno panameño, contraviene disposiciones constitucionales e indica que imponer o crear tributos a los contribuyentes sólo es permitido por la ley conforme al mandato de claras disposiciones constitucionales.

Siguiendo el orden establecido en el libelo de demanda, expresa que se viola el numeral 9 del artículo 179 de la Carta Fundamental, en donde se establece como una atribución que ejerce el Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo, la de "Dirigir las relaciones exteriores, celebrar tratados y convenios públicos, los cuales serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares". Se rebasa la facultad en cuanto a la celebración de un convenio cuanto el Ministro de Desarrollo Agropecuario lo realiza sin la participación del Presidente de la República y sin haber cumplido con el rigor constitucional de su consideración por el legislativo.

La anterior observación la rebate la Procuraduría indicando que el Ministro de Desarrollo Agropecuario de Panamá fue "debidamente autorizado", según se expresa en el adendum de convenio, para celebrar el acuerdo, por lo que, tal como lo estatuyen los artículos 11 y 12 de la Convención de Viena, normas que adquieren rango superior conforme al conocido principio del bloque de constitucionalidad, en este caso particular de carácter internacional, no viola el artículo 179, numeral 9, de la Constitución Política de la República.

Por su parte, en su alegato de conclusión, los apoderados de la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón refutan la posición anterior sosteniendo que el instrumento en estudio es un convenio o tratado. Hace alusión a la Convención de Viena sobre la definición del término "tratado" y la refuerza con cita que hace de los tratadistas Dr. César Quintero y el Dr. Modesto Seara Vásquez para concluir en que debe el convenio mencionado sujetarse a la ritualidad exigida por la Constitución en la norma que se dice infringida. Interesante es su opinión cuando dice: "La Procuraduría de la Administración, defendiendo a ultranza, la constitucionalidad del meritado Convenio de Cooperación, pretende escudarse en el artículo 4 de la Constitución para sostener, indirectamente, que se pueden celebrar los que se denominan "Acuerdos Simplificados", que no necesitan la venia legislativa para que el Órgano Ejecutivo los ratifique. Es cierto que los acuerdos simplificados están muy en boga en la práctica internacional; pero ello no obsta para que cada gobernante cumpla primero con las normas de derecho interno para el proceso de aprobación o rechazo y el de ratificación".

Termina sosteniendo que del texto de nuestro Derecho Constitucional se desprende que todos los tratados y convenios en nuestro país son ad-referéndum, sujetos a la aprobación del Órgano Legislativo, por lo cual es manifiesta la violación constitucional invocada.

La violación del numeral 3 del artículo 153 de la Carta Magna se da cuando este convenio no se envió a la Asamblea Legislativa, tal como lo dispone la norma citada, en la cual se dice que una de las funciones legislativas es la de "Aprobar o desaprobar, antes de su ratificación, los tratados y los convenios internacionales que celebre el Órgano Ejecutivo". Por ello, manifiesta la demanda, el cobro que hace el Servicio Internacional de Fumigación de una tasa por la prestación del servicio no tiene asidero cuando el convenio que lo creó no se ha ratificado por la Asamblea Legislativa.

La Procuraduría de la Administración, en cambio, no encuentra lesión de la norma fundamental alegada, ya que, según su entender, se está frente a una implementación del Segundo Convenio de San Salvador, ratificado por Panamá mediante la Ley N°52 de 1954 y que tiene como finalidad "establecer o reforzar medidas de prevención de plagas y enfermedades, que minimicen los riesgos de infestación o infección de los productos agropecuarios de importancia económica de los países de la región".

Se da como violado el artículo 48 de la Constitución Política de la República. En esta disposición, en forma clara se expresa que "Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuvieran legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes". Al señalar en el acuerdo que OIRSA establecerá una tarifa por cada tratamiento o unidad de medida, se vulnera el artículo 48 del Estatuto Fundamental, por cuanto que es la ley la única que puede crear obligaciones tributarias y tiene la capacidad para poderla modificar o suprimirlas.

Continúa manteniendo que esos fondos obtenidos para el servicio de fumigación a que se contrae el convenio de cooperación, serán colectados y administrados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), violando el artículo 274 de la Constitución Política de la República que impone la obligación de que las entradas y salidas deben estar autorizadas en el respectivo presupuesto y el producto de esas tasas y derechos deben ingresar al Tesoro Nacional. En este comentario se permite establecer, según expresa, el cobro de tasas que no están especificados ni determinados, contraviniendo la voluntad expresada del constituyente en el artículo 274 referido.

Al sustentar la violación del artículo 17 de la Carta Fundamental, que según el demandante tiene el convenio de cooperación, lo explica en el sentido que el mismo concede, tal como actualmente se hizo, que la fumigación se realice indiscriminadamente. Según expresa, de la doctrina jurisprudencial sentada por la Corte, la autoridad pública al dictar un acto individual y transgredir las normas legales pertinentes, produce no sólo la violación legal sino también la del artículo 17 mencionado.

Según opinión del Procurador de la Administración no se da la violación endilgada al artículo 48 de la Constitución Política de la República, por cuanto que las tarifas o unidades de medidas se establecerán "previa aprobación del gobierno de Panamá" y la revisión y actualización periódica y cualquier otra nueva que se establezca se realizará "de acuerdo entre las partes", por lo que se reconoce y se respeta la potestad que tiene el gobierno panameño. Indica finalmente que las tasas en concepto de fumigación están autorizadas mediante la Ley N°51 de 2 de diciembre de 1977 que dejó a cargo del Órgano Ejecutivo la fijación de su monto.

Con respecto al enfrentamiento que se hace del convenio al artículo 274 de la Constitución, indica el Procurador de la Administración, que el cobro por el servicio de fumigación está autorizado por la Ley 51 de 1977 y que los excedentes que pudieran producirse luego de sufragar los gastos, según el convenio, serán transferidos al Ministerio de Desarrollo Agropecuario y los cuales se asignarán para el fortalecimiento de sanidad animal, sanidad vegetal y cuarentena agropecuaria, tal como lo prevé el artículo 93 de la Ley 32 de 31 de diciembre de 1992, esto es, la ley de presupuesto.

Por último, según el entender del señor Procurador de la Administración, el artículo 17 de la Constitución Política de la República es de tipo genérico o programático, por lo que no hay infracción por actos individualizados y sólo por excepción se produce su violación cuando se da la infracción de otras disposiciones constitucionales.

El impugnante del convenio en su extenso alegato, que llama de conclusión, reitera su posición de que éste es violatorio del principio constitucional consagrado en el artículo 48 que exige una ley en sentido formal para la creación de obligaciones tributarias. Este principio de legalidad deviene del hecho de que la imposición del tributo es una limitación a la garantía de la libertad individual y al derecho de propiedad, por lo que en su salvaguarda se exige su imposición por mandato de una ley.

Al referirse a la posición del Procurador, respecto a que la Ley 51 de 1977 permite el cobro de tasas en concepto de fumigación, la cuestiona en cuanto a que la misma viola el principio de legalidad establecido en la Carta Magna. Según su entender "Conforme a nuestra realidad constitucional, en la República de Panamá no se puede dudar de que la ley debe contener por lo menos los elementos básicos y estructurales del tributo a saber: 1°) Configuración del hecho imponible o presupuesto que hace nacer la obligación tributaria; 2°) la atribución del crédito tributario a un sujeto pasivo de aquel a quien se atribuye el acaecimiento del hecho imponible (contribuyente) o la responsabilidad por deuda ajena (responsable); 4°) los elementos necesarios para la fijación del quántum, es decir, base imponible y alícuota; 5°) las exenciones neutralizadoras de los efectos del hecho imponible".

En su exposición acude a la doctrina y al Derecho Comparado para concluir que todo tributo, al crearse por la ley, debe contener la determinación cierta y exacta de los supuestos de hecho que originen el pago de esas tasas, así como el monto de la misma. No puede, dice textualmente, dejarse a la discreción de un funcionario, la fijación de tasas encubriéndose en la autorización de una ley. Trae a colación, como sustento de su opinión,

los pronunciamientos emitidos por el Pleno de esta Corte al resolver amparos de garantías constitucionales, de 16 de enero y 21 de febrero de 1992, así como la sentencia de inconstitucionalidad del 2 de julio de 1992 en contra del Decreto N°452 de 10 de octubre de 1990 dictada por el Ministerio de Salud.

Agotada la ritualidad para la tramitación de esta clase de acción popular, corresponde al Pleno resolver sobre la constitucionalidad del acuerdo suscrito por el señor Ministro de Desarrollo Agropecuario y el representante del Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria para el establecimiento y operación de un servicio nacional e internacional de fumigación. Para ello es conveniente hacer algunas consideraciones sobre el origen y razón de ser del organismo internacional suscriptor del documento.

Los gobiernos de los países de Centroamérica, México y Panamá se reunieron en la ciudad de San Salvador, República de El Salvador, del 26 al 30 de octubre de 1953, y aprobaron el llamado Segundo Convenio de San Salvador. Se destacan, por su importancia, los considerandos en que se fundamenta este convenio. Ellos son del tenor siguiente:

"...

Que existen enfermedades y plagas devastadoras de las plantas y animales domésticos que, cuando aparecen en un país, pueden extenderse fácil y rápidamente a los países vecinos;

Que para salvaguardar a los pueblos de los graves perjuicios económicos que ocasionan aquellas plagas y enfermedades, es necesario un plan general cooperativo de los Gobiernos;

Que el Comité Internacional de Coordinación para el Combate de la Langosta en Centro América, México (CICLA) ha demostrado la efectividad de esa clase de cooperación;

Que el aporte de los países para el mantenimiento de un Organismo Internacional de Sanidad Agropecuaria, administrativa y técnicamente capaz, resulta muy económico en relación con las grandes pérdidas que en la agricultura y ganadería podrían causar las infestaciones de Langosta (Schistocerca Sp.); Roya o Herrumbre del Cafeto (Hemileia vastatrix), (Hemileia coffeico la); Broca del Cafeto (Stephanoderes coffeao) (Stephanoderes hampei); y también la Fiebre Aftosa, Aborto Contagioso y otros azotes similares;

Que la conferencia Regional Consultiva sobre la Fiebre Aftosa celebrada en Panamá en agosto de 1951, trató a fondo el problema de dicha Fiebre, llegando a conclusiones valiosas dignas de ser tomadas en cuenta;

Que las facilidades modernas de comunicación fomentan el intercambio de personas y productos entre los países, lo cual favorece enormemente la propagación de plagas y enfermedades contagiosas de los animales y los vegetales;

Que Organismos Internacionales tales como F.A.O. y la O.E.A., de los cuales son miembros los países integrantes de esta Conferencia, han expresado en distintas ocasiones su simpatía por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria de Centro América, México y Panamá, manifestando encontrarse en capacidad de contribuir con aportes efectivos;

Que también el Foreing Operations Administration de los Estados Unidos de América, por medio de su Programa Cooperativo de Asistencia Técnica, se le puede solicitar cooperación efectiva;

Que en las anteriores Conferencias de Ministros de Agricultura se manifestó la necesidad de crear un Organismo que tuviera una organización más amplia y funciones más extensas que el CICLA;

Que es inaplazable tomar las medidas de prevención contra tan graves peligros comunes; ...".

Los países asistentes a esa reunión dieron la mayor atención, tal como consta en la transcripción anterior, a las medidas adecuadas para la prevención de los males descritos. Comprendieron la urgencia de crear los organismos indispensables, capaces de coordinar todas las actividades dirigidas al cumplimiento del objetivo perseguido. Nace así, en el artículo uno de este Convenio,El Comité Internacional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), constituido por los señores Ministros de Agricultura o sus Representantes debidamente acreditados. Se establece como funciones de este Comité la de coordinar o sugerir las medidas de prevención y combate de las enfermedades y plagas que perjudiquen la agricultura y ganadería.

Comprensible es que este Comité, dada su configuración, no podía realizar su cometido directamente, por lo cual surgió el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), de carácter técnico y administrativo, entre cuyos objetivos está el de "Organizar los servicios de prevención y ejecutar, en estrecha colaboración con los Organismos Nacionales correspondientes, el control de plagas y enfermedades ...".

Los representantes de los países reunidos en la República de El Salvador no olvidaron el aspecto económico. Establecieron una aportación anual para cubrir el financiamiento del organismo y, en previsión de futuras emergencias, se dejó expresamente establecida la oportunidad de aportaciones extraordinarias.

La Asamblea Nacional de Panamá aprobó este convenio mediante la Ley 52 de l6 de diciembre de l954, la cual se publicó en la Gaceta Oficial número l2678 de uno de junio de l955.

Posteriormente la República de Panamá, a través de la Asamblea Nacional, legisló acerca del cobro de tasas por la prestación de servicios de prevención de problemas sanitarios fitoagropecuarios. Mediante la ley número 5l de 2 de diciembre de l977, se autorizó "... al Ministerio de Desarrollo Agropecuario, para cobrar tasas en el concepto de fumigación e inspección de cuarentena a todo vehículo aéreo, marítimo o terrestre que ingrese al país, por cualesquiera de los puertos, aeropuertos o fronteras del territorio nacional."

En la reunión del Comité Internacional de Sanidad Agropecuaria celebrada en la ciudad de Guatemala en l987, se aprobó la Resolución número once en donde se recomendó a todos los países miembros su incorporación al servicio internacional de fumigación a cargo de la Organización Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), con la supervisión de las instituciones del gobierno respectivo. En esta resolución encuéntrase el origen del Convenio de Cooperación para el establecimiento y operación de un servicio nacional e internacional de fumigación de productos y subproductos agropecuarios, materia de la acción de inconstitucionalidad propuesta por la Asociación de Usuarios de la Zona Libre de Colón.

Cuestionase la inconstitucionalidad del convenio de cooperación por violación, en primer lugar, del numeral 9 del artículo l79 del estatuto fundamental, cuyo tenor es:

> "Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo:
> ...
> 9. Dirigir las relaciones exteriores; celebrar tratados y convenios públicos, los cuales serán sometidos a la consideración del Órgano Legislativo y acreditar y recibir agentes diplomáticos y consulares.
> ..."

Prudente es determinar si el convenio atacado forma parte de aquellos actos públicos que el señor Presidente de la República celebra, en unión del Ministro del Ramo, y el cual debe ser sometido a la consideración del Órgano Legislativo.

Como ha quedado expuesto, la República de Panamá suscribió el llamado Segundo Convenio de San Salvador y posteriormente la Asamblea Nacional en l954 lo ratificó, convirtiéndolo en ley de la República. Nuestro país aceptó ser parte del Comité Internacional de Sanidad Agropecuaria cuyos objetivos se ejecutan a través del organismo denominado ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA). Dentro de los fines y objetivos de ese Comité se encuentra la prestación de servicios de prevención del control de plagas y enfermedades fitopecuarias. Para ello es indispensable el establecimiento de acuerdos y convenios con incidencias en cada país. Los integrantes de ese Comité, representantes de los países signatarios, deben considerarse debidamente facultados para obligar a sus países en todo lo concerniente a esos acuerdos, siempre y cuando no se aparten de las estipulaciones u objetivos señalados en el Segundo Convenio de San Salvador.

La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, al referirse a lo que se entiende por "plenos poderes", textualmente en su artículo 2, aparte c, lo define como "... un documento que emana de la autoridad competente de un Estado y por el que se designa a una o varias personas para representar al Estado en la negociación, la adopción o la autenticación del texto de un tratado, para expresar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, o para ejecutar cualquier otro acto con respecto a un tratado; ...".

En ese mismo artículo, en su aparte d se define como reserva la declaración unilateral hecha por el Estado al firmar el tratado, cuya finalidad es la de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese estado.

En los artículos 2 y 3 del Convenio de Cooperación atacado por los usuarios de la Zona Libre de Colón, se especifica claramente que el acuerdo tendrá como finalidad el establecimiento y ejecución de medidas de prevención de plagas y enfermedades nocivas a la agricultura y ganadería del país e indicando cuales serán esas medidas. Tales asuntos no constituyen ninguna novedad, ajenas al Segundo Convenio de San Salvador, cuya aceptación panameña, al tenor de los poderes otorgados al representante de Panamá, en este caso el señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, no pudiera suscribir. No existe, por Panamá, ninguna "reserva" en este tratado en tal sentido. El accionante, en un esfuerzo laudable, pretende desligar el presente acuerdo de cooperación con el Tratado celebrado en San Salvador, cuando ambos se refieren al mismo objetivo y la firma de aquél se realiza entre un miembro de éste dotado de plenos poderes y un Organismo creado por el Tratado.

No puede pasar inadvertido a este alto tribunal, el Comité Internacional de Sanidad Agropecuario, compuesto por los Ministros de Agricultura (Desarrollo Agropecuario en Panamá) de los países signatarios del Segundo Convenio de San Salvador. A ese Comité se le faculta para "... coordinar o sugerir entre dichos países las medidas de prevención y combate de las enfermedades y plagas que perjudican la agricultura y ganadería, ...", cuestión que comprende el acuerdo cuya inconstitucionalidad se demanda. Es fácil deducir, de las apreciaciones anteriores, que no era indispensable la participación del señor Presidente de la República en su confección, como tampoco es obligante su sometimiento a la consideración del Órgano Legislativo. Todo lo anterior lleva al Pleno a descartar

que se haya producido el quebrantamiento del numeral 9 del artículo 179 de la Constitución Política de la República.

No encontrándose el Convenio de Cooperación demandado como inconstitucional, dentro de los convenios públicos que deben celebrarse con la intervención del señor Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo, el mismo no necesita su aprobación mediante ley expedida por el Órgano Legislativo, como sucede con aquellos a los cuales se refiere el artículo 153 de esa Constitución en su numeral 3. Debe tenerse presente que ya la Asamblea Nacional, al aprobar la ley 52 de 1954, ratificó el Segundo Convenio de San Salvador y nuestro país, está obligado al cumplimiento de lo pactado allí al tenor del artículo 4 de la Carta Fundamental.

Se imputa al Convenio de Cooperación la colisión con los artículos 48 y 274 de la Constitución Política de la República. Estas normas rezan así:

> "ARTICULO 48: Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto, que no estuvieren legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las Leyes.
>
> ARTICULO 274: Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el respectivo Presupuesto. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto."

Dícese que conforme a estas normas es indispensable una ley formal para crear obligaciones tributarias. De allí que cuando el convenio habla de tarifas para cubrir el costo de la prestación del servicio (tasas), se incumple con el principio consagrado en la disposición constitucional que sólo la ley puede determinar contribuciones fiscales.

De la lectura del artículo 5 de esta convención, contrario a lo expuesto en la demanda, no puede colegirse que se está imponiendo gravámenes tributarios en desmedro del mandato constitucional. Un estudio cuidadoso de lo expuesto en el artículo 5 del convenio lleva al convencimiento de la existencia en esa norma de dos aspectos debidamente diferenciados.

En primer lugar, la tarifa para la prestación del servicio fumigación será establecido por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA), cuyo director ejecutivo, subdirector, tesorero y auditor son designados por el Comité Internacional de Sanidad integrado por los Ministros de Agricultura de los países signatarios, entre ellos Panamá. En segundo lugar, la tarifa preparada por el Organismo Internacional debe ser aprobada por el Gobierno de la República de Panamá. Es claro, entonces, que mediante este convenio no se está, como afirma el demandante, estableciendo cargas tributarias en contravención de las disposiciones constitucionales referidas. Salta a la vista que será la República de Panamá, a través de su Gobierno, la persona encargada de aprobar las tarifas que el Organismo Regional (OIRSA) le presente.

Sabido es que el artículo 179 de la Constitución Política de la República confiere al Presidente de la República, con la participación del Ministro respectivo, la facultad de "Reglamentar las leyes que le requiera para su mejor cumplimiento sin apartarse en ningún caso de su texto ni de su espíritu". Así también, no debe olvidarse que la ley N°51 de 2 de diciembre de 1977, en su artículo 1, autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que cobre tasas en concepto de fumigación e inspección de cuarentena por lo que debe entenderse que el Órgano Ejecutivo sí puede establecer estas tasas, por estar así autorizado mediante la legislación emanada del Órgano Legislativo.

Cuestiona el hecho que el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria colecta y administra los fondos que se reciben por las prestaciones de fumigación, lo cual contraviene el mandato del artículo 274 de la Constitución, ya que éstos fondos no se han incluido en el presupuesto. Mantiene que tales tasas y derechos deberían ingresar directamente al Tesoro Nacional.

En una interpretación sobre este aspecto, la Sala Tercera de esta Corte se pronunció sobre el alcance de ese artículo. Así dice:

> "Si bien es cierto que el artículo 204 (sic.) de la Constitución señala que todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidas y autorizadas en el presupuesto, no es menos cierto que la ley puede prever, en casos especiales en que existan poderosas razones de orden público o interés social, la creación de fondos especiales formados por ingresos que perciben una institución estatal por servicios prestados a los administrados. Nada impide tampoco, a juicio de la Sala, que en estos casos excepcionales la ley autorice a la institución estatal respectiva a que esos fondos, que pueden no estar presupuestados, sean utilizados por la propia institución para sufragar algunos de sus gastos. Si bien la Corte Suprema examinaría en cada caso la justificación de esta medida, no es menos cierto que estos casos, que no deben ser la regla general sino la excepción, pueden darse dentro de nuestro ordenamiento jurídico si la ley así lo prevé. Debe entenderse que en estos casos excepcionarse los respectivos fondos pueden ser fiscalizados por la Contraloría General de la República, con sujeción a las normas jurídicas especiales que regulen esos fondos."
>
> (Petición de interpretación, R.J., abril de 1992, Sala Tercera, págs.51-52).

La Ley 51 de 1977, a la que hemos hecho mención anteriormente, en la cual se autoriza al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el cobro de tasas en concepto de fumigación establece, en su artículo 3, cómo será manejado el caudal de lo recolectado

de la prestación de los servicios y, de manera específica determina que ellos se utilizarán para sufragar los gastos que ocasione la prestación de dicho servicio. En consecuencia, el hecho de que los fondos sean colectados y administrados por el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) para cubrir los costos, no constituye la violación que ha pretendido el demandante al promover su acción. De trascendencia es la Resolución N°11 de la trigésima cuarta Reunión del Comité Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria, celebrada en mayo de 1987 en la ciudad de Guatemala, en donde los representantes de los países signatarios del Segundo Convenio de San Salvador, previendo la contingencia que pudiera surgir en la puesta en práctica de estas medidas preventivas sanitarias, dispusieron que la administración y operación del mismo estuviere en manos del Organismo Estatal Regional bajo la supervisión de las instituciones del Gobierno respectivo. Así en el punto 1 se resuelve: "1. Que la Administración del Servicio Internacional de Fumigación, SIF, esté a cargo de las Representaciones del OIRSA en los países y bajo la supervisión de las Instituciones de Gobierno respectivas, de acuerdo con un Convenio País-OIRSA y un Manual de Procedimientos".

Se sostiene, por último, que se violenta el artículo 17 de la Constitución. La Corte ha expresado en ocasiones varias que dicha disposición es de carácter programático, sólo puede darse su violación como consecuencia de infracción de otras disposiciones constitucionales, lo cual no se presenta en este caso.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que el Convenio de Cooperación entre el Gobierno de Panamá por medio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el Organismo Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA) para el establecimiento de Operación de un Servicio Nacional e Internacional de Fumigación de Productos y Subproductos Agropecuarios no infringe los artículos 17, 48, 153 numeral 3, 179 numeral 9 y 274 y ninguno otro de la Constitución Política de la República de Panamá.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA FIRMA FORENSE CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS CONTRA LA RESOLUCIÓN DE 23 DE MARZO DE 1990 DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COLON, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense CARRILLO BRUX Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación del señor **MAURICIO CATACH**, interpuso acción de inconstitucionalidad contra el auto de 23 de marzo de 1990 mediante el cual el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, abre causa penal contra **DAVID ZIÓN COHEN** como supuesto infractor de disposiciones contenidas en el Título XII, Capítulo V, del Libro II del Código Penal y contra **ROSA ROSEMBAUN DE COHEN** y **MAURIO CATACH** como supuestos infractores de lo normado en el Título XII, Capítulo V, Libro II del Código Penal conexionado con el Título II, Capítulo V del Libro I del Código Penal.

Al estudiar el extenso libelo, se colige que los puntos que sustentan la pretensión de la demandante son los siguientes: 1. Que contra su representado el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, abrió causa criminal por la supuesta infracción de normas legales contenidas en el Título XII, Capítulo V, Libro II del Código Penal en concordancia con el Título II, Capítulo V, del Libro I del Código Penal, es decir, como cómplice del delito de quiebra fraudulenta (art.386 del Código Penal).

2. Que el Juez Segundo Municipal de Colón, Ramo Penal (Cristóbal), mediante auto de 30 de junio de 1986, llamó a juicio a su representado dentro del sumario instruido en ocasión de la denuncia presentada en contra del señor **MAURICIO CATACH** por simulación de crédito (art.388 del Código Penal), utilizado también como fundamento los mismos títulos y capítulos descritos en el punto anterior.

3. Que el Fiscal Segundo del Circuito de Colón, dentro del proceso penal promovido por el Tower Bank International Inc. contra su representado, profirió Vista No.67 de 22 de mayo de 1989 recomendando el llamamiento a juicio del señor **MAURICIO CATACH** por el delito de apropiación indebida.

4. Que en los tres procesos penales a que se han hecho referencia, el objeto material del proceso es el mismo: las letras de cambio de 1 de febrero de 1982 por B/.500,000.00 y B/.200,000.00, respectivamente, giradas a la orden de **MAURICIO CATACH** y aceptadas por **DAVID ZIÓN COHEN** como representante de **JOYAS ROYAL ZONA LIBRE, S. A.**

Lo antes descrito supone, a juicio de la recurrente, la violación del principio conocido por el aforismo latino ne bis in idem, que en materia penal rige de manera amplia y que aparece receptado en el artículo 32 de la Constitución Nacional en los siguientes

términos: "Nadie será juzgado ... más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria".

Según la demandante, la prohibición de doble juzgamiento tiene dos sentidos: uno sustancial (cosa juzgada) y otro procesal (litis pendencia). Sostiene que en su sentido procesal significa que la persona no podrá ser investigada, detenida, ni que se dará curso a una denuncia en su contra tan pronto se conozca que contra ella ya existe otra causa, proceso o acto de persecución por el mismo hecho, aunque se modifique su calificación o se afirmen nuevas circunstancias.

Lo expresado significa, de acuerdo a la accionante, que el señor **MAURICIO CATACH** tiene a su favor la garantía de no volver a ser enjuiciado por el mismo hecho, el cual, en este caso, consiste en haberse utilizado unos mismos documentos negociables para cometer supuestamente los delitos por los cuales fue denunciado en fechas distintas. Estos hechos punibles corresponden a los siguientes delitos: de quiebra fraudulenta, simulación de crédito y apropiación indebida.

De acuerdo al análisis que hace la firma que recurre, lo que hace que el auto de 23 de marzo de 1990 viole el artículo 32 de la Constitución Nacional, es que con anterioridad a la expedición de dicha resolución el Juzgado Segundo Municipal de Colón había llamado a juicio al señor Catach por el mismo hecho. Y si ello es así, no cabe duda de que se produce un doble juzgamiento.

Por otro lado, la demandante considera que el citado precepto constitucional también deviene infringido porque el Juez Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, no podía expedir el auto impugnado a menos que el Juez Civil calificara la insolvencia como fraudulenta, según se desprende del artículo 1905 del Código Judicial. En otras palabras, la recurrente ampara este punto de vista en el conocido principio de perjudicialidad.

Finalmente, se dice que como consecuencia de todo lo anterior, el artículo 17 de la Constitución también resultó infringido.

**OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN**

Correspondió al Procurador General de la Nación emitir concepto en este proceso. Ello se hizo mediante Vista No.36 de 2 de mayo de 1991, cuya parte pertinente pasamos a transcribir:

> "El constituyente al elevar a rango constitucional el principio de que 'nadie será juzgado más de una (sic) por la misma causa penal ...', al tiempo que aseguraba la efectiva existencia del concepto de la cosa juzgada, proveía, consecuencialmente, un amparo jurídico al individuo transgresor en el pasado, de una disposición penal, policiva o disciplinaria, que lo resguardara de la posibilidad de ser objeto de un nuevo juicio o persecución, por los mismos hechos ya juzgados.
>
> En el caso que nos ocupa no se trata, como puede verse, de hechos agotados que puedan revelarnos elementos constitutivos de la cosa juzgada. Muy por el contrario, la recurrente ha conjugado, ecléctica mente, diversos conceptos constitucionales y legales como lo son el de cosa juzgada, doble persecución, etc., en su afán de demostrar una violación inexistente, adaptándolos, de manera rebuscada, a la situación específica de MAURICIO CATACH ...
>
> El error evidente en que ha incurrido la recurrente consiste en el hecho de ignorar, concientemente, de que en el caso bajo examen no puede hablarse de cosa juzgada, y que, por lo mismo, la tesis que esgrime acerca de la imposibilidad de perseguir penalmente a MAURICIO CATACH, por parte de la Fiscalía y, posteriormente, por el Juzgado Primero, por existir en otros tribunales procesos pendientes que, según ella, son similares es, jurídicamente, inaceptable.
>
> El artículo 1969 del Código Judicial citado por la actora, si bien prohibe la persecución penal, más de una vez, por el mismo hecho se refiere, y eso hay que entenderlo así, a la posible persecución penal que se pretenda realizar contra una persona, por hechos ya juzgados, es decir superados procesalmente, los cuales, para efectos legales, han hecho tránsito de cosa juzgada.
>
> Si nos atenemos a la lógica de la recurrente, obviamente tendríamos que convenir, que las normas procedimentales referentes a la acumulación de procesos serían letra muerta, y de completa inobservancia, en el procedimiento penal.
>
> El perseguir más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria no sería más que la consecuencia de una decisión de un órgano jurisdiccional o de una agencia de instrucción o de un ente administrativo, que se hace patente en un segundo proceso acerca de idénticos hechos fallados en otro anterior, y en donde, además, sea idéntica la persona perseguida.
>
> No es esta la situación que se observa en el caso sub-júdice, ya que para sostener que el auto impugnado, proferido por el Juzgado Primero de Circuito de Colón, Ramo Penal, viola la garantía del debido proceso, específicamente el principio de la unicidad en el juzgamiento, se tiene que demostrar que los hechos por los cuales fue llamado a responder en juicio criminal, el

imputado MAURICIO CATACH, fueron ya objeto de un pronunciamiento final anterior, que le diera carácter de cosa juzgada.

No siendo ello así, no vemos cómo el auto contradicho haya podido vulnerar la norma constitucional.

Lo que pretende la firma recurrente es convertir el Tribunal Constitucional en Tribunal de Segunda Instancia donde el Pleno de la Corte, desviándose de su verdadera función constitucional consagrada en el artículo 203, ordinal 1, haga un examen valorativo de diversas piezas procesales que guardan relación con otros procesos, aspirando con ello a que se enerven los efectos del auto tachado de inconstitucionalidad, cuando, es evidente, que en su momento tuvo oportunidad de cuestionar dicha resolución jurisdiccional con todos los recursos apropiados que la ley pone en sus manos.

En tal situación soy de opinión que el auto de 23 de marzo de 1990, dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, no viola el artículo 32 de la Constitución".

**CRITERIO DE LA CORTE**

Cuando el artículo 32 de la Carta Magna establece que nadie será juzgado más de dos veces por la misma causa penal, debe entenderse que la norma lo que está consagrando en realidad es el principio de la cosa juzgada y su elemental consecuencia: la inmutabilidad de la resolución conclusiva del proceso penal, con lo cual se brinda certeza y seguridad jurídica.

En efecto, el proceso no cumpliría sus fines si fuese posible mediatizar, al antojo de las partes, el principal efecto que emana de la resolución que le pone fin a determinada controversia.

Sin embargo, ello no quiere decir que el principio de inmutabilidad de la sentencia no tenga alguna excepción. Esta encuentra respaldo en motivos de humanidad, y opera en determinados supuestos que el legislador ha establecido taxativamente. Es así como este principio cede frente a los casos que dan lugar a la revisión de una **sentencia condenatoria**, a través del denominado recurso extraordinario de revisión que está regulado en el Capítulo II, del Título VIII, del Código Judicial.

Ahora bien, fuera de la anterior excepción, es consustancial con el principio de la cosa juzgada que un proceso que ha **concluido con una resolución firme no pueda reabrirse y dar lugar a un nuevo proceso**, para juzgar a la misma persona por los mismos hechos. Es decir, jurídicamente resulta imposible, salvo la excepción anotada, volver a someter a nuevo proceso unos hechos que, cronológicamente y materialmente, correspondan a los mismos por los cuales una **misma persona** ha sido investigada, enjuiciada y juzgada en proceso anterior que haya culminado con resolución ejecutoriada, aun cuando a tales hechos se les dé una calificación o denominación jurídica distinta.

Y es precisamente en esa imposibilidad donde se aprecia y opera la prohibición del doble juzgamiento (ne bis in idem) a que alude el artículo 32 de la Constitución Nacional y el artículo 1969 del Código Judicial.

De donde resulta que desde un punto de vista de derecho sustancial, el principio de la cosa juzgada en materia penal significa que nadie puede ser sometido a nuevo proceso por los mismos hechos por los cuales fue juzgado en un proceso anterior que haya terminado con una resolución firme y, en consecuencia, hecho tránsito a cosa juzgada.

En cambio, desde un punto de vista de derecho procesal, el principio analizado se traduce en la facultad que tiene esa persona de poder aducir la cosa juzgada como excepción, dirigida a enervar la nueva acción penal que se intenta ejercitar en un nuevo proceso, y a eliminar la posibilidad de que se ejerza en su contra una nueva pretensión punitiva.

Como puede apreciarse, esto nada tiene que ver con el supuesto contenido procesal de litis pendencia que la firma recurrente ha pretendido irrogarle al principio de la cosa juzgada.

Ahora bien, la interpretación que se ha dado del artículo 32 de la Carta Magna es la única que encuentra eco de manera uniforme en la doctrina, y que puede dársele a la luz de nuestro ordenamiento jurídico. De ahí que tenga razón el Procurador General de la Nación cuando advierte que si ésta no fuera la interpretación correcta, habría que desechar el mecanismo de acumulación de procesos, pues este instituto de nada serviría si se pudiera sostener que se viola la prohibición de doble juzgamiento cuando una persona está sometida a diversos procesos por el mismo hecho, sin que con anterioridad tales hechos hayan sido objeto de pronunciamiento definitivo.

Precisamente la situación por la que, al decir de la firma forense demandante, atraviesa el señor MAURICIO CATACH, está regulada por el artículo 2291 del Código Judicial, según el cual "Hay lugar a la acumulación de procesos cuando **contra un mismo individuo o por un mismo delito se siguen dos o mas actuaciones distintas**". Este precepto añade que "Las partes podrán solicitar al Tribunal competente la acumulación de sumarios instruidos por separado ..." (El énfasis es del Pleno).

El propósito que persigue la acumulación de procesos, ha dicho la Sala Penal de la Corte en reciente sentencia de 22 de julio de 1993:

> "no puede ser otro que el de reunir en un solo proceso todos los sumarios que se adelantan en distintas agencias de instrucción contra una misma persona y juzgarlos bajo una misma cuerda, siempre y cuando la acumulación no ocasione un gran retardo (art.2003 ibidem). Con ello se satisface el principio de economía procesal y se le garantiza al inculpado una pena justa en el evento de que sea condenado. Esto es así, porque la aplicación de una acumulación jurídica de penas ... evita la acumulación material de las mismas y con ello el posible perjuicio que surgiría de las sanciones que se impondrían separadamente en los diferentes procesos".

A lo anterior podría añadírsele que por el hecho de que todos los sumarios se acumulan en un sólo proceso, el juzgador tendría mejor óptica para apreciar si entre los procesos que se han instruido por separado existe duplicación de hechos, lo cual evitaría fallos contradictorios. También la acumulación garantiza una comunidad probatoria, al permitir con mayor facilidad de recepción, práctica y contradicción de las pruebas. Ello redunda en beneficio del proceso pues, además de agilizarlo y de elevar el porcentaje de una buena defensa de los intereses de las partes, garantiza una mejor valoración de los medios probatorios por parte del juez.

Todo lo expuesto evidencia la falta de soporte jurídico de que adolece la pretensión de la demandante.

Ahora bien, en otro aparte del libelo de la presente demanda, la accionante expresa que el artículo 32 de la Constitución también resultó infringido porque el juez penal profirió el auto de 23 de marzo de 1990, sin esperar que el juez civil calificara de fraudulenta la insolvencia que originó la investigación por el delito de quiebra. En otras palabras, se afirma que al no atender al supuesto principio de prejudicialidad que, a juicio de la recurrente, rige en esta materia, el juez penal no actuó "conforme a los trámites legales".

Nada menos cierto. Para sustentar su punto de vista, la recurrente invoca el artículo 1905 del Código Judicial. Pero resulta que el precepto que sirvió de base al juez de la jurisdicción civil para remitir copia de lo conducente al Fiscal de Circuito, a objeto de que se realizara la correspondiente investigación penal, fue el artículo 1547 del Código de Comercio (ver fojas 12), que a la letra dice: "La declaratoria de quiebra será transcrita al representante del Ministerio Público y al Juez competente del lugar, junto con todos los datos conocidos que conduzcan a establecer si ha habido delincuencia".

Pues bien, para que la jurisdicción penal pueda conocer un proceso por el delito de quiebra no es necesario que exista previamente un pronunciamiento del juez civil que exprese que la **quiebra es fraudulenta**, pues para tales menesteres tan sólo basta la declaratoria de quiebra, sin calificativo, del juez civil. Ello se infiere claramente del artículo anterior y del artículo 1562 del Código de Comercio cuando establece que:

> "Artículo 1562. La instrucción y demás actos de procedimiento penal por el delito o delitos a que diere lugar la quiebra, se tramitarán **independientemente de ésta** y o por los trámites ordinarios del Código Judicial.
>
> La resolución que **ponga fin al procedimiento penal,** será comunicada al juez de la quiebra, quien agregará a los autos certificación de dicho fallo" (La subraya y el énfasis es del Pleno).

Si bien en otras legislaciones, como en la española, la jurisprudencia ha exigido que un juez civil declare la quiebra fraudulenta, como condición objetiva de penalidad (Cfr. RODRÍGUEZ DEVESA). José María. Derecho Penal Español, parte general, Decimotercera edición, revisada y puesta al día por Alfonso Serrano Gómez, Editorial Dykinson, Madrid, 1990, p.491), lo cierto es que en la nuestra ello no es necesario, conforme se desprende de los artículos antes citados.

Y es que nuestro ordenamiento jurídico le confiere a la declaratoria de quiebra, sin calificación, la condición de requisito de procedibilidad. Con ello, se persigue garantizar de manera más efectiva una tutela al orden social y se rinde culto al principio de economía procesal. Esto último es así por lo siguiente:

Conforme al autor citado, la jurisprudencia española ha sostenido que, si bien la previa declaración y calificación de la quiebra corresponde al juez civil, ello no obsta para que los tribunales penales puedan entrar a comprobar los hechos que sirvieron de base para la calificación de la quiebra, con lo cual se desplaza, en cierto modo, el valor condicionante de la declaración de quiebra (ibidem).

Como quiera que esto no ocurre en nuestra legislación, es por ello que se dice que en Panamá se rinde culto al principio de economía procesal.

Los razonamientos expuestos demuestran que carece de sustento el segundo cargo de inconstitucionalidad que se le endilga a la resolución recurrida, con fundamento en el artículo 32 de la Carta Magna.

Ahora bien, en lo que respecta a la supuesta violación del artículo 17 de la Constitución, la Corte reitera su doctrina jurisprudencial, según la cual este precepto es de carácter declarativo y, en consecuencia, al no generar derecho alguno en favor de los asociados, no es susceptible de violación.

Los argumentos que anteceden, llevan al Pleno a la conclusión de que el auto de 23 de marzo de 1990 no infringe los artículos invocados por la firma recurrente ni ningún otro precepto de la Constitución Nacional.

En mérito de lo cual, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el auto de 30 de marzo de 1993 dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal.

Notifíquese y Publíquese esta resolución en la Gaceta Oficial.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN MOLINA R., CONTRA LOS ARTÍCULOS 20 Y 32 DE LA LEY 31 DE 30 DE DICIEMBRE DE 1991, QUE MODIFICA EL PARÁGRAFO 6 DEL ARTÍCULO 1057-V DEL CÓDIGO FISCAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En ejercicio de la acción pública consagrada en el artículo 2550 del Código Judicial, el licenciado Martín Molina R. solicita a la Corte Suprema de Justicia que declare inconstitucionales los artículos 20 y 32 de la Ley 3l de 30 de diciembre de 1991.

A la demanda se le dio el trámite señalado en los artículos 2554 y subsiguientes del Código Judicial y el negocio está listo para resolver, a lo que se procede, previas las siguientes consideraciones.

**I. ARTÍCULOS ACUSADOS DE INCONSTITUCIONALIDAD**

El texto de los artículos acusados de inconstitucionales, ambos de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, es el siguiente:

"**Artículo 20**. El Parágrafo 6o. del Artículo 1057-v del Código Fiscal quedará así:

Parágrafo 6o. La tarifa de este impuesto es de cinco por ciento (5%), salvo las excepciones que se indican a continuación, respecto de los cuales la tarifa será de diez por ciento (l0%).

La importación, venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas y cigarrillos.

La determinación de este impuesto resulta de aplicar el respectivo porcentaje a la base imponible que corresponda, según el hecho gravado de que se trate".

"**Artículo 32**. Se adiciona el Artículo 21-a al Decreto de Gabinete No. l09 de 7 de mayo de l970, así:

Artículo 21-a. Se crea el Fondo de Gestión Tributaria, que será manejada mediante una cuenta bancaria administrada por el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República, en la cual se acreditará, al final de cada ejercicio fiscal, el uno por ciento (l%) del excedente de los ingresos tributarios administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro sobre el Presupuesto General del Estado del año respectivo, incluyendo en ese monto los pagos con documentos de crédito. La suma acreditada a dicha cuenta se distribuirá entre todo el personal de la Dirección General de Ingresos en atención a su rendimiento y eficiencia, de acuerdo con los procedimientos y principios que a tal efecto establezca el órgano Ejecutivo, los cuales deben garantizar su correcta administración y distribución.

Las sumas que corresponda a cada funcionario no podrán exceder del cincuenta por ciento (50%) del total de la remuneración salarial anual del mismo. El Ministerio de Hacienda y Tesoro deberá, anualmente, dar cuenta de la distribución de estos fondos a la Comisión de Hacienda Pública, Planificación y Política Económica de la Asamblea Legislativa.

Las cantidades acreditadas en la cuenta del Fondo de Gestión Tributaria que no sean distribuidas en un año según el procedimiento aquí ordenado, se incorporarán al fondo común del Tesoro Nacional.

Para los efectos de este artículo, el cálculo de los ingresos tributarios no podrá ser inferior a la recaudación efectivamente lograda en el período anterior".

**II. LA DEMANDA**

En uno de los hechos en que se fundamenta la demanda, se afirma que "el artículo 20 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991 modifica el párrafo 6 del artículo l057-v del Código Fiscal sobre la tarifa del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales o Muebles, y establece un porcentaje diferenciador desigual o distinto en perjuicio de las empresas dedicadas a la importación, venta al por mayor y por menor de bebidas alcohólicas y cigarrillos ..." (fs. 2).

Asimismo, se afirma que el "artículo 32 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991 adiciona el artículo 21-a al Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970, y consagra un privilegio remuneratorio a favor de todo el personal de la Dirección General de Ingresos en atención a su rendimiento y eficacia ..." (fs. 2).

Las disposiciones constitucionales que se estiman violadas por las normas acusadas de inconstitucionalidad son los artículo 19 y 48 de la Constitución Nacional.

Opina el demandante que "el artículo 19 de la Constitución Nacional vinculado con el artículo 48 de la misma han sido violados en forma directa, por comisión, a través del artículo 20 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, al establecerse un porcentaje diferenciador desigual o distinto en perjuicio de la clase social empresarial dedicada a las actividades de importación, venta al por mayor y por menor de bebidas alcohólicas y cigarrillos" (fs. 3).

Agrega que "tal discriminación legal que impone una tarifa excepcional de 10% al grupo económico antes anotado para el pago del Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales o Muebles, vulnera la igualdad de trato como garantía fundamental habida cuenta de que no se mantiene un criterio de generalidad impositiva sino de excepción".

Por otro lado, considera el demandante que el artículo 19 de la Constitución nacional ha sido violado también en forma directa por comisión por el artículo 32 de la Ley 31 de 1991, "porque establece un privilegio o prerrogativa remuneratoria en ventaja de todo el personal de la Dirección General de Ingresos, atendiendo al rendimiento y eficacia de este grupo o sector determinado de empleados públicos, colocándolos en una situación jurídica preferente con relación a los demás funcionarios públicos o del Ministerio de Hacienda y Tesoro que se encuentren en iguales condiciones" (fs. 4).

**III. CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN**

Conforme a las normas de procedimiento, se le corrió traslado del negocio al Procurador General quien por medio de su Vista No. 16 de 10 de marzo de 1992, emitió opinión en relación al negocio sometido a su consideración.

El señor Procurador General expone en su Vista que "el artículo 20 de dicha ley sería contrario al artículo 19 de la Constitución si estableciera una carga impositiva cuyo aumento porcentual alcanzara a determinadas personas o grupos, obligándolos a pagar el impuesto incrementado por razones políticas, religiosas, de clase social, raza, sexo o lugar de nacimiento. El nuevo impuesto a los cigarrillos y bebidas alcohólicas lo pagarán todos los consumidores de esos productos y no cabe argumentar, como lo indica el recurrente, que con esto se discrimina a la "clase empresarial" porque esa no es la intención del legislador" (fs. 15).

Agrega el representante del Ministerio Público que "en lo que concierne al artículo 20 de las tantas veces señalada Ley 31 de 30 de diciembre de 1991, y al artículo 48 de la Constitución vigente; expresamos que la pretendida inconstitucionalidad no se observa, pues el precepto fundamental indica que las contribuciones e impuestos deben estar legalmente establecidos y la Ley 31 de 1991 que aumenta el Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles a las bebidas alcohólicas y cigarrillos es, en propiedad, una ley formal por ser expedida por la Asamblea Legislativa de conformidad con el procedimiento que indica la propia Constitución" (fs. 16).

En cuanto a la violación que se le endilga al artículo 32 de la Ley 31 de 1991, el Procurador General es del criterio que "el privilegio -si así quiere llamársele- a que se hacen acreedores los funcionarios de la Dirección General de Ingresos se fundamenta en su particular rendimiento y eficiencia en el trabajo desempeñado; como un estímulo a estos funcionarios para lograr una mayor captación de ingresos tributarios en cada período fiscal, y no en situaciones que se deriven del color, sexo, condición social, religión. Por ello, precisamente, la norma legal a que nos referimos no es inconstitucional, a nuestro entender" (fs. 16).

En apoyo a su criterio, el señor Procurador General, cita el fallo de 17 de abril de 1985 de la Corte Suprema de Justicia (fs. 13), y doctrina constitucional de Mariano GRONDONA (fs. 14).

Concluye el funcionario su vista arribando a la conclusión de que "las disposiciones 20 y 32 de la Ley 31 de 1991 no son contrarias a las prescripciones de los artículos constitucionales 19 y 48".

**IV. ALEGATO DE PARTE INTERESADA**

El señor Subdirector General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, presentó argumentos contra lo pretendido en la presente acción de inconstitucionalidad, mediante un escrito entregado en la Secretaría General de esta Corporación de Justicia el día 5 de mayo de 1992, cuando había vencido con exceso el término de 10 días otorgado con ese fin. El mencionado escrito fue recibido, por insistencia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 476 del Código Judicial y no puede ser tomado en consideración para fallar porque se ha determinado que efectivamente, su presentación fue extemporánea.

**V. CONSIDERACIONES DE LA CORTE**

El recurrente solicita se declare inconstitucional el artículo 20 de la Ley No. 31 de 30 de diciembre de 1991, el cual modifica el parágrafo 6 del Artículo 1057-V del Código Fiscal sobre la tarifa de Impuesto de Transferencia de Bienes Corporales o muebles, debido a que viola el artículo 19 de la Constitución Nacional en relación con el artículo 48 ibidem.

Los artículos 19 y 48 de la Constitución Política, preceptúan textualmente:

"**Artículo 19**. No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión, o ideas políticas".

"**Artículo 48**. Nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuviere legalmente establecidos y cuya cobranza no se hiciere en la forma prescrita por las leyes".

El artículo 19 consagra el derecho a no ser discriminado y el artículo 48 establece el principio Nullum Tributum Sine Lege, es decir, que no hay tributo sin ley previa que lo establezca.

Los fueros o privilegios personales que prohíbe el artículo 19 de la Carta Política, son aquellas ventajas injustificadas a favor de un grupo determinado de personas, que no tienen necesariamente que fundarse en la raza, la clase social, el sexo, la religión o ideas políticas.

El doctor César Quintero, en su obra Derecho Constitucional, al comentar el artículo 21 de la Constitución de 1946, que es ahora el artículo 19 de la Constitución vigente, expone:

"Decimos que esta prohibición está íntimamente enlazada con lo anterior, porque la Corte Suprema de Justicia en varios de sus numerosos fallos sobre el artículo 21 ha sostenido que los fueros o privilegios personales que dicho artículo prohíbe son aquellos que tuviesen como base la raza, el nacimiento, la clase social, el sexo, la religión o las ideas políticas.

De ser siempre admisible esta interpretación cabría deducirse que puede haber fueros y privilegios, incluso personales, siempre que no tengan como fundamento las condiciones personales enumeradas.

Estimamos que la aceptación invariable uniforme de esta interpretación restringiría notablemente el concepto de fuero o privilegios personales.

Así parece haberlo entendido también la Corte, pues en otros de sus tantos fallos sobre esta materia ha declarado inconstitucionales preceptos, tanto legales como reglamentarios, que **establecían situaciones injustificadas de excepción en favor de determinadas empresas e incluso de determinadas actividades económicas.**

...

Todo lo expresado nos indica que la Constitución no prohíbe que haya o se establezcan distinciones entre los habitantes del Estado. Lo que prohíbe, pues, es que haya distingos. Y esto nos lleva, por fin, a precisar este término. **El distingo entraña una limitación o restricción injustas; un trato desfavorable para determinadas personas que, en principio, se hallan en la misma situación que otras que, sin embargo, reciben un trato favorable**. El concepto de distingo SE IDENTIFICA, así, con el de discriminación, el cual, no obstante ser un neologismo quizá exprese mejor la idea que hemos tratado de explicar. Pues, el término discriminación, muy usado en otros idiomas, significa distinción injusta e injuriosa.

Esto es, pues, lo que el artículo que examinamos prohíbe, o sea que las normas legales establezcan, o las autoridades públicas practiquen, un tratamiento desfavorable contra cualquier persona por la sola razón de su raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas.

Toda esta larga exposición nos lleva a concluir que el principio de la igualdad ante la ley consiste, como ha dicho más de una vez la Corte Suprema de la República Argentina, 'en que no se establezca excepciones o privilegios que excluyan a unos de los que se concede a otros en iguales circunstancias'.

...

Asimismo en fallo de 25 de enero de 1952 -por el cual se negó una demanda contra la Ley Orgánica de Educación- la Corte Suprema manifestó que: 'La igualdad que contempla el invocado artículo 21 no tiene como finalidad la de que todo sea reducido a un cartabón predeterminado o que las situaciones jurídicas distintas sean reguladas por una sola norma invariable" (QUINTERO, César. Derecho Constitucional, t. I, Costa Rica, 1967, p. 140-142) (Acentúa la Corte).

En el caso sub judice la tarifa del Impuesto de Transferencia de Bienes corporales muebles, en los casos de importación, venta al por mayor y menor de bebidas alcohólicas y cigarrillos, ha sido fijada en un porcentaje mayor del impuesto que deben pagar otros productos por consideraciones atendibles ya que se trata de productos que no sólo no son necesarios, sino que además son dañinos para la salud y por tanto puede prescindirse de su uso e incluso es conveniente hacerlo.

Uno de los principios rectores de la tributación es el de la neutralidad, el cual busca "que, en lo posible, los impuestos no distorsionen las decisiones económicas de los individuos. O sea: que la asignación de recursos hacia determinadas actividades no se vea entorpecida por la tributación ... A veces, sin embargo, con la imposición de n impuesto se buscan objetivos contrarios a los de la neutralidad explícitamente. Tal sucede cuando se elevan los gravámenes arancelarios para restringir la presión por importación o cuando se gravan licores, o juegos con el ánimo de desestimularlos (RESTREPO, Juan Camilo. Hacienda Pública, Universidad Externado de Colombia, 1a. ed., Bogotá, 1992, p. 134-135).

Tomando en cuenta además, que el impuesto debe ser pagado por todos los consumidores de los productos gravados sin excepción, el hecho de que sean gravados con un porcentaje más alto no crea cargas contra un determinado grupo de las cuales se exima a otro, en iguales circunstancias, y siendo esto así, la alegada violación al artículo 19 de la Constitución no se ha dado.

Además el impuesto comentado ha sido establecido mediante ley formal, la cual, según la definición del jurista Manuel Osorio es aquella que ha sido dictada por el Poder Legislativo conforme a los procedimientos específicamente preestablecidos (OSORIO, Manuel. Diccionario de Ciencias Jurídicas Políticas y Sociales, Edit., Heliasta, S.R.L., 1989, p. 424). Por tanto, la alegada infracción del artículo 48 de la Constitución Nacional por el artículo 20 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991 no se ha producido.

La Asamblea Legislativa en cumplimiento de una de sus funciones, debe establecer mediante ley impuestos y contribuciones nacionales, rentas y monopolios oficiales para atender los servicios públicos, según lo establece el artículo 153, numeral 10 de la Constitución Política.

Las normas constitucionales citadas, preceptúan que nadie está obligado a pagar contribución ni impuesto que no estuviere legalmente establecido, y le confieren a la Asamblea Legislativa la facultad de dictar leyes que establezcan los impuestos nacionales.

Por lo expuesto, considera la Corte que la norma impugnada no viola el artículo 48 de la Constitución Nacional, ya que el impuesto en cuestión fue establecido por medio de una ley dictada por la Asamblea Legislativa.

El demandante también estima que el artículo 32 de la Ley 31 de 1991, el cual adiciona el artículo 21-a del Decreto de Gabinete No. 109 de 7 de mayo de 1970, viola el artículo 19 de la Constitución Nacional. Mediante esta norma se crea el Fondo de Gestión Tributaria y se concede a todo el personal de la Dirección General de Ingresos, de acuerdo con su rendimiento y eficiencia, el derecho a participar en la distribución de la suma acreditada en ese Fondo de Gestión Tributaria, constituido por el 1% del excedente de los ingresos tributarios, -administrados por la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro-, sobre el Presupuesto General del Estado del año respectivo, incluyendo en dicho monto los pagos con documentos de crédito.

Además de lo anteriormente expuesto sobre el artículo 19 de la Constitución, esta Corporación de Justicia ha manifestado en fallo de 11 de enero de 1991, mediante el cual resolvió la demanda de inconstitucionalidad presentada por el licenciado Rafael Murgas Torraza contra frases del ordinal 1o. del artículo 2508 del Código Judicial, que regula los casos en que no se concede la extradición, lo que a la letra dice:

> "El transcrito artículo sólo prohíbe los fueros y privilegios cuando son personales, es decir, concedidos a título personal. De ahí que si la ley confiere ciertos fueros o privilegios a determinada categoría de ciudadanos, o de servidores públicos o de trabajadores, dichos fueros o privilegios no son inconstitucionales porque no han sido otorgados en atención a las personas en sí, sino a la condición o status que tienen".

El anterior razonamiento es aplicable al caso en estudio debido a que la ley 31 de 30 de diciembre de 1991, mediante el artículo 32 establece una remuneración extra a favor de todo el personal de la Dirección General de Ingresos en atención a su rendimiento y eficiencia. Pero dicho privilegio no es conferido a título personal, sino en virtud de la condición de servidores públicos del personal de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y como compensación su eficiencia y rendimiento en este trabajo que tiene un especial interés para el Estado ya que recabar los ingresos que recibe en calidad de impuestos constituye una de las funciones más importantes de la administración.

Por lo expuesto debe concluirse que las normas cuya declaratoria de constitucionalidad se demanda no violan los artículos 19 y 48 de la Constitución Política, ni ninguna otra norma de nuestra Carta Magna.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE NO SON INCONSTITUCIONALES** los artículos 20 y 32 de la Ley 31 de 30 de diciembre de 1991.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LEGISLADOR LICENCIADO MILTON HENRÍQUEZ SASSO EN REPRESENTACIÓN DE GABRIEL AROSEMENA JAÉN, JOSÉ D. TORRES, RAÚL JERÓNIMO OSSA Y GUILLERMO COCHÉZ EN CONTRA DEL DECRETO DE GABINETE No.1 DE 2 DE ENERO DE 1993, DEL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado MILTON HENRÍQUEZ SASSO, mediante poder especial otorgado por los señores Gabriel Arosemena Jaén, José D. Torres, Raúl Jerónimo Ossa y Guillermo Cochéz, todos legisladores de la Asamblea Legislativa, presentó demanda de inconstitucionalidad contra el Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993, publicado en la Gaceta Oficial No.22.195 de 3 de enero de 1993, "Por el cual se adopta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1993".

Por surtidos los trámites de la demanda de inconstitucionalidad interpuesta, el referido proceso constitucional se encuentra en estado de decidir y a ello procede el Pleno de esta Corporación previas las consideraciones que seguidamente se exponen:

HECHOS DE LA DEMANDA

Los proponentes de la acción extraordinaria de inconstitucionalidad en los cuatro hechos de la demanda en estudio afirman:

Que el Órgano Ejecutivo, el primero de octubre de 1992, presentó a la consideración de la Asamblea Legislativa el proyecto de Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1993, que comprende al Gobierno Central, las entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales, y normas de ejecución presupuestarias;

Que al proyecto de Presupuesto General del Estado (proyecto No.41) se le dio un primer debate en la Comisión de Presupuesto, siendo que dicho proyecto fue objeto de modificaciones en su parte normativa y también, con la aprobación del Consejo de Gabinete mediante resoluciones del Consejo de Gabinete No.336 y No.437 de 1992, en su parte financiera, por dicha Comisión;

Que el proyecto de Presupuesto No.41, no fue votado en segundo y tercer debate, debido a manejo parlamentario, y por esta circunstancia se procedió conforme a lo estatuído en el artículo 269 de la Constitución Política, publicando en la Gaceta Oficial No.22.195 de 3 de enero de 1993 el Decreto No.1 de 2 de enero de 1993, 'por el cual se adopta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1993'; y,

Que el Decreto demandado de inconstitucionalidad, estatuye el Presupuesto General del Estado, violentado, tanto en la redacción de su articulado como en el procedimiento de su aprobación, normas constitucionales.

En este sentido, seguidamente los accionantes acusan al Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993 "Por el cual se adopta el Presupuesto General del Estado para la vigencia de 1993", de infringir los artículos 153, 264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274 de la Constitución Política.

OPINIÓN DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El señor Procurador General de la Nación, a quien se le corrió traslado de la demanda conforme a lo ordenado por el artículo 203 de la Carta Política, y el concordante 2554 del Código Judicial, al expresar su opinión mediante la vista que corre a fojas 226 a 252, luego de arribar a la conclusión de que "... los cargos formulados por el demandante, no prueban la existencia de los vicios de inconstitucionalidad que se le endilgan al acto demandado, toda vez que se ha comprobado que el mismo se ajusta a los principios constitucionales que sobre materia hacendaria, concretamente en cuanto al Presupuesto General del Estado se trata, prevé nuestro máximo ordenamiento jurídico, por lo que se deberá proceder en consecuencia de lo así argumentado", solicita al Pleno de la Corte Suprema de Justicia "... que al momento de entrar a resolver la presente pretensión constitucional, lo haga declarando que el Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993, no es violatorio de los artículos 153, 264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274, ni ningún otro de la Constitución Nacional".

EXAMEN DE LA CONFRONTACIÓN CONSTITUCIONAL

Como se tiene señalado, los demandantes acusan de inconstitucional todo el Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993 dictado por el Consejo de Gabinete, "Por el cual se adopta el Presupuesto General del Estado para vigencia fiscal de 1993", publicado en la Gaceta Oficial No.22.195 de 3 de enero de 1993; toda vez que, contrario a la opinión del Procurador General de la Nación, vertida en la vista de traslado, a juicio de los accionantes el acusado decreto de gabinete es violatorio de los artículos 153, 264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274 de la Constitución Política.

Veamos, entonces, si como sostienen los demandantes el impugnado Decreto de Gabinete efectivamente es violatorio de las normas constitucionales citadas en la demanda u otras de la Constitución Política que el Pleno estime pertinente también confrontar, o, por el contrario, le asiste razón al Procurador General de la Nación en la opinión vertida en la mencionada vista.

Así las cosas, el Pleno de la Corte considera menester dejar sentado, antes del obligante examen de la confrontación constitucional, que, con excepción del primero de los artículos de la Carta Política citados como infringidos en la demanda, en estudio, el resto forma parte del "Título IX, La Hacienda Pública, Capítulo 2. El Presupuesto General del Estado" como señala, además, el Procurador General de la Nación.

Por ello la Corte, por razones de método del examen, coincide con el planteamiento inicial del máximo representante del Ministerio Público, al señalar que la Constitución Política en el mencionado Título, del Capítulo 2. denominado "Presupuesto General del Estado", "... establece los principios que rigen la materia, además del procedimiento a

seguir para su aprobación y ejecución"; y de esa manera, con base en el análisis conjunto de los textos constitucionales que regulan la materia, expresa su opinión.

Ciertamente, como sostiene el Procurador General, la Constitución Política que gobierna el Estado panameño, en el indicado Capítulo 2. del Título IX, contempla todas las normativas referentes al "Presupuesto General del Estado", razón por la cual resulta aconsejable que dichos textos constitucionales sean analizados y confrontados en conjunto en relación con la materia de que se trata, es decir, relacionados unos con los otros y no aisladamente, a fin de lograr mediante ese método de análisis una comprensión de conjunto y total sobre el problema concreto sometido al control constitucional del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. Pues, como opina el tratadista Luis Carlos Sáchica al referirse al aspecto de los "Presupuestos y factores" del Orden Constitucional:

> "Un análisis limitado y escueto, fundado exclusivamente en el texto constitucional, carece de sentido y deja vacíos en el esquema de un orden jurídico total. 'Derecho' y 'Estado' no son creación mágica, ni estructuras estáticas; uno y otro son la resultantes de presupuestos y factores reales que determinan y condicionan su aparición y desenvolvimiento en un proceso contínuo, sus modos, sus actuación y tendencia, según hecho sociales, políticos que impregnan la vida toda de una comunidad civil". (Nuevo Constitucionalismo Colombiano, Décima Edición, Editorial Temis, S. A., (1992), Bogotá, Colombia, págs.47 y 48)".

Ahora bien, expuesto lo anterior como marco de referencia del análisis de la confrontación del conjunto de los precitados artículos, que según la Constitución Política conforman el régimen jurídico del "Presupuesto General del Estado" panameño, conviene transcribir textualmente lo que al efecto disponen los siguientes:

> "ARTICULO 264. Corresponde al Órgano Ejecutivo la elaboración del proyecto de Presupuesto General del Estado y al Órgano Legislativo su examen, modificación, rechazo o aprobación".
>
> "ARTICULO 265. El presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye a las entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales".
>
> "ARTICULO 266. El Órgano Ejecutivo celebra consultas presupuestarias con las diferentes dependencias y entidades del Estado. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Legislativa participará en dichas consultas".
>
> "ARTICULO 267. En el Presupuesto elaborado por el Órgano Ejecutivo los egresos estarán equilibrados con los ingresos y deberá presentarse a la Asamblea Legislativa al menos tres meses antes de la expiración del Presupuesto del año fiscal en curso, salvo el caso especial del artículo 179, numeral 2".
>
> "ARTICULO 268. La Asamblea Legislativa podrá eliminar o reducir las partidas de los egresos previstos en el proyecto de Presupuesto, salvo las destinadas al servicio de la deuda pública, al cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y al financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley.
>
> La Asamblea Legislativa no podrá aumentar ninguna de las erogaciones previstas en el proyecto de Presupuesto o incluir una nueva erogación, sin la aprobación del Consejo de Gabinete, ni aumentar el cálculo de los ingresos sin el concepto favorable del Contralor General de la República.
>
> Si, conforme a lo previsto en este artículo, se eleva el cálculo de los ingresos o si se elimina o disminuye alguna de las partidas de egresos, la Asamblea Legislativa podrá aplicar las cantidades así disponibles a otros gastos o inversiones, siempre que obtenga la aprobación del Consejo de Gabinete".
>
> "ARTICULO 269. Si el proyecto de Presupuesto General del Estado no fuere votado a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, el cual lo adoptará mediante decisión del Consejo de Gabinete".
>
> "ARTICULO 270. Si la Asamblea Legislativa rechaza el proyecto de Presupuesto General del Estado, se considerará automáticamente prorrogado el Presupuesto del ejercicio anterior hasta que se apruebe el nuevo Presupuesto y también automáticamente aprobadas las partidas previstas en el proyecto de Presupuesto rechazado respecto del servicio de la deuda pública, el cumplimiento de las demás obligaciones contractuales del Estado y el financiamiento de las inversiones públicas previamente autorizadas por la Ley".

Vistos entonces los cargos de inconstitucionalidad que se formulan en la demanda en estudio, así como la posición contraria a los demandantes del funcionario del Ministerio Público, vertida en la vista de traslado, la cuestión concreta que se plantea en el proceso constitucional promovido contra el acto impugnado, se reduce a dos aspectos claramente expresados en las normas de rango constitucional que regulan el sistema presupuestario del Estado panameño, anteriormente transcritas, a saber: en primer lugar, que la propia Constitución Política de la República es la que dispone y determina los trámites y el procedimiento para la preparación y aprobación del Presupuesto General del Estado, depositando en el Órgano Ejecutivo la indicativa o competencia para elaborar el

proyecto de Presupuesto; y, en segundo lugar, que en lo relativo a esta materia limita al Órgano Legislativo a "... su examen, modificación, rechazo o aprobación", todo lo cual conforme a la normativa del artículo 264 idem.

No obstante, la Constitución también prevé la regla que dispone, que cuando el Presupuesto General del Estado no fuere votado por la Asamblea Legislativa a más tardar el primer día del año fiscal correspondiente, entonces, entrará en vigencia el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo, "... el cual será adoptado mediante decisión por el Consejo de Gabinete" según lo dispuesto por el artículo 269 idem; siendo ésta la norma que, justamente, sirvió de fundamento constitucional al Consejo de Gabinete para la expedición del acto impugnado como lo reconocen, inclusive, los demandantes en el hecho "Tercero" de la demanda, que dice:

> "El proyecto de Presupuesto No.41, no fue votado en segundo y tercer debate, debido a manejo parlamentario. Dada esta circunstancia se procedió con lo estatuido en el artículo 269 de la Constitución Política, publicando en la Gaceta Oficial No.22.195 de 2 de enero de 193, 'Por el cual se adopta el Presupuesto para la vigencia fiscal de 1993".

En igual sentido el Consejo de Gabinete también se pronuncia en los dos últimos considerandos del acusado Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993, publicado en la Gaceta Oficial No.22.195 de 3 de enero de 1993, al sostener lo siguiente:

> "Que, no obstante que la Comisión de Presupuesto le dio la debida consideración en Primer Debate, la Asamblea Legislativa no votó el proyecto propuesto con sus modificaciones y adiciones y ha clausurado la legislatura ordinaria sin haber votado el proyecto de Presupuesto General del Estado con sus modificaciones y adiciones para la vigencia fiscal de 1993.
>
> Que, de conformidad con lo establecido en el Artículo 269 de la Constitución Política, corresponde al Órgano Ejecutivo la adopción del proyecto de Presupuesto presentado oportunamente a la Asamblea Legislativa".

En este orden de ideas, cabe entonces destacar que el examen de los distintos cargos de inconstitucionalidad formulados contra el acto expedido por el Consejo de Gabinete, fundados en la violación de los artículos 153, 264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274 de la Constitución, evidencia que los honorables legisladores accionantes, en esencia, centran el acusado vicio de inconstitucionalidad que endilgan al acto impugnado, argumentando: que el Consejo de Gabinete al aprobar el Presupuesto para la vigencia fiscal de 1993, modificó normas del proyecto presentado por el Órgano Ejecutivo, sin tener esta facultad que sólo compete al legislador; que el Decreto de Gabinete impugnado en uno de sus artículos viola el principio de unidad y universalidad del presupuesto; que la Constitución Política sólo autoriza al Consejo de Gabinete a aprobar el Presupuesto en base al proyecto tal como fue presentado a la Asamblea Legislativa y no con sus modificaciones posteriores.

No obstante, como se ha señalado antes, la cuestión relevante, en el caso del proceso constitucional que ocupa al Pleno, está en el hecho de que el Proyecto de Presupuesto no fue votado por la Asamblea Legislativa; y, por tanto, constitucionalmente corresponde al Consejo de Gabinete adoptar mediante decisión el proyecto propuesto por el Órgano Ejecutivo. De allí que el Pleno de la Corte se manifiesta de acuerdo con la opinión vertida por el Procurador General de la Nación; pues, ciertamente, la Constitución Política concede al Consejo de Gabinete esa facultad de iniciativa, para adoptar el proyecto de Presupuesto propuesto por el Órgano Ejecutivo en el evento de que el Órgano Legislativo no lo haya votado.

De lo cual resulta incuestionable, en consecuencia, que la cuestión constitucional que se debate no gira en torno a las funciones que privativamente corresponden al Órgano Legislativo, ni se trata de los presupuestos contemplados por los artículos 271, 273 y 274 de la Constitución, sino, por el contrario, del pleno ejercicio de una facultad que de conformidad con los dictados de la Constitución Política de la República expresamente se concede al Consejo de Gabinete en materia presupuestaria.

Para concluir con el examen de la confrontación constitucional, sólo resta expresar que los cargos formulados contra el impugnado Decreto de Gabinete no prosperan, y, por tanto, se desechan.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, de acuerdo con la opinión del Procurador General de la Nación, DECLARA que el Decreto de Gabinete No.1 de 2 de enero de 1993, dictado por el Consejo de Gabinete, y "Por el cual se adopta el Presupuesto General del Estado para el año Fiscal de 1993", no infringe los artículos 153, 264, 265, 268, 269, 271, 273 y 274 ni otros de la Constitución Política, y, en consecuencia, NO ES INCONSTITUCIONAL.

Notifíquese, Archívese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL DR. CARLOS E. MUÑOZ POPE EN CONTRA DEL ARTICULO 2181 DEL CÓDIGO JUDICIAL (PROCESO PENAL: FIANZA DE EXCARCELACIÓN A FAVOR DEL SEÑOR IVÁN ANTONIO CARLUCCI SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ENRIQUE MELAMED). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia llegó a esta Corporación la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el Dr. **CARLOS E. MUÑOZ POPE**, dentro de la solicitud de fianza de excarcelación a favor de IVÁN A. CARLUCCI SUCRE, que se tramita en ese despacho.

La norma advertida es el artículo 2181 del Código Judicial, que se refiere a las personas que no gozan del beneficio de fianza de excarcelación, cuando los delitos por los que se les persigan correspondan al listado genérico que ese artículo enumera del uno al seis.

Esta advertencia fue admitida mediante resolución del 2 de julio del año en curso, pues llena los requisitos formales exigidos por la ley para tales procesos, y se le corrió traslado al Procurador de la Administración para que emitiera su concepto.

VISTA FISCAL

El Procurador de la Administración mediante Vista N°397 de 30 de agosto de 1993 emitió su concepto en relación a la presente advertencia, señalando que no existe contradicción alguna entre la Constitución Nacional y la norma que se advierte, basa su concepto en los razonamientos que a continuación se resumen:

1. Que lo establecido en el artículo 2181 del Código Judicial no viola el numeral 5 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos ni el artículo 4 de la Constitución Nacional, por que las restricciones establecidas en el artículo demandado tienen base en el numeral 2 del mismo artículo 7 de la Convención citada.

2. Que existe jurisprudencia de la Corte, según la cual el alcance del artículo 4 constitucional no abarca todas las normas de derecho internacional, y refiriéndose específicamente a la Convención de Derechos Humanos ha señalado que sólo el artículo 8 de ésta forma parte del bloque constitucional patrio.

3. Que, si bien es cierto, el artículo 2181 del Código Judicial, establece una excepción contraria al principio de libertad personal, ésta forma parte de las prerrogativas del Estado para mantener el orden.

Finalmente, señala que nuestro ordenamiento jurídico penal contempla todos los principios consagrados en esa norma convencional.

LA ADVERTENCIA

En el presente negocio se advierte, como ya se dijo, la inconstitucionalidad del artículo 2181 del Código Judicial por violación del artículo 4 de la Constitución Nacional, en forma indirecta, por la violación del numeral 5 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta Convención es Ley de la República, pues fue adoptada como tal por la Asamblea Nacional de Representantes de Corregimientos, mediante Ley 15 de 28 de octubre de 1977.

Que el artículo 4 constitucional obliga a nuestro país a acatar las normas del derecho internacional y al contradecir el artículo demandado una norma de la Convención, se está violando la Constitución Nacional.

Encontrándose ya para resolver este negocio, el Dr. Muñoz Pope introdujo un escrito en el que presentó su alegato final en la presente advertencia. En este escrito señala lo siguiente:

a) Que el artículo 2181 del Código Judicial impide la excarcelación bajo fianza a quienes se encuentren en alguno de sus numerales, contraviniendo el artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

b) Que tal limitación (la del artículo 2181 del Código Judicial) "impone de hecho una sanción penal durante el curso del proceso a quien todavía se presume inocente del delito que se le imputa" (fojas 26), esto constituye una violación a los derechos humanos.

CRITERIO DE LA CORTE

A. La norma que se impugna es el artículo 2181 del Código Judicial y que es del siguiente tenor:

"ARTICULO 2181. No podrán ser excarcelados bajo fianza:

1. Los imputados por delitos que la ley penal sanciona con pena mínima de 5 años de prisión;

2. Los delitos de secuestro, extorsión, violación carnal, robo, hurto con penetración, piratería y delitos contra la seguridad colectiva que impliquen

peligro común, posesión, tráfico, cultivo, elaboración o incitación al cultivo de drogas, reincidencia en la posesión y uso de marihuana o canyac;

3. Peculado, cuando exceda de diez mil balboas;

4. Los delincuentes reincidentes, habituales o profesionales;

5. Los delitos contra la libertad individual, cometidos con torturas, castigo infamante o vejaciones; y,

6. Los que aparezcan imputados por delitos a los que este Código o leyes especiales nieguen expresamente este derecho".

Esta norma forma parte de procedimiento penal y establece una limitante al derecho de fianza tomando en cuenta la gravedad del delito que se persigue y la calidad del imputado.

B. La norma constitucional que se señala como violada es el artículo 4, que a la letra dice:

"ARTICULO 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional".

La contravención constitucional que alega el advertidor va relacionada con la violación del numeral 5 del artículo 7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que para su análisis se transcribirá íntegramente:

"ARTICULO 7. Derecho a la Libertad Personal

1. Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales.

2. Nadie puede ser privado de su libertad física, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados partes o por las leyes dictadas conforme a ellas.

3. Nadie puede ser sometido a detención o encarcelamiento arbitrarios.

22 de abril de 1994. Toda persona detenida o retenida debe ser informada de las razones de su detención y notificada, sin demora, del cargo o cargos formulados contra ella.

5. Toda persona detenida o retenida debe ser llevada sin demora, ante un Juez u otro funcionario autorizados por la Ley para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable o a ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

6. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida sin demora, la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda personas que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

7. Nadie será detenido por deudas. Este principio no limita los mandatos de autoridad judicial competente dictados por incumplimiento de deberes alimentarios".

Primeramente debemos analizar el alcance del artículo 4 de la Constitución, cuyo texto es bastante claro y ya ha sido objeto de interpretación por la Corte Suprema. El Pleno de la Corte, con la ponencia del Dr. César Quintero, analizó el artículo 4 de la Constitución, a propósito de la demanda de inconstitucionalidad presentada contra la Ley 25 de diciembre de 1990, de cuyo análisis se extrae el siguiente párrafo:

"Pero, la circunstancia de que Panamá haya ratificado más de un centenar de convenciones de la O.I.T., obliga, sin duda alguna, a nuestro país con respecto a dichas convenciones, independientes de lo que la Constitución panameña diga con respecto al acatamiento del Derecho Internacional.

Si bien es cierto que los Convenios N°87 y N°98 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por Panamá pueden ser aplicables a los empleados públicos en materia de libertad sindical, no es menos cierto que aún si, en gracia de discusión, se admitiera que la Ley 25 de 1990 se opone a ello la consecuencia jurídica que seguiría no sería la inconstitucionalidad de la Ley 25 sino la obligación del Gobierno de Panamá de adecuar su legislación interna a lo dispuesto en dicho convenios internacionales, tal como los señalan éstos" (Registro Judicial, mayo de 1991, pág. 85).

Luego entonces, el artículo 4 de la Constitución Nacional es una declaración que hace nuestro país a la comunidad internacional, en el sentido de que se somete a las normas que se dicten en busca de una mejor convivencia mundial, las que irá adecuando a su ordenamiento jurídico interno.

En otro aparte del fallo citado anteriormente, en el que se analiza la posible violación del artículo 4 de la Constitución, por violación de derechos individuales consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Humanos, se advierte lo siguiente:

> "Se trata, en resumen, de derechos individuales consagrados en artículos de la Constitución Nacional ... Por tanto, al ver dichos artículos se examinarán sus supuestas infracciones. Y no se hace un examen con respecto a las cláusulas de los referidos pactos internacionales: primero, porque son un traslapo de los correspondientes preceptos de la Constitución Nacional; y, segundo, porque dichos pactos formalmente sólo tienen valor de Ley; carecen, pues, de jerarquía constitucional". (Registro Judicial, mayo 1991, pág. 86).

Los principios que contempla el artículo 7 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos están consagrados en el artículo 32 de la Constitución y en el Código Judicial ( de los artículos 2147-A al 2147-J, 2158 y 2159, entre otros.) Tal como señala el Procurador de la Administración , nuestro país acata todos y cada uno de los principios establecidos en la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, para las personas sometidas al rigor de un procedimiento por causa penal. Lo que procedería es la adecuación del ordenamiento procesal vigente, pues se trata de una posible confrontación de normas de la misma jerarquía.

Finalmente, y para corroborar lo que se ha dicho citamos el artículo 30 de la convención invocada, que señala lo siguiente:

> "ARTICULO 30. ALCANCE DE LAS RESTRICCIONES.
>
> Las restricciones permitidas, de acuerdo con esta Convención, al goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidas en la misma, no pueden ser aplicadas si no conforme a las leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual han sido establecidas".

Las limitaciones establecidas en el artículo 2181 impugnado, van precisamente en beneficio del interés general, pues tal como lo exige el artículo 2147-A del Código Judicial, para que proceda la aplicación de una medida cautelar personal deben existir graves indicios de responsabilidad en contra del imputado; así mismo el artículo 2147-C señala los casos en que será aplicadas tales medidas.

La detención preventiva es la más grave de las medidas cautelares y se aplica precisamente para aquellos delitos que afectan mayormente la convivencia social es decir, se sacrifica el derecho personal a la libertad en pro del bienestar y tranquilidad de la sociedad (indubio pro societatis).

En vista de las consideraciones anteriores la Corte concluye que el artículo 2181 del Código Judicial no contraviene el artículo 4 de la Constitución ni otra norma de nuestra Carta Magna.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL EL ARTICULO 2181 DEL CÓDIGO JUDICIAL, pues no contraviene el artículo 4 ni otra norma de la Carta Magna.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICDO. OLMEDO CÓRDOBA QUINTERO EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR FRANCISCO ANTONIO DELGADO EN CONTRA DEL ARTICULO SEGUNDO DE LA RESOLUCIÓN N°103 DE 6 DE AGOSTO DE 1991, EXPEDIDA POR LA ALCALDEA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE CHEPO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T.PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **OLMEDO CÓRDOBA QUINTERO**, actuando como apoderado judicial del señor **Francisco Antonio Delgado**, ha presentado demanda de inconstitucionalidad del artículo segundo de la resolución N°103 del 6 de agosto de 1991, proferida por la Alcaldía Municipal del Distrito de Chepo.

Admitida la demanda se corrió traslado al Procurador de la Administración a fin que emitiera su concepto en relación con la pretensión.

Mediante Vista N°326 del 2 de julio de 1993 el señor Procurador de la Administración expresó sus consideraciones en cuanto a la inconstitucionalidad presentada, la opinión de la Procuraduría de la Administración se puede resumir de la siguiente manera:

.Que el artículo segundo de la resolución alcaldicia impugnada es inconstitucional, pues vulnera el artículo 44 de la Constitución Nacional "... en la medida en que siendo un funcionario de Policía (el Alcalde), sin tener competencia para ello, reconoce derechos sobre un globo de terreno de cinco (5) hectáreas, a favor de PABLO ALVAREZ y en perjuicio del señor FRANCISCO DELGADO."(Fs.15) (insertado de la Corte). El derecho de propiedad sólo puede ser afectado jurisdiccionalmente y a través de un proceso, instituido para estos menesteres ante los juzgados de Circuito Civil. Por tanto la afectación del derecho de propiedad del señor Delgado ha sido arbitraria y contraria a derecho, violando así el artículo 44 de la Constitución Nacional.

El Alcalde sólo tiene competencia para resolver desavenencias en cuanto a la propiedad de un bien circunscribiéndose la autoridad de Policía a evitar que los involucrados recurran a medidas de hecho para resolver la situación.

.Que la resolución impugnada viola el principio del debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, en cuanto a que el procedimiento para afectar la propiedad del señor Francisco Delgado no se ha llevado ante autoridad competente.

Estos dos razonamientos llevan a la Procuraduría de la Administración a considerar que el artículo impugnado es inconstitucional.

Remitido el expediente a esta Superioridad y cumplidos los trámites de publicidad correspondientes, el Pleno procede resolver el fondo de lo impetrado, previas las siguientes consideraciones:

**ANTECEDENTES**

La presente demanda de inconstitucionalidad se origina dentro de un proceso de policía que se ventila ante la Corregiduría de Cañitas, Chepo, Provincia de Panamá, el cual llegó a conocimiento de la Alcaldía del Distrito de Chepo a través de la apelación que interpusiera una de las partes del negocio sobre la Resolución N°8 de 16 de mayo de 1991, que resolvía, en primera instancia, el conflicto de tierras existente entre los señores FRANCISCO ANTONIO DELGADO y PABLO ALVAREZ.

En el proceso de marras se discutía sobre la titularidad de la Finca N°40483, inscrita al Tomo 985, Folio 198 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá. Conflicto que en primera instancia lo resolvió el Corregidor de Policía, otorgándole al señor Delgado el derecho a remover la cerca en el terreno en litigio, desestimando así la pretensión del señor Alvarez.

La resolución cuyo artículo segundo se impugna es la que resuelve la apelación presentada por el señor Pablo Alvarez, ésta previa las consideraciones de lugar consignó en su parte resolutiva lo siguiente:

> "PRIMERO:Revocar en todas sus partes la Resolución N° 8 de 16 de mayo de 1991.
>
> SEGUNDO: **Reconocer el derecho al Señor PABLO ALVAREZ, sobre un globo de terreno de 5 hectáreas,** ubicado en la localidad de Chorrillo, Corregimiento de Cañita, Distrito de Chepo, Provincia de Panamá.(Subraya de la Corte)
>
> TERCERO: Ordenar al señor FRANCISCO DELGADO, que regrese la cerca a sus linderos originales.
>
> CUARTO: Advertir a las partes que con ésta (sic) Resolución, queda agotada la vía Gubernativa." (Fs.1-2)

El demandante argumenta su petición en forma precisa, cuando advierte que el resuelto segundo, transcrito y subrayado por la Corte, viola flagrante el artículo 44 de la Constitución Nacional, que garantiza el derecho a la propiedad adquirida con arreglo a la Ley ya que "el reconocimiento del derecho de propiedad no es potestativo de ninguna autoridad administrativa de Policía."(Fs.6); y, finalmente, agrega: "La disposición demandada viola además, en forma directa el artículo 44 de la Constitución Política, porque se constituye en un título traslaticio de dominio, ya que confiere el derecho de propiedad mediante un procedimiento no reconocido por la Ley para tal efecto."(Fs.6)

**CRITERIO DE LA CORTE**

El demandante señala que la resolución impugnada viola en forma directa el artículo 44 de la Constitución Nacional, que garantiza la propiedad privada para aquellas persona naturales o jurídicas que la hayan adquirido de acuerdo con lo que establece la Ley.

El concepto de propiedad privada que consagra nuestra Constitución hay que interpretarlo en concordancia con el artículo 337 del Código Civil, que define la propiedad como el derecho a gozar y disponer de una cosa sin más limitaciones que las establecidas por la Ley. Es decir, la Constitución protege la propiedad privada adquirida conforme a la Ley, una vez adquirida podemos gozar de ella de acuerdo a las limitaciones de ésta, la principal limitación a la propiedad es el beneficio social que debe cumplir, pero esto no es materia de este negocio.

De acuerdo a la misma Constitución, artículo 45 por motivos de utilidad pública e interés social puede expropiarse un bien mediante un proceso y con el pago de una indemnización. Este es una forma extraordinaria de perder la propiedad, ejercida por el Estado, la que se regula igualmente en la Ley procesal.

Estos dos artículos le brindan al ciudadano la seguridad jurídica de que su derecho será respetado, siempre y cuando cumpla con lo dispuesto en la Ley.

Tal como señala el Procurador de la Administración en su vista, para cuando existe disputa sobre la propiedad de un bien la Ley ha establecido un proceso especial, a fin de resolver éstas desavenencias, los mismos se llevan ante autoridades jurisdiccionales, tal como lo señala el artículo 338 del Código Civil, que a continuación se transcribe:

> **"Artículo 338**. Nadie podrá ser privado de su propiedad **sino por autoridad competente** y por graves motivos de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización." (resaltado de la Corte).

Teniendo como premisa que la propiedad fue adquirida conforme a la Ley, si existe duda en cuanto a esto último, también existen procesos especiales, dentro de la esfera civil, para resolverlos.

De acuerdo con el artículo 159 del Código Judicial, los Jueces de Circuito tienen competencia para conocer en primera instancia, tanto de los procesos de expropiación como de procesos que versen sobre deslinde y amojonamiento, perturbación de la posesión, despojo y restitución de posesión, entre otros.

Esta normas señalan la autoridad competente para reconocer y otorgar títulos constitutivos de propiedad.

Luego entonces, no es el Alcalde quien va a determinar si un documento constituye un derecho de propiedad o no.

Del análisis hecho podemos concluir que el señor Alcalde rebasó los límites de su autoridad al reconocer a una de las partes derecho de propiedad sobre determinada porción de tierra, dentro de la finca en disputa, lo que constituye un atentado a la propiedad legalmente adquirida, violentando así el artículo 44 de la Constitución Nacional, coincidiendo así la Corte con el criterio planteado por la Procuraduría de la Administración.

Igualmente coincide la Corte en que existe violación de la Constitución, en cuanto al principio del debido proceso, contemplado en su artículo 32, cuando la Alcaldía de Chepo resuelve sobre un tema que es de la jurisdicción civil, para el que no tiene competencia, pues la Ley se la ha otorgado a los Jueces de Circuito, tal como se señaló anteriormente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia, en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el resuelto segundo de la Resolución N°103 de 6 de agosto de 1991, proferida por la Alcaldía Municipal de Chepo.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

ACLARACIÓN DE SENTENCIA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS AL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS EN RAZÓN DE DENUNCIA PRESENTADA POR EL LEGISLADOR LEO GONZÁLEZ Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al momento de notificarse de la sentencia de 28 de octubre de 1993 proferida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la apoderada judicial del licenciado ROGELIO CRUZ RÍOS presentó escrito de solicitud de aclaración de la parte resolutiva de dicha sentencia, con base en los artículos 986, 1108 y 1109 del Código Judicial.

Del texto del documento contentivo de la solicitud de aclaración se desprende que los puntos "oscuros y contradictorios", aludidos por la licenciada Zaldívar, se refieren a que la sentencia de la Corte le impone al licenciado CRUZ RÍOS una pena accesoria no prevista por la Ley penal y que la suspensión condicional de la ejecución de la pena principal no se extendió a la pena accesoria, incurriéndose en la omisión de señalar la extensión de la medida de inhabilitación.

Del escrito presentado se corrió traslado al Procurador de la Administración, quien en su Vista 512 de 16 de noviembre de 1993 (fs. 3693-3696), rebatió los argumentos de la defensa, apoyado en el contenido de los artículos 46 y 52 del Código Penal, y con relación a las bases de la aclaración, se expresó así:

"El argumento de que la pena de inhabilitación para el "ejercicio de funciones públicas" como accesorias, sigue la suerte de la principal, no es correcto, así como tampoco es correcta la afirmación de que no se trata de una pena establecida en la Ley, por cuanto que ya hemos indicado que el propio Código Penal la define y señala la forma de su aplicación y la obligatoriedad de su cumplimiento al decretar que se puede imponer aún cuando la pena de prisión haya sido cumplida.

GIUSEPPE BETTIOL en su obra Derecho Penal Pág. 685 define así la pena accesoria de inhabilitación para cargos públicos:

"A)La inhabilitación para cargos públicos. Es la más grave de las penas accesorias, por cuanto determina una posición jurídica, un status bastante restringido del condenado. No debe confundirse con la muerte civil, en boga en una época, porque no priva al condenado de la totalidad de los derechos, o sea, de la personalidad jurídica. Empleando analógicamente una expresión romana, puede decirse que produce una capitis deminutio magna, aunque no máxima."

En relación con la subsistencia de la pena accesoria pese a la suspensión de la pena de prisión o a la libertad condicional, tanto SEBASTIÁN SOLER como RICARDO C. NÚÑEZ, reconocidos tratadistas de Derecho Penal Argentino, así como PUIG PEÑA y CARRARA coinciden en que la pena accesoria debe ser cumplida aún cuando se haya suspendido la pena de prisión corporal o pena principal.

La suspensión de la pena de prisión está referida a la exoneración que permite al reo no ingresar a un centro penitenciario si se dan algunas condiciones y observa una conducta que no represente una nueva infracción. Sin embargo no puede entenderse que por el hecho de no ser detenido, se produce una extinción de la pena accesoria, la cual se mantiene incólume, y no puede alegarse que se haya dado alguna causa que motive su desaparición jurídica. Así por ejemplo mientras no exista una nueva Ley que haga despenalizar el acto o que elimine la pena accesoria, o se produzca la prescripción de la pena o se extinga por cualquier otra causa de las previstas en la Ley, como por ejemplo la muerte del sancionado como lo indica el Artículo 90 del Código Penal, la amnistía y el indulto en los casos respectivos, la pena accesoria debe cumplirse.

Nuestro Código Penal tiene reglas que orientan al juzgador en la imposición de las penas y como el delito por el que fue sancionado ROGELIO CRUZ RÍOS tiene señalada pena de prisión, que en efecto le fue impuesta por 12 meses. Conforme al Artículo 52 del Código Penal la inhabilitación que es una consecuencia de la prisión, ha sido fijada de manera discrecional y pudo ser hasta por 20 años que es el límite único fijado en esa norma.

Es indudable que la inhabilitación para el "ejercicio de funciones públicas" por el lapso de 12 meses que le fue impuesta por violación de la Ley y como consecuencia de la pena de prisión que le fue dosificada en igual número de meses, está dirigida a evitar que el reo sea designado en cargos públicos y que pueda ejercer las funciones inherentes a los mismos al menos por este lapso.

No hay realmente situación alguna que merezca aclaración y que no pueda entender el condenado, porque la sentencia que le impone la pena, tanto en la parte resolutiva como en la parte expositiva, recoge con espíritu docente y hasta pedagógico, principios en materia penal que por la sencillez y acierto con que han sido expuestos, no exigen mayor esfuerzo mental para entenderlo."

Más que una aclaración por obscuridad o contradicción de la parte resolutiva, se plantea una cuestión de fondo sobre el sentido y alcance del principio de reserva o estricta legalidad en las condiciones de operatividad de la coerción materialmente penal. La pena, al igual que el hecho punible, deben estar previstos claramente en la ley, al tenor de lo que establece el artículo 31 constitucional.

Penalistas contemporáneos de la talla de Eugenio Raúl Zaffaroni en Argentina, Cobo del Rosal y Vives Antón en España, Reyes Echandía en Colombia, Silvio Ranieri en Italia, Claus Roxin en Alemania, Cousiño McIver en Chile, entre otros, coinciden en señalar que la determinación de la pena en el caso concreto supone un proceso de individualización fundado en la actividad legislativa, judicial y administrativa, en la que el Tribunal tiene la facultad de ponderación en su particularización y cuantificación.

El Código Penal panameño, como la mayoría de los ordenamientos jurídico-penales del mundo, establece reglas generales que por técnica legislativa se ubican en la Parte General y escalas especiales, atenuadas o agravadas, según la calidad de los bienes jurídicos, el mayor o menor contenido del injusto del delito o el grado de reprochabilidad del injusto, que se plantean en la Parte Especial. Así, por ejemplo, las circunstancias que modifican la responsabilidad penal, cuando son ordinarias o comunes, no aparecen en la punibilidad que recoge el artículo que describe el hecho punible en particular.

En el caso de las penas accesorias, el legislador ha optado por dos reglas de aplicación: una general, que se desprende como consecuencia de la aplicación de la pena principal de prisión que se imponga y otra, especial, para aquellos delitos que conllevan otra clase de pena principal (art. 341) o por la calidad del sujeto activo o la

importancia del bien jurídico que se tutela, el legislador ha previsto la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas como pena accesoria.

El fundamento legal de la sentencia, censurada en su parte resolutiva como oscura y contradictoria, señala con precisión los artículos 52 y 56 del Código Penal, que describen las clases de penas y las facultades del juez en la aplicación de la coerción penal.

La jurisprudencia de los Tribunales penales del país, de más de medio siglo, abunda en ejemplos reiterados de la aplicación de la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas en casos de homicidio, robo, violación, estafa, peculado, falsedad documental, etc., que son delitos sancionados con la pena principal de prisión.

Con relación a la extensión de la pena accesoria a los derechos políticos, el artículo 52 del Código Penal describe normativamente el concepto y la cobertura de esta clase de inhabilitación, por lo que no se consideró necesario reproducir su contenido, menos aún cuando la resolución judicial se dirige a quienes, por su formación jurídica, práctica profesional y experiencia laboral, se supone que han manejado con soltura estas instituciones penales.

Por último, en lo que se refiere a la medida de suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión, la Corte, en ejercicio de la facultad que de manera expresa y diáfanamente le confiere la Ley penal, de oficio optó por aplicar el artículo 77 del Código Penal al presente caso. La potestad legal se refiere a la suspensión de la pena de prisión que no exceda de dos años y a esa dimensión normativa se adecuó la parte resolutiva de la sentencia de 28 de octubre pasado, proferida en este caso.

Cabe recordar que, al tenor del artículo 79 de la legislación punitiva codificada, la Corte, salvo la condición cronológica que conlleva el lapso de suspensión, no impuso otras condiciones que las que se generan de las sanciones impuestas y de los antecedentes del sujeto activo.

El Pleno considera que el mecanismo instrumental de aclaración de la parte resolutiva de la sentencia dictada en este caso penal, es demostrativo de la ausencia de un esfuerzo serio por una hermenéutica profunda y científica de la ley.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que la parte resolutiva de la sentencia condenatoria de 28 de octubre de 1993 por aplicar la Ley penal, no requiere de aclaración.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE CONTROVERSIA PRESENTADO POR EL DIRECTOR DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) DENTRO DEL PROCESO PENAL PROPUESTO EN CONTRA DE RUBÉN DARÍO CARLES POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES OFICIALES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante reparto del 1° de noviembre de 1993, efectuado por el Pleno de la Corte Suprema, fue asignado a esta Corporación el incidente de controversia presentado por **GONZALO CÓRDOBA CANDANEDO**, Director del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE), dentro del sumario seguido contra **RUBÉN DARÍO CARLES**, para entonces Contralor General de la República, por el delito en que hubiere incurrido.

Es de conocimiento general que el día 5 de noviembre de 1993, RUBÉN DARÍO CARLES presentó ante la Asamblea Legislativa su renuncia del cargo que desempeñaba como Contralor General de la República desde 1990. Esta situación hace variar la competencia que sobre la persona del profesor RUBÉN D. CARLES tenía el Pleno, debido a que dicha competencia se fundamenta en la calidad de las partes y guarda relación con la función que desempeña el sumariado.

El artículo 87, numeral 2, literal b, del Código Judicial atribuye al Pleno de la Corte Suprema la competencia para conocer de las causas por delitos comunes o faltas cometidos, entre otros funcionarios de elevada jerarquía, por el Contralor General de la República. El incidente de controversia en estudio se presenta dentro de las sumarias seguidas contra el profesor RUBÉN DARÍO CARLES, Contralor General de la República por el delito en que hubiere incurrido. No obstante, como consecuencia de la renuncia al cargo presentada por éste, el Pleno deja de tener la competencia funcional para seguir conociendo sobre este negocio.

Para efectos de asignar la nueva competencia, debe tenerse presente que la denuncia se presentó por "incumplimiento de deberes oficiales", delito al cual la ley penal le asigna una sanción que no supera los 18 meses de prisión (artículo 336 del Código Penal). Por ello, y en base a lo que establece el numeral 1, literal A, del artículo 174 del Código Judicial, es la esfera municipal la competente para seguir conociendo el presente negocio.

En virtud de lo anotado, la CORTE SUPREMA, PLENO administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer este incidente de controversia y por razones de competencia DECLINA su conocimiento ante la esfera municipal.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR PROPUESTA POR FEDERICO EDUARDO BARRIOS BARRIOS CONTRA EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ RÍOS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la acusación particular propuesta por el licenciado Didacio Ibarra Sánchez, en nombre y representación de Federico Eduardo Barrios Barrios, contra el licenciado Rogelio Cruz Ríos, Procurador General de la Nación, como presunto infractor de los artículos 336 y 338 del Código Penal que tipifican los delitos de abuso de autoridad y omisión de los deberes de servidor público.

La acusación fue admitida a través de la resolución de 19 de noviembre de 1991, y remitida por la Corte Suprema de Justicia a la Procuraduría de la Administración, en virtud de la competencia que le confiere la reciente reforma al Código Judicial, para conocer y practicar la investigación de las acusaciones instauradas contra el Procurador General de la Nación.

Tal situación obedecía a la calidad del funcionario investigado, ya que en virtud de lo preceptuado en el artículo 87 numeral 2, literal b del Código Judicial corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia conocer, en atención a la competencia subjetiva, las causas por delitos comunes o faltas cometidas entre otros, por el señor Procurador General de la Nación. Sin embargo, como el licenciado Rogelio Cruz Ríos ha dejado de ser Procurador General de la Nación, ya que fue condenado por delito doloso, mediante sentencia de 28 de octubre de 1993 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, esta Corporación de Justicia ha perdido competencia para seguir conociendo de este negocio.

Como los delitos cuya comisión se imputa al licenciado Rogelio Cruz son competencia de los Juzgados Municipales, por razón de la pena con que son sancionados, debe remitirse a esa esfera penal el negocio en mención, para su conocimiento.

Por lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la acusación particular promovida por el licenciado Didacio Ibarra Sánchez en nombre y representación de Federico Eduardo Barrios Barrios contra el licenciado Rogelio Cruz Ríos ante la esfera Municipal Penal del Distrito de Panamá y ordena remitirle el expediente al Juzgado Municipal en turno del Distrito de Panamá.

Derecho: artículos 2285, 702, 87, 174A del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA CRIMINAL PROPUESTA POR EL DR. MAURO ZÚÑIGA, SECRETARIO DE LA ASOCIACIÓN DE MÉDICOS, ODONTÓLOGOS Y PROFESIONALES AFINES DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y EN CONTRA DEL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la denuncia criminal propuesta por el Dr. Mauro Zúñiga, Secretario de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social, contra el señor Rubén Darío Carles, Ex-Contralor General de la República, como presunto infractor de los artículos 323 y 336 del Código Penal contenidos en el Capítulo I y el Capítulo IV del Título X del Código Penal que tipifica los Delitos contra la Administración Pública.

El artículo 87, numeral 2, literal b del Código Judicial, confiere competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer de las causas por delitos o faltas en que incurra el Contralor General de la República, por razón del alto cargo que desempeña.

La denuncia que motiva el presente negocio jurídico fue remitida a este Organismo de Justicia para la calificación de su mérito legal, y antes de dictar la resolución pertinente el Pleno de la Corte ha perdido la competencia que tenía, porque el señor Rubén Darío Carles renunció a su cargo, ante la Asamblea Legislativa el día 5 de noviembre de 1993 (Cfr. fs. 21 a 24). Como el conocimiento de los delitos investigados compete a la esfera circuital, debe remitirse el sumario al Juez de Circuito del Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, en Turno, para que aprehenda su conocimiento, en cumplimiento de lo preceptuado en los artículos 2285 y 702 del Código Judicial.

Por lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la denuncia criminal propuesta por el Dr. Mauro Zúñiga, Secretario de la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja de Seguro Social, contra el señor Rubén Darío Carles ante la esfera de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, y ORDENA enviar el sumario al Juzgado de Turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) AURA E. G. DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LCDO. JUAN MATERNO VÁSQUEZ EN REPRESENTACIÓN DE LA SRA. MAYÍN CORREA DELGADO Y EN CONTRA DE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL POR INFRACCIÓN DE SUS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora MAYÍN CORREA DELGADO, por medio de su apoderado legal, licenciado Juan Materno Vásquez, presentó acusación particular contra los Magistrados del Tribunal Electoral, EDUARDO VALDÉS ESCOFFERY, GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO Y DENIS ALLEN FRÍAS, por el supuesto delito de infracción de sus deberes de servidores públicos.

El Pleno de la Corte debe examinar en primer lugar si el acusador acompaña con la demanda la prueba sumaria, por cualquier medio probatorio, que acredite el hecho punible atribuido, para los efectos de admitir o archivar la presente acusación particular, tal como lo exige el artículo 2471 del Código Judicial, en relación con el artículo 2468 del mismo Código.

En razón de lo anteriormente expuesto, la Corte debe entrar a calificar preliminarmente si existe un hecho punible acreditado a través de las pruebas sumarias aportadas, en relación con el relato de los hechos narrados como infracción de sus deberes como servidores públicos.

El cargo que se le imputa a los Magistrados acusados es el delito de infracción de sus deberes como servidores públicos que se describe como hecho punible en el artículo 338 del Código Penal, en los siguientes términos:

> "Articulo 338: El servidor público que indebidamente rehuse, omita o retarde algún acto inherente a sus funciones, será sancionado con 25 a 100 días multa, siempre que tal hecho no tenga señalada otra pena por disposición especial."

El apoderado judicial de la parte actora señala que los Magistrados del Tribunal Electoral incurrieron en el delito antes mencionado por cuanto en el proceso penal electoral que se le sigue a la señora MAYÍN CORREA DELGADO por la supuesta comisión de delito electoral su abogado defensor presentó advertencia de inconstitucionalidad del artículo 340 del Código Electoral la cual no fue admitida mediante resolución expedida por el Tribunal Electoral el 22 de octubre de 1993. A juicio del apoderado judicial de la demandante el procedimiento correcto debió ser enviar la consulta a la Corte Suprema de Justicia "sin más trámite" y en un término no mayor de dos días siguientes a la presentación de la mencionada advertencia puesto que, en su opinión, ni la norma constitucional (artículo 203 párrafo 2° de la Constitución Nacional) ni la norma legal (artículo 2549 del Código Judicial) hacen excepción de ningún servidor público, en cuanto

a elevar la consulta de constitucionalidad, por lo que los Magistrados y autoridades del Tribunal Electoral quedan obligados, como parte de sus funciones, a elevar las consultas de constitucionalidad por advertencia que se les hagan sobre una disposición legal que van a aplicar en la decisión de un negocio. Agrega que el artículo 2549 es terminante e imperativo al disponer que el servidor público debe elevar la consulta, sin más trámite, y remitir el expediente en el término de dos días a la Corte Suprema de Justicia. Como prueba documental la parte acusadora aporta copia autenticada de la resolución emitida por el Tribunal Electoral el 22 de octubre de 1993.

La decisión emitida por los Magistrados del Tribunal Electoral en la resolución antes mencionada se fundamentó, según se indica en la misma resolución, en el artículo 137 de la Constitución Política de Panamá, que regula las atribuciones del Tribunal Electoral, cuyo último párrafo señala que "las decisiones del Tribunal Electoral únicamente son recurribles ante el mismo y una vez cumplidos los trámites de ley, serán definitivas, irrevocables y obligatorias. Se exceptúa lo referente al recurso de inconstitucionalidad". Señala el Tribunal que no procede admitir la advertencia de inconstitucionalidad en la jurisdicción electoral, ya que el único recurso o acción admisible en contra de la jurisdicción electoral es el recurso de inconstitucionalidad una vez fallada la controversia.

Una vez examinado el expediente contentivo del presente negocio el Pleno de la Corte estima que no se configura el delito de infracción a los deberes de servidores públicos por haber declarado no admisible la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el Lcdo. Juan Materno Vásquez en representación de la señora MAYÍN CORREA DELGADO en contra de los Magistrados del Tribunal Electoral, ya que el artículo 137 de la Constitución Política de la República de Panamá establece claramente que el recurso de inconstitucionalidad es la única acción admisible en contra de las decisiones de la jurisdicción electoral. A este respecto, no debe confundirse el recurso de inconstitucionalidad contenido en el Libro IV, Capítulo IV, artículo 2550 y siguientes del Código Judicial con la Consulta sobre constitucionalidad reguladas en el Libro IV, Capítulo III, artículos 2548 y 2549 del Código Judicial, pues se trata de dos instituciones procesales distintas: en el primer caso el proceso constitucional se promueve a través de una acción popular y el otro a través de una excepción que se planteó en este caso ante el Tribunal Electoral. La advertencia de inconstitucionalidad, que es una excepción, puede ser promovida cuando alguna de las partes en el proceso advierta que la disposición legal o reglamentaria es inconstitucional, caso en el cual podrá hacer la advertencia respectiva a la autoridad correspondiente, quien en el término de dos (2) días, sin más trámite, elevará la consulta a la Corte Suprema de Justicia. Distinto resulta, pues, el recurso de inconstitucionalidad, que es una acción, mediante el cual, cualquier persona, por medio de apoderado legal, puede impugnar ante la Corte Suprema de Justicia las leyes, decretos de gabinete, decretos-leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos provenientes de autoridad que considere inconstitucionales, y pedir la correspondiente declaración de inconstitucionalidad. No debe pues, confundirse la acción de inconstitucionalidad, que nuestra Constitución denomina recurso de inconstitucionalidad en el artículo 137, con la excepción de inconstitucionalidad que en nuestro sistema constitucional se designa, en el artículo 203 numeral 1o., de la Constitución como advertencia de inconstitucionalidad.

Mediante la acción (recurso de inconstitucionalidad) se ejerce un control abstracto de constitucionalidad y la misma es propia de los sistemas europeos continentales de justicia constitucional. Por el contrario, mediante la excepción (advertencia de inconstitucionalidad) se ejerce un control en concreto y es propia del modelo norteamericano de justicia constitucional en el cual solo cabe esta forma de control judicial de constitucionalidad. Quienes sostienen que la frase "recurso de inconstitucionalidad" en el artículo 137 de la Constitución incluye la advertencia, que posteriormente debe ser elevada en consulta, confunden la acción con la excepción en materia constitucional procesal.

La interpretación constitucional empieza, aunque evidentemente no se agota, con el sentido literal del texto constitucional respectivo (cfr. A. Hoyos, La interpretación constitucional, Ed. Temis, Santa Fe de Bogotá, 1993). El artículo 137 debe interpretarse en el sentido de que en los procesos electorales sólo cabe la acción (recurso) de inconstitucionalidad por dos razones:

1. El sentido literal del texto es claro en cuanto a que las decisiones del Tribunal Electoral "únicamente" son recurribles ante él mismo, excepto lo referente "al recurso de inconstitucionalidad". No se incluye aquí la "advertencia" de inconstitucionalidad prevista en el artículo 203 de la Constitución.

2. El párrafo final del artículo 137 es una norma de excepción en cuanto señala que "se exceptúa lo referente al recurso de inconstitucionalidad" y, por lo tanto, esta norma excepcional no puede ser interpretada en forma extensiva como que incluye, además del recurso, la advertencia que es una institución distinta. De hecho, la jurisprudencia y la legislación vigente (artículo 2606 del Código Judicial) señalan que no cabe el amparo de garantías constitucionales en los procesos electorales, lo cual es consistente con la interpretación restrictiva que debe darse a esta norma de excepción.

Estamos conscientes de que la Corte Suprema ha resuelto con anterioridad advertencias de inconstitucionalidad que se han formulado en procesos electorales, pero en ellas no se ha resuelto expresamente el asunto central que aquí nos ocupa que es el de determinar la procedencia de aquéllas en dichos procesos. No existe sentencia final, definitiva y obligatoria de esta Corte, que recaiga sobre el último párrafo del artículo 137 de la Constitución vigente en que se señale en forma expresa y categórica un criterio contrario al aquí expresado. Pero aun si, en gracia de discusión, existiera una afirmación obiter dictum en ese sentido, nada impide que por las razones arriba expuestas la Corte

Suprema entre a revisar ese criterio y establezca con toda claridad la interpretación que debe darse al párrafo final del artículo 137 de la Constitución.

En el presente negocio, dado que se trata de un proceso electoral penal, lo único procedente era, pues, la interposición de un recurso de inconstitucionalidad, una vez fallada la controversia.

Por todo lo anteriormente expuesto, no estamos en presencia de un acto delictivo, y la prueba de haber declarado no admisible la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el Lcdo. Juan Materno Vásquez, en representación de la señora Mayín Correa Delgado, no acredita la comisión de ningún delito por parte de los Magistrados del Tribunal Electoral.

En suma, la acusación particular formalizada contra los Magistrados del Tribunal Electoral les imputa el delito de infracción de sus deberes de servidores públicos que describe y sanciona el artículo 338 del Código Penal, no obstante la prueba documental aportada carece de idoneidad para acreditar la existencia del hecho punible.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL ARCHIVO de la presente acusación particular contra los Magistrados del Tribunal Electoral: LIC. EDUARDO VALDÉZ ESCOFFERY, DR. GUILLERMO MÁRQUEZ AMADO Y LIC. DENIS ALLEN FRÍAS.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO CONCURRENTE DE LOS MAGISTRADOS EDGARDO MOLINO MOLA, AURA E. GUERRA DE VILLALAZ, RAÚL TRUJILLO MIRANDA, JOSÉ MANUEL FAÚNDES.

En la acusación particular presentada por la señora **Mayín Correa Delgado**, contra los Magistrados del Tribunal Electoral, por el supuesto delito de infracción de sus deberes de servidores públicos, aunque nos manifestamos de acuerdo con la parte dispositiva de la decisión, discrepamos en cuanto a la parte motiva de la misma, por las razones que expresamos a continuación: El párrafo final del artículo 137 de la Constitución Nacional, que no permite impugnaciones de las **decisiones** del Tribunal Electoral, mas que ante él mismo, con la excepción del recurso de inconstitucionalidad, deja establecido, que la única vía de impugnación, de las **decisiones** de ese Tribunal, es por medio del recurso de inconstitucionalidad, ante la Corte Suprema de Justicia, quien ejerce en forma privativa el control de la constitucionalidad.

Queda claro entonces que las **decisiones jurisdiccionales** del Tribunal Electoral, sometidas al control constitucional, no excluyen **las disposiciones legales o reglamentarias**, aplicables dentro de un proceso electoral, del control de la constitucionalidad. Lo que la Constitución exceptúa son las **decisiones** del Tribunal Electoral pero no las **disposiciones legales o reglamentarias** aplicables en un proceso electoral, que sí pueden ser objeto del control constitucional, por medio de la consulta o la advertencia, como en efecto ha ocurrido en muchas ocasiones.

En Panamá, existe un control previo de admisibilidad, por parte del Tribunal al que se hace la advertencia, ya que tiene facultades para no admitir la advertencia en los casos en que exista pronunciamiento de la Corte sobre la disposición legal o reglamentaria advertida, que la norma ya haya sido aplicada o no se trate de la norma aplicable y algunos magistrados opinan que debe ser sobre la norma que decida sobre la validez del proceso o el fondo del negocio.

La Corte, con respecto a la frase **sin más trámite**, del artículo 2549 del Código Judicial dijo en fallo de 21 de febrero de 1992, en la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el Licenciado Fidel Murgas Abrego, contra el artículo 1 de la Ley 52 de 29 de noviembre de 1980 lo siguiente: Es evidente la incompatibilidad entre la frase "sin más trámite" del artículo 2549 del Código Judicial y el contenido del artículo 203 de la Constitución Nacional en lo que concierne a las consultas y las advertencias de inconstitucionalidad.

En varias ocasiones la Corte ha rechazado quejas y amparos contra los Tribunales que no han admitido advertencias siguiendo la doctrina de la Corte Suprema sobre este punto. Por ello la opinión de un Tribunal sobre la procedibilidad de una advertencia de inconstitucionalidad es una potestad legal propia del ejercicio de las funciones de la judicatura y la magistratura por lo que tal conducta no se adecua a los presupuestos fácticos que integan los tipos penales que se le imputan a los magistrados del Tribunal Electoral, y de allí que esa opinión no pueda considerarse como delito.

Por lo expuesto nuestro voto es concurrente con la decisión, con las salvedades expuestas las partes de su motivación.

Fecha ut supra.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

DICIEMBRE 1993

## APELACIÓN MARÍTIMA

HAPAG-LLOYD, A.G., APELA CONTRA EL AUTO DE 20 DE ABRIL DE 1992, DICTADO POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COINPA EXPORT, C.A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En grado de apelación ha llegado a esta Corporación el recurso que se promovió en contra de la Resolución del 20 de abril de 1993, presentada por la parte demandada en el proceso marítimo ordinario que COINPA EXPORT, C.A. le sigue a HAPAG-LLOYD, A.G. Esta resolución resuelve negativamente la petición de nulidad de lo actuado, que con fundamento a la carencia de personería sustantiva de la parte demandante, presentara la opositora. Para resolver esta alzada, conveniente es hacer una breve relación acerca del presente proceso.

La parte demandante solicita al Tribunal que se declare que la demandada incurrió en conducta culposa y negligente cuando no informara, al momento de firmar el contrato de transporte marítimo, que la nave "ADVISER", en la cual la demandante embarcó 1,644 cajas de Ron Havana Club, haría escala en San Juan, Puerto Rico, dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos de Norteamérica, lo que originó el decomiso de esa mercancía por las autoridades aduaneras de dicho país, en virtud de embargo que tiene decretado sobre toda mercancía de origen cubano que llegue a su territorio. Solicita, como consecuencia de esa conducta que tilda de culposa o negligente, que se le condene por los daños y perjuicios que le ha causado, tanto por el decomiso de la mercancía embargada, como por las consecuencias económicas y comerciales derivadas de ese acto, en la suma de QUINIENTOS MIL DÓLARES.

La nulidad se solicita porque, según expone la demandada, de la documentación aportada se desprende que la actora carece de capacidad para comparecer en este juicio al no ser propietaria de la mercancía decomisada.

El tribunal sostiene, al negar la solicitud de nulidad, que no existe en el libelo prueba alguna que la demandante se hubiere presentado como dueña, propietaria o consignataria de la mercancía. Además expresa lo siguiente:

> "...
> Por otra parte, la parte actora, entre sus causas de pedir y fundamentos de su acción, sostiene que a la embarcadora no se le informó que la nave recalaría en territorio sujeto a la jurisdicción de los Estados Unidos (v. h. CUARTO) y en efecto según argumenta, la nave ingresó en aguas territoriales de Puerto Rico, siendo la mercancía decomisada por las autoridades de aduanas de los Estados Unidos, en base, según se afirma, al embargo comercial que ese país mantiene en vigencia contra productos cubanos.
>
> Si bien es cierto que el actor sustenta su acción <<inter alia>> en el incumplimiento de obligaciones contractuales y legales aparejadas al contrato de transporte marítimo (h. CUARTO), no es menos cierto que, según se puede ver del hecho PRIMERO de la demanda (fs. 4), la parte actora atribuye la responsabilidad y los perjuicios que alega ha sufrido (evidentemente como embarcadora y responsable del embarque a su destino), a una conducta culposa y negligente de la demandada que dieron lugar al decomiso de la mercancía y los alegados perjuicios que cuantifican, según piden declare el Tribunal, en la suma de QUINIENTOS MIL BALBOAS.
>
> Por las consideraciones anteriormente expuestas, y la imposibilidad que posee este Tribunal de entrar a examinar el monto de la indemnización pedida por perjuicios y si hay o no lugar a responsabilidad, no ve la alegada suplantación del demandante o lo que pudiera interpretarse como una ilegitimidad activa o sustantiva para demandar en el caso subjúdice, procediendo en consecuencia a rechazar de plano la solicitud interpuesta. ...".

El apelante indica en su sustentación que debe revocarse la resolución, por cuanto que en el expediente aparece que ÁNGEL LONGA & LONGA adquirió por compra las 1,644 cajas de ron cubano que fueron decomisadas y que, según aparece en pruebas que aportara también la actora, esta última canceló el flete al transporte de las cajas. Por otro lado sostiene que los dueños de las cajas que contenían el ron cubano que le fueron vendidas por COINPA EXPORT, C.A. presentaron ya formal reclamo en su condición de dueños. Todo ello, según el decir de los apelantes, deja claramente establecido que no tiene la demandante legitimidad para proceder a presentar la demanda.

La Corte comparte la posición adoptada por el Tribunal Marítimo en su resolución del 20 de abril de 1993. Tal como se ha expresado anteriormente, COINPA EXPORT, C.A. es la persona que realizó el respectivo contrato de fletamento y, tal como expresa en la primera declaración demandada, su acción se dirige a lograr s le cubran los daños y perjuicios por la supuesta conducta culposa o negligente que atribuye a la demandada y que dieron origen al comiso realizado por las autoridades aduaneras en San Juan, Puerto Rico, sin importar su condición de dueña o no de la mercancía.

Cabe destacar que uno de los argumentos que esbosa el demandante se refiere a que el dueño de la carga lo es ÁNGEL LONGA & LONGA y quien ha presentado reclamo por la pérdida de esa mercancía, por lo cual no es factible que un tercero presente la misma

pretensión. Frente a esta posición, de ser cierto tal hecho, deberá ser materia que deba resolverse en el proceso y ello, a estas alturas, no puede constituir elemento determinante acerca de si el comiso de la mercancía se produjo por culpa o negligencia del transportista naviero y, de ser cierto, si ello produjo o no los supuestos perjuicios reclamados en el libelo de demanda.

Lo anterior lleva a la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, a CONFIRMAR el Auto dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá el 20 de abril de 1993, dentro del proceso marítimo ordinario que promoviera COINPA EXPORT, C.A. contra HAPAG-LLOYD, A.G.

Las costas se estiman en TRESCIENTOS BALBOAS (B/.300.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MULTI REPUESTOS, S. A. APELA CONTRA LA SENTENCIA DE 18 DE MAYO DE 1993 DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE A NATIONAL UNIÓN FIRE INSURANCE, CO. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN, apoderados judiciales de la sociedad **MULTI REPUESTOS, S. A.**, presentaron recurso de apelación contra la sentencia de 18 de mayo de 1993, dictada por el Tribunal Marítimo de Panamá, dentro del proceso ordinario marítimo que le sigue a NATIONAL UNION FIRE INSURANCE CO.

Como consecuencia de ese recurso, ingresó a esta Sala el negocio en cuestión y, encontrándose en estado de resolver, los apoderados de MULTI REPUESTOS, S. A. presentaron un escrito en el cual manifiestan lo siguiente:

> " Nosotros, MORGAN & MORGAN, apoderados de MULTIREPUESTOS, S. A. dentro del proceso identificado al margen superior de este escrito, respetuosamente comparecemos para desistir de la apelación que interpusimos contra la sentencia de primera instancia dictada por el Juez del Tribunal Marítimo, cuya sustentación formulamos por escrito de 20 de julio de 1993.
>
> Este desistimiento lo hacemos fundados en la facultad que a tal efecto nos otorgó nuestro poderdante." (fs. 2281)

En vista del contenido del escrito transcrito, y con base en la facultad contenida en el artículo 476 de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, reformada por la Ley 11 de 23 de mayo de 1986, la Sala considera que es del caso admitir el desistimiento propuesto por la parte demandante, habida cuenta de que MORGAN & MORGAN en su condición de apoderados judiciales de MULTI REPUESTOS, S. A. tienen la facultad expresa para ello, tal y como consta en el poder otorgado por el representante legal de esa sociedad, visible a fojas 2283 del expediente.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de apelación presentado por MULTI REPUESTOS, S. A., contra la sentencia de 18 de mayo de 1993, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá.

Las costas se fijan en doscientos balboas solamente (B/.200.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES Y OTROS, APELAN DE LA SENTENCIA DE FECHA DE 15 DE MAYO DE 1992, DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO EN EL PROCESO ORDINARIO MARÍTIMO QUE LE SIGUE A FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (FLOPEC). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a esta Sala de la Corte, el expediente contentivo del Proceso Ordinario Marítimo propuesto por **GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES Y OTROS**, contra FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (F.L.O.P.E.C.), procedente del Tribunal Marítimo de Panamá.

La apelación ha sido interpuesta por la parte demandante, a través de sus apoderados judiciales, Dudley y Asociados.

La actuación de este proceso se inició con la interposición de la demanda por parte de la señora GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES Y OTROS, para que, previos los trámites de rigor, se condenara a FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (de aquí en adelante F.L.O.P.E.C.) a pagar a los demandantes,"la suma de B/.1,152,285.00 en concepto de indemnización por los diversos daños y perjuicios materiales y morales, pasados, presentes y futuros que han sufrido y que derivan del suceso acaecido el 19 de junio de 1989, cuando la M/N Manabí negligentemente causó fatal accidente al señor Julio César Grajales Gutiérrez (Q.E.P.D.)". (fs. 1)

La parte demandada, al contestar el traslado de la demanda, negó los hechos de la misma y solicitó que fuera rechazada de plano, previa condenación al pago de costas y perjuicios ocasionados a la demandada, en virtud de la interposición del proceso.

Dentro del desenvolvimiento del presente juicio, las partes comparecieron a las audiencias preliminar y ordinaria, celebradas conforme al procedimiento establecido por los artículos 497 y 502 de la Ley de Procedimiento Marítimo.

En la audiencia ordinaria se practicaron las pruebas documentales, testimoniales y periciales aducidas tanto por la parte demandante como por la demandada y al finalizar, las partes presentaron sus respectivos alegatos orales de conclusión.

El Juez del Tribunal Marítimo profirió sentencia desde los estrados del Tribunal, al culminar la audiencia ordinaria el 15 de mayo de 1992, en virtud de lo establecido en el artículo 505 de la Ley 8 de 1982. La transcripción de la misma es consultable desde fojas 860 a 865, y en ella se determina lo siguiente:

> "En consecuencia, el Tribunal Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ABSUELVE a FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (F.L.O.P.E.C.) de la demanda interpuesta por GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES ET AL, y no habrá imposición en costas, por estimarse que se ha litigado de buena fe".

En vista de que esta sentencia fue oral, el Juez determinó que la misma se notificaría al momento en que se les presentara a las partes la transcripción contentiva de la audiencia ordinaria y la sentencia. En consecuencia, las partes quedaron notificadas en febrero de 1993.

F.L.O.P.E.C, a través de sus apoderados legales, Morgan y Morgan, solicitaron modificación y adición a la sentencia de 15 de mayo de 1992, en el sentido de que se condenara en costas a la parte demandante.

El Tribunal Marítimo, en resolución fechada 30 de junio de 1993, "MANTIENE en todas sus partes la Sentencia proferida oralmente por este Tribunal en Audiencia Ordinaria dentro del Proceso que GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES E HIJOS le siguen a FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (F.L.O.P.E.C.)".(fs.969)

Los apoderados legales de los demandantes solicitaron y sustentaron apelación contra la sentencia oral de 15 de mayo de 1992, mientras que los apoderados de la parte demandada presentaron su alegato de oposición a la apelación, ambos dentro del término establecido por la ley.

## HECHOS DE LA CAUSA Y LEY APLICABLE SEGÚN EL TRIBUNAL MARÍTIMO.

1) El accidente que provocó el inicio de la presente controversia y en el cual perdió la vida el señor JULIO CESAR GRAJALES GUTIÉRREZ, tuvo lugar el 19 de junio de 1989.

2) El señor Grajales se encontraba en ese momento a bordo de la lancha ANAYANSI, propiedad de la Autoridad Portuaria Nacional. El señor Grajales y los señores Luis Miguel Vivies y Jacinto Martínez, trabajaban para la empresa Motta Internacional, y abordaron la lancha con el fin de entregar mercancía a la M/N MANABI , propiedad de F.L.O.P.E.C., durante su travesía por el Canal de Panamá.

3) Dentro de la lancha ANAYANSI, también se encontraban su operador el señor Jorge Vélez, su ayudante Mauricio Berguido (ambos empleados de la Autoridad Portuaria Nacional), y un representante de la agencia naviera Pancanal Shipping Agency, el señor Jorge Alonso Guillén.

4) La M/N MANABI venía saliendo de las esclusas de Miraflores con rumbo sur, cuando la lancha ANAYANSI, que venía en sentido contrario,hizo una maniobra para tratar de acoderarse a la escalera de gato de la nave, que se encontraba aproximadamente en la mitad del casco del citado barco MANABI.

5) La lancha ANAYANSI no pudo alcanzar la escala de gato y se quedó rezagada. Como resultado de la corriente y de la pérdida de velocidad que sufrió la lancha al momento de efectuar la maniobra de 180 grados para tratar de acoderarse al barco, se metió en la curvatura de popa de la nave del lado de babor. En ese momento, el señor Grajales se encontraba fuera de la lancha, en la parte de popa, banda estribor, lo que produjo que la cabeza del señor Grajales quedara aprisionada entre la lancha y la curvatura de popa del barco MANABI.

6) De acuerdo con los testimonios de las personas presentes al momento en que se suscitó el accidente y con los cálculos estimados por los peritos presentados durante el

proceso, se llegó a la conclusión de que la hora aproximada en que sucedió el mismo fue las 15:45.

7) De acuerdo con las constancias del proceso, la velocidad que mantenía la M/N MANABI cuando sucedió el accidente, no era superior a los seis nudos por hora, que es la velocidad máxima permitida por las regulaciones del Canal, lo que equivale a decir que el barco no viajaba a excesiva velocidad.

8) En ese momento,el señor William Carroll, piloto del Canal de Panamá, llevaba el control de la nave, de acuerdo con su propio testimonio, rendido dentro de la audiencia ordinaria que se realizó durante este proceso.

9) El juez del Tribunal Marítimo concluyó que el fatal accidente fue consecuencia de dos factores, a saber: A) Al mal cálculo de velocidad que hiciera el señor Vélez, piloto de la lancha ANAYANSI, al momento de realizar la maniobra de acoderamiento al barco MANABI y, B) Al hecho de que el señor Grajales se encontraba en una posición inadecuada al momento del accidente, o sea fuera de la lancha, en la parte de popa, banda estribor.

10) La Ley aplicable al presente caso es la Ley panameña, específicamente el artículo 1644 del Código Civil que regula la responsabilidad civil extracontractual.

11) Para determinar la responsabilidad a que se refiere el artículo 1644 del Código Civil, es necesario que se pruebe sin lugar a dudas, el daño causado, la culpa del causante y la relación entre estos dos.

12) En este caso el daño es obvio y consiste en la muerte del señor Grajales; sin embargo el Tribunal Marítimo no pudo encontrar culpa ni nexo alguno entre el daño causado y F.L.O.P.E.C.

13) El juez del Tribunal Marítimo no condenó en costas al demandante por consideración a su situación económica y al hecho de que no existió mala fe de su parte.

CONTENIDO DEL RECURSO DE APELACIÓN PRESENTADO POR EL DEMANDANTE.

El apelante considera que se han dado y probado fehacientemente en este proceso, los tres elementos necesarios para demostrar la responsabilidad civil extracontractual de F.L.O.P.E.C.: 1) el daño causado, 2) la culpa del causante y 3) el nexo de causalidad entre ambos.

1) El daño causado consiste en la muerte del señor JULIO CESAR GRAJALES GUTIÉRREZ y el correspondiente perjuicio económico y emocional que este hecho ha ocasionado a la viuda y a los hijos del occiso.

2) La culpa y negligencia de F.L.O.P.E.C. consistió en que, a sabiendas de que la lancha ANAYANSI se aproximaba, la M/N MANABI incrementó su velocidad, rebasando incluso los límites establecidos por los reglamentos del Canal de Panamá y produciendo como consecuencia, que la lancha fuera succionada por el barco.

En vista de lo expuesto, el apelante alega que el Tribunal Marítimo violó el artículo 205 del Código de Procedimiento Marítimo, al apreciar el material probatorio allegado al proceso, de manera selectiva e incluso contradictoria. Continúa diciendo que tanto los informes periciales como los testimonios rendidos por estos expertos en la audiencia ordinaria, se encuentran llenos de contradicciones e irregularidades.

Su disconformidad con la sentencia de primera instancia se centra principalmente en la determinación del cálculo de la hora en que ocurrió el accidente, y que el juez del Tribunal Marítimo concluyó en las 15:45. Sin embargo, el apelante alega que éste se suscitó a las 15:51 aproximadamente, cuando la M/N MANABI viajaba a una velocidad superior a los 6 nudos, que como ya se ha señalado anteriormente, es la máxima velocidad permitida en las aguas del Canal de Panamá.

Como conclusión de la hipótesis expuesta por el apelante se extrae que la velocidad a la que viajaba la M/N MANABI en ese momento, fue lo que produjo el accidente o sea, que existió negligencia por parte de la nave y consecuentemente hay culpa imputable a su propietaria F.L.O.P.E.C.

Igualmente, hace constar que el hecho de que el barco fuera piloteado por un práctico de la Comisión del Canal al momento en que se produjo el lamentable suceso, no libera de responsabilidad a F.L.O.P.E.C., toda vez que el Capitán del buque se encontraba a bordo y pudo haber impedido la peligrosa aceleración del mismo.

CONTENIDO DEL ESCRITO DE OPOSICIÓN AL RECURSO DE APELACIÓN

Los apoderados de la parte demandada opositora, en escrito que va desde foja 973 a 993, luego de rebatir los argumentos del apelante, concluyen que debe confirmarse la sentencia de primera instancia, en vista de que durante el proceso, el demandante no consiguió probar ninguno de los tres elementos constitutivos de la responsabilidad civil extracontractual que el recurrente le imputa a F.L.O.P.E.C, por lo que carece de fundamento la petición hecha por éste en el recurso que se está analizando.

Igualmente solicitan que se condene en costas a la parte recurrente, en virtud de lo que establece el Artículo 490 del Código de Procedimiento Marítimo, en el sentido de que hay lugar a condena en costas contra el apelante, cuando se confirma la resolución apelada.

CRITERIO DE LA SALA

El punto central de la controversia, consiste en determinar si existen pruebas suficientes en este proceso que permitan establecer la responsabilidad civil extracontractual de F.L.O.P.E.C., en relación con el accidente acaecido entre la M/N MANABI y la lancha ANAYANSI, a consecuencia del cual perdió la vida el señor JULIO CESAR GRAJALES.

El artículo 1644 del Código Civil de Panamá regula este tipo de responsabilidad y su contenido es el siguiente:

> "Artículo 1644: El que por acción u omisión cause daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.
>
> Si la acción u omisión fuera imputable a dos o más personas, cada una de ellas será solidariamente responsable por los perjuicios causados."

Como bien determinó el juez del Tribunal Marítimo y como en repetidísimas ocasiones ha manifestado esta Corte, la responsabilidad extracontractual está compuesta por tres factores, que la parte que la alega debe probar, para que se pueda condenar a una indemnización como resultado del daño ocasionado y debidamente acreditado en el proceso. Estos tres elementos son el daño causado, la culpa o negligencia, y el nexo de causalidad entre ambos elementos.

De acuerdo con las alegaciones del demandante en su escrito de apelación, la decisión de primera instancia es objetable, en virtud de que, a pesar de que el material probatorio allegado al proceso señalaba como responsable de la muerte del señor Grajales a F.L.O.P.E.C, el juez a quo aplicó incorrectamente las reglas de la sana crítica contenidas en el artículo 205 del Código de Procedimiento Marítimo y como consecuencia de ese error, absolvió a la parte demandada.

El primer elemento que hay que tomar en cuenta para desatar la controversia que nos ocupa, es la determinación de la hora aproximada en que se suscitó el accidente, para poder determinar también, la velocidad a la que viajaba la M/N MANABI al momento en que éste ocurrió.

El demandante apelante afirma que el accidente ocurrió alrededor de las 15:51, cuando el personal de la Comisión del Canal ya había desembarcado del buque. A esta hora, de acuerdo con la bitácora de campana, el MANABI navegaba a una velocidad superior a los 6 nudos, lo que a juicio del recurrente era negligente y peligroso, en virtud de que las regulaciones del Canal de Panamá permiten como velocidad máxima dentro de sus aguas, la de 6 nudos por hora. Como consecuencia de esta velocidad, se produjo la colisión de la ANAYANSI con la M/N MANABI, y como resultado de la misma, la muerte del señor Grajales. Considera entonces, que puede atribuirsele negligencia a F.L.O.P.E.C., por razón de la velocidad a la que navegaba el buque MANABI.

Veamos lo que se establece con relación a este punto en la sentencia apelada:

> "... poco después de pasar la curva que se encuentra posteriormente a la salida de las esclusas de Miraflores, la lancha ANAYANSI pasó a una velocidad, o a la velocidad máxima, o cerca de la velocidad máxima que podía dar esa lancha ANAYANSI, en sentido contrario a la M/N MANABI, aproximadamente a las 15 horas, 45 minutos, según constancias en el proceso.
>
> Al momento de pasar (la lancha ANAYANSI), los pasa cables o pasa-barcos de la Comisión del Canal se encontraban a bordo de la M/M, MANABI.
>
> Al pasar en sentido contrario, a las 15:45 procedió inmediatamente a hacer una maniobra de 180 grados para acoderarse a la M/N MANABI,la cual aproximadamente (tomó), según estimación del juzgador en base a las constancias probatorias, entre 30 segundos a un minuto y medio." (fs. 860 y 861)

Esta conclusión a la que llegó el a quo en cuanto a la hora en que sucedió el accidente se basa en las declaraciones rendidas por los propios testigos del hecho y se apoyan en los documentos que constituyen parte del material probatorio de este proceso.

Así, el segundo oficial del buque MANABI, declaró que al momento en que estaban desembarcando los prácticos del Canal, que según consta en la bitácora de campana de la nave sucedió a las 15:42, él observó cuando pasaba la lancha ANAYANSI y acto seguido realizó la maniobra para acoderarse al barco, y se golpeó la banda de estribor de la lancha con casco del buque, aleta de babor.

Igualmente, el piloto de la lancha ANAYANSI, el señor Jorge Vélez, aseveró en su declaración que al pasar junto al buque, él pudo observar que se encontraban a bordo del mismo, los pasabuques o pasacables. De acuerdo con la bitácora del barco, éstos terminaron de bajar a las 15 horas con 49 minutos, lo que significa que la hora del accidente fue anterior al desembarco de los pasacables.

Siendo así, la Sala estima que la hora aproximada en que se suscitó la colisión, fue la que determinó el juez de primera instancia, o sea, alrededor de las 15:45. No encuentra esta Corporación, en las pruebas rendidas, nada que sirva de apoyo a la hipótesis del demandante apelante, en cuanto a que el accidente se suscitara a una hora posterior a la señalada por el a quo.

Si aceptamos las 15:45 como la hora aproximada en que sucedió el accidente, queda sin asidero la acusación hecha por el recurrente en relación con la velocidad que llevaba

el MANABI, ya que según consta en el proceso, a esa hora la misma viajaba a la mínima velocidad, alrededor de 40 revoluciones por minuto, lo que equivale a 5.5 nudos.

De los tres elementos que conforman la responsabilidad civil extracontractual, la Sala concluye que sólo ha podido probarse el daño causado consistente en la pérdida de la vida del señor Grajales y su consecuente repercusión moral y económica en su viuda y en sus hijos, pero no hay evidencia alguna de culpa por parte de la M/N MANABI, ni por ende de su propietaria F.L.O.P.E.C., no encontrándose por tanto nexo alguno que relacione la muerte del señor Grajales con F.L.O.P.E.C. Como bien señaló el a quo, este accidente tuvo lugar por dos razones principales: la primera, imputable al propio señor Grajales, al haber estado ocupando una posición peligrosa en ese momento, y la segunda, imputable al piloto y al tripulante de la lancha ANAYANSI, que no le ordenaron al occiso que permaneciera dentro de la cabina de la lancha, hasta tanto no se acoderara de manera segura al MANABI.

Esta Sala de la Corte encuentra que el razonamiento realizado por el Juez del Tribunal Marítimo es consecuencia lógica de la realidad procesal y que la valoración que realizó del material probatorio, es inobjetable.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA en todas sus partes la sentencia de 15 de mayo de 1992, proferida por el Tribunal Marítimo de Panamá dentro del Proceso Ordinario propuesto por GLORIA MONTENEGRO DE GRAJALES Y OTROS contra FLOTA PETROLERA ECUATORIANA (F.L.O.P.E.C.).

Por razones distintas a las expresadas por el a quo, no se condena en costas a la demandante.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala de lo Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIÓN INTERPUESTA POR WEMBLEY MARINE CO. CONTRA EL AUTO DE 25 DE AGOSTO DE 1993, DICTADA EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ATLANTIC LIGHT CORPORATION. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Proveniente del Tribunal Marítimo de Panamá, ha ingresado a esta Sala Civil de la Corte Suprema, en grado de apelación, la Petición de Apremio presentada por el apoderado judicial de la sociedad **WEMBLEY MARINE CO., LTD.** El recurso de apelación va dirigido contra el auto de 25 de agosto de 1993, dictado dentro del proceso ordinario marítimo incoado por ATLANTIC LIGHT CORP. contra WEMBLEY MARINE CO. LTD., NEWFORUM MARINE LTD., KENT TRADING CORP. y MERSEY SHIPPING CO. LTD.

Dentro del presente proceso, la parte demandante solicitó, se decretó y ejecutó, secuestro sobre la **M/N NORTH ROCK** de propiedad de una de las demandadas, la sociedad WEMBLEY MARINE CO., LTD., en base al numeral 2° del artículo 164 del Código de Procedimiento Marítimo. Contra el citado secuestro es que la propietaria de la nave incautada, presentó la solicitud de apremio que ahora conoce la Sala en grado de apelación.

La resolución impugnada tiene la siguiente parte resolutiva:

> "Dado que no se han cumplido los presupuestos establecidos en nuestra legislación para acoger la solicitud de apremio presentada, el que suscribe, Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley RECHAZA el recurso de APREMIO presentado en la presente causa por considerarse el mismo improcedente." (fs. 262)

Encontrándose pendiente de resolver la presente causa, a ello procede la Sala, previas las siguientes consideraciones.

## CONTENIDO DEL RECURSO

El recurrente señala entre los hechos y razones que fundamentan su recurso, lo siguiente:

1. En la solicitud de apremio se alegó que el secuestrante había obtenido el secuestro de la M/N NORTH ROCK, con culpa grave, ya que dicha nave pertenece a WEMBLEY MARINE CO., LTD., quien al tenor de la legislación inglesa, no es "persona relevante", para ser demandada y secuestrada, por lo que incurrió en causal de apremio.

2. La resolución impugnada erró al rechazar la solicitud de apremio, señalando que la falta de legitimación ad causa, alegada con base en el derecho inglés, era un requisito de fondo y no de aquellos exigidos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Marítimo, para poder declarar procedente el apremio.

3. El Juez del Tribunal Marítimo debió admitir la solicitud de apremio y señalar la fecha para celebrar la audiencia correspondiente, en la cual el secuestrante debía probar que no había incurrido en la causal de apremio invocada.

POSICIÓN DE LA SALA

Antes de entrar a resolver el fondo del presente recurso de apelación, es preciso determinar si los argumentos señalados por el a quo como fundamento para rechazar la solicitud de apremio, fueron acertados.

Efectivamente, el Tribunal Marítimo señaló que la petición de apremio debía rechazarse, en virtud de que no se habían probado ninguno de los presupuestos exigidos por el artículo 185 del Código de Procedimiento Marítimo, para que pueda ser acogida una petición de esta clase.

La parte central de ese pronunciamiento, es del tenor siguiente:

> "Por otra parte, es necesario que pasemos a analizar lo dispuesto en las disposiciones pertinentes al recurso de apremio, entendiéndose que en los procesos ordinarios, las causales para que se acoja el mismo se circunscriben a que el secuestro se haya practicado sobre un bien que no pertenezca al demandado o que el mismo se haya realizado en contravención de un acuerdo previo de no secuestrar. Así, la parte que solicite el apremio deberá acompañar con su escrito prueba fehaciente de que el secuestro es improcedente, entendiéndose como prueba fehaciente, aquélla que demuestre que el secuestro se ha practicado sobre bienes que no pertenecen al demandado o que el secuestro ha sido solicitado en contravención de un acuerdo previo entre las partes de no secuestrar.
>
> El Tribunal observa claramente, que el apremiante más que probar la causal de apremio relativa a que el bien secuestrado no pertenece a la demandada o que ha sido solicitado en contravención de un acuerdo previo de no secuestrar, ha fundamentado su solicitud en una falta de legitimación ad causa de las demandadas, quienes a su parecer no poseen ninguna relación contractual con la secuestrante, argumento este que constituye materia de fondo del proceso, no siendo por tanto tema a tratar en la solicitud de apremio, la cual tiene como finalidad mantener o no una medida precautoria decretada en virtud de un proceso instaurado." (fs.261)

Esta Corporación encuentra que el criterio expresado por el Juez Marítimo, se apega a las normas que regulan la solicitud de apremio. El artículo 187 del Código de Procedimiento Marítimo establece claramente que la solicitud de apremio debe ir acompañada de prueba contundente que demuestre la improcedencia del secuestro.

En el caso que ocupa a la Sala, como bien señaló el a quo, no se ha probado ninguna de las causales que dan lugar a que el recurso de apremio sea acogido, por lo que se concluye que el auto recurrido debe ser confirmado.

Por tanto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto de 25 de agosto de 1993, dictado por el Tribunal Marítimo de Panamá.

Las costas se fijan en ciento cincuenta balboas (B/.150.00) solamente.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

SAMUEL CATTAN VERGARA RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO QUE LE SIGUE A AUREA EMILIA RODRÍGUEZ ARRIETA Y DIÓGENES GUERRA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Ha llegado al conocimiento de esta Sala, el presente recurso de casación interpuesto por el señor **SAMUEL CATTAN VERGARA**, contra el Auto proferido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el 1° de febrero de 1993, que ordena levantamiento de embargo dentro del Proceso Ordinario convertido en Ejecutivo, incoado por el recurrente contra los señores **ANDREA EMILIA RODRÍGUEZ ARRIETA Y DIÓGENES GUERRA.**

Cumplidos los trámites procesales correspondientes a esta clase de recurso extraordinario, es preciso que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad del mismo, realizando para ello un examen del escrito en que se formaliza, el cual pondrá de manifiesto su sujeción o no, tanto a las condiciones que establece el artículo 1160, como a las circunstancias que señala el artículo 1165, ambos del Código Judicial.

El primer requisito de admisibilidad que consagra el artículo 1165 del citado Código, es que la resolución objeto del recurso debe ser de aquellas contra las cuales lo concede la ley. Se observa que la resolución impugnada ha sido dictada en segunda instancia por un Tribunal Superior y que se trata de un negocio que posee una cuantía mayor de B/.5.000.00.

En cuanto a la naturaleza del auto recurrido, considera la Sala que corresponde al supuesto previsto en el ordinal 4° del Artículo 1149 del Código de Procedimiento el cual contiene un listado específico de las resoluciones susceptibles de impugnarse a través de este recurso extraordinario.

En autos consta que el recurso de anunció y formalizó dentro del término legal.

El escrito por medio del cual fue formalizado reúne, de manera general, todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;

La causal expresada, cual es: "Infracción de normas sustantivas de derecho por interpretación errónea de la norma de derecho que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", es de las señaladas por la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por SAMUEL CATTAN VERGARA, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PASTAS NACIONALES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE RESCISIÓN DE SECUESTRO EN LA SOLICITUD DE SECUESTRO PROMOVIDO POR PRODUCTOS ENGOMADOS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA BURISA ENTERPRISE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense GARRIDO & GARRIDO apoderados judiciales de PASTAS NACIONALES, S. A., recurren en casación, en el fondo, en el incidente de rescisión de secuestro dentro del proceso ordinario que PRODUCTOS ENGOMADOS, S. A. le sigue a BURISA ENTERPRISES, S. A., contra la sentencia de segunda instancia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día 16 de agosto de 1993. Consta a fojas 114 y 115 de este expediente que el Tribunal Superior, previo examen de las constancias procesales, ordenó remitir el negocio a esta Suprema Corporación de Justicia.

Al ingresar el negocio a la Secretaría de esta Sala y cumplidas las reglas de reparto, se fijó el negocio en lista por el término que señala la ley. Dentro de los tres (3) primeros días la parte opositora presentó su escrito de oposición al recurso (visible de fojas 119 a 125 del expediente) y dentro de los tres (3) días siguientes el recurrente presentó su escrito de réplica (fs.126-133).

Precluido el término de lista, es deber de esta Sala decidir si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

Cabe señalar que la resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso, tanto por su naturaleza como por su cuantía. Recurre en casación la parte que formuló el incidente de rescisión de secuestro dentro del juicio ordinario propuesto por PRODUCTOS ENGOMADOS contra BURISA ENTERPRISES, S. A..

Consta en autos que el recurso fue interpuesto dentro del término legal.

En cuanto a los requisitos ordenados por el artículo 1160 de la citada ley, cabe anotar que la parte casacionista aduce dos (2) causales en el fondo, por lo que procederemos a su estudio de forma separada.

**PRIMERA CAUSAL INVOCADA**

"Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada", está consagrada como tal en la ley.

Vale la pena aclarar que cuando se invoca la causal de aplicación indebida, la misma ocurre cuando se aplica una ley a hechos comprobados en un proceso pero no regulados por ella, es decir, se aplica a hechos distintos para los cuales la norma no fue creada.

En consecuencia, los motivos deben concretar cargos de injuricidad contra la sentencia impugnada, sin exponer recuentos procesales de otras instancias, ya que reiteramos, el recurso de casación es contra la sentencia proferida por un Tribunal Superior. En el caso presente, siendo la causal alegada la de aplicación indebida de la norma sustantiva, debe indicarse en forma diáfana como se aplicó la norma sobre hechos probados y no regulados, por ella, esto es, hechos distintos para los cuales la norma no fue creada. Por otra parte, en los motivos segundo y quinto del escrito de casación, se citan disposiciones legales, lo cual no es compatible con la formalidad del presente negocio, tal como lo preceptúa el artículo 1160 del Código Judicial.

**SEGUNDA CAUSAL INVOCADA**

La segunda causal no está expuesta tal como lo señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil. Por tanto debe decir textualmente "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Observa la Sala que en la mayoría de los motivos expuestos por el casacionista, se tratan de meras alegaciones no propias del recurso extraordinario de casación. El casacionista debe tener presente que cada motivo debe constituir un cargo de la violación de la ley y en cada uno de ellos se debe demostrar dicha violación, ya que los motivos están destinados a justificar la causal invocada.

Se señala en las dos causales estudiadas, el artículo 526 del Código Judicial como norma infringida. En la primera causal se dice que el referido artículo "ha sido infringida por aplicación indebida", mientras tanto en la segunda causal expresa que el "... el tribunal no aplicó la norma". No puede, por un lado decirse que el artículo ha sido aplicado indebidamente y por el otro que no fue aplicado, ya que ello es contradictorio.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por PASTAS NACIONALES, S. A., mediante apoderado judicial, para lo cual le concede el término de cinco (5) días, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CLAUDIO LACAYO ALVAREZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A MIGUEL CASTILLO M. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense **"TRONCOSO, LACAYO & PORRAS"** actuando como apoderados judiciales de **CLAUDIO LACAYO ALVAREZ** dentro del proceso ordinario instaurado contra **MIGUEL CASTILLO MARTÍNEZ**, ha interpuesto recurso de casación contra la Sentencia de 12 de abril de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, lo que ambas aprovecharon presentando sus escritos, como consta de fojas 256 a 257 (opositor) y de fojas 258 a 261 (recurrente).

Por tanto, corresponde a la Sala examinar el recurso presentado en este negocio a fin de comprobar si cumple con las exigencias del artículo 1154 del Código Judicial, que permiten su admisión. Es decir:

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne los requisitos que ordena el artículo 1160 ibídem.; y,

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

En este sentido se puede observar que en este caso se cumple con los dos primeros numerales transcritos anteriormente, pues la resolución recurrida se funda en preceptos que rigen en la República, versa sobre intereses particulares en un proceso cuya cuantía supera los cinco mil balboas; además, se trata de una sentencia dictada en un proceso de conocimiento. Consta a su vez, que el recurso fue propuesto en tiempo.

A pesar de lo anterior, el recurso no ha sido formalizado mediante un escrito que llene a cabalidad los requisitos que establece el artículo 1160 del Código Judicial, que consisten en:

1. Determinación de la causal o las causales que invoque;

2. Motivos que sirven de fundamento a la causal;

3. Citación de las normas de derecho infringidas y explicación de cómo lo han sido.

De allí que la Corte procede a señalar al recurrente los defectos de forma percibidos, a efecto de que realice la corrección correspondiente.

1. La causal invocada no ha sido determinada correctamente. Lo que el recurrente expresa como causal es lo siguiente:

> "Consideramos que habido el error de derecho en la apreciación de la prueba con la consiguiente violación directa de la disposiciones sustantivas contenidas del Código Civil en materia de obligaciones. Este error de derecho indudablemente ha influido en la decisión del proceso, absolviendo a la parte demandada cuando lo que procede es una condena a la parte demandada."

Sobre este apartado del recurso de casación, la jurisprudencia de la Corte ha sentado diversos principios entre los que se encuentran que, las causales deben invocarse en los términos literales, sin desviación alguna, con relación a la forma en que aparecen en la ley, si son de fondo según lo establece el artículo 1154 del Código Judicial; además, que la mención de las causales debe ser expresa, determinada y separada, no pueden invocarse dos o más causales en una sola.

Conforme a lo señalado, es obvio que el recurrente se ha apartado de la técnica del recurso en cuanto al desarrollo de este primer apartado.

En cuanto a los Motivos del recurso de casación, la jurisprudencia y la doctrina han establecido que deben consistir en cargos de injuridicidad contra la sentencia de segunda instancia, sirviendo de apoyo a cada causal.

Cuando se invoca la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba, es necesario precisar los elementos de juicio mal apreciados.

Los motivos en este recurso revelan una serie de defectos. Veamos:

Del primero al cuarto motivos se percibe ausencia del obligante cargo contra el fallo impugnado. En ese sentido ellos expresan lo siguiente:

El primero señala lo que reclama el recurrente en el proceso.

El segundo indica los cargos formulados en una demanda sumaria contra el recurrente en casación.

El tercero describe los elementos probatorios que el recurrente toma como elementos de juicio para fundamentar las pretensiones de su demanda.

El cuarto motivo se refiere a lo que estableció la sentencia de primera instancia.

En los motivos del extraordinario recurso de casación, no es procedente describir los errores, que a juicio del recurrente, fueron cometidos en las sentencia dictada en esa etapa primaria del proceso, pues la pretensión impugnativa debe estar dirigida a la sentencia de segunda instancia.

En el apartado dedicado a la citación y explicación de las normas de derecho infringidas se aprecian las siguientes deficiencias:

En la explicación del concepto de infracción de la primera norma, se incluye una transcripción de parte del libelo de demanda interpuesta en el proceso, lo que no puede incluirse en el recurso de casación.

La explicación de la segunda norma procesal no se refiere a la supuesta infracción cometida por la sentencia de segundo grado.

Igualmente, en la tercera norma relativa a la prueba pericial se incurre en el error anteriormente señalado, además de que se transcribe parte del informe pericial, que es también improcedente en casación.

Al desarrollar el concepto de la primera norma sustantiva citada (art. 974 del Código Civil) se alude a una disposición del Código Judicial (art.1057), lo cual conforme ha sido reiterado en la jurisprudencia de casación no es pertinente realizar pues puede traer confusión en el juzgador al decidir el recurso.

En la segunda norma sustantiva, se comete nuevamente el error de transcribir parte de un dictamen pericial.

Así las cosas, es necesaria la corrección del presente recurso, de acuerdo a los defectos previamente señalados por la Corte, en el término dispuesto por el artículo 1166 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación interpuesto por CLAUDIO LACAYO ALVAREZ contra la Sentencia de 12 de abril de 1993, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

F. ICAZA Y COMPAÑÍA, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A RALPH ANDERSON Y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense GALINDO, ARIAS & LÓPEZ apoderados legales de la sociedad F. ICAZA Y CÍA.,S. A. parte actora en el proceso ordinario que le sigue a RALPH ANDERSON Y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A. anunció y formalizó oportunamente recurso extraordinario de casación, en el fondo, contra la sentencia de siete (7) de julio de mil novecientos noventa y tres (1993), proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia.

Una vez precluido el término de fijación en lista, en donde ninguna de las partes hizo valer su derecho a la oposición de la admisibilidad del recurso y de réplica, respectivamente, es deber de esta Sala de lo Civil prever si debe o no admitir la corrección. Tal misión hace imperativa la confrontación del recurso presentado con las exigencias requeridas por el artículo 1160 del Código Judicial.

La resolución atacada es una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior de Justicia dentro de un proceso ordinario con una cuantía superior a la señalada en el artículo 1148 de la citada legislación, en el cual se ventilan intereses particulares.

Consta en autos que se anunció y formalizó en el tiempo concedido para tal efecto.

En cuanto concierne a los requisitos establecidos u ordenados por el artículo 1160 de la precitada ley, se observa lo siguiente:

1.- La primera causal no ha sido enunciada en los términos que señala el artículo 1154, norma ésta que identifica y denomina las causales de fondo en nuestra legislación.

2.- Los tres motivos expuestos por el casacionista no son congruentes con la causal invocada. Ello es así, debido a que el motivo primero no ilustra a esta Sala en qué consistió la aplicación indebida por parte del tribunal en la sentencia impugnada. Por otra parte en el motivo segundo expresa el casacionista que el tribunal dejó de aplicar las normas que regulan la responsabilidad extracontractual. Es manifiesta la incongruencia de este motivo con la causal alegada.

Esta alta Corporación ha mantenido que la presente causal tiene lugar:

> "... a) cuando la norma jurídica se aplica a un hecho probado pero no regulado por ella;
>
> b) cuando la norma se aplica de tal forma que se llega a consecuencias contrarias a las queridas por la ley;
>
> c) cuando un texto legal perfectamente claro se aplica a presupuestos que lo rechazan perentoriamente." 20 Años de Jurisprudencia de la Sala Primera de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia de Panamá, 1971-1980, p.67.

Lo anterior significa que no se puede dar esta causal cuando la ley se deja de aplicar.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, no pueden tener una aplicación correcta si los motivos adolecen de los defectos señalados. Asimismo, incurre en el error de citar una norma constitucional, que es improcedente en este recurso, ya que la mención de Constitución del artículo 1154 del Código Judicial fue declarada inconstitucional por esta Corporación en sentencia de 26 de julio de 1989.

Los defectos anotados deben ser subsanados.

La segunda causal invocada "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de hecho sobre la existencia de pruebas, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", está consagrada como tal, en la ley.

En cuando a los motivos, en el primero de ellos el casacionista se refiere a pruebas practicadas y que, incluso, el fallo impugnado "menciona y transcribe", resulta a todas luces incongruente con la causal invocada, tal parece que se refiere es al error de derecho en la apreciación de la prueba. Los dos motivos siguientes guardan relación

con lo observado por esta Sala, por lo que debe ser corregido el presente recurso de casación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación promovido por F. ICAZA Y COMPAÑÍA, S. A. mediante apoderado judicial, y para lo cual concede él término de cinco (5) días, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISSA INTERNACIONAL, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA COADYUVANTE INTERPUESTA EN EL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR COSMOS ENTERPRISE, S. A. CONTRA BRAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La sentencia definitiva de segunda instancia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el día 29 de julio de 1993, dentro de la Tercería Coadyuvante interpuesta por ISSA INTERNACIONAL, S. A., dentro del proceso ejecutivo propuesto por COSMOS ENTERPRISE, S. A. contra BRAS, S. A., ha sido impugnada mediante recurso extraordinario de casación interpuesto por el tercerista en este proceso. Los autos fueron remitidos a esta Superioridad a través de la resolución de fecha 9 de septiembre de 1993.

Ingresado el negocio a esta Superioridad y surtido el reparto de rigor, se procedió a su fijación en lista por el término que establece el artículo 1164 del Código Judicial.

La parte opositora presenta su escrito en tiempo oportuno (fs.380-383), mientras que la parte recurrente, dejó vencer el mismo para la réplica. El negocio se encuentra en estado de resolver su admisibilidad y a ello se procede.

El artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, regula lo concerniente a esta etapa y, al efecto, preceptúa:

> "Artículo 1165: Concluido el término de la fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:
>
> 1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellos contra las cuales lo concede la ley.
>
> 2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo.
>
> 3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y;
>
> 4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

Puede apreciarse que el escrito por medio del cual se interpuso el recurso, reúne, de manera general, los requisitos exigidos por el artículo transcrito, pues, además de la mención expresa de una de las causales señaladas por la ley, interponerse oportunamente y dirigirse contra una resolución que admite casación, cumple satisfactoriamente con las exigencias contempladas en el artículo 1160 de la citada legislación.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en la forma, propuesto por ISSA INTERNACIONAL, S. A. mediante apoderado judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ H. HERRERA CRUZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A SAMUEL MARÍN. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **JOSÉ H. HERRERA CRUZ,** anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 7 de septiembre de 1993, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en el proceso ordinario de mayor cuantía que el recurrente en casación le sigue al licenciado **SAMUEL E. MARÍN M.**

Por cumplidos los trámites previos a la etapa de la admisibilidad del recurso de casación establecidos por la ley, el recurso entonces se encuentra en estado de decidir sobre su admisibilidad o no. Veamos:

El escrito de formalización del recurso interpuesto por la parte recurrente, a juicio de la Sala, cumple con requisitos formales exigidos por el artículo 1165 del Código Judicial, esto es, la resolución en este caso objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley; el recurso ha interpuesto en tiempo; el escrito por medio del cual ha sido interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160, y, la causal expresada es de las señaladas por la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RENE ARISTIDES PICOTA CASTILLO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A MARÍA DEL ROCÍO VALLARINO CASTRELLÓN. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Contra la sentencia pronunciada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 31 de mayo de 1993, dentro del proceso de divorcio instaurado por **RENE ARISTIDES PICOTA CASTILLO** contra MARÍA DEL ROCÍO VALLARINO DE PICOTA, el apoderado judicial del demandante ha interpuesto recurso de casación en el fondo.

Al ingresar el negocio en esta Sala, previo reparto de rigor, se fijó en lista por el término que prescribe el artículo 1164 del Código Judicial, con el propósito de que las partes alegaran. Dicha oportunidad ha precluido, habiendo sido aprovechada únicamente por el demandante.

Como se trata de un negocio relativo al estado de familia, se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, el cual en vista No. 21 de 1° de noviembre de 1993, consideró que la Sala debe ordenar la corrección del presente recurso.

Habiéndose dado cumplimiento a las exigencias procesales relativas al recurso de casación, esta Corporación pasa a decidir sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos exigidos en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto del recurso es de aquellas que admite este medio de impugnación, por tratarse de una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior de Justicia, dentro de un proceso de divorcio. En autos consta que el recurso fue interpuesto en tiempo y por persona hábil.

Sin embargo, al adentrarnos en el estudio del escrito de formalización, la Sala hace las siguientes observaciones:

1. En el apartado denominado "Determinación de la causal invocada", el casacionista sólo señala que se trata de un recurso de casación en el fondo, pero no hace referencia a ninguno de los conceptos de la causal de fondo que establece el artículo 1154 del Código Judicial.

2. En la "Determinación de los motivos que sirven de fundamento a la causal", el recurrente cita entonces, dos conceptos de la causal de fondo, a saber: "la aplicación indebida de la norma de derecho" y "error de hecho sobre la existencia de la prueba." La Sala observa que el casacionista ha incurrido en un doble error; en primer lugar, ha confundido la causal con los motivos, y en segundo lugar, ha citado dos causales conjuntamente, lo que resulta contrario a la técnica del recurso de casación.

3. En cuanto a la citación de las normas de derecho infringidas y la explicación de la infracción, se observa que tampoco se cumple con este requisito, ya que en este apartado no hace mención de las normas que se consideran infringidas. El recurrente incluye dos acápites más a los que denomina "Conceptos de la infracción en cuanto al primer motivo (aplicación indebida de la norma de derecho)" y "Concepto de la infracción en cuanto al segundo al segundo motivo (error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba)", que no corresponden a ninguno de los requisitos previstos por la ley para este tipo de recurso y en los cuales se citan las normas de derecho infringidas.

De todo lo anterior se desprende el hecho de que el recurso en estudio es ininteligible, a la luz del artículo 1167 del Código Judicial, ya que al mismo le faltan

los motivos, que constituyen uno de los requisitos indispensables, de acuerdo con el artículo 1160 del citado Código. Ello aunado a todos los defectos formales que ya se han señalado, conducen a concluir que el presente recurso es inadmisible.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por RENE ARISTIDES PICOTA CASTILLO, dentro del juicio de divorcio que le sigue a MARÍA DEL ROCÍO VALLARINO DE PICOTA.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CORAL MINERA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCEPCIONES PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO PROPUESTO POR CORAL MINERA, S. A. CONTRA CHINA UNITED TRADING CORPORATION (PANAMÁ), S. A. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La licenciada **CARMINA CASIS CRESPO**, actuando en nombre y representación de la sociedad **CORAL MINERA, S. A.**, anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 20 de julio de 1993, proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en virtud de la Excepción de Carencia de Título Ejecutivo propuesta dentro del proceso Ejecutivo que **CORAL MINERA, S. A.** le sigue a **CHINA UNITED TRADING CORP., S. A.**

Por cumplidos los trámites previos a la etapa de la admisibilidad de la casación establecidos por la ley, el recurso entonces se encuentra en estado de decidir sobre su admisibilidad o no. Veamos:

El escrito de formalización del recurso interpuesto por la parte recurrente, a juicio de la Sala, cumple con requisitos formales exigidos por el artículo 1165 del Código Judicial. Esto es:

1) La resolución en este caso, objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2) El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3) El escrito por medio del cual ha sido interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160;

4) La causal expresada es de las señaladas por la ley.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la parte recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

VÍCTOR AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala Civil de la Corte mediante sentencia de 11 de noviembre de 1993 ordenó al procurador judicial de **VÍCTOR AGUILAR** la corrección del recurso de casación, que interpuso contra la resolución de 2 de agosto de 1993 dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia en virtud el proceso ordinario que el recurrente en casación le sigue a la **COOPERATIVA DE VIVIENDA DE NUEVO CHORRILLO, R. L.**

El examen del escrito de casación presentado luego de corregido, revela que la corrección se realizó en tiempo oportuno y el escrito cumple con los requisitos señalados en el Artículo 1165 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema , Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación

interpuesto por VÍCTOR AGUILAR contra la Resolución de 2 agosto de 1993 proferida por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JORGE AGUILAR RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado GASPARINO FUENTES, en su condición de apoderado judicial de la parte demandante, ha presentado recurso de casación en contra de la sentencia que dictó el Primer Tribunal Superior de Justicia el 27 de enero de 1993, mediante la cual confirma la sentencia de primera instancia que dictó el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dentro del proceso ordinario que inició JORGE AGUILAR contra la COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. Esa resolución que fue confirmada por el Tribunal Superior dispuso textualmente que: "DECLARA NULO el Contrato de Seguro de Vida Adicionado con Renta por Invalidez Total y Permanente suscrito entre el Dr. JORGE AGUILAR y la COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A., dentro de la Póliza Colectiva de Vida Adicionada con Renta de Invalidez Total y Permanente suscrita entre esta última y la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROFESIONALES, R. L.; por lo que además, también DECLARA INEXISTENTE LA OBLIGACIÓN demandada por el Dr. JORGE AGUILAR, y lo DECLARA CARENTE DEL DERECHO a reclamar dicha obligación; y en consecuencia ABSUELVE a la demandada COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A., de la pretensión que en su contra formulara el DR. JORGE AGUILAR, en la presente demanda ordinaria".

Surtido como ha sido todo el trámite correspondiente debe la Sala adentrarse a resolver el recurso presentado, lo que se hace luego de las consideraciones que se detallan.

El recurso que se presentó contra la sentencia señala como única causal en el fondo la infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la ley, lo que ha influido sustancialmente en la resolución recurrida.

En el primer motivo el recurrente expresa que se omitió aplicar, en la sentencia atacada, normas sustantivas al declarar nulo el contrato de seguro existente sin tomar en cuenta la cláusula contractual establecida en el contrato sobre la indisputabilidad. Según el motivo segundo agrega el recurrente que al negarse a reconocer el derecho del demandante al reclamo de la indemnización, no obstante reconocer que existe la cláusula de indisputabilidad por el período de dos años contenido en la póliza del seguro, el tribunal está desconociendo "la ley del contrato reconocido por nuestra legislación". Observa en el siguiente motivo, que el tribunal no aplicó la norma sustantiva en donde se faculta a las partes para establecer las cláusulas que a bien tengan, siempre que el contrato sea celebrado conforme a la ley. El desconocimiento de la cláusula de indisputabilidad, concluye, contrariando el principio de la ley del contrato, llevó equivocadamente a dictarse el fallo recurrido.

Se indica que se viola el artículo 1050 del Código de Comercio en forma directa por omisión, cuyo tenor es el siguiente:

> "El modo del seguro y la determinación de las condiciones o restricciones del mismo, quedan al arbitrio de las partes".

También se dice que se infringe directamente por omisión el artículo 1071 del Código de Comercio que expresa que "Podrá asimismo ser objeto de seguro mercantil, cualquier otra clase de riesgos o accidentes naturales; y los pactos que se consignen en las pólizas respectivas, deberán cumplirse siempre que sean lícitas y estén conforme con las prescripciones de la presente ley, en lo que le fuere aplicable".

En lo referente al Código Civil da como violentados directamente por omisión los artículos 1106, 1107 y 1109 que rezan así:

> "Art. 1106.- Los contratantes pueden establecer los pactos, cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarios a la ley, a la moral ni al orden público".
>
> "Art. 1107.- La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes".
>
> "Art. 1109.- Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, y desde entonces obligan, no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a todas las consecuencias que, según su naturaleza, sean conforme a la buena fe, al uso y a la ley.
>
> Se exceptúan los actos y contratos enumerados en el artículo 1131, los cuales no se perfeccionan mientras no consten por escrito, con

> especificación completa de las condiciones del acto o contrato y determinación precisa de la cosa que sea objeto de él".

Al hacer uso del término que se le concediera para que alegara en cuanto al fondo del recurso presentado, sostiene el demandante que el sentenciador de segunda instancia no tomó en cuenta que se estaba en presencia de un contrato de seguro colectivo dentro del cual no es pertinente la determinación de si el asegurado padece o no de alguna enfermedad. Insiste que la póliza colectiva, en la cual aparecía como asegurado su representado, contenía una cláusula de indisputabilidad que, según el tribunal ad-quem, no beneficiaba a su patrocinado cuando, por lo contrario, en esa póliza textualmente se expresaba la existencia de ese beneficio en favor del doctor Aguilar.

Los representantes de la empresa aseguradora, por su parte, en su alegato de oposición indican que el DR. JORGE AGUILAR ocultó que padecía desde 1975 la enfermedad degenerativa Miastenia Gravis, por lo que, de ser conocido por la empresa aseguradora, jamás hubiese expedido la cobertura. Ello, al tenor del artículo 1,000 del Código de Comercio, produce la nulidad de la póliza. En su alegación se refiere a que la condición de médico del asegurado determina el ocultamiento doloso de una información vital para la compañía aseguradora.

En cuanto a la cláusula de indisputabilidad expresa que la misma se crea con el objeto de proteger a quienes pactan de buena fe en los contratos de seguro, para evitar que, siempre en ausencia de fraude, el beneficiado pueda recibir, una vez fallecido el asegurado, el monto de la póliza. Señala algunas opiniones de tratadistas en donde se establece que la cláusula de incontestabilidad no puede perjudicar al asegurado por omisiones o reticencias sólo cuando éstas no se produzcan de mala fe.

Para resolver conveniente es partir de algunas consideraciones fácticas debidamente acreditadas en los autos, aceptados en la demanda y su contestación, así como las divergencias que constituyeron en sí la controversia planteada.

El demandante afirma ser socio de la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROFESIONALES, R. L. Expone, que la COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO PROFESIONALES, R. L. suscribió con la COMPAÑÍA GENERAL DE SEGUROS, S. A. un contrato de seguro colectivo, el cual entró a regir a partir del 1° de abril de 1983; como socio de esa Cooperativa de Ahorro y Crédito, R. L. ingresó el demandante como asegurado en enero de 1984. Sostiene que durante la vigencia de la póliza fue incapacitado por la Caja de Seguro Social al padecer de enfermedad que le impide, de manera permanente, desempeñar sus labores como profesional de la medicina. Estos hechos, con excepción de la fecha en que ingresó el doctor AGUILAR como asegurado de la póliza de seguro, fueron aceptados por la demandada. La diferencia en cuanto a la fecha no es de gran relevancia, puesto que el ingreso lo señaló el demandante en enero de 1984 y la demandada en febrero de 1984, cuando aún el Dr. AGUILAR no había sido incapacitado por la Caja de Seguro Social.

Los hechos que no fueron aceptados por la demandada se refieren al reclamo que hiciera el doctor AGUILAR a la compañía aseguradora para que le cubriera el total de la indemnización por incapacidad permanente que, según su entender, debería pagarle conforme a la póliza suscrita, indemnización determinada en CIEN MIL BALBOAS (B/.100,000.00). La aseguradora señaló que declinó el reclamo de la indemnización, en concepto de incapacidad permanente, por cuanto el Dr. JORGE AGUILAR fue incapacitado como producto de enfermedad padecida antes de asegurarse y de la cual nunca informó a la compañía aseguradora. Indica que el asegurado ocultó, al solicitar el seguro, dicha enfermedad, por lo cual con fundamento en la póliza y en la ley, no están obligados a cubrir sus pretensiones. Sobre estos puntos expresó que el DR. AGUILAR, el 17 de enero de 1984, al llenar con su puño y letra la tarjeta de inscripción al seguro colectivo, manifestó que no padecía ninguna enfermedad que pudiera afectar su asegurabilidad. Cuando hizo el reclamo por el beneficio a la incapacidad permanente, los representantes de la compañía aseguradora se enteraron que el Dr. Aguilar padecía, desde hacía más de doce años, de la enfermedad Miastenia Gravis que provocó la incapacidad. El haber ocultado el padecimiento de dicha enfermedad permitió el aseguramiento del demandante, por lo que al tenor del artículo 1,000 del Código de Comercio, ello trae consigo la nulidad del contrato de seguro.

Terminó la demandada alegando "las excepciones de inexistencia de la obligación reclamada y carencia de derecho".

La sentencia dictada por el Primer Tribunal de Justicia, materia de impugnación, se refiere a la llamada cláusula de indisputabilidad o incontestabilidad como el período durante el cual se permite impugnar la validez de la póliza de seguro, el cual se estableció en este caso, en el término de dos años. Posterior a ello, de ocurrir el siniestro, no se perjudica al asegurado para recibir su indemnización porque éste haya omitido alguna información. Hace la salvedad, sin embargo, que la impugnación puede producirse cuando la reserva de ocultamiento o inexactitud de la información se haya hecho de mala fe o incida directamente en el contrato de seguro. Sostiene que en el caso subjúdice, el proceder del asegurado se relaciona directamente con uno de los elementos particulares del contrato de seguro, como lo es el riesgo, de gran trascendencia en esta materia.

Así, al referirse a estos aspectos se expresa en los términos siguientes:

> "En el presente caso, resulta que las pruebas tienen relación directa con el aspecto intencional de la parte actora; es decir, son demostrativas que el asegurado tenía conocimiento de la enfermedad que le aquejaba desde hace años (1962 y diagnosticada en 1975), lo cual negó al momento de firmar la tarjeta de suscripción; cabe la interrogante ¿Es de aplicación forzosa la cláusula de indisputabilidad, dadas las circunstancias anotadas?

> El seguro como todo contrato tiene elementos esenciales para su nacimiento, efectos y extinción, lógicamente condicionados a ciertas características particulares, atendiendo a su especial naturaleza.
>
> En los contratos de seguro existen tres elementos para su configuración, desde el punto de vista práctico, éstos son: elemento personal (asegurador y asegurado); elemento causal (el riesgo); y por último, el elemento real (la prima); todas estas condiciones deben reunirse para su existencia, claro está, en cumplimiento de los requisitos generales de toda contratación a saber: consentimiento, objeto y causa, que inciden en el nacimiento de un contrato (art. 5 del C. Com. en concordancia con el art. 1112 del C. Civil).
>
> Para que todo contrato bilateral (como es el seguro) tenga consecuencias jurídicas, es decir, la adquisición de derechos y deberes recíprocos entre los contratantes, deben atenderse los requisitos esenciales para su nacimiento, por lo que la omisión de uno de ellos deviene en nulidad ab-initio, lo que conlleva que, ninguna de las cláusulas que acordaron las partes contratantes, tenga eficacia jurídica.
>
> Así resulta que en el presente negocio, el acervo probatorio demuestra sin asomo de dudas que el asegurado, como médico de profesión, tenía conocimiento de su enfermedad conocida MIASTENIA GRAVIS y que omitió esa información al suscribir la tarjeta de inscripción del contrato, por lo que hay vicio en el consentimiento, lo que indica que esa contratación es inexistente desde su inicio, por tanto, mal puede aplicarse alguna cláusula de la póliza".

De lo expuesto surge claramente que el tribunal de segunda instancia, al confirmar la sentencia del inferior mantiene el principio que la validez del contrato de seguro debe sujetarse a los requisitos esenciales de todo contrato, entre ellos el consentimiento, lo que, no se dio en este caso por el ocultamiento fraudulento de una información vital en la contratación de seguro. En otras palabras, si bien consideró factible la existencia de la cláusula de indisputabilidad o incontestabilidad, ello no es, aún transcurrido el término allí establecido, saneadora de la omisión de informaciones realizadas de mala fe, ya que de haberlas sabido el asegurador no hubiera consentido el contrato.

Es cierto que el artículo 1050 del Código de Comercio establece que la determinación de las condiciones o restricciones del contrato de seguro quedan al arbitrio de las partes, pero no es menos cierto que, conforme al mandato del artículo 1071 de ese mismo cuerpo de leyes, los pactos que se consignan en las pólizas deberán cumplirse siempre que sean lícitos y conforme con la prescripción de la ley, puesto que de no serlo ocasiona su nulidad, tal como lo preceptúa el artículo 1000 de ese mismo Código de Comercio cuando dictamina "Toda declaración falsa o inexacta de hechos o circunstancias conocidas como tales por el asegurado ... que hubieren podido influir de modo directo en la existencia o condiciones del contrato, traen consigo la nulidad del mismo". Por otro lado, si bien es cierto, tal como lo afirma el recurrente, que la cláusula de incontestabilidad, llamada también de indisputabilidad, puede ser pactada por las partes contratantes sin que ello determine que es contraria a la ley, a la moral o al orden público, cuando la información inexacta es producto de la mala fe, la cláusula no es en sí la nula sino todo el contrato de seguro, tal como lo prevé el citado artículo 1000 del Código de Comercio.

Por otro lado, como sostiene ISAAC HALPERIN, la cláusula de inconstestabilidad emerge con el propósito de evitar la grave sanción que siempre ha existido en beneficio del asegurador por falsas manifestaciones y reticencia, de buena fe, que introducen en el contrato de seguro un elemento de inseguridad para el asegurado. "Según esta cláusula transcurrido cierto plazo, el asegurado no puede alegar la existencia de vicios de su consentimiento, salvo que medie dolo, si éste no es incluido en la renuncia" (**Contrato de Seguro**, Ediciones De Palma, 1964, pág. 145).

El contrato de seguro está sometido, al igual que el resto de los simples contratos mercantiles, a lo que denominamos el principio de buena fe -Uberrimae Fidei-. De aquí que el asegurado tiene el deber de la declaración exacta antes del contrato, deviniendo la nulidad del contrato cuando esa información exacta maliciosamente se oculta, esto es, se lesiona esa exigencia de buena fe.

Ahora bien, el recurrente sostiene que al tenor de la cláusula desconocida por el tribunal en su fallo, se excluye la impugnación de la póliza, luego de estar en vigencia durante dos años a partir de la fecha de emisión, por lo que esa cláusula alcanzaba a proteger a su representado conforme al numeral 6 del endoso número 1 del documento denominado Inscripción/Eligibilidad. Veamos, desde este punto de vista del recurrente, si ello es verdad. A folio 55 del expediente encontramos lo que comprende este documento:

> "1.- Se establece un período de inscripción para todos los socios activos de 90 días los cuales vencen el día 1° de agosto de 1983.
>
> 2.- Los socios antiguos que no estuviesen asegurados en la Póliza anterior y que no padezcan enfermedades pre-existentes o lesiones graves pueden afiliarse al nuevo plan dentro del plazo señalado y para ello deberán llenar la tarjeta de inscripción y hacer una declaración de buena salud.
>
> 3.- Los socios nuevos de la Cooperativa disponen de un plazo de noventa (90) días a partir de su ingreso para inscribirse en el plan llenando la tarjeta correspondiente y haciendo una declaración de buena salud. Vencido ese plazo podrán ingresar en el plan pero haciéndose los exámenes médicos exigidos por la aseguradora, la que hará una evaluación individual de su solicitud.

4.- Aquellos socios que sufren enfermedades o lesiones pre-existentes deben someterse a la prueba de asegurabilidad (a su propio costo) y a la evaluación individual de su caso por parte de la aseguradora, la cual podrá asegurarlo en forma normal, con extra prima o simplemente rechazar el riesgo.

5.- Todos los socios que estaban asegurados en Póliza anterior y que aparecen en el listado del mes de marzo de 1983, quedan asegurados en forma automática en la nueva Póliza y no tendrán que demostrar asegurabilidad, toda vez que se les reconoce la indisputabilidad de la Póliza anterior.

6.- Queda entendido que el privilegio de la indisputabilidad, que ampara a los socios asegurados en la Póliza anterior no aplica para el beneficio de renta por incapacidad total y permanente".

De la lectura de este documento, contrario a la opinión del recurrente, se estableció que los socios antiguos de la Cooperativa a la fecha en que se firmó ese plan de Inscripción/Eligibilidad que no estuvieren inscritos en la póliza, se le daba un período hasta el 1° de agosto de 1983 para inscribirse. Quienes siendo socios antiguos no inscritos y no padecieren enfermedades estaban sujetos a llenar la tarjeta de inscripción y hacer una declaración de buena salud.

Se estableció que para socios nuevos de la Cooperativa dentro de un plazo de noventa días a partir de su ingreso, podrán inscribirse en el plan llenando la tarjeta correspondiente y haciendo una declaración de buena salud. Se indicó que después de esos noventa días podrán ingresar en el plan, pero deben hacerse los exámenes médicos exigidos por la aseguradora, la que hará una evaluación individual de su solicitud.

Para los socios que sufrieren enfermedades deberán someterse a la prueba de asegurabilidad y a la evaluación individual de su caso por parte de la aseguradora.

Se indicó que aquellos socios que aparecían como asegurados en la póliza anterior en el listado del mes de marzo de 1983 gozaban de la cláusula de indisputabilidad contenida en la póliza anterior y quedaban asegurados en forma automática en la nueva póliza.

Por último, en el numeral 6°, se hizo una exclusión en cuanto a la cláusula de indisputabilidad contenida en la póliza anterior indicando que no se aplica para el beneficio de renta por incapacidad total y permanente, lo que en otras palabras significa que el privilegio de indisputabilidad que existía en la póliza anterior se excluía para el beneficio de renta por incapacidad total y permanente.

La apreciación que hace el recurrente en cuanto a la exclusión de la indisputabilidad para el beneficio de renta por incapacidad total y permanente que aparecía en la póliza anterior, se debe entender, en buen español, para asegurados posteriores ya que los anteriores quedaron asegurados en forma automática, de acuerdo a la cláusula de indisputabilidad, como se establece en el numeral 5 del precitado documento Inscripción/Eligibilidad. Entenderse de otra forma, tal cual lo pretende el casacionista, sería contrario a lo estipulado en ese numeral 5. Para entender lo acordado por los contratantes es indispensable mirar en conjunto todo el plan ofrecido en este documento.

De lo anterior se colige que no se ha dado la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por violación directa de la ley de los artículo 1050 y 1071 del Código de Comercio, 1106, 1107 y 1109 del Código Civil.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia recurrida.

Se condena a las obligantes costas a la parte recurrente y en favor de la parte demandada en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DAK EXPORTERS, INC. RECURRE EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN DE PAGO PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO INCOADO POR PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. CONTRA DAK EXPORTERS, INC. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el negocio que contiene la excepción de pago presentada por **DAK EXPORTERS, INC.**, dentro del proceso ejecutivo hipotecario con renuncia de trámites, incoado por PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. contra la sociedad excepcionante, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial profirió sentencia de segunda instancia el 28 de julio de 1993.

Contra dicho acto jurisdiccional anunció y formalizó recurso de casación en la forma, el licenciado René Atencio P., apoderado judicial de la sociedad DAK EXPORTERS, INC.

El Tribunal Superior remitió a esta Corporación el recurso de casación propuesto, el cual fue fijado en lista a fin de que las partes alegaran dentro del término establecido en el artículo 1164 del Código Judicial.

Como se encuentra vencido el término de lista y se han cumplido los trámites procesales correspondientes al recurso, esta Sala procede a decidir sobre la admisibilidad o no del mismo, tomando en cuenta para ello las exigencias contempladas en los artículos 1160 y 1165 del citado Código.

Es innegable que la resolución cuya impugnación se solicita, es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, ya que se trata de un auto de segunda instancia que decide una excepción dentro de un proceso ejecutivo. Por otra parte, la cuantía del negocio es superior al mínimo establecido en el numeral 2 del artículo 1148, e igualmente consta en autos que el recurso se interpuso en tiempo y por persona hábil.

Al adentrarnos en el estudio del tercer requisito que prescribe el artículo 1165, la Sala observa lo siguiente:

Como causal de forma se invoca "Haberse omitido un trámite considerado esencial por la Ley y que causa nulidad del presente Proceso".

En relación al ordinal No. 1 del artículo 1155 del Código Judicial, que contiene la causal invocada por el recurrente, la Sala ha manifestado en repetidas ocasiones que el mismo consta de tres causales distintas, a saber:

a. Por haberse omitido algún trámite o diligencia considerado esencial por la Ley;

b. Por haberse omitido cualquier otro requisito cuya omisión cause nulidad de lo actuado; y,

c. Por haberse anulado mediante la sentencia impugnada un proceso sin que hubiesen concurrido los presupuestos legales.

De lo anterior se concluye que el casacionista ha invocado dos causales en una sola, lo que contradice el criterio mantenido por esta Corporación al respecto, que señala que la mención de la causal debe ser expresa y por tanto, no se puede invocar dos causales juntas.

En vista de que se incurrió en este error al invocar la única causal, el recurso queda sin fundamento. No obstante, es importante señalar también que la parte recurrente cita entre las disposiciones legales infringidas, el artículo 32 de la Constitución Nacional. El Pleno de la Corte Suprema, mediante sentencia de 26 de julio de 1989, declaró inconstitucional la palabra "Constitución", del texto del artículo 1154 del Código Judicial, lo que significa que no pueden citarse normas de la Constitución Nacional, como parte de las disposiciones infringidas dentro de un recurso de casación. Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala concluye que el presente recurso extraordinario de casación no puede ser admitido.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en la forma, interpuesto por el apoderado judicial de la sociedad DAK EXPORTERS, INC.

Las costas se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) SONDA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MILLER, VÁSQUEZ Y ASOCIADOS RECURREN EN CASACIÓN EN LA EXCEPCIÓN POR EXTEMPORANEIDAD PROPUESTA POR LA DEMANDADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO QUE MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS LE SIGUEN AL BANK OF INVESTMENT AND TRADE,INC. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **RICARDO VILLARREAL ARISPE**, actuando en representación de la firma de abogados **"MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS"**, parte ejecutante en el proceso ejecutivo que le sigue al **BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC.**, en ejecución, interpuso recurso de casación en la forma y en el fondo en contra la Sentencia de 7 de octubre de 1992, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia dentro de la excepción propuesta por la parte ejecutada.

Al declarar la Sala de la Corte admisible el recurso de casación interpuesto por el recurrente, el negocio se encuentra en estado de decidir, en primer lugar, la casación en la forma de conformidad con la ley ritual. Veamos:

**ANTECEDENTES**

Los Autos de la presente litis ilustran que los liquidadores del Bank Of Investment And Trade, Inc., dentro del proceso ejecutivo seguido por la firma forense **"MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS"** en contra de dicho Banco en liquidación, interpusieron "Excepción de Extemporaneidad contra el Juicio Ejecutivo".

El Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante sentencia de 26 de abril de 1991 denegó la "Excepción de Extemporaneidad" propuesta por el Bank Of Investment and trade Inc., en liquidación, dentro del referido proceso ejecutivo que le sigue la firma de abogados **"Miller, Vásquez,Arosemena y Asociados".**

La apoderada judicial del banco ejecutado interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de primera instancia; y de esa manera el negocio ingresó al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, a fin de que se surtiera la alzada.

El Tribunal Superior mediante sentencia de 7 de octubre de 1992 "REVOCA el Auto Ejecutivo, dictado el 23 de mayo de 1989, y en su lugar, DECLARA PROBADA la Excepción interpuesta por la parte ejecutada, en consecuencia ORDENA LEVANTAR EL EMBARGO DECRETADO mediante resolución de fecha 25 de mayo de 1989".

Es pues, contra esta última resolución que el apoderado judicial de la parte ejecutante recurre en casación en la forma y en el fondo, razón por la cual la Sala de la Corte procede, en primer lugar, a decidir la casación en la forma. Veamos:

**CASACIÓN EN LA FORMA**

El recurrente invoca como causal única de forma: "... la que tiene lugar según el ordinal 7 del artículo 1155 del Código Judicial, por no estar la sentencia en consonancia con la excepción propuesta por la parte demanda, porque se resolvió sobre punto que no ha sido objeto de la controversia".

**MOTIVOS**

> "PRIMERO: La parte ejecutada, el BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC. en liquidación - al comparecer al proceso ejecutivo que en su contra tenía interpuesto la firma forense, MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS, opuso a la pretensión una forma especial de defensa que denomina excepción de extemporaneidad, para atacar por los medios que da la ley el auto mediante el cual se libró mandamiento de pago, que resulta ser el auto de fecha veintitrés (23) de mayo de 1989, distinguido como No. 92."
>
> SEGUNDO: Con la contestación de la excepción por parte de la ejecutada se definió la controversia y por tanto los puntos que fueran objeto de esta, dentro de los cuales no se comprendía el punto referente a eficacia o ineficacia del recaudo ejecutivo o mérito ejecutivo de los documentos aportados al proceso para que se librara el mandamiento de pago.
>
> TERCERO: El Tribunal a-quo, al resolver en primera instancia, lo hizo mediante la dictación de la sentencia No.61 de fecha veintiséis (26) de abril de 1991, de forma congruente resolviendo sobre los puntos que eran objeto de la controversia teniendo en cuenta la excepción propuesta por el ejecutado, que denegó por considerar que no había sido probada.
>
> CUARTO: El Primer Tribunal Superior, al conocer de la apelación que contra la sentencia dictada en primera instancia ejerció la parte ejecutada, dictó la sentencia de fecha siete (7) de octubre de mil novecientos noventa y dos (1992), resolviendo sobre un punto que no había sido objeto de la controversia, como era eficacia o ineficacia del recaudo ejecutivo, revocando el auto ejecutivo dictado por el juez a-quo del 23 de mayo de 1989, incurriendo así en ultra petita porque al pronunciarse sobre un punto no controvertido, la sentencia que dictó no está en consonancia con la excepción de extemporaneidad que propuso la parte ejecutada. Todo lo que constituye el error de procedimiento que se le imputa a la sentencia impugnada."

De esa manera el impugnante sostiene, que la sentencia acusada viola los artículos 470 y 1709 del Código Judicial toda vez que, a su juicio, la primera de las citadas normas del procedimiento procesal civil establece la regla, que la sentencia debe recaer sobre la cosa, cantidad o hecho disputado, declaración solicitada o punto controvertido, y, en el caso concreto, la controversia recae sobre los hechos en que la parte ejecutada fundamentó su excepción de extemporaneidad y el Tribunal a-quo así lo entendió al decidir la excepción negándola. Pero el "... Primer Tribunal Superior al decidir la apelación ejercida contra esa sentencia entró a decidir sobre el mérito de los documentos acompañados como recaudo ejecutivo, revocando el Auto No.92 de fecha 23 de mayo de 1992, en circunstancias en que sobre la eficacia del recaudo ejecutivo no había controversia porque el auto o mandamiento de pago no fue apelado ni sobre la idoneidad del título se opuso excepción".

Por otra parte, en cuanto a la segunda de las normas del Código Judicial, también citada como infringida, el censor alega que la misma establece la regla procesal que

determina cuáles son los medio de impugnación y de oposición, frente a objeciones que pueden hacerse al título ejecutivo cuando se den los supuestos de falta de idoneidad o inexistencia, señalando en esa dirección el recurso de apelación y la excepción que puede invocase.

De ahí que, a juicio de la impugnación, el Primer Tribunal Superior "... sin que se hubiese excepcionado sobre la idoneidad del título ni se hubiese utilizado el recurso de apelación, contra el auto ejecutivo, al decidir la segunda instancia, lo revocó, violando la norma transcrita de modo directo por omisión al dejarla de aplicar a un supuesto claro que reclamaba su aplicación".

Así las cosas, el examen de los motivos, transcritos anteriormente, tiende a demostrar que: el primero no contiene cargo contra la sentencia impugnada, toda vez que el censor se refiere a la excepción introducida como defensa por la parte ejecutada sin concretar el defecto en que supuestamente ha incurrido el sentenciador, razón por la cual el motivo se rechaza por ineficaz en casación.

El segundo, si bien se advierte que se concreta el cargo que se pretende endilgar al fallo recurrido, sin embargo, el recurrente, en este motivo, sostiene que en la excepción introducida por el ejecutado, no se comprendía el punto referente a eficacia o ineficacia del recaudo ejecutivo o mérito ejecutivo de los documentos aportados al proceso para que se librara el mandamiento de pago. No obstante, el cargo tal como viene formulado en casación guarda relación con lo expresado en el cuarto motivo, por lo que a juicio de la Sala ambos motivos deben examinarse conjuntamente más adelante.

En lo que respecta al motivo tercero, el mismo se concreta a la decisión de primera instancia, sin embargo, el fallo que se impugna en casación es la resolución de segunda instancia dictada por el Tribunal Superior. Por tanto, el motivo se desecha.

Es, pues, en los motivos segundo y cuarto que sirven de fundamento a la causal de forma, en los que se concreta el cargo de " ultra petita" de que se acusa a la sentencia impugnada; ésta es, por haber el sentenciador, según los indicados motivos, resuelto "... sobre un punto que no había sido objeto de la controversia, revocando el auto ejecutivo dictado por el Juez a-quo el 23 de mayo de 1989 ..." De esa manera el impugnante sostiene que la sentencia ha incurrido, así, en "ultra petita" porque al pronunciarse sobre un punto no controvertido, la sentencia que dictó el sentenciador, en ese caso, no está en consonancia con la excepción de extemporaneidad que propuso la parte ejecutada.

Veamos entonces si a la luz de la normativas de los artículos 470 y 1709 del Código de procedimiento civil en cita, le asiste o no razón al impugnante.

**EXAMEN DE LA ACTUACIÓN**

El examen de la actuación procesal, en el caso subjudice, pone de manifiesto que los Liquidadores del Banco ejecutado (en liquidación), por conducto de su apoderada judicial, propuso como defensa la denominada "Excepción de Extemporaneidad" dentro de la ejecución que le sigue la firma forense ejecutante, fundándose en dos hechos: 1. Que "... el juicio ejecutivo y peticiones presentadas por la firma forense Miller, Vásquez, Arosemena y Asociados contra el BANK OF INVESTMENT AND TRADE, INC. EN LIQUIDACIÓN -son extemporáneas debido a que el período para presentación de acreencias contra el Banco venció el 30 de septiembre de 1988, tal cual consta en las publicaciones que de ello se hizo a nivel nacional en el periódico El Matutino con fechas 8, 9 Y 10 DE AGOSTO DE 1988. Dichas publicaciones reposan en el expediente principal del Banco que se mantiene en el Juzgado Séptimo del Circuito de Panamá -Ramo Penal".(Fs. 1)

2. Que la firma forense ejecutante no puede "considerarse bajo ningún aspecto acreedores de BANK OF INVESTMENT AND TRADE, INC. EN LIQUIDACIÓN- debido a que no mantiene ni han mantenido relación con el Banco", habida cuenta que, a juicio de la parte ejecutada, el poder que "... exhibe dicha firma forense como fundamento para la reclamación ..." contra el Banco ejecutado en liquidación, "... no fue otorgado por una persona natural ajena a la administración del Banco cuando este se encontraba ya intervenido por la Comisión Bancaria Nacional, siendo en ese entonces el Interventor la única persona que representaba al Banco y como tal, el único que podía otorgar poderes a nombre del mismo". (Fs.1 y 2)

En ese sentido se advierte:

El Tribunal Ad-Quem, a fojas 50 y 52 de la acusada sentencia, bajo el título "LA EXCEPCIÓN INTERPUESTA Y EL TITULO EJECUTIVO PRESENTADO", basándose en el criterio de que en el punto 2 del escrito de las excepciones de la parte ejecutada se alega "un hecho que impide o extingue la pretensión, conforme a lo dispuesto por el artículo 677 del Código Judicial", por una parte sostiene que el recaudo ejecutivo aportado por el ejecutante en este proceso ejecutivo no es eficaz, ya que se encuentra corroborado por la gestión de la firma forense demandante en este proceso ejecutivo, y contraviene el artículo 85, literal d), del Decreto de Gabinete 238 de 1970, "... tal como se afirma en el informe pericial que aparece a foja 43 a 46 que entre otras cosas sostiene: '... si bien es cierto que la referida firma de abogados recibió el poder para actuar a nombre de la mencionada institución bancaria, cuando ya ésta se encontraba intervenida por la Comisión Bancaria Nacional ...' (fs. 44 del cuaderno principal)".

Por otra parte, el Ad-Quem, en el fallo de la referencia también agrega: "... que las condiciones que deben tener los títulos ejecutivos esto es, 'obligaciones claras y exigibles' a que se refiere el artículo 1638 del Código Judicial, y que, en el presente caso se incorporó como recaudo efectivo la Tarifa de honorarios profesionales aprobada por el Colegio Nacional de Abogados, al igual que el informe pericial en que se establece

como suma líquida B/.20.000.00. dicha experticia expresa también: '... En esta tarifa no aparecen señalados honorarios para este tipo de actuaciones ...'".

De esa manera, el sentenciador de la segunda instancia arribó a la conclusión de "... que el título ejecutivo presentado por la parte demandante no reúne los requisitos que exige la ley procedimental; por tanto, el Auto No.92, de fecha 23 de mayo de 1989, dictado por el Juez Quinto de Circuito Civil, en el que LIBRA MANDAMIENTO DE PAGO POR LA VÍA EJECUTIVA a favor de la firma forense demandante, no se ajusta a derecho, por lo que procede su revocatoria".

El defecto de que se acusa a la sentencia impugnada, en el caso subjudice, por tanto, en resumen lo hace recaer la censura, en la parte resolutiva del fallo impugnado que revoca el auto del a-quo que libra mandamiento de pago por la vía ejecutiva, pues a juicio del impugnante, la sentencia ha incurrido en "ultra petita", como se tiene ante dicho.

**CRITERIO DE LA SALA**

Conviene señalar antes, que la Corte en reiterada jurisprudencia tiene dicho que el no dar nombre técnico a una determinada excepción propuesta por el demandado, como se advierte en el caso subjudice, no es motivo para que sea negada, toda vez que de acuerdo con el último inciso del artículo 679 del Código de Procedimiento civil vigente, el "... no dar nombre técnico a una excepción no es motivo para que se desconozca el hecho que la constituye". Además, la comentada excerta legal se limita a expresar las excepciones mas comunes conforme al procedimiento civil panameño.

Igualmente, de los hechos alegados en el escrito de excepción del Banco Ejecutado se advierte que en el punto 2, ciertamente, como sostiene la sentencia impugnada, se afirma como motivo de la excepción probada que: "Es importante señalar, que además, la firma forense Miller, Vásquez, Arosemena y Asociados, no pueden considerarse bajo ningún aspecto acreedores de BANK OF INVESTMENT AND TRADE, INC. -EN LIQUIDACIÓN - debido a que no mantienen ni han mantenido relación con el Banco".

De igual manera el banco demandado -excepcionante- en el referido punto 2. expresa que: "Pruebas que constatan todo lo anteriormente expuesto se encuentran contenidas en el expediente del Banco que reposa en el Juzgado anteriormente aludido". Es decir, en lo que concierne al apuntado hecho que constituye la excepción propuesta, resulta claro que el ejecutado se funda en las constancias o actuación judicial del expediente contentivo del proceso ejecutivo, lo que es permisible de acuerdo con las normas generales que rigen el procedimiento ejecutivo contemplado en el Código Judicial vigente, aplicable en materia de pruebas a las excepciones según el artículo 684 del Código en cita.

Por todo ello, tiene razón el juzgador de la segunda instancia cuando al examinar el libelo de la excepción propuesta por la parte demandada, sostiene que la excepción tiene asidero, ya que "... en el punto 2 del escrito de excepciones interpuesto por la parte ejecutada se esta alegando un hecho que impide o extingue la pretensión, tal como lo indica el artículo 677 del Código Judicial".

De lo cual resulta que, siendo la prueba de los hechos lo fundamental en cualquiera de las excepciones que el demandado proponga como defensa, no es cierto entonces que la sentencia impugnada, en el caso sometido a la consideración de la Sala de casación, sea incongruente con la excepción propuesta por el banco ejecutado, en virtud de que el artículo 677 del Código Judicial, precisamente, establece que constituyen excepciones los hechos que impiden o extinguen total o parcialmente la pretensión o la modifican.

El fallador en consecuencia, en el caso subjudice, contrario a lo que sostienen los motivos que se examinan, decidió sobre un punto objeto de la controversia, y, por ende, la sentencia impugnada no ha incurrido en el defecto que le endilga el casacionista, esto es en "ultra petita"; pues, precisamente, es a través de las excepciones que el ejecutado puede enervar la eficacia del título que el demandante ha aportado como de recaudo ejecutivo en el procedimiento de excepción, conforme a lo previsto por el artículo 1709 del Código Judicial que dice: "Sin perjuicio del derecho a invocarse como excepción, el ejecutado puede ...".

De lo antes expuestos queda claro entonces, que la sentencia impugnada no ha violado en el concepto directo por omisión los artículos 470 y 1709 del Código Judicial, y, por ende, la causal única de forma invocada por el impugnante no está justificada, razón por la cual la Sala debe adentrarse en el estudio de la casación en el fondo también propuesta por el recurrente.

**CASACIÓN EN EL FONDO**

Se alega como causal de fondo: "la infracción de normas substantiva de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Salta a primera vista que los ocho motivos que sirven de fundamento a la alegada causal, con excepción del primero, ponen de manifiesto que el impugnante, en cada uno de ellos, se refiere a las pruebas allegadas por el ejecutante al proceso ejecutivo, y los cuales, conforme los cargos formulados por la censura, el juzgador de la instancia dejó de atribuirle el valor que dichos elementos de convicción tienen según la ley.

Así, el impugnante sostiene: En el motivo segundo, que a fojas 37 del cuaderno que contiene el proceso ejecutivo a que accede la excepción, aparece copia autenticada del acta de la reunión de la Junta de Accionista del Bank of Investment and Trade Inc.,

celebrada el día 30 de enero de 1963, en la que se resolvió autorizar a **MÁXIMO NICOLETTI**, para que como accionista mayoritario del Banco otorgara poder a la firma forense, MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS, para que iniciara los trámites pertinentes al cierre de operaciones del banco y su liquidación voluntaria.

En el tercero, que a fojas 30 del expediente, la parte actora presentó en el proceso ejecutivo el documento que contiene el poder que **MÁXIMO FERNANDO NICOLETTI**, como consecuencia de lo resuelto por la Junta de Accionista, otorgó a la firma forense ejecutante.

En el cuarto, que a fojas 32 consta el acta que contiene la reunión celebrada el día 4 de marzo de 1988, en la Comisión Bancaria Nacional, en la que intervino el licenciado VICENTE AROSEMENA de la firma forense ejecutante.

En el quinto, que a fojas 34 y 35 del expediente contentivo del proceso ejecutivo, aparecen copia autenticada de sendos escritos dirigidos a la firma forense ejecutante, al interventor del Banco ejecutado y con los que se hace entrega de los estados financieros del banco.

En el sexto, que a fojas 41 y 42 del referido expediente aparecen copias autenticadas de las cartas que con fecha 15 y 24 de marzo de 1988, dirigió el Interceptor del banco al licenciado Vicente Arosemena solicitando información financiera y una documentación sustentatoria.

En el séptimo, que a fojas 43 del expediente que contiene el proceso ejecutivo, aparece el informe pericial que rindieron los peritos JOSÉ DE JESÚS GÓNDOLA MOLINAR y JULIO CESAR DE LEÓN VALLEJOS, abogados ambos, que son el resultado de la diligencia de aseguramiento de pruebas practicado al expediente contentivo del proceso de intervención que se llevó ante la Comisión Bancaria Nacional.

Por último, en el octavo motivo el recurrente expresa su opinión en relación a los cargos formulados en los motivos que anteceden, pero ello no constituye, así, un cargo independiente de los otros.

En el recurso en estudio, por tanto, se acusa a la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia de infringir los artículos 845, 823 y 967 del Código Judicial, y como consecuencia los artículos 85, 92, 106 del Decreto de Gabinete No.238 del 2 de julio de 1970, y el artículo 17 de la ley 9 de 18 de abril de 1984.

Así las cosas, el examen de los aludidos motivos que sirven de fundamento a la causal alegada en el caso subjudice, a juicio de la Sala de la Corte demuestra lo siguiente:

El cargo de error de derecho que se endilga en cada uno de los referidos motivos se reduce, como se sostiene en el motivo primero, a que el Tribunal Ad-Quem declaró probada la excepción propuesta por la parte ejecutada, al "incurrir en error de apreciación al no atribuirle el valor que tienen, según la ley, por su fecha y contenido, a las
pruebas documentales y al dictamen rendido por los peritos a consecuencia de las diligencias de aseguramiento de prueba, practicada por la parte ejecutante".

En ese sentido, se alega que el A-quem al valorar las pruebas que constan a fojas 37, 30, 32, 34 y 35, 41 y 42, y 43 del expediente contentivo del proceso ejecutivo incoado contra el banco ejecutado, dejó de atribuirles a dichos elementos probatorios el valor que tienen conforme a la ley. De ahí, según el censor, la violación de las normas adjetivas y sustantivas anteriormente mencionadas.

**CRITERIO DE LA SALA**

El estudio de los autos del proceso ejecutivo sometido a la consideración de la Sala de Casación Civil de la Corte, pone de manifiesto que la firma de abogados ejecutante en la demanda ejecutiva propuesta contra el BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC. (en liquidación), pide lo siguiente: "... que nos sean cubiertos los honorarios correspondiente a nuestra actuación dentro de intervención del BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC., decretado por la Comisión Bancaria Nacional y por nuestra actuación, dentro del mencionado proceso de liquidación forzosa".

En ese sentido adujo las pruebas documentales y periciales que constan en las antes citadas fojas del cuaderno principal, contentivo del proceso ejecutivo, enviado como antecedente por el Juzgado Quinto de Circuito del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

No obstante, la inteligencia de la sentencia impugnada pone de manifiesto que el sentenciador de la segunda instancia, en relación con los indicados elementos probatorios allegados al proceso ejecutivo por la firma de abogados ejecutante, centró la cuestión de la controversia, como se tiene antes señalado, en el punto 2. del escrito de la excepción propuesta por el banco ejecutado, al sostener que la parte ejecutada alegaba "... un hecho que impide o extingue la pretensión, tal como lo indica el artículo 677 del Código Judicial" (fs.51); para de esa manera arribar a la conclusión de que el título ejecutivo aportado como recaudo ejecutivo, en el caso subjudice "... no reúne los requisitos que exige la ley procedimental ..." (fs.53).

Por ello, el Tribunal Ad-quem en el análisis probatorio expresa que: "Del examen y confrontación de las constancias probatorias (cuaderno principal) se advierte fácilmente que BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC., fue intervenido por la Comisión Bancaria Nacional el 5 de febrero de 1988, mediante resolución No.4-88 de la misma fecha, y el poder que

aparece a fojas 30 del proceso ejecutivo interpuesto por MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS contra BANK OF INVESTMENT AND TRADE, INC., tiene fecha 3 de marzo de 1988, o sea, fue otorgado después de la intervención del Banco y en contravención del artículo 85 literal d. del decreto de Gabinete 238 de 1970 ..."

En efecto, el poder que consta a fojas 30 del cuaderno principal del referido proceso ejecutivo, tiene fecha posterior a la intervención del Banco ejecutado; lo que indica que el Ad-quem apreció correctamente la prueba consistente en el poder que se dice fue otorgado a la firma forense ejecutante; esto es, en tratándose de la intervención de un Banco por parte de la Comisión Bancaria Nacional y las facultades que la ley le confiere.

Por otra parte, del análisis probatorio del sentenciador colegiado también se advierte, que, en cuanto a las gestiones profesionales que dice la firma forense ejecutante realizó para el banco intervenido por la Comisión Bancaria Nacional, el informe pericial que consta a fojas 43 a 46 claramente establece, que la referida firma de abogados recibió el poder para actuar a nombre de la institución bancaria ejecutada, cuando ésta se encontraba intervenida por la mencionada entidad del Estado. Además, en lo referente a la prueba de la tarifa de abogados aportada por la parte ejecutante, igualmente se expresa, en el referido informe pericial, que en dicha tarifa no aparecen señalados honorarios para "esos tipos de actuaciones".

No existe entonces la menor duda que, en el caso que ocupa a la Sala de casación civil, el Tribunal Ad-Quem al analizar y conjugar en conjunto las aludidas pruebas señaladas por el impugnante con los diversos elementos probatorios también aportados al proceso ejecutivo, arribó a la correcta conclusión final de que el título ejecutivo, presentado por la parte ejecutante como recaudo ejecutivo, no reúne los requisito que exige la ley procedimental. Así se infiere de los párrafos de la acusada sentencia que a continuación se transcribe:

> "Quedan claros dos aspectos: el primero, que la gestión profesional de la Firma Forense MILLER, VÁSQUEZ, AROSEMENA Y ASOCIADOS en la que apoderaba a la institución bancaria fue posterior a la resolución No.4-88, por la cual la Comisión Bancaria Nacional intervino el BANK OF INVESTMENT AND TRADE INC., y segundo, que el título ejecutivo presentado por la parte demandante no reúne los requisitos que exige la ley procedimental; ..." (fs.52).

De lo cual se colige entonces que la sentencia impugnada no ha violado en el concepto señalado por el censor, los artículos 845, 823 y 967 del Código Judicial, los cuales determinan la eficacia o el valor de la prueba documental, los dos primeros; y, el último, la regla aplicable cuando se trata de la valoración del dictamen pericial en el proceso. Pues, del análisis probatorio de la impugnada sentencia, claramente se advierte que el Tribunal Superior basándose en el principio de la apreciación racional de la prueba, adoptado por el Código de Procedimiento Civil vigente, evaluó en conjunto los distintos elementos probatorios allegados al proceso ejecutivo, para obtener de todos ellos el resultado final a que alude la sentencia impugnada.

Es decir, lo expuesto, expresado en otros términos, significa que, si bien la sentencia impugnada no hace mención de algunas de las pruebas documentales a que aluden los motivos, por estimarlas el sentenciador irrelevantes para el caso concreto, ello no quiere decir que el juzgador apreció erróneamente dichos elementos probatorios, así como tampoco el informe pericial indicado en el motivo "Séptimo"; toda vez que, visto el caudal probatorio producido por la parte ejecutante lo cierto es que el título ejecutivo, base del procedimiento ejecutivo, carece de eficacia en el caso de la acción ejecutiva instaurada por le firma de abogados ejecutante contra el banco intervenido. Pues, en tratándose de la ejecución forzosa el "... derecho del ciudadano a obtener de los órganos del Estado la forma especial de tutela jurídica que constituye la ejecución forzada en su favor (acción ejecutiva), no nace sino para quien está provisto anteriormente de una declaración de certeza (dotada de determinados requisitos sustanciales y formales, siendo esencial, entre éstos últimos, la escritura) de aquella concreta voluntad de la ley que quiere hacer ejecutar ..." (Piero Calamandrei, El Procedimiento Monitorio, Traducción de Santiago Sentis Melendo, Ediciones Jurídicas Euro-América, Chile 1970, Buenos Aires, pág.19)

Queda claro entonces, por lo antes expuesto, que al no prosperar los cargos de error de derecho formulados por la impugnación, la acusada sentencia no ha infringido las normas substantivas de derecho invocadas en el recurso, y por ende la causal única de fondo no está justificada.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 7 de octubre de 1992 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ELÍAS CASTILLERO DÍAZ RECURRE EN CASACIÓN EN EL JUICIO ORDINARIO DECLARATIVO QUE LE SIGUE A RUBÉN DARÍO CASTILLERO CASAS. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Raúl A. Núñez Cárdenas, apoderado judicial del señor **ELÍAS CASTILLERO DÍAZ**, presentó en tiempo recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 29 de enero de 1993, proferida por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, dentro del juicio ordinario declarativo que le sigue a RUBÉN DARÍO CASTILLERO CASAS.

Encontrándose el mencionado negocio en estado de resolver en el fondo, los representantes judiciales de ambas partes, licenciados Raúl A. Núñez Cárdenas e Hipólito Manuel Consuegra Palma, han presentado escrito de desistimiento del recurso de casación y transacción del proceso. El escrito en cuestión fue presentado personalmente por los citados apoderados judiciales, ante el Juez Municipal del Distrito de Los Santos, Primer Suplente y su secretaria, quienes dan fe del mismo, con fecha de 29 de octubre de 1993.

Antes de resolver, la Sala hace las siguientes consideraciones:

La transacción es un medio extraordinario de terminación del proceso, regulado en nuestros Códigos Judicial y Civil, que está constituido por elementos esenciales para su validez. La doctrina dominante reconoce tres requisitos que deben concurrir necesariamente para que la transacción pueda considerarse válida, a saber:

1. La existencia de una controversia o proceso pendiente;

2. Que las partes al celebrar la transacción tengan por objeto ponerle fin a la controversia existente entre ellas; y,

3. Que las partes se hagan concesiones recíprocas.

Como requisito de validez tendríamos la aprobación por parte del juez de la transacción.

Después de un análisis detallado del presente caso, la Sala concluye que se han cumplido con todos los requisitos necesarios para la transacción. También se observa que ambos apoderados tienen facultad expresa para transigir, tal y como consta a fojas 8 y 20 del expediente. Por último, es preciso señalar que el artículo 1068 del Código Judicial, autoriza a las partes a transigir en cualquier etapa del proceso, inclusive durante la tramitación del recurso de casación, siempre y cuando se cumplan las condiciones establecidas en los artículos 1500 y siguientes del Código Civil. Consecuentemente, la Sala no encuentra impedimento alguno para aprobar la presente transacción realizada dentro del proceso ordinario declarativo, incoado por ELÍAS CASTILLERO DÍAZ contra RUBÉN DARÍO CASTILLERO CASAS.

En cuanto a la solicitud de desistimiento que se encuentra incluida en el escrito de transacción, cabe señalar que el artículo 1073 del Código Judicial permite a la persona que haya interpuesto un recurso, desistir expresa o tácitamente del mismo. Se observa que el apoderado de la parte recurrente, señala expresamente que desiste del recurso extraordinario de casación que había presentado y al haberse constatado que posee facultad para hacerlo, esta Corporación estima que es del caso admitir el desistimiento solicitado por el casacionista.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, APRUEBA LA TRANSACCIÓN celebrada dentro del juicio ordinario declarativo propuesto por ELÍAS CASTILLERO DÍAZ contra RUBÉN DARÍO CASTILLERO CASAS, y ADMITE EL DESISTIMIENTO del recurso de casación, interpuesto por la parte demandante.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LIDIS ARGELIS LASSO LASSO RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE DEPÓSITO PRESENTADO POR JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO INCOADO POR LIDIS ARGELIS LASSO LASSO CONTRA BALBINO ULLOA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de la Corte mediante resolución de 24 de mayo de 1993 ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el licenciado ALFREDO A. SÁNCHEZ en contra del auto de 21 de enero de 1993, dictado por el Primer Tribunal Superior de Justicia en el Incidente de Rescisión de Depósito promovido por el incidentista licenciado JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO en la acción de secuestro decretada dentro del proceso ordinario que **LIDIS ARGELIS LASSO LASSO** le sigue a **BALBINO ULLOA.**

Por cumplidas las correcciones ordenadas la Corte declaró admisible el recurso de casación corregido, y concedió luego a las partes el término de ley para que alegaran por

escrito en cuanto al fondo, término que aprovecharon ambas partes como consta en los escritos que corren desde fojas 274 a 278.

El negocio se encuentra, en consecuencia, en estado de decidir sobre el fondo del recurso y a ello se procede previas las consideraciones siguientes:

**BREVE RESEÑA DE LOS ANTECEDENTES DEL CASO**

Los autos que sirven de antecedentes al recurso de casación de que conoce la Sala de la Corte dan cuenta que el licenciado José de la Cruz Herrera, en su condición de depositario primitivo designado en el secuestro decretado sobre la Finca No.5984, inscrita al tomo 188, folio 472, Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, interpuso incidente de rescisión de depósito, a fin de que se "RESCINDA el depósito practicado, mediante diligencia, el día diecinueve (19) de junio de mil novecientos noventa y uno (1991), por el Juzgado Municipal del Distrito de Chepo, en cumplimiento del Despacho No. 5 del dieciocho (18) de junio del mismo año, librado por el señor Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del secuestro que se decretó y que accede al proceso ordinario propuesto por LIDIS ARGELIS LASSO LASSO contra BALBINO ULLOA, por ser un depósito posterior".

El Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, mediante auto No.176 del 11 de octubre de 1991, que corre a fojas 106 a 182, "DECLARA PROBADO el incidente de rescisión de secuestro promovido por JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO contra LIDIS ARGELIS LASSO LASSO; y como consecuencia de ello LEVANTA el secuestro decretado por este Tribunal en resolución de 18 de junio de 1991, auto No. 577, a favor de LIDIS ARGELIS LASSO LASSO contra BALBINO ULLOA, sobre la cuotaparte de la finca No. 5984, inscrita al tomo 188, folio 472, sección de la propiedad Provincia de Panamá, perteneciente a BALBINO ULLOA".

El apoderado judicial de la señora LIDIS ARGELIS LASSO LASSO, contra el aludido auto dictado por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, interpuso recurso de apelación, ingresando el negocio incidental de esa manera al Primer Tribunal Superior de Justicia, para conocer de la alzada.

Así las cosas, el Primer Tribunal Superior de Justicia mediante auto de 21 de enero de 1993 que consta a fojas 225 a 232, "REFORMA el Auto No. 1036, proferido por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá para que en su parte resolutiva lea así: DECLARA PROBADO el Incidente de Rescisión de Depósito promovido por JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA y, en consecuencia, deja sin efecto el depósito verificado sobre la cuota parte de la Finca No.5984, inscrita al tomo 188, folio 472, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, depósito practicado por el Juzgado Municipal del Distrito de Chepo, mediante diligencia del día 19 de junio de 1991 (sic) y en cumplimiento del Despacho No. 5 del 18 de julio de 1991, librado por el Juez Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el secuestro que se decretó dentro del Proceso Ordinario propuesto por LIDIS ARGELIS LASSO LASSO contra BALBINO ULLOA".

**RESOLUCIÓN RECURRIDA EN CASACIÓN**

Es pues, contra esa última resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que el licenciado ALFREDO A.SÁNCHEZ, apoderado judicial de la parte secuestrante en el incidente de rescisión de depósito propuesto por el licenciado JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO, que recurre en casación conforme consta en el escrito del recurso corregido admitido por la Corte, que aparece a fojas 263 a 266.

**LA CAUSAL ÚNICA INVOCADA Y LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN**

La causal única invocada por el recurrente la hace consistir en "la infracción de normas sustantivas, por error de derecho en la apreciación de la prueba ...". La cual según la censura ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

El impugnante fundamenta la invocada causal de error de derecho en tres motivos que consisten:

> "PRIMERO: El auto recurrido le otorga mérito probatorio a la copia autenticada de la diligencia el (sic) 13 de junio de 1991, por el Juzgado Municipal de Chepo (fs.7, 8, 9) por ser de fecha anterior, al Depósito practicado el 18 de junio de 1991, por el mismo Juzgado de Chepo (fs.16 y 17) y por ello consideró el tribunal que se comprueba la existencia de un depósito, sobre la cuota parte de la finca 5984, de propiedad de BALBINO ULLOA. Pero tal valoración probatorio, surge del error del tribunal Superior, de dar por probado un hecho no acreditado en esa diligencia, ni en otra prueba aportada al proceso.
>
> SEGUNDO: El Tribunal Superior a pesar de reconocer que las deficiencias de que adolece la diligencia de 13 de junio de 1991 (fs.7,8,9), consistentes en la falta de individualización adecuada de la parte de la finca afectada por la medida cautelar, como es su ubicación, medidas y linderos, son ciertas, lo que impide de hecho y lógicamente precisar que se trata de la misma parcela de terreno la que fue secuestrada en ambos casos, declara probado el incidente de rescisión de depósito en base a una errónea valoración de la copia autenticada de la diligencia mencionada.
>
> TERCERO: El auto impugnado infringió la ley al no darle valor probatorio que corresponde a la diligencia de depósito de fecha 19 de junio de 1991 que describe e individualiza el bien objeto de la medida cautelar, con sus linderos y medidas, claramente y con precisión contrario a la diligencia de

> 13 de junio de 1991 que no identifica adecuadamente el bien secuestrado por lo que no puede establecerse la existencia de una supuesta identidad entre ambos bienes para que proceda la rescisión de depósito decretada, toda vez que, no se puede precisar que el bien depositado según diligencia de 13 de junio de 1991 sea el mismo depositado en la acción de secuestro interpuesta por Lidis Lasso sobre la cuota parte de la finca No.5984 de propiedad de Balbino Ulloa."

De esa manera el recurrente acusa al auto de la referencia de violar en forma directa el inciso primero del artículo 823 del Código Judicial, y como consecuencia de ello, infringir de manera directa por omisión los artículos 1478 y 1479 del Código Civil.

**EXAMEN DE LA CAUSAL Y DE LOS MOTIVOS**

De los tres motivos que sirven de fundamento a la causal única de fondo invocada por la impugnación, en el recurso extraordinario en estudio, se colige que el error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba de que se acusa a la resolución recurrida, en síntesis, consiste en haber el Primer Tribunal Superior de Justicia valorado erróneamente la prueba documental que aparece a fojas 7, 8 y 9 del incidente de rescisión de depósito, que consiste en la "DILIGENCIA DE AVALÚO, INVENTARIO Y DEPOSITO" practicada el 13 de junio de 1991 por el Juzgado Municipal del Distrito de Chepo, sobre la finca No.5984, inscrita al tomo 188, folio 472 de la Sección de la Propiedad de la Provincia de Panamá, en el secuestro librado por el Juez de Circuito Tercero del Circuito de lo Civil de Panamá a petición de la Sucesión Intestada de LEONARDO LASSO en contra de los señores LIDIS ARGELIS LASSO LASSO, DARSHAN SINGH y BALBINO ULLOA.

El indicado error probatorio se produce, a juicio del impugnante, porque el Tribunal Ad-Quem dio por probado un hecho no acreditado en la mencionada diligencia, ni en otra prueba aportada al proceso, diligencia que sirvió de base a dicho Tribunal Superior para declarar probado el incidente de rescisión de depósito promovido por JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA, en su condición de depositario primitivo del inmueble secuestrado.

Por ello, como se tiene visto en los motivos formulados que sirven de fundamento a la causal única de fondo invocada, el impugnante sostiene que el Tribunal Superior del auto acusado al valorar el mérito de la prueba, en este caso, violó el inciso primero del artículo 823 del Código Judicial, que textualmente dice: "Los documento públicos hacen fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellos haga el servidor público que los expidió." (...); basándose en que el sentenciador "... dio por acreditada la existencia de un supuesto depósito de la cuota parte de la finca No.5984 perteneciente al Sr. Balbino Ulloa, cuando de la diligencia en mención, erróneamente valorada no se puede establecer con claridad su identidad de manera tal que se pueda considerar en forma concluyente y clara que la finca depositada según diligencia de deposito de 19 de junio de 1991 perteneciente al Sr. Ulloa proindiviso, sea la misma a que se refiere la deficiente e imprecisa diligencia de depósito practicada con motivo de la medida cautelar decretada dentro del Proceso Ordinario propuesto por la Sucesión de Leonardo Lasso contra Lidis Argelis Lasso Lasso, Darshan Singh y Balbino Ulloa".

Veamos entonces, si el cargo, como viene formulado en la casación que ocupa a la Sala de la Corte, prospera:

**CRITERIO DE LA CORTE**

La inteligencia del impugnado auto demuestra que el sentenciador colegiado, en el caso subjúdice, ciertamente, como señala la defensa técnica de la parte incidentista en el alegato de oposición al recurso, al valorar la eficacia de la prueba presentada por el incidentista aplicó el artículo 549 del Código Judicial, habida cuenta que a su juicio es la norma del ordenamiento procesal civil la que exige expresamente un determinado medio de prueba, en tratándose de la rescisión de depósito de una cosa sobre la que se ha decretado secuestro.

Así en el caso en estudio, ciertamente, es la propia ley procesal la que señala y limita las únicas pruebas que tienen eficacia probatoria para acreditar determinado hecho, como ocurre con lo que disponen a ese efecto procesal las normativas contempladas en los numerales 1 y 2 del artículo del Código Judicial en comento, referentes a la prueba documental requerida para que se rescinda el depósito de una cosa, por existir sobre el bien secuestrado otro depósito de fecha anterior.

En efecto, salta a primera vista que el Tribunal Superior en el análisis probatorio sobre los hechos expuestos en el incidente de rescisión de depósito promovido por el depositario José De la Cruz Herrera Gallardo, en el auto acusado sostiene:

> "El numeral 1o. del artículo 549 del Código Judicial dispone que se rescindiera el depósito de una cosa, con la sola audiencia del secuestrante, si al tribunal que decretó el secuestro se le presenta copia autentica de la diligencia de depósito de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito; al pie de dicha copia debe aparecer una certificación autorizada por el respectivo Juez y su Secretario, con expresión de la fecha en que conste que el depósito a que la diligencia se refiere existe aún.
>
> El depósito cuya rescisión se solicitó fue verificado el 19 de junio de 1991, y su rescisión se pidió en virtud de que se había verificado un depósito anterior el día 13 de junio de 1991. El incidentista acreditó tal situación al aportar copia autenticada de la Diligencia de Depósito del 13 de junio de 1993, con la certificación autorizada por el Juez y el Secretario respectivos, con expresión de la fecha en que conste que el

depósito a que la diligencia se refiere estaba vigente, cumpliendo así con lo establecido en el numeral 1o. del artículo 549 del Código Judicial." (fs.228 y 229).

Por otra parte, el Ad-Quem en cuanto al mérito probatorio de la diligencia en comento, igualmente, en el auto de la referencia, correctamente expresa que "... respecto al señalamiento del apelante de que la diligencia de depósito original no describió la ubicación, ni los linderos de la parcela secuestrada, si bien tal afirmación parece ser cierta, en nada se desvirtúa el hecho de que el depósito verificado el 13 de junio de 1991 es anterior al depósito verificado el 18 de junio de 1991, por tanto tal alegación carece de relevancia en este Incidente".

De lo expuesto resulta evidente, entonces, que, en el caso en estudio, el juzgador de la instancia superior con acierto jurídico procesal centró la cuestión que se debate en el hecho de que sobre la finca No.5984 se practicaron dos diligencias de depósitos, en virtud de los secuestros decretados sobre dicho bien, o sean: la una el 13 de junio de 1991, y la otra el 18 de junio de 1991, lo que motivó al depositario primitivo solicitar la rescisión del último depósito decretado en el proceso en que se verificó dicho depósito, alegando ser el primero de fecha anterior.

De esa manera el incidentista, efectivamente, acompañó al escrito de rescisión de depósito solicitado, copia auténtica de la diligencia que corre a fojas 7,8, 9 y 9 vuelta, en la que consta: a) Que el depósito practicado en el proceso ordinario propuesto por la Sucesión Intestada de Leonardo Lasso en contra de Lidis Argelis Lasso Lasso, Darshan Singh y Balbino Ulloa sobre la Finca No. 5984, es de fecha anterior al decretado en el proceso en que se verificó el depósito de 19 de junio de 1991 sobre el mismo bien, y b) Que al pie de dicha copia aparece una certificación autorizada por el respectivo Juez y su Secretario en la que consta que el depósito a que la diligencia se refiere existe aún. Todo lo cual conforme a los supuestos contemplados en la norma del Código Judicial aplicada por el Tribunal Ad-quem para basar su convicción en el incidente de la referencia.

No obstante lo expuesto anterior, cabe señalar que, en los motivos que la Sala se encuentra obligada a examinar en conjunto por referirse a un sólo cargo, el error de derecho de que se acusa al auto impugnado en casación, el censor lo hace consistir en que, a su juicio, el Tribunal Superior al valorar erróneamente la prueba consistente en copia auténtica de la diligencia de depósito de 13 de junio de 1991, violó de manera directa el artículo 823 del Código Judicial, y como consecuencia los artículos 1478 y 1479 del Código Civil, fundándose, como se tiene antedicho, en el argumento de que el juzgador "... dio por probado un hecho no acreditado en esa diligencia, ni otra prueba aportada al proceso".

El precitado artículo del Código Judicial, si bien es cierto que al referirse a la eficacia probatoria de los documentos públicos en general, establece que hacen fe de su otorgamiento, de su fecha, y de las certificaciones que en ellos haga el servidor que los expidió. no menos lo es que, en el caso concreto, la infracción de dicha norma por si sola no es suficiente para que prospere el cargo de error de derecho acusable en casación.

Lo expuesto es así, porque está visto que en el Código de Procedimiento Civil vigente existe la norma que exige y determina la prueba de que precisamente hay que valerse, para que el juzgador, como lo hizo en el caso que ocupa a la Sala de Casación Civil, pueda rescindir el depósito de una cosa cuando se hayan practicado depósitos en fechas distintas sobre el bien secuestrado como ocurre en la situación planteada en el auto impugnado.

Así las cosas, resumiendo, a juicio de la Sala de la Corte resulta claro, entonces, que el Tribunal Superior del auto acusado valoró correctamente la prueba exigida por la ley, para justificar o acreditar el hecho alegado por el depositario primitivo en el incidente de rescisión de depósito promovido dentro del proceso ordinario seguido por LIDIS ARGELIS LASSO LASSO contra BALBINO ULLOA; y, en consecuencia, el auto acusado no infringe el artículo 823 del Código Judicial, y con mayor razón los artículos 1478 y 1479 del Código Civil, citados por el impugnante como infringidos.

La causal única de error de derecho, por tanto, no está justificada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA el Auto de 21 de enero de 1993 dictada por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en el Incidente de Rescisión de Depósito introducido por JOSÉ DE LA CRUZ HERRERA GALLARDO dentro del proceso ordinario propuesto por LIDIS ARGELIS LASSO LASSO en contra de BALBINO ULLOA.

Las costas de casación a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/.100.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MUEBLERÍA LA GARANTÍA DE CHITRÉ, S. A., RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (ACCIÓN PREVIA DE SECUESTRO) QUE LE SIGUE JESÚS GARCÍA VILLAVERDE. MAGISTRADO PONENTE:

RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el presente negocio que contiene el proceso ordinario de mayor cuantía promovido por JESÚS GARCÍA VILLAVERDE contra MUEBLERÍA LA GARANTÍA DE CHITRÉ, S. A., la representación judicial de la parte demandada anunció y formalizó recurso de casación, en el fondo, contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial el 25 de junio de 1993. El Tribunal Superior remitió el expediente a esta superioridad mediante auto de 21 de septiembre de 1993.

Como ha vencido el término de fijación en lista, el cual no fue aprovechado por ninguna de las partes, se pasa a resolver sobre la admisibilidad del recurso presentado, conforme a lo que postula el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, cuyo texto expresa que:

> "Concluido el término de fijación en lista, la Corte decidirá si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:
>
> 1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;
>
> 2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;
>
> 3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 160, y
>
> 4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley."

Es innegable que la resolución cuya impugnación se impetra es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, al tratarse de una sentencia de segunda instancia proferida por un Tribunal Superior dentro de un proceso ordinario sobre intereses particulares con cuantía superior a la señalada en el artículo 1148 del Código Judicial.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó oportunamente.

En cuanto a la exigencia del numeral 3 del artículo 1165 precitado, esto es, si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160, observa la Sala que el casacionista invoca la causal de fondo, "Infracción de las normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, lo cual ha influido de modo sustancial en lo dispositivo del fallo", que está contemplada en la ley.

Sin embargo, en lo referente a los cinco (5) motivos expuestos nos encontramos con una situación que conlleva a la inadmisibilidad del recurso, ya que entre la causal y los motivos no existe concordancia; por el contrario, las imputaciones a la sentencia sobre incompetencia del tribunal, nada tienen que ver con el error de derecho en la apreciación de la prueba, causal alegada por el recurrente.

El casacionista manifiesta en el primer motivo que el Tribunal Superior no valora correctamente las pruebas documentales allegadas a los autos que determinan la falta de competencia del tribunal. Reitera en el motivo segundo que se han valorado indebidamente la prueba documental lo que "ha pretermitido flagrantemente las reglas del debido proceso al accederse a declaraciones que no son competencia del Juez del conocimiento".

En el motivo tercero afirma que se invade "... competencia reservada por la ley a otros entes de administración de justicia.".

El numeral 2 del artículo 1155 del Código Judicial establece que el recurso de casación en la forma tiene lugar cuando la resolución es dictada por un tribunal incompetente. La causal alegada de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba es una causal de fondo contemplada en el artículo 1154 ibidem.

De lo anterior se desprende, sin esfuerzo alguno, que el casacionista ha confundido totalmente estas causales lo que hace ininteligible el recurso. No se trata del defecto de forma al cual se refiere el artículo 1166 del Código Judicial, que permitiría la corrección del mismo, sino defectos que imposibilita el estudio de la causal cuando se pretende error en la valoración de la prueba con la subsiguiente declaración de incompetencia del tribunal, cuestión ésta última que no ha sido materia del proceso, ni ha sido alegada por la parte recurrente.

En virtud de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado por MUEBLERÍA LA GARANTÍA DE CHITRÉ, S. A. en contra de la resolución del 25 de junio de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial dentro del juicio hipotecario que le sigue JESÚS GARCÍA VILLAVERDE.

Se condena en costas a la parte recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANGÉLICA EDA ESPINO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE MATRIMONIO DE HECHO POST-MORTEM PROPUESTO POR PORFIRIA BARTUANO, HABIDO CON FABIO AROSEMENA MOLINA (FALLECIDO). MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JULIO A. EFFIO T., en su condición de apoderado judicial de la Sra. ANGÉLICA EDA ESPINO, quien actúa en representación de sus menores hijos ANGÉLICA AMÉRICA AROSEMENA ESPINO y FABIO ADOLFO AROSEMENA ESPINO, recurre en casación, en el fondo, contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 25 de junio de 1993, la cual CONFIRMA la sentencia dictada por el Juez Primero del Primer Circuito Judicial de Panamá el 8 de junio de 1992. Ingresado el negocio a la Corte, fue fijado en lista por el término señalado en el artículo 1164 del Código Judicial. Vencido dicho término sin que fuere aprovechado por las partes interesadas y dada la naturaleza del negocio se le corrió traslado al Procurador General de la Nación, de conformidad con el artículo 1172 de la referida legislación, cuya vista consta de fojas 151 a 154 del expediente, en la cual solicita la corrección del recurso.

La Sala entra a decidir la admisibilidad del recurso interpuesto, en base a lo que establecen los artículos 1160, 1165 y 1166 del Código Judicial de Procedimiento Civil.

Pese a que al presente escrito reúne los requisitos contemplados en los numerales 1 y 2 del artículo 1165, esto es, que la resolución objeto del recurso es una sentencia de segunda instancia, proferida por un Tribunal Superior en materia de familia y el cual se interpuso oportunamente.

Observa la Sala que el escrito no cumple con los requisitos que exige el artículo 1160 de la citada excerta legal, en cuanto a su formalización.

El casacionista incluye un epígrafe que titula "SÍNTESIS DEL PROCESO Y SUS HECHOS" no pertinente en este caso. Se incorporan recuentos procesales no propios ni permitidos en el recurso extraordinario de casación.

La causal expresada "Infracción de normas sustantivas de derecho en el concepto de error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba; la cual ha influido sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia", está consagrada como tal en la ley.

Respecto a los cinco (5) motivos expuestos por el casacionista, la mayoría de ellos no muestran claramente en qué consistió el error por parte del juzgador en la apreciación de las pruebas. Aun más, en el motivo tercero expresa que "en la sentencia no se le da valor probatorio a las pruebas documentales ...", lo cual indica que se está refiriendo a otra causal probatoria, es decir, la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba.

Por último, en el motivo cuarto reproduce consideraciones en que se basó el tribunal al fundamentar la sentencia, lo que no es propio de este recurso.

Los motivos son los hechos en que se va a fundamentar la causal. Ya desde 1957 la Corte dijo:

> "En efecto, si como lo tiene establecido la Corte en perfecta armonía con la doctrina de la casación, ésta es una demanda contra el fallo para lograr la estricta observancia de la ley, en la cual los motivos son los hechos en que se apoya la causal invocada, los cuales deben estudiarse por separado al momento de dictar sentencia, entonces no se da cumplimiento a este requisito cuando, en vez de esos motivos, lo que el recurrente presenta son alegaciones suyas, más o menos extensas, porque entonces no hay motivos y su estudio por separado resulta, por ende, imposible. Esas argumentaciones no encajan en la demanda de casación, de acuerdo con la técnica de ésta. Su lugar es otro muy distinto. En la sustentación del recurso es donde tienen cabida esas alegaciones."

En cuanto a las normas citadas como infringidas es conveniente recordar a quien acude a la Sala de Casación, que primero deben citarse las normas infringidas sobre la apreciación de la prueba y posteriormente las normas sustantivas que como consecuencia de esa errónea apreciación se ha violado.

Los defectos anotados deben ser subsanados.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por ANGÉLICA EDA ESPINO mediante apoderado judicial, para lo cual concede el término de cinco (5) días, conforme lo pauta el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PASTAS NACIONALES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE RESCISIÓN DE SECUESTRO EN LA SOLICITUD DE SECUESTRO PROMOVIDA POR PRODUCTOS ENGOMADOS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA BURISA ENTERPRISES, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de resolución de fecha dos (2) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), ordenó la corrección del recurso de casación , en el fondo, propuesto por PASTAS NACIONALES, S. A., dentro del proceso ordinario que PRODUCTOS ENGOMADOS, S. A. le sigue a BURISA ENTERPRISES, S. A., y concedió al casacionista el término de cinco (5) días a fin de subsanar los defectos de que adolece el escrito de formalización del recurso.

La parte recurrente aprovechó el término concedido, tal como consta de fojas 142 a 148 de este expediente, motivo por el cual pasa la Sala a pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso presentado, previas las consideraciones siguientes:

1.- La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito de formalización reúne, de manera general, todos los requisitos ordenados por el artículo 1160; y

4.- Las causales invocadas, cuales son: "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución impugnada", e "Infracción de normas sustantivas de derecho por el concepto de violación directa de la norma de derecho, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida". están contempladas como tales en el artículo 1154 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema de Justicia, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recuso de casación en el fondo, propuesto por PASTAS NACIONALES, S. A., mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INVERSIONES RIAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE INVERSIONES ARAVAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado LEONARDO PINEDA PALMA, en calidad de apoderado judicial de INVERSIONES RIAMA, S. A. presentó recurso de casación en contra de la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, el 3 de septiembre de 1993, por medio del cual NO APRUEBA la sentencia N°33 de 24 de marzo de 1993 proferida por el Juzgado Tercero de Circuito Judicial de Panamá dentro del proceso ordinario propuesto por INVERSIONES RIAMA, S. A. contra INVERSIONES ARAVAL, S. A.

Remitido el expediente a esta Corporación de Justicia, previo reparto de rigor, se fijó el negocio en lista por el término que establece el artículo 1164 del Código Judicial. Precluido dicho término el que fue aprovechado únicamente por el casacionista, es tarea de la Sala decidir si se debe admitir o no, tomando en cuenta para ello lo prescrito en los artículos 1160, 1165 y 1166 de la citada legislación.

Es incuestionable que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, por tratarse de una sentencia de segunda instancia, proferida por un Tribunal Superior de Justicia, en un proceso ordinario en que se ventilan intereses entre particulares, con una cuantía superior a la establecida por la ley. Consta en autos que el recurso se interpuso en tiempo.

1. Causal invocada: "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" está consagrada como tal en la ley.

2. Motivos que sirven de fundamento a la causal: Leídos detenidamente los motivos que fundamentan la causal probatoria, es conveniente hacer de conocimiento de la parte recurrente que cuando se trata de la causal de infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, es forzoso que en los motivos se señale la prueba o las pruebas, debidamente individualizadas e identificadas, respecto de los cuales los juicios de valoración del juzgador fueron erróneamente apreciadas.

El primer motivo no contiene cargos de injuricidad contra la sentencia cuya impugnación se impetra. Por otra parte, transcribe parte del contenido de una nota, lo cual no es propio del recurso extraordinario de casación.

El segundo motivo carece de objetividad y esta redactado como un alegato. Le reiteramos al casacionista que es requisito sine quanon en el presente recurso extraordinario, que los motivos se dirijan, en este caso, directamente sobre el error de derecho en la apreciación de la prueba por parte del juzgador.

El tercer motivo observa la Sala que también está redactado en forma de alegato y no ilustra claramente al tribunal en qué consistió el error por parte de la sentencia recurrida.

El motivo sexto hace una repetición del motivo segundo en cuanto a la nota del 23 de junio de 1993 y reitera lo expresado por los testigos, situación que no es admisible en la formalización de este recurso.

Por último, los motivos octavo y noveno no contienen cargos de violación a la ley por parte del fallo impugnado.

En cuanto a las disposiciones infringidas y la explicación de dicha infracción, el casacionista ha incurrido en el error de enumerar todas las disposiciones infringidas y la explicación de tal infracción de cada una de ellas, lo hace por separado. La técnica de este recurso nos indica que después de cada norma supuestamente infringida debe explicarse, en qué consistió la violación de dicha norma. Por otra parte, cuando se invoca esta causal, debe citarse, en primer lugar, las disposiciones relativas al valor de las pruebas, y luego las normas sustantivas violadas como consecuencia de ese error.

Los errores aquí anotados, deben ser subsanados.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación, en el fondo, propuesto por INVERSIONES RIAMA, S. A. mediante apoderado judicial, para lo cual le concede el término de cinco (5) días de conformidad con lo establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

FLORENCIO SERRANO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE RODABER, S. A. CELSO SERRANO Y SATURNINO CASTILLO. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario propuesto por FLORENCIO SERRANO contra RODABER, S. A., CELSO SERRANO Y SATURNINO CASTILLO, el Licenciado FERNANDO FABIÁN GUTIÉRREZ PIMENTEL apoderado legal de la parte actora, anunció y formalizó en tiempo oportuno recurso extraordinario de casación, en el fondo, la sentencia del 17 de junio de 1993, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, el cual CONFIRMA en todas sus partes el auto 1002 del 22 de noviembre de 1991 del Juzgado Primero del Circuito de Chiriquí.

Mediante auto fechado el 23 de octubre de 1993, el aludido Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, remitió a esta alta Corporación de Justicia el negocio, como puede apreciarse a fojas 85 y 86 de este expediente.

Una vez ingresado a la Corte y previo reparto de rigor, fue fijada en lista este negocio por el término de seis (6) días, para que dentro de los tres (3) primeros la parte opositora al recurso alegará sobre la admisibilidad y dentro de los tres (3) días siguientes, el recurrente replicara, período que no fue aprovechado por ninguna de las partes. Precluido dicho término, compete a la Sala pronunciarse sobre la admisibilidad del recurso, tomando en consideración para ello las exigencias contenidas en los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

La resolución objeto de este recurso, es de aquella contra las cuales lo concede la ley, ya que se trata de una sentencia de segunda instancia, dictada por un Tribunal Superior de Justicia, dentro de un proceso ordinario con una cuantía superior a los Cinco Mil Balboas (5,000.00), en la cual se ventilan intereses de particulares.

El escrito de formalización reúne de manera general, los requisitos exigidos por el artículo 1160 de la citada legislación y, la causal invocada, cual es "Infracción de normas sustantivas de derecho, por error de hecho en la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la Resolución recurrida", está enunciada en los términos que señala el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil.

Por las razones expuestas la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando Justicia en nombre de la República, y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo propuesto por FLORENCIO SERRANO mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUAN JOSE CONCEPCIÓN RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ESPECIAL -EXCEPCIÓN DE DOLO Y FALSEDAD DE LA OBLIGACIÓN QUE SE DEMANDA, NULIDAD DEL ACTO Y FALTA DE IDONEIDAD DEL DOCUMENTO PRESENTADA COMO TITULO EJECUTIVO QUE LE SIGUE A JOSE ISABEL CONCEPCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DIDACIO IBARRA SÁNCHEZ, apoderado especial del señor JUAN JOSE CONCEPCIÓN MARTÍNEZ ha presentado recurso de casación, en el fondo, en contra de la resolución de fecha 30 de julio de 1993, dictado por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

Transcurrido el término de la lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del mismo, sin que hayan hecho uso de ello, al tenor de lo dispuesto por el artículo 1165 del Código Judicial, procede la Sala a decidir si concurren los requisitos indispensables para su admisión.

Se trata de una sentencia dictada por un Tribunal Superior de segunda instancia, en un proceso ejecutivo en el cual se ventilan intereses entre particulares, con una cuantía que excede los CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00). La resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley.

El anuncio del recurso se formuló oportunamente y se formalizó dentro del término de los diez (10) días, tal como lo exige el artículo 1159 del Código Judicial.

Se observa que la causal invocada está contemplada en el artículo 1154 del Código Judicial. Por otro lado, la causal está debidamente motivada y se han mencionado las disposiciones legales infringidas y la explicación de cómo se presenta la violación de la misma, dando cumplimiento a lo exigido por el artículo 1160 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación en el fondo, propuesto por JUAN JOSE CONCEPCIÓN, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO Y ELSA E. TORRES DE GONZÁLEZ RECURREN EN CASACIÓN EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA PROMOVIDO CONTRA JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: DR. CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Los señores **CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO** y **ELSA E. TORRES DE GONZÁLEZ**, han interpuesto el presente recurso de casación dirigido contra la sentencia proferida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, el 25 de noviembre de 1992, dentro del proceso de prescripción adquisitiva de dominio, incoado por los mencionados señores en contra de **JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ.**

Este recurso fue admitido mediante resolución de 26 de febrero de 1993. Procede entonces la Sala a resolver el fondo del mismo, adelantando las siguientes consideraciones.

ANTECEDENTES

Este proceso se inició con la demanda presentada por CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO y ELSA E. TORRES DE GONZÁLEZ, en contra de JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, con el objeto de que se declarara que la parte demandante había adquirido por medio de la figura de la prescripción adquisitiva de dominio, la finca No. 313, inscrita al Tomo 33, Folio 362, de la Sección de la Reforma Agraria de la Provincia de Veraguas, propiedad del demandado. Esta demanda se fundamentó en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que el señor JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ es propietario de la Finca 313, inscrita al Folio 362, Tomo 33 de la Sección de la Reforma Agraria, del Registro Público, provincia de Veraguas, cuyos datos descriptivos, superficie, linderos y ubicación ya hemos señalado con anterioridad en el libelo de la presente demanda.
>
> SEGUNDO: Que mis poderdantes desde principios de enero de 1971, han estado ocupando la Finca señalada en el hecho anterior; ocupación que han ejercido en forma pacífica, pública, de buena fe, e ininterrumpida, por lo tanto tienen más de 15 años de ejercer la ocupación en la forma señalada.
>
> TERCERO: Que dentro de la mencionada Finca mis poderdantes tienen cultivos, construcciones y han ejecutado obras que evidencian que la ocupación que ejercen la han efectuado durante un período prolongado de tiempo.
>
> CUARTO: Que mis poderdantes ocupan la mencionada Finca en su totalidad, y no han sido objeto de reclamación ante autoridad alguna de parte del propietario de dicho terreno" (fs. 3).

El señor JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ contestó la demanda, negando los hechos segundo, tercero y cuarto.

Durante el período probatorio, ambas partes presentaron pruebas testimoniales, documentales y periciales. Es preciso señalar que surgieron dudas durante el proceso, en relación con la vivienda que habitan los demandantes, cuya ubicación se presumía en el terreno de la Finca No. 313. Sin embargo, la parte demandada presentó una certificación del Registro Público donde se hacía constar que la misma se encontraba localizada en la Finca No. 814 de propiedad de ELSA ELENA TORRES DE GONZÁLEZ, y no en la Finca No. 313, en litis. Para tratar de determinar este hecho el Juez Primero del Circuito de Veraguas, quien conoció del presente negocio, dictó auto de mejor proveer el 24 de agosto de 1988.

De acuerdo con el informe pericial rendido por los peritos designados por el Juez para realizar la inspección judicial, con el fin de aclarar la ubicación de la casa en cuestión, éstos señalaron que, "hay o existe un traslape de 86.44 metros",entre la finca No. 313 y la No. 814, y en el mismo se observa "la construcción residencial de Carmelo González y Elena Torres de González".

Después de aclarar este punto y habiéndose surtido el procedimiento correspondiente a la primera instancia, el Juez Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo de lo Civil, consideró que se había probado la figura de la prescripción adquisitiva, en relación a una parte de la Finca No. 313, y en consecuencia, declaró lo siguiente:

> "Que los señores CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO, varón, panameño, mayor de edad, casado en la actual vigencia, cedulado No. 9-46-146 y ELSA ELENA TORRES DE GONZÁLEZ, mujer, panameña, casada, mayor de edad, cedulada No. 9-99-2454, han prescrito parte de la Finca No. 313, inscrita al Folio 362, del Tomo 33 de la Sección de Reforma Agraria, de la Provincia de Veraguas de propiedad del señor JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, la cual comprende desde el vértice uno (1) del lado Este, hasta la cerca hacia el sur, conforme se observa en el plano a folio 72 en autos. Ordena al Registro Público inscribir la porción de tierra que prescriben los señores CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO Y ELSA ELENA TORRES DE GONZÁLEZ, que para estos efectos la parte actora tendrá que confeccionar los planos correspondientes, a fin de determinar el área, quedando el resto de la finca No. 313 con las mismas medidas y linderos, con excepción del lado Este la cual se verá afectada por esta prescripción. Así mismo se ordena dejar sin efecto el Oficio No. 47 de 19 de enero de 1988, enviado al Registro Público para que esta prescripción surta los efectos deseados, para lo cual remítase copia de esta sentencia a dicha Institución.
>
> Se tiene como valor la (SIC) porción prescrita la suma de Cinco Mil Balboas (B/.5.000.00)" (fs. 121).

No conformes con esta decisión, los apoderados judiciales de ambas partes presentaron recursos de apelación, los cuales fueron debidamente sustentados. Antes de resolver, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dictó un auto de mejor proveer el 20 de abril de 1990, con el fin de aclarar ciertos puntos que consideró oscuros.

En el citado auto, se solicitó lo siguiente:

1. A la Dirección de Reforma Agraria de Veraguas, fotocopia autenticada del plano que describe el terreno adjudicado a CARMELO GONZÁLEZ, mediante resolución DG 9-1776 de 23 de octubre de 1972.

2. Certificación al Registro de la Propiedad donde conste que la Finca No. 814 fue traspasada a ELSA TORRES DE GONZÁLEZ, y si la misma corresponde a la finca adquirida por CARMELO GONZÁLEZ mediante resolución DG 9-1776 de 23 de octubre de 1972.

3. Teniendo en cuenta los planos de las Fincas 313 y 814, efectuar replanteo de las mismas, a fin de determinar si efectivamente existe traslape entre ellas, y el área que comprende.

Para realizar estas diligencias se comisionó al Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil.

La Reforma Agraria no pudo encontrar el plano solicitado, ya que el mismo se había extraviado. En vista de esta situación, enviaron plano confeccionado para los efectos, con base en los datos originales que existían en el microfilm.

En relación con la certificación expedida por el Registro Público, en ella se hizo constar que la Finca 814 fue traspasada por CARMELO GONZÁLEZ a ELSA TORRES DE GONZÁLEZ.

Por último, el informe rendido por los peritos en relación con el replanteo de las Fincas, determinó lo siguiente:

> "a-) Que no existe Traslape Alguno entre la Finca 814, Tomo Folio (SIC), Propiedad de Carmelo González y la Finca 313, Tomo 33, Folio 362, Propiedad de José Agustín Castillo R.
>
> b-) Que dentro de la Finca 313, Tomo 33, Folio 362, Propiedad de José Agustín Castillo, se encuentra "Una Casa" propiedad de Carmelo González, la cual está cercada con alambre ciclón (SIC) con base de bloque-Concreto." (fs.173)

Finalmente, el 30 de diciembre de 1991, el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial ordenó la práctica de una prueba pericial consistente en determinar las medidas lineales y sus respectivos rumbos, de la Finca No. 313, y levantar un plano con las especificaciones pedidas, en el cual se basó el Tribunal Superior y que consta a fojas 234, para determinar en forma precisa, el globo de terreno que se otorgó en prescripción.

El 25 de noviembre de 1992, el mismo Tribunal dictó sentencia de fondo en este proceso, en cuya parte resolutiva se declaró lo siguiente:

> "REFORMA la sentencia No. 3 de 16 de febrero de 1989 dictada por el Juez Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Civil y DECLARA que los señores CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO varón, mayor de edad, panameño, casado en la actual vigencia, profesor de Enseñanza Secundaria, con residencia en Vía Panamericana, ciudad de Santiago, y con cédula de identidad personal Número 9-46-146, ELSA ELENA TORRES DE GONZÁLEZ mujer, panameña, mayor de edad, casada, con cédula de identidad personal No.9-99-2454, residente de esta ciudad de Santiago, empleada pública, han prescrito un globo de terreno con área de 7,154.18 m2 que forma parte de la finca No.313, inscrita al folio 362, tomo 33 de la Sección de Reforma Agraria de la Provincia de Veraguas de propiedad de JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, localizado en la Provincia de Veraguas, Distrito de Santiago Corregimiento de la Peña con los siguientes linderos, distancias y rumbos: del vértice 1 al 2 del plano visible a fojas 234 hay una distancia de 86.99 mts y rumbo de s 68° 25'E, al lado sur-este colinda con la carretera interamericana; del vértice 2 al vértice 3 y con una distancia de 72 m. y rumbo s 21°30W, lado sur oeste, colinda con el señor CARMELO GONZÁLEZ; del vértice 3 al vértice 4 con una distancia de 90.30mts. con un rumbo N 80° 53'W, lado noroeste, colinda con CARMELO GONZÁLEZ y del vértice 4 al vértice 1 con una distancia de 91.50 mts con un rumbo N 22° 15 E, lado noreste colinda con el resto de la finca 313, tomo 33, folio 362 de propiedad de JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ y la CONFIRMA en todo lo demás." (fs.245 y 246).

Es en contra de esta decisión que la parte demandante ha presentado recurso de casación en el fondo.

## CONTENIDO DEL RECURSO DE CASACIÓN

El recurso de casación en análisis sólo invoca una causal de fondo que es "Infracción de las normas sustantivas de Derecho por concepto de Error de Derecho en la apreciación de la prueba que ha influido en lo dispositivo de la sentencia recurrida."

El casacionista utiliza seis motivos como fundamento de la causal; sin embargo, sólo cuatro de ellos le hacen cargos de injuricidad a la sentencia, a saber:

1. El documento en el que consta la hipoteca de la casa fue valorado incorrectamente, ya que el ad-quem consideró que el mismo demostraba la ignorancia del propietario de los perímetros de la Finca 313. (fs. 109 a 111)

2. El plano en el cual el Tribunal fundamentó su decisión no es un documento público ni representa la finca en litis. (fs. 234)

3. El Tribunal Superior no valoró en su justo valor el contenido de las declaraciones de los testigos de los demandantes, visibles a fojas 48 a 51, 52 a 55 y 56 a 61, de los señores Ladislao Almanza Zamorano, Leonidas Almanza Zamorano y Clemente Caballero Almanza, respectivamente.

4. El dictamen pericial que aparece a fojas 65 a 69 no fue valorado correctamente, ya que se ignoró su contenido al señalar que los demandantes no han introducido mejoras en la parte de la finca que no se les otorgó.

Las disposiciones que se consideran infringidas son los artículos 770, 1464, 904, 906, 908 y 967 del Código Judicial y los artículos 415, 423,1679, 1680 y 1696 del Código Civil.

CRITERIO DE LA SALA

El primer motivo que alega el recurrente se refiere al documento en que aparece la Escritura Pública No. 500 de 16 de agosto de 1977, otorgada por la Notaría del Circuito de Veraguas, por medio de la cual la Caja de Ahorros concede préstamo hipotecario a la señora ELSA ELENA TORRES DE GONZÁLEZ, por la suma de veinticinco mil quinientos balboas ( B/.25,500.00). Dicha hipoteca se constituyó sobre la Finca No. 814 y sobre todas las mejoras presentes y futuras que existieran sobre ella, o sea que recayó sobre la vivienda habitada por los demandantes, la cual fue construida realmente sobre la Finca No. 313, como se comprobó en autos.

El Tribunal Superior señaló en la sentencia impugnada, que el citado documento "demuestra que el demandado desconocía el perímetro de su finca pues de lo contrario no hubiese permitido ni la posesión de los demandantes ni esa construcción sobre la misma, presentando acción legal para hacer valer su derecho de propietario, hecho que no efectuó". (fs.244-245). El casacionista señala que de esta afirmación se desprende el hecho de que el ad- quem valoró incorrectamente la prueba en cuestión.

Antes de analizar el cargo que se ha mencionado, es preciso destacar que, para que la causal de valoración de prueba sea procedente, es preciso que el error que se le imputa a la apreciación de un medio probatorio, haya influido sustancialmente en la parte resolutiva de la sentencia atacada. La Sala considera que el documento que está analizando, no fue determinante para el Tribunal Superior en cuanto a la superficie de la Finca 313 que declaró prescrita a favor de la parte demandante. Resultó conclusiva en cuanto a la demostración de la ocupación en el área donde se encuentra la vivienda; sin embargo, de la valoración de este documento no se comprueba la ejecución de actos u obras sobre el resto de la finca en litis, que permitan demostrar la posesión y consecuentemente, que les otorgue el derecho de dominio a través de la figura de la prescripción adquisitiva, de la totalidad de la finca en disputa. Al carecer de fundamento el presente motivo, el mismo se descarta.

El segundo cargo señala que la sentencia de segunda instancia "infringió normas del Código Judicial en cuanto a la apreciación de la prueba documental, al sostener que la sentencia de Primera Instancia "merece ser confirmada" al fundarse para decidir en el plano aportado por el demandado, pues el mismo no es un Documento Público, ni representa la finca en disputa". (fs.269)

La Sala observa que el recurrente ataca los planos visibles a fojas 72 y a fojas 234. El segundo documento fue levantado en virtud del auto para mejor proveer que dictó el Tribunal Superior el 30 de diciembre de 1991, para poder determinar el área, las medidas lineales y sus respectivos rumbos, del globo de terreno de la finca 313, prescrito a favor de los demandantes, tomando como base el plano que aparece a fojas 72, que fue el que sirvió de soporte al a-quo al momento de dictar la sentencia de primera instancia.

Este plano fue confeccionado en virtud de la facultad que se le otorga al juzgador de segunda instancia en el artículo 1270 del Código Judicial, de ordenar la práctica de pruebas antes de resolver, cuando encuentre puntos oscuros o dudosos que se deben esclarecer.

El casacionista alega que los planos en cuestión, no constituyen un documento público ni son representativos de la finca en disputa. El hecho de que los planos no tengan la categoría de documentos públicos, no significa que la valoración que el Tribunal realizó de los mismos, haya sido incorrecta. El plano a fojas 72 fue presentado por el demandado, y si bien es cierto no constituye la copia de un plano refrendado por la Reforma Agraria, en ningún momento se cuestionó su autenticidad. El segundo plano como ya se ha señalado, fue realizado para aclarar la superficie de la finca 313 que se prescribió a favor de los señores CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO y ELSA TORRES DE GONZÁLEZ, y únicamente representa este globo de terreno y no la totalidad de la finca en litis.

No encuentra error esta corporación en la valoración realizada por el Tribunal Superior en cuanto a este punto se refiere, ni asidero para el cargo que se le endilga a la sentencia impugnada, por lo que se desestima el motivo en estudio.

El tercer cargo se refiere a la valoración que realizó el ad-quem de las declaraciones rendidas por los señores LADISLAO ALMANZA ZAMORANO, LEONIDAS ALMANZA ZAMORANO y CLEMENTE CABALLERO ALMANZA, que constan a fojas 48 a 51, 52 a 55 y 56 a 61.

Antes de entrar a analizar este cargo, es preciso señalar que el recurrente no especifica en qué consiste el error de apreciación que se le imputa a la sentencia en relación con estos testimonios. Se limita a mencionar que no se ponderaron en su "justo valor", pero eso no es suficiente para determinar la violación.

Esta Sala ha manifestado en reiteradas ocasiones, que el recurso extraordinario de casación debe especificar en forma clara, los cargos imputados a la sentencia de segunda instancia, de manera que los mismos conduzcan de manera precisa a la violación de la ley que se le imputa.

No obstante, después de revisar cuidadosamente las citadas declaraciones, esta Corporación no encuentra error alguno en la valoración que sobre ellas realizó el ad-quem. En vista de ello, pasa a analizar el siguiente cargo.

El último cargo en contra de la sentencia de segunda instancia, se refiere al informe rendido por los peritos de la inspección ocular que consta a fojas 65 a 69 del expediente. Según el recurrente, el ad-quem ignoró el contenido del mismo "al sostener que los demandantes no han introducido mejoras sustanciales que demuestren los años de ocupación en parte de la finca en disputa." (fs. 269).

El criterio esbozado por el Tribunal Superior en relación con este punto indica que en ese área de la finca 313, únicamente se observa pasto faragua que constituye vegetación natural y, en consecuencia, no se encuentran mejoras sustanciales que permitan demostrar la ocupación en ella, alegada por los demandantes.

Efectivamente, a fojas 68 del acta de la diligencia de inspección ocular a que se refiere el recurrente, consta que los peritos al ser repreguntados por el apoderado judicial del señor JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ, en relación a si el pasto natural que se observa en la parte de la finca 313 que no se otorgó a los demandantes en prescripción, es determinante de la ocupación de una finca, éstos respondieron negativamente.

La Sala, después de un minucioso análisis del informe de peritos en cuestión, llega a la conclusión de que la valoración que del mismo realizó el Tribunal Superior, fue correcta. En ese informe no existen elementos suficientes que puedan demostrar que los demandantes han ocupado ese sector de la finca por el tiempo que han señalado, por lo que no puede ser declarada la prescripción adquisitiva de dominio a favor de ellos sobre ese globo de terreno de la finca 313.

Al no prosperar este último cargo, se descarta la causal probatoria de fondo invocada y con ella, el presente recurso de casación.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de 25 de noviembre de 1992, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, incoado por CARMELO GONZÁLEZ CASTILLO y ELSA E. TORRES DE GONZÁLEZ en contra de JOSÉ AGUSTÍN CASTILLO RODRÍGUEZ.

Las costas en casación se fijan en doscientos balboas (B/.200.00).

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria de la Sala de lo Civil.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

F. ICAZA Y COMPAÑÍA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO (SECUESTRO) QUE LE SIGUE A RALPH ANDERSON Y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La resolución de esta Sala de Casación Civil fechada el seis (6) de diciembre de mil novecientos noventa y tres (1993), ordenó la corrección del recurso extraordinario de casación, en el fondo, propuesto por la sociedad F. ICAZA Y CÍA., S. A. dentro del proceso ordinario que le sigue a RALPH ANDERSON y COMERCIALIZADORA MÉDICA INTERNACIONAL, S. A.

La parte casacionista aprovechó el término legal concedido y presentó escrito de corrección del recurso, visible de fojas 293 a 299 de este negocio. Precisa ahora, que esta Sala determine la admisibilidad del recurso presentado, realizando para ello un examen del escrito en que se formaliza, el cual evidenciará si el mismo cumple con las condiciones formales que establece el artículo 1160, así como también las circunstancias que preceptúa el artículo 1165, ambos del Código de Procedimiento Civil.

En este orden de ideas, cabe indicar que:

1. Las causales de fondo, cuales son: "Infracción de normas sustantivas de derecho por aplicación indebida de la norma de derecho, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida" e "Infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de pruebas, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida", están consagradas como tales en el artículo 1154 del Código Judicial.

2. Los motivos que fundamentan las causales guardan relación con las mismas.

3. Las normas de derecho infringidas y la explicación de cómo lo han sido son congruentes con las causales.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación, en el fondo, propuesto por F. ICAZA Y CÍA., S. A.,mediante apoderados judiciales.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

REINALDO VICENTE CHOHN MALEK RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE DECLARACIÓN DE NUEVO HEREDERO PRESENTADO DENTRO DEL PROCESO DE SUCESIÓN TESTAMENTARIA DE VICENTE MALEK LÁZARO. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el incidente de declaración de nuevo heredero presentado dentro del proceso de sucesión testamentaria de **VICENTE MALEK LÁZARO (Q. E. P. D.)**, el apoderado legal del incidentista, **REINALDO COHN MALEK**, ha interpuesto recurso de casación contra la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, el 22 de septiembre de 1993.

Ingresado el negocio a esta Sala, previo reparto de rigor, fue fijado en lista por el término de seis días para que dentro de los tres primeros la parte opositora al recurso alegara sobre la admisibilidad del mismo; y para que dentro de los tres siguientes el recurrente replicara. Dicho término ha vencido y fue aprovechado por la parte opositora únicamente, por lo que corresponde a esta Corporación pronunciarse sobre la admisibilidad o no del mismo.

La Sala observa que la resolución cuya impugnación aquí se impetra es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, tanto por la cuantía como por su naturaleza.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo oportuno.

El escrito que contiene el recurso de casación reúne de manera general todos los requisitos establecidos por el artículo 1160 del Código Judicial.

Por último, se aprecia que la causal de fondo expresada es de las contempladas por el artículo 1154 del citado Código, por lo que se concluye que el presente recurso debe ser admitido.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por REINALDO COHN MALEK.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIRIAM RIVAS SÁNCHEZ DE AIZPURÚA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO DE DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO INTERPUESTO POR JAIME AIZPURÚA FRANCESCHI Y MIRIAM RIVAS SÁNCHEZ DE AIZPURÚA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial, se remitió a esta Corporación el recurso de casación en el fondo propuesto por el licenciado Mario E. Concepción S., en representación de la señora **MIRIAM RIVAS DE AIZPURÚA**, contra la resolución dictada por ese Tribunal el 30 de junio de 1993, dentro del proceso de divorcio por mutuo consentimiento interpuesto por JAIME AIZPURÚA F. y la recurrente.

Surtidas las formalidades procesales pertinentes, se fijó en lista este negocio por el término de seis días, para que dentro de los tres primeros la parte opositora al recurso alegara sobre la admisibilidad del mismo, y para que dentro de los tres siguientes, replicara el recurrente; término que no fue aprovechado por ninguna de las partes.

Por tratarse de un asunto de derecho de familia, se le corrió traslado del mismo al Procurador General de la Nación a fin de que emitiera concepto, lo cual hizo mediante Vista N° 23 de 2 de diciembre de 1993, en la que concluyó que se debía ordenar la corrección del recurso, en atención a algunos defectos de forma por él señalados.

Corresponde en este momento a la Sala, pronunciarse sobre la admisibilidad o no del presente recurso de casación.

En primer lugar, se observa que la resolución objeto del recurso es susceptible de impugnación por medio de esta vía extraordinaria, ya que se trata de una sentencia de segunda instancia dictada dentro de un proceso de divorcio. En segundo lugar, fue interpuesto en tiempo oportuno y por persona hábil.

En cuanto a los requisitos establecidos por el artículo 1160 del Código Judicial, observamos que la causal de fondo que se ha invocado es de las que contempla el artículo 1154 del citado Código. Los motivos que fundamentan la causal son congruentes con ella. Sin embargo, en el segundo motivo, el casacionista cita una norma de derecho, lo que resulta contrario a la técnica del recurso de casación. Las disposiciones legales infringidas y el concepto en que lo han sido, se enunciaron correctamente.

Por último, es necesario indicar que el recurrente ha dirigido el recurso a los Magistrados de la Corte Suprema, lo cual es incorrecto, ya que debe dirigirse a los Magistrados del Tribunal Superior, quienes son los encargados de conceder el recurso, como lo ha indicado esta Corporación en repetidas ocasiones.

En vista de lo anterior, la Sala concluye que el presente recurso debe ser corregido, para que sean enmendados los errores que se han señalado.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación interpuesto por MIRIAM RIVAS DE AIZPURÚA, para lo cual concede el término establecido por el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria de la Sala Civil

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CÁMARA DE COMERCIO INDUSTRIAS Y AGROPECUARIA DE LAS TABLAS RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ETELVINA DOMÍNGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado Humberto A. Collado T., quien representa los intereses de la **CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGROPECUARIA DE LAS TABLAS**, parte demandada en el proceso ordinario de mayor cuantía que ha iniciado en su contra ETELVINA DOMÍNGUEZ, presentó recurso de casación en el fondo contra la sentencia de segunda instancia proferida el 14 de septiembre de 1993 y reformada el 12 de octubre de 1993, por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Recibido el expediente en esta Superioridad y previo reparto de rigor, se fijó en lista por el término que establece el artículo 1144 del Código Judicial. Durante ese período compareció la parte opositora el recurso, a presentar escrito de oposición a la admisibilidad del mismo.

Toda vez que precluyó el citado término, le corresponde a la Sala analizar el escrito de formalización y precisar si cumple o no con los requisitos establecidos en el artículo 1165 del citado Código.

En primer lugar, se aprecia que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, y que el recurso se anunció y formalizó en tiempo oportuno.

En lo que atañe al libelo del recurso, se observa que se invocan dos causales de fondo y ambas son de aquellas señaladas por el artículo 1154 del Código Judicial.

Los motivos que fundamentan ambas causales y las normas de derecho que se consideran infringidas, han sido citadas correctamente y la explicación de la infracción de las mismas es adecuada.

En vista de lo anterior, la Sala concluye que el presente recurso extraordinario de casación se ciñe a los requisitos legales establecidos y por tanto, debe ser admitido.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por la CÁMARA DE COMERCIO, INDUSTRIAS Y AGROPECUARIA DE LAS TABLAS.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HERCILIA ORTEGA LASSO RECURRE EN CASACIÓN EN LA TERCERÍA EXCLUYENTE INTERPUESTA POR JOSEFA BALLESTERO DE RAMOS EN LA ACCIÓN DE SECUESTRO INCOADA POR HERCILIA ORTEGA LASSO CONTRA ARMANDO RAMOS BERNAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ. PANAMÁ TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En la tercería excluyente presentada por JOSEFA BALLESTEROS DE RAMOS, dentro de la acción de secuestro incoada por HERCILIA ORTEGA LASSO contra ARMANDO RAMOS BERNAL, el apoderado judicial de **HERCILIA ORTEGA LASSO** ha presentado recurso de casación en el fondo contra el auto de 31 de agosto de 1993, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Ingresado el negocio a esta Sala, previo reparto de rigor, fue fijado en lista por el término que prescribe el artículo 1164 del Código Judicial. Dicho término ha vencido sin que hubiese sido aprovechado por ninguno de los interesados. Por lo tanto, es preciso que la Sala se pronuncie sobre la admisibilidad o no del recurso, tomando en cuenta para ello las exigencias contempladas en los artículos 1160 y 1165 del citado Código, previas las siguientes consideraciones:

1. Se observa que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, ya que fue proferida por un Tribunal Superior en segunda instancia y la misma decidió un levantamiento en procedimiento cautelar, que es uno de los presupuestos recogidos por el numeral 4 del artículo 1149 del Código Judicial. Sobre este punto es preciso aclarar que, a pesar de que este negocio fue presentado como una tercería excluyente, el Tribunal Superior declaró que se trataba en realidad de un incidente de rescisión de cosa ajena y como tal lo ha reconocido la Sala.

2. Consta en autos que el recurso se presentó en tiempo oportuno y por persona hábil.

3. El escrito de formalización del recurso reúne de manera general, todos los requisitos ordenados por el artículo 1160. Sin embargo, en los motivos tercero, cuarto y quinto, el casacionista cita normas de derecho, lo que resulta contrario a la técnica del recurso de casación. Pese a ello, el recurso resulta inteligible por lo que no se considera necesario ordenar su corrección.

4. La causal de fondo invocada es de aquellas reconocidas en el artículo 1154 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PRIMERA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el presente recurso de casación interpuesto por HERCILIA ORTEGA LASSO.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARIELA MEDINA DE MONTES Y BELISARIO MONTES MONTES RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN JACINTA PÉREZ SANTANA Y LUIS CARLOS PÉREZ SAAVEDRA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario interpuesto por JACINTA PÉREZ SANTANA o JACINTA PÉREZ DE BAULE y LUIS CARLOS PÉREZ SAAVEDRA contra **MARIELA MEDINA DE MONTES y BELISARIO MONTES MONTES**, ambos demandados han presentado recursos de casación en la forma y en el fondo, contra la sentencia de 26 de agosto de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Cumplidas las ritualidades procesales inherentes a esta clase de recurso, tal como lo dispone el artículo 1165 del Código Judicial, es tarea de la Sala decidir si el recurso ha sido concedido mediante la concurrencia de los siguientes requisitos:

1. Si la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2. Si el recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3. Si el escrito por medio del cual fue interpuesto reúne todos los requisitos ordenados por el artículo 1160 y,

4. Si la causal expresada es de las señaladas por la ley.

Conceptúa la Sala que ambos recursos cumplen a cabalidad con los dos primeros requisitos exigidos por la excerta legal antes citada. Sin embargo, es necesario que los dos restantes sean examinados por separado.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR MARIELA MEDINA DE MONTES

A) EN LA FORMA.

Antes de entrar a analizar el escrito de formalización, es importante señalar que el artículo 1179 del Código Judicial establece otro requisito para el recurso de casación en la forma, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 1179. El recurso de casación en cuanto a la forma no será admisible si no se hubiere reclamado la reparación de la falta en la instancia en que se haya cometido y también en la siguiente, si se cometió en la primera, salvo si el reclamante hubiere estado impedido para hacerlo o se tratare de un vicio insubsanable o no convalidable.
>
> Si la causa que motiva el recurso ha tenido lugar en la última instancia y no ha habido posibilidad de reclamar contra ella, se admitirá el recurso.

En el caso que nos ocupa se observa que la falta alegada por el recurrente se produjo en la primera instancia. No obstante, la misma no fue reclamada por él sino hasta la etapa de los alegatos de la apelación de la sentencia de primera instancia, como el propio casacionista expresa en el recurso que se analiza.

En vista de lo anterior, el presente recurso de casación en la forma no puede ser admitido, ya que no ha cumplido con el requisito indispensable que contempla la norma transcrita.

B) EN EL FONDO.

En relación con los requisitos establecidos por el artículo 1160, se señala lo siguiente:
1. En cuanto a la determinación de la causal, el casacionista la enuncia como "Error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba que infringió normas sustantivas e influyó en lo dispositivo del fallo". (fs. 357)

Como esta Corporación ha manifestado en reiteradas ocasiones, la causal de fondo es una sola y consiste en la "infracción de normas sustantivas de derecho", en cualquiera de los conceptos que establece el artículo 1154 del Código Judicial.

De ello se desprende que el recurrente ha confundido el concepto de la causal con la causal misma, por lo cual debe ser corregida.

2. En cuanto a los motivos, únicamente el segundo, tercero y cuarto les hacen cargos de injuridicidad a la sentencia impugnada.

3. En el apartado de las disposiciones legales infringidas, la Sala observa que el concepto de la infracción de las normas citadas, es muy sucinto y debe ser explicado más ampliamente.

En síntesis, todos los errores arriba mencionados deben ser subsanados, por lo que el presente recurso de casación en el fondo debe ser corregido.

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR BELISARIO MONTES MONTES

A) EN LA FORMA.

La Sala observa que la falta aducida en este recurso
es la misma que reclama el recurrente anterior y se encuentra en la misma situación ya que tampoco fue reclamada en la instancia correspondiente, o sea en la primera instancia lo que indica que el presente recurso de casación en la forma debe rechazarse.

B) EN EL FONDO.

Este recurso de casación adolece de los mismos defectos formales que le fueron señalados al recurrente anterior, por lo que esta Corporación concluye que el mismo debe ser corregido, tomando en consideración para ello las observaciones señaladas al escrito de formalización del recurso de casación en el fondo presentado por MARIELA MEDINA DE MONTES.

Por tanto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLES los recursos de casación en la forma interpuestos por MARIELA MEDINA DE MONTES y BELISARIO MONTES MONTES, y ORDENA LA CORRECCIÓN de los recursos de casación en el fondo presentados por los anteriores, para lo cual concede el término establecido en el artículo 1166 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) RODRIGO MOLINA A. (fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISABEL FLORES BARBA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE OPOSICIÓN QUE LE SIGUE A EDUARDO FLORES BARBA, PEDRO FLORES BARBA Y ZOILA FLORES BARBA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia mediante sentencia de 8 de noviembre de 1993, ordenó la corrección del recurso de casación, interpuesto por ISABEL FLORES BARBA contra la resolución de 29 de julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial en el proceso ordinario de oposición que la recurrente le sigue a **EDUARDO FLORES BARBA**, **PEDRO FLORES BARBA y ZOILA FLORES BARBA**

Por lo que, luego de efectuada la respectiva corrección del recurso de casación, ha ingresado nuevamente el expediente al despacho sustanciador, a fin de determinar si la misma fue hecha conforme a lo ordenado por la Corte, conforme lo señala el artículo 1166 del Código de Procedimiento Civil.

En primer lugar, se observa que el recurso de casación fue corregido por el recurrente conforme a lo ordenado por la Corte (fs. 186 a 191). Es decir, en cuanto al contenido de los motivos y al orden en que deben establecerse las normas de derecho.

De allí que, el escrito de formalización del recurso cumple a cabalidad con los requerimientos del artículo 1160 del Código Judicial.

Al haberse corregido el recurso de casación en el fondo, en cuanto a las deficiencias o defectos señalados por la Corte, resulta evidente su admisibilidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por ISABEL FLORES BARBA contra la Sentencia de 29 de julio de 1993, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SAMUEL RIQUELME MORENO,RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE LILIA GONZÁLEZ GARCÍA. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Esta Sala de la Corte declaró admisible el recurso de casación en el fondo interpuesto por el licenciado MIGUEL GONZÁLEZ, apoderado judicial del señor **SAMUEL RIQUELME MORENO**, parte demandada en el proceso ordinario que le sigue la señora **LILIA GONZÁLEZ GARCÍA**, en contra de la sentencia de 2 de abril de 1993 dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL.

Por cumplidos entonces los trámites de la sustanciación del recurso interpuesto, el negocio se encuentra en estado de decidir y a ello se procede previas las consideraciones que seguidamente se exponen:

SÍNTESIS DEL CASO

Los autos de la presente litis dan cuenta que la señora LILIA GONZÁLEZ DE GARCÍA, mediante apoderado especial instauró proceso ordinario declarativo en contra del señor SAMUEL RIQUELME MORENO, a fin de que se hicieran las declaraciones siguientes:

> "PRIMERA: Que las mejoras existentes sobre la finca No.9358, inscrita al - folio 224 del tomo 1280, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Veraguas, que consisten en casa residencial, tipo chalet de paredes de bloques de cemento repellados, techo de madera y zinc, cielo razo de celotex de tres recamaras, ventana de aluminio, puertas de madera, piso de mosaico, comedor, terraza delantera y trasera, cuarto sanitario con inodoro,que mide 11.45 metros de frente por 12.45 metros de fondo, con una superficie construida de 142.47 metros cuadrados, son de propiedad exclusiva de LILIA GONZÁLEZ GARCÍA, por haberlas construido con recursos propios, y por un valor de B/.17.000.00.

SEGUNDA: Que se ordene al Director General del Registro Público inscribir las mejoras que existen sobre la finca No.9358, descrita en la cláusula primera anterior a nombre de LILIA GONZÁLEZ GARCÍA, con un valor de B/.17.000.00.

TERCERA: Que como consecuencia de las declaraciones anteriores queda excluida de la transacción aprobada mediante auto No. 213 de 24 de agosto de 1989, dictado por el Juzgado Segundo del Circuito de Veraguas, Ramo Civil, dentro del juicio ejecutivo de Mayor cuantía, seguido por ANASTASIO MARTÍNEZ BONINI contra SAMUEL RIQUELME MORENO, la finca No.9358 mencionada con sus mejoras, toda vez que las mejoras existentes son de propiedad de LILIA GONZÁLEZ GARCÍA.

CUARTA: Que se ordene al Director General del Registro Público, abstenerse de inscribir el Auto No.213 de 24 de agosto de 1989, descrito en la Cláusula Tercera de ésta demanda o que se cancele su inscripción por haberse traspasado un bien inmueble ajeno.

QUINTA: Que SAMUEL RIQUELME MORENO está obligado a pagarle a LILIA GONZÁLEZ GARCÍA la suma principal de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) que LILIA GONZÁLEZ GARCÍA pagó en la Caja de Ahorros, Sucursal de Santiago correspondiente al préstamo hipotecario No.32-90-0158-0"

El Juzgado Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, al conocer en primera instancia del mencionado proceso ordinario declarativo, mediante sentencia calendada el 20 de noviembre de 1990 consultable a fojas 298 a 308 del expediente, negó todas las declaraciones solicitadas por la parte demandante y la condenó a pagar las costas del proceso, fijadas en la suma de B/.3.080.00.

La parte actora contra esta sentencia de primera instancia interpuso recurso de apelación, ingresando de esa manera el caso al TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL para que se surtiera la alzada.

De esa manera el Tribunal Ad-Quem por sentencia de 2 de abril de 1993, reforma el fallo de primera instancia en el sentido de:

" condenar a SAMUEL RIQUELME MORENO a reembolsar o pagar a LILIA GONZÁLEZ GARCÍA la cantidad de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA BALBOAS (B/.5.530.00) correspondientes al préstamo hipotecario No.32-90-0158-0 que ésta pagó por su cuenta, más las costas que, en cuanto al trabajo en derecho, se señalan en B/.1.356.00.

Se CONDENA a la parte demandada a pagar los gastos del proceso,los cuales serán liquidados por Secretaría en la primera instancia.

Se CONDENA a Lilia González García a pagar a Samuel Gutiérrez Riquelme la suma de B/.2.480.80 en concepto de costas por exceso en la demanda, las cuales podrán ser compensadas.

Se CONFIRMA la sentencia en cuanto a negar las declaraciones solicitadas por la parte actora. ..."

Y, como se tiene antedicho, contra esta última sentencia dictada por el Tribunal Superior de la alzada la parte demandante interpuso el recurso de casación de que conoce la Sala de la Corte.

**CAUSAL ÚNICA INVOCADA Y LOS MOTIVOS QUE LA FUNDAMENTAN**

La causal única de fondo invocada por el recurrente consiste en la "INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO en el concepto de ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA, causal que influyó de manera sustancial en la parte dispositiva de la sentencia contra la cual se recurre".

La invocada causal de error de derecho aparece fundamentada en seis motivos, a saber:

"1. La sentencia de 2 de abril de 1993, que por este medio impugnamos, de manera errada condenó a SAMUEL RIQUELME MORENO a darle a la demandante LILIA GONZÁLEZ GARCÍA la suma de CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA BALBOAS (B/.5.530.00), correspondientes al préstamo hipotecario No.32-90-0158-0 `que ésta pagó por su cuenta',-afirmación errada-, más las costas que fueron señaladas en B/.1356.00. Además, hace condena contra la demandada por los gastos del proceso.

2. Para ello, el Tribunal Superior incurriendo en error en la apreciación de las pruebas testimoniales afirma que `se presentaron abundantes pruebas testimoniales que acreditan que la demandante hacia todos estos pagos personalmente', refiriéndose entre otros pagos a los 39 recibo aportados por la actora pagados por ella a la Caja de Ahorros, (fs.3 del fallo). (Subrayado mío).

Ninguno de los testigos señaló que `todos'esos recibos fueron pagados personalmente por la actora, ni del contexto de las declaraciones obrantes en el proceso se puede colegir tal afirmación, la cual, repetimos, es equivocada y constituye un error de apreciación de la prueba testimonial.

> Una correcta apreciación de la prueba testimonial concluye en forma contraria a la estimación del Tribunal.
>
> 3. De manera errónea, `El Tribunal conceptúa que la parte demandada no niega esta situación', refiriéndose al pago de la actora de los recibos a la Caja de Ahorros (fs. 3 del fallo), cuando lo cierto es que el demandado, tanto al contestar la demanda como rendir declaración de parte, negó categóricamente que la actora hayan pagado de su peculio el préstamo hipotecario a él concedido por la Caja de Ahorros. Se da un error de apreciación por parte del Tribunal.
>
> 4. El Tribunal Superior hace inferencias equivocadas en cuanto a que el hecho de que el demandado y la demandante guardasen recibos del préstamo hipotecario, significa que los guardados por la actora `es una evidencia de gran relevancia de que los pagos fueron efectuados de su propio peculio' (fs.4). No hay un razonamiento lógico, preciso, de fondo, al hacerse tal afirmación. La hipótesis (tenencia de los recibos) no permite desprender que el pago de ellos fueron de su propio peculio.
>
> 5. Apreciando indebidamente las constancia probatorias (documental y pericial), el Tribunal afirma que `como consta de fojas 85 a 123 y 201 del expediente' la demandante `pago por cuenta del demandado' la obligación que éste tenía en la Caja de Ahorros en la cuantía de B/.5.530.00 (pág.7 de la sentencia).
>
> Nada de eso se puede apreciar de los recibos que obran de fojas 85 a 123, ni del informe pericial obrante a fs.200-202. Por el contrario éste dice que los recibos no dicen quién los pagó. Hubo errada apreciación de esas probanzas.
>
> 6. Es indiscutible que esos errores influyeron para concluir, también erradamente, que SAMUEL RIQUELME MORENO debe pagar a LILIA GONZÁLEZ GARCÍA la suma que equivocadamente se tiene como pagada por ella, de su propio peculio, al préstamo hipotecario concedido a mi mandante, cuando lo cierto es que no se ha logrado demostrar tal aseveración de la parte actora, prohijada equivocadamente por el fallo que se impugna por esta vía."

La parte que recurre en casación, según los motivos transcritos antes, acusa, así, a la sentencia impugnada de violar los artículos 770, 773, 872, 904, 967, 969 del Código Judicial, y como consecuencia de ello de haber infringido el artículo 1045 del Código Civil.

Veamos entonces seguidamente, si como sostiene el impugnante la causal única de error de derecho de que se acusa a la sentencia del Tribunal Ad-Quem está justificada.

**EXAMEN DE LOS CARGOS FORMULADOS EN LOS MOTIVOS**

De los transcritos motivos se colige que el cargo de error de derecho de que se acusa a la sentencia recurrida en casación, el impugnante básicamente lo hace consistir, en haber el Tribunal Superior valorado erróneamente las pruebas testimoniales, documentales y periciales allegadas al proceso por la parte actora, y de esa manera dar por probado que la demandante "pagó de su peculio" la suma de B/.5.530.00 al préstamo hipotecario No.32-90-0158-0 que el demandado mantenía con la Caja de Ahorros. De allí, según los examinados motivos, la violación de los citados artículos 770, 773, 872, 904, 967 y 969 del Código Judicial de que se acusa a la cuestionada sentencia de segunda instancia; pues, a juicio de la impugnación, el señalado yerro condujo, a su vez, al Tribunal a infringir el artículo 1045 del Código Civil, al sostener que dicha norma substantiva "no le es aplicable ..." a su mandante, la cual dispone que:

> "Puede hacer el pago cualquier persona, tenga o no interés en el cumplimiento de la obligación, ya lo conozca y lo apruebe, o ya lo ignore el deudor.
>
> El que pagare por cuenta de otro podrá reclamar del deudor lo que hubiese pagado, a no haberlo hecho contra su expresa voluntad.
>
> En este caso, sólo podrá repetir del deudor aquello en que le hubiera sido útil el pago". (Art.1045 del C.C.)

Así las cosas, el examen de la impugnada sentencia, ciertamente, evidencia que el Tribunal Superior al apreciar el caudal probatorio producido por la parte demandante al proceso, reformó parcialmente la sentencia del a-quo en el sentido de aplicar el transcrito artículo del Código Civil, en el sentido de reconocer a la demandante, en el caso subjudice, el derecho estatuido en la norma del Código en cita, fundándose en que dicho precepto le confiere a la demandante "... el derecho de reclamar al demandado el reembolso de las sumas que pago a la Caja de Ahorros por cuenta de éste y no simplemente 'a nombre' de éste , como se aprecia en la sentencia de primera instancia, ya que se ha demostrado suficientemente que la demandante gozaba de la mayor capacidad económica para hacer dichos pagos, que siempre se presentaba personalmente a efectuarlos, que generalmente iba acompañada de alguna colega amiga en días de pagamento en el Ministerio de Educación y el demandado conservó los recibos anteriores, antes de quedar desempleado, así la demandante conservó los recibos que la favorecían" (fs.367). A esta conclusión arribó el Ad-Quem en la impugnada sentencia luego de ponderar el caudal probatorio allegado al proceso.

La realidad probatoria de los autos de la presente litis, sin embargo, revela que el Tribunal Superior de la sentencia acusada en casación, al apreciar y valorar los recibos de la Caja de Ahorros sobre abonos efectuados al préstamo hipotecario del demandado Samuel Riquelme Moreno, que constan como pruebas aportadas por la parte demandante a fojas 85 a 123, así como la prueba testimonial que obra a fojas 195 a 199, y de igual manera la pericial de fojas 200 a 202, efectivamente incurrió en el yerro probatorio a que aluden los motivos que la Sala examina.

En efecto, del análisis conjunto de las declaraciones rendidas por los testigos BONAPARTE MEDINA GONZÁLEZ (fs.194), ISAAC ALMENGOR VEGA (195), MARISOL de DOMÍNGUEZ (196) LUIS EDUARDO CAMARENA (fs.197), GLORIA EDITH CORRO DE PÉREZ (fs. 198) y MARÍA SOFÍA VÁSQUEZ (fs.199), no se infiere que los referidos pagos realizados por ventanilla al préstamo hipotecario del demandado con la Caja de Ahorros, fueron efectuados del "propio peculio" de la demandante como se afirma en la acusada sentencia.

En ese sentido, cabe resaltar que el Tribunal Ad-quem para dar por probado que los indicados pagos los hizo el demandado de sus propio peculio." , al ponderar los distintos elementos probatorios allegados al proceso, se basó en consideraciones como las de sostener que "... algunos de los cajeros de la Caja de Ahorros también declararon acerca de cómo recibieron el dinero en ventanilla de manos de la parte actora, aunque otros no recuerdan la persona que llevo el dinero"; que "... el sólo hecho de que la parte demandante tenga en su poder las facturas canceladas y los recibos de la Caja de Ahorros que venimos mencionado, es una evidencia de gran relevancia de que los pagos fueron efectuados de su propio peculio ...".

Esas consideraciones del Ad-Quem a pesar de que la prueba testimonial en este caso no establece ni acredita con la debida certeza jurídica que la demandante, efectivamente, haya efectuado los aludidos pagos de su "propio peculio" por cuenta del demandado.

Por ello, a juicio de la Sala, le asiste razón al impugnante al acusar a la sentencia de que se hace mérito en casación de violar los citados artículos 770, 773, 872,904 967 y 969 del Código Judicial; toda vez que está visto y demostrado que el error o la incorrecta apreciación del juzgador colegiado al valorar la prueba testimonial, en el caso subjudice, dio como resultado que infringiera el artículo 1045 del Código Civil al reconocer en la sentencia el derecho a la demandante de reclamar al demandado el reembolso de las sumas que supuestamente dice haber pagado a la Caja de Ahorro por cuenta de éste, no estando probado este punto de la controversia.

Si lo expuesto resulta ser la realidad que se colige de los autos del proceso en estudio, luego entonces, la causal única invocada por la impugnación está justificada; y, por tanto, la Corte debe invalidar el fallo recurrido y dictar en su lugar la resolución que corresponda, como Tribunal de instancia. Veamos:

Conforme a los autos de la presente litis el Juez Primero del Circuito Judicial de Veraguas, Ramo Civil, mediante sentencia No.49 calendada el 20 de noviembre de 1990, consultable desde fojas 298 a la 308 inclusive, negó todas las declaraciones solicitadas por la demandante.

De esa manera el a-quo al centrar la controversia en el hecho de que la demandante reclama la suma de B/.22.000.00, que el demandado debe resarcirle en razón a unas mejoras realizadas en el inmueble de propiedad del demandado según los hechos 2, 3 y parte del 4, así como haber realizado pagos a la Caja de Ahorros, Sucursal de Santiago, calculados en la suma de B/.5.000.00, al préstamo hipotecario que el demandado mantenía con dicha institución de ahorros del Estado, en síntesis, estimó que del análisis del abundante caudal probatorio allegado al proceso la demandante no ha logrado probar los hechos en que funda la demanda, conforme a lo preceptuado por el artículo 773 del Código Judicial, el cual dispone que: "Incumbe a las partes probar los hechos o datos que constituyan el supuesto de hecho de las normas que le son favorable".

En ese sentido, cabe señalar que, efectivamente, en lo que respecta al hecho referente a la afirmación de que la demandante "... realizó varios pagos a la Caja de Ahorros. Sucursal de Santiago, calculándose en la suma de B/.5.000.00 para la cancelación del préstamo hipotecario otorgado a MANUEL RIQUELME MORENO, para la compra de la finca No.9358 descrita en esta demanda", lo cierto es que el conjunto de las pruebas que obran en el proceso no logran probar el derecho que la demandante reclama al demandado, conforme a lo preceptuado por el artículo 1045 del Código Civil, a quien en todo caso le incumbía la carga de la prueba.

No obstante, si bien la Corte llega a las mismas conclusiones del inferior, por razones diferentes considera que, en lo que toca al hecho de las remodelaciones o mejoras hechas a la casa tipo chalet (hecho segundo de la demanda, fs.2) si existen en el proceso suficientes elementos de convicción que demuestran que la demandante por lo menos, hizo pagos por compra de materiales utilizados en las mejoras efectuadas en el chalet construido sobre la finca de propiedad del demandado SAMUEL RIQUELME MORENO; pagos que ascienden a la cantidad de B/.1.990.00 según el informe rendido por los peritos AGUSTÍN MÉNDEZ GUERRA y ERNESTO PERNEAD GÓMEZ, que consta a fojas 200 y 201 del expediente.

Por otra parte, unida a la indicada prueba pericial también consta en el proceso, en relación a los pagos efectuados por la demandante por compra de materiales, los recibos que se detallan en el informe de los peritos (fs.201); "Diligencia de Inspección Ocular" (fs.146 a 149); declaraciones y reconocimiento de las firmas que aparecen en los mencionados recibos, rendidas por ADRIANO SÁNCHEZ BARRÍA (fs.171 a 172 ), ADRIANO SÁNCHEZ (fs.196 ), ESTEBAN ARCA VERGARA (fs.193).

Así las cosas, si bien es cierto que las remodelaciones o mejoras hechas en el inmueble de propiedad del demandado pertenecen al dueño de la Finca No. 9358, inscrita

al folio 224, del tomo 1282, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Veraguas, en virtud de lo dispuesto por el artículo 370 del Código Civil, no menos es que, en el caso de autos, está plenamente probado que la demandante hizo los pagos por compra de materiales utilizados en dichas mejoras, que ascienden a la cantidad total de B/.1.990.00, según las pruebas que militar en el proceso.

En ese sentido, no existe entonces la menor duda que a tenor de lo dispuesto por el inciso primero del artículo 372 del Código Civil a la demandante le asiste el derecho a reclamar del demandado el reembolso o abono del valor de los materiales utilizados en las mejoras construidas sobre la finca de propiedad del demandado; máxime cuando este acepta en los hechos expuestos como defensa de la contestación del traslado de la demanda que corre a fojas 13, que dichas mejoras efectivamente se hicieron en el inmueble de su propiedad.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA la sentencia de 2 de abril de 1993, dictada por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL (COCLÉ Y VERAGUAS), y, en su lugar, FALLA:

REFORMA la sentencia de 20 de noviembre de 1990 proferida por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VERAGUAS, Ramo De Lo Civil, en el sentido de CONDENAR a SAMUEL RIQUELME MORENO a reembolsar o pagar a LILIA GONZÁLEZ GARCÍA la cantidad de MIL NOVECIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.1.990.00), en concepto de pagos efectuado por compra de materiales utilizados en las mejoras realizadas en la finca de propiedad del demandado; y CONFIRMA la sentencia en cuanto a negar las declaraciones solicitadas por la parte demandante.

Las costas de ambas instancias se fijan en la suma de DOSCIENTOS NOVENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.290.00) a cargo de la parte demandada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

ALJADIS PÉREZ URRIOLA INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA NUMERO 251 DE 27 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO CIVIL, DEL SEGUNDO CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR SAMUEL GAITÁN LEWIS CONTRA TRANSPORTE PUEBLO NUEVO, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante auto de veintidós (22) de octubre de mil novecientos noventa y tres (1993), el Magistrado Sustanciador, luego de analizar el recurso de revisión presentado por la firma forense BATISTA CASTILLO y LOAIZA, en representación del señor ALJADIS PÉREZ URRIOLA, ordenó la corrección del mismo, con fundamento al artículo 685 del Código Judicial, con el propósito de que el presente recurso se ajustara a las formalidades mínimas a que se refiere el artículo 1194 de la misma excerta legal. Se advirtió que en el escrito no se había señalado la causal, tal como está concebido en el artículo 1189 del Código de Procedimiento Civil, así como los hechos concretos que le sirven de fundamento a la causal. Con respecto a las pruebas que se pretenden hacer valer, se le señaló que debía indicar a cuáles se refiere en su escrito. Se le concedió al recurrente el término de cinco (5) días para que se hiciera tales correcciones.

Consta a foja 60 del expediente, el informe de la Secretaría, en el cual se expresa que la corrección ordenada se hizo en tiempo oportuno, por tanto, esta alta Corporación pasa a decidir sobre la admisibilidad o no del mismo. Veamos:

El recurso, a juicio de la Corte, cumple con los requisitos ordenados en el artículo 1189 del Código Judicial, en cuanto a que:

a.- Se trata de un proceso de una sola instancia, cuya sentencia fue proferida por un Juez de Circuito;

b.- La resolución impugnada está sujeta a revisión al tenor de lo dispuesto por el artículo 1189 ibidem, numeral 9, y

c.- El recurso se ha presentado dentro del término legal y las partes interesadas, además, consignaron previamente el depósito requerido según consta en la diligencia de consignación de foja 33.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ADMISIBLE el recurso de revisión propuesto por ALJADIS PÉREZ URRIOLA, y ORDENA citar a todos los interesados cuya residencia se conozca y por medio de edicto a las demás personas, para que dentro del término de un mes, comparezcan a sostener lo que convenga a sus derechos.

Se advierte igualmente, que podrán intervenir en calidad de litis consorte, cualquier persona o entidad a quien puede agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma, la resolución que se dicte en esta revisión.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARTA RODRÍGUEZ INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 22 DE MAYO DE 1989, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMEROS DEL CIRCUITO DE HERRERA, RAMO CIVIL EN EL JUICIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INTERPUESTO POR TOMAS ALONSO G., CONTRA MARTA RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: RODRIGO MOLINA A. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La señora **MARTA RODRÍGUEZ**, mediante poder especial otorgado al licenciado CARLOS R. AYALA MONTERO, interpuso ante esta Sala de lo Civil de la Corte demanda de revisión en contra de la Sentencia calentada el 22 de mayo de 1989, proferida por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, Ramo Civil, y mediante la cual en su parte resolutiva decide:

"DECLARA

Que el señor TOMAS A. ALONSO GÓMEZ, varón, panameño, mayor de edad, comerciante, casado en la actual vigencia, residente en la Avenida Herrera de esta ciudad de Chitré, cedulado No. 7-10-546, ha venido poseyendo en forma pública, pacífica, ininterrumpida, con ánimo de dueño la finca No.5592, inscrita al folio 89, Tomo 693, de la Sección de Propiedad, Provincia de Herrera, que consiste en un globo de terreno que formó parte de la finca No.2170, situado en la Avenida Herrera de la ciudad de Chitré,con las medidas, linderos y demás especificaciones que constan inscritas en el Registro Públicos, dentro de la cual se encuentra una construcción de mampostería, cielo raso de Pleywood, techo de zinc, piso de mosaico, paredes de bloques, ventanas de vidrio fijo, servicios, dos puertas de vidrios, cuya estructura está dividida en depósito y almacén y la cual posee fundaciones para un alto; y

Que. como consecuencia de la declaración anterior, el señor TOMA A. ALONSO GÓMEZ ha adquirido por prescripción adquisitiva extraordinaria de dominio, la finca 5592, inscrita al folio 89, tomo 693, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, antes detallada; y

ORDENA

Que la Dirección General de Registro Público, con base en esta sentencia, inscriba la finca 5592, inscrita al folio 89, tomo 693, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, descrita en la declaración primera, a nombre del señor TOMA A. ALONSO GÓMEZ, cuyas generales se dejan descritas anteriormente, previa la cancelación de la inscripción que está a nombre de MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN.

Se hace consta, para los efectos fiscales, que el derecho adquirido por el actor sobre la finca tantas veces detallada, tiene un valor de B/.1.000.00, que fue la cuantía de la demanda.

Asimismo, se ordena a la Dirección General del Registro Público, la cancelación de la inscripción de la presente demanda, ya que ello se hizo con fundamento al Artículo 1212 del Código Judicial, según consta en nuestro oficio No.21, de 9 de febrero de 1989, y que guarda relación con la finca No. 5592, inscrita al folio 89, tomo 693, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, del Registro Público.

Si no fuere apelado este fallo, para su inscripción, envíese copia autenticada del mismo, a la Dirección General del Registro Público, y luego archivase el expediente, previa anotación de su salida en el Libro Respectivo.

FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 1668, 1669, 1670, 1673, 1675, 1679, 1696 y concordantes del Código Civil; Ley 1a. de 1959; y Artículos 1212, 1213, 1262 y concordantes del Código Judicial.

Cópiese, Notifíquese y Cúmplase.

La Juez
(fdo.) Olga Nelly Tapia de Reyes.

El Secretario,
(fdo.) Bolívar Rodríguez."

Al ingresar la demanda de revisión presentada, y luego de haber el recurrente consignado en la Secretaria de la Sala de la Corte la suma de B/.250.00 (fs.12), fijada en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 1196 del Código Judicial, la Corte consideró conveniente tomar antes las medidas de saneamiento contempladas en el artículo 685, en concordancia con el artículo 1194, del Código Judicial, a fin de que el recurrente corrigiera las deficiencias señaladas a tal efecto mediante resolución de 31 de marzo de 1992, consultable a fojas 23 del expediente.

Por corregida entonces la demanda de revisión dentro del término señalado por la Corte, se declaró admisible el recurso de revisión interpuesto y se dispuso la citación personal a la parte que intervino como demandante en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva, en el cual se dictó la sentencia objeto de revisión, advirtiéndose igualmente que podrían intervenir en calidad de litis-consorte cualquiera otra persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma la resolución que se dictara. (fs. 37 y 38)

El señor **TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ**, una vez notificado personalmente mediante exhorto librado, confirió poder especial al licenciado Humberto A. Collado T. para que actuara en su nombre y representación en el recurso de revisión instaurado por la recurrente, y de esa manera presentó escrito de contestación a la demanda, negando los hechos expuestos en la mismas y la pretensión de la recurrente. (fs.48 a 50)

Luego de lo anterior señalado se fijó fecha para la celebración de la audiencia oral la cual se llevó a cabo el día 17 de febrero de 1993, con la intervención de los apoderados judiciales de las partes, la presencia de los magistrados integrantes de la Sala de lo Civil de la Corte; y una vez concluida la audiencia se concedió a las partes la oportunidad de presentar sus alegatos escritos si así lo deseaban, dentro del término de tres días a partir de la fecha. Todo lo cual consta en el acta de la audiencia que aparece a fojas 90 a 96 inclusive.

El recurso de revisión de sentencia interpuesto se encuentra, por tanto, en estado de fallar y a ello se procede previas las consideraciones que a continuación se expresan:

**HECHOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO AL ESCRITO DE REVISIÓN**

Los hechos que sirven de fundamento a la revisión de la sentencia impugnada, los hace consistir la demandante en los siguientes:

> "PRIMERO: El señor TOMAS ALONSO demandó ante el Juzgado Municipal del Distrito de Las Tablas, juicio de 'petición de herencia como heredero cesionario', a fin de que se le declarara 'heredero cesionario sobre la finca 5592, inscrita al folio 88,tomo 693, de la sección de propiedad. provincia de Herrera. La demanda fue presentada en abril de 1987, e iba dirigida contra MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN.
>
> SEGUNDO: Mi cliente contestó la demanda descrita y la misma fue fallada mediante sentencia del 22 de noviembre de mil novecientos ochenta y ocho (1988) , negando por improcedentes las peticiones del actor y condenándolo a pagar B/.200.00 de costa (lo cual nunca hizo).
>
> TERCERO: En diciembre de 1990, la señorita MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN se enteró de la existencia de una sentencia en la que se le despojaba de su propiedad sobe la finca 5592, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo civil (del 22 de mayo de 1990), en virtud de juicio ordinario de prescripción adquisitiva de dominio, propuesta por TOMAS ALONSO en su contra.
>
> CUARTO: En el hecho tercero de la demanda de prescripción adquisitiva de dominio, el demandante declaró que:
>
> `Que el señor TOMAS ALONSO, ha venido ocupando la finca descrita en el hecho primero.ininterrumpida, pacífica y con ánimo de dueño.'
>
> QUINTO: Que la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe con la presentación de una demanda planteada originalmente por el señor TOMAS ALONSO (petición de herencia) debido a que, como es evidente, ya que no existe la forma pacífica en la posesión, ni el ánimus dominio, pues al demandar la primera vez reconocía la propiedad de mi cliente y esperaba que se le adjudicara en virtud de una compraventa irregular.
>
> SEXTO: Como es lógico concluir, si mi cliente hubiese sido notificada personalmente de la segunda demanda, hubiera podido aportar la sentencia de 22 de noviembre de 1988 proferida por el Juzgado Municipal del Distrito de Las Tablas, con lo que se hubiera demostrado que no existía el término legal para la prescripción adquisitiva de dominio, pues este se interrumpió en 1987 cuando TOMAS ALONSO presentó la primera demanda.
>
> SÉPTIMO: Mi cliente no pudo aportar al proceso cuya sentencia pido que se revise la sentencia del primer juicio, la cual hubiese sido decisiva al momento de fallar este caso, porque fue emplazada por edicto debido a que la parte actora (favorecida) declaró que desconocía su paradero lo cual era obviamente falso ya que al comparecer mi cliente a contestar la primera demanda quedó establecida su residencia y vecindad, por lo que la misma era conocida por el señor TOMAS ALONSO (parte actora) al promover la segunda demanda.

> OCTAVO: Mi cliente no conoció de la existencia del segundo juicio sino hasta cuando este tenía una sentencia ejecutoriada en su contra, pues había sido emplazada por edicto de lo cual tampoco se enteró, debido a la declaración del demandante descrita en el hecho séptimo no quedándole otro recurso que el juicio de revisión para enderezar la injusticia cometida."

De esa manera la recurrente con base en los hechos anteriormente transcritos, invoca como motivo o causal de la revisión la señalada en el numeral 2. del artículo 1189 del Código Judicial, la cual reza así:

> "2. Si después de pronunciada la sentencia, se encuentran documentos decisivos que la parte no hubiese podido aportar o introducir en proceso por causa de fuerza mayor o por obra de la parte favorecida".

El señor **TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ**, quien figuró como parte actora en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio que concluyó con la sentencia objeto de la revisión, al notificarse personalmente del traslado del escrito de revisión de la recurrente, mediante apoderado judicial se hizo comparecer para sostener lo que convenga a sus derechos, y de esta manera presentó escrito oponiéndose a la pretensión de la recurrente, pero aceptando los hechos "Primero, Segundo, Cuarto ", y negando el "Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo".

Además alegó a su favor los siguientes hechos:

> "PRIMERO: El juicio de sucesión intestada del finado PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ se tramitó en el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, iniciándose su tramitación en el mes de mayo de 1958 y se tuvo como herederos a DARÍO ERNESTO RODRÍGUEZ a INÉS ISABEL RODRÍGUEZ, a los menores de ese entonces JOSÉ ANTONIO, CARMEN MARIELA Y CLEOTILDE EUCARIS RODRÍGUEZ BARBA y a los menores PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ CALDERO Y A MARINA RODRÍGUEZ CALDERÓN.
>
> SEGUNDO: En ese juicio de sucesión intestada de PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ los herederos convinieron que el señor y heredero DARÍO ERNESTO RODRÍGUEZ DELGADO se le nombrara administrador de los bienes de la sucesión.
>
> TERCERO: En su condición de heredero y administrador, el señor DARÍO ERNESTO RODRÍGUEZ DELGADO vendió a la señor LIBRADA CÓRDOBA DE CHOW, por medio de la escritura pública número 159 de 17 de junio de 1960 los derechos herenciales sobre la finca 5592 y ésta, LIBRADA CÓRDOBA CHOW vendió a TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ, por escritura pública número 15 de 10 de enero de 1969 los derechos que había adquirido sobre esa finca.
>
> CUARTO: El juicio de sucesión intestada de PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ finalizó el 19 de enero de 1961, cuando el Juez del Circuito de Herrera ordenó que se protocolizara el mismo.
>
> QUINTO: Posteriormente la señorita MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN, en el año de 1986, solicitó la apertura del juicio de sucesión intestada de PEDRO ANTONIO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ cuando ya este juicio sucesorio se había tramitado muchos años antes y se había inventariado la finca 5592.
>
> SEXTO: Mi mandante TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ, desde el momento en que adquirió los derechos sobre esa finca, en el año de 1969, la ha venido usufructuando y utilizando y desde hace varios años construyó en el terreno un local." (fs.47 a 50)

**BREVES CONSIDERACIONES PREVIAS**

La Sala de la Corte, antes de adentrarse en el examen de fondo estima oportuno dejar sentado, que si bien el recurso extraordinario de revisión, como aparece consagrado en el Código de Procedimiento Civil vigente, no requiere de formalidades especiales, sin embargo, sólo tiene lugar por los motivos taxativamente señalados en la ley; y, además, por ese carácter extraordinario del recurso la actividad jurisdiccional de la Sala de la Corte está limitada, de forma que no puede en virtud de esa limitación suplir cualquier deficiencias que se produzcan en el proceso que culminó con la sentencia objeto del recurso de revisión, pues no se trata de una tercera instancia.

Por otra parte, de acuerdo con el contenido del numeral 2 del artículo 1189 del Código en cita, anteriormente transcrito, para que se configure este motivo de revisión invocado por la recurrente, en el caso subjudice, deben concurrir los siguientes presupuestos: a) que la prueba, en este caso, sea documental; b) que la parte no hubiera podido aportar o introducir el documento en el proceso por causa de fuerza mayor, o por obra de la parte favorecida con la sentencia; c) que la prueba documental se haya encontrado después de la dictación o pronunciamiento de la sentencia; y d) que sea un documento decisivo, es decir, que revista "per se" tal fuerza o poder de convicción que de haberse aportado al proceso, acredite plenamente que el contenido de la sentencia habría sido de distinto.

De esa manera, expuestas las anteriores nociones o consideraciones, la Sala de la Corte procede, en consecuencia, a expresar su criterio en relación con el caso concreto, es decir, el recurso de revisión de la sentencia propuesto por la recurrente. Veamos:

**ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS APORTADAS**

Las pruebas aportadas por la revisionista para demostrar, a su juicio, los hechos en los cuales fundamenta el motivo invocado en la demanda de revisión, consisten: a) copia autentica de la sentencia de 22 de mayo de 1989 pronunciada por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio propuesto por TOMAS A.ALONSO sobre la finca No. 5592, inscrita al folio 89, tomo 693, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera, que aparece a nombre de MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN (fs.6 a 10 del expediente contentivo de la revisión); b) copia autenticada de la sentencia de 22 de noviembre de 1988 dictada por el Juzgado Municipal del Distrito de Chitré (fs, 75 a 29 del expediente de la revisión, aportada durante el acto de la audiencia); c) Certificado del Registro Público en el que consta que TOMAS ALONSO GÓMEZ es dueño de la finca No. 5592, folio 88 del tomo 693, Sección de la Propiedad, Provincia de Herrera (fs.80 ibídem. aportado durante el acto de la audiencia).

EL opositor Tomas Alonso Gómez, representado por su apoderado judicial, durante el acto de la audiencia igualmente adujo las siguientes pruebas: a) Copia autentica de la Escritura Pública No, 905 de 4 de septiembre de 1992 mediante la cual se protocoliza el expediente original contentivo del juicio de sucesión intestada del señor Pedro Antonio Rodríguez González, del Juzgado Primero del Circuito de Herrera (fs.81 a 86); b) Copia autentica de la Escritura Pública No.159 del 17 de junio de 1960 por la cual el Dr.Darío Ernesto Rodríguez vende a la señora Librada Córdoba de Chow los derechos herenciales que a él le corresponden en la Finca No.5592, como heredero del finado Pedro Antonio Rodríguez (fs.87); c) Copia autentica de la Escritura Pública No.15 del 10 de enero de 1969, por la cual la señora Librada Córdoba de Con vende los derechos herenciales que le compró al señor Darío Ernesto Rodríguez Delgado al señor Tomás Augusto Alonso Gómez (fs.88); d) Copia autentica del Auto con fecha 19 de enero de 1961, dictado por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, mediante al cual se hace la declaración de heredero y que éstos se hallan posesión legal de los bienes herenciales, del finado Pedro A.Rodríguez (fs.89).

Además, dicho apoderado de la parte opositora tachó por "extemporáneas" las pruebas documentales de la demandante así como la prueba testimonial también aducida.

La Sala, luego de que las partes expusieran sus respectivos argumentos sobre las tachas formuladas, por conducto del magistrado Presidente de la audiencia, resolvió lo siguiente: en cuanto a la última tacha sobre la prueba testimonial expresó que ya "... el tribunal de revisión ha aceptado que este tipo de prueba debe aducirse con la demanda, de manera que el tribunal pueda ya sea, llamar al testigo si así lo pide la contraparte o de lo contrario venir con los testigos y presentados en el acto de la audiencia"; y, respecto a la tacha de la prueba documental dijo que "... al momento de fallar se tendrán en cuenta las objeciones" formuladas por la demandante.

La Sala de la Corte, en consecuencia, debe decidir antes las tachas formulada durante el acto de la audiencia oral a las pruebas documentales aportadas por la revisionista. En ese sentido, considera que no procede la tacha formulada toda vez que se trata de una prueba documental, aducida oportunamente por la revisionista de conformidad con lo dispuesto por el numeral 5. del artículo 1194 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 1274 idem. Por tanto se admite la prueba documental.

Ahora bien, en adición a los aludidos elementos probatorios aportados por las partes que intervienen, la Sala, en cumplimiento a lo ordenado por el artículo 1198 del Código Judicial, pidió al Juez respectivo el expediente que dio lugar a la sentencia impugnada, y el cual fue remitido con 64 fojas útiles contentivo del proceso ordinario declarativo de prescripción adquisitiva dominio, instaurado por el prenombrado TOMAS ALONSO GÓMEZ sobre la mencionada finca No.5592, inscrita a nombre de la revisionista Marta Rodríguez Calderón.

Así las cosas, el conjunto de las pruebas documentales anteriormente reseñadas y aportadas al proceso de revisión en estudio, revela lo siguiente:

El Juzgado Municipal del Distrito de Chitré mediante sentencia de 22 de noviembre 1988, visible a fojas 75 a 79, ciertamente negó "... POR IMPROCEDENTE LAS PETICIONES PRESENTADAS POR LA PARTE DEMANDANTE. AL MISMO TIEMPO DADO QUE LA DEMANDA SIN FUNDAMENTO HA IRROGADO AL DEMANDADO, SE CONDENA EN COSTAS AL DEMANDANTE POR LA SUMA DE DOSCIENTOS BALBOAS B/.200.00 ". Proferido dicho fallo en el proceso denominado "juicio ordinario de petición de herencia" promovido por TOMAS ALONSO GÓMEZ o TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ, en virtud del cual reclamaba "... el reconocimiento de dos transacciones realizadas sobre la titularidad de la finca No. 5552, inscrita en folio 88, del tomo 693 de la Sección de Propiedad de la Provincia de Herrera", alegando haber adquirido los derechos herenciales sobre dicho inmueble mediante venta que le hiciera uno de los hijos del causante.

Es, pues, con base en la referida sentencia que la demandante invoca la causal de revisión contemplada, como se tiene expresado, en el numeral 2. del artículo 1189 del Código Judicial, porque a su juicio dicho fallo constituye el documento decisivo que no pudo aportar o introducir en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio, "... por causa de fuerza mayor, o por obra de la parte favorecida", en el cual se profirió la impugnada sentencia de 22 de mayo de 1988 dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo Civil.

En ese sentido, la recurrente sostiene que el prescribiente favorecido con la sentencia objeto de revisión, con la presentación originalmente de la referida demanda de "petición de herencia" interrumpió la prescripción adquisitiva de dominio, para solicitar posteriormente declaración judicial de pertenencia sobre la finca No. 5592, inscrita a su nombre al folio 88, tomo 693, de la Sección de Propiedad, Provincia de Herrera, del Registro Público; fundándose en el argumento de que "... la prescripción adquisitiva de dominio se interrumpe con la presentación de la demanda como la planteada originalmente por el señor TOMAS ALONSO (petición de herencia), debido a que, como es evidente, ya no existe la forma pacífica en la posesión, ni el ánimo dominis, pues al

demandante la primera vez reconocía la propiedad de mi cliente y esperaba que se le adjudicara en virtud de una compraventa irregular".

**CRITERIO DE LA CORTE**

La Sala de la Corte de salida se permite dejar sentado, que, no obstante los argumentos de la revisionista para justificar el motivo invocado, en este caso, estima que el hecho de que el prescribiente señor TOMAS ALONSO haya interpuesto en abril de 1987 una demanda para hacer valer los pretendidos derechos "como heredero cesionario" sobre el bien usucapiado, adquiridos mediante venta que se le hiciera, la presentación de dicha demanda de "petición de herencia como heredero" en modo alguno significa que se hubiese interrumpido la prescripción adquisitiva de dominio, alegada posteriormente por el prescribiente en el proceso ordinario que concluyó con la impugnada sentencia 22 de mayo de 1989, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo Civil.

Pues, como se observa del contenido de ambas sentencias se trata de dos procesos con pretensiones distintas, a pesar de que, ciertamente, ambos están relacionadas con la misma finca No. 5592. Pero, sin embargo, en el primero de ellos, la cuestión controversial giró sobre la titularidad del bien inscrito, alegando el demandante que tenía derecho a que se le declarara heredero cesionario del causante Pedro Antonio Rodríguez, y se le adjudicara la finca mencionada, en virtud de haber adquirido dichos derechos mediante venta que se le hiciera a pesar de estar ejerciendo la posesión del inmueble y haber construido sobre dicho bien, con ánimo de dueño, y, en el segundo, como consta en la actuación procesal del expediente contentivo del referido proceso ordinario, enviado como antecedente por el tribunal del conocimiento a esta Sala de la Corte, se refiere a la prescripción como uno de los modos de adquirir el dominio y demás derechos reales.

De donde se colige que la prueba documental aportada por la recurrente, vista la realidad del proceso ordinario de prescripción en su modalidad adquisitiva de dominio, no constituye ni reviste el carácter de un documento decisivo, ni la revisionista ha demostrado, pues a ella le corresponde la carga probatoria, que "... por causa de fuerza mayor, o por obra de la parte favorecida" lo que le impidió aportar la prueba al proceso", esto es, conforme a lo estatuido en el numeral 2. del tantas veces citado artículo 1189 del Código de Procedimiento Civil, en tratándose del extraordinario recurso de revisión.

Pues de lo antedicho, resulta evidente que, según la examinada actuación procesal que consta en los antecedentes, aun cuando la referida prueba documental se hubiese aportado al proceso, la misma no tiene el poder o fuerza de convicción de acreditar plenamente, que el contenido de la sentencia objeto de la revisión sería distinto, como lo revelan las pruebas documentales, testimoniales y la inspección judicial allegadas a dicho proceso para demostrar los presupuestos que conforme a la ley sustantiva panameña constituyen la prescripción adquisitiva de dominio sobre bienes inmuebles (Artículos 1675, 1678, 1679 y 1696 del Código Civil).

De todo lo expuesto puede, entonces, concluirse sin la menor duda que la recurrente no ha acreditado los supuestos de hecho para que prospere el recurso de revisión en estudio, el cual por tanto debe declararse infundado a tenor de lo dispuesto por el artículo 1204 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA INFUNDADO EL RECURSO DE REVISIÓN interpuesto por MARTA RODRÍGUEZ CALDERÓN, a fin de que se revise la sentencia de 22 de mayo de 1989 dictada por el JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, Ramo Civil, en el proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva de Dominio instaurado por el señor TOMAS AUGUSTO ALONSO GÓMEZ. Las obligantes condena en costas a cargo de la parte recurrente se fijan en la suma de CIENTO CINCUENTA BALBOAS CON 00/100 (B/.150.00).

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SICK LEAVE, S. A. INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE 30 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL JUZGADO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO DE COCLÉ DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO PROMOVIDO POR CARLOS TAPIA URRIOLA CONTRA SICK LEAVE Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Encontrándose el presente recurso de revisión con proyecto de resolución final, los abogados de las partes interesadas solicitaron a esta Sala se suspendiera la tramitación del negocio puesto que las mismas (partes) habían celebrado una transacción judicial, la cual sería sometida para la aprobación de esta Corporación. Es así como, el día siete (7) del presente mes y año el doctor **JULIO E. BERRIOS H.** de la firma forense **BERRIOS y BERRIOS**, apoderada especial de los recurrentes y el licenciado **ALEXIS JAÉN R.**, quien apodera los intereses del opositor a la revisión presentaron personalmente ante la Secretaría de la Sala la aludida transacción. La misma, según los prenombrados profesionales del derecho se regirá por las siguientes cláusulas:

"PRIMERO: EL DEMANDANTE Y EL DEMANDADO, declaran que han llegado a una transacción judicial y que pondrán término a todas las acciones judiciales existentes entre las partes, ya sean de naturaleza civil o penal.

SEGUNDO: Declara EL DEMANDANTE que renuncia, desde ya, a todo reclamo derivado de las acciones judiciales impetradas por la sociedad SICK LEAVE, S. A. y la Señora MIRIAM RUTH BAUTMAN YIELDING, actuando en su propio nombre y en representación de la sociedad antes mencionada.

TERCERO: El DEMANDANTE declara que se compromete a desistir de todas las acciones civiles y penales entabladas contra CARLOS TAPIA URRIOLA, para lo cual se compromete a preparar los escritos de desistimiento pertinentes.

CUARTO: EL DEMANDADO y EL DEMANDANTE declaran que las fincas envueltas en las distintas controversias judiciales planteadas entre las partes y otras personas, se distribuirán en la forma siguiente:

a) Dos (2) fincas para CARLOS TAPIA URRIOLA, varón, panameño, mayor de edad, casado en la actual vigencia, jubilado, vecino de esta ciudad y con cédula de identidad personal Número DOS AV-DOCE-OCHENTA Y UNO (2 AV-12-81): La finca Número 4154, inscrita al tomo 366, folio 438, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé y la Finca Número 4896, tomo 461, folio 48, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé, con un valor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) cada una.

b) Una finca para el Señor ALFONSO PROLL COSTAVITANTES, varón, panameño, mayor de edad, casado en la actual legislación y con cédula de identidad personal Número OCHO-DOSCIENTOS VEINTE Y UNO-DOS MIL TREINTA (8-221-2030), la cual se distingue con la finca Número 4932, inscrita al tomo 461, folio 196, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé, por la suma de NUEVE MIL BALBOAS (B/.9,000.00), en concepto de costas por haberlas éste adquirido en el proceso del juicio ordinario radicado en el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil.

c) Para INMOBILIARIA MAJAGUAL, S. A., persona jurídica inscrita a la ficha 220459, rollo 25789, imagen 0065, Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público, representada por NORBERTO DELGADO DURAN, varón, panameño, mayor de edad, soltero, economista, vecino de esta ciudad y portador de la cédula de identidad personal Número OCHO-DOS TRES CUATRO-SEIS TRECE (8-234-613), las fincas Número 4894, inscrita al tomo 461, del folio 40, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia (sic) de Coclé, la finca Número 4930, inscrita al tomo 461, del folio 188, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé, y la Finca número 4931, Inscrita al folio 192 del tomo 361, con un valor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) cada una.

QUINTO: EL DEMANDANTE renuncia a todo reclamo en contra del demandado o de cualquier otro miembro de su familia de ambas partes, que tengan relación directa con las acciones antes aludidas así como también el demando, en lo que le corresponda.

SEXTO: EL DEMANDANTE declara que lo que traspasa al Señor CARLOS TAPIA URRIOLA y al señor ALFONSO PROLL COSTAVITANTE, que son las fincas Número 4154, Número 4896 y la número 4932, respectivamente, se compromete el saneamiento en caso de evicción.

SÉPTIMO: EL DEMANDANTE y EL DEMANDADO se comprometen a gestionar y obtener la cancelación de cualquier acto que impida la libre inscripción de la presente transacción en el Registro Público. En caso de que se requiera el concurso de la contraparte, ésta se obliga a otorgarlo de conformidad con los requerimientos que hagan los Tribunales y los Despachos Públicos competentes.

OCTAVO: EL DEMANDADO se compromete a constituir una servidumbre de paso peatonal a través de la finca número 4154; la cual se marcará con posterioridad y la misma será constituida del lado de la finca antes mencionada que colinda con la señora ELSY PÉREZ DE BRIN."

Para resolver, tiénese:

La revisión, como recurso extraordinario que es, aunque en la doctrina se discuta su naturaleza (recurso o acción autónoma), está encaminada a revisar las sentencias dictadas por la Corte Suprema de Justicia, por un Tribunal Superior, o por un Juez de Circuito, cuando se trate de procesos de única instancia o cuando aún existiendo el recurso de apelación, éste no se haya surtido por cualquiera de los nueve (9) motivos que describe el artículo 1189 del Código de Procedimiento. De igual manera, también prevé la citada ley en los casos a que se refiere el ordinal 8° del mencionado artículo la revisión de los autos que, en proceso ordinario, oral o ejecutivo, ejecuten sentencias, libren mandamiento de pago, decreten embargo, ordenen o aprueben remates. La condición subjetiva del recurso está contemplada en el artículo 1193 al señalar el Código que tienen derecho a interponer la revisión las partes en los respectivos procesos o sus herederos o causahabientes, y aquellas personas que pueden ser perjudicadas por la resolución recurrida.

El marco introductorio anterior nos lleva de la mano a la transacción presentada en el recurso de revisión interpuesto por la señora MIRIAM RUTH BAUMAN YIELDIDNG actuando

en su propio nombre y como representante legal de la sociedad SICK LEAVE, S. A. contra la sentencia dictada por el Juzgado del Circuito de lo Civil del Circuito de Coclé el día 30 de noviembre de 1988 dentro del proceso ordinario de prescripción adquisitiva de dominio promovido por CARLOS TAPIA URRIOLA en contra de la aludida sociedad, MIRIAM RUTH BAUMAN YIELDING, FRED JACOB BAUMAN, PHILLIP JACOB BAUMAN, HOPE FERNS BAUMAN MCGREGOR, ELVA NANCY BAUMAN ADAMS y GEORGE JOEL MARCEAU. Tal como consta en el libelo que contiene la demanda de revisión el proceso ordinario de prescripción adquisitiva promovido por CARLOS TAPIA URRIOLA tenía como pretensión que judicialmente se declarará que él había adquirido por prescripción adquisitiva de dominio el derecho de propiedad sobre los siguientes inmuebles, ubicados en la provincia de Coclé:

"1. Finca 4,154, inscrita en el tomo 366, folio 458;

2. Finca 4,894, inscrita en el tomo 461, folio 40 y

3. Finca 4,896, inscrita en el tomo 461, folio 48".

La transacción judicial tiene una doble naturaleza jurídica, al mismo tiempo es un acto procesal y, a su vez, un negocio jurídico de derecho privado. La doctrina dominante le reconoce tres (3) requisitos que deben concurrir, necesariamente, para que exista una transacción válida. Son ellos:

a- La existencia de una controversia o proceso pendiente o eventual;

b- Que las partes al celebrar la transacción tengan por objeto o finalidad precaver o poner fin a una controversia surgida ente ellas, esto es, sustituir una relación jurídica dudosa e incierta por una relación jurídica cierta e indiscutible;

c- Que las partes se hagan concesiones recíprocas.

Por otro lado, cabe señalar que, cuando la Corte declara admisible un recurso de revisión ordena citar a cuantos hubiesen figurado como partes en el otro proceso, para que, dentro del término de un (1) mes, comparezcan a sostener lo que convenga a sus derechos. Se advierte, también, en dicho auto que pueden intervenir en calidad de litis-consorte cualquier persona o entidad a quien pueda agraviar, beneficiar o afectar, en cualquier forma, la resolución que se dicte. La constancia de autos evidencian que, en el presente recurso compareció, solamente, el señor **CARLOS TAPIA URRIOLA.**

Evidentemente lo anotado nos muestra que al confrontar el escrito de transacción presentado con los requisitos esenciales de la misma y el libelo que contiene la demanda de revisión se ponen de relieve dos circunstancias:

1- La transacción presentada por los abogados de las partes involucra a terceras personas que no fueron parte del proceso en que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita;

2- Que en el contrato de transacción se distribuyen fincas que no fueron objeto de prescripción adquisitiva de dominio como lo son la Número 4932, inscrita al tomo 461, folio 196, Sección del Registro Público, Provincia de Coclé distribuida al señor ALFONSO PROLL COSTAVITANTES y la Número 4931, inscrita al folio 192 del tomo 361 para INMOBILIARIA MAJAGUAL, S. A.

Se desprende entonces que, la transacción celebrada no puede ser aprobada por la Sala por contener en sus cláusulas condiciones que afectan a terceras personas y propiedades no involucradas en el proceso donde se profirió la sentencia cuya revisión se solicita. Considera la Corte conveniente señalar a los protagonistas en este negocio judicial, que no se opone a aceptar, dentro de los parámetros expuestos, los acuerdos que lleven a la terminación de este proceso, por lo que, concederá a los abogados de las partes un lapso prudencial para que presenten una transacción con puntos que guarden relación con la materia resuelta en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio que culminó con la sentencia del 30 de noviembre de 1988.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO APRUEBA la presente transacción.

Notifíquese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.
(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SICK LEAVE, S. A. Y MIRIAM RUTH BAUMAN YIELDING INTERPONEN RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1988, DICTADA POR EL JUZGADO DEL CIRCUITO DE LO CIVIL DEL CIRCUITO DE COCLÉ, EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO PROMOVIDO POR CARLOS TAPIA URRIOLA CONTRA SICK LEAVE, S. A. MIRIAM RUTH BAUM YIELDING, FRED JACOB BAUM, PHILIP JACOB BAUM McGREGOR, ELVA BAUMAN ADAMS Y GEORGE JOEL MARCEAU. MAGISTRADO PONENTE: RAÚL TRUJILLO MIRANDA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Nuevamente los apoderdos judiciales de las partes, dentro del juicio de revisión que promovió SICK LEAVE, S. A. y MIRIAM RUTH BAUMAN YIELDING contra CARLOS TAPIA URRIOLA han presentado al tribunal un escrito que contiene transacción judicial que realizan. En aquella ocasión mediante resolución de 21 de diciembre de 1993, la Sala no aprobó la transacción. Como sustentación de su posición la Corte manifestó, en su parte pertinente, lo siguiente:

> "Evidentemente lo anotado nos muestra que al confrontar el escrito de transacción presentado con los requisitos esenciales de la misma y el libelo que contiene la demanda de revisión se ponen de relieve dos circunstancias:
>
> 1- La transacción presentada por los abogados de las partes involucra a terceras personas que no fieron parte del proceso en que se dictó la sentencia cuya revisión se solicita;
>
> 2- Que en el contrato de transacción se distribuyen fincas que no fueron objeto de prescripción adquisitiva de dominio como lo son la Número 4932, inscrita al tomo 461, folio 196, Sección del Registro Público, Provincia de Coclé distribuida al señor ALFONSO PROLL CONSTAVITANTES y la Número 4931, inscrita al folio 192 del tomo 361 para INMOBILIARIA MAJAGUAL, S. A.
>
> Se desprende entonces que, la transacción celebrada no puede ser aprobada por la Sala por contener en sus cláusulas condiciones que afectan a terceras personas y propiedades no involucradas en el proceso donde se profirió la sentencia cuya revisión se solicita. Considera la Corte conveniente señalar a los protagonistas en este negocio judicial, que no se opone a aceptar, dentro de los parámetros expuestos, los acuerdos que lleven a la terminación de este proceso, por lo que, concederá los abogados de las partes un lapso prudencial para que presenten una transacción con puntos que guarden relación con la materia resuelta en el proceso de prescripción adquisitiva de dominio que culminó con la sentencia del 30 de noviembre de 1988."

La Sala considera que las partes, al presentar la nueva transacción han cumplido con las exigencias que se les indicó anteriormente. Esta nueva transacción es del tenor siguiente:

> "PRIMERO: EL DEMANDANTE y EL DEMANDADO, declaran que han llegado a una transacción judicial y que pondrán término a todas las acciones judiciales existentes entre las partes, ya sean estas de naturaleza civil o penal.
>
> SEGUNDO: Declara EL DEMANDANTE que renuncia, desde ya, a todo reclamo derivado de las acciones judiciales impetradas por la sociedad SICK LEAVE, S. A. y la señora MIRIAM RUTH BAUTMAN YIELDING, actuando en su propio nombre y en representación de la sociedad antes mencionada.
>
> TERCERO: EL DEMANDANTE declara que se compromete a desistir de todas las acciones civiles y penales entabladas contra CARLOS TAPIA URRIOLA, para lo cual se compromete a preparar los escritos de desistimiento pertinentes.
>
> CUARTO: EL DEMANDADO y EL DEMANDANTE declaran que las fincas envueltas en la presente controversia entre las partes y otras personas, y que fueron objeto del proceso de prescripción adquisitiva, cuya revisión se demanda, se distribuyen en la forma siguiente:
>
> a) Dos (2) fincas para CARLOS TAPIA URRIOLA, varón, panameño, mayor de edad, casado en la actual vigencia, jubilado, vecino de esta ciudad y con cédula de identidad personal Número DOS AV-DOCE-OCHENTA Y UNO (2 AV-12-81): La finca NÚMERO 4154, inscrita al toma 366, folio 438, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé y la Finca Número 4896, tomo 461, folio 48, Sección de la Propiedad, del Registro Público, Provincia de Coclé, con un valor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5,000.00) cada una. Estas fincas han tenido y tienen la siguiente superficie: a) Finca 4151, cuatro mil trescientos metros cuadrados y b) Finca 4896, una hectárea con ciento ochenta y siete metros cuadrados.
>
> c) Para la Sociedad SICK LEAVE, S. A., persona jurídica jurídica (sic.) inscrita en la ficha 138627, rollo 14240, imagen 113, Sección de Micropelículas (Mercantil), del Registro Público, representada por la Señora Miriam Ruth Bauman Yielding, mujer, mayor de edad, panameña, casada, vecina de San Clemente, Estado de California Estados Unidos de América y portadora de la cédula de identidad personal número 3-710-2150, la finca Número 4894, inscrita al tomo 461, del folio 40, Sección de la Propiedad, Provincia de Coclé del Registro Público.
>
> QUINTO: EL DEMANDANTE y EL DEMANDADO renuncian a todo reclamo, presente o futuro, entre ellos derivado del presente proceso o de cualesquiera otro proceso coetáneo al presente o contra cualesquiera otro miembro de sus respectivas (sic) familias, que tengan relación directa o indirecta con las acciones antes aludidas.
>
> En cuanto a las costas del juicio ordinario y del convertido en ejecutivo, los cuales suman la cantidad de DIEZ MIL TRESCIENTOS BALBOAS (B/.10,300.00), contenidas en las resoluciones cuya nulidad se pidió en este juicio de Revisión, tanto el actual demandante como el demandado, se comprometen a celebrar transacción en documento aparte, a fin de cancelar el monto de las mismas. Este documento de transacción deberá ser presentado al Juzgado

Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, para su debida ejecución, en un plazo no mayor de ocho (8) días, a partir del ingreso del expediente contentivo del juicio ordinario.

En caso de no poderse tramitar la referida transacción en dicho juzgado, las partes deberán otorgar la escritura pública correspondiente, que contenga la transacción, en donde se cancele o se pague la suma aludida.

SEXTO: EL DEMANDANTE declara que en relación con las fincas que por este medio se traspasa al señor CARLOS TAPIA URRIOLA, que son las fincas Número 4154 y Número 4896, se compromete al saneamiento en caso de evicción.

SÉPTIMO: EL DEMANDANTE y EL DEMANDADO se comprometen a gestionar y obtener la cancelación de cualquier acto que impida la libre inscripción de la presente transacción en el Registro Público. En caso de que se requiera el concurso de la contraparte, ésta se obliga a otorgarlo de conformidad con los requerimientos que hagan los Tribunales y los Despachos Públicos competentes.

OCTAVO: EL DEMANDADO se compromete a constituir una servidumbre de paso peatonal a través de la finca número 4154; la cual se marcará con posterioridad y la misma será constituida del lado de la finca antes mencionada que colinda con la señora ELSY PÉREZ DE BRIN.".

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, APRUEBA la presente transacción y ORDENA una vez ejecutoriada esta resolución, se ARCHIVE el negocio, se DEVUELVA al tribunal de origen el expediente que contiene el juicio de prescripción adquisitiva seguido por CARLOS TAPIA URRIOLA en contra de los recurrentes y otros acompañado con copia de esta resolución y se ORDENA al Registro Público sean inscritas las fincas, a que se contrae esta transacción, en los términos y condiciones establecidas, luego de realizadas las cancelaciones a que hubiere lugar.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) RODRIGO MOLINA A.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

DICIEMBRE 1993

## ACUSACIÓN PARTICULAR

ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA CONTRA CARLOS MANUEL ARZE MORENO, DIRECTOR GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DE JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 16 de diciembre del año en curso, el doctor JORGE RAMÓN VALDÉS CHARRIS, Procurador General de la Nación, remitió la nota DPG-1213, en virtud de la cual puso en conocimiento de este despacho que debido a su intervención como abogado en el proceso en el que se genera la denuncia presentada contra el doctor CARLOS ARZE MORENO, Director del Registro Público, está impedido de dar inicio a la investigación que le encomendó la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia en este caso.

Al revisar la documentación que se adjuntó a la denuncia presentada por el apoderado legal de JOSÉ ANTONIO RUIZ GARRIDO, se puede leer a fojas 43 una solicitud de certificación al Registro Público, hecha por el actual Procurador General de la Nación, en diciembre de 1992, en ejercicio profesional de la abogacía. El documento en si carece de valor en su contenido porque no tiene adherido los timbres correspondientes, pero sí es una evidencia clara de la diligencia forense hecha por el doctor Valdés, relacionada con este caso.

Si bien es cierto que no aparece otra información que aclare el grado de participación del solicitante, pues el acceso al Registro Público requiriendo una certificación o información es muy amplia y no permite deducir de que tales solicitudes vinculen al petente a un proceso determinado, la manifestación que hace el Jefe del Ministerio Público expresa un nexo derivado del ejercicio de la abogacía, que puede afectar el grado de imparcialidad de la investigación en el presente caso, que como todas las investigaciones debe ser transparente, más aún tratándose de servidores públicos.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL EL IMPEDIMENTO expresado por el Procurador General de la Nación y DISPONE que la instrucción del sumario se le asigne al Segundo Suplente, doctor Bolívar Dávalos Moncayo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

## AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

RECURSO DE APELACIÓN CONTRA EL AUTO DE SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL DICTADO DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A ERICK MACHUCA ARAÚZ POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ALEXANDER CALIXTO CHÁVEZ ESPINOSA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Sala el sumario que contiene la investigación iniciada por razón de la muerte violenta de **ALEXANDER CHÁVEZ ESPINOSA**, hecho de sangre ocurrido el 16 de octubre de 1992 en el Distrito de Changuinola.

Las constancias procesales dan cuenta del sumario iniciado en la Personería Segunda Municipal de Changuinola y concluidas posteriormente por la Fiscalía Segunda del Tercer Distrito Judicial.

En la vista fiscal correspondiente, el Fiscal Segundo del Tercer Distrito Judicial solicitó el sobreseimiento provisional de ERICH MACHUCA ARAÚZ por considerar que no había medios probatorios que lo vincularan con la muerte que se investigaba (fs.140-147).

Al valorar el sumario, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial arribó a la misma conclusión que el agente del Ministerio Público antes mencionado, por lo que resolvió, mediante Auto de 28 de mayo de 1993, sobreseer provisionalmente la causa.

En lo medular de su resolución, que lamentablemente es muy escueta, el Tribunal Superior sostuvo lo siguiente:

> "Esta colegiatura concuerda con la opinión externada por el Fiscal Segundo Superior, en considerar que según las pruebas recabadas hasta el momento, no existen suficientes medios probatorios que vinculen a Erick Machuca Araúz, con el homicidio de Alexander Calixto Chávez.
>
> Ante tal situación y a falta de mayores elementos probatorios surge la duda, que como es bien sabido ha de favorecer al reo y dictarse sobreseimiento

provisional, sin perjuicio de que en la eventualidad de que puedan aparecer nuevos elementos de convicción, que den lugar a la reapertura del proceso".

A juicio del Tribunal Superior la presunción de inocencia del imputado debe reconocerse si en el sumario no hay mayores elementos de juicio que vinculen al imputado.

El Tribunal Superior considera que la versión del imputado no ha sido desvirtuada por ningún elemento probatorio, lo que justifica la media provisional contenida en el auto recurrido.

Las constancias procesales dejan clara evidencia que el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial decretó la libertad provisional del imputado el 1 de marzo de 1993, decisión que no se cumplió por la imposibilidad de comunicarse con la agencia de Correo de Changuinola, según consta a fojas 117, pero no tomó ninguna medida adicional para hacer cumplir su decisión y se mantuvo al imputado detenido preventivamente hasta el 17 de junio de 1993, cuando se advierte tal situación por el Secretario del Tribunal Superior en la visita de Cárcel correspondiente.

Para resolver el mérito de la impugnación promovida por el acusador particular en contra del auto de 28 de mayo de 1993, es preciso efectuar algunas consideraciones previas sobre la calidad del acusador particular en este negocio.

Como se expresó en líneas anteriores, el Tribunal Superior sobreseyó la causa el día 28 de mayo de 1993 y dicha decisión fue notificada personalmente al Fiscal el día 3 de junio de 1993 y por edicto al resto de las partes el 4 de junio de 1993. EL edicto se desfijó el día 7 de junio de 1993, por lo que la resolución quedó debidamente notificada a partir del día 10 de junio de 1993.

Se observa que el acusador particular interpuso el recurso de apelación el día 9 de junio de 1993, a última hora de la tarde, cuando estaba por terminar el horario judicial que siempre vence a las 5:00 p. m.

Prima facie, por tanto, se trata de un recurso interpuesto en término oportuno.

Del contenido del expediente que integra el cuadernillo de la acusación particular promovida por la madre del occiso en contra de Erich Machuca Araúz, se deduce que la misma fue admitida por el Tribunal Superior el 28 de mayo de 1993 y se notificó al Fiscal el día 3 de junio de 1993 y al acusado el 18 de junio de 1993.

Si el acusador particular adquirió tal condición al quedar ejecutoriado el auto de 28 de mayo de 1993, hecho que no puede ser antes del 18 de junio de 1993, cuando se notificó al acusado, por ello, en estricto derecho, la calidad de apoderado judicial de la acusadora particular que ostenta el licenciado Florencio Castillo no se había perfeccionado el día 9 de junio de 1993.

Las resoluciones judiciales según principio procesal, no pueden surtir efecto antes de su ejecutoria y en el caso que nos ocupa, la acusación particular tiene tal carácter a partir del 22 de junio, fecha en la que se cumplen los dos días siguientes a la notificación personal que se efectuó al señor Erich Machuca Araúz.

A la Sala no escapa el hecho de que la obligación de notificar corresponde a los Tribunales y la dilación en este caso no puede perjudicar la legitimación de licenciado Castillo para ejercer el derecho a impugnar la resolución dictada.

En este expediente el hecho punible está debidamente acreditado, tal como lo reconocen el agente del Ministerio Público y el Tribunal Superior. Con relación a la vinculación causal al delito investigado de la conducta observada por Erick Machuca Araúz, la Sala advierte que aparecen indicios graves que lo ubican en el lugar de los hechos como consecuencia de la comisión de actos delictivo a que antecedieron a la muerte violenta de Alexander Chávez Espinosa.

Es indispensable que se practiquen las pruebas testimoniales y documentales que aduce el recurrente y que se lleven a cabo todas aquellas diligencias que le den seguimiento a la conducta observada por el imputado durante el recorrido hecho en compañía de Chávez Espinosa e inmediatamente después de su deceso, al igual que las que surjan como consecuencia de la ampliación.

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto apelado y ordena la ampliación del sumario en el término de un mes a partir del reingreso del expediente al despacho del funcionario de instrucción.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO SEGUIDO CONTRA AGRIPINO TORO LOZANO POR DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JOAQUÍN ESPINO D. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia y en grado de apelación, ingresa a la Sala Segunda el expediente que contiene el sumario instruido contra **AGRIPINO TORO LOZANO** por el delito de tentativa de homicidio en perjuicio de **JOAQUÍN ESPINO D.**

El auto objeto de este recurso de apelación, con fecha de 30 de junio de 1993 al valorar la investigación realizada en el presente caso llega a la conclusión de que cabe un sobreseimiento provisional a favor del indagado, pues si bien se acredita el hecho delictivo en grado de tentativa, no se cuenta con los elementos probatorios suficientes para vincular la conducta de AGRIPINO TORO LOZANO al objetivo final de destrucción de la vida humana.

El acusador particular, licenciado Alvaro Cedeño Barahona, quien representa los intereses de Joaquín Espino en el presente caso, al sustentar la apelación anunciada al momento de notificarse el auto referido, considera que debe revocarse el auto provisional por el Tribunal y en su lugar abrir causa criminal contra Agripino Toro Lozano ya que el sólo hecho de disparar un arma de fuego contra la anatomía de su representado, es un indicador claro de la intención que motivara ese comportamiento.

De conformidad con la constancia de autos, el 19 de octubre de 1991, pasada la media noche, se suscitó en el área comprendida en la calle Ramón Arias, edificio Elizabeth, en el Nuevo Reparto El Carmen, un incidente derivado de la acción realizada por Joaquín Espino al mover su auto del estacionamiento, arrastrando con el mismo un automóvil Volkwagen que se encontraba estacionado en la misma área y que pertenecía a un visitante en una fiesta que se llevaba a cabo en el apartamento de un inquilino del edificio Elizabeth. Las personas que se encontraban departiendo en la fiesta mencionada, al observar que el automóvil era remolcado por el pick up que conducía Joaquín Espino, dieron la voz de alarma, acusando de ladrón al conductor del Pick up que remolcaba el automóvil. De inmediato los asistentes al acto social mencionado, bajaron rápidamente del cuarto piso y uno de ellos, Agripino Toro Lozano, al reconocer en Joaquín Espino al sujeto que pretendía llevarse el automóvil de su amigo, lo conminó a que saliera del auto y como no lo hizo, acto seguido sacó una pistola de su propiedad con la que pretendió obligarlo a que saliera y en el forcejeo se produjo el disparo que le rozó en la cabeza, dando lugar a una incapacidad definitiva de ocho días, que no puso en peligro su vida.

Los hechos antes descritos son apreciados y narrados con algunas variantes por los protagonistas y los expectadores del mismo, entre ellos, el guardia de seguridad del edificio, que llegó cuando ya se había producido el disparo e intervino para que se le prestara la asistencia médica debida al señor Joaquín Espino.

El caso, tal como se ha expresado antes, se registró en octubre de 1991 y un mes después se presentó el escrito para formalizar la acusación particular, la cual al ser admitida, generó una serie de diligencias, unas de carácter documental, otras periciales y las declaraciones de las personas que en alguna forma tuvieron conocimiento del hecho. En un principio los criterios de los diferentes agentes del Ministerio Público, oscilaron entre darle carácter delictivo al hecho investigado asignándolo a un Juzgado de Circuito, luego lo pasaron al Tribunal Superior y, en la Vista Fiscal remisoria se recomendó la posibilidad de calificarlo como lesiones personales, que dada su incapacidad definitiva inferior de 20 días, la competencia correspondía a las autoridades de policía.

Según la valoración hecha por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, se trata de un delito de homicidio en grado de tentativa, razón por la cual se admitió la acusación particular interpuesta por el ofendido, no obstante, en la etapa intermedia se llega a la conclusión "de que la actitud decidida de Agripino Toro Lozano de enfrentar con un arma a Joaquín Espino, se basó en la errada creencia que protegía bienes en peligro y que tenía que capturar al individuo sorprendido en flagrancia, a pesar de que el peligro era inexistente". A esto se agrega que en la declaración jurada de Joaquín Espino, quien en su primera versión, presentaba aliento alcohólico, aceptó que hubo una confrontación pues el arrastre que hizo su automóvil del Volkswagen estacionado en esa área, fue un hecho accidental al engancharse con la defensa del pick up, ya que en ningún momento pretendió hurtar dicho automóvil y menos aún, usar su auto como remolcador.

En la resolución apelada se sostiene que el hecho que generó esta investigación recoge un fenómeno conocido como "defensa putativa" en virtud de que el indagado Toro Lozano reaccionó ante una falsa agresión, al considerar que estaba enfrentando un caso flagrante de hurto de automóvil, pero que en la realidad no se daban los presupuestos para tal hecho punible y por tanto esa conducta de lesionar al supuesto agresor sin eliminar la totalidad de la antijuridicidad del acto alcanzaba una eximente incompleta.

La Sala después de revisar las constancias de autos, arriba a la conclusión de que la medida procesal adoptada al dictar un sobreseimiento provisional en el presente caso, mantiene abiertas las posibilidades de que se reabra la investigación en el supuesto de que en el futuro se aporten otras evidencias o medios probatorios idóneos que permitan sustentar la vinculación de Toro Lozano como autor del delito contra la vida e integridad personal en grado de tentativa contra Joaquín Espino.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto proferido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia el 30 de junio de 1993 en este caso y que fuera objeto de apelación por la acusación particular.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

SUMARIO SEGUIDO A JOSÉ VIRGILIO QUIROZ FERRO, SINDICADO POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD E INFRACCIÓN DE LOS DEBERES DE SERVIDORES PÚBLICOS EN PERJUICIO DE AURORA AROSEMENA GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Sala, en su función de Tribunal de segunda instancia, el proceso penal que contiene auto del 19 de agosto de 1993, por el cual se sobresee definitivamente a Virgilio Quiroz Ferro por los delitos de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos cometidos en perjuicio de Aurora Arosemena Grimaldo.

La indicada resolución fue apelada por la parte acusadora y corresponde a la Sala decidir la alzada, en los términos previstos por el artículo 2428 del Código Judicial. En razón de la calidad funcional del imputado -Gerente Regional del Banco de Desarrollo Agropecuario en la Provincia de Coclé, en funciones de Juez Ejecutor- (a.2481 C.J), también es del caso atender la consulta ordenada por el a-quo en el respectivo auto, lo que encuentra asidero legal en el artículo 2481 del Código de Procedimientos.

Expresa el recurrente que su disconformidad con el fallo consiste en que, a su juicio, el sumariado cometió los delitos que se le imputan al ordenar el secuestro de bienes que no estaban constituidos como garantía hipotecaria y prendaria a favor del Banco de Desarrollo Agropecuario. Sostiene que la resolución de 26 de abril de 1992, por medio de la cual el Banco de Desarrollo Agropecuario levanta las cautelaciones decretadas sobre algunos bienes de su mandante que no habían sido dados en garantía, constituye una confesión paladina del abuso, además de que, según afirma, "la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, en Auto de 22 de mayo de 1992, decide levantar el embargo decretado sobre los dos vehículos a que se ha hecho referencia, de propiedad de nuestra mandante" (f.563), hecho que lamentablemente no se encuentra acreditado en el proceso. Considera el recurrente que está demostrado el delito de abuso de autoridad e infracción de los deberes de los servidores públicos, por considerar inaceptable la excusa del imputado en el sentido de que los bienes se incluyeron en el embargo para asegurar el pago de la obligación.

Otra censura que de que da cuenta la alzada consiste en que la resolución dictada por el juez ejecutor se extendió a unos patos que eran de propiedad de Diógenes Aníbal Arosemena, aves que fueron vendidas "al ojo", sin pesarlas (f.565).

Concluye el recurrente afirmando que el abuso de autoridad se produjo "porque los bienes arbitrariamente embargados no habían sido incluidos entre las garantías ofrecidas para responder de la obligación creada con lo del préstamo hipotecario", por lo que solicita la revocatoria del auto objeto de censura y que, en su lugar, se decrete el enjuiciamiento del funcionario acusado (f.565).

Consta en la sumarias que el 27 de febrero de 1985 Aurora Arosemena suscribió contrato de Préstamo con Garantía Hipotecaria y Prendaria con el Banco de Desarrollo Agropecuario, Provincia de Coclé, por la suma de B/.40.000.00 y línea de crédito hasta la concurrencia de B/.16.155.00 (fs.6-13). El 19 de julio de 1991 el funcionario acusado dictó auto ejecutivo y de embargo contra bienes dados en garantía, además de dos vehículos de propiedad de la demandada "para el aseguramiento del pago de la obligación", ya que la señora Arosemena Grimaldo adeudaba al banco estatal la suma de B/.59.173.71 (f.94-95). El 2 de agosto de 1991 el juez ejecutor dictó auto ejecutivo y de embargo adicional, mediante el cual cauteló otros bienes de la deudora, entre ellos 98 patos pequineses (f.140). Ambas actuaciones administrativas sirvieron de base para que Aurora Arosemena presentara acusación particular contra José Virgilio Quiroz Ferro, por considerar que el acusado cometió el delito previsto en el artículo 336 del Código Penal al cautelar dos vehículos que no fueron dados en garantía y por vender 18 lechones sin pesar y 80 patos pequineses "al ojo" (f.3).

El delito de abuso de autoridad es un delito de dolo, requiere que el servidor público cometa un acto **arbitrario** con ocasión del ejercicio de sus funciones, generador de un agravio. No se ha acreditado que el juez ejecutor tuviera conciencia de la ilicitud de los actos que realizaba, los cuales estaban destinados a **hacer efectivo un crédito a favor del Estado**, función que le compete dentro del conjunto de sus responsabilidades ordinarias. En el caso de los automóviles, resulta incuestionable que la actuación del imputado se rigió por el procedimiento que establece el artículo 1771 del Código Judicial, es decir, que por comprobado que el bien gravado no cubría el crédito hipotecario, procedía legalmente la cautelación de otros bienes del deudor. Es pertinente señalar que esta misma Sala ha manifestado que "resulta impropio la utilización de la vía jurisdiccional penal para atacar situaciones que no alcanzan el carácter de delictivas y que tienen asignadas otros medios idóneos de reclamo" ( Auto del 3 de agosto de 1990 dentro del proceso seguido contra Jorge de la Guardia Bayer por el delito de infracción de los deberes de servidores públicos). Tanto el exceso en los secuestros y embargos judiciales, como la inclusión de bienes de terceros, es un hecho frecuente en la actuación jurisdiccional, para lo cual la ley tiene previstos remedios procesales idóneos.

En lo que respecta a los patos pequineses, la Sala comparte el criterio del a-quo en el sentido de que no existe elemento probatorio que indique que fueran de propiedad del doctor Arosemena Grimaldo. Por el contrario, Manuel Sabas González Almengor sostiene que a la finca de la misión agrícola China, ubicada en Montijo, se apersonaron la señora Arosemena y Eduardo Saa "a adquirir patitos de raza pequinés" (f.426), versión que confirma Benjamín Beltrán Aguilar, quien manifiesta que "esos animales los trajeron de Montijo. Los llevaron la profesora Aurora y Eduardo Saa" (f.480). De igual forma debe desestimarse el argumento del recurrente en el sentido de que las aves fueron vendidas sin ser pesadas, toda vez que, previo a dicha venta, se realizó diligencia de inventario y re-avalúo donde se consigna que "todos los animales fueron pesados" (f.144), siendo uno de los suscriptores de esta diligencia Benjamín Beltrán, quien era trabajador en la finca de la señora Arosemena. Cabe agregar que el dinero producto de la venta de los patos consta en el certificado de garantía No. 165374 del 22 de agosto de 1991 (f.160), expedido por el Banco Nacional de Panamá (f.160), suma que guarda relación con los recibos No. 346403 (f.147) y No. 346203 (f.148), lo que indica que el funcionario acusado cumplió a cabalidad el presupuesto establecido en el artículo 1727 del Código Judicial.

En lo concerniente al embargo de las aves, estas fueron cauteladas **después** de realizado el embargo de los bienes otorgados en garantía hipotecaria. De esta diligencia derivó la diligencia de inventario y avalúo, el cual ascendió a la suma de B/.31.187.00, por lo que la deuda aun no se encontraba cubierta (f.105). De allí que el imputado procediera al embargo de otros bienes de la deudora, entre ellos los patos, "para el aseguramiento del pago de la obligación", lo que indica que la actuación del funcionario acusado está amparada en el artículo 1771 del Código Judicial, en razón de que denunció y embargó otros bienes cuando los otorgados en hipoteca no alcanzaron para cubrir el crédito hipotecario. Las anteriores consideraciones conducen a la Corte a concluir que la inconformidad del recurrente con el fallo apelado carece de apoyo jurídico, aunado a que los hechos que se le imputan al funcionario acusado no revisten las características de un hecho punible, sino de naturaleza administrativa, razón por la cual no se puede acceder a la pretensión de que se conoce, para que el Estado ejerza el ius puniendi con fundamento en los actos denunciados por la parte acusadora.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto del 19 de agosto de 1993 mediante la cual se sobresee definitivamente a José Virgilio Quiroz, en base al numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

SUMARIO SEGUIDO A PEDRO ROMERO MOLINAR POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ANDRÉS AVELINO CEBALLOS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia elevó en consulta ante la Sala Segunda de la Corte Suprema el expediente que contiene el auto de 20 de octubre de 1993, mediante el cual se dictó sobreseimiento definitivo a favor de **PEDRO ROMERO MOLINAR**, dentro de las sumarias adelantadas por razón de la muerte de **ANDRÉS AVELINO CEBALLOS LOBÓN**, hecho ocurrido el primero de marzo de 1992, en la ciudad de Colón, cerca de la piquera o terminal de buses.

La consulta se origina en el hecho de que ROMERO MOLINAR, al momento de efectuar el disparo que quitó la vida a CEBALLOS LOBÓN, era servidor público, pues ejercía el cargo de agente de la Fuerza Pública, tal como consta en el documento que reposa a foja 84. Por lo que con fundamento en el artículo 2481 del Código Judicial, la Sala pasa a examinar el negocio a fin de resolver la consulta.

El primero de marzo de 1992, momentos en que los Cabos Segundos MARIO ESPINOZA y PEDRO ROMERO se encontraban haciendo ronda de vigilancia, observaron que un sujeto forcejaba con unas indias kunas, por lo que ROMERO dio la voz de alto, expresando que era policía. Según la versión de los dos agentes, el sujeto, al darse cuenta de la presencia éstos, inició carrera, en vista de lo cual ROMERO efectuó un disparo al aire, después otro disparo, también al aire y debido a que el sujeto no detuvo su marcha, ROMERO, quien corría a unos 32 metros tras aquél, le efectuó un disparo a los pies, resultando CEBALLOS con herida en la cabeza, muriendo tres días después a causa de herida penetrante por arma de fuego en cráneo.

Según el imputado, el sujeto al momento de ser sorprendido amenazaba con un cuchillo en el cuello a una de las tres indígenas, a la cual le arrancó algo del cuello.

Con relación al supuesto asalto, salvo la versión de los agentes del orden, no reposan en el expediente evidencias que comprueben la comisión de tal ilícito. El cuchillo con que fue visto el hoy occiso no fue recuperado, así como prendas algunas. En cuanto a las afectadas, según ROMERO, inmediatamente éstas abordaron un bus de la ruta Panamá-

Colón, por lo que a pesar de que un patrulla le dio seguimiento al bus de pasajeros, aparentemente las personas de origen kuna se bajaron de dicho bus con anterioridad, sin que hubiesen podido ser ubicadas.

Fue el padrastro de CEBALLOS LOBÓN, CRISTÓBAL DE LEÓN, quien presentó la denuncia por el homicidio, manifestando que el día de los hechos su hijastro, de 20 años de edad, había salido a comprar pescado (f. 16).

En ausencia de una versión más completa de los hechos, el auto de sobreseimiento ha sido dictado atendiendo básicamente a lo dicho por el imputado y su acompañante.

Es de anotar que a las sumarias fueron agregadas copias simples (fs. 103-104), y posteriormente copias autenticadas (fs. 129-130), de la versión ofrecida ante la Dirección de Investigación e Información Policial por dos personas que supuestamente presenciaron el incidente suscitado entre Ceballos y las jóvenes kunas. Sin embargo, una de esas personas, Efraín Aguirre, posteriormente rindió declaración ante la autoridad de instrucción, y manifestó que no había presenciado los hechos y que fue a otras personas a las que les escuchó decir sobre dicho incidente (f. 200-201).

El Segundo Tribunal Superior dictó sobreseimiento definitivo por considerar que Romero Molinar actuó en el cumplimiento de un deber legal, pues se encontraba en el ejercicio de sus funciones. Así describe el Tribunal la conducta del imputado:

> "... al defender a una dama de la agresión injusta que fuera objeto por un sujeto que con arma blanca le robaba, sale en su persecución como es su deber y luego de advertirle en forma verbal y con disparos al aire, aquel no obedece, a la autoridad representada por el agente Romero Molinar; y al tener la intención de herirlo en las piernas, dado como lo ha manifestado el agente de policía y cuya veracidad está fuera de dudas; dispara y el sujeto trastabilló y lo hiere en la cabeza ocasionándole la muerte. Lo que indica que Romero Molinar de manera responsable afrontó el deber que le correspondía como agente de la Policía Nacional, cuya función es velar por la seguridad de los ciudadanos y defensa de los derechos de éstos, cumplió con ello al dar persecución al sujeto, y si bien, ello trajo como consecuencia la muerte de CEBALLOS LOBÓN, no menos cierto es que la conducta del indagado no puede calificarse de acción dolosa toda vez que está comprendida dentro de las causas de justificación ..."

Desafortunadamente gran porcentaje de los casos que llegan en consulta a esta Sala por razón de enfrentamientos entre agentes de la policía y miembros de la comunidad, se dan en circunstancias como estas, en las que habiendo o no testigos presenciales de los hechos, la participación o colaboración de éstos en la investigación es casi nula, lo que impide a las autoridades judiciales resolver con apego a la realidad de los hechos. Por otro lado, la participación de los familiares de la víctima, que también es determinante en todo proceso, en el caso que nos ocupa, no fue de gran ayuda, debido a que no presenciaron los hechos en los cuales Ceballos Lobón resultó herido.

No habiendo otras evidencias, más que las mencionadas, la Sala considera que es procedente confirmar el auto consultado, cuyo sobreseimiento definitivo tiene fundamento en el numeral tercero del artículo 2210 del Código Judicial.

En virtud de lo anotado, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto consultado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIO SEGUIDO A ALBERTO AYARSA MURILLO, DOMINGO GONZÁLEZ Y ENRIQUE ORIEL CORTEZ CUPAS, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE EDUARDO FRANCISCO CAMPBELL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado en grado de consulta a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene la instrucción sumarial iniciada en ocasión de la muerte de **EDUARDO FRANCISCO CAMPBELL BROWN**, y en donde aparecen como sindicados los señores **ALBERTINO AYARZA MURILLO**, **DOMINGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ** y **BOLÍVAR ORIEL CORTES CUPAS**, todos servidores públicos que ejercen funciones como miembros de la Policía Nacional.

En su debida oportunidad, el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 13 de septiembre de 1993, dictó un sobreseimiento definitivo en favor de los imputados. Para llegar a esa conclusión el tribunal a-quo consideró que, a pesar de que los peritos en balística manifiestan que los hechos no ocurrieron como manifiestan los imputados, existe un cúmulo de pruebas que los favorecen y que configuran la causa de justificación contemplada en el artículo 19 del Código Penal, según la cual no delinque quien actúa en cumplimiento de un deber legal.

Ahora bien, antes de emitir un pronunciamiento de fondo, es necesario echar un vistazo a las piezas procesales que componen el presente negocio.

Conforme se desprende del expediente, siendo aproximadamente la 1:50 de la madrugada del 3 de junio de 1992, dos sujetos, uno moreno vestido con pantalón oscuro y otro más claro, bajo y gordito, ingresaron a la pensión "AMÉRICA", ubicada en avenida Justo Arosemena, y cometieron un robo a mano armada.

La forma como tales sujetos se comportaron antes de entrar a la referida pensión, llamó la atención de tres miembros de la Fuerza Pública que prestaban servicio en la Clínica Chemsa, la cual está ubicada diagonalmente al frente. Inmediatamente los miembros del orden público, a saber: el Cabo 2do. ALBERTINO AYARZA, el Cabo 2do. DOMINGO GONZÁLEZ y el Agente 11208 BOLÍVAR CORTEZ, cruzaron la calle con el propósito de dirigirse hacia la pensión América, pero antes de llegar a dicho lugar, observaron que los dos sujetos salían corriendo, razón por la cual decidieron "corretearlos".

Según la versión de los citados servidores públicos, el sujeto moreno efectuó un disparo, lo cual hizo que tanto AYARZA como CORTEZ efectuaran disparos al aire con el objeto de que aquél se detuviera. AYARZA dice haber realizado dos disparos, en tanto que CORTEZ manifiesta haber disparado solamente una vez.

En ese orden de ideas, consta en el proceso que mientras AYARZA y CORTEZ seguían al moreno, GONZÁLEZ logró detener al sujeto más claro, a quien identifica en la indagatoria como "al fulo", quien le dijo a GONZÁLEZ que le habían robado, motivo por el cual lo dejó ir y se dirigió hacia donde estaban sus compañeros para seguir persiguiendo al moreno que se daba a la fuga.

Es así como finalmente llegan a las inmediaciones del edificio que alberga las oficinas del Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que viene a ser precisamente el lugar donde se encontró el cadáver de EDUARDO FRANCISCO CAMPBELL BROWN, quien a la postre resultó ser un miembro de la Policía Técnica Judicial.

Ahora bien, en primera instancia el cabo DOMINGO GONZÁLEZ le expresó a los detectives José Ríos y Luis Castillero que el cabo ALBERTINO AYARZA fue quien hirió mortalmente a CAMPBELL BROWN (fs. 5). No obstante, observa la Corte que en el informe suscrito por los citados detectives no se especifica la forma ni el momento preciso en el que CAMPBELL fue lesionado mortalmente.

Las investigaciones siguieron su curso y los funcionarios del orden público fueron sometidos a indagatoria. En esta diligencia los sindicados variaron la versión suministrada en el informe de novedad visible a fojas 21-22 del expediente y, ahora, ante el agente del Ministerio Público, AYARZA y CORTEZ le atribuyen la autoría del hecho punible a GONZÁLEZ, cosa que éste niega, reiterando, como contraposición, sin ofrecer detalles de tal acontecimiento, que AYARZA fue quien ultimó a CAMPBELL BROWN.

Pues bien, tras el análisis de los testimonios de los imputados, se deducen elementos de juicio que apuntan a GONZÁLEZ como la persona que le ocasionara la muerte a CAMPBELL BROWN. Veamos:

A fojas 60 DOMINGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ trata de desvincularse de los hechos, dando el siguiente testimonio:

> "logré alcanzar a mis compañeros cerca del Ministerio de Relaciones Exteriores en avenida Perú; les grité a mis compañeros Ayarza y Bolívar que siguieran detrás del Moreno, en tanto que yo le cerraba el paso; todo ésto ocurría en la parte frontal del Ministerio de Relaciones Exteriores, quedando de esta manera el Moreno cercado entre nosotros tres; por lo que el Moreno decidió colocarse a un lado de las escaleras que conducen a la entrada principal del Ministerio de Relaciones Exteriores; inmediatamente con mi arma en la mano derecha le grité al Moreno, Hey sal de ahí!; pero en eso sonó un disparo proveniente del lugar donde se encontraba el moreno, razón por la que percuté mi arma de reglamento pero no se produjo disparo alguno; en tanto que mis compañeros se cubrían atrás de un poste de luz ..." (sic) (subraya de la Sala).

Más adelante, a fojas 62, en respuesta a la pregunta formulada por el funcionario de instrucción en el sentido de que expresara la distancia que lo separaba a él del moreno y al moreno de sus compañeros AYARZA y CORTES en los precisos momentos cuando CAMPBELL BROWN, según su deposición, accionó el arma de fuego que cargaba, GONZÁLEZ dijo: "yo me encontraba a una distancia de diez metros y mis compañeros se encontraba (sic) a unos quince metros o quizás veinte de distancia" (subrayado de la Sala).

Al analizar esta versión, y confrontarla con otras probanzas que recoge el sumario, se llega a la conclusión de que la coartada de GONZÁLEZ pierde consistencia, pues tanto AYARZA como CORTEZ son contestes al manifestar que fue GONZÁLEZ el autor del homicidio objeto de la presente encuesta.

Así, por ejemplo, BOLÍVAR ORIEL CORTEZ CUPAS a fojas 64 del expediente manifiesta lo siguiente:

> "... el sospechoso dobló hacia la derecha seguimos persiguiéndolo entonces al parecer el sujeto sospechoso giró por la calle que esta frente al edificio del Ministerio de Relaciones Exteriores, al yo llegar a la esquina de dicha calle ya AYARZA se encontraba detrás de un poste de tendido eléctrico, en el lugar también iba una pareja que se encontraban señalando hacia unos arbustos donde supuestamente se encontraba el sospechoso, seguidamente a mi llegada pude escuchar una detonasen y a GONZÁLEZ cuando

> se retiraba de la parte del frente del edificio y se paró en un costado del mismo edificio mientras que llamaba por el radio portátil a nuestra base, luego regresó y gritó en varias ocasiones `HEY SAL DE HAY, SAL CON LAS MANOS EN ALTO'... después llegó el subteniente ZÚÑIGA y preguntó por la novedad respondiéndole GONZÁLEZ que el sujeto que se encontraba en el arbusto le había efectuado un disparo cosa que es falso ya que solamente se pudo escuchar la detonasen que hizo GONZÁLEZ ..." (sic). (la Subraya es de la Sala).

Más adelante expresa CORTEZ que GONZÁLEZ le manifestó lo siguiente: "YO SE QUE YO LO MATE PERO NO ME VOY A HECHAR LA CULPA". Y agrega que GONZÁLEZ les pidió a él y a AYARZA que dijeran que el sospechoso le había disparado (fs 65).

Por su parte, ALBERTINO AYARZA declaró a fojas 72-73 lo siguiente:

> "... el sujeto en huída, cruzaba la Ave. Cuba y tomaba la calle que pasa frente al ministerio de Relaciones Exteriores, pero luego toma rumbo por un lote de tierra que está entre el edificio de Relaciones Exteriores y otro que está cerca de la Ave. Cuba, para luego salir a la calle que pasa por la parte posterior del edificio de Relaciones Exteriores tomando luego hacia la izquierda. La distancia entre el sujeto que huía y nosotros que lo perseguíamos, era de 15 metros aproximadamente, por lo que cuando salí a la otra calle y mirar hacia la calle que sube hacia el antiguo teatro Lux, noté que el sujeto había desaparecido. Pude observar que en la parte posterior (CORRIJO) superior de una escalera que se encuentra en la parte posterior del edificio de Relaciones Exteriores había una pareja agazapada y le pregunté qué dónde estaba el sujeto que había pasado corriendo por ese lugar, y ellos me dijeron que se encontraba escondido en los arbustos. Como yo me encontraba en la mitad de la calle, lo que hice fue dirigirme hacia un poste de luz que está a un lado de la calle, frente diagonalmente con el lugar donde se me había dicho que se había escondido el sujeto, para cubrirme, en caso que este sujeto disparase. En los momentos que me iba a cubrir en el poste, llega el Agte. CORTEZ y se me hace a un lado. Mientras nosotros nos cubríamos con el poste, el cabo GONZÁLEZ, dio la vuelta por la parte frontal del edificio, en cuya parte posterior se había escondido el sujeto que estábamos persiguiendo. Allí comenzamos a gritarle, que saliera, cuando de pronto escuchamos una detonación que provenía del lugar donde estaba escondido el sujeto que persequimos, viendo un destello de luz, por lo que de inmediato, me cubro completamente con el poste, y al momento de mirar nuevamente hacia el lugar donde vino la detonación, me percato que viene saliendo el CABO GONZÁLEZ, quien camina hacia la mitad de la calle y comienza llamar por radio, pidiendo refuerzos al área A, lugar donde se presentan dos patrullas, y de una de ellas baja un Subteniente, a quien se le acerca el Cabo GONZÁLEZ. Mientras esto sucede, CORTEZ y yo nos mantenemos en el poste de luz, cubriéndonos, y les grito, que tuvieran cuidado, ya que el sujeto estaba armado. Observo que GONZÁLEZ se comporta muy confiado, y solicitan una linterna, y luego que la tienen, les indica donde está el sujeto y llegan hasta el lugar donde se encontró el cadáver. Al ver esto, me dirigí al sitio, y observé que se encontraba el cuerpo de un sujeto moreno inerte ..." (sic) (subrayado de la Sala).

Al analizar los testimonios anteriores, la Sala llega a la conclusión de que existen suficientes elementos de convicción para enjuiciar a DOMINGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ. Ello es así porque la narración de los hechos pone en evidencia que aparentemente hubo exceso en el desempeño de sus funciones.

En efecto, todo parece indicar que el ahora occiso se encontraba acorralado por tres miembros del orden público, en condiciones en que bien hubiera podido ser persuadido para que se entregara. Pero esto último, aparentemente, no se intentó, sino que por el contrario, CAMPBELL BROWN fue lesionado a una distancia tan corta (ver protocolo de necropsia en el que se describe que la herida presentaba ahumamiento), que pareciera que el mismo simple y sencillamente fue ejecutado.

Si bien la doctrina ha reconocido que el cumplimiento de un deber legal exime de responsabilidad al agente, lo cierto es que los tratadistas también han reconocido que esta causal no es absoluta y que tiene límites. Sobre el particular José María Rodríguez Devesa señala lo siguiente:

> "El cumplimiento de un deber ha de ajustarse a la norma jurídica que le sirve de base. Sus límites se hallan en el respeto que el propio ordenamiento jurídico impone a otros bienes jurídicos, que pueden entrar en colisión en algunas ocasiones con las exigencias profesionales. Por ello han de ponderarse en cada caso las circunstancias que concurren, de las que pudieran deducirse excesos que no quedarían amparados por la eximente." (Derecho Penal Español, parte general, decimotercera edición, Editorial Dykinson, Madrid, 1990, p. 511).

Nuestra legislación adopta el criterio esbozado por el citado autor, pues, mientras que por un lado el artículo 19 del Código Penal establece como causa de justificación el cumplimiento de un deber legal, por el otro reconoce que puede existir exceso de parte del agente y, en este caso, el sujeto activo del delito no se exime de responsabilidad, tal como se deduce del artículo 22 del mismo Código.

Ahora bien, en el expediente se han practicado pruebas periciales cuyos resultados indican que los hechos no sucedieron tal como se deduce de las versiones antes transcritas, pero a juicio de la Corte ello se debe a que aparentemente personas

interesadas en el desenlace de este proceso (y que debieran ser investigadas) han alterado, ciertos elementos incriminatorios. Así por ejemplo, no existe uniformidad en la descripción de las municiones de las armas que portaban GONZÁLEZ y AYARZA. Quizá, en lo que respecta a la situación de GONZÁLEZ, esto pudiera tener explicación en el hecho de que, según CORTEZ, GONZÁLEZ cambió sus municiones en el lugar de los hechos, luego de haber herido a CAMPBELL (fs. 88).

La Corte considera, no obstante, que en el sumario todos los elementos incriminatorios apuntan a la persona de GONZÁLEZ, motivo por el cual debe ser sometido a juicio.

En lo que respecta a la situación de los otros implicados la Corte estima que deben ser favorecidos con un sobreseimiento provisional.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, **SALA PENAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 13 de septiembre de 1993, dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y, en consecuencia dispone lo siguiente:

PRIMERO: llama a juicio a DOMINGO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, de generales conocidas en el proceso, por supuesto infractor de disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título I, del Libro II del Código Penal;

SEGUNDO: ordena la detención preventiva de este imputado y la suspensión del cargo que ocupa en la Policía Nacional;

TERCERO: sobresée provisionalmente a ALBERTINO AYARZA y a BOLÍVAR CORTEZ, ambos de generales conocidas.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN PENAL

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA DANIEL HUMBERTO PALMA PINTO, SINDICADO POR EL DELITO DE VIOLACIÓN CARNAL, EN PERJUICIO DE ZORAYA IBETH AGUILAR VALDÉS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado José Félix Henríquez, en acatamiento de lo dispuesto por la resolución dictada por este despacho el 4 de octubre del año que decurre, ha presentado libelo mediante el cual corrige el recurso de casación que interpusiera contra sentencia del 18 de febrero 1993, proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirma sentencia condenatoria emitida por el Juzgado Tercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que impune a Daniel Humberto Palma Pinto la pena de 3 años y 4 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual período, como responsable del delito de violación carnal cometido en perjuicio de Zoraya Ibeth Aguilar Valdés.

Luego de presentado el libelo de corrección, corresponde decidir sobre la admisibilidad del recurso.

Como viene dicho, el recurso ha sido interpuesto contra sentencia definitiva de segunda instancia, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso por delito cuya pena de prisión es superior a los dos años, comprobaciones estas que viabilizan la interposición del recurso, de conformidad con lo que dispone el artículo 2434 del Código Judicial.

Por lo que hace a los requisitos que enumera el artículo 2443 del mismo Código, se constata que la resolución es de las que admite el recurso, el cual fue interpuesto en tiempo oportuno. En el libelo original se plantea la historia concisa del caso, se invoca como causal la de "error de derecho en la apreciación de las pruebas", mientras que en el libelo de corrección se explican los respectivos motivos y se exponen las disposiciones legales que se consideran infringidas y el concepto en que lo han sido, con lo cual resulta el recurso presentado.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto dentro del proceso que se le sigue a Daniel Humberto Palma Pinto por la comisión del delito de violación carnal en perjuicio de Zoraya Ibeth Aguilar Valdéz y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA ABDIEL ANTONIO SAUCEDO HENRÍQUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE APROPIACIÓN INDEBIDA EN PERJUICIO DE ESTHER NEIRA VILLALAZ SOLÍS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Alcides Gabriel Zambrano González, defensor de Oficio del Circuito Judicial de Los Santos, anunció y formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de segunda instancia emitida el 13 de julio de 1993 por el Segundo Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en virtud de la cual se confirmó sentencia condenatoria de 18 meses de prisión y 125 días-multa impuesta a Abdiel Antonio Saucedo Henríquez como responsable de delito de apropiación indebida cometido en perjuicio de Esther Neira Villalaz Solís, proferida por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos.

El examen del libelo de formalización del recurso, a los efectos de decidir sobre su admisibilidad, permite advertir que ha sido interpuesto contra sentencia de segunda instancia, dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, dentro de un proceso que sancionó a Saucedo Henríquez por un delito cuya pena de prisión es superior a los dos años, comprobaciones que viabilizan la interposición del recurso de conformidad con el artículo 2434 del Código Judicial.

Por lo que hace a los requisitos que enumera el artículo 2443 del mismo Código, se constata que el recurso fue interpuesto en tiempo oportuno y que en el libelo de formalización han sido expuestos con claridad la historia concisa del caso, las causales, los motivos y las disposiciones legales infringidas. Como las causales aducidas "interpretación errada de la ley" e "interpretación errada de la ley sustancial al calificar los hechos constitutivos de circunstancias agravantes o atenuantes de responsabilidad criminal", contempladas en el artículo 2434, numerales 1 y 9, del Código Judicial, vienen expuestas después de la historia del caso, separadas una de la otra, cada una con sus respectivos motivos y disposiciones legales infringidas, es del caso admitir el recurso.

En razón de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo interpuesto dentro del proceso que se le sigue a Abdiel Antonio Saucedo Henríquez, por el delito de apropiación indebida cometido en perjuicio de Esther Nereida Villalaz Solís y DISPONE correrlo en traslado al Procurador General de la Nación por el término de ley.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA JUAN EDILBERTO VERGARA FRÍAS, SINDICADO POR EL DELITO DE LESIONES PERSONALES EN PERJUICIO DE FERDINANDO RAFAEL ARAÚZ NIETO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El abogado JOSÉ LUIS VARELA, defensor técnico de JUAN EDILBERTO VERGARA FRÍAS, formalizó recurso de casación en el fondo contra la sentencia de 29 de enero de 1993, mediante la cual el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial confirmó la sentencia condenatoria de ocho meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión, dictada por el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos el 10 de diciembre de 1992.

En cumplimiento del rito procesal, del recurso extraordinario se corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación y con posterioridad se celebró la audiencia oral prevista en el artículo 2446 del Código Judicial.

HISTORIA CONCISA DEL CASO

FERDINANDO RAFAEL ARAÚZ NIETO, denunció ante la agencia de la Policía Técnica Judicial de Los Santos y luego ratificó en la Personería Municipal de ese distrito, que en la noche del 25 de noviembre de 1990, mientras caminaba por la carretera que conduce de Aguabuena hacia Sábanagrande, jurisdicción del distrito de Los Santos, fue agredido por un sujeto que venía parado en el estribo de un jeep, lado del pasajero, quien "desde allí (le) propinó una patada en el pecho que ocasionó que (se) fuera de espalda hacia la cuneta".

Agrega, que cuando trató de incorporarse, el sujeto, quien estaba en compañía de otros hombres, lo volvió a golpear con algo sólido tenía en la mano, que lo hizo caer por segunda vez y sangrar abundantemente. (f. 4-7, 48-51).

La instrucción del sumario fue concluida por la Fiscalía del Circuito de Los Santos Herrera y correspondió al Juzgado Segundo de ese circuito judicial calificarlo mediante el auto de 24 de octubre de 1991, que abrió causa criminal contra JUAN EDILBERTO VERGARA FRíAS por infractor del Capítulo II, Título I, Libro II del Código Penal. (f. 204-206).

Durante la vista oral celebrada el día 2 de julio de 1992, el justiciable VERGARA FRíAS no se consideró culpable del delito imputado; aun así, el tribunal de primera instancia, mediante sentencia de 10 de noviembre de 1992 lo declaró penalmente responsable de la infracción del artículo 136 del Código Penal, o sea por el delito de lesiones personales y le impuso 8 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión.

En esa misma sentencia, el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos de oficio decretó la suspensión condicional de la pena.

La condena fue apelada por el defensor técnico del sentenciado, pero fue confirmada en todas sus partes por la sentencia del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, objeto de este recurso de casación.

CAUSAL INVOCADA

La casación es en el fondo y se fundamenta en una sola causal, a saber:

1. "Por ser la sentencia infractora de la Ley sustancial penal, al incurrir en error de derecho en cuanto a apreciación de la prueba, que implica infracción de la Ley sustancial." (segundo párrafo del numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial).

Esta causal se manifiesta cuando el juzgador le otorga al medio de prueba un valor que no tiene, no le reconoce el valor que tiene o lo admite sin cumplir con requisitos legales que lo regulan.

MOTIVOS

Aún cuando en el escrito del casacionista se señalan tres, sólo un motivo resulta claramente expresado para fundamentar la causal aducida, y es el siguiente:

1. Que la sentencia impugnada al confirmar la de primera instancia, no reconoció valor probatorio alguno a las deposiciones testimoniales de HÉCTOR ARABA y de ISMAEL ANÍBAL SÁEZ, que coinciden con lo declarado por VERGARA FRÍAS, y que afirman que éste se vio compelido a empujar y lesionar a ARAÚZ NIETO, para defender su integridad física puesta en peligro por el ofendido quien en ese momento esgrimió una cuchilla.

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El casacionista aduce que se han infringido dos disposiciones legales, una del Código Judicial y otra del Código Penal.

1. Considera violado el artículo 769 del Código Judicial de manera directa, por omisión, ya que el Tribunal Superior no lo aplicó al caso.

2. Considera violado el artículo 21 del Código Penal, también de manera directa, por tampoco haber sido aplicado al caso sub judice.

En el primer supuesto, reitera el recurrente, que las declaraciones de los testigos ARABA y SÁEZ, coinciden con lo declarado por VERGARA FRÍAS, quien al ver en las manos de ARAÚZ NIETO una cuchilla, reaccionó dándole un empujón para evitar que éste le produjera una lesión que podría ser de graves consecuencias, pero esto se apreció en el fallo recurrido.

En el segundo supuesto afirma que a pesar de haber actuado VERGARA FRÍAS en legítima defensa, tampoco esta causa de justificación pesó en la apreciación del tribunal a favor de su representado.

Respecto a estas supuestas infracciones, el Procurador General de la Nación descarta que se hayan violado ambas disposiciones legales.

El artículo 769 del Código judicial, afirma, se limita a describir los medios que sirven de prueba dentro del proceso, y que la apreciación de los mismos corresponde juzgador conforme a la sana crítica pudiendo éste acogerlos o desecharlos.

Por otra parte, tampoco considera vulnerado el artículo 21 del Código Penal que consagra la causa de justificación de la legítima defensa.

Según el jefe del Ministerio Público, esta causa de justificación no aparece demostrada en el proceso, sino todo lo contrario, lo que se acredita es que hubo una agresión injusta del sindicado sin que mediara provocación alguna por parte del ofendido.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

Antes de entrar al fondo, debe la Corte recapitular los parámetros que la Corporación ha fijado para fundamentar el alcance del error de derecho en la apreciación de la prueba, como causal de casación penal en el fondo.

La Corte ha admitido que la errónea representación de la valoración de la prueba puede darse por los siguientes motivos:

1. Cuando se acepta un medio probatorio que la Ley no admite.

2. Cuando al medio probatorio se le da una fuerza probatoria que la ley le niega.

3. Cuando al medio probatorio se le niega la fuerza probatoria que la Ley le atribuye.

Para sustentar su pretensión en alguno de estos supuestos, es necesario que el casacionista:

1. Demuestre el error de derecho que atribuye al fallo e;

2. Indique la violación sustantiva penal ocurrida como consecuencia del error.

En otras palabras, el casacionista debe, en su escrito, demostrar el error del fallo impugnado y la indicación de la norma sustantiva penal que ha sido violada como consecuencia de la errónea representación jurídica de los elementos probatorios que constan en autos (Sentencias de 7 de febrero de 1957 y de 19 de febrero de 1990).

Se observa que el casacionista impugna la sentencia recurrida por negarle supuestamente fuerza probatoria a las declaraciones testimoniales de HÉCTOR ARABA e ISMAEL ANÍBAL SÁEZ, que habrían acreditado los supuestos del artículo 21 del Código Penal para considerar probada la causa de justificación de legítima defensa.

Al analizar las constancias procesales, resulta evidente que esta pretensión no tiene sustentación jurídica, y no puede en consecuencia afirmarse que en la actuación jurisdiccional del inferior hubo error jurídico y que como secuela del mismo se violó la norma sustantiva penal aducida por el casacionista. En primer lugar, no es cierto, que las declaraciones testimoniales de ARABA y de SÁENZ coincidan en las "circunstancias de modo, tiempo y lugar" (f. 317) para probar el hecho que el sentenciado VERGARA FRÍAS actuó en legítima defensa.

ISMAEL ANÍBAL SÁEZ SAMANIEGO (f. 53-56) ratificó las siguientes declaraciones ante el funcionario de instrucción:

> "... luego salimos para el lugar y vimos salir a una persona del Monte y el Subteniente VERGARA hiba (sic) trepado en el estribo del jeep y le pegó una patada en la espalda y luego éste se calló (sic) y se abrió (corrijo) calló (sic) y luego se levantó y le vimos una brecha en la frente y pegó a llorar ... y de allí el señor ARABA lo recogió y lo llevó a Sábana Grande". (f. 54)

Más adelante agrega:

> "... al contrario el señor RAFAEL ARAÚZ si tenía una cuchilla de estuche, pero no la llegó a sacar en ningún momento ...".
>
> "... Yo creo que el Sub-Te VERGARA hay (sic) cometió un error ya que él debía de haberlo llevado a la correjiduría (sic) ...".

Por su parte, HÉCTOR ELISEO ARABA MORENO (f. 57-60) sobre este punto declaró ante el agente instructor:

> "... y el señor que yo vi con el palo en la mano estaba en la orilla sangrando y entonces ahí el señor RAMOS fui (sic) a ayudarlo a levantarse y quiso como agredirlo con un arma, creo que era una cuchilla, entonces el señor RAMOS se la quitó con la mano y él se quedó en ese mismo lugar porque estaba bien ebrio, pero le dijimos que se levantara porque tenía que presentarse a la Policía ...".

Y con relación a la agresión de VERGARA FRÍAS agregó:

> "... bueno yo no vi patear, yo lo vi mas o menos cuando él metió la mano y derivo (sic) a ese tipo.", ... "él (ARAÚZ) estaba en bastante tragos". (f.59)

De ambas deposiciones no puede deducirse que resulte probado ninguno de los supuestos del artículo 21 del Código Penal, y de modo particular no puede decirse que la conducta de ARAÚZ externó una agresión injusta, actual o inminente en perjuicio de VERGARA que podía justificar una reacción legítima de éste.

Las deposiciones no son concordantes en las circunstancias de modo, tiempo y lugar y su valor probatorio lo apreció adecuadamente el Tribunal Superior al tenor de lo preceptuado en el artículo 904 del Código Judicial.

Esta norma faculta al juzgador apreciar, según las reglas de la sana crítica, las circunstancias y motivos que corroboren o disminuyan la fuerza de las declaraciones y ha dicho la Corte que mientras no exista un error manifiesto en esta apreciación, no puede la Corporación inmiscuirse en esa facultad jurisdiccional. (Sentencia de 19 de marzo de 1990).

En el negocio bajo examen, reitera la Sala que el Tribunal Superior no ha incurrido en ningún error de apreciación.

Resulta indiscutible que VERGARA FRÍAS agredió a ARAÚZ, quien caminaba ebrio a un lado de la carretera, dándole una patada que lo hizo caer, produciéndose la lesión.

No hubo provocación, ni peligro actual, grave o inminente para la integridad física del agresor que pudiera legítimamente justificar su conducta.

No resulta violado el 21 del Código Penal, como norma sustantiva penal, ni tampoco el artículo 769 del Código Judicial que se limita a describir los medios prueba admitidos por el Derecho Procesal panameño.

Por las consideraciones anteriores, LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 29 de enero de 1993 dictada por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLLADO (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA TERENCE OWENS, POR PRESUNTA COMISIÓN DEL DELITO DE PECULADO EN PERJUICIO DE LA SECCIÓN CONSULAR DE LA EMBAJADA DE PANAMÁ EN CUBA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Corresponde a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia resolver la admisión del recurso de casación interpuesto por el licenciado **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA**, abogado defensor del señor **TERENCE OWENS** en el proceso que se sigue en contra de este por el delito de peculado.

Para resolver admisibilidad la Sala debe constatar que se hayan reunido los requisitos que se establecen en el artículo 2443 del Código Judicial, ya que dicha norma establece los requisitos que debe contener el escrito de formalización del recurso en cuestión.

Al analizar las constancias procesales se observa que estamos en presencia de un recurso promovido en contra de una sentencia de segunda instancia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial por el delito de peculado, que tiene establecida una pena que oscila entre dos y diez años de prisión, y que el recurso ha sido interpuesto en tiempo oportuno.

También se observa que se cumplen los restantes requisitos a que alude el numeral 3 del artículo 2443 antes mencionado, pues se indica expresamente la historia concisa del caso, la causal invocada, las disposiciones legales infringidas, los motivos que se aducen y el concepto de la infracción que a juicio del recurrente fundamentan el recurso extraordinario de casación que nos ocupa en esta ocasión.

Se trata, por tanto, de un recurso de casación que se anuncia en el fondo y que reúne todos los requisitos que condicionan su admisibilidad.

Por las razones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA, DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación promovido en esta causa y ORDENA se corra en traslado del mismo al Procurador General de la Nación por el término de cinco días.

DERECHO: artículos 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO CONTRA HELMER CARRASCO CARRASCO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO EN PERJUICIO DE CLAUDIO PERALTA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado RICARDO STEVENS, defensor técnico de HERMES CARRASCO, formalizó recurso de casación en el fondo contra sentencia de 6 de abril de 1992, mediante la cual el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial confirmó la sentencia

condenatoria de cuatro años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Colón, Ramo Penal, contra Carrasco.

En acatamiento de los trámites procesales, de este recurso extraordinario se corrió traslado al Señor Procurador General de la Nación para que emitiera concepto y con posterioridad se celebró la audiencia prevista en el artículo 2446 del Código Judicial, por lo que se encuentra ahora en estado de resolver.

**HISTORIA CONCISA DEL CASO**

Ante la Personería Municipal de Chagres, Provincia de Colón, en julio de 1990, CLAUDIO PERALTA denunció el hurto de dos novillos de su propiedad, los que fueron vistos por testigos presenciales en el corral de HERMES CARRASCO.

De acuerdo a la denuncia esos animales, marcados con el ferrete "DAITI", fueron embarcados al Matadero de Colón para ser sacrificados. (f.1-2).

La instrucción sumarial corrió a cargo de la Fiscalía Primera del Circuito de Colón y correspondió al Juez Primero del Ramo Penal de ese circuito judicial calificarlo mediante auto de 3 de mayo de 1991, que decidió abrir causa criminal contra el imputado por la infracción del Capítulo I, Título IV, Libro II del Código Penal (f.109-117).

Durante la vista oral celebrada el día 9 de julio de 1991, HERMES CARRASCO se declaró inocente, lo que no impidió que, mediante sentencia de 18 de julio de ese mismo año, el tribunal de primera instancia lo declarara penalmente responsable de la infracción del artículo 184, numeral 9, del Código Penal, o sea por el delito de hurto agravado, y le impuso la pena principal de 4 años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de cargos públicos por igual término, una vez finalizada la pena principal.

La condena fue apelada por el defensor técnico del sentenciado, resultando confirmada por sentencia del Segundo Tribunal del Primer Distrito Judicial, hoy impugnada.

**CAUSALES INVOCADAS**

Luego de corregida la demanda de casación en el fondo, el recurrente la fundamenta en tres causales, a saber:

1. "Infracción de la ley sustancial por error de derecho en la apreciación de la prueba".

2. "Infracción de la Ley Sustancial por error de hecho en la existencia de la prueba".

3. "La sentencia tiene como delito un hecho que no lo es".

Según el artículo 2450 del Código Judicial, la Sala debe examinar separadamente cada una de las causales en que se funda el recurso y los motivos en que se apoya cada causal, no siendo necesario considerar las siguientes causales alegadas si encontrare justificada una anterior.

Se procede, en consecuencia, a considerarlas siguiendo el orden en que han sido presentadas.

**Primera causal**

Se alega "infracción de la ley sustancial por error de derecho en la apreciación de la prueba".

Esta causal, prevista en el segundo inciso del numeral 1 del artículo 2434, ocurre cuando el juzgador le otorga al medio probatorio un valor que no tiene, no le reconoce el valor que tiene o lo admite sin cumplir con los requisitos legales.

A este respecto el Procurador General de la Nación opina que el recurrente omite mencionar el error de derecho que ha influido en lo sustancial de la resolución recurrida, para hacer surgir el cargo de injuridicidad que imputa.

**Motivos**

El recurrente señala dos motivos de justificación de la causal alegada, a saber:

1. Que, "en el expediente consta un número plural de declaraciones testimoniales (de Dimas González, Leopoldo Borbúa Barco, Alvaro Antonio Montenegro González, Lorenzo Justiniani Sánchez, José Rodríguez, Margarito Martínez, Luis Salinas y de Bertrand Abdul Samudio Soto), aportadas al expediente y que favorecen a la defensa del imputado, y que no han sido apreciadas debidamente."

2. Que, "los testimonios que existen en el expediente, los dichos a favor y los presentados en contra, cuando resultaron contradictorios entre sí, no se les confrontó con otras piezas de convicción también incorporadas al proceso ni se consideró los fundamentos de cada uno".

Al respecto, el Procurador General indica que el recurrente no explica en qué favorecen las declaraciones de los testigos allí mencionados al sancionado CARRASCO, y que en su opinión las declaraciones de Margarito Martínez, Lorenzo Justiniani, Alvaro

Montenegro y Daniel González más bien demuestran que el sentenciado estaba en posesión de los semovientes denunciados.

**Segunda Causal**

Como segunda causal se aduce "infracción de la Ley Sustancial por error de hecho en la existencia de la prueba".

Esta causal, prevista también en el segundo inciso del numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, ocurre cuando el juzgador expresa un juicio falso sobre la existencia material del medio probatorio o sobre su sentido fáctico. Corresponde a aquellos supuestos en los que se ignora una prueba acreditada en el proceso, o cuando se cree que está acreditada no siendo así.

Según el Procurador General de la Nación, también en esta causal el recurrente omitió mencionar el error de hecho que sustancialmente recae sobre la sentencia para hacerla contraria a Derecho.

**Motivos**

El recurrente señala cuatro para sustentar la causal alegada:

1. "Al sindicado se le inició proceso penal porque en el corral de Carrasco fueron vistas algunas reses del denunciante".

2. "La sentencia tiene por probado que el corral de "Carrasco" pertenece a Hermes Carrasco, que sería la única razón para enjuiciarlo a él por reses ajenas encontradas en esa finca".

3. "En el expediente no hay prueba de la propiedad de los corrales de "Carrasco".

4. "En el expediente hay declaraciones que afirman que los referidos corrales pertenecen a Soledad Carrasco, lo mismo que el ganado en ellos."

Según el Jefe del Ministerio Público, carece de relevancia jurídica para este proceso penal determinar quién es el propietario de la finca denominada "Los Corrales de Carrasco", por lo que hay que descartar algún cargo de injuridicidad idóneo para enervar el fallo impugnado.

Al respecto, señala que el propio justiciable acepta que la finca pertenece a su tía Soledad Carrasco, pero que él llevó los semovientes a ese lugar, circunstancia esta que se estima con valor vinculante suficiente.

**Tercera causal**

Como tercera causal, el recurrente aduce que "la sentencia tiene como delito un hecho que no lo es".

En esta causal de fondo, prevista en el numeral 2 del artículo 2434 del Código Judicial, el Juzgador considera como delito un hecho que no lo es, violando así el principio "nullum crimen sine lege" plasmado en el artículo 1 del Código Penal, según el cual ningún hecho puede ser penado sino se encuentra descrito expresamente como delito por ley vigente al tiempo de su comisión.

En suma, tiene lugar esta causal cuando el juzgador valora como delito un acto o acción humana que no es típica, antijurídica y culpable.

**Motivos**

El recurrente indica dos motivos para justificar la causal alegada, a saber:

1. Que "la sentencia calificó como hurto la simple aparición de reses ajenas en los "Corrales de Carrasco", sin considerar las razones que pudieron motivar la presencia de los animales en el lugar".

2. Que "para que el hecho investigado constituya delito debió existir el elemento doloso, es decir la voluntad de cometer la acción punible por parte del imputado; y esta circunstancia no fue considerada en la resolución impugnada".

Al respecto opina el Procurador General que la sentencia no sanciona la simple aparición de las reses en la finca, sino su apoderamiento por HERMES CARRASC0.

Agrega que, al embarcar para el sacrificio reses que no eran de su propiedad, se manifestó la intención dolosa de CARRASCO en el delito de hurto investigado.

**Disposiciones legales infringidas**

El casacionista considera se han infringido normas del Código Judicial, del Código Penal y del Código Civil.

Con relación a la primera causal, sostiene que los artículos 769 y 906 del Código Judicial han sido infringidos de manera directa y por omisión, ya que "el juzgador no utilizó el instrumental que proporciona la ley ante las circunstancias específicas de las pruebas testimoniales contradictorias, y no examinó lo fundado de la razón de los dichos, ni conjugó esas pruebas testimoniales contradictorias con las otras pruebas obrantes en

el expediente, omitiéndose un proceso que debió formar parte de la valoración según la sana crítica".

Considera violado además el artículo 184, numeral 9, del Código Penal, de manera directa por comisión, "ya que se aplicó a hechos cuya demostración fue defectuosa".

En relación con la segunda causal, afirma violados los artículos 769 del Código Judicial y el numeral 1 del artículo 1131 del Código Civil, de manera directa y por omisión, ya que el juzgador "dejó de aplicar claras disposiciones vigentes en materia probatoria, especialmente sobre la propiedad del inmueble en que fueron vistas las reses supuestamente hurtadas".

De igual manera vuelve a considerar infringido el artículo 184, numeral 9, del Código Penal, de manera directa por omisión, "ya que se aplicó a hechos cuya demostración fue defectuosa".

Finalmente, con relación a la tercera causal, considera infringido el artículo 30 del Código Penal, ya que esta disposición exige la concurrencia del dolo para que un hecho descrito se considere delito.

La violación es directa por omisión "ya que aplicándose la norma no se cumplió con la concurrencia de un presupuesto necesario, como es el elemento subjetivo, el dolo".

**CRITERIO DE LA CORTE**

Antes de decidir el fondo del recurso, reitera la Corte su apreciación en el sentido de que en materia de casación es indispensable que el casacionista manifieste en el libelo la exacta concordancia que debe existir entre la historia concisa, la causal invocada, los motivos y las disposiciones legales que se aduce han sido infringidas por la sentencia recurrida.

En tal sentido se ha dicho, específicamente, "que la relación existente entre los motivos y la causal invocada juega un papel similar a la relación existente entre los hechos de la demanda y el petitum, es decir los motivos (que deben ser hechos que le formulen cargos de injuridicidad a la sentencia o auto y no meras alegaciones del recurrente), deben ser cónsonos con la causal que se quiere demostrar y su exposición no debe dar lugar al surgimiento de una causal distinta" (Sentencia de 20 de agosto de 1991).

Para establecer de modo fehaciente esta relación de causalidad es indispensable que el casacionista exponga, de la manera más detallada posible, los hechos que sustentan la causal invocada, de suerte que pueda el Tribunal deducir la supuesta infracción de la ley sustantiva.

Al analizar las dos primeras causales aducidas por el recurrente, observa la Corte que en su presentación no se exponen con claridad los motivos que las sustentan de donde, por ende, devienen oscuros los cargos de injuridicidad que se imputan a la sentencia.

Con relación a la primera causal, el casacionista afirma, de manera genérica, que las deposiciones de Dimas González, Leopoldo Borbúa Barco, Alvaro Antonio Montenegro González, Lorenzo Justiniani Sánchez, José Rodríguez, Margarito Martínez, Luis Salinas y Bertrand Abdul Samudio Soto favorecen al justiciable, sin expresar el mecanismo interpretativo de donde resulta su apreciación.

Esta omisión, obviamente, no puede ser subsanada por el tribunal de casación, como tampoco puede inferir de tal vacío formal el error de derecho aducido en cuanto a la apreciación de la prueba.

En relación con la segunda causal invocada, no encuentra la Corte concordancia entre ella, los motivos que la acompañan y las disposiciones legales que se dicen infringidas.

Esta causal tiene origen cuando el juez expresa un falso juicio sobre la existencia material de un medio probatorio, como cuando ignora una prueba a pesar de que está debidamente acreditada en autos o cuando, creyendo que lo está, no es así.

Al respecto el casacionista argumenta que no existe prueba de que su defendido sea el propietario de la finca conocida como "Los Corrales de Carrasco", siendo que sobre esta prueba inexistente se basó el juzgador para enjuiciarlo.

Con tal proceder resultarían violados los artículos 769 del Código Judicial, el numeral 1 del artículo 1131 del Código Civil y el numeral 9 del artículo 184 del Código Penal.

Si bien puede reconocerse cierta correlación lógica entre la causal y los motivos indicados, tal correlación definitivamente no surge con las disposiciones legales aducidas, por ser -como lo afirma la Procuraduría- completamente irrelevante la existencia de la prueba de la propiedad de la finca "Los Corrales de Carrasco" a los efectos de la comprobación del delito cuya comisión se imputó a HERMES CARRASCO, a saber el hurto agravado, toda vez que tal prueba no guarda relación con un elemento del tipo penal.

De manera que resulta ciertamente irrelevante, para los fines del numeral 9 del artículo 184 del Código Penal, determinar quién es el propietario de la finca donde fueron vistos los semovientes denunciados; en todo caso la prueba de la propiedad de ese bien es conducente en relación con los novillos hurtados los que, según el documento visible a fojas 63 y la prueba testimonial recogida en autos, pertenecían al denunciante CLAUDIO PERALTA.

Además, resulta más que evidente que en un recurso de casación penal no se puede aducir la violación sustancial de una norma del Código Civil, como lo hace el casacionista al invocar el numeral 1 del artículo 1131 del Código Civil.

Finalmente, en relación con la tercera causal, tampoco se observa la relación existente entre ésta y los motivos que dicen sustentarla, por lo que, tampoco en este caso, puede deducirse infracción de la ley penal sustantiva.

El casacionista afirma que el juzgador calificó como hurto la "simple aparición de reses ajenas en los "corrales de Carrasco", y que no se consideró la ausencia de dolo de su representado, citando como normas infringidas los artículos 30 y 184, numeral 9, del Código Penal.

A juicio de la Corte el Segundo Tribunal Superior no incurrió en error in judicando al adecuar la conducta de HERMES CARRASCO con el tipo previsto en el numeral 9 del artículo 184 del Código Penal.

Como viene dicho, al justiciable no se le imputa el hecho objetivo de que las reses del denunciante Peralta aparecieran en la finca que se dice de propiedad de Soledad Carrasco, sino el haber dispuesto de esos semovientes ajenos para que fueran sacrificados en el Matadero de Colón, acción que no puede tener lugar sin el apoderamiento previo de los animales -circunstancia esta que sí se encuentra comprendida en el encuadramiento legal sustantivo-, habida cuenta de que lo del sacrificio de las reses aparece acreditado en su propia declaración (f.8) y en la declaración de Andrés Molinar González (fs.25-26), militando también en su contra el indicio grave de haber sido condenado anteriormente por el delito de hurto pecuario.

A juicio de la Corte, tampoco existe relación entre la causal invocada y el artículo 30 del Código Penal ya que, de haber tenido la sentencia como delito un hecho que no lo es, en vez del artículo 30 del Código Penal habría resultado infringido el artículo 1 de esa excerta legal, que es donde precisamente se consagra el principio de legalidad en materia penal, tutelado por la causal aducida.

La apreciación sobre el dolo en la conducta de CARRASCO tendría más bien adecuación en la causal prevista en el segundo inciso del numeral 1 del artículo 2434 del Código Judicial, pero así no lo destacó el recurrente.

Por las anteriores consideraciones LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 6 de abril de 1992 proferida por el Segundo Tribunal de Justicia del Primer Distrito Judicial en esta causa

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A NORIEL ADRIÁN REVELLO MORALES, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DE EDUARDO APARICIO GONZÁLEZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto de 19 de octubre del año que decurre, la Sala Segunda de la Corte, al revisar los requisitos primarios de admisibilidad del recurso de casación formalizado por la licenciada **BEATRIZ HERRERA**, en representación del señor **NORIEL ADRIÁN REVELLO MORALES**, dispuso conceder a la recurrente un término de cinco días a fin de que hiciera las enmiendas formales que se anotaron referentes a los motivos, el enunciado correcto de la causal y las disposiciones infringidas.

Dentro de ese término, tal como lo señala el informe de Secretaría, la abogada defensora presentó el escrito correspondiente en el que hace ciertos reajustes respecto a la ordenación de los motivos que sirven de apoyo a la causal, añade otras disposiciones supuestamente infringidas y repite el texto de la causal probatoria, sin anotar que se trata de error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustancial penal.

En materia penal, la casación ha sido más flexible desde sus inicios y ofrece la oportunidad de hacer las correcciones cuando se trata de asuntos formales de estricta técnica procesal, por lo que no se explica que los interesados no hagan el esfuerzo por atender las observaciones del Tribunal de Casación en estos casos.

Sin entrar en otras consideraciones de fondo, que no es posible hacer en esta etapa procesal, al llenarse los requisitos mínimos en los que debe enmarcarse un recurso extraordinario de esta naturaleza, procede dar la oportunidad a que la recurrente profundice los conceptos emitidos en la audiencia oral de esta causa.

En atención a lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por

autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación en el fondo presente en este negocio penal y dispone que se le corra en traslado al Señor Procurador General de la Nación, por el término de ley, para que emita concepto.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN DENTRO DEL JUICIO SEGUIDO A LINETH GAYLE DE WILSON, DIANA BEATRIZ WILSON GAYLE Y EDWARDS WILSON AUSTIN, SINDICADOS POR EL DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto de 20 de octubre de 1993, al revisar los requisitos del escrito de formalización del recurso de casación presentado por el licenciado **RAMIRO FONSECA** dentro del juicio penal seguido a **LINETH GAYLE DE WILSON, DIANA BEATRIZ WILSON GAYLE y EDWARDS WILSON AUSTIN** por delito contra la salud pública, se dispuso otorgar al recurrente el término de cinco días para que procediera a corregir algunos defectos observados en relación con la redacción de los motivos y de las disposiciones infringidas y el concepto en que lo han sido.

Después de algunos esfuerzos realizados por Secretaría para lograr la notificación del abogado defensor (cfr. fs. 239-240), se recibió el escrito visible de fojas 243 a 245 en el cual el recurrente, sin reproducir la totalidad del escrito de formalización de la casación en el fondo presentada, se circunscribe a enmendar los puntos observados. Cabe anotar, que por razones de índole formal y para una mejor presentación del texto, se acostumbra reproducir integralmente el recurso con las enmiendas o correcciones debidamente incorporadas. No obstante, nada se opone a que se opte por utilizar el período de los cinco días para corregir el escrito en el punto específico censurado.

Al momento de corregir su escrito, por la redacción dada a los motivos en que se apoya la causal invocada, pareciera que el letrado recurrente trasladó el concepto a una motivación anímica de impulso conductual y no a las bases que sirven de soporte a la causal de fondo alegada. Obsérvese que el abogado en vez de expresar los motivos de la causal, usa la frase "me motivó".

Ahora bien, como la casación penal se dirige a conocer los errores in judicando o in procedendo en que haya incurrido el juzgador ad quem, sin dejar de lado los principios vitales del Derecho penal referentes de favorabilidad al reo, dado el esfuerzo de corrección realizado en este caso, en el que no se alcanza el rigor técnico jurídico del recurso de casación, la Sala Penal se inclina por dar la oportunidad a la defensa para que haga la sustentación y profundice este recurso en la audiencia oral, en aras de los derechos de las partes que pudieran ser afectadas, si la causal alegada prosperare.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, en Sala Unitaria, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de casación presentado en este caso y dispone dar traslado del negocio al Señor Procurador General de la Nación por el término de cinco días para emitir concepto.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

JUICIO SEGUIDO A ERIC ELÍAS NAVARRO JIMÉNEZ, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE PRUDENCIO GÓMEZ GILL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante sentencia de 4 de agosto de 1993, impuso a **ERICK ELÍAS NAVARRO JIMÉNEZ** la pena principal de 8 años, 6 meses de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término, después de cumplida la pena principal, por haber cometido el delito de homicidio, en perjuicio de **PRUDENCIO GÓMEZ GIL.** Contra esa sentencia el defensor de oficio de Navarro Jiménez interpuso recurso de apelación, por lo que la Sala Penal de la Corte se convierte en Tribunal de alzada, a efectos de conocer en segunda instancia la sentencia apelada.

La apelación expone como idea central que al sentenciado deben serle reconocidas las circunstancias atenuantes contempladas en los numerales 4 y 5 del artículo 66 del Código Penal, es decir, el arrepentimiento y la confesión espontánea y oportuna, respectivamente.

En cuanto al arrepentimiento, alega el sustentante que esta atenuante concurrió desde el primer momento en que Navarro señaló que nunca quiso causar la muerte de Gómez Gil y que solo quiso defender a su hermano, y cuando expresó que se siente arrepentido de haber cometido ese error.

Sobre la atenuante de confesión espontánea y oportuna del agente, expresa el defensor del sentenciado que la misma concurre porque cuando Navarro fue sometido a indagatoria, "confesó de manera espontánea y oportuna la autoría del ilícito cometido, expresando de manera detallada al funcionario del Ministerio Público los motivos y demás circunstancias que lo llevaron a delinquir".

Sostiene la defensa que la confesión se dio unas cuantas horas después del hecho, cuando la investigación aún era incipiente y únicamente existía la diligencia de reconocimiento del cadáver y el informe sobre esta misma diligencia (fs. 351-353).

El escrito de apelación le fue corrido en traslado al Fiscal Segundo Superior del Primer Distrito Judicial, funcionario de instrucción que contestó el traslado, tal como consta a fojas 355 y 356 del expediente, escrito en el cual expone:

> "El Suscrito luego de analizar tanto la sentencia apelada como lo expuesto por la defensa en su escrito sustentatorio, considero que le asiste razón a este último por cuanto que efectivamente el juzgador al imponer la pena no tomó en consideración las circunstancias atenuantes que a nuestro juicio es merecedor el imputado ERIC ELÍAS NAVARRO, ya que desde un principio mostró su arrepentimiento y aceptó la comisión del ilícito. Distinto hubiese sido si tal arrepentimiento o confesión se da pasada la etapa de instrucción del sumario o en el plenario donde lo hace solamente para evitar el cumplimiento de la sanción y no como una reacción moral interna" (fs. 355 y 356).

Si bien el representante de la vindicta pública en esta ocasión se muestra de acuerdo con lo que alega la defensa del imputado, en el sentido de que éste debe ser favorecido con las atenuantes el arrepentimiento y la confesión espontánea y oportuna del agente, la Sala no es del mismo criterio por las razones que pasamos a exponer:

El propio Código Penal al referirse a la atenuante el arrepentimiento, expresa que se da "cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias". No es este el caso de Eric Navarro Jiménez, quien al rendir su indagatoria manifestó:

> "... vi que los sujetos estaban tratando de quitarles a mi hermano su reloj, luego vi cuando el reloj voló y cayó a el suelo, fue ahí cuando reaccioné y como vi que le querían quitar el reloj a mi hermano, pensé que eran ladrones y por eso utilicé el cuchillo o sea que le tiré a uno de ellos con el cuchillo, pero no sé si lo llegué a cortar, ya que todos los sujetos salieron corriendo, entonces al ver que ellos huían, cogí el reloj y llevé a mi hermano a la casa de mi novia y me quedé ahí, cuando de pronto como a los quince minutos se presentaron unidades uniformadas y fue ahí cuando me enteré que había cortado a uno de los sujetos" (fs. 15-17).

El solo hecho de manifestar que no sabe a quién alcanzó a darle con el cuchillo y que después entró a casa de su novia y se quedó allí, excluye la posibilidad de considerar la circunstancia de arrepentimiento, misma que es entendida por la Doctrina Penal como la voluntad del agente de hacer menos gravosa las consecuencias del acto delictivo.

La Sala Penal de la Corte ha sostenido el criterio de que no es la manifestación verbal de arrepentimiento por parte del sujeto activo lo que va a determinar la concurrencia de la circunstancia atenuante en estudio, sino los actos posteriores que indiquen que dicho sujeto ha disminuido, o por lo menos intentado disminuir los efectos del delito.

Por otra parte la manifestación del imputado de que no quiso causar la muerte de Prudencio Gómez Gil y que solo quiso defender a su hermano, en modo alguno puede significar la circunstancia de arrepentimiento que describe el artículo 66, numeral 4 del Código Penal.

En cuanto a la segunda circunstancia atenuante alegada -confesión espontánea y oportuna del agente-, ésta no concurre. En primer lugar, la entrega del imputado no fue voluntaria, no asistió ante la autoridad por sus propios medios a confesar lo sucedido y, en segundo lugar, en el momento en que fue conducido por la autoridad y relató los hechos, ya existían en su contra un elemento probatorio vinculante, tal como lo es la denuncia presentada ante el Juzgado Nocturno por Zoraida Rodríguez de Gómez, concubina del occiso. Estos dos aspectos hacen que desaparezca la espontaneidad y la oportunidad de la confesión de Navarro Jiménez, quien si bien es cierto relató lo sucedido, no lo hizo con la prontitud y voluntad requerida por la ley.

La simple aceptación de la comisión de un delito no es suficiente para considerar la concurrencia de la atenuante contemplada en el numeral 5 del artículo 66 del Código Penal. La Sala ha sostenido que la confesión es espontánea, cuando el sujeto activo comparece por sus propios medios ante la autoridad competente para ponerle en conocimiento que ha infringido la ley penal; y es oportuna, cuando sin que medien otros elementos

probatorios que sindiquen o vinculen al sujeto con el delito realizado, dicho sujeto confiesa oportunamente su actuación. Más aún cabría la posibilidad de flexibilizar esta última condición, siempre que la comparecencia del imputado se dé voluntariamente, pero la conducta asumida por Eric Elías Navarro Jiménez no fue tal, razón por la que la Sala Penal debe confirmar la sentencia apelada.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de 4 de agosto de 1993 dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro del juicio seguido a ERICK ELÍAS NAVARRO JIMÉNEZ por el homicidio cometido en perjuicio de PRUDENCIO GÓMEZ GIL.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA ROGELIO MATOS ZAPATA SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE ARCENIO CASTILLO BATISTA. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Un jurado de conciencia encontró culpable a **ROGELIO MATOS ZAPATA** del delito de homicidio cometido en perjuicio de **ARCENIO CASTILLO BATISTA**, hecho ocurrido en horas de la madrugada del día 17 de octubre de 1990, en el Corregimiento de Chiriquí, Distrito de David, Provincia de Chiriquí.

El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al dosificar la pena que debe cumplir el procesado, calificó el hecho punible investigado como delito de homicidio simple tipificado en el artículo 131 del Código Penal, y que sanciona con pena de cinco (5) a doce (12) años de prisión. En ese sentido, el a quo impuso un pena base de nueve (9) años-108 meses de prisión, la cual quedó reducida a una pena líquida de siete (7) años y medio -90 meses- al reconocer como circunstancia atenuante la confesión espontánea y oportuna del sindicado, en base a lo normado por el numeral 5 del artículo 66 de la misma excerta, en concordancia con lo establecido por el artículo 69 ibidem. También se le impuso la pena accesoria de inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo tiempo y mientras dure la pena principal.

Según el Tribunal de la causa, la hipótesis más viable del móvil de dicho incidente se refiere a celos por un asunto amoroso entre víctima y victimario y una dama de apellido **PIMENTEL**; al llegar **MATOS ZAPATA** a la casa de dicha dama y observar la presencia de Castillo Batista, se produjo un pleito entre ambos, causando dicho pleito lesiones leves en el primero, y la muerte del segundo. En un momento dado, el procesado golpeó varias veces la cabeza del occiso con una piedra. Los golpes inferidos en su anatomía produjeron las causas de muerte que el médico legista describe en el Protocolo de Necropsia (fojas 131-142).

A juicio del a-quo, al retirarse del lugar de los hechos el justiciable dejó sus zapatos y la bicicleta en que se movilizaba; inicialmente el procesado se confesó responsable por los golpes que causó al occiso, si bien manifestó que no tuvo intenciones de matarlo.

Sostiene dicho Tribunal que, de acuerdo con las constancias del proceso "no se estableció en forma cierta que el justiciable haya obrado con premeditación, es decir, que su designio criminoso se haya formado con anticipación a la ejecución del hecho perpetrado." Tampoco estimó el a-quo que la muerte de **CASTILLO BATISTA** haya sido causada por medios de ejecución atroces, es decir, "aquellos que deliberada e inhumanamente usa el sujeto activo para producir más dolor y sufrimiento a la víctima, revelando en su proceder un innecesario designio de peligrosidad y crueldad." En ese orden de ideas dice el juzgador, que el cadáver de Castillo Batista sufrió graves daños físicos, en el rostro y en el cuello, y presentó evidencias de antropofagía. Arguye el tribunal que no consta si tales daños fueron causados antes o después de la muerte del prenombrado; además, no consta en el proceso que el justiciable haya practicado antropofagía sobre el cuerpo del occiso.

Ahora bien, en el acto de notificación de la sentencia de primera instancia apelaron tanto el abogado defensor como el Fiscal Superior. Pero el defensor de Oficio, **RAFAEL ALBERTO SANTAMARÍA G.** desistió, mediante escrito, del recurso en comento, el cual fue aceptado por la Magistrada Suplente Especial **CARMEN LUZ DE GRACIA DE GARCÍA**, a foja 470. El Fiscal Superior del Tercer Distrito Judicial sí sustentó en tiempo el recurso promovido, motivo por el cual la Sala se limitará a estudiar en esta instancia, los argumentos de dicho escrito.

El Fiscal Primero Superior, en escrito de sustentación, comienza manifestando que la conducta del sindicado encuadra en la figura delictiva tipificada en el artículo 132, numeral 3° del Código Penal, ya que la muerte de **ARSENIO CASTILLO BATISTA** fue ejecutada por motivo fútil: ello se desprende de las constancias procesales, y la misma sentencia dice:

> "La hipótesis más viable del móvil de dicho incidente se refiere a los celos por un asunto amoroso entre ellos y una dama de apellido Pimentel." (ver foja 461).

Por otro lado, objeta el apelante lo establecido por la sentencia en el sentido de asegurar que:

> "El estudio de la constancias procesales no permite al tribunal el reconocimiento de alguna circunstancia agravante común o genérica de las contenidas en el artículo 67 del estatuto penal."

Esto, señala el recurrente, en el evento de que la Corte considere que se trata de homicidio simple, porque sí existen agravantes, según lo normado por el artículo 67, precitado.

En este sentido, señala el funcionario instructor, que el sindicado sí abusó de su superioridad física, pues el homicida es más alto y joven que el occiso (1.68 por 1.57 de estatura), y que el sindicado actuó con ensañamiento, reflejado en el protocolo de necropsia legible a fojas 130 a 142 del infolio.

De igual modo, la sentencia desconoció la conducta simultánea y posterior a la comisión del hecho punible, toda vez que el justiciable aseguró haber cometido el crimen, admitiendo que luego de golpear al occiso en la cara y de tenerlo inmóvil lo arrastró y lo tiró en la cuneta, todavía vivo. Dice el apelante que el imputado quería que pareciera como que la víctima fue objeto de robo o asalto, y que al ver que éste seguía respirando, lo dejó en la alcantarilla (ver foja 44). Esto muestra -manifiesta el recurrente- que el procesado tuvo la oportunidad de salvarle la vida al hoy occiso, o de por lo menos ayudarlo, pero no lo hizo. Piensa el apelante, que el justiciado se embriagó deliberadamente para cometer el hecho punible, pues ello según él, se desprende del dictamen rendido por el psiquiatra forense (foja 239 del expediente). Esto se colige también de la declaración rendida por Matos en la Policía Técnica Judicial (ver foja 43).

Rechaza el apelante la atenuante reconocida en la sentencia, referente a la confesión voluntaria y oportuna del sindicado, porque eso no es lo que revela el expediente. Ello es así porque el encausado vino a confesar cuando las investigaciones habían logrado recabar información que lo incriminaba directamente, motivo por el cual no tenía otra opción que confesar el crimen.

Ahora bien, antes de decidir la alzada, es necesario valorar los elementos probatorios que reposan en el expediente, con el propósito de determinar si se ajustan a las pretensiones del apelante o si se cometió un homicidio simple.

Así, en cuanto el argumento del recurrente según el cual la muerte fue producida por motivo fútil, observa la Corte que el apelante desvalora su argumento pues por un lado manifiesta la concurrencia de motivos fútiles y por el otro acepta la tesis del a quo, consistente en que el móvil del homicidio fue producto de celos.

En este punto, considera esta Corporación de Justicia que los celos pueden ser un motivo suficiente para cometer un ilícito de esta naturaleza, toda vez que pueden en un momento dado perturbar la razón de una persona.

De donde resulta que no hay cabida para aceptar la tesis de que el motivo fue fútil.

Por otro lado, manifiesta el apelante que existen circunstancias agravantes, y señala como tal el abuso de superioridad física, tanto en edad como en estatura. La doctrina sostiene que el abuso de superioridad busca debilitar a la víctima, debilitar su defensa. Considera la Sala que las diferencias a que se refiere el recurrente (el agresor era 24 años más joven que el agredido, y 11 centímetros más alto) fueron efectivamente usadas por **MATOS ZAPATA** de manera ventajosa para dominar al agredido. Por esta razón considera esta Superioridad que el incautado sí actuó con abuso de superioridad en la comisión del ilícito.

En otro orden de ideas, el recurrente señaló que hubo ensañamiento en el hecho, basado en los resultados arrojados por el Protocolo de Necropsia, plasmado a fojas 130-142 del infolio y señaló que hubo ensañamiento en el hecho, basado en los resultados arrojados por el Protocolo de Necropsia, plasmado a fojas 130-142 del infolio.

Sobre el particular, tanto la doctrina como la jurisprudencia de este tribunal coinciden al manifestar que el número plural de heridas que presenta un cadáver no es indicativo de que el agente haya actuado con ensañamiento.

En efecto, el ensañamiento no solo se comprueba a través de ese medio objetivo de prueba (protocolo de necropsia), porque además es necesario que se compruebe el aspecto subjetivo del agente, que dice relación con la intención de aumentar el dolor y el sufrimiento de la víctima mediante la inflicción de un castigo cruel e innecesario para cometer el ilícito. Y en el expediente no hay constancia de que esa haya sido la intención del procesado.

También asegura el Funcionario Apelante que la sentencia desconoció la conducta simultánea y posterior del justiciado, refiriéndose a que el mismo golpeó al hoy occiso, que estando vivo lo arrastró y lo tiró en la cuneta; además de que quiso que pareciera un robo, y al verlo respirando, lo dejó en la alcantarilla, asegurando el apelante que el señor **MATOS ZAPATA** tuvo la oportunidad de salvarlo, y no lo hizo. En este sentido, observa la Corte que el sindicado tenía perfecta conciencia de sus actos, por cuanto recordó posteriormente -en el examen psiquiátrico - todo lo acontecido, lo cual demuestra

que actuó con la intención de que pareciera un asalto, tal como manifestó en la declaración indagatoria (fs. 44); además, dijo que por ser el occiso chico y delgado, pudo arrastrarlo hasta el lugar en que apareció.

Estas consideraciones llevan a la Sala al convencimiento de que, tal como lo solicita al apelante, debe considerarse la conducta simultánea y posterior del actor en la determinación de la pena a aplicar.

Por otro lado, sostiene el apelante que el encartado se embriagó deliberadamente, lo que se desprende del examen rendido por el psiquiatra forense, a foja 239, y de la declaración del mismo imputado, a foja 43.

Por lo tocante a la declaración citada por el recurrente, esta instancia observa que el señor **MATOS** declaró que siguió tomando en casa de **VALENTÍN SÁNCHEZ**, y al irse para su casa, se cayó de la bicicleta en la que se transportaba, tirando la misma luego para el lado derecho, entendiéndose que el encartado se percató de que no podía manejarla; luego "vio venir a una persona y cuando ya estaba cerca, reconoció que era el señor Arsenio Castillo". En este sentido, entiende la Corte que el justiciado no se embriagó deliberadamente, pues en el camino fue que se dio cuenta que venía el occiso, reconociéndolo sólo cuando se le acercó.

Finalmente, respecto al rechazo del apelante de la atenuante reconocida por el a quo, referente a la confesión voluntaria y oportuna, observa la Sala que en su primera declaración el procesado negó la comisión del ilícito, y que vino a confesar cuando existían graves indicios en su contra. Esta circunstancia hace que sea viable la petición del recurrente.

Como quiera que han prosperado dos de los cargos de injuridicidad esbozados por el apelante, se hace necesario reformar la sentencia recurrida.

En ese sentido, si se desconoce la atenuante de la confesión,la pena base quedaría en 9 años, que fue la establecida por el a quo. Sobre esta pena es que habría que hacer el aumento, como consecuencia del otro cargo de injuridicidad reconocido por la Sala.

Atendiendo a las directrices que emanan del artículo 50 del Código Penal, y cumpliendo a cabalidad con el mandato del artículo 24 a 28 del Código Judicial, la Corte considera que es justa una pena de 12 años de prisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la sentencia dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial el día 11 de agosto de 1992, la que impone a ROGELIO MATOS ZAPATA una pena líquida de 7 años y medio (90) meses) más la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término, y mientras dure la pena principal, e impone la de doce (12) años de prisión, más la inhabilitación para ejercer funciones públicas durante el mismo término y mientras dure la pena principal, y la CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO CONTRA HILARIO ÁNGEL GUERRA ESCOBAR, GILBERTO SANTOS SUÑE GÓMEZ Y CARLOS ENRIQUE MORALES MORALES, POR DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CAMILO GALINDO MARTÍNEZ Y EMÉRITO ARAÚZ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 8 de noviembre de 1993, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial concedió en el efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto por el licenciado **SILVIO GUERRA MORALES**, en representación de **CARLOS ENRIQUE MORALES** contra la sentencia de 19 de julio de 1993, la cual condenó a éste a la pena principal de 20 años de prisión y a la pena de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas mientras se cumpla la pena principal, por los delitos de homicidio cometidos en perjuicio de **CAMILO MARTÍNEZ y EMÉRITO ARAÚZ**.

Ejerciendo la función descrita en el artículo 2301 del Código Judicial, la Sala observa que es necesario ordenar la reposición del proceso por haber omitido el tribunal pronunciamiento respecto a los recursos de apelación interpuestos por los apoderados legales de los sentenciados HILARIO ÁNGEL GUERRA ESCOBAR y GILBERTO SÁNCHEZ SUÑE GÓMEZ y por éstos en el acto de notificación personal (cfr. f. 831 vuelta).

El sólo hecho de haber anunciado apelación los tres imputados y sus defensores, amerita un pronunciamiento del Tribunal no sólo en cuanto a la concesión del recurso sustentado, pues además es necesario que los recursos no sustentados sean declarados desiertos de conformidad con lo que dispone el artículo 2420 del Código Judicial. Error de igual índole le fue puesto en conocimiento a este mismo tribunal mediante resolución del 13 de octubre de 1993, expresando la Sala al a-quo que tomara nota de los perjuicios

que esta situación ocasiona a la administración de justicia (juicio seguido contra ROBLEDO COMEZO VEGA).

Detectada la omisión de procedimiento en que incurrió el Tribunal de primera instancia, corresponde en esta esfera superior declarar la nulidad de la resolución dictada el 8 de noviembre de 1993 (f. 854) y del edicto de notificación N°1028 (f. 857), de conformidad con las funciones que de oficio le confiere el artículo 199, numeral 10 del Código Judicial.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LA NULIDAD de la providencia de 8 de noviembre de 1993 y de la notificación realizada mediante el Edicto N°1028, visibles a folios 854 y 857, respectivamente, y, en consecuencia, DISPONE devolver el expediente al Tribunal de origen para que subsane la omisión anotada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN FORMULADA A FAVOR DE EDUARDO HARMODIO BERBEY POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE AIDELENA PEREIRA. MAGISTRADO PONENTE. CARLOS H. CUESTAS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante auto de 1° de noviembre del año en curso, concedió fianza de excarcelación solicitada en favor de Eduardo Berbey Melgar y fijó la cuantía de la misma en la suma de B/.500.000.00. Contra esa resolución anunciaron sendos recursos de apelación el Fiscal Cuarto Superior y la apoderada judicial del imputado, licenciada Carmina Casís Crespo, los que fueron concedidos en el efecto diferido.

En opinión del Fiscal Cuarto Superior, la acción que se le imputa a Eduardo Berbey es la de tentativa de homicidio agravado, tipificada en el artículo 132 del Código Penal, por lo que considera que el imputado no tiene derecho al beneficio de la excarcelación (f.36)

Por su parte, la licenciada Carmina Casís Crespo, explica su disconformidad con el auto recurrido en extenso escrito de 43 páginas, sustentado en jurisprudencia relativa a temas tales como la premeditación (fs.43-44), la concesión de fianzas de excarcelación en casos de tentativa de homicidio (fs.46-49, 53-59), la intención de matar (fs. 65-67), y el delito genérico de lesiones (fs.79-82), sosteniendo que en el presente caso "no hay dato alguno que revele la intención, la resolución y la consiguiente preparación del delito, menos en la forma ponderada que requiere la ley como para que el señor Fiscal la aduzca, para agravar la situación del sindicado" (f.43).

Según la recurrente, el imputado no tuvo la intención de causar la muerte ni lesiones a la Juez Aidelena Pereira, sino que actuó de manera súbita e inesperada cuando advirtió que el policía iba a ponerle las esposas a la licenciada Omayra García de Berbey, lo que "desesperadamente quiso evitar nuestro mandante, produciéndose una grave perturbación de su conciencia cuando extrajo el arma del bolsillo con el propósito de hacer un disparo al techo, a objeto de intimidar o de llamar la atención, de suerte que se evitara la acción del arresto contra su esposa" (f.61). Con base en esa premisa sostiene que "la intención de matar y de lesionar a la Sra. AIDELENA PEREIRA estuvo ausente de la voluntad de nuestro mandante, como se desprende del resultado, de las declaraciones que militan en autos, y las de nuestro representado que corre a fojas 51-56 de la instrucción sumaria" (f.68), y que lo que dio lugar al disparado, a su juicio accidental, fue "la intervención del Sr. ARCADIO NAVARRO MONTERREY, quien se abalanzó sobre el Sr. EDUARDO BERBEY, el que AL AGARRARLE EL ARMA FUE QUE ESTA DETONO y no por el querer avieso del presunto imputado" (f.69).

En opinión de la licenciada Casís Crespo, a la Juez Pereira "no le fueron afectados órganos vitales, consecuencialmente, NO ESTUVO EN PELIGRO SU VIDA, por lo que la calificación del delito es impropio, configurándose el hecho motivo de la investigación como delito de LESIONES" (f.79), tipo penal que en su opinión no da lugar a la detención preventiva, de modo que solicita la libertad del imputado.

También plantea la defensa técnica que, de mantenerse la calificación de tentativa de homicidio, igualmente se mantenga el beneficio de excarcelación reconocido, pero que se modifique la resolución apelada y se fije la cuantía de la fianza según los parámetros del artículos 2166 del Código Judicial, ya que "la suma fijada en B/.500,000.00 equivale a negar la fianza" (f.48). A tales efectos señala que su representado "sólo es un hombre esforzado, de trabajo y sencillo. Si medimos la intelectualidad por los años cursados en la Universidad, se desprende que nuestro mandante al cursar el V año de Universidad no se le puede denominar como un intelectual elevado, por razones obvias" (f.50), además de

que el imputado no tiene antecedentes penales y "es jubilado con 61 años de edad y la pensión bruta como jubilado es de B/.481.86 mensual, lo que es indicativo de que no goza de una situación económica elevada que le permita satisfacer el quantum de la fianza fijada por esa Corporación en B/.500.000.00" (f.51).

En ambos recursos se llama la atención sobre la tipificación que ha hecho el a-quo de la conducta del sujeto activo, en lo referente a si se trata de homicidio simple u homicidio calificado o si, por el contrario, los hechos solamente integran el delito de lesiones personales. Valga aclarar que para distinguir el tipo penal de homicidio frente al de lesiones personales, lo indicado es determinar el elemento subjetivo que, en el caso de las lesiones personales, lo constituye la intención de dañar la integridad física o psíquica de la víctima, mientras que en el homicidio doloso debe existir la intención de matar.

Los antecedentes que se acompañan al cuaderno de la fianza ponen de manifiesto que el día martes 12 de octubre de 1993, en el despacho de la Corregiduría de Bella Vista, en horas el mediodía, fue herida con arma de fuego la licenciada Aidelena Pereira por el imputado Berbey, hecho que fue denunciado por la Corregidora Rubiela Del C. Macías Urriola (fs.1-5). Berbey Melgar admite que hirió a la Juez Pereira con un revólver calibre 22, y explica que su acción se debió a que, ante las ordenes determinantes de "que arrestaran a mi mujer y le colocaran esposas perdí el control, extraje el arma del bolsillo con el propósito de hacer un disparo al techo para llamar la atención de que no era correcto lo que se hacia pero fue allí donde al sacar el arma el guardaespaldas personal de la señora Pereira, me sujeta el brazo y se me escapa un disparo que accidentalmente hiere a la Juez Pereira" (f.53). Sin embargo, contrario a lo manifestado por el imputado, la denunciante afirma que el imputado "sacó un arma de fuego y disparó contra la Licenciada PEREIRA, quién se encontraba a tres metros de él aproximadamente" (f.2), en tanto que Arcadio Navarro Monterrey, Inspector de Seguridad asignado el día de autos a la protección de la licenciada Pereira, precisamente por la agresión de que con anterioridad ya había sido víctima, sostiene que se percató cuando el individuo agresor se viró "de manera rápida teniendo ya empuñada el arma, y apuntando directamente hacia el pecho de mijefa (sic) ... yo realicé una acción rápida empujando a la Juez con mi mano izquierda, ... lo que hice fue que le quité el objetivo, en esos momentos ya yo había realizado un paso largo hacia el agresor para evitar la acción, **... dirigí mi mano hacia el arma, el cual lo subió como para tratar de alcanzarla ya que había perdido la visualización**" f.35).

Estos testimonios dejan ver claramente que la acción emprendida por el imputado tenían el firme propósito de causar daño a la integridad física, de la Juez Pereira, con grave peligro para su vida, resultado efectivamente obtenido ya que el informe rendido por el médico forense da cuenta de que la ofendida "presenta orificio de entrada de proyectil de arma de fuego, que presenta ahumamiento y que mide 0.6 cms. de diámetro a nivel del 8° espacio intercostal derecho", como también se consigna que "**si puso en peligro la vida**" de la víctima (f.11). A la luz de estas comprobaciones la Sala comparte la calificación que hace el a-quo cuando enmarca la conducta del imputado Berbey en el tipo penal de homicidio, en grado de tentativa.

A los efectos de establecer si el autor de dicha conducta puede ser beneficiado con el derecho de excarcelación, debemos recordar que el delito de homicidio, en sus modalidades simple y agravada, está excluido de ese beneficio por razón de que la pena mínima es mayor de cinco años (a.2181 C.J.). Sin embargo, dentro de esa exclusión no esta comprendido el homicidio en grado de tentativa, aunque sea agravado, puesto que, de acuerdo con el artículo 60 del Código Penal, la tentativa se reprime con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de los dos tercios del máximo de la establecida para el correspondiente hecho punible. Si el homicidio agravado conlleva pena de 12 a 20 años de prisión (a. 132 C.P.), entonces su comisión en grado de tentativa sólo puede ser reprimida con pena que oscilaría entre 4 a 13 años con 4 meses de prisión, de donde resulta que la tentativa de homicidio sí permite el reconocimiento del beneficio de excarcelación.

Cabe destacar que la excarcelación bajo fianza es el beneficio que se concede a los imputados por delitos no previstos en el artículo 2181 del Código Judicial, ya sea para obtener una libertad cautelada o para no ser detenidos. Constituye en su esencia una medida cautelar personal sustitutiva de la detención preventiva y puede sumarse a las de naturaleza personal previstas en el artículo 2147-B del Código de Procedimientos.

En tal virtud considera la Corte que al conceder este beneficio el juzgador debe, no sólo considerar lo previsto en el artículo 2166 ibídem, sino igualmente considerar las pautas normativas que le indican el artículo 2147-C y el primer inciso del 2147-D del Código Judicial, a saber:

"2147-C. Serán aplicables las medidas cautelares:

a) Cuando existan exigencias inaplazables relativas a las investigaciones, relacionadas con situaciones concretas de peligro para la adquisición o la autenticidad de las pruebas;

b) Cuando el imputado se dé a la fuga o exista peligro evidente de que intenta hacerlo, y el delito contemple pena mínima de dos años de prisión;

c) Cuando, por circunstancias especiales o por la personalidad del imputado, exista peligro concreto de que éste cometa delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

Artículo 2147-D. Al aplicar las medidas, el Juez y el funcionario de instrucción deberán evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto.

En estricta lógica, si la detención preventiva es la más grave de las medidas cautelares personales previstas en el artículo 2147-B, la medida cautelar que la sustituya deberá considerar las circunstancias tanto fácticas como jurídicas que hayan justificado a la primera, a fin de satisfacer las exigencias cautelares del caso concreto.

En el negocio sub-judice debe, por tanto, el juzgador tomar en cuenta la naturaleza del delito, el estado social e intelectual, antecedentes y situación pecuniaria del imputado, la posibilidad de que éste pueda ponerse fuera del alcance de las autoridades, pero también el peligro concreto de que pueda cometer delitos graves mediante el uso de armas u otros medios de violencia personal.

En otras palabras, si la persona que solicita el beneficio de la excarcelación está detenida preventivamente por concurrir los presupuestos del artículo 2147-C, la cuantía de la fianza de excarcelación debe fijarse siguiendo los criterios señalados en esa norma para no hacer nugatorios los fines del proceso.

En el auto que señala la cuantía de la fianza, el a-quo destaca que se trata de un delito grave, que el sindicado es un comerciante con escolaridad hasta V año de estudios universitarios de Administración Pública, que el hecho se escenificó en una oficina pública donde hizo acto de presencia a solicitud de su esposa Omayra García de Berbey, y que no es un individuo de escaso intelecto.

Estos argumentos, aunados a la admisión por el imputado de que su acción se produjo ante las "ordenes determinantes de que arrestaran a mi mujer y le colocaran las esposas" (f.53), son circunstancias que permiten inferir el poco o ningún respeto de Berbey por la majestad y decisiones de las autoridades competentes para resolver los conflictos que ante ellas se ventilan, lo que refleja una personalidad peligrosa, lo que hace necesario adecuar el monto de la fianza con la medida de la gravedad de la conducta examinada, para que la cuantía señalada cumple con el cometido de asegurar el imputado al proceso, como también se traduzca en una prevención para que el imputado se abstenga de cometer delitos graves mediante el uso de armas. La conducta incriminada constituye un deplorable ejemplo de irrespeto de las instituciones tutelares del país, por sus características más salientes: a) el delito se comete contra autoridad jurisdiccional de circuito judicial, b) en momentos en que se llevaba adelante una actividad autorizada y amparada por la ley, c) en un despacho público de otra autoridad, esta administrativa, d) sin importar la presencia de "8 a 10 agentes de diferentes rangos" (Navarro Monterrey, f.34) además del seguridad personal de la ofendida. A todo ello se agrega el hecho de que el porte de arma por el imputado sugiere la ejecución de un importante acto preparatorio del hecho, el resultado de una deliberación anticipada a la consumación del ilícito, valores de los que hace adecuada valoración el auto impugnado.

En razón de todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto apelado en el sentido de fijar la cuantía de la fianza que debe ser prestada por el imputado para gozar de libertad provisional en la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MIL BALBOAS (B/.250.000.00).

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA DE EXCARCELACIÓN PRESENTADA POR LA SEÑORA YOLANDA BENALCÁZAR DE RODRÍGUEZ A FAVOR DE ERASMO RODRÍGUEZ CRUZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE JUAN CARLOS CALDERÓN BATISTA. PROCEDE DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante auto fechado 2 de noviembre de 1993, denegó la solicitud de fianza de excarcelación que había interpuesto la señora Yolanda Benalcázar de Rodríguez a favor de su hijo ERASMO RODRÍGUEZ CRUZ, quien se encuentra sindicado del delito de homicidio cometido en perjuicio de JUAN CARLOS CALDERÓN BATISTA, hecho ocurrido el 8 de octubre del presente año.

Las sumarias revelan que el día de los acontecimientos, miembros de la Policía Nacional de la Zona de Herrera, dispusieron realizar un operativo en el Corregimiento de la Arena, con el objeto de aprehender a personas indocumentadas, a menores de edad y frenar a los componentes de la banda denominada "Tinny Toon", que, según se afirma, tienen atemorizada a la ciudadanía del ciudadanía.

Consta en el expediente que los miembros de la Fuerza Pública, entre los cuales se encontraba el imputado ERASMO RODRÍGUEZ CRUZ, arribaron al parque de la comunidad, en donde se encontraban varios sujetos, quienes al percatarse de la presencia de los agentes del orden público, se dieron a la fuga, lo que motivó que los agentes procedieran a perseguir los.

De acuerdo a lo que se deduce del sumario, el ahora occiso fue una de las personas que salió corriendo, logrando llegar a la Iglesia, en donde procedió a subir una verja

que queda al costado de la misma. Y es en esos precisos instantes en los que, según relata el imputado, se le salió un disparo del arma reglamentaria, debido a un resbalón que tuvo.

En el proceso aparece un sin número de declaraciones de algunos de los agentes que participaron en el operativo antes mencionado, pero, como bien señaló el tribunal de la causa, de dichos testimonios se desprende que los deponentes no estuvieron presentes en la escena del crimen, por lo que en realidad tales declaraciones son de poco aporte a estas sumarias.

Como contraposición a lo anterior, se tiene el hecho de que existe un testigo (NELSON JAVIER IVÁN GONZÁLEZ SALAZAR) que manifiesta haber visto cuando dos miembros del orden público correteaban al ahora occiso y a Jaime Calderón (quien corría al lado del occiso). De acuerdo a este testigo, el difunto y su acompañante se dirigieron a un costado de la iglesia y, mientras se disponían a escalar la verja, uno de los agentes realizó un disparo al aire, en tanto que el otro disparó directamente sobre el infortunado JUAN CARLOS CALDERÓN BATISTA (fs. 141-142).

Esta versión de los hechos contrasta notablemente con la suministrada por el imputado, y constituye, a juicio de la Sala, un elemento incriminador suficiente como para descartar la tesis del homicidio culposo que se ha intentado esbozar en el presente negocio. De ahí que deba confirmarse el auto impugnado.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA en todas sus partes el auto de 2 de noviembre de 1993, expedido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se deniega el derecho de excarcelación solicitado a favor de ERASMO RODRÍGUEZ CRUZ, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de JUAN CARLOS CALDERÓN BATISTA.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE FIANZA A FAVOR DE OMAR RODRÍGUEZ, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA EN PERJUICIO DE ANDRÉS PRADO Y LUIS A. TUÑÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Conoce la Sala, en grado de apelación, de solicitud de fianza de excarcelación formulada a favor de Omar Rodríguez López, sindicado por el delito de homicidio, en grado de tentativa, cometido en perjuicio de Andrés Prado y Luis A. Tuñón.

El beneficio de excarcelación le fue negado a Rodríguez López por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, mediante auto de 11 de noviembre pasado. La apelación fue presentada por el licenciado Horacio Ramsey Morales quien, para fundamentar el recurso, plantea que los casos por los cuales se mantuvo filiado a su defendido en el centro penitenciario han concluido con diversos sobreseimientos, cuyos oficios están debidamente registrados en la Cárcel Modelo. Considera el licenciado Ramsey que con nota suscrita por el Secretario Judicial de la Cárcel Modelo, la que aporta como prueba con su escrito de apelación, la situación jurídica de su representado ha variado, por lo que solicita la revocatoria del auto impugnado y que, en su lugar, se señale la cuantía de la fianza.

Para negar la excarcelación el a-quo se fundamentó en que el 24 de junio de 1992 se canceló el beneficio de excarcelación de que gozaba Rodríguez López, "toda vez que se acreditó que éste había sido reducido a prisión por haber infringido nuevamente la Ley Penal, siendo filiado a disposición de otras autoridades de la justicia ordinaria". Que como consecuencia de la mencionada cancelación se negó una nueva petición de fianza a favor del imputado, por cuanto tal derecho lo perdió por ministerio de la ley. Sigue explicando el a-quo que ante una tercera petición, formulada por la firma forense Ramsey, Pérez & Asociados, argumentando en esta oportunidad que se ha establecido la falta de participación de Rodríguez en los hechos ilícitos que motivaron se le cancelara primero la fianza y se le negara después el derecho a ser excarcelado bajo fianza, también se le negó el beneficio de excarcelación por cuanto, por haberse acreditado la inocencia del justiciable en esos negocios penales, "sería factible acceder al requerimiento que ahora se hace; sin embargo, nada de esto se aportó junto al escrito petitorio; solo se cuenta con la afirmación que allí se hace" (f.7).

Junto con el libelo de la apelación de que ahora conoce esta Sala el recurrente acompañó nota N°3652-SJ, suscrita por el Secretario Judicial (a.i.) de la Cárcel Modelo, de 17 de noviembre de 1993, donde informa que Omar Alberto Rodríguez, con cédula de identidad personal N°3-84-2692, ingresó a ese centro penal el 11 de octubre de 1991, sindicado por el delito de tentativa de homicidio cometido en perjuicio de Andrés Prado Abrego y Luis A. Tuñón (f.10). Esta información no alude a si el imputado tiene o no otras causas pendientes, tan sólo se refiere a la causa por la cual ingresó en la fecha antes indicada, información que, por insuficiente, no aporta la prueba de que el imputado hubiere sido liberado mediante sobreseimiento, como alega el recurrente, de los casos que

motivaron la cancelación de la fianza, por lo que lo consecuente es aprobar el auto recurrido.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto llegado en grado de apelación.

Notifíquese y devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSé M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A NATIVIDAD CENTENO RODRÍGUEZ POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, actuando en representación de Natividad Centeno Rodríguez, ha comparecido ante la Sala Segunda de la Corte Suprema con el fin de "SOLICITAR EL LEVANTAMIENTO DE LA APREHENSIÓN PROVISIONAL de la suma de dinero confiscado a nuestro mandante mediante diligencia de allanamiento, todo ello en virtud de lo normado por el artículo 24 de la Ley 23 de 30 de diciembre de 1986".

La cuantía del dinero reclamado alcanza la suma de B/.454.39 la que, según el peticionario, "fue aprehendida provisionalmente y puesta a ordenes de la Procuraduría General de la Nación y depositada por mandato legal en el Fondo de Custodia del Banco Nacional de Panamá". El licenciado Carrillo, entre otros hechos, basa su solicitud en que "a nuestro representado se le condenó a la pena principal de CUARENTA (40) MESES DE PRISIÓN e igualmente se ORDENO la liberación de los bienes decomisados y que son de propiedad de nuestro mandante", pero que hasta la fecha no se le ha devuelto dicho dinero a su legítimo dueño. Como prueba de su afirmación adjunta copias autenticadas del acta de la diligencia de allanamiento y aprehensión provisional y del fallo de 19 de septiembre de 1991.

El Procurador General de la Nación, al contestar traslado de la solicitud formulada, plantea que si ya existe una resolución ejecutoriada donde que ordena la liberación de los bienes muebles decomisados, es "por lo que en ese sentido esta Procuraduría considera de lugar acatar la decisión proferida por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, y dispone liberar la cantidad de dinero que se detalla a foja 2 reverso del sumario incoado a NATIVIDAD CENTENO RODRÍGUEZ, situación ésta que resuelve la petición elevada por el recurrente ante esa Augusta Sala de Justicia" (f.18).

De conformidad con el artículo 24 de la ley 23 de 1986, en los procesos por delito relacionado con droga, la Sala Segunda de la Corte Suprema sólo tiene competencia para decretar desaprensiones provisionales de "bienes **que no sea dineros o valores**", siempre y cuando la causa no haya sido decidida definitivamente. Por consiguiente, la desaprensión de dineros o valores es objeto de pronunciamiento que corresponde al tribunal jurisdiccional competente al momento de decidir la causa en forma definitiva.

La prueba aportada por el peticionario permite establecer, con certeza, que el proceso principal por la cual fue aprehendido el dinero reclamado ya fue decidido en forma definitiva por el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante sentencia de 18 de septiembre de 1991, de modo que la pretensión del licenciado Carlos Carrillo debe ser dirigida a y resuelta por el tribunal competente.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DISPONE DECLINAR la presente solicitud ante el Juzgado Décimo de Circuito de lo Penal, a fin de que se resuelva lo que en derecho corresponda.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO Y APREHENSIÓN DENTRO DEL CASO SEGUIDO A ARTURO ANTIOCO POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **VÍCTOR M. HARDING S.**, actuando en nombre y representación de **MARYORIE WHITE DE ANTIOCO**, ha solicitado a la Sala Segunda el levantamiento de la orden de aprehensión provisional del vehículo marca Toyota HI-ACE con placa 3-7721 del año 1993, actualmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación por razón de la investigación sumarial que involucra al señor **ARTURO ANTIOCO CATUY** con el tráfico de drogas.

En su escrito el solicitante señala lo siguiente:

"PRIMERO: El día primero (1°) del presente año se realizó allanamiento en una residencia de Villa del Carmen, lugar donde se encontró gran cantidad de una sustancia blanca la cual resultó ser droga.

SEGUNDO: Luego de dicha diligencia se incautaron tres (3) vehículos uno de los cuales es de mi poderdante.

TERCERO: Mi poderdante es dueño del vehículo "TOYOTA" modelo HIC (sic) Ace tipo busito año 1993, con placa N°3-7721-93; el cual no se encontraba en el lugar del allanamiento ni mucho menos droga dentro del mismo.

CUARTO: Que sobre el vehículo de mi poderdante pesa una hipoteca con el Banco del Istmo.

QUINTO: Que el día del allanamiento las autoridades de instrucción se llevaron todos los documentos relacionados con el vehículo de mi poderdante.

SEXTO: No existen suficientes méritos para mantener la aprehensión del bien de mi patrocinada toda vez que no tiene ninguna vinculación con el ilícito que se investiga.

Por todo lo antes expuesto solicito que dicha corporación de justicia ordene el levantamiento del el automóvil de mi poderdante que se encuentra aprehendido provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación".

Al contestar el traslado correspondiente, el Procurador General de la Nación, mediante vista N°46, de 22 de noviembre de 1993 consideró que debe mantenerse la medida provisional sobre el bien en cuestión, tal como consta a fojas 7-9 del cuaderno respectivo.

En opinión del Procurador:

"La solicitud es fundamentada esencialmente en el hecho de que, en el vehículo antes descrito no se encontró droga ni se encontraba en el lugar donde se verificó el allanamiento en el que se incautó la sustancia ilícita a la cual se vincula.

Mediante resolución fechada seis (6) de octubre pasado, se ordenó la aprehensión provisional de los vehículos:

**Hyundai Stellar**, año 1991, color blanco, con matrícula N°8-59467.

**Toyota**, **modelo Hic-Ace Commuter**, tipo busito, año 1993, con matrícula N° 3B-7721.

Tal decisión se fundamentó en el hecho de que los mismos se encontraban en las inmediaciones de los lugares allanados, razón por la cual se presumió que éstos eran de propiedad del señor **ARTURO ANTIOCO CATUY**, presunto infractor de las disposiciones contenidas en el Capítulo V, Título VII, Libro II del Código Penal.

La señora **MARYORIE WHITE DE ANTIOCO**, es la esposa de **ARTURO ANTIOCO CATUY**, a quien se le imputa la comisión del DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA, luego de que el pasado primero (1) de octubre, se le incautaran **202,105.00 Gramos de "COCAÍNA"**, con la cual se vincula.

En la fecha antes indicada se practicaron, en forma simultánea, tres (3) allanamientos, uno de éstos a la residencia de los señores **ANTIOCO**, en el que, si bien es cierto que no se detectó la droga, si se encontró gran cantidad de dinero, que por la forma en que estaba fraccionado, es indicio que el mismo pudiera ser proveniente de la venta de sustancias ilícitas. Se incautó también, entre otras cosas, documentos que referían lo siguiente: **SE RETIRO $100.00 PARA HABEAS CORPUS Y** $100.00 **"PARA PREPARACIÓN DE BACHA"**, lo que guarda relación con asuntos de tipo de legales, indicativo a su vez de la ilicitud de algunos actos relacionados con quienes habitan en dicho inmueble, todo ello nos lleva a concluir, que al igual que las evidencias antes descritas, los vehículos aprehendidos están vinculados con el hecho que se investiga.

No obstante lo anterior, debemos tener presente que las sumarias que nos ocupan se iniciaron luego de que se tuviera conocimiento que el señor **ARTURO ANTIOCO CATUY U OTROS**, se dedicaban a la distribución, local y al extranjero, de sustancias ilícitas, para lo cual se requería de medios

> idóneos para ello, los que perfectamente y en forma discreta se podía realizar en vehículos "Colegiales".
>
> Si bien es cierto que el vehículo se encuentra a nombre de la señora **MARYORIE WHITE DE ANTIOCO**, unida por el vínculo matrimonial a **ARTURO ANTIOCO CATUY**, quienes comparten un hogar común, nada descarta la posibilidad de que ésta tenga pleno conocimiento o participación de los "negocios" que realiza su cónyuge.
>
> La aprehensión provisional es una medida cautelar establecida para los hechos ilícitos relacionados con drogas, tal y como lo establece el Artículo 22 de la Ley 23, de 30 de diciembre de 1986, la cual debe mantenerse hasta que la causa sea decidida por el tribunal Jurisdiccional competente. En el presente caso, luego de haber plasmado nuestras consideraciones al respecto, somos del criterio de que la medida adoptada mediante resolución fechada seis (6) de octubre de 1993, debe mantenerse".

Para decidir la pretensión formulada la Sala debe efectuar las siguientes consideraciones, de modo que se consideren los aspectos aportados por el peticionario y el Procurador General de la Nación.

Sobre el particular la Sala observa que no existe ninguna razón que justifique la medida adoptada por el Ministerio Público en la causa que se sigue al señor ANTIOCO CATUY para la aprehensión provisional del vehículo antes mencionado.

En dicho vehículo no se encontró droga ni la propietaria del mismo está involucrada en tal ilícito por lo que es aventurado pensar que ARTURO ANTIOCO CATUY utiliza el bus colegial marca Toyota HI-ACE para fines ilícitos. Pretender que el bus colegial puede ser usado en forma discreta para el tráfico de droga es una presunción que riñe con los más elementales principios del derecho procesal moderno, ya que mientras no se demuestre tal situación nada podrá justificar tal afirmación.

Por otra parte, el apoderado de la señora MARYORIE WHITE DE ANTIOCO ha comprobado fehacientemente que dicho vehículo tiene un gravamen a favor del Banco del Istmo, lo que pone en evidencia que la propietaria no ha adquirido ese bien con grandes facilidades y que tuvo que recurrir a un préstamo hipotecario para lograr la adquisición del vehículo en cuestión. Nada indica, por tanto, que los fondos provenientes del tráfico de drogas se han usado para adquirir el vehículo antes descrito, por lo que debe accederse a lo solicitado.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Sala Segunda de lo Penal, la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE a MARYORIE WHITE DE ANTIOCO la tenencia provisional del vehículo antes indicado, previa la comprobación de que en el Municipio correspondiente está inscrita esta limitación, de forma tal que el vehículo no pueda ser traspasado o dado en garantía hasta que el Tribunal de la causa que conozca del negocio en su oportunidad decida sobre el destino final del mismo.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO COLLADO

(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL INTERPUESTA DENTRO DE LAS SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA BERTHA JANETH MARMOLEJO Y MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS, SINDICADO POR EL DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Melitza del Carmen Méndez de Obarrio, actuando en su calidad de Gerente General y Representante Legal de Servicios Turísticos Panameños, S. A., otorgó poder a la Firma Alemán, Cordero, Galindo & Lee para que, en su nombre y representación, "gestione el levantamiento de la aprehensión provisional decretada mediante resolución de 11 de mayo de 1993 por la Procuraduría General de la Nación sobre el vehículo marca Toyota, modelo Corolla, año 1993, con matrícula 8-44458, color rojo, dentro de las sumarias que se siguen en contra de los señores BERTHA JANETH MARMOLEJO y MARIO REYNALDO SQUIRE DE LOS RÍOS por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas".

El licenciado Jorge Federico Lee, integrante de la firma forense apoderada, plantea que la compañía Servicios Turísticos Panameños, S. A. se dedica al negocio de alquiler de automóviles bajo el nombre comercial "NATIONAL CAR RENTAL", y que al momento en que se ordenó la aprehensión el vehículo de marras "estaba siendo utilizado por la turista colombiana Bertha Janeth Marmolejo, con Pasaporte número AE-231044, quien lo había alquilado desde el 3 de mayo de 1993 en virtud de contrato de arrendamiento número 72235 de esa misma fecha".

El Procurador General de la Nación, al emitir concepto, manifiesta "que se encuentra probada la propiedad del vehículo reclamado, por lo que consideramos que para

evitar mayores perjuicios se debe acceder a lo solicitado, con la salvedad de que el mismo no pueda ser traspasado y se presente cada vez que se solicite"( f.40).

De conformidad con el artículo 24 de la ley 23 de 1986, la Sala Segunda de la Corte Suprema tiene competencia para disponer, a solicitud de parte, sobre la desaprensión provisional de bienes, con excepción de "dineros o valores", que hayan sido empleados en la comisión de delitos relacionados con droga y que estén aprehendidos provisionalmente a órdenes de la Procuraduría General de la Nación.

De acuerdo con el documento de fojas 10-12, aportado con la solicitud, el Procurador General de la Nación ordenó la aprehensión provisional del vehículo reclamado por vinculársele en el sumario que se instruye en contra de Bertha Janeth Marmolejo y Mario Reynaldo Squire De Los Ríos por el delito de tráfico ilícito de drogas.

Con los documentos de fojas 7 y 8 queda demostrado que la compañía Servicios Turísticos Panameños, S. A. es la propietaria del vehículo cuya desaprensión provisional se solicita, e igualmente está comprobado que el vehículo fue alquilado a Bertha Janeth Marmolejo.

Se advierte que el Procurador, al emitir su opinión, no hace alusión a que la compañía arrendadora haya tenido alguna participación en la comisión del delito que se investiga, de modo que es del caso acceder a la desaprensión solicitada, con la restricción que sugiere el Jefe del Ministerio Público.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el levantamiento de la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo marca Toyota, modelo Corolla, tipo camioneta, color rojo, año 1993, con motor N°2E25476382F, Placa N° 8-044458, año 1993, de propiedad de SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A., y DISPONE otorgarle la tenencia provisional a la propietaria, con la advertencia de que no puede traspasarlo ni comprometerlo a ningún título mientras la causa no sea decidida en forma definitiva. A tales efectos, ofíciese a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá, con el objeto de que lo mantenga fuera del comercio hasta nueva orden judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN PROVISIONAL DECRETADA POR LA SECRETARIA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIÓN CON DROGAS, PROCURADURÍA GRAL. DE LA NACIÓN, SOBRE DOS (2) LOCALES (DEPÓSITOS) CONSTRUIDOS SOBRE LA FINCA N°21,202 DE PROP. DE RICHARD D. BILONICK ARRENDADOS A LA EMPRESA QUINCLEANER DE PANAMÁ, S. A., CUYO REPRESENTANTE LEGAL ES PEDRO CASTREJÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Richard D. Bilonick otorgó poder especial al licenciado Feliciano Batista Martínez para que, actuando en su nombre y representación, solicitara el levantamiento de aprehensión provisional decretada por la Secretaría Especializada en delitos relacionados con drogas de la Procuraduría general de la Nación "sobre dos locales (Depósitos) construidos sobre la finca N°21,202 de mi propiedad, arrendados a la empresa QUINCLEANER DE PANAMÁ, S. S. cuyo representante legal es el señor PEDRO CASTREJÓN".

La petición viene sustentada en los siguientes hechos:

> "SEGUNDO: Los locales comerciales construidos sobre la finca N°21,202 fueron objeto de un contrato de arrendamiento entre mi mandante y el señor PEDRO CASTREJÓN, el día 25 de junio de 1991, por el término de un año; aunque dicho contrato opero la tácita reconducción; pero el arrendatario cayó en mora por la cual el día nueve (9) de junio de 1993 se le solicitó al Juez Municipal que decretara el lanzamiento por mora.
>
> TERCERO: En el mes de julio de 1993 la Secretaría de Drogas de la Procuraduría General de la Nación realizó un allanamiento en los locales ocupados por la empresa QUINCLINEAR DE PANAMÁ, S. A. encontrando sustancias ilícitas y cautelando todo lo que ahí se encontraba incluyendo los locales de propiedad de mi representado".

El Procurador General de la Nación, al emitir concepto sobre la referida solicitud, indica que la Secretaría Especializada en Delitos relacionados con drogas realizó, el 16 de julio del año en curso, diligencia de allanamiento en el Depósito de la Empresa Quincleaner, en cuyo interior encontró 550 paquetes de cocaína con un peso total de 490.100.00 gramos, razón por la que se procedió al cierre temporal del local.

Anota el Procurador que el incidentista ha demostrado que su cliente es el propietario del local allanado y que lo tenía arrendado a Pedro Pablo Castrejón Cedeño, pero que a su entender dicha relación contractual debió terminar, sin que conste la prórroga de la misma o que en dicho contrato operó la tácita reconducción, ni que por

razón de mora imputable a Castrejón se haya solicitado al Juez Municipal que decretara el lanzamiento (f.9), en razón de lo cual, y por tratarse de gran volumen de material nocivo, recomienda que se desestime la solicitud formulada.

Mediante certificación expedida por el Registro Público ha quedado demostrado que Richard Dujo Bilonick es el propietario de la finca N°21,202, ubicada en Urbanización de la Carrasquilla o Tiro al Blanco (f.3). Igualmente, está demostrado que Bilonick, mediante contrató celebrado el 25 de junio de 1991 por término de un año, dio en arrendamiento a Pedro P. Castrejón, como representante de Quincleaner de Panamá, S. A., el local N°641, ubicado en la finca N°2120, para ser utilizado como depósito (f.4).

El contrato de arrendamiento venció el 25 de junio de 1992, y no se ha aportado evidencia demostrativa de que operara la tácita reconducción, como tampoco el trámite del alegado lanzamiento por mora. Por otra parte, el Procurador advierte que "En el lugar de los hechos se cuestionó al señor Pedro Pablo Castrejón Cedeño sobre dicha Carga, manifestando que desconocía la procedencia de la misma y mostró una fotocopia de la factura de compra de mil quinientas (1,500) docenas de sweters en el local POLLNETT S. S. los mismos que fueron encontrados en el local donde estaba camuflada la droga" (f.8). De acuerdo con esta comprobación, y en ausencia de la prueba de las circunstancias de descargo alegadas por la arrendataria, al momento en que se practicó la diligencia de allanamiento Quincleaner de Panamá seguía utilizando el local.

El hecho de que el peticionario haya comprobado la propiedad del inmueble, aunado a la evidencia de que el local, al momento en que fuera encontrada la droga, era utilizado comercialmente por otra persona, así como a la circunstancia de que se trata de un bien que, por su naturaleza, admite la imposición de una medida como la solicitada, sin correr el riesgo de que pueda ser traspuesto, la Sala encuentra fundada la pretensión del peticionario para proceder con fundamento en lo que norma el artículo 24 de la ley 23 de 1986.

En razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el levantamiento de la aprehensión provisional que pesa sobre el local (Depósito) ubicado sobre la finca N°21,202, inscrita al tomo 510 folio 156 de la Provincia de Panamá, y DISPONE otorgarle su tenencia provisional a Richard Dujo Bilonick, con cédula de identidad personal N°N-4-108, con la advertencia de que no puede traspasarlo a ningún título, hasta que la causa sea decidida en forma definitiva. A tales efectos, ofíciese al Registro Público con el objeto de que lo mantenga fuera del comercio hasta nueva orden judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.)FABIÁN A. ECHEVERS

(fdo.) JOSÉ M. FAÚNDES (fdo.) AURA G. DE VILLALAZ

(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE LEVANTAMIENTO DE APREHENSIÓN DE VEHÍCULO DENTRO DE LAS SUMARIAS QUE SE SIGUEN CONTRA FRANCISCO JAVIER CARDONA CASTRO, ALIRIO CRUZ, MANUEL JIMÉNEZ PATIÑO, CARLOS HERRERA BUITRAGO Y CARLOS FERNANDO MONTILLA CASTRO, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En uso del poder general que **SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS S. A.** le tiene conferido a la firma forense **ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE,** este presentó solicitud para que "se disponga el levantamiento de la aprehensión provisional decretada mediante Resolución de 23 de julio de 1993 por la Fiscalía Segunda del Circuito Judicial de Colón sobre el vehículo marca Daihatsu, modelo Charade, año 1993, con matrícula 8-46231, color azul claro dentro de las sumarias que se siguen en contra de los señores **FRANCISCO JAVIER CARDONA CASTRO, ALIRIO CRUZ, MANUEL JIMÉNEZ PATIÑO, CARLOS HERRERA BUITRAGO** y **CARLOS FERNANDO MONTILLA CASTRO** por el supuesto delito de tráfico ilícito de drogas y se disponga la devolución a **SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A.**

Expresa el licenciado **JORGE FEDERICO LEE,** miembro de la firma forense solicitante que el Fiscal Segundo del Circuito de Colón ordenó la aprehensión provisional del vehículo al que se refiere en su escrito que ese vehículo pertenece a **SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS** empresa dedicada al alquiler de automóviles; que al momento en que se ordenó la aprehensión del vehículo estaba siendo utilizado por el turista colombiano **CARLOS FERNANDO MONTILLA CASTRO,** que había arrendado el mismo, tal como consta en el contrato de arrendamiento 81555.

El señor Procurador General de la Nación al evacuar el traslado correspondiente, manifiesta que se ha probado la propiedad del vehículo reclamado y "para evitar mayores perjuicios se debe acceder a lo solicitado con la salvedad de que el mismo no pueda ser traspasado a ningún título, para lo cual deberá ser sacado del comercio hasta tanto el juzgador de instancia resuelva la causa de manera definitiva."

De conformidad con el artículo 24 de la Ley 23 de 1986, compete a la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia conocer de peticiones de esta naturaleza referentes al levantamiento de aprehensión provisional de bienes que en este tipo de delitos ordena el Ministerio Público y en el caso presente la parte interesada ha acreditado, mediante las

pruebas documentales correspondientes visibles a fojas 5, 6, 7, 8, 9 y 10, la medida de aprehensión provisional del vehículo decretada por el Ministerio Público como también se ha establecido la existencia de la sociedad y el poder general otorgado a la firma forense que hace la petición, la propiedad que del vehículo tiene **SERVICIOS TURÍSTICOS PANAMEÑOS, S. A.**, al igual que el vehículo al momento de decretarse su aprehensión se encontraba arrendado al señor **CARLOS FERNANDO MONTILLA CAMPOS**, sin que se aprecie que la compañía arrendadora tenga participación alguna en la comisión del delito investigado, razones que se estiman suficientes para se acceda a lo solicitado, con la salvedad sugerida por el señor Procurador General de la Nación.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el levantamiento de la aprehensión provisional que pesa sobre el vehículo marca Daihatsu, modelo Charade, año 1993, con matriculo 8-46231 color azul claro, de propiedad de SERVICIOS TURÍSTICOS, S. A. y dispone otorgar la tenencia provisional a su propietario, con la advertencia de que no puede traspasarlo ni comprometerlo por ningún título mientras la causa no sea decidida en forma definitiva.

Ofíciese a la Tesorería Municipal de Distrito de Panamá, a objeto de que lo mantenga fuera de comercio hasta nueva orden.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE APREHENSIÓN PROVISIONAL DENTRO DEL SUMARIO SEGUIDO A JOSÉ DE LA CRUZ ARAÚZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PUBLICA (DROGAS). MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado **ABNER ALVAREZ MORALES** en ejercicio del poder que le confirió el señor **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** solicita a esta Sala que se devuelva el vehículo marca Toyota, modelo camioneta con motor N° 4k6384310, del año de 1985, al señor **AGUSTÍN PÉREZ** quien es su legítimo propietario. Fundamenta su petición indicando que el señor **JOSÉ DE LA CRUZ ARAÚZ** fue detenido el 11 de septiembre del año actual, acusado por mantener una sustancia ilícita; que al momento de ser detenido conducía un auto de propiedad del señor **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** como "palanca" que era de ese vehículo y que Agustín Pérez Bermúdez es ajeno a la conducta delictiva del señor Cruz Araúz.

De la petición señalada por el apoderado del señor **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** se le corrió traslado al señor Procurador quien al decorrer el mismo expresa que la Secretaría Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, junto con unidades de la Dirección de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial detuvieron el 18 de septiembre de 1993 al vehículo antes descrito cuyos ocupantes eran **JOSÉ DE LA CRUZ ARAÚZ** y **JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ** "encontrándose en el vehículo un cartucho plástico, color blanco, contentivo de 40 sobrecitos de plástico transparente de donde se detecto un polvo de color blanco que se presume sea cocaína."

Comprobado mediante los análisis correspondientes que la sustancia encontrada en el vehículo resultó ser cocaína, el Ministerio Público ordenó la aprehensión provisional del vehículo. Sin embargo de acuerdo con las informaciones que nos proporciona el señor Procurador y tal como aparece comprobado documentalmente en este proceso, el vehículo aprehendido es de propiedad del señor **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** y el mismo prestaba servicios como taxi por lo cual era conducido como "palanca" por el señor **JOSÉ DE LA CRUZ ALVAREZ LLERENA** y que por ese trabajo recibía de **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** la suma de 180.00 balboas semanales como ganancia. Todo lo anterior, concluye el señor Procurador, nos hace pensar que no existe grado de causalidad o participación criminal entre el dueño del vehículo y el conductor. Se presume que esta había consentido en que le manejara su carro en procura de poder brindarle un empleo informal a **JOSÉ DE LA CRUZ LLERENA** sin imaginar que el mismo se dedicaba a traficar sustancias narcóticas."

La Sala, competente en estos casos para el levantamiento de aprehensión provisional, y otorgar la tenencia, también provisional del bien aprehendido observa que el peticionario tiene acreditado que el auto objeto de esta petición es de propiedad del señor **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** (fs. 5) existe un certificado de operación expedido por la Dirección de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia en favor de **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** para dedicarse ese vehículo al servicio de taxi (fs.6) como también se aprecia que en la Resolución de 20 de septiembre de 1993 (fs. 3) donde se ordena la aprehensión provisional del vehículo, se manifiesta que en el ilícito que ha dado lugar a la aprehensión del mismo aparecen vinculados **JOSÉ DE LA CRUZ LLERENA** y **JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ** y no se hace en dicha resolución ninguna referencia a la persona de **AGUSTÍN PÉREZ BERMÚDEZ** como partícipe en alguna forma en el ilícito investigado como tampoco se hace en el escrito en donde la Procuraduría expresa su opinión acerca de la petición formulada.

Conocido es para la Sala, el sistema de "palancas" que se utiliza con suma frecuencia en estos casos, en los que opera el vehículo una persona distinta al propietario del vehículo concesionario del certificado de operación. El conductor "el

palanca" tiene amplia libertad en cuanto al manejo de la unidad encomendada y dispone de la misma durante todo el tiempo que está laborando, ajeno el propietario del vehículo de las actividades -lícitas o ilícitas- que en un momento pudiera realizar el conductor y no parece justo entonces mantener una aprehensión del vehículo en casos como este que conllevarían un perjuicio a su legítimo propietario que mediante el beneficio económico que adquiere de la actividad comercial que realiza el vehículo como taxi seguramente atiende sus necesidades personales y las de su familia y al no estar acreditada la vinculación del propietario del vehículo que el ilícito investigado lo aconsejable es acceder a la petición formulada.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el levantamiento de la aprehensión del vehículo Marca Toyota, Modelo Camioneta, con Motor N° 4K 6384310, del año de 1985 y DISPONE otorgar la tenencia provisional a su propietario, con la advertencia de que no puede traspasarlo ni comprometerlo por ningún título mientras la causa no sea decidida en forma definitiva. Ofíciese a la Tesorería Municipal del Distrito de Panamá para que lo mantenga fuera de comercio hasta nueva orden.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA

SUMARIAS SEGUIDAS CONTRA RUGIERE DEL VALLE RÍOS, SINDICADO POR EL DELITO DE TENTATIVA DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE CARLOS IVÁN GONZÁLEZ CRUZ. MAGISTRADO JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el sumario instruido contra el señor RUGIERE DEL VALLE, Administrador Regional de Aduanas, Zona Central y Azuero, por el supuesto delito de tentativa de homicidio cometido en perjuicio de CARLOS IVÁN GONZÁLEZ CRUZ.

El negocio que nos ocupa se inició al tener conocimiento la Personería Municipal del Distrito de Aguadulce de la denuncia presentada por el señor CARLOS IVÁN GONZÁLEZ CRUZ ante la Alcaldía Municipal de la referida circunscripción territorial.

En la mencionada denuncia (que fue debidamente ratificada ante el funcionario de instrucción) se dice que el señor RUGIERE DEL VALLE intentó matar al denunciante, luego de haberse producido entre ambos una discusión. Según el denunciante, el señor DEL VALLE, montado en un caballo, lo provocó a él y a unos amigos, lo que motivó que el denunciante se disgustara y, previa reclamación verbal, le pegara con la mano.

En ese momento, dice el denunciante, unas personas que estaban en el lugar le expresaron que el señor DEL VALLE había sacado su arma, motivo por el cual tuvo que salir huyendo.

Ahora bien, el señor Procurador General de la Nación, en la vista remisoria, considera que en el presente negocio debe dictarse un sobreseimiento definitivo en favor del procesado, porque en el expediente no está acreditado que el señor RUGIERE DEL VALLE haya sacado su arma de fuego con la intención de matar al denunciante.

La Corte, por su parte, estima correcta la recomendación del funcionario de instrucción. En efecto, los medios probatorios indican que luego de que el denunciante golpiara a DEL VALLE, éste tuvo que sacar su arma de fuego, y hacer unos disparos al aire, con el único propósito de evitar que las personas que acompañaban al denunciante lo fueran a agredir.

Aun cuando existen algunas versiones que señalan que el procesado apuntó directamente a GONZÁLEZ CRUZ y que no le llegó a disparar porque una hermana del denunciante entró en forcejeo con el sindicado, lo cierto es que en el infolio también hay testimonios de personas que, incluso, tienen parentesco con el denunciante, y que señalan que ello no ocurrió de esa forma, sino que el procesado realizó disparos al aire como para defenderse.

La Sala, al valorar el sumario bajo el prisma de la sana crítica, le otorga mayor credibilidad a la versión del imputado y de los que han declarado a su favor, motivo por el cual considera que debe ser beneficiado con un sobreseimiento definitivo a su favor, con fundamento en el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESÉE DEFINITIVAMENTE a RUGIERE DEL VALLE del supuesto delito de tentativa de homicidio cometido en perjuicio de CARLOS IVÁN GONZÁLEZ CRUZ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE RECUSACIÓN PRESENTADO CONTRA ROGELIO CRUZ RÍOS, PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO CONTRA EDILBERTO VÁZQUEZ ATENCIO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense **REYNOLDS, CHACÓN, ARIAS & ASOCIADOS**, representantes judiciales de EDILBERTO VÁZQUEZ ATENCIO, presentó incidente de recusación en contra del Procurador General de la Nación, licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS.**

Mediante auto de 30 de junio de 1992, la Sala Segunda de la Corte declaró que se había producido el fenómeno jurídico de la sustracción de materia, puesto que el servidor público recusado no adelantaba investigación alguna relacionada con la encuesta penal que se instruye contra el licenciado EDILBERTO VÁZQUEZ ATENCIO.

Contra esta resolución la firma mencionada presentó en la Secretaría de la Sala Penal recurso de reconsideración.

Ahora bien, observa la Sala que es un hecho público y notorio que el licenciado **ROGELIO CRUZ RÍOS** en la actualidad no ocupa el cargo de Procurador General de la Nación, motivo por el cual se ha producido el fenómeno jurídico de la sustracción de materia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que en el presente negocio ha operado el fenómeno jurídico de la sustracción de materia.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA CONTRA JERRY WILSON SALAZAR, DIRECTOR GENERAL DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL, POR EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD Y EXTRALIMITACIÓN DE FUNCIONES PUBLICAS, COMETIDO EN PERJUICIO DE JACOBO BRAWERMAN BARRANTES. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El señor Jacobo Brawerman Barrantes presentó denuncia ante la Procuraduría General de la Nación para que se investigara al licenciado JERRY SALAZAR, Director General de la Autoridad Portuaria Nacional, por los delitos de abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

Los hechos que motivan la presente denuncia consisten básicamente en la supuesta orden que dio el licenciado JERRY SALAZAR, prohibiendo que el señor JACOBO BRAWERMAN BARRANTES pueda ingresar al Puerto de Coco Solo, lugar donde el denunciante tiene un negocio comercial.

Pues bien, en su debida oportunidad, el Procurador General de la Nación remitió la correspondiente Vista Fiscal, en la que recomendaba el archivo del expediente toda vez que el denunciante no aportó, junto con la denuncia, los elementos probatorios que demostraran el hecho punible.

Al analizar la situación planteada, observa la Sala que le asiste razón al Procurador General de la Nación cuando asevera que no se aportaron junto con la denuncia, prueba sumaria que acredite el hecho punible denunciado.

La Corte ha sostenido en diversas ocasiones que, a la luz de los artículos 2468 y 2471 del Código Judicial, resulta necesario que la persona que va a denunciar o acusar a un servidor público por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, acompañe junto a la denuncia o acusación, según sea el caso, prueba sumaria de su relato, bajo el apercibimiento de que si no lo hace deja de cumplir con una condición objetiva, cuya inobservancia produce el archivo del expediente.

En el caso que nos ocupa, si bien el denunciante aportó algunos elementos probatorios, lo cierto es que de ellos no se deducen cargos contra el licenciado SALAZAR.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese.

(fdo.) JOSÉ MANUEL FAÚNDES
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

DICIEMBRE 1993

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VIRGILIO E. VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1463-86 DE 19 DE FEBRERO DE 1986, Y LA RESOLUCIÓN DE 21 DE JULIO DE 1989, DICTADAS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador General de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la providencia de 18 de agosto de 1993 que admite la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **VIRGILIO E. VÁSQUEZ**, en representación del doctor **JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET** para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.1463-86 de 19 de febrero de 1986 y la Resolución de 21 de julio de 1989, dictadas por el Director General de la Caja de Seguro Social, mediante la cual se destituye al demandante del cargo de Sub-Director Médico de las Clínicas Pediátricas de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente sustentó su alzada señalando que la parte actora no agotó la vía gubernativa, requisito este indispensable para ocurrir ante la Sala Tercera de la Corte Suprema.

Añade además, que el demandante presentó Recurso de Reconsideración contra la Resolución N°1463-86 de 19 de febrero de 1986, y que el mismo no fue presentado en tiempo oportuno.

Del Recurso de Apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso al mismo, aduciendo que no cabe alegar el que no se agotó la vía gubernativa, pues el actor presentó Recurso de Reconsideración y el mismo fue resuelto.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

Estima este Tribunal ad-quem que la razón le asiste al Procurador General de la Administración, en el sentido que el actor no cumplió con los requisitos establecidos en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 que dice:

> "ARTICULO 42. Para ocurrir en demanda ante el Tribunal de lo Contencioso-administrativo es necesario que se haya agotado la vía gubernativa, lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39, y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

En este punto cabe señalar que el demandante, aún cuando presentó Recurso de Reconsideración, el mismo fue presentado de manera extemporánea puesto que la Resolución acusada de ilegal tiene fecha de 19 de febrero de 1986 y el antes mencionado recurso fue interpuesto el día 10 de octubre de 1986.

El actor en el libelo de la demanda argumenta que la Resolución N°1463-86 de 19 de febrero de 1986, no fue legalmente notificada, sin embargo, en el informe explicativo de conducta, solicitado al Director General de la Caja de Seguro Social, conforme a lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, a foja 30 del expediente, se aprecia la transcripción de una nota dirigida por el doctor **JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET** a la institución, que dice textualmente:

> "'Este cargo lo ejercí en forma ininterrumpida, y, lo afirmo, con dedicación y competencia, hasta el día **18 de marzo de 1986** (luego de más de quince años de ejercicio), día en que, en mi Despacho de Sub-Director Médico, encargado formalmente y oficialmente de la Dirección Médica (por vacaciones del titular de la Dirección Médica Dr. SIVIARDO DE LEÓN B.), recibí copia de la 'Acción de Personal" contentiva de mi injusta e irregular destitución.
>
> De esta impersonal manera fui despojado de una función, y de un cargo, alcanzados por méritos y créditos profesionales y ciudadanos, y que después de más de quince años de ejercerlo al servicio de mis semejantes y de mi grande institución de seguridad social, la recta Ley y el recto Estatuto, en medio de hombres justos y probos, convierten este noble cargo en título y derecho que nada innoble puede vulnerar'". (el subrayado es nuestro)

Aprecia este Tribunal de Apelaciones que el día 18 de marzo de 1986, el doctor **JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET**, recibió copia de la Resolución mediante la cual se le destituia de su cargo y a partir de esa fecha debió computarse el tiempo para interponer su recurso correspondiente y de este modo agotar la vía gubernativa para poder acudir ante esta Sala.

Sobre este particular, sería conveniente, revisar el texto del artículo 1007 del Código Judicial aplicable de manera supletoria a los procesos Contencioso Administrativos, que preceptúa:

> "ARTICULO 1007. Si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución en escrito suyo en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal. ..."

Conforme al citado artículo, se puede colegir que el demandante estaba en conocimiento de la Resolución N°1463-86,de 19 de febrero de 1986, por lo tanto dicha Resolución se consideraba notificada.

Como consta en el expediente en estudio, el actor estaba legalmente notificado desde el mes de marzo de 1986 y no es hasta el mes de octubre de ese año, cuando presenta el Recurso de Reconsideración en la instancia gubernativa. Al haber transcurrido en exceso el término legal establecido para la interposición de tal recurso, prescribió la acción legal para hacer valer su derecho.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **PREVIA REVOCATORIA** de la providencia de 18 de agosto de 1993 NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado VIRGILIO E. VÁSQUEZ en representación de JOSÉ GUILLERMO ROS-ZANET.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MARTÍN MOLINA RIVERA, EN REPRESENTACIÓN DE BONLAC, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.2876-DG-90 DE 24 DE AGOSTO DE 1990, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Martín Molina Rivera**, en representación de **BONLAC, S. A.** ha interpuesto demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución N°2876-DG-90 de 24 de agosto de 1990 proferida por el Director General de la Caja de Seguro Social acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

> "PRIMERO: Que, en tiempo oportuno, la empresa formuló su respectivo descargo u objeciones al Informe AE-1-24-88 de 18 de julio de 1988, elaborado por el Departamento de Auditoría a Empresas de la Caja de Seguro Social.
>
> SEGUNDO: Que el Departamento de Auditoría a Empresas, de la Caja de Seguro Social, mediante Nota AE-ND-22-88 de 26 de octubre de 1988, determinó no aceptar totalmente los descargos presentados por mi poderdante y le informó que su supuesto adeudo recibiría el trámite administrativo correspondiente.
>
> TERCERO: Luego de cumplido el trámite formal indicado arriba, el Director General de la Caja de Seguro Social, por medio de la Resolución No.2876-D.G.-90 de 24 de agosto de 1990, decidió condenar a la sociedad BONLAC, S. A., al pago de la suma de B/.3,471.13, en concepto de cuotas de Seguro Social y Riesgos Profesionales.
> ...
> Se violó el Literal b) del Artículo 2 del Decreto Ley No.14 de 1954 sobre la ley Orgánica de la Caja de Seguro Social por Aplicación Indebida, puesto que se aplicó impropiamente el texto citado a supuestos de hechos distintos para lo cual la norma fue creada, que no están comprendidos en la misma, y se atribuyó o apreció sus consecuencias jurídicas de forma indebida a la realidad de los casos concretos, por exponer que desvirtúan la condición de trabajadores de las siguientes personas:
>
> 1. Señora MARILIA DE MOLINA:
> La señora MARIALIA (sic) DE MOLINA, de nacionalidad brasileña es Ingeniera de Alimentos y la misma prestó servicios profesionales coordinando y organizando la instalación de la planta productora de alimentos en la empresa Bonlac, S. A. El servicio que ésta prestó durante los meses de marzo, abril, mayo de 1986, fue de naturaleza técnica y especializada.
> ...
> 2. Señor DOUGLAS GUINARES:
> El señor DOUGLAS GUINARES, de nacionalidad colombiana, es Técnico en la producción de helado y fue (sic) contratado para que proporciona sus servicios profesionales a fin de realizar un estudio sobre factibilidad en el ramo de la producción y comercialización de los productos y la producción de helados.

En su carácter de profesional independiente gozaba de entera libertad para dedicarse a otras actividades y percibir otros ingresos.

Posteriormente transcurrido algunos meses, o en junio de 1988, al finalizar sus servicios profesionales se le contrató como trabajador devengando un salario de B/.425.00 mensuales.

3. Señor JORGE FRACASSO:
El señor JORGE FRACASSO, de nacionalidad Uruguaya, es Técnico en lechería y sus servicios profesionales se contrataron para que dictara cursos de Control de Alimentos por cuatro meses durante julio, agosto, septiembre y octubre de 1986.

Posteriormente, se le contrató como empleado o trabajador, habiendo transcurrido algún tiempo entre uno y el otro contrato.

Dichos Técnicos son auténticos profesionales en su especialidad, cuyos servicios se obtuvieron inicialmente para establecer la capacidad productiva de la empresa y como profesionales actuaron independientemente; como trabajadores actuaron bajo la subordinación jerárquica de la empresa. Sus servicios se prestaron con carácter eminentemente profesional e independiente.

4. Señor EDUARDO GARRIDO:
El señor EDUARDO GARRIDO fue (sic) contratado por BONLAC, S. A. para prestar sus servicios de vigilancia, con absoluta independencia, mediante contrato de servicios profesionales. En este carácter podía también prestar sus servicios a otras empresas."

Adicionalmente señala que han sido violadas las siguientes normas: Artículo 2, literal b); Artículo 35-B en concordancia con el artículo 31, literal a); Artículo 4, literal c); Artículo 62, numeral 6, todos del Decreto Ley N°14 de 1954; Artículo 81 y 142 del Código de Trabajo; y Artículo 19, numeral 5 de la Ley 32 de 26 de febrero de 1927.

El Magistrado Sustanciador posteriormente procedió a solicitarle al Director de la Caja de Seguro Social que rindiera informe de conducta en relación con la demanda incoada, a lo cual el citado funcionario señaló lo siguiente:

"Mediante tal examen, se determinó que el patrono BONLAC, S. A., adeudaba a la Institución la suma de TRES MIL SETECIENTOS DOS BALBOAS CON SESENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.3,702.67), incluido el recargo del diez por ciento (10%) sobre estas sumas, dejadas de pagar a la Caja de Seguro Social, durante el período comprendido de noviembre de 1985 a mayo de 1988.

Sin embargo la Caja de Seguro Social, por conducto de su Departamento de Auditoría a Empresas, y en atención a los descargos presentados por la empresa BONLAC, S. A., pudo comprobar existían suficientes méritos para reducir el monto del alcance original y por ello notificó a la empresa de la referencia, mediante la Nota No.AE-ND-22-88 de 26 de octubre de 1988, que el nuevo monto del alcance quedaba fijado en la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (B/.3,471.13) en lugar de los TRES MIL SETECIENTOS DOS BALBOAS CON SESENTA Y SIETE CENTÉSIMOS (B/.3,702.67) a que se refiere el alcance primario.

No obstante la empresa BONLAC, S. A., no cumplió con el pago requerido por la Caja de Seguro Social y por ello, esta Institución procedió a dictar la Resolución No.2008-89-SUB-D.G. de 7 de agosto de 1989, en virtud de la cual se condena a la referida empresa al pago a favor de la Caja de Seguro Social de la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN BALBOAS CON TRECE CENTÉSIMOS (B/.3,471.13) en concepto de cuotas de seguro social y riesgos profesionales dejados de pagar durante el período comprendido entre noviembre de 1985 a mayo de 1988."

En el mismo escrito, el Director de la entidad autónoma antes citada, señaló que el alcance realizado contra **BONLAC, S. A.** obedeció a que ésta no estaba descontando las cuotas obrero patronal a un grupo de trabajadores que laboran en la misma, aduciendo la empresa que dicha omisión la justificaba el hecho de que los mismos al ser trabajadores por servicios profesionales, trabajadores eventuales y trabajadores ocasionales, no se les tenía que hacer dicho descuento.

También, se le corrió traslado de la demanda al Procurador de la Administración, quien se opuso a la pretensión del demandante.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia:

La primera norma que se estima conculcada es el artículo 2 del Decreto Ley No.14 de 1954 Orgánica de la Caja de Seguro Social, el cual prevé que todos los trabajadores al servicio de personas naturales y jurídicas que operen en el territorio nacional, están sujetos al régimen obligatorio del Seguro Social y que dicha violación obedece a una aplicación indebida del precepto legal, por las siguientes razones: que la señora Marilia de Molina como Ingeniera de Alimentos prestó servicios profesionales durante los meses de marzo, abril y mayo de 1986 para la instalación de la planta productora de la empresa **BONLAC, S. A.**, que el señor Douglas Guinares, técnico en producción de helados, realizó estudios de factibilidad en el ramo de la producción y comercialización de los productos

y la producción de helado, que sus servicios eran profesionales, y que al finalizar en junio de 1988, se le contrató en la empresa como trabajador; que igual suerte corrió el señor Jorge Fracasso, puesto que fueron contratados sus servicios profesionales, para que dictara cursos de control de alimento por cuatro meses, de junio a octubre de 1986, pero al culminar dichos cursos, fue contratado por la **BONLAC, S. A.**; y por último que el señor Eduardo Garrido, tenía también contrato de servicios profesionales prestando servicios de vigilancia.

Frente a lo señalado por el afectado, debemos indicar que en lo que respecta al señor Eduardo Garrido, es claro el determinar que su oficio no puede ser considerado como servicios profesionales, ya que esta ocupación conlleva necesariamente la subordinación jurídica y la dependencia económica, y por la naturaleza del oficio, es de necesidad permanente dentro de la empresa y de difícil prestación en otras empresas a la vez. Esto lo podemos corroborar en el contrato celebrado por la empresa **BONLAC, S. A.** y el señor Garrido que consta a foja 80 del expediente. De igual forma, consta prueba suficiente dentro del cuadernillo contentivo de este proceso Contencioso-Administrativo, a fojas 88 y 91, los contratos celebrados entre la empresa demandante con los señores Marilia de Molina y Jorge Fracasso, los cuales aluden indiscutiblemente a la relación de trabajo que existía entre ellos y **BONLAC, S. A.** dentro del período comprendido, que según los afectados, los trabajadores precitados eran contratados por servicios profesionales. En lo que concierne al señor Douglas Guimares, sí coincide lo alegado por la empresa **BONLAC, S. A.** y lo que reposa entre la documentación aportada ya que obra en las fojas que van desde la 81 a la 87, contrato, recibos de pago y otros que demuestran que el precitado, se desempeñaba en sus labores por servicios profesionales.

Se desprende de lo anotado en líneas anteriores que en realidad los trabajadores Marila de Molina, Jorge Fracasso y Eduardo Garrido no prestaban servicios profesionales sino que eran trabajadores que se les remuneraba con un sueldo, por lo que la empresa **BONLAC, S. A.** debía descontar de su salario y cotizar en el Seguro Social las prestaciones obrero patronal. Sólo se ha comprobado que el señor Douglas Guimares, sí llevaba a cabo su labor como técnico de producción de helados, realizando estudios de factibilidad, y su contratación era por servicios profesionales. Este último no se encuentra dentro del supuesto previsto en el artículo 2, acápite b), de la Ley N°14 de 1954. Por tanto, sólo prospera el cargo endilgado en relación al señor Douglas Guimares, a quien no se le debía descontar las cuotas obrero patronal de la Caja de Seguro Social, por no ser trabajador de la empresa **BONLAC, S. A.**

En relación al orden de ideas anteriormente expuesto, el peticionario también ha señalado que se ha violado el artículo 62 literal a) del Decreto Ley N°14 de 1954, el cual define lo que se entiende por sueldo, aduciendo básicamente que a los señores precitados no se les pagó como trabajadores, es decir no se les remuneró por medio de un sueldo, sino, por servicios profesionales, lo que se traduce a honorarios profesionales; pero en virtud de que ya hemos dilucidado el hecho de que el señor Douglas Guimares era el único al cual se le ha comprobado que prestaba servicios profesionales y recibió honorarios, y que los demás trabajadores antes señalados sí recibieron sueldos, y de los cuales tenía la empresa **BONLAC, S. A.** que descontarlas de manera obligatoria las cuotas obrero-patronal, para cotizar en la Caja de Seguro Social, se desestima la acusación impetrada, con la excepción del caso del señor Guimares.

Otra norma que se considera violentada, es el artículo 35-B, en concordancia con el Artículo 31, Literal a) del Decreto Ley N°14 de 1954, y se sustenta la acusación señalándose que la violación fue por aplicación indebida, dado que la Caja de Seguro Social no debió condenar a la empresa **BONLAC, S. A.** a pagar sumas adeudadas en prestaciones obrero-patronal en relación a los señores Rigoberto Barragán y Paulino Sánchez, en virtud de que los mismos no laboraban con esa empresa, sino que eran trabajadores de Hielo Ameglio, S. A. y que el hecho de que aparecieran prestando servicios en **BONLAC, S. A.**, no significa que laboraban en esta última empresa, sino que como ambas constituyen una unidad económica, Hielo Ameglio, S. A. le facilitó, por así decirlo, a **BONLAC, S. A.** a dichos trabajadores para que le instalaran unas maquinarias.

Esta Sala, desea señalar con respecto a lo anteriormente esbozado por la parte actora, que independientemente de que los señores Barragán y Sánchez laboren en Hielo Ameglio, S. A. al ser prestados a **BONLAC, S. A.** según consta a fojas 65, 66, 67 y 68, esta última les hizo pagos adicionales, tal como consta en los comprobantes de pago, los cuales tienen el señalamiento trabajos eventuales. En este caso era obligatorio que la empresa que contrató tales servicios eventuales, descontara de las sumas canceladas a los trabajadores antes mencionados la cuota obrero-patronal que exige la legislación de Seguridad Social. En virtud de lo anterior no prospera el cargo endilgado.

También se considera transgredido el Artículo 4, literal c) de la Ley N°14 de 1954, explicándose la infracción aduciendo que tanto los señores Héctor Peñalosa y Jorge de Gracia realizaban trabajos accidentales y que el señor Carlos Rodríguez laboró en **BONLAC, S. A.** de manera ocasional, dado que el mismo era trabajador de otra empresa y que en sus vacaciones estaba prestando sus servicios dentro de la empresa demandante.

Lo anteriormente expuesto nos conduce a señalarle a la parte afectada que para que un trabajador tenga la calidad de eventual, o accidental u ocasional, debe constar en un contrato cuya duración no exceda de seis meses o un mes respectivamente, lo cual no ha sido comprobado en este proceso, esto por un lado. Por el otro, consta a foja 69 del expediente, contrato de trabajo celebrado entre **BONLAC, S. A.** y el señor Carlos Rodríguez, celebrado el 1° de septiembre de 1987, lo que desvirtúa el hecho de que al terminar su trabajo en **BONLAC, S. A.** en agosto 27 de 1987, se reintegró a la empresa en que labora permanentemente. En este mismo sentido, también considera el demandante que se violó el artículo 81 del Código de Trabajo, en relación a estos tres trabajadores, el cual explica que se considera trabajo ocasional o accidental, pero en líneas anteriores manifestamos que esta clase de trabajo por tiempo definido debe estar previsto en un contrato de

trabajo, para que se considere como tal, requisito éste sine-qua-non, que no cumplió la empresa **BONLAC, S. A.** Por lo anterior de igual forma debió la empresa actora descontar del salario del señor Rodríguez lo correspondiente a la cuota obrero patronal y pagarlas a la Caja de Seguro Social, por lo que no aceptamos el cargo incoado.

De igual manera se argumenta que se ha conculcado el artículo 142 del Código de Trabajo, y los afectados explican la transgresión aduciendo que de la bonificación que recibió el señor Jorge Fracasso, la Caja de Seguro Social, gravó dicha remuneración, cuando el precitado precepto del Código de Trabajo lo prohíbe.

Ante esta afirmación, debemos acotar que no es cierto lo alegado por la empresa, ya que el artículo 62 de la Ley N°14 de 1954 dice claramente lo siguiente:

> "Artículo 62: Para los efectos del Seguro Social privarán las siguientes definiciones:
> ...
> b) Sueldo: la remuneración total, gratificación, bonificación, comisión, participación en beneficios, vacaciones, o valor en dinero y en especie que reciba el trabajador del patrono o empleador o de cualquier persona natural o jurídica como retribución de sus servicios o con ocasión de éstos. Se exceptúan del pago de cuotas de Seguro Social los viáticos, dietas y preavisos. Las gratificaciones de Navidad o aguinaldos y gastos de representación siempre que no excedan del sueldo mensual." (subrayado es nuestro) ...

Si lo anterior es así, la bonificación es perfectamente gravable por la Caja de Seguro Social y más cuando el propio artículo 142 del Código de Trabajo, reconoce que para los efectos de las contribuciones y prestaciones del régimen de seguridad social, regirán las normas especiales la Ley N°14 de 1954 es una ley especial de seguridad social. Por tanto no prospera el cargo impetrado.

Por último se señala como violado el artículo 19, numeral 5, de la Ley N°32 de 26 de febrero de 1927 sobre Sociedades Anónimas, el cual no entramos a conocer dado que los mismos no están relacionados con la presente demanda, ni con las pretensiones solicitadas.

Por todo lo expuesto, los Magistrados de la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE ES PARCIALMENTE ILEGAL la Resolución N°2876-D.G.-90 de 24 de agosto de 1990 emitida por el Director de la Caja de Seguro Social en lo que respecta a los descuentos realizados al señor DOUGLAS GUIMARES y en consecuencia no debe grabarse lo pagado por BONLAC, S. A. al precitado, dado que se ha comprobado que laboraba para la misma por servicios profesionales.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ORLANDO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINA ROBLES AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.6 DE 26 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra la Providencia de 26 de agosto de 1993, que admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado **ORLANDO CARRASCO**, en representación de **BALBINA ROBLES AVILA**, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto N°6 de 26 de febrero de 1993, emitido por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente sustenta la alzada en los siguientes términos:

> "Considero que las declaraciones solicitadas en el petitum de la demanda no tienen por objeto la reparación de un derecho subjetivo, que debió ser el propósito de la demanda de plena jurisdicción contra el acto, mediante la cual se destituyó a la señora Balbina Robles Avila. ...
>
> Aunado a lo anterior, observo que, con respecto a las resoluciones, recurridas, únicamente se solicita que sean declaradas nulas, por ilegales; pero no se solicita nada más, como sería el pago de los salarios caídos desde su destitución, y su reintegro al cargo por ejemplo. Conceptúo que ello incumple uno de los requisitos exigidos por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, confundiéndose así el recurso de plena jurisdicción con la acción de nulidad".

Del recurso de apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso a lo solicitado.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de la Sala entra a resolver la presente controversia:

Coincidimos con lo expresado por el Procurador de la Administración, en el sentido de que el demandante, que en este caso es la señora **BALBINA ROBLES AVILA**, no sólo debe pedir la nulidad del acto acusado de ilegal ante este Tribunal sino también debe manifestar claramente el derecho conculcado y que el mismo le sea restablecido. La declaratoria de nulidad de un acto por parte de esta Sala no conlleva consigo la reparación del derecho subjetivo per se. En otras palabras la nulidad no va acompañada del restablecimiento del derecho subjetivo lesionado por el acto administrativo ilegal. El fallarlo sólo en lo que respecta a la nulidad, sería inocuo, dado que esto implicaría adelantar un proceso inconducente. La restitución del derecho debe solicitarse tal como lo prevé el artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946 que dice:

> "Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes;
> 2. Lo que se demanda;
> 3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;
> 4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación".

La parte actora sólo ha pedido en este proceso que se declare la nulidad del Decreto N°6 de 26 de febrero de 1993, emitido por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores, lo que nos conduce a no admitir la presente demanda.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la Providencia de 20 de agosto de 1992, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado ORLANDO CARRASCO en representación de BALBINA ROBLES AVILA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(Salvamento de Voto)

(fdo.) RAÚL TRUJILLO MIRANDA
Dirimente de la Sala Civil

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

**SALVAMENTO DE VOTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA**

Con todo respeto manifiesto que disiento de la decisión adoptada por el Magistrado Sustanciador de la apelación y el Magistrado Dirimente de la Sala Civil, de no admitir la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Orlando Carrasco en representación de Balbina Robles Avila , para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No.6 de 26 de febrero de 1993 dictado por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Esta decisión se fundamenta en que la parte actora sólo pide en su demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción la nulidad del acto acusado de ilegalidad, sin manifestar claramente el derecho conculcado y sin requerir que el mismo sea restablecido. En la resolución se afirma que "la declaratoria de nulidad de un acto por parte de esta Sala no conlleva consigo la reparación del derecho subjetivo per se. En otras palabras la nulidad no va acompañada del restablecimiento del derecho subjetivo lesionado por el acto administrativo ilegal. El fallarlo sólo en lo que respecta a la nulidad, sería inocuo, dado que esto implicaría adelantar un proceso inconducente".

Esta Sala ha sostenido, generalmente, que como los recursos contenciosos administrativos de plena jurisdicción tienen como fin la reparación de derechos subjetivos lesionados por un acto administrativo, en los mismos debe demandarse, además de la nulidad del acto que se impugna, "las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificaciones o reforma del acto demandado o del hecho y operación administrativa que causa la demanda", tal como lo perpetúa el artículo 29 de la Ley 33 de 1946.

Sin embargo, la Sala también ha afirmado que la demanda de plena jurisdicción es admisible, aún cuando sólo se pide la anulación del acto administrativo impugnado que lesiona derechos subjetivos.

En resolución de 29 de enero de 1962, dictada en el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por el licenciado Juan Materno Vásquez en representación de Gladys Muller de Saint Malo, para que se declare ilegal la resolución No. 40 de 26 de octubre de 1959, dictada por el Ministerio de Obras Públicas, en su condición de Presidente de la Junta de Valorización, la Sala afirmó lo siguiente:

> "No cabe duda de que la presente demanda es de plena jurisdicción. Se está, como afirma el señor Procurador, `frente a un acto administrativo que por su propia naturaleza y trascendencia, afecta derechos subjetivos directamente. **Pero el hecho que demanda se limite a pedir sea declarada la ilegalidad del acto `sin estimar el restablecimiento del derecho subjetivo'**

**de la parte actora, no inhibe a la Sala a que sea resuelta la demanda de modo favorable a dicha parte, si ello procede en estricto derecho".**(Lo acentuado es nuestro)

Además, en auto fechado el 13 de marzo de 1990, dictado dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción interpuesto por la firma forense Tapia, Linares y Alfaro en representación de Inmobiliaria Los Llanos, S. A., para que se declare nulas, por ilegales, las resoluciones No. AEC-133 de 5 de octubre de 1984 y No.R-AEC de 11 de abril de 1985, emitidas por la Dirección General de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro, el acto confirmatorio y para que se hiciera otras declaraciones, la Sala expresó que en los procesos contencioso administrativos de plena jurisdicción debe dejarse sin efectos, o sea, anularse el acto impugnado como "paso previo al reconocimiento de una situación jurídica individualizada", y en aquellos casos que el demandante solicite únicamente la nulidad del acto administrativo impugnado habrá que examinar cada caso concreto, a fin de determinar si es suficiente, para conocer de pretensiones contencioso administrativas de plena jurisdicción ... o si, además, se requiere detallar las prestaciones que se pretenden ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa impugnada mediante la demanda, de conformidad con el artículo 29 de la Ley 33 de 1946".

> "En el caso que nos ocupa se trata, de un contribuyente del Impuesto de Inmuebles cuya propiedad ha sido avaluada por la Dirección de Catastro del Ministerio de Hacienda y Tesoro en una suma sustancialmente superior a la que existía previamente como base imponible para determinar el monto del impuesto de inmuebles a cargo del contribuyente.
>
> En este caso específico basta para configurar la pretensión procesal de plena jurisdicción la petición de nulidad de los actos impugnados, pues, de accederse a la misma, se restablecería el derecho lesionado, ya que el contribuyente estaría obligado a pagar el Impuesto de Inmueble sobre la base imposible anterior a la que resulta del avalúo que se impugna. Le asiste, pues, razón a la firma recurrente".

En el presente negocio, la parte demandante pide solamente la declaratoria de nulidad de la acción de personal emitida por la Juez del Tribunal tutelar de Menores, mediante la cual decreta su destitución del cargo de Oficial Mayor, por haber incurrido en suplantación del cargo público, por extralimitación de funciones, y por no observar una conducta honorable, ética y profesional.

Disiento de la resolución dictada por el Magistrado sustanciador de la apelación y el dirimente de la Sala de lo Civil, por que a mi juicio, estamos ante un caso en el cual la declaratoria de nulidad del acto impugnado, per se, restablecería el derecho de la licenciada Balbina Robles Avila, porque dejaría sin efectos la sanción que le ha sido impuesta por tan graves cargos, y que podría causarle daños en su vida profesional, de mantener su vigencia. Si la afectada con la resolución administrativa que se impugna decidió pedir su restitución en el cargo que desempeña, no por ello debe privársele de la oportunidad de impugnar un acto que estima que es ilegal y lesiona sus derechos.

Por las razones expuestas, muy respetuosamente, SALVO MI VOTO.

Fecha: ut supra.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JOSÉ E. HERRERA, EN REPRESENTACIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.6009 DE 18 DE NOVIEMBRE DE 1992, EMITIDO POR LA DIRECTOR GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Lcdo. **José E. Herrera**, en representación de **ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA**, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto No.6009 de 18 de noviembre de 1992, emitido por la Directora General de Comercio Interior y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda interpuesta por considerar que la misma adolece de varios defectos:

1° El apoderado judicial de la parte actora omite señalar como parte de la demanda al Procurador de la Administración, como el funcionario a quien corresponde la defensa del acto impugnado en representación de la Administración incumpliendo el requisito señalado en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

2° El actor no cumple con el numeral 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, en el que se requiere que en la

demanda se expresen las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación.

Por su parte, el apelante, en la sustentación de su alzada, se opone a la inadmisibilidad de la demanda Contencioso Administrativa, argumentando que las partes en este proceso son la Sociedad Civil **ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA** representada por el Lcdo. José E. Herrera C. y como parte demandada la Directora General de Comercio Interior y el Ministerio de Comercio e Industrias cuyo representante es el Ministro de Comercio.

Añade el actor, que disiente de la opinión externada por el Tribunal de Primera Instancia, dado que no es cierto que omitió las disposiciones legales violadas, pues en el libelo de la demanda se aprecia claramente el sub título "Normas violadas y concepto de su violación". Considera el demandante que no es necesario transcribir cada norma "porque se supone que todo Tribunal los conoce y basta con leer los artículos señalados para que se infiera el motivo de su señalamiento" (foja 27).

El recurrente en su alzada, hace la observación que "Las demandas Contenciosas de Plena Jurisdicción son una Demanda como cualquier otra" y "Las Demandas Contenciosas Administrativas se rigen en su tramitación con las Normas del Código Judicial también, por lo que era de resorte de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) observar lo dispuesto en el Artículo 469 del Código Judicial de Ordenar (sic) la Corrección (sic) de los supuestos defectos."

Del Recurso de Apelación se le corrió traslado al Procurador de la Administración, quien se opuso al mismo, aduciendo que:

> "Evidentemente la parte demandante en el presente recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción no cumplió con algunos de los requisitos previos para que el juicio puede prosperar en la vía contencioso administrativa y ello es LA DESIGNACIÓN DE LAS PARTES Y SUS REPRESENTANTES y La Expresión de las disposiciones que se estimen Violadas y el Concepto de la Violación"

Opina el Procurador de la Administración que el demandante "ha presentado de una manera desorganizada la misma ..."

Aunado a lo anterior, el Procurador de la Administración ha señalado que el demandante hace referencia, entre las disposiciones violadas a los artículos 10 y 44 de la Constitución Nacional, lo que no es objeto de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

Observa el tribunal ad-quem que el actor en el libelo de la demanda, omitió designar debidamente a una de las partes, coincidiendo así con lo expuesto por el Magistrado Sustanciador y el Procurador de la Administración.

Puede observarse que en el presente caso no hay controversia entre particulares, sino entre un particular y la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias, por tanto, el Procurador de la Administración, en este negocio específico, actúa en defensa del acto impugnado.

En las demandas de Plena Jurisdicción el Procurador de la Administración debe defender y representar los intereses del Estado en la controversia planteada, preceptuado así en el artículo 348 numeral 2 del Código Judicial que dice:

> "Artículo 348. Son atribuciones especiales del Procurador de la Administración:
> ...
> 2. Representar los intereses nacionales, municipales, de las entidades autónomas y, en general, de la Administración Pública, en los procesos contencioso-administrativos que se originen en demandas de plena jurisdicción iniciados ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia."

En este caso en particular, quien representa los intereses del Ministerio de Comercio e Industrias, es el Procurador de la Administración y no el Ministro de Comercio, como erróneamente planteó el actor.

La Sala Tercera ha reiterado en diversas ocasiones la importancia de la designación de las partes en los procesos contencioso-administrativos, cumpliendo con lo previsto en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946. (v.g. Resolución de 13 de julio de 1992, 27 de julio de 1992, 16 de abril de 1993).

Aprecia este Tribunal de Apelaciones que el demandante en la expresión de las disposiciones que estima violadas, no transcribe el texto de las mismas, y no explica en forma diáfana el concepto de la violación tal como exige la ley.

En adición a lo anterior, el recurrente cita como disposiciones violadas dos normas de rango constitucional (arts.10 y 44 de la Constitución Nacional). Sobre este particular, parece ser que el recurrente en el libelo de la demanda confunde el objeto de la Demanda de Plena Jurisdicción con el Recurso de Inconstitucionalidad. Según el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, reformada por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, el objeto de la acción de Plena Jurisdicción es la protección de los derechos subjetivos y puede

proponerse contra actos administrativos individuales, personales que lesionen dicho derecho. La demanda de Inconstitucionalidad se propone contra actos contrario a la Constitución por cualquier norma con rango inferior a la misma; lo que implica que la Sala Tercera carece de competencia para ventilar dicha demanda, sino que corresponde privativamente al Pleno de la Corte Suprema de Justicia quien ejerce el control de la constitucionalidad.

Se aprecia también, que el recurrente afirma que las demandas Contenciosas de Plena Jurisdicción son iguales a las demandas del proceso civil ordinario. Cabe señalar en este punto que el procedimiento Contencioso-administrativo es parecido al procedimiento civil ordinario aunque con marcadas diferencias. En los procesos contencioso-administrativo, rigen de manera especial y preferente las leyes 135 de 1943 y 33 de 1946 y de manera supletoria el Código Judicial en todo aquello que no contemplen las leyes de lo Contencioso-Administrativo, siempre y cuando no sean contrarias a lo estatuido en las leyes especiales antes mencionadas. En el proceso civil ordinario, las disposiciones aplicables son las contenidas en el texto de los Libros I y II del Código Judicial.

En el proceso Contencioso Administrativo se exige como requisito previo el haber agotado la vía gubernativa; en el proceso civil ordinario se exige como requisito que el derecho no haya prescrito.

Como se expresó anteriormente, una de las partes en el proceso Contencioso Administrativo siempre es una entidad estatal representada por el Procurador de la Administración; en el proceso civil ordinario generalmente las controversias se dan entre particulares y excepcionalmente interviene el Estado como parte.

Como se ha podido observar, por lo antes expuesto, es errónea la afirmación del demandante que "Las demandas Contenciosas de Plena Jurisdicción son una Demanda como cualquier otra" (foja 27) y "Las Demandas Contenciosas Administrativas se rigen en su tramitación con las normas de Código Judicial también, por lo que era de resorte de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) observar lo dispuesto en el Artículo 469 del Código Judicial u Ordenar la Corrección de los supuestos defectos". (foja 28)

Para finalizar, debemos acotar que el libelo de la demanda incoada por el recurrente, es inadecuadamente dirigida a los Magistrados de la Sala Tercera en conjunto; la misma debió ser anunciada a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Magistrado Presidente, como lo establece el artículo 102 del Código Judicial.

Este Tribunal ad-quem considera que la decisión de inadmisibilidad de la demanda, se ajusta a lo dispuesto por las leyes rectoras de los procesos Contencioso Administrativos, por lo tanto, se hace procedente confirmar la resolución recurrida.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto de 4 de octubre de 1993, emitido por el Magistrado de Primera Instancia, que decidió NO ADMITIR la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado José E. Herrera, en representación de ASESORÍA JURÍDICA Y ADMINISTRATIVA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO VICENTE GARIBALDI CAMACHO, EN REPRESENTACIÓN DE CONSORCIO SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. Y CIRES DE PANAMÁ, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULAS POR ILEGAL LA NOTA DE 7 Y 8 DE OCTUBRE DE 1992, EMITIDAS POR LA COMISIÓN NEGOCIADORA DEL MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de Apelación, conoce el resto de la Sala Tercera de la demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, interpuesta por la firma forense **GARIBALDO Y ASOCIADOS** en representación del **CONSORCIO SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC. Y CIRES DE PANAMÁ, S. A.**, para que se declare nulas por ilegal las Notas del 7 y 8 de octubre de 1992, emitidas por la Comisión Negociadora del Ministerio de Obras Públicas y para que se hagan otras declaraciones, dentro de la cual la citada sociedad profesional de abogados, ha presentado desistimiento de la demanda incoada antes descrita, en los siguientes términos:

> "Nosotros, **BUFETE GARIBALDI Y ASOCIADOS**, firma forense, de generales conocidas en autos. Comparecemos, por este medio, para manifestarle lo siguiente:

**PRIMERO**: Que mediante Resolución de Gabinete No.345 de 30 de junio de 1993, el Consejo de Gabinete resuelve 'exceptuar del Procedimiento de licitación pública, por urgencia evidente, los contratos que llevará a cabo el Proyecto Apoyo al Sector Transporte

PAN/90/005 destinado a la elaboración del Programa de Inversiones del Ministerio de Obras Públicas para el período 1993-1997'.

**SEGUNDO**: Que en virtud de esta Resolución se produce una sustracción de la materia que motivaba el Proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción.

Por las razones anteriores desistimos de la demanda.
Se adjunta fotocopia de la Gaceta Oficial No.22,326, donde aparece la Resolución No.345".

A estos efectos, constata la Sala que **GARIBALDI Y ASOCIADOS** cuentan con la facultad especial para desistir, como lo exige el tenor del artículo 1088 del Código Judicial, tal como se aprecia en el poder a ellos conferido, tanto por **CIRES DE PANAMÁ, S. A.**, como por **SNC-LAVALIN INTERNATIONAL INC.**, legible a fojas 10 y 11 del negocio contencioso bajo estudio.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITEN EL DESISTIMIENTO interpuesto por la firma GARIBALDI Y ASOCIADOS en representación de CIRES DE PANAMÁ, S. A. y SNC-LAVALIN INTERNATIONAL, INC.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BATISTA, CASTILLO Y LOAIZA, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO CHECA MENDIETA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.384-AJ-DG-DAC DE 15 DE DICIEMBRE DE 1992, EXPEDIDO POR EL DIRECTOR DE AERONÁUTICA CIVIL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma **Batista, Castillo y Loaiza**, en representación de **JOSÉ ANTONIO CHERA MENDIETA**, han propuesto demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°384-AJ-DG-DAC de 15 de diciembre de 1992, expedido por el Director Aeronáutica Civil, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

La parte actora sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Mi mandante JOSÉ ANTONIO CHECA MENDIETA se desempeña como funcionario de la Dirección de Aeronáutica Civil desde el mes de febrero de 1979.

SEGUNDO: Mi mandante fue suspendido del cargo que de manera permanente venía desempeñando, cajero del AEROPUERTO INTERNACIONAL DE TOCUMÉN. La suspensión está contenida en la Nota No.SD6-096-DAC del 11 de abril de 1990 expedida por la Subdirección general de la Dirección de Aeronáutica Civil. Dicha suspensión entró a regir a partir del 16 de abril de 1990, y le fue notificada a mi representado el 12 de abril de 1990 mediante Nota #086 RH-DAC.

TERCERO: La suspensión hecha por la Institución obedeció a que mi mandante fue sometido a un proceso penal en su contra por supuestas irregularidades en el manejo de fondos de dicha entidad. En ningún momento el Juzgado conocedor de la causa emitió nota alguna solicitando la citada suspensión del cargo; la misma procedió de una decisión de la Dirección de Aeronáutica Civil.

CUARTO: Mi representado ha ejercido siempre su cargo con honestidad, dedicación y esmero. No obstante, lo anterior, se procedió a suspender del cargo a mi mandante sin pruebas contundente que acreditasen que el hecho imputado hubiese sido perpetrado por su persona.

QUINTO: El acto administrativo mediante el cual se negó el pago de los salarios caídos a mi representado es violatorio de las propias disposiciones en que pretende fundamentarse."

Adicionalmente señala que se ha violado de manera directa, los artículos 44, ordinal c) y 45 ordinal c) del Reglamento Interno de la Dirección de Aeronáutica Civil.

Posteriormente el Magistrado Sustanciador, procedió a solicitarle al Director de Aeronáutica Civil, quien señaló lo siguiente:

"El día 12 de abril de 1990, mediante nota N°086 RH/DAC, se le informa al Sr. José Checa de la suspensión de su cargo a partir del día 16 de abril de 1990, por razones del proceso penal, que mantenía pendiente en el juzgado séptimo.

> Que la Juez 7a. de Circuito de lo Penal, del primer Distrito Judicial de Panamá, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, procede a dictar un fallo absolutivo a favor del Señor. José a. Checa con cédula N°8-140-471, exonerándolo de toda responsabilidad penal con relación al hecho reprobable por el cual se le juzgó.
>
> La Dirección Administrativa de la Dirección de Aeronáutica Civil, mediante Acción de Personal N°217 del 5 de mayo de 1992 reintegró a sus labores al Sr. José Checa, como mensajero en el Departamento de Correspondencia y Archivo.
> ...
> El Licdo. Jaime Olmos en nombre y representación del Sr. José Checa, mediante memorial del 24 de noviembre de 1992 solicita a la Dirección de Aeronáutica Civil, el pago de los salarios caídos, a los que cree que tiene derecho a percibir, desde la fecha de la separación del cargo hasta su respectivo reintegro a sus funciones, período comprendido (sic) desde el 11 de abril de 1990 hasta el 10 de mayo de 1992.
>
> Mediante Resolución N°384-AJ-DG-DAC del 15 de diciembre de 1992 se resolvió negar, la solicitud de pago de salarios caídos solicitados por el funcionario José Checa, por carecer de norma legal que autorice dicho pago."
> ...
> El día 18 de marzo de 1993, mediante Resolución N°020-JD se resuelve negar el Recurso de Apelación impetrado en contra de la Resolución N°384-AJ-DG-DAC del 15 de diciembre de 1992 y confirmar en todas sus partes la misma."

De igual manera se le corrió traslado al Procurador de la Administración, de la demanda propuesta, a lo que el precitado funcionario se opuso a la pretensión.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados de la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia:

En virtud de que los artículos 44, acápite c) y 45 acápite, c) están relacionados, los analizaremos de manera conjunta:

La parte demandante sustenta la acusación impetrada aduciendo que el señor **JOSÉ ANTONIO CHECA MENDIETA** fue suspendido de su cargo a partir del 16 de abril de 1990, por razón de que se le abrió causa criminal por el delito de peculado en perjuicio de la Dirección de Aeronáutica Civil. Que posteriormente la Juez Penal Séptima del Primer Circuito Judicial dictó a favor del precitado, un fallo absolutorio, en donde se le exoneró de la responsabilidad penal de que se le había acusado, y fue reintegrado inmediatamente a su puesto de trabajo en Aeronáutica Civil. Que debido a lo anterior, el señor **JOSÉ ANTONIO CHECA MENDIETA**, tiene derecho a que se le cancele los salarios que dejó de percibir durante la suspensión. Que los artículos 44, acápite c) y 45, acápite c) del Reglamento Interno sólo limita el pago de salarios, cuando se ha comprobado la causal y la responsabilidad del empleado
público en esta entidad gubernamental.

Frente a lo expuesto por la parte actora, debemos destacar que en primer lugar las normas antes citadas no pueden interpretarse de manera aislada, ya que además de éstas, el Código Administrativo es la legislación específica que rige para los funcionarios públicos, tal como lo manifiesta el Procurador de la Administración y que sus preceptos prevalecen frente a otras normas de menor jerarquía, como lo es el Reglamento Interno de Aeronáutica Civil.

Si bien es cierto el artículo 44, acápite c) y el artículo 45, acápite c), establecen que la suspensión del cargo sin derecho a salario procede cuando se haya comprobado la causal y la responsabilidad del empleado una vez analizadas las pruebas, también es importante señalar que para que la Administración Pública proceda a pagar salarios caídos, los mismos deben estar contemplados por ley en virtud del conocido principio de la legalidad, en donde la Administración Pública sólo puede hacer lo que la ley le permite, tal y como lo ha manifestado esta superioridad en reiteradas ocasiones.

Este Tribunal Colegiado ha señalado en innumerables ocasiones que la regla general es, que el empleado público nombrado por tiempo indefinido sólo tiene derecho a su sueldo como retribución al trabajo efectivo realizado, salvo que la ley señale lo contrario (ver Sentencia de 17 de enero de 1992). En este mismo sentido, el Procurador de la Administración, atinadamente manifestó lo siguiente:

> "Los funcionarios públicos sólo pueden hacer aquello que la Ley les autoriza, a diferencia de los particulares que pueden hacer todo aquello que la ley no les prohíba.
>
> A este respecto, no existe disposición alguna que faculte a las autoridades de la Dirección de Aeronáutica Civil a pagar salarios caídos en el referido supuesto.
>
> Debemos tener presente que el salario es una remuneración que se otorga en contraprestación a servicios prestados, por lo cual -en principio- no se tiene derecho a aquél si no se han prestado tales servicios, salvo que una norma especial así lo autorice,"

En conclusión, no prosperan los cargos endilgados, por lo que no es viable acceder a la pretensión del demandante.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la Resolución N°384-AJ-DG-DAC de 15 de diciembre de 1992.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SANTIAGO SANFORD, EN REPRESENTACIÓN DE HORTENCIA RAQUEL FLORES ZAMBRANO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO.337 DE 12 DE DICIEMBRE DE 1990, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **SANTIAGO SANFORD** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **HORTENCIA RAQUEL FLORES ZAMBRANO**, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N°337 de 12 de diciembre de 1990, expedido por el Presidente de la República por conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado ha infringido el artículo primero del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990; los artículos primero y segundo del Decreto de Gabinete N°21 de 1° de febrero de 1990; los artículos 2° y 3° del Decreto de Gabinete N°48 de 20 de febrero de 1990, así como las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946.

De la demanda instaurada se corrió traslado al funcionario responsable del acto acusado para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio.

De igual forma se dio traslado al señor Procurador de la Administración, quien procedió a oponerse a las pretensiones del actor.

Una vez surtidos todos los trámites establecidos para estos procesos, procede la Sala Tercera a desatar la controversia instaurada.

El primer cargo de ilegalidad aducido por el recurrente descansa en la supuesta violación del artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1990, norma que es del tenor siguiente:

> "ARTICULO PRIMERO: Facúltese a las autoridades y organismos superiores de los ministerios, entidades autónomas y semiautónomas, empresas estatales y demás entes públicos que se rigen por leyes especiales, para que destituya o se declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que en los últimos treinta (30) meses hayan pertenecido o participado en grupos paramilitares de los llamados CODEPADI, Batallones de la Dignidad u otros similares, o que se hayan dedicado a actividades de persecución, represión, amenaza, hostigamiento, destrucción y robo de la propiedad pública y privada, introducción o tráfico de armas, o que de cualquier manera atentaron contra la seguridad, integridad física y dignidad de sus compañeros de trabajo; y demás ciudadanos panameños o extranjeros".

Al motivar el concepto de la transgresión alegada, el actor ha señalado:

> "El artículo Primero del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990, ha sido violado directamente por omisión, toda vez que dicha excerta legal contiene expresamente la causal de destitución por formar parte de los CODEPADI y BATALLONES DE LA DIGNIDAD y se establece el procedimiento aplicable igual situación ocurre con las disposiciones del Decreto de Gabinete N°21 de 1° de febrero de 1990, pero hace mención de tales normas ya que guardan intima relación con los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete N°48 de 20 de febrero de 1990 ...".

En relación al argumento expuesto, debe indicarse en primer lugar, que tanto el Decreto de Gabinete N°20 de 1990, como los Decretos de Gabinete N°1 de 1989 y 48 de 1990, han regulado las situaciones de destitución de funcionarios públicos que incurrieron en conductas impropias, como lo fueron organizar bandas paramilitares, o cualquier forma de actividad terrorista, atentando contra las instituciones del Estado, y la paz y seguridad de sus compañeros de trabajo, sometiéndolos a persecución y hostigamiento durante los meses inmediatamente precedentes a diciembre de 1989.

Dentro de este marco histórico, en virtud de la transición del Gobierno y de las circunstancias en que ésta se desarrollaba, se presentó la necesidad de dictar normas jurídicas especiales con miras a restaurar y sanear la administración pública, y una vez

reimplantado el orden constitucional, se expidieron los Decretos de Gabinete N°1 de 1989, y N°20; N°21 y N°48 de 1990.

El presupuesto normativo básico para la aplicación de estas medidas a los funcionarios públicos que se encuentren regidos o no, por leyes especiales, es la identificación por parte de las autoridades superiores de cada entidad, del servidor público que se haya dedicado a la amenaza, represión, o que atentara contra la seguridad, dignidad, integridad de sus compañeros, o de su institución, sin necesidad de que tal autoridad administrativa deba someterse a ningún procedimiento especial para declarar la destitución respectiva, bastando expresar la causal en que se funda la actuación, tal como preceptúa el artículo 3° del Decreto de Gabinete N°48 de 1990, que es posterior a los Decretos N°1 de 1989 y N°20 de 1990.

En el caso de la ex-funcionaria **HORTENCIA FLORES**, la causal de destitución se expresó claramente, cuando la Directora Nacional Administrativa del MIDA señaló que "su caso se encuentra dentro de los tipificados por el Decreto de Gabinete N°1 del 26 de diciembre de 1989" (cfr. foja 2 del expediente). Estas razones se amplían en el informe de conducta rendido por el señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, cuando manifestó:

> "La señora **Hortencia Raquel Flores Zambrano**, durante el régimen anterior, se dedicó a perseguir a sus compañeros y ciudadanos civilistas, según lo señala el H.L. Arturo Vallarino, en nota fechada el 19 de abril de 1990, razón por la cual fue destituida de la Institución, con fundamento en el artículo Primero del Decreto No.1 de 26 de diciembre de 1989, 'por el cual se estabiliza la organización de las dependencias estatales', ...".

De esta manera, el Ministro del Ramo, como máxima autoridad de la institución, identificó a la señora **FLORES** como una de las servidoras públicas que se dedicaron a las indignas actividades de amedrentamiento en perjuicio de sus compañeros y de su institución, por lo que sí le era aplicable el Decreto de Gabinete N°20 de 1990, razón por la cual debe descartarse el cargo de ilegalidad aducido.

Los siguientes cargos de ilegalidad hacen alusión a los artículos 1 y 2 del Decreto de Gabinete N°21 de 1 de febrero de 1990, que son del tenor siguiente:

> "ARTICULO PRIMERO: Facúltase a los Ministros de Estado, Organismos Superiores, Directores o Gerentes Generales de las Entidades del Estado, cuyos funcionarios están sujetos a leyes especiales, para trasladar a nuevas posiciones a Directores y Subdirectores, Jefes y Subjefes, así como a funcionarios que sin estar comprendidos en estas categorías, tienen salarios superiores al establecido para cargos que realmente desempeñaban, asignándoles, en todos los casos, el salario que corresponde al nuevo cargo a ocupar".
>
> "ARTICULO SEGUNDO: Facúltase igualmente a las autoridades enunciadas en el artículo anterior para declarar insubsistentes los nombramientos de los funcionarios que al 15 de diciembre de 1989, estaban asignados a otras instituciones, por no requerirse sus servicios".

El actor ha presentado estos dos nuevos cargos en conjunto, alegando con ellos la transgresión simultánea de los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete N°48 de 20 de febrero de 1990, cuyos textos reproducimos a continuación:

> "ARTICULO 2°: Las medidas contenidas en los Decretos arriba mencionados se aplicarán a los servidores públicos de inmediato, una vez se comprueben los hechos señalados en el Artículo Primero del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990 y en los artículos Primero y Segundo del Decreto de Gabinete N°21 de 1° de febrero de 1990".
>
> "ARTICULO 3°: La autoridad u organismo estatal que proceda a una destitución al amparo de los Decretos 20 y 21 citados, expresará la causal en la que se funda su actuación. Contra dicha destitución cabe sólo el recurso de reconsideración ante la propia autoridad que dictó la decisión, agotándose con éste la vía gubernativa. Queda, en consecuencia derogado el parágrafo del Artículo 1° del Decreto de Gabinete N°20 de 1° de febrero de 1990".

Al motivar el concepto de las violaciones alegadas, el recurrente manifestó:

> "Como observamos, el Decreto de Personal N°337 de 12 de febrero de 1990 y la Resolución N° ALP-031-ADM, de 5 de agosto de 1991, viola la norma transcrita, en el concepto de violación directa, ya que en primera instancia no se señala o señalan los supuestos hechos que dieron origen a la destitución de mi poderdante y en segunda instancia tampoco se prueban hechos algunos en que haya incurrido la señora HORTENCIA FLORES muy por el contrario existe en el expediente notas suscritas por moradores de la comunidad donde laboraba mi representada, tal es el caso de la Nota de 14 de febrero de 1991, dirigida al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario, suscrita por moradores de los Corregimientos de San Martín y Pacora, Distrito de Panamá, Provincia de Panamá; así mismo debe reposar la Nota de 28 de junio de 1991, dirigida al señor Ministro de Desarrollo Agropecuario y suscrita por el Ing. RICARDO E. CANTO, Jefe de la Agencia de Servicios de la Mesa. También consta en el expediente la Nota N°..0596-91DVM, de 1 de abril de 1991, dirigida al Ministro de Desarrollo Agropecuario y suscrita por el Viceministro de la Presidencia y por último la Nota DER-023-91, de 29 de enero de 1991, dirigida también al señor Ministro de Desarrollo

> Agropecuario y suscrita por el Ing. LUIS MONTENEGRO, Director Ejecutivo Regional Región N°7 Chepo.
>
> Todas las notas mencionadas nos demuestran que mi representada no cometió falta alguna para hacerse acreedora a la destitución, por tanto no ha podido probarse hechos que tampoco fueron señalados en el Decreto de Personal N°337 que impugnamos, violándose en forma directa por omisión el artículo 2° del Decreto de Gabinete N°48 de 1990. ...
>
> Esta disposición guarda íntima relación con el Artículo 2 de la misma excerta legal, ya que exige a la autoridad u organismo estatal que destituye a un servidor público que señale en su actuar las causales de destitución, ya que de no hacerse se estaría dejando en un estado de indefensión, es decir, que no hacerle ningún señalamiento al servidor público destituido, este no tendría forma de defenderse".

En vista de que el demandante no realizó un examen claro e individualizado de las normas supuestamente infringidas, la Sala deberá analizar en conjunto los cargos aducidos, pese a que la motivación del actor en cuanto a estos cargos resulta confusa y desorganizada.

Observa este Tribunal Colegiado, en primer lugar, que las normas alegadas como transgredidas, pertenecientes al Decreto de Gabinete N°21 de 1990, no tienen ninguna vinculación ni aplicación al caso de la ex-funcionaria **HORTENCIA FLORES**, toda vez que las normas en comento están destinadas a la reorganización de las entidades estatales en dos aspectos o situaciones básicas; esto es, en los casos en que deba trasladarse a funcionarios a nuevas posiciones por estar devengando salarios superiores a los cargos que desempeñan; y para destituir a aquellos servidores públicos asignados a instituciones distintas a las realmente que pertenecían y ello por no requerirse sus servicios.

En ninguno de los supuestos examinados se enmarca la situación de la ex-funcionaria **HORTENCIA FLORES**, quien fue destituida de su cargo por haber tenido participación en las actividades descritas en los Decretos de Gabinete N°1 de 1989, N°20 de 1990 y N°48 de 1990.

Es por ello que los dos cargos de violación endilgados a los artículos 1 y 2 del Decreto de Gabinete N°21 de 1990 resultan incongruentes con la situación examinada, y el escaso alegato vertido en alusión a tal transgresión es totalmente inconducente si se pretende con ello atacar la actuación del Ministerio de Desarrollo Agropecuario en relación a la señora **FLORES ZAMBRANO**, por lo que la Sala descarta estos dos cargos de violación.

De igual forma, el recurrente estima que el Decreto de Personal N°337 de 12 de diciembre de 1990 que destituyó a la señora **FLORES** ha infringido los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete N°48 de 1990, pues en el acto de destitución no se tomaron en cuenta una serie de documentos y notas que hablaban en favor de la señora **FLORES**, ni se expresó la causal de destitución de esta ex-funcionaria.

Las razones esgrimidas por el actor carecen de fundamento o asidero jurídico, pues a lo largo del estudio de los diferentes cargos de violación impetrados, han quedado expuestas de manera manifiesta, las causales en que la administración se apoyó para proceder a la declaratoria de insubsistencia del cargo de la ex-funcionaria del MIDA, señora **HORTENCIA FLORES**, y esto es, tal como la propia entidad estatal declarase en los diversos memoriales que constan en el expediente, y especialmente al rendir su informe de actuación, las denuncias que señalaban a la precitada ex-funcionaria como partícipe de las conductas contempladas en el Decreto de Gabinete N°1 de 1989 y en los Decretos de Gabinete N°20 y 48 de 1990. Una vez analizada la situación por parte del MIDA, se procedió a identificar positivamente a la señora **FLORES** como partícipe en alguna de las formas de conductas impropias previamente descritas, y por ende se hacía procedente su destitución.

El actor hace referencia en sus argumentos, a diversas notas de apoyo giradas a la autoridad superior del MIDA, sin embargo esas notas no constan en el expediente en estudio. De igual forma observa la Sala que el recurrente adujo una serie de testimonios tendientes a probar la supuesta falta de sustento de las causales de destitución presentadas por la administración, más los testigos citados nunca comparecieron al Tribunal.

Todo lo anterior permite colegir a esta Sala, que en la actuación administrativa no se aprecia vicio alguno que pueda llevar a declarar la nulidad de lo surtido por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, por cuanto se cumplieron los procedimientos establecidos en los Decretos de Gabinete N°1 de 1989 y N°20 y 48 de 1990, aplicables directamente a la situación de la señora **HORTENCIA FLORES** y se verificaron los supuestos contemplados en dichos textos legales para que la ex-funcionaria quedase comprendida en tales ámbitos de aplicación, por lo que deben descartarse los cargos de violación alusivos a los artículos 2 y 3 del Decreto de Gabinete N°48 de 1990.

Finalmente el Tribunal deja constancia que el actor anunció la supuesta transgresión genérica de las Leyes 135 de 1943 y 33 de 1946. Tal argumentación no sólo no fue sustentada en lo absoluto, sino que resulta inaceptable toda vez que los cargos de ilegalidad endilgados a una actuación administrativa deben ser determinados, específicos e individualizados, pero de ninguna manera sería pausible examinar la violación de la totalidad de un cuerpo normativo cuando se omite expresar qué normas son infringidas y en base a qué concepto o motivo de ilegalidad se fundamenta tal transgresión.

Sin perjuicio de todo lo expresado, la Sala Tercera debe resaltar el hecho de que la señora **HORTENCIA FLORES** no estaba amparada por una ley de carrera administrativa, por lo que su nombramiento, en todo caso, estaba sometido a la libre remoción de la autoridad superior de la entidad.

La situación comentada ha venido siendo reiterada por la Sala Tercera en casos similares al que nos ocupa, en el sentido de que desde el año de 1969, por disposición de la Junta Provisional de Gobierno mediante Decreto de Gabinete N°137 de 30 de marzo de 1969, quedó abolido el régimen de carrera administrativa, por lo que el servidor público (salvo casos especiales contemplados en la Ley), se encuentra desprovisto de los derechos y prerrogativas que normalmente derivan de aquélla a su favor, a consecuencia de lo cual la Administración mantiene una esfera discrecional más amplia a los efectos de adoptar decisiones en cuanto al nombramiento y remoción de personal, sin los rigores que la carrera administrativa pudiese establecer.

Los servidores públicos comprendidos en esta situación están sujetos por ende a lo dispuesto en los ordinales 3° y 18° del artículo 629 del Código Administrativo, que puntualiza:

> "Artículo 629. Corresponde al Presidente de la República como suprema autoridad administrativa:
> ...
> 3o.- Dirigir la acción administrativa nombrando y removiendo sus agentes, reformando o revocando los actos de éstos y dictando las providencias necesarias en todos los ramos de la administración.
> ...
> 18.- Remover los empleados de su elección, salvo cuando la Constitución o las leyes dispongan que no son de libre remoción".

En atención a lo anotado, y al examen sucinto de los hechos acaecidos, debe negarse la pretensión formalizada por parte de la ex-funcionaria **HORTENCIA FLORES ZAMBRANO**, al concluirse que no se han producido las violaciones legales aducidas.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N°337 de 12 de diciembre de 1990 expedido por conducto del Ministro de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE DAVID CALVO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00001 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **VILLALAZ Y ASOCIADOS** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **DAVID CALVO** para que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal No.00001 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

El demandante en su libelo aduce como violados, el artículo 29 de la Ley 135 de 1946; los artículos 4 y 18 de la Ley 98 de 1961; el artículo 5° literal a) del Reglamento Interno de Personal del I.D.A.A.N; y los artículos primero y segundo de la Ley 25 de 1990.

De la demanda interpuesta se corrió traslado al Señor Procurador de la Administración quien se opuso a las pretensiones del demandante.

De igual forma se dio traslado al funcionario responsable del acto acusado para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio.

Una vez cumplidos los trámites procesales estatuidos para estos procesos, la Sala Tercera procede a examinar el negocio sub-júdice, y a externar los siguientes conceptos:

Sostiene la parte actora que la Acción de Personal No.00001 de 4 de enero de 1991 que le destituyó del cargo que ocupaba como inspector del **I.D.A.A.N**, con fundamento en la Ley 25 de 1990, ha infringido el artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

La norma legal que se aduce transgredida es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 29. Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al

> interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

Al fundamentar el concepto de la violación alegada, el actor omite explicar o detallar de qué manera la Administración ha vulnerado la norma legal pretranscrita, limitándose a plantear ciertos principios relacionados con la "autonomía de la voluntad" propia del derecho privado, y con el principio de legalidad. Al respecto, el demandante señaló:

> "Los actos y actuaciones administrativas, se rigen por estrictos principios que los encuadran dentro de la Teoría de la estricta legalidad, eminentemente formalista, que ha sido acogida por nuestra legislación.
>
> En Derecho Privado, se puede hacer todo aquello que la Ley no prohíba, pero en Derecho Público, el funcionario sólo puede hacer aquello que esté consagrado en la Ley. Si el funcionario público vulnera este principio, su actuación podrá ser calificada de ilegal y por ende nula, además se habrá extralimitado en sus funciones. Esta disposición se ha infringido en el concepto de violación directa."

La Sala considera que el recurrente con la precedente exposición, no ha puesto en evidencia violación alguna al texto del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, pues se concretó en resaltar principios rectores de las actuaciones administrativas y de los particulares, que en nada esclarecen el cargo de violación imputado.

El tribunal estima sin embargo, del análisis del expediente, que en el caso de que la transgresión impetrada se hubiese alegado por el hecho de que en el acto impugnado no se hayan expresado los recursos que le asistían al afectado para enervar el acto administrativo sujeto a esta revisión, debe la Sala Tercera reiterar lo que ha venido sosteniendo en situaciones como las que nos ocupa, en el sentido de que el artículo 29 de la Ley 135 de 1943 contiene dos garantías procesales básicas: 1-que el afectado no quede en indefensión por no conocer de una actuación que pueda afectarle; y 2-que pueda impugnarla si no se encuentra conforme con la medida administrativa adoptada.

Estas garantías se han respetado en el caso del señor **DAVID CALVO**, puesto que fue debidamente puesto en conocimiento de la Acción de Personal que declaraba insubsistente su nombramiento en el I.D.A.A.N., y contra tal acto pudo promover los recursos de reconsideración y apelación, en tiempo oportuno, (cfr. fojas 2-5 del expediente) y con ello subsanó cualquier vicio que hubiese podido producirse por la omisión de mencionar los recursos que procedían en la vía gubernativa, tal como preceptúa el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, cuando señala:

> "Artículo 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales."

En atención a las razones aducidas considera la Sala que no se ha producido violación alguna al texto del artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

El actor aduce igualmente, la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946. Las normas en mención preceptúan:

> "Artículo 20. Por la vía gubernativa proceden los siguientes recursos en los asuntos administrativos de carácter nacional:
>
> 1.-El de reconsideración ante el funcionario administrativo de la primera instancia, para que se aclare, modifique o revoque la resolución;
>
> 2.-El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto.
>
> Estos recursos ordinarios no excluyen el de avocamiento, en la forma establecida por las leyes, decretos o reglamentos especiales."
>
> "Artículo 22. Se considerará agotada la vía gubernativa:
>
> 1.-Cuando interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos;
>
> 2.-Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualquiera de los recursos señalados en el artículo 33.
>
> La circunstancia que contempla este inciso deberá ser probada plenamente;
>
> 3.-Cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semi-autónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

El recurrente ha presentado de manera conjunta estos dos cargos de ilegalidad a la consideración de la Sala Tercera. Sin embargo omite detallar en qué consiste la transgresión por parte del acto acusado, al texto del artículo 20 de la Ley 33 de 1946.

Esta norma legal es de carácter adjetiva, y su finalidad es permitir que el acto administrativo sea revisado, puesto que de su impugnación pudiera resultar un pronunciamiento distinto de la administración, tal vez más acorde con los intereses del recurrente.

Tal objetivo se verificó plenamente, dado que de ambos recursos (reconsideración y apelación) hizo uso el afectado, por lo que no se configura de ningún modo, violación al texto legal comentado. No debe perderse de vista, por otro lado, que la ley que determinó la destitución del Señor **Calvo** fue la ley 25 de 1990, que contempla el procedimiento a surtirse en estos casos, y que igualmente señala que las decisiones asumidas en base a ese mandato legal pueden ser atacadas por medio de los recursos de reconsideración y de apelación (cfr. artículo 3 de la ley 25 de 1990).

En cuanto a la supuesta infracción al contenido del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, el actor ha considerado que tal violación se verificó desde el momento en que la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales decidió extemporáneamente el recurso de apelación elevado a su conocimiento; que tal situación es inadmisible pues al resolverse fuera del término legal establecido, se había configurado el silencio administrativo, y agotado la vía gubernativa.

La Sala Tercera considera conveniente indicar al recurrente, que el silencio administrativo efectivamente se configura al transcurrir dos meses sin que recaiga pronunciamiento sobre la solicitud o recurso presentado ante la Administración, y que a partir de ese momento se agota la vía gubernativa, por lo que se da inicio inmediato al cómputo del término de 2 meses de prescripción al que alude el artículo 42b de la Ley 135 de 1943 para las acciones de plena jurisdicción.

A foja 3 del expediente se observa la notificación personal al apoderado judicial del Señor **CALVO**, de la resolución que decidía el recurso de reconsideración, con apelación en subsidio presentado. Esta notificación se produjo el 20 de marzo de 1991, quedando sólo pendiente la resolución que decidiera la apelación en subsidio presentada, y sustentada el 26 de marzo de 1991.

Es el demandante quien esperó voluntariamente hasta que la Administración se pronunciara, lo cual se verificó en una resolución con data de 12 de junio de 1991, cuando habían transcurrido más de los dos meses a los que hace alusión el artículo 22 de la Ley 33 de 1946, y de la que finalmente se notifica el actor el día 10 de septiembre de 1991 mientras que no es hasta el día 30 de octubre de 1991 que se instaura el proceso en la Sala Tercera.

Como queda palmariamente expuesto, fue el demandante quien eligió esperar por un pronunciamiento administrativo, cuando desde el 26 de mayo de 1991 debía entender negado el recurso incoado y acudir ante este Tribunal antes de que prescribiera su acción de plena jurisdicción el 26 de julio de 1991.

Como ha podido apreciarse en este caso, es posible que los recursos interpuestos en la vía gubernativa sean resueltos en forma tardía por el funcionario administrativo correspondiente, siempre que el interesado no haya acudido a la vía jurisdiccional a impugnar el silencio administrativo.

Sobre el particular resultan interesantes los planteamientos del tratadista VIDAL PERDOMO, cuando señala:

> "Pueden darse dos situaciones diferentes: que la administración calle enfrente de un recurso en la vía gubernativa o en relación con una petición. En el primer caso, por el entrelazamiento que existe entre dicha vía y la jurisdiccional, en el lenguaje del derecho colombiano, al no desatar el recurso la administración está impidiendo que aquella se agote y el interesado pueda pasar a la jurisdiccional.
> ...
> Este silencio ante un recurso, y que pudiera denominarse procesal, es fácilmente superable por la ley cuando ella dispone, como lo hace el nuevo Código Contencioso Administrativo (art.60), que se entiende negado si han pasado dos meses sin decisión sobre él. Mediante esta ficción, queda abierto el camino para que el administrado controvierta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los antecedentes de esa decisión negativa. ...
>
> Mas la aplicación del silencio frente a recursos no impide al funcionario resolverlos, mientras no se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo". (VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Editorial Temis, S. A. Bogotá, Novena edición. 1987 pág.270)

De haber utilizado este Tribunal con el actor el criterio de que desde el 26 de mayo de 1991 se agotaba la vía gubernativa, le hubiese impedido admitir la demanda incoada por haber prescrito la acción ante la Sala, pues la demanda se presentó el 30 de octubre de 1991, y el término de presentación (contando como base la negativa), prescribía el 26 de julio de ese año.

En atención a lo expuesto la Sala Tercera considera que no se ha infringido el texto legal del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, pues no se evidencia que la Administración haya conculcado esta norma legal, sino más bien que el recurrente, discrecionalmente, prefirió no hacer uso de la figura del silencio administrativo y esperar por un pronunciamiento de la administración. Descartamos por ende los dos cargos de ilegalidad analizados.

Los siguientes cargos de violación legal presentados descansan en los artículos 4 y 8 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961.

La norma precitada es el cuerpo legal que creó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

La Sala desea hacer la salvedad de que el artículo 4 que aduce el recurrente en su exposición, no pertenece a la Ley 98 de 1961, sino al reglamento interno de personal de la entidad.

En lo referente al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, que contempla la facultad del Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** para nombrar, ascender, trasladar, suspender y remover a los empleados de la institución conforme al procedimiento y causales contempladas en el Reglamento, es preciso recordar al recurrente que la principal causal que se invocó para declarar la insubsistencia de su nombramiento, fue la aplicación de los presupuestos contenidos en la ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Esta Ley, que es posterior a la Ley 98 de 1961 y regula la materia en conflicto de manera especial, fue aplicada al señor **DAVID CALVO** al momento de declararse su insubsistencia como servidor público en el **I.D.A.A.N.**, y la misma es clara al establecer en su artículo 5° que modifica cualquier disposición que le sea contraria, por lo que aquellos servidores comprendidos dentro de los presupuestos de la Ley 25 de 1990 (participación en la organización, llamado o ejecución de acciones contra la Democracia y el orden constitucional; acciones éstas definidas en la Resolución N°110 de 23 de enero de 1991 del Consejo de Gabinete), una vez identificados, podían ser destituídos de sus puestos de trabajo.

En el caso particular de este ex-funcionario del **D.A.A.N.**, se le identificó por medio de la autoridad superior de la entidad gubernamental como partícipe de los actos que se suscitaron los días 4 y 5 de diciembre de 1990, que incluyeron un paro de labores por parte de funcionarios del Estado, y que fue calificado por las autoridades correspondientes como ilegal.

El artículo 2 de la Ley 25 de 1990 facultó al Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** para que previa la identificación del funcionario que participara en los actos descritos en el artículo 1 de la citada Ley, declarara insubsistente su nombramiento, y así se expresó en la resolución No.5-91, visible a fojas 2-3 del expediente, cuando se manifestó en el sentido de que existían suficientes elementos en las pruebas recabadas en el expediente abierto al señor **CALVO** para encauzar su conducta dentro de los supuestos normativos recogidos en esta Ley de orden público.

Al ser identificado el señor **CALVO** como una de las personas que participó en las actividades desestabilizadoras descritas anteriormente, se colocó en la condición enmarcada por la Ley que define su situación, es decir la Ley 25 de 1990, por lo que no prospera el cargo de violación al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, que como ha expresado el Tribunal, no fue la aplicable a su destitución.

El razonamiento supraexpuesto tiene aplicación directa con los dos cargos de violación argüidos por el recurrente en relación a los artículos 4° y 5° del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

En efecto, es la Ley Orgánica del **I.D.A.A.N.** la que remite al reglamento interno al momento de surtirse la destitución de un servidor de la institución, para que se surtan los procedimientos reglamentarios pertinentes a tal acción de personal.

Al no haberse utilizado como fundamento básico ni aplicable al caso del señor **CALVO** la Ley 98 de 1961, no eran las normas reglamentarias de la Institución las que regulaban el procedimiento de su destitución, sino el trámite previsto en la propia Ley 25 de 1990, que tiene rango y jerarquía superior al de una norma reglamentaria. No fue violentado por ende, el contenido de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Personal del **I.D.A.A.N.**

Es conveniente aclarar que el hecho de que en el acto de destitución se haga mención supletoria del artículo 5° del Reglamento Interno, fue a criterio de esta Sala, por esgrimir un fundamento legal adicional, para evidenciar que la medida adoptada estaba contemplada y respaldada tanto por la Ley 25 de 1990, que señalaba la causal y procedimiento general para proceder a la destitución de servidores públicos que incurrieran en las conductas contempladas en la ley, tanto como por normas internas de la entidad gubernamental.

Pese a ello, bastaba con invocar la aplicación de la Ley 25 de 1990, para que fuese ésta, por su rango y jerarquía normativa, la que regulase el caso en particular, con exclusión de las leyes que antecedían a la vigencia de la Ley 25 o de normas reglamentarias, ya que por principio de Hermenéutica legal, es la ley posterior y especial la que prevalece sobre disposiciones que le sean contrarias (cfr. artículos 15 Código Civil y 757 del Código Administrativo).

La Sala Tercera debe descartar en virtud de lo expuesto, los cargos de ilegalidad alusivas a los artículos 4 y 5 del Reglamento de Personal del **I.D.A.A.N.**

Finalmente, el actor considera que el acto impugnado es violatorio de los artículos 1° y 2° de la Ley 25 de 1990.

Las normas en mención son del tenor siguiente:

"Artículo 1. Con el fin de preservar el Orden Constitucional, se autoriza al Órgano Ejecutivo y a los directores de instituciones autónomas y semi-

> autónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado para que declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, y que ocupen o no cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos; sus delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores públicos, con independencia de la existencia o no de fuero sindical; o que estén o no regidos por leyes especiales."
>
> "Artículo 2. Las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, tales como Ministros de Estado, directores de las instituciones autónomas y semi-autónomas, de las empresas estatales; y demás dependencias públicas, el Procurador de la Nación y el de la Administración, el Contralor General de la República, los Gobernadores y Alcaldes respectivos podrán, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de los funcionarios públicos que participen en los actos descritos en el Artículo 1 de esta Ley."

El demandante, al exponer el concepto de las transgresiones alegadas, señala básicamente que al señor **CALVO** no se le probó de manera indubitable que haya tenido participación en las conductas comprendidas en los supuestos normativos transcritos.

En atención a los cargos impetrados la Sala desea reiterar que el texto normativo del artículo 2° de la Ley 25 de 1990 es claro al señalar que basta la identificación por parte de las autoridades administrativas de que un servidor público ha participado en las acciones atentatorias de la democracia y el orden constitucional, o en la organización, llamado o ejecución en el paro nacional que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1990, para que se configure la causal de declaratoria de insubsistencia de su nombramiento.

En esta situación en concreto, era suficiente a la luz del texto del artículo 2°, el simple reconocimiento de los participantes en las acciones descritas en el artículo 1° supra transcrito, por parte del Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.**, como efectivamente sucedió con el señor **DAVID CALVO**, según consta en la resolución que ordena y confirma su destitución.

Observamos que los documentos aportados al proceso por parte del **I.D.A.A.N.** han identificado al señor **CALVO** como uno de los funcionarios destituídos en base a la Ley 25 de 1990, aduciendo que, como se aprecia a fojas 1, 3, 4-5 del expediente, la razón por la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento, fue por encontrarse comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la citada norma legal. Así lo señaló expresamente el Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** en la Resolución No.5-91, y en el informe de conducta remitido al Tribunal, cuyos textos reproducimos a continuación:

> "Que mediante la Acción de Personal 00001 de 2 de enero de 1991 se declara insubsistente el nombramiento del señor **DAVID CALVO** como funcionario del INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES.
>
> Que dicha acción rige a partir del 4 de enero de 1991,
>
> Que esta destitución fue fundamentada en los artículos 1o. y 2o. de la Ley No.25 de 14 de diciembre de 1990 "Por la cual se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes a proteger la Democracia y el Orden Constitucional", y en el artículo 5o., ordinal a) del Reglamento Interno de Personal.
> ...
> Que existen suficientes elementos dentro del expediente administrativo que justifican las causales invocadas en la destitución en mención.
> ...
> El 4 de enero de 1991, mediante Acción de Personal 00001, la nueva administración del IDAAN, previa evaluación declaró insubsistente su nombramiento con cargo a los artículos 1 y 2 de la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990; y por infringir el artículo 5o., ordinal A, del Reglamento Interno de Personal."

La Sala estima por lo anterior, que no han sido infringidos los artículos 1° y 2° de la Ley 25 de 1990, pues el señor **CALVO** fue sobradamente indentificado por las autoridades respectivas, por lo que se descartan estos dos cargos de ilegalidad.

En base a las pruebas aportadas y a los argumentos del recurrente, debemos concluir que la destitución del señor **DAVID CALVO**, con fundamento en la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 no estuvo viciada de ilegalidad que pudiese llevar a esta Sala a declarar la nulidad de lo actuado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, pues del análisis íntegro del expediente y de cada una de las normas aducidas como violadas, se infiere que su actuación se verificó en apego a las normas legales y las prerrogativas que éstas confieren a la administración, en especial a lo dispuesto por la Ley 25 de 1990. Es preciso indicar que esta ley se encontraba vigente al momento de la destitución del señor **CALVO**, aunque posteriormente quedó derogada en virtud de la expiración de su período de vigencia (hasta el 31 de diciembre de 1991), pero debe ser aplicada a este caso en razón de la ultraactividad de las leyes derogadas.

Debe resaltarse, además de las razones expresadas, que las relaciones del Estado con sus servidores son de carácter administrativo, sometidos al derecho público. El empleado no sujeto a la carrera administrativa (en la que se ingresa por concurso de mérito y no por libre nombramiento) se halla en una situación legal y reglamentaria en que su condición está señalada de antemano por la ley, pudiendo ser modificada por el

Estado en cualquier momento mediante una Ley de orden público (como la Ley 25 de 1990), sin que puedan alegarse derechos adquiridos.

El señor **DAVID CALVO** no estaba amparado por una ley de carrera administrativa, por lo que su nombramiento estaba sometido a la libre remoción del Director Ejecutivo del **IDAAN**, y aún en el caso de que lo hubiese estado, la Ley 25 de 1990 establecía causales y procedimiento especial para proceder a la destitución de los servidores públicos cuyos actos se encuadraban en las hipótesis legales contempladas en la misma, como fue le caso del señor **CALVO.**

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la pretensión formalizada mediante demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción presentada por la firma forense VILLALAZ Y ASOCIADOS contra el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, y por tanto DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Acción de Personal N°0001 de 4 de enero de 1991 expedida por dicha entidad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ARTURO GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00016 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **VILLALAZ Y ASOCIADOS** ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción en representación de **ARTURO GONZÁLEZ** para que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal No.00016 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

El demandante en su libelo aduce como violados, el artículo 29 de la Ley 135 de 1946; los artículos 4 y 18 de la Ley 98 de 1961; el artículo 5° literal a) del Reglamento Interno de Personal del I.D.A.A.N; y los artículos primero y segundo de la Ley 25 de 1990.

De la demanda interpuesta se corrió traslado al Señor Procurador de la Administración quien se opuso a las pretensiones del demandante.

De igual forma se dio traslado al funcionario responsable del acto acusado para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio.

Una vez cumplidos los trámites procesales estatuidos para estos procesos, la Sala Tercera procede a examinar el negocio sub-júdice, y a externar los siguientes conceptos:

Sostiene la parte actora que la Acción de Personal No.00016 de 4 de enero de 1991 que le destituyó del cargo que ocupaba como soldador del **I.D.A.A.N**, con fundamento en la Ley 25 de 1990, ha infringido el artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

La norma legal que se aduce transgredida es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 29. Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado, o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición, debiendo expresarse los recursos que por la vía gubernativa procedan y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente."

Al fundamentar el concepto de la violación alegada, el actor omite explicar o detallar de qué manera la Administración ha vulnerado la norma legal pretranscrita, limitándose a plantear ciertos principios relacionados con la "autonomía de la voluntad" propia del derecho privado, y con el principio de legalidad. Al respecto, el demandante señaló:

> "Los actos y actuaciones administrativas, se rigen por estrictos principios que los encuadran dentro de la Teoría de la estricta legalidad, eminentemente formalista, que ha sido acogida por nuestra legislación.
>
> En Derecho Privado, se puede hacer todo aquello que la Ley no prohíba, pero en Derecho Público, el funcionario sólo puede hacer aquello que esté consagrado en la Ley. Si el funcionario público vulnera este principio, su actuación podrá ser calificada de ilegal y por ende nula, además se habrá extralimitado en sus funciones. Esta disposición se ha infringido en el concepto de violación directa."

La Sala considera que el recurrente con la precedente exposición, no ha puesto en evidencia violación alguna al texto del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, pues se concretó en resaltar principios rectores de las actuaciones administrativas y de los particulares, que en nada esclarecen el cargo de violación imputado.

El tribunal estima sin embargo, del análisis del expediente, que en el caso de que la transgresión impetrada se hubiese alegado por el hecho de que en el acto impugnado no se hayan expresado los recursos que le asistían al afectado para enervar el acto administrativo sujeto a esta revisión, debe la Sala Tercera reiterar lo que ha venido sosteniendo en situaciones como las que nos ocupa, en el sentido de que el artículo 29 de la Ley 135 de 1943 contiene dos garantías procesales básicas: 1-que el afectado no quede en indefensión por no conocer de una actuación que pueda afectarle; y 2-que pueda impugnarla si no se encuentra conforme con la medida administrativa adoptada.

Estas garantías se han respetado en el caso del señor **ARTURO GONZÁLEZ**, puesto que fue debidamente puesto en conocimiento de la Acción de Personal que declaraba insubsistente su nombramiento en el I.D.A.A.N., y contra tal acto pudo promover los recursos de reconsideración y apelación, en tiempo oportuno, (cfr. fojas 2-6 del expediente) y con ello subsanó cualquier vicio que hubiese podido producirse por la omisión de mencionar los recursos que procedían en la vía gubernativa, tal como preceptúa el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, cuando señala:

> "Artículo 32. Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales."

En atención a las razones aducidas considera la Sala que no se ha producido violación alguna al texto del artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

El actor aduce igualmente, la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946. Las normas en mención preceptúan:

> "Artículo 20. Por la vía gubernativa proceden los siguientes recursos en los asuntos administrativos de carácter nacional:
>
> 1.-El de reconsideración ante el funcionario administrativo de la primera instancia, para que se aclare, modifique o revoque la resolución;
>
> 2.-El de apelación, ante el inmediato superior, con el mismo objeto.
>
> Estos recursos ordinarios no excluyen el de avocamiento, en la forma establecida por las leyes, decretos o reglamentos especiales."
>
> "Artículo 22. Se considerará agotada la vía gubernativa:
>
> 1.-Cuando interpuestos alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 33 se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos;
>
> 2.-Cuando no se admita al interesado el escrito en que interponga cualquiera de los recursos señalados en el artículo 33.
>
> La circunstancia que contempla este inciso deberá ser probada plenamente;
>
> 3.-Cuando transcurra el plazo de dos meses sin que recaiga decisión alguna sobre cualquier solicitud que se dirija a un funcionario o a una entidad pública autónoma o semi-autónoma siempre que dicha solicitud sea de las que originan actos recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa."

El recurrente ha presentado de manera conjunta estos dos cargos de ilegalidad a la consideración de la Sala Tercera. Sin embargo omite detallar en qué consiste la transgresión por parte del acto acusado, al texto del artículo 20 de la Ley 33 de 1946.

Esta norma legal es de carácter adjetiva, y su finalidad es permitir que el acto administrativo sea revisado, puesto que de su impugnación pudiera resultar un pronunciamiento distinto de la administración, tal vez más acorde con los intereses del recurrente.

Tal objetivo se verificó plenamente, dado que de ambos recursos (reconsideración y apelación) hizo uso el afectado, por lo que no se configura de ningún modo, violación al texto legal comentado. No debe perderse de vista, por otro lado, que la ley que determinó la destitución del Señor **GONZÁLEZ** fue la ley 25 de 1990, que contempla el procedimiento a surtirse en estos casos, y que igualmente señala que las decisiones asumidas en base a ese mandato legal pueden ser atacadas por medio de los recursos de reconsideración y de apelación (cfr. artículo 3 de la ley 25 de 1990).

En cuanto a la supuesta infracción al contenido del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, el actor ha considerado que tal violación se verificó desde el momento en que la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales decidió extemporáneamente el recurso de apelación elevado a su conocimiento; que tal situación es inadmisible pues al resolverse fuera del término legal establecido, se había configurado el silencio administrativo, y agotado la vía gubernativa.

La Sala Tercera considera conveniente indicar al recurrente, que el silencio administrativo efectivamente se configura al transcurrir dos meses sin que recaiga

pronunciamiento sobre la solicitud o recurso presentado ante la Administración, y que a partir de ese momento se agota la vía gubernativa, por lo que se da inicio inmediato al cómputo del término de 2 meses de prescripción al que alude el artículo 42b de la Ley 135 de 1943 para las acciones de plena jurisdicción.

A foja 5 del expediente se observa la notificación personal al apoderado judicial del Señor **GONZÁLEZ**, de la resolución que decidía el recurso de reconsideración, con apelación en subsidio presentado. Esta notificación se produjo el 20 de marzo de 1991, quedando sólo pendiente la resolución que decidiera la apelación en subsidio presentada, y sustentada el 25 de marzo de 1991.

Es el demandante quien esperó voluntariamente hasta que la Administración se pronunciara, lo cual se verificó en una resolución con data de 12 de junio de 1991, cuando habían transcurrido más de los dos meses a los que hace alusión el artículo 22 de la Ley 33 de 1946, y de la que finalmente se notifica el actor el día 10 de septiembre de 1991 mientras que no es hasta el día 8 de noviembre de 1991 que se instaura el proceso en la Sala Tercera.

Como queda palmariamente expuesto, fue el demandante quien eligió esperar por un pronunciamiento administrativo, cuando desde el 25 de mayo de 1991 debía entender negado el recurso incoado y acudir ante este Tribunal antes de que prescribiera su acción de plena jurisdicción el 25 de julio de 1991.

Como ha podido apreciarse en este caso, es posible que los recursos interpuestos en la vía gubernativa sean resueltos en forma tardía por el funcionario administrativo correspondiente, siempre que el interesado no haya acudido a la vía jurisdiccional a impugnar el silencio administrativo.

Sobre el particular resultan interesantes los planteamientos del tratadista VIDAL PERDOMO, cuando señala:

> "Pueden darse dos situaciones diferentes: que la administración calle enfrente de un recurso en la vía gubernativa o en relación con una petición. En el primer caso, por el entrelazamiento que existe entre dicha vía y la jurisdiccional, en el lenguaje del derecho colombiano, al no desatar el recurso la administración está impidiendo que aquella se agote y el interesado pueda pasar a la jurisdiccional.
> ....
> Este silencio ante un recurso, y que pudiera denominarse procesal, es fácilmente superable por la ley cuando ella dispone, como lo hace el nuevo Código Contencioso Administrativo (art.60), que se entiende negado si han pasado dos meses sin decisión sobre él. Mediante esta ficción, queda abierto el camino para que el administrado controvierta ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo los antecedentes de esa decisión negativa.
> ...
> Mas la aplicación del silencio frente a recursos no impide al funcionario resolverlos, mientras no se haya acudido ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo". (VIDAL PERDOMO, Jaime. Derecho Administrativo. Editorial Temis, S. A. Bogotá, Novena edición. 1987 pág.270)

De haber utilizado este Tribunal con el actor el criterio de que desde el 25 de mayo de 1991 se agotaba la vía gubernativa, le hubiese impedido admitir la demanda incoada por haber prescrito la acción ante la Sala, pues la demanda se presentó el 8 de noviembre de 1991, y el término de presentación (contando como base la negativa), prescribía el 25 de julio de ese año.

En atención a lo expuesto la Sala Tercera considera que no se ha infringido el texto legal del artículo 22 de la Ley 33 de 1946, pues no se evidencia que la Administración haya conculcado esta norma legal, sino más bien que el recurrente, discrecionalmente, prefirió no hacer uso de la figura del silencio administrativo y esperar por un pronunciamiento de la administración. Descartamos por ende los dos cargos de ilegalidad analizados.

Los siguientes cargos de violación legal presentados descansan en los artículos 4 y 8 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961.

La norma precitada es el cuerpo legal que creó el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

La Sala desea hacer la salvedad de que el artículo 4 que aduce el recurrente en su exposición, no pertenece a la Ley 98 de 1961, sino al reglamento interno de personal de la entidad.

En lo referente al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, que contempla la facultad del Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** para nombrar, ascender, trasladar, suspender y remover a los empleados de la institución conforme al procedimiento y causales contempladas en el Reglamento, es preciso recordar al recurrente que la principal causal que se invocó para declarar la insubsistencia de su nombramiento, fue la aplicación de los presupuestos contenidos en la ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Esta Ley, que es posterior a la Ley 98 de 1961 y regula la materia en conflicto de manera especial, fue aplicada al señor **ARTURO GONZÁLEZ** al momento de declararse su insubsistencia como servidor público en el **I.D.A.A.N.**, y la misma es clara al establecer en su artículo 5° que modifica cualquier disposición que le sea contraria, por lo que aquellos servidores comprendidos dentro de los presupuestos de la Ley 25 de 1990 (participación en la organización, llamado o ejecución de acciones contra la Democracia y el orden constitucional; acciones éstas definidas en la Resolución N°110 de 23 de enero

de 1991 del Consejo de Gabinete), una vez identificados, podían ser destituídos de sus puestos de trabajo.

En el caso particular de este ex-funcionario del I.D.A.A.N., se le identificó por medio de la autoridad superior de la entidad gubernamental como partícipe de los actos que se suscitaron los días 4 y 5 de diciembre de 1990, que incluyeron un paro de labores por parte de funcionarios del Estado, y que fue calificado por las autoridades correspondientes como ilegal.

El artículo 2 de la Ley 25 de 1990 facultó al Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** para que previa la identificación del funcionario que participara en los actos descritos en el artículo 1 de la citada Ley, declarara insubsistente su nombramiento, y así se expresó en la resolución No.15-91, visible a fojas 4-5 del expediente, cuando se manifestó en el sentido de que existían suficientes elementos en las pruebas recabadas en el expediente abierto al señor **GONZÁLEZ** para encauzar su conducta dentro de los supuestos normativos recogidos en esta Ley de orden público.

Al ser identificado el señor **GONZÁLEZ** como una de las personas que participó en las actividades desestabilizadoras descritas anteriormente, se colocó en la condición enmarcada por la Ley que define su situación, es decir la Ley 25 de 1990, por lo que no prospera el cargo de violación al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, que como ha expresado el Tribunal, no fue la aplicable a su destitución.

El razonamiento supraexpuesto tiene aplicación directa con los dos cargos de violación argüidos por el recurrente en relación a los artículos 4° y 5° del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales.

En efecto, es la Ley Orgánica del **I.D.A.A.N.** la que remite al reglamento interno al momento de surtirse la destitución de un servidor de la institución, para que se surtan los procedimientos reglamentarios pertinentes a tal acción de personal.

Al no haberse utilizado como fundamento básico ni aplicable al caso del señor **GONZÁLEZ** la Ley 98 de 1961, no eran las normas reglamentarias de la Institución las que regulaban el procedimiento de su destitución, sino el trámite previsto en la propia Ley 25 de 1990, que tiene rango y jerarquía superior al de una norma reglamentaria. No fue violentado por ende, el contenido de los artículos 4 y 5 del Reglamento de Personal del **I.D.A.A.N.**

Es conveniente aclarar que el hecho de que en el acto de destitución se haga mención supletoria del artículo 5° del Reglamento Interno, fue a criterio de esta Sala, por esgrimir un fundamento legal adicional, para evidenciar que la medida adoptada estaba contemplada y respaldada tanto por la Ley 25 de 1990, que señalaba la causal y procedimiento general para proceder a la destitución de servidores públicos que incurrieran en las conductas contempladas en la ley, tanto como por normas internas de la entidad gubernamental.

Pese a ello, bastaba con invocar la aplicación de la Ley 25 de 1990, para que fuese ésta, por su rango y jerarquía normativa, la que regulase el caso en particular, con exclusión de las leyes que antecedían a la vigencia de la Ley 25 o de normas reglamentarias, ya que por principio de Hermenéutica legal, es la ley posterior y especial la que prevalece sobre disposiciones que le sean contrarias (cfr. artículos 15 Código Civil y 757 del Código Administrativo).

La Sala Tercera debe descartar en virtud de lo expuesto, los cargos de ilegalidad alusivas a los artículos 4 y 5 del Reglamento de Personal del **I.D.A.A.N.**

Finalmente, el actor considera que el acto impugnado es violatorio de los artículos 1° y 2° de la Ley 25 de 1990.

Las normas en mención son del tenor siguiente:

> "Artículo 1. Con el fin de preservar el Orden Constitucional, se autoriza al Órgano Ejecutivo y a los directores de instituciones autónomas y semi-autónomas, empresas estatales, municipales y demás dependencias públicas del Estado para que declaren insubsistentes los nombramientos de los servidores públicos que participaron y que participen en la organización, llamado o ejecución de acciones que atenten contra la Democracia y el Orden Constitucional, y que ocupen o no cargos en las juntas directivas de las organizaciones sindicales y de las asociaciones de servidores públicos; sus delegados y representantes sindicales o sectoriales, directores de las asociaciones de servidores públicos, con independencia de la existencia o no de fuero sindical; o que estén o no regidos por leyes especiales."
>
> "Artículo 2. Las autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, tales como Ministros de Estado, directores de las instituciones autónomas y semi-autónomas, de las empresas estatales; y demás dependencias públicas, el Procurador de la Nación y el de la Administración, el Contralor General de la República, los Gobernadores y Alcaldes respectivos podrán, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de los funcionarios públicos que participen en los actos descritos en el Artículo 1 de esta Ley."

El demandante, al exponer el concepto de las transgresiones alegadas, señala básicamente que al señor **GONZÁLEZ** no se le probó de manera indubitable que haya tenido participación en las conductas comprendidas en los supuestos normativos transcritos.

En atención a los cargos impetrados la Sala desea reiterar que el texto normativo del artículo 2° de la Ley 25 de 1990 es claro al señalar que basta la identificación por parte de las autoridades administrativas de que un servidor público ha participado en las acciones atentatorias de la democracia y el orden constitucional, o en la organización, llamado o ejecución en el paro nacional que tuvo lugar el 5 de diciembre de 1990, para que se configure la causal de declaratoria de insubsistencia de su nombramiento.

En esta situación en concreto, era suficiente a la luz del texto del artículo 2°, el simple reconocimiento de los participantes en las acciones descritas en el artículo 1° supra transcrito, por parte del Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.**, como efectivamente sucedió con el señor **ARTURO GONZÁLEZ**, según consta en la resolución que ordena y confirma su destitución.

Observamos que los documentos aportados al proceso por parte del **I.D.A.A.N.** han identificado al señor **GONZÁLEZ** como uno de los funcionarios destituídos en base a la Ley 25 de 1990, aduciendo que, como se aprecia a fojas 2-5 del expediente, la razón por la cual se declaró la insubsistencia de su nombramiento, fue por encontrarse comprendido dentro del ámbito de aplicación del artículo 1° de la citada norma legal. Así lo señaló expresamente el Director Ejecutivo del **I.D.A.A.N.** en la Resolución No.15-91, y en el informe de conducta remitido al Tribunal, cuyos textos reproducimos a continuación:

> "Que mediante la Acción de Personal 00016 de 4 de enero de 1991 se declara insubsistente el nombramiento del señor **ARTURO GONZÁLEZ** como funcionario del INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES.
>
> Que dicha acción rige a partir del 4 de enero de 1991,
>
> Que esta destitución fue fundamentada en los artículos 1o. y 2o. de la Ley No.25 de 14 de diciembre de 1990 "Por la cual se adoptan medidas en las entidades gubernamentales tendientes a proteger la Democracia y el Orden Constitucional", y en el artículo 5o., ordinal a) del Reglamento Interno de Personal.
> ...
> Que existen suficientes elementos dentro del expediente administrativo que justifican las causales invocadas en la destitución en mención.
> ...
> El 4 de enero de 1991, mediante Acción de Personal 00016, la nueva administración del IDAAN, previa evaluación declaró insubsistente su nombramiento con cargo a los artículos 1 y 2 de la Ley 25 del 14 de diciembre de 1990; y por infringir el artículo 5o., ordinal A, del Reglamento Interno de Personal."

La Sala estima por lo anterior, que no han sido infringidos los artículos 1° y 2° de la Ley 25 de 1990, pues el señor **GONZÁLEZ** fue sobradamente identificado por las autoridades respectivas, por lo que se descartan estos dos cargos de ilegalidad.

En base a las pruebas aportadas y a los argumentos del recurrente, debemos concluir que la destitución del señor **ARTURO GONZÁLEZ**, con fundamento en la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990 no estuvo viciada de ilegalidad que pudiese llevar a esta Sala a declarar la nulidad de lo actuado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, pues del análisis íntegro del expediente y de cada una de las normas aducidas como violadas, se infiere que su actuación se verificó en apego a las normas legales y las prerrogativas que éstas confieren a la administración, en especial a lo dispuesto por la Ley 25 de 1990. Es preciso indicar que esta ley se encontraba vigente al momento de la destitución del señor **GONZÁLEZ**, aunque posteriormente quedó derogada en virtud de la expiración de su período de vigencia (hasta el 31 de diciembre de 1991), pero debe ser aplicada a este caso en razón de la ultraactividad de las leyes derogadas.

Debe resaltarse, además de las razones expresadas, que las relaciones del Estado con sus servidores son de carácter administrativo, sometidos al derecho público. El empleado no sujeto a la carrera administrativa (en la que se ingresa por concurso de mérito y no por libre nombramiento) se halla en una situación legal y reglamentaria en que su condición está señalada de antemano por la ley, pudiendo ser modificada por el Estado en cualquier momento mediante una Ley de orden público (como la Ley 25 de 1990), sin que puedan alegarse derechos adquiridos.

El señor **ARTURO GONZÁLEZ** no estaba amparado por una ley de carrera administrativa, por lo que su nombramiento estaba sometido a la libre remoción del Director Ejecutivo del **IDAAN**, y aún en el caso de que lo hubiese estado, la Ley 25 de 1990 establecía causales y procedimiento especial para proceder a la destitución de los servidores públicos cuyos actos se encuadraban en las hipótesis legales contempladas en la misma, como fue le caso del señor **González.**

En consecuencia, la sala tercera de la corte suprema, administrando justicia en nombre de la república y por autoridad de la ley, niega la pretensión formalizada mediante demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma forense villalaz y asociados contra el instituto de acueductos y alcantarillados nacionales, y por tanto declara que no es ilegal la acción de personal n°00016 de 4 de enero de 1991 expedida por dicha entidad.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LCDA. MIREYA URIBE PRADA, EN REPRESENTACIÓN DE ROSA JURADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N.22-92 DE 22 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 4, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La Lcda. Mireya Uribe Prada, actuando en representación de Rosa Jurado, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 22-92 de 22 de marzo de 1993, emitida por la Comisión de Vivienda No.4, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda con el objeto de determinar si la misma cumple con los presupuestos procesales necesarios para su admisión.

Observa quien suscribe que la demanda presentada adolece de varios defectos. En primer lugar, en la designación de las partes y sus representantes, la parte actora omite señalar al Procurador de la Administración como el funcionario a quien corresponde la defensa del acto impugnado en representación de la administración. En segundo lugar, al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, ya que en la misma no se acompaña copia del acto impugnado, ni se encuentra acreditada su notificación. La notificación del acto impugnado es un requisito de importancia exigido por la ley. Todo acto administrativo impugnado requiere no sólo su autenticación sino la constancia de la notificación del mismo, para demostrar el agotamiento de la vía gubernativa. El libelo deberá acompañarse de estas constancias pues de no ser así, la misma se encontrará deficientemente propuesta. Incluso estipula el artículo 46 de la Ley 135 de 1943 que, de encontrarse imposibilitada la parte demandante, de cumplir con lo que establece el artículo 44 de la Ley en mención, la misma podrá optar por enunciar las oficinas donde se encuentra ubicado el original para que sea el Magistrado Sustanciador quien los solicite previamente a la admisión de la demanda.

En tercer lugar, el Magistrado Sustanciador observa que la demanda no cumple con el requisito previsto en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 que requiere que en aquélla se exprese el concepto de la violación.

En este caso el demandante no expone las modalidades en que se ha producido la infracción, la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación. La ley exige este requisito, ya que al dar una explicación del mismo le permite al tribunal evaluar el fondo de la violación que se invoca.

Conjuntamente con la pretensión de la parte, ésta solicita, previa a la admisión de la demanda la suspensión del acto impugnado y a su vez el desglose del expediente contentivo de la demanda. La presente demanda no cumple con los requisitos exigidos para ser admitida , en relación con esto el Magistrado Sustanciador considera que esta solicitud sólo es procedente, por razones de economía procesal, cuando la demanda cumple los requisitos necesarios para su admisibilidad, de lo contrario estaría efectuándose un trámite preliminar sin objeto. Como la presente demanda adolece lo los defectos que se han señalado anteriormente, no es procedente acceder a la solicitud formulada por la parte demandante.

Por todo lo anteriormente expuesto lo procedente, es pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la Lcda. Mireya Uribe Prada, actuando en representación de Rosa Jurado, para que se declare nula por ilegal , la Resolución No.22-92 de marzo de 1993, emitida por la Comisión de Vivienda No. 4.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO MIGUEL GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AUGUSTO FÁBREGA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO DE LA SOLICITUD PRESENTADA EL 14 DE DICIEMBRE DE 1990, ANTE EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Miguel González** en representación de **AUGUSTO FÁBREGA**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por

ilegal, la negativa tácita por silencio administrativo de la solicitud presentada el 14 diciembre de 1990, ante el Ministerio de Salud, y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente sostiene su pretensión, esgrimiendo básicamente que al ser declarado su poderdante insubsistente, del Hospital Santo Tomás desde el 1° junio de 1990, Centro Médico en el cual se había desempeñado durante 20 años, tenía derecho a 4 meses de vacaciones vencidas, resueltas y no pagadas por parte de la citada institución gubernamental; hecho éste que desde su perspectiva conculca los derechos del doctor **AUGUSTO FÁBREGA**; solicitando por ende a este Tribunal Colegiado, su reparación conforme a la ley.

Al contestar el traslado, el señor Procurador de la Administración se opuso a las peticiones del actor, indicando que el Ministerio de Salud reconoció su deuda para con el Doctor **DÍAZ** alegando su imposibilidad de cumplir con el mismo, dada la carencia de la correspondiente partida presupuestaria que respalde esta erogación de dinero y además, el supuesto hecho que el doctor **FÁBREGA** ya había disfrutado del derecho que invoca transgredido.

Efectivamente, observa la Sala, que en el informe de conducta que rindiera el Ministro de Salud en lo concerniente a esta controversia, se destaca la disponibilidad de esta institución gubernamental, de saldar las vacaciones de fondos de pagar al exfuncionario del Hospital Santo Tomás pero que sin embargo, ello no se ha llevado a cabo debido a que no han estado incluidas estas partidas en el Presupuesto General del Estado.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso entran a resolver, el fondo de este negocio.

Considera el demandante que el silencio administrativo impetrado de ilegal, infringe el artículo 796 del Código Administrativo que estatuye lo siguiente:

> "Artículo 796: Todo empleado público nacional, provincial, o municipal, así como también el obrero que trabaje en obras públicas, y en general todo servidor público aunque no sea nombrado por Decreto, tiene derecho, después de once meses continuados de servicio, a treinta días de descanso con sueldo, siempre que durante aquel tiempo, no haya tenido arriba de treinta días de licencia por enfermedad o por cualquier otra causa.
>
> El empleado público, nacional, provincial o municipal que después de once meses continuados de servicio fuere separado de su puesto, por renuncia o remoción, sin haber hecho uso del mes de descanso a que se refiere este artículo, tendrá derecho a que se le reconozca y pague el mes de sueldo que corresponda al descanso, siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo.
>
> PARÁGRAFO: Esta (sic) vacaciones son obligatorias para todos los empleados públicos de que trata esta Ley y el Estado está obligado a concedérselas. Son acumulables las vacaciones correspondientes a dos años."

En atención a lo expuesto, es evidente dos situaciones:

1. El Ministerio de Salud aceptó categóricamente el derecho del doctor **AUGUSTO FÁBREGA**, pero no de los 4 meses señalados por el mismo, sino más bien de tres meses y medio como se desprende del peritaje llevado a cabo el 21 de octubre del presente año legible a foja 40 del negocio bajo estudio.

2. El Ministerio de Salud no hizo efectivos los pagos adeudados en conceptos de vacaciones al actor, debido a que dichas partidas no constaban en el Presupuesto General del Estado como en su oportunidad les informó la Contraloría General de la Nación.

Dado los anteriores motivos, apreciamos que el Ministerio de Salud como ente rector económico y administrativo del Hospital Santo Tomás, adolece de responsabilidad en la falta de cancelación de los tres meses y medio de vacaciones a los cuales tiene derecho el impugnante, ya que ello obedeció a razones ajenas a su voluntad, debido a que toda erogación monetaria que lleve a cabo el Estado, requiere estar previamente establecida en la ley de Presupuesto General del Estado, o de lo contrario, no solamente no habría la partida para tal pago, sino que el efectuarlo sería indebido, prohibido e ilegal, puesto que la ley expresamente no lo autorizaría.

En este mismo sentido se pronunció la Sala Tercera en las sentencias de 9 de marzo de 1993, 13 de mayo de 1991 y 29 de junio de 1993.

En virtud de lo antes expuesto, no procede el cargo de ilegalidad.

En consecuencia, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN las pretensiones del actor, formalizadas mediante acción de plena jurisdicción y DECLARAN QUE NO ES ILEGAL la negativa tácita por silencio administrativo del Ministro de Salud en lo concerniente al pago al Doctor AUGUSTO FÁBREGA, de los tres meses y medio de vacaciones a que solamente tenía derecho al declararse insubsistente su nombramiento.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GASPARINO FUENTES TROESCHT, EN REPRESENTACIÓN DE ISRAEL DE GRACIA CABALLERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACTO CONTENIDO EN LA RESOLUCIÓN NO. 1-89 S/F EMITIDO POR EL CONSEJO NACIONAL DE MEDICINA VETERINARIA, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Gasparino Fuentes Troestcht, actuando en nombre y representación de ISRAEL DE GRACIA CABALLERO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 1-89 sin fecha, emitada por el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria, y para que se haga otras declaraciones.

Mediante al acto administrativo originario impugnado se negó al demandante "la autorización para que se le otorgue la idoneidad para el ejercicio de la Medicina Veterinaria en todo el territorio Nacional".

Mediante la resolución de 5 de agosto de 1993, la Magistrada Sustanciadora, con fundamento en el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, ordenó que por la secretaría de esta Sala se solicitara al Consejo Nacional de Medicina Veterinaria que certificara si, el 24 de marzo de 1993, el apoderado del demandante presentó recurso de reconsideración contra el acto originario impugnado, y si había recaído alguna decisión sobre dicho recurso. Asimismo, solicitó que se expidiera y enviara a la Sala copia autenticada del acto originario impugnado.

En contestación al anterior requerimiento, el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria remitió copia autenticada del acto administrativo impugnado y de otros documentos relacionados con la solicitud de idoneidad presentada ante ese Consejo. Entre estos documentos está la nota fechada el 31 de mayo de 1989, remitida por el señor Israel De Gracia Caballero al Presidente del Consejo Nacional de Medicina Veterinaria, en la cual manifiesta que conoce la Resolución No. 1-89 y solicita que se realice un exhaustivo análisis de su caso. Esta nota surtió los efectos de una notificación personal de la Resolución 1-89, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 1007 del Código Judicial.

Como el señor De Gracia Caballero promovió su recurso de reconsideración el 24 de marzo de 1993 (fs. 4 vta.), fuera del término de los cinco (5) días siguientes a la fecha de la notificación personal que señala el artículo 21 de la Ley 33 de 1946, el acto administrativo impugnado quedó ejecutoriado en junio de 1989, sin que se agotara la vía gubernativa y por tanto, contra el mismo no procede por la vía contencioso administrativa.

En vista de que no se agotó oportunamente la vía gubernativa, y aún cuando se hubiere agotado la presente demanda fue promovida extemporáneamente, la Magistrada Sustanciadora considera que no debe dársele curso, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que suscribe, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el Licenciado Gasparino Fuentes Troestch, en representación de Israel De Gracia Caballero, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 1-89 dictada por el Consejo Nacional de Medicina Veterinaria.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. MARCELINO JAÉN, EN REPRESENTACIÓN DE SUSANA RICHA DE TORRIJOS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN Nº 58-93 DE 12 DE MARZO DE 1993, EMITIDA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIEZ (10) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha solicitado que se revoque el auto dictado por el Magistrado Sustanciador el 27 de septiembre de 1993 mediante el cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Marcelino Jaén Morán, actuando en representación de la señora SUSANA RICHA DE TORRIJOS contra el Contralor de la República.

El Procurador de la Administración manifiesta, para fundamentar su petición, que la demanda bajo estudio ha sido enderezada en contra de la Resolución N° 58-93 de 12 de marzo de 1993, proferida por el Contralor General de la República, la cual ordena a la Dirección General de Auditoría de la Contraloría General de la República la elaboración de un informe de antecedentes que contenga la investigación relacionada con un supuesto doble pago de salarios recibidos por la doctora Susana Richa de Torrijos durante el período comprendido del 1° de julio de 1985 al 31 de enero de 1988, que se califica de ilegal; se ordena al Director General del Registro Público poner fuera del comercio cualquier bien inmueble o derecho inscrito a nombre de la doctora Richa de Torrijos o de sociedades donde participe como directora, dignataria o apoderada general; ordena oficiar a los bancos y entidades financieras para comunicar la orden de congelación de fondos o valores depositados a nombre de ella, a título personal o a nombre de personas jurídicas o de terceras personas en donde mantenga firma registrada o en donde titule la calidad de apoderada general de las mismas; ordena oficiar a los Tesoreros Municipales que pongan fuera del comercio y a orden de la Contraloría los vehículos registrados a su nombre. A juicio del Procurador de la Administración, estos actos no son recurribles en la vía contencioso administrativa ya que no causan estado, condición sine qua non para ocurrir en demanda ante esta Sala según lo dispone el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificada por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946. Agrega el Procurador que los actos impugnados son de carácter preparatorio, puesto que integran el procedimiento anterior a la resolución. Son simple presupuesto de la decisión en que se concreta la función administrativa, constituyen una garantía de acierto de la decisión final, es decir, preparan la resolución administrativa. Además, señala dicho funcionario, los actos que se acusan de ilegales apenas marcan el inicio de un procedimiento tendiente a establecer o determinar la responsabilidad patrimonial de la profesora Susana Richa de Torrijos, por el hecho de recibir emolumentos de dos entidades del Estado al mismo tiempo. Al respecto, indica el Procurador, ya la Sala Tercera se ha pronunciado en casos similares que las resoluciones de reparos emitidas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial tienen el carácter de actos preparatorios y por ende no son susceptibles de impugnación en la vía contencioso administrativa.

El Lcdo. Jaén se opone al criterio del Procurador de la Administración ya que a su juicio los precedentes jurisprudenciales que cita el apelante no son aplicables al presente caso porque los actos impugnados en este proceso no fueron proferidos por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial, sino por el titular, representante legal y máxima autoridad de la Contraloría General de la República. Por otro lado, señala, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, son susceptibles de impugnación en la vía contencioso administrativa los actos que hayan agotado la vía gubernativa. Y esa misma norma define lo que debe entenderse por tal, esto es, cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 33, 38, 39 y 41 o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas, o de providencias de trámite, si éstas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación. De lo anterior, se colige, agrega el Lcdo. Jaén, que cualquier acto administrativo o resolución que le ponga término a un proceso administrativo, sea por razones de fondo o por razones de forma, contra el cual no sea viable ningún recurso ordinario en vía gubernativa, es impugnable ante la jurisdicción contencioso administrativa. Finalmente, si la resolución primaria fue recurrida en reconsideración, recurso este que fue decidido mediante Resolución N° 157-93 de 12 de marzo de 1993, con lo cual se agotó la vía gubernativa, la misma es recurrible ante la Sala Contencioso Administrativa.

Estima el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) que no le asiste la razón al recurrente ya que la resolución impugnada es un acto administrativo recurrible en la vía contencioso administrativa, máxime cuando contra la misma se interpusieron los recursos correspondientes para agotar la vía gubernativa. Por otro lado, si bien es cierto que la Sala ha sostenido el criterio de que las resoluciones de reparos emitidas por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial tienen el carácter de actos preparatorios y por ende, no son susceptibles de impugnación en la vía contencioso administrativa, también es cierto que en el presente negocio la resolución impugnada no fue emitida por la Dirección de Responsabilidad Patrimonial en desarrollo del procedimiento establecido en el Decreto de Gabinete N° 36 de 10 de febrero de 1990 (por el cual se crea la D.R.P. y se adopta su procedimiento) como lo alega el Procurador de la Administración, sino que fue expedida por la Contraloría General de la República, lo cual apoya la tesis de la parte actora, en el sentido de que se trata, pues, de un acto administrativo impugnable ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema. Por otro lado, cabe destacar el fallo expedido por la Corte Suprema de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado Raúl Trujillo, el 17 de marzo de 1993, mediante la cual no se admite el recurso de amparo de garantías constitucionales propuesto por la firma forense Asesores Jurídicos Asociados, en nombre y representación de la señora Elideni del Barrio vda. de Serrano o Elideni del Barrio Guerra, contra la orden de hacer dictada por el señor Contralor General de la República, consistente en ordenar el aseguramiento físico de los bienes muebles e inmuebles pertenecientes al exlegislador Martín Serrano. La acción de amparo no fue admitida por cuanto, señaló el Pleno, se trataba de un acto que se enmarcaba dentro de un aspecto netamente legal que debía ser resuelto en al vía administrativa. En el presente negocio, también se ordena por parte de la Contraloría General de la República, poner fuera del comercio cualquier bien inmueble o derecho inscrito por la demandante en el Registro Público, cualesquiera vehículos que existan registrados a nombre de la demandante e igualmente la congelación de fondos, valores, depósitos a plazo fijo o cajillas de seguridad que posea en Bancos y Asociaciones de Ahorro y Préstamos de la localidad. De ningún modo puede una resolución que decrete tales medidas ser irrecurrible ante esta Sala por cuanto, si la misma no es susceptible de la acción de amparo y tampoco de recurrir ante la vía contencioso administrativa, se situaría al demandante en un evidente estado de indefensión.

De todo lo anteriormente expuesto el resto de los Magistrados que integran la Sala consideran que en este caso le asiste la razón al apoderado judicial de la parte actora por lo que lo procedente es, pues, confirmar el auto apelado.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA) DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el auto expedido el 27 de septiembre de 1993 mediante el cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el Licenciado Marcelino Jaén en representación de la señora Susana Richa de Torrijos en contra del Contralor General de la República.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA ALFARO, FERRER, RAMÍREZ Y ALEMÁN, EN REPRESENTACIÓN DE UNIROYAL, INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 187 DE 16 DE OCTUBRE DE 1992, DICTADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La sociedad UNIROYAL, INC. ha presentado, por intermedio de la firma Alfaro, Ferrer, Ramírez y Alemán, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción contra la Dirección General de Comercio Interior.

En la demanda, que está dirigida contra la Resolución No. 187 de 16 de octubre de 1992, dictada por la Dirección General de Comercio Interior, se pide a la Sala suspender provisionalmente los efectos del acto impugnado en virtud del cual se niega la demanda de oposición No. 1318 al registro de la marca PRO-KEDS y se ordena que se continúe con el trámite de registro de la marca PRO-KEDS, solicitado por la sociedad INDUSTRIA DE MERCADEO, S. A.

La parte actora en la demanda de oposición antes mencionada considera que se ve perjudicada por el acto administrativo impugnado en este proceso, por cuanto esta última alega que, de no decretarse la suspensión solicitada, el Ministerio de Comercio e Industrias procederá a registrar en favor de la sociedad panameña Industria de Mercadeo, S. A. la marca de fábrica nacional PRO-KEDS, circunstancia que perjudicaría de modo inminente, grave y fatal los intereses de las propietarias de las marcas KEDS y PRO-KEDS, las sociedades SR Holdings Inc. y Uniroyal Inc. Por otro lado, agrega la demandante, si se inscribe la marca PRO-KEDS a favor de la sociedad Industria de Mercadeo, S. A. y en consecuencia se desconocen los derechos que surgen del registro de la marca PRO-KEDS Y KEDS en la República de Panamá, se podría alegar el absurdo de que el término PRO, constituye un verdadero elemento distintivo y caracterizante lo cual promovería la presentación de solicitudes de marcas, inclusive aquéllas ya registradas, a las que con el propósito de crearles una supuesta diferencia se les agregaría el término PRO. Esto a su vez, tendría un efecto inmediato y perjudicaría el ambiente de estabilidad de las políticas gubernamentales que rigen la economía nacional, que afecta no sólo a los comerciantes sino al público consumidor. Aunado a lo anterior, señala el demandante, mientras se tramita la presente demanda contenciosa administrativa, las sociedades SR Holdings Inc. y Uniroyal Inc., propietarias de las marcas de fábrica KEDS Y PRO-KEDS, no tendrán forma legal de evitar que el Ministerio inscriba la marca PRO-KEDS a nombre de la sociedad Industria de Mercadeo, S. A., lo cual como ya hemos mencionado en el literal anterior tendrá un efecto notoriamente perjudicial e inmediato en nuestras representadas. Por último, señala la parte actora, de proceder el Ministerio de Comercio e Industrias a dar cumplimiento a la resolución impugnada, se inscribirá a favor de la sociedad Industria de Mercadeo, S. A., la marca de fábrica nacional PRO-KEDS, la cual es idéntica a la marca PRO-KEDS de la sociedad Uniroyal Inc. y extremadamente similar y parecida a la marca KEDS de la sociedad SR Holdings Inc., con lo cual no sólo se causará un perjuicio irreparable a dichas sociedades, sino que introducirá una grave situación de desconcierto en el comercio nacional al transmitirse al público consumidor panameño una idea erróneo acerca de quienes están autorizados para usar la marca KEDS y PRO-KEDS en la República de Panamá, y sobre el verdadero origen o procedencia de los productos con dichas marcas.

Considera la Sala que le asiste la razón a la sociedad Uniroyal, Inc. en cuanto a que el acto impugnado puede causarle perjuicios de difícil reparación. Ello es así porque de no accederse a la petición de suspensión mientras se decide la presente demanda contencioso administrativa, la sociedad demandante no tendría forma legal alguna de evitar que el Ministerio de Comercio e industria inscriba la marca PRO-KEDS a favor de la sociedad panameña Industria de Mercadeo, S. A., situación esta que, a juicio de la Sala, constituye un potencial perjuicio notoriamente grave y de difícil reparación para la empresa demandante y, por ello, la petición se ajusta a lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSPENDE

PROVISIONALMENTE los efectos de la Resolución No. 187 de 16 de octubre de 1992 expedida por la Dirección General de Comercio Interior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR ASCANIO MORALES GUERRERO, EN REPRESENTACIÓN DE MARIO LÓPEZ AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.005 S/F, EMITIDA POR EL MINISTERIO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la providencia de 18 de junio de 1993 que admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **ASCANIO MORALES GUERRERO** en representación de **MARIO LÓPEZ AVILA** para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 005 de 30 de marzo de 1991, por medio de la cual se destituye al demandante como funcionario del Sistema Nacional de Erradicación de la Malaria (S.N.E.M.) y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente sustentó su alzada señalando que la demanda Contencioso Administrativa interpuesta por la parte actora adolece de varios defectos:

1° El libelo ha sido interpuesto de manera extemporánea, pues contra la Resolución N°005 de 30 de marzo de 1991, se presentó el 3 de abril de 1992 Recurso de Reconsideración y el demandante ocurrió ante esta Sala el 28 de mayo de 1993.

2° El actor designó erróneamente las partes del proceso, puesto que indica en calidad de demandante al licenciado **ASCANIO MORALES G.** y como parte demandada al Ministerio de Salud.

3° La falta de transcripción por parte del actor de las disposiciones que estimaba conculcadas y el concepto de la infracción.

Del Recurso de Apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso al mismo, aduciendo que la Resolución N°005 de 30 de marzo de 1991 fue formalmente notificada en el mes de abril de 1992, interponiendo los recursos judiciales en tiempo oportuno, por lo que el Procurador de la Administración no puede argumentar que la demanda Contencioso Administrativa fue extemporánea.

Considera el demandante que precisó en forma clara y contundente las disposiciones legales violadas por parte del Ministerio de Salud, descritas en forma detallada en el libelo de la demanda.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver la presente controversia.

Estima este Tribunal ad-quem que la razón le asiste al Procurador de la Administración en el sentido que la demanda Contencioso Administrativo a que se refiere este proceso, no fue presentada en tiempo oportuno.

Cabe señalar que en este caso en particular, se había producido el silencio administrativo, toda vez que desde que se anuncia la alzada el 3 de abril de 1992, la administración tenía dos meses de plazo para que se pronunciara en relación al recurso propuesto y una vez expirado este plazo de dos meses, se configuraba una negativa tácita, por ende se producía el silencio administrativo, agotándose así la vía gubernativa, lo que permitía acceder, en el plazo de los dos meses siguientes a la instancia Contencioso Administrativa.

Siguiendo este orden de ideas, para el día 3 de junio de 1992 se producía el silencio administrativo y el actor tenía un plazo perentorio hasta el día 3 de agosto de 1992 para acudir ante la Sala Tercera (artículo 27 de la Ley 33 de 1946). No fue sino hasta el día 28 de mayo de 1993, es decir, después de haber transcurrido un plazo en exceso al de la prescripción de 9 meses y 25 días, cuando el actor concurre ante este Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Es esto, por sí solo, causa para la inadmisibilidad de la demanda.

Además resulta igualmente atinado lo que sostiene el Procurador de la Administración cuando expresa:

> "En tercer lugar, el Licenciado **ASCANIO MORALES G.**, designa erróneamente a las partes del presente negocio, pues como parte demandante se señala a sí mismo, cuando tal calidad corresponde realmente al señor **MARIO LÓPEZ AVILA.** Por esta misma razón, omite expresar su condición de apoderado judicial del actor. De igual modo, enuncia como demandado al Ministerio de Salud, lo cual

resulta incorrecto ya que tratándose de una Resolución emitida por el señor Ministro de Salud, es obvio que éste es el funcionario demandado".

Como se observa, el actor no cumple con uno de los requisitos necesarios que debe contener toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa, que es la correcta designación de las partes y sus representantes, tal como lo establece el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1946.

Aprecia este Tribunal de Apelaciones que el demandante en la expresión de las disposiciones que estima violadas, no transcribe el texto de las mismas, no explica en forma diáfana el concepto de la violación y no enuncia a cuál de las motivos de ilegalidad señalados en el artículo 26 de la Ley 133 de 1943 y modificado por la Ley 33 de 1946, se ajusta a la disposición que estima infringida y su concepto, pues dicho precepto no ha sido concretamente individualizado.

Esta Corporación de Justicia se ha pronunciado en numerosas ocasiones en el sentido que la omisión de alguno de los requisitos contenidos en el artículo 43 de la Ley 133 de 1943, modificado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946, por ser de obligatorio cumplimiento, impiden la admisión de la demanda.

Es menester acotar dos circunstancias adicionales a las analizadas y que coadyuvan a la imposibilidad de admitir el libelo incoado por el recurrente, toda vez que el mismo es inadecuadamente dirigido a los Magistrados de la Sala Tercera en conjunto, cuando la misma debió ser anunciada a la Sala de lo Contencioso Administrativo, a través de su Magistrado Presidente, como lo establece el artículo 102 del Código Judicial; de igual forma no acompaña el documento contentivo del acto acusado, ni ha comprobado fehacientemente que haya realizado las diligencias necesarias para su obtención, contraviniendo con este proceder lo preceptuado en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943 y el 46 del mismo texto legal.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 18 de junio de 1993, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado ASCANIO MORALES G. en representación de MARIO LÓPEZ AVILA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE GERMÁN GÁLVEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00010 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Villalaz y Asociados ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de **GERMÁN GÁLVEZ**, para que se declare nulos, por ilegales, la Acción de Personal No. 00010 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda, se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración por el término de Ley; y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 57 de 7 de febrero de 1992 (fs. 28-47), se opuso a las pretensiones del recurrente; y el funcionario demandado rindió el informe solicitado, por medio de su Nota No. 2141-DE de 13 de noviembre de 1991, visible de fojas 26 a 27 del expediente.

El demandante estima que el acto acusado infringe las siguientes disposiciones: el artículo 29 de la Ley 135 de 1943; el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, pero el texto del artículo que cita corresponde al artículo 4 del Reglamento Interno de Personal del IDAAN; el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961; el artículo 5, literal A del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, por la cual se reforma la Ley 135 de 1943; y los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Evacuados los trámites establecidos en la Ley, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

El recurrente considera que el acto administrativo impugnado viola el artículo 29 de la ley 135 de 1943, en forma directa, ya que los actos y actuaciones administrativos se enmarcan dentro de la teoría de la estricta legalidad, y la actuación del funcionario público que no se ciña a este principio, podrá ser atacada por ilegal.

El señor Procurador de la Administración considera, con relación a este cargo, que el demandante se ha limitado a señalar que la disposición ha sido directamente infringida, sin entrar a explicar en qué consistió la infracción, lo que no se ajusta a lo preceptuado en los artículos 16 y 28 numeral 4 de la Ley 33 de 1946.

La Sala estima que no se ha producido la alegada violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, debido a que si bien el acto atacado (fs. 1) no fue notificado personalmente al interesado, ni en el mismo se indica los recursos que por la vía gubernativa proceden, ni el término dentro del cual deben interponerse, esta omisión fue subsanada por el demandante, quien ocurrió oportunamente a la vía gubernativa interponiendo formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la acción de personal, produciéndose con ello la notificación a la que hace referencia el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, y agotó todos los medios de impugnación que la ley le concede contra el acto administrativo impugnado. Por tanto, debe desestimarse este cargo de ilegalidad que se le endilga al acto administrativo impugnado.

El actor también considera infringido el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, sin embargo el texto que cita en la demanda y el concepto de la infracción que expone, corresponde al artículo 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N. Señala que esta norma se violó, ya que el acto impugnado no señaló la causal en la que se basó la Administración para emitirlo. También considera que se ha violado el artículo 5 literal a) de dicho Reglamento por indebida aplicación, ya que si su mandante incurrió en inasistencia, falta de puntualidad o no realizó sus deberes, la falta que se debía imponer era de amonestación verbal, escrita o sanción de descuento de tres días, pero no la de destitución.

Sobre estos dos cargos de ilegalidad el agente del Ministerio Público indicó, en esencia, que el actor yerra en sus apreciaciones porque en el caso del artículo 4, ciertamente se exige que para que se remueva un funcionario debe expresarse la justa causa prevista en la Ley o en el reglamento de la institución, y en el caso que nos ocupa ha mediado causal legal ya que en la misma acción de personal demandada, se expone que la declaratoria de insubsistencia del cargo se da con fundamento, entre otros, en los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. Esta Ley de orden público estableció como causal de destitución la participación de los funcionarios públicos en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaran contra la democracia y el orden constitucional en Panamá, y estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1991.

Con relación al artículo 5, literal A del referido reglamento, el señor Procurador señala que la mención de dicha norma en el acto de destitución, no es más que un fundamento legal adicional, pero de menor jerarquía que la Ley formal, lo que indica que la medida que se adoptó en contra del trabajador está fundamentada en una norma interna de la institución y en lo dispuesto en la Ley 25 de 1990, de aplicación general para los empleados del sector público.

En cuanto a la alegada violación de las normas del Reglamento Interno del IDAAN, la Sala considera que el señor GÁLVEZ, quien ocupaba la posición de MECÁNICO DE EQUIPO PESADO en el IDAAN, según consta en la propia acción de personal, no estaba amparado por los beneficios de una Carrera Administrativa, que le garantizara estabilidad en su posición.

La carrera administrativa en Panamá fue regulada mediante Ley No. 11 de 1955, en la que se estableció un régimen de estabilidad para los empleados públicos. Posteriormente, se desarrolló mediante la Ley No. 4 de 13 de enero de 1961, sobre administración de personal en el sector público. Después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, el régimen de estabilidad de la referida Ley 4, fue suspendido mediante el Decreto de Gabinete No. 137 de 30 de mayo de 1969, que la reformó sustancialmente.

También el Decreto Ejecutivo No. 116 de 10 de octubre de 1984, por el cual se desarrollaba y reglamentaba la estabilidad de los servidores públicos, fue derogado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989, por ser incompatible con lo establecido en el último párrafo del artículo 300 de la Constitución Política.

De lo expuesto se infiere que en Panamá no existe ley que desarrolle el régimen de estabilidad de los servidores públicos, como lo dispone la Constitución Nacional. De allí que toda norma de inferior jerarquía a la ley, por ejemplo, un reglamento, que otorgue estabilidad a un funcionario público sería contrario a lo dispuesto en los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional, los cuales reservan a la ley el desarrollo de la carrera administrativa. Además, como lo señala la acción de personal, el funcionario demandado y el Procurador de la Administración, la destitución ordenada se llevó a cabo porque el funcionario incurrió en la causal de despido prevista en la Ley 25 de 1990, que tiene mayor jerarquía que el Reglamento invocado.

Por tanto, el Reglamento Interno del Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.) no puede aplicarse de conformidad con el artículo 15 del Código Civil, el cual preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes. De consiguiente, la Sala considera que no son aplicables, y por tanto, no han sido violados los artículos 4 y 5 literal A del Reglamento Interno del Personal del I.D.A.A.N.

En el libelo de la demanda el actor indica que también se ha violado el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, Orgánica del IDAAN.

El señor Procurador de la Administración, sobre la violación de esta norma opinó, que no son ciertas las alegaciones del demandante, pues la misma ley 98 de 1961 faculta al Director Ejecutivo para remover a los empleados del IDAAN.

La Sala estima que con fundamento en el propio artículo que se considera violado el Director Ejecutivo del IDAAN está facultado para remover discrecionalmente a los empleados subalternos del IDAAN, debido a que, como hemos expuesto, no existe una carrera administrativa que garantice el régimen de estabilidad de los servidores del IDAAN. Además, como lo señaló esta Sala al analizar los cargos de violación al reglamento de la institución, el funcionario demandado estaba autorizado para expedir esa clase de actos, por la Ley 25 de 1990. Por tanto, debe recharse ese cargo.

El recurrente alega que el acto administrativo atacado de ilegal, infringe de manera directa, los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946 que reforma la Ley 135 de 1943, porque mediante los recursos que agotan la vía gubernativa se persigue la aclaración del acto impugnado y las resoluciones dictadas al decidir estas impugnaciones "no han presentado aclaración de ningún tipo".

El representante del Ministerio Público expuso, sobre esta violación, que la norma transcrita enuncia los objetos de los recursos gubernativos desde el punto de vista del recurrente. Por su parte el artículo 22, no hace otra cosa que señalar los supuestos en que se considera agotada la vía gubernativa y puede entonces recurrirse ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso en estudio el funcionario administrativo resolvió el recurso, mientras no se había hecho uso de la vía contencioso administrativa, y por tanto la resolución fue emitida dentro de los parámetros legales y no puede calificarse de innecesaria, sino que es prueba fehaciente de la voluntad de la Administración de dar respuesta a los medios de impugnación y peticiones que ante ella se formulan. (fs. 38-42)

Esta Superioridad considera no le asiste la razón al recurrente debido a que la administración al resolver los recursos de reconsideración y de apelación citó las normas legales que señalaban las causales por las cuales se declaró insubsistente el nombramiento del señor GERMÁN GÁLVEZ.

En cuanto a la alegación del demandante, de que el recurso de apelación en subsidio fue fallado extemporáneamente, tenemos que el artículo 22 de la Ley 33 de 1946 establece, entre otros supuestos, que se considerará agotada la vía gubernativa cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la ley 33 de 1946 (reconsideración o apelación) se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos. Esta norma otorga al que recurre en la vía gubernativa contra un acto administrativo, la potestad de invocar el silencio administrativo para que se considere agotada la vía y poder ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa., si el recurso interpuesto no se resuelve en el término de 2 meses. Esta figura jurídica denominada silencio administrativo tiene como fin que el interesado no sea afectado por la demora de la administración en resolver los recursos interpuestos; pero si la administración no resuelve los recursos interpuestos dentro del plazo de dos (2) meses no está impedida para resolverlos después, y las resoluciones que dicte la administración fuera de ese plazo no son extemporáneas.

Por lo expuesto estima la Sala que no se ha producido la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946.

Finalmente, el demandante señala que se violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 1990, ya que en dicha ley "se establece una investigación sumaria" para identificar a "los que supuestamente se enmarcan dentro de esa Ley". Sin embargo, esto no ha sido así, ya que las pruebas que sirven de base para la decisión no constituyen plena prueba, y por tanto, el acto administrativo emitido está enmarcado de subjetivismo.

A este respecto, el señor Procurador de la Administración reitera que en este caso se aplicó la Ley 25 de 1990, y que desde antes de entrar en vigencia esta Ley, los funcionarios públicos no gozaban de carrera administrativa, por lo que el funcionario demandado estaba facultado para destituir discrecionalmente.

A juicio de la Sala, esta Ley requiere para que se emita la orden de destitución, que se identifique previamente a los que participaron en la organización, llamado o ejecución de las acciones del 4 y 5 de diciembre de 1990, que atentaron contra la democracia y el orden constitucional, y en este caso, de la lectura de los actos administrativos se desprende el señalamiento de que el demandante incurrió en los hechos a los que se refiere la Ley 25 de 1990.

Además, no debe perderse de vista que el demandante era un servidor público que no estaba amparado por los beneficios de una carrera administrativa, por lo que el funcionario demandando tenía facultad discrecional para decretar la insubsistencia de su nombramiento. Por tanto, debe rechazarse el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Acción de Personal No. 00010 de 4 de enero de 1991, emitida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y NIEGA las otras declaraciones pedidas por el demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MELÉNDEZ CRUZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CYNTHIA GRAHAM DE SAMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO. 2 DE 3 DE ENERO DE 1992, EMITIDO POR EL TRIBUNAL ELECTORAL DE LA REPÚBLICA DE PANAMÁ, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Tomás Cruz, representante judicial de CINTHIA GRAHAM DE SAMPSON, en el proceso contencioso administrativa de plena jurisdicción promovido para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 2 de 3 de enero de 1992, emitido por el Tribunal Electoral de la República de Panamá, el acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones, ha presentado y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 22 de octubre de 1992, mediante la cual el Magistrado Sustanciador, entre otros asuntos, resuelve no admitir como prueba el certificado médico visible a foja 42, expedido por el doctor Rafael Chung M., por ser un documento privado sin su debido reconocimiento (artículo 843 del Código Judicial).

En la sustentación de su recurso, la apelante manifiesta que el artículo 843 ordinal 3 establece que todo documento privado que sea presentado dentro de un proceso "tendrá la calidad de documento auténtico, sino hubiere sido tachado y objetado" (fs. 91). Agrega que el documento aportado no fue tachado ni objetado por el Procurador de la Administración, -quien representa los intereses del Estado,- cuando se le dio traslado de las pruebas, y por tanto el mismo debe ser analizado conforme las reglas de la sana crítica. Solicita además que, en ejercicio del artículo 782 del Código Judicial, sea admitida la prueba con la finalidad de buscar la verdad material del presente proceso administrativo.

En el caso que nos ocupa la recurrente alega que el certificado médico que aporta al proceso debe ser admitido como prueba, con fundamento en el artículo 843 ordinal 3 del Código Judicial, que establece que un documento privado es auténtico, si habiéndose aportado al proceso, no hubiere sido tachado u objetado en los términos del artículo 848 ibidem.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, la norma que invoca el apelante no es aplicable a la prueba aportada y no admitida en el proceso, ya que dicho ordinal se refiere a documentos privados que hubieren obrado en el proceso con conocimiento de la parte que lo firmó, sus causahabientes o su apoderado, de conformidad con el artículo 848 ibidem que preceptúa en su primer inciso, que un documento privado se tendrá por reconocido en esos casos, si la firma no hubiere sido negada dentro del término del traslado del escrito con el cual fue presentado.

En el presente caso, se trata de un certificado médico expedido y firmado por el doctor Rafael Chung M. quien es un tercero en el proceso, por lo que deben cumplirse las formalidades exigidas por el artículo 858 del Código Judicial referentes a los documentos privados emanados de terceros. De acuerdo con esta norma, **los documentos emanados de terceros serán estimados por el Juez, salvo que se disponga otra cosa**, "cuando sean de naturaleza dispositiva, si son reconocidos por sus autores u ordenado tener por reconocidos; y ... cuando sean de carácter testimonial, si su contenido se ha ratificado en el proceso, mediante las formalidades establecidas para la prueba de testigos".

Ninguna de estas formalidades ha sido cumplida en autos, ni la demandante solicitó en tiempo oportuno la evacuación de dichos trámites, por lo que debe rechazarse los cargos hechos al auto apelado.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución del 22 de octubre de 1993 dictada por el Magistrado Sustanciador dentro de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma Meléndez-Cruz y Asociados, en representación de CYNTHIA GRAHAM DE SIMPSON, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal No. 2 de 3 de enero de 1992, emitido por el Tribunal Electoral de la República de Panamá, acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO LUIS F. MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE OCTAVIO E. RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 155 DE 17 DE SEPTIEMBRE DE 1991, EXPEDIDO POR CONDUCTO DEL MINISTRO

DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Luis F. Muñoz ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de OCTAVIO E. RODRÍGUEZ, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal No. 155 de 17 de septiembre de 1991, expedido por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante el cual se declara insubsistente el nombramiento de OCTAVIO RODRÍGUEZ.

Acogida la demanda se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la administración por el término de Ley, y se solicitó al Ministro de Hacienda y Tesoro que rindiera un informe de su actuación en el término de cinco días.

La parte actora fundamenta su demanda en los siguientes hechos:

"TERCERO: A pesar de que el señor OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ A., es funcionario de Carrera en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, se le destituyó sin un proceso previo y sin haber sido escuchado. La calidad de funcionario de Carrera de OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ A., consta en el certificado No. 687 de 28 de marzo de 1968, expedido con fundamento en los artículos 18, 19 y 38 de la Ley 4 de enero de 1961.

CUARTO: Prueba de lo ilegal del Decreto No. 155 de 17 de septiembre de 1991, es el hecho de que ni siquiera se menciona el fundamento legal de la medida allí adoptada.

QUINTO: Al señor OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ A., no se le ha formado siquiera un expediente administrativo que recoja las supuestas pruebas para su destitución.

SEXTO: La medida adoptada por el ejecutivo, hasta donde tenemos conocimiento, está motivada por unas denuncias infundadas que se han formulado contra OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ A., las que han ido adelantando el Ministerio Público y cuyos resultados están demostrando lo infundadas de las mismas.

SÉPTIMO: Prueba de lo anterior es que en un supuesto caso de extorsión que se le imputa a OCTAVIO ENRIQUE RODRÍGUEZ A., ya el Ministerio Público ordenó dejar sin efecto la suspensión del cargo que se había decretado contra Rodríguez (Oficio No. 10641 de 26 de noviembre de 1991), y mediante Vista Fiscal No. 476 de 29 de noviembre de 1991 solicitó su sobreseimiento provisional o en su defecto definitivo" (fs. 19-20).

Por su parte, el señor Ministro de Hacienda y Tesoro manifestó en el informe de conducta que el señor OCTAVIO E. RODRÍGUEZ fue destituido en varias ocasiones y el recurrente nunca hizo uso de los recursos a que tenía acceso para hacer valer su alegada condición de empleado de carrera. "La no oposición por parte del recurrente a las reiteradas destituciones de que ha sido objeto son una clara aceptación de las mismas y el último nombramiento realizado mediante Decreto No. 17 de 20 de abril de 1990, no reintegra al status de carrera. Por lo que, la falta de condición de empleado de carrera administrativa permite a este ministerio, en virtud de potestad discrecional, declarar insubsistente su nombramiento".

Agrega el funcionario demandado, que no se podía acceder a lo solicitado por OCTAVIO RODRÍGUEZ, ya que aún se mantiene la orden de suspensión del cargo que venía desempeñando el recurrente, medida impartida por el Fiscal Auxiliar de la República.

El recurrente estima violados los artículos 2160 y 2470 del Código Judicial, cuyos textos preceptúan lo siguiente:

"**Artículo 2160**. Cuando contra algún empleado exista mérito para ordenar su detención, el funcionario de instrucción o el Tribunal del conocimiento, en la misma diligencia de detención, también decretará la suspensión del ejercicio del cargo público que desempeña y la comunicará a la autoridad nominadora, salvo que la ley disponga otra cosa".

"**Artículo 2470**. Cuando el hecho, que es materia del proceso tenga señalada por la ley sanción de prisión, se decretará la detención y la consiguiente suspensión del cargo que ejerce el imputado".

El demandante expone el concepto de la violación alegando que si la destitución obedece a presuntas causas penales y la justicia ordinaria se encuentra investigándolas, es el funcionario de instrucción o el Tribunal del conocimiento a quienes correspondería, en todo caso, la suspensión de RODRÍGUEZ y no a la autoridad nominadora.

Considera la Sala, que no le asiste razón a la parte actora, toda vez que se trata de un Decreto de Personal emitido en virtud de la potestad de nombramiento y destitución discrecional de la autoridad nominadora.

El señor OCTAVIO RODRÍGUEZ como funcionario público, en el cargo de Oficial de Narcóticos III Supervisor en la sección de Narcóticos, del Ministerio de Hacienda y

Tesoro, no está amparado por el status de carrera administrativa. A él se le otorgó un Certificado de Empleado de Carrera el 26 de marzo de 1968 y tal como se ha reiterado en diversos fallos de la Corte Suprema de Justicia la Ley 4 de 13 de enero de 1961, que regulaba la Carrera Administrativa, dejó de tener eficacia al dictarse el Decreto de Gabinete 137 de 30 de mayo de 1969, el cual la derogó sustancialmente. Además, después de haber recibido el certificado de carrera administrativa, el recurrente fue destituido en 1981 y perdió ese estatus. Nuevamente fue nombrada en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, cuando ya no existía la carrera administrativa y prevalecía el sistema de nombramiento y destitución discrecional de la autoridad nominadora.

La Sala observa que el acto impugnado tiene su fundamento en la potestad discrecional de la autoridad nominadora y no en los resultados de las investigaciones seguidas a OCTAVIO RODRÍGUEZ por el Ministerio Público. Por tanto, no son aplicables y no se han violado los artículos 2160 y 2470 del Código Judicial que guardan relación con la medida de suspensión del cargo de los empleados públicos cuando exista mérito para ordenar su detención provisional por la comisión de algún delito.

En segundo lugar, el actor estima violado el artículo 1966 del Código Judicial, en el cual se consagra el derecho de libertad personal y al principio de presunción de inocencia.

Tal como se ha manifestado, la declaración de insubsistencia del cargo del señor OCTAVIO RODRÍGUEZ no constituye una medida cautelar o sanción penal, sino que se trata de un ACTO ADMINISTRATIVO, dictado por la autoridad facultada para hacerlo, por tanto, mal puede invocarse estos derechos y principios en la esfera administrativa en la cual se recurre.

Finalmente, el recurrente estima violados los artículos 18, 19, 38 y 58 de la Ley 4 de 1961; "por cuanto que dicha Ley al crear la Carrera Administrativa y regular la estabilidad de los empleados públicos, aún cuando con posterioridad se reformase o derogase subsiste dicha condición".

La Sala considera que deben desestimarse los cargos alegados por el actor, toda vez que dicha ley fue sustancialmente derogada eliminándose la Carrera Administrativa, y además porque tal como se ha expresado el estatus de carrera administrativa y la estabilidad de que gozó el recurrente la perdió al ser destituido del cargo que desempeñaba en febrero de 1981, por tanto no se han violado los artículos 18, 19, 38 y 58 de la Ley de 4 de 1961.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL el Decreto de Personal No. 155 de 17 de septiembre de 1991, expedido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante el cual se declaró insubsistente el nombramiento del señor OCTAVIO RODRÍGUEZ; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO FRANCISCO LAY, EN REPRESENTACIÓN DEL DOCTOR RODOLFO ERMOCILLA BELLIDO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA EVALUACIÓN DEL CONCURSO POR LA JEFATURA DEL SERVICIO DE PATOLOGÍA DEL HOSPITAL SANTO TOMÁS, REALIZADA ENTRE EL 13 DE SEPTIEMBRE AL 2 DE OCTUBRE DE 1990, POR LA COMISIÓN CALIFICADORA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Francisco Lay, en representación del doctor RODOLFO ERMOCILLA BELLIDO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la evaluación del concurso por la Jefatura del Servicio de Patología del Hospital Santo Tomás, realizada entre el 3 de septiembre al 2 de octubre de 1990, por la Comisión Calificadora, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

La presente demanda ha ingresado a este despacho para resolver el fondo de la controversia y la Sala estima que antes de emitir un pronunciamiento, debe dictar un auto para mejor proveer, tal como lo autoriza el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, para ampliar con fundamento en el artículo 962 del Código Judicial, la inspección judicial practicada con intervención de peritos a los archivos y oficinas de la Dirección Médica y la Subdirección de Docencia del Hospital Santo Tomás y del Departamento Legal del Ministerio de Salud, el día 3 de mayo de 1993 (fs. 108), a fin de:

a) Indicar cuántas monografías, cuántos libros y cuántas revistas fueron presentadas por el doctor Leonidas Hernández en el concurso por la Jefatura del Servicio de Patología del Hospital Santo Tomás, que se celebró del 3 de septiembre al 2 de octubre de 1990. Los señores peritos deberán hacer un listado de los trabajos.

b) Calificar, estos trabajos, indicando los puntos que a cada uno corresponde, utilizando los criterios con los cuales se calificó los trabajos del doctor Rodolfo Ermocilla. En esta diligencia deberán intervenir los mismos peritos que practicaron la inspección judicial cuya ampliación se ordena.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE que se amplíe la Inspección judicial con intervención de peritos a los archivos y oficinas de la Dirección Médica y la Subdirección de Docencia del Hospital Santo Tomás y del Departamento legal del Ministerio de Salud, diligencia legible de fojas 108 a 122, a fin de determinar en esta ocasión lo que a continuación se detalla:

a) Indicar cuántas monografías, cuántos libros y cuántas revistas fueron presentadas por el doctor Leonidas Hernández en el concurso por la Jefatura del Servicio de patología del Hospital Santo Tomás, que se celebró del 3 de septiembre al 2 de octubre de 1990. Los señores peritos deberán hacer un listado de los trabajos.

b) Calificar, estos trabajos, indicando los puntos que a cada uno corresponde, utilizando los criterios con los cuales se calificó los trabajos del doctor Rodolfo Ermocilla. En esta diligencia deberán intervenir los mismos peritos que practicaron la inspección judicial cuya ampliación se ordena.

Fundamento de derecho: artículo 62 de la Ley 135 de 1943.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE TACHA DE DOCUMENTO, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO RICAURTE GONZÁLEZ GONZÁLEZ, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 44 DE 18 DE DICIEMBRE DE 1992, EMITIDA POR EL MINISTRO DE SALUD, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CATORCE (14) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ricaurte González González, en su propio nombre ha interpuesto incidente de tacha de documento, dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, promovida en su propio nombre, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 44 de 18 de diciembre de 1992, emitida por el Ministro de Salud, mediante la cual se resuelve destituir al licenciado Ricaurte González.

El documento que se tacha en este incidente es la nota No. 2428-DMS-AL-93 de 19 de mayo de 1993, contentiva del informe de conducta que rindió el funcionario demandado.

El recurrente alega que el Ministro de Salud no es el autor del documento, que por tanto, no es auténtico y que además es un documento falso; adicionalmente, solicita un cotejo de firmas, para pruebas grafocríticas o grafotécnicas.

Mediante resolución de 11 de agosto de 1993, se corrió traslado del incidente de tacha de documento al Procurador de la Administración y a su vez, al Ministro de Salud, por el término de tres días.

El Ministro de Salud, al contestar el traslado manifestó que el profesor Germán Vega García, quien suscribe el documento tachado, es el Secretario General del Ministerio de Salud (fs. 5), y tiene facultad para actuar en representación de los titulares durante su ausencia, cuando se refiere a actos administrativos.

Por su parte el Procurador de la Administración expresó, que si bien el Ministro de Salud no fue quien suscribió el informe explicativo de conducta tachado de falso y, por tanto, no es su autor directo, en forma alguna esto significa que el documento no sea auténtico, toda vez que tal como lo señala el artículo 822 del Código Judicial "Es auténtico un documento cuando existe certeza sobre la persona que lo haya firmado, elaborado u ordenado elaborar"; y en este caso, el documento fue firmado por el Secretario General, con autorización del Ministro del Ramo. Además, el objetivo del informe de conducta es establecer los hechos que motivaron la decisión administrativa, en otras palabras, ver el punto de vista de la administración. La Sala, al valorar los argumentos expuestos por las partes, comparte el criterio del Señor Procurador y considera que el documento que se tacha, logra cumplir a cabalidad con el objetivo de dicha actuación, además de haber sido ratificado por el propio Ministro (fs. 4).

Cabe agregar que, el Ministerio de Salud, creado mediante el Decreto de Gabinete No. 1 de 15 de enero de 1969, en su artículo 6o. establece que dentro de la Dirección General de Salud, existirá una **Secretaría General** compuesta por las oficinas de: Documentación y Archivos, Biblioteca e Información Internacional. El Decreto Número 75 de 27 de febrero de 1969 que establece el Estatuto Orgánico del Ministerio de Salud y desarrolla el Decreto de Gabinete No. 1 de 1969, señala, en su artículo 37, entre las

funciones de la Secretaría General "a) atender a la recepción, clasificación, distribución, expedición y/o archivo de toda la documentación que recibe y despache el Ministerio de Salud en el nivel central".

Por tanto, la Sala considera que en virtud de las funciones asignadas a la Secretaría General, no constituye un hecho irregular, que fuese la Secretaría General quien expidiera el informe de conducta, máxime con la autorización del señor Ministro de Salud, doctor Guillermo Rolla Pimentel, funcionario responsable del acto impugnado en la demanda contenciosa.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO PROBADO el Incidente de Tacha de Documento, promovido dentro de la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción del licenciado Ricaurte González, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 44 de 18 de diciembre de 1992.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE RIVAS, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00014 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Villalaz y Asociados ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de **JORGE RIVAS**, para que se declare nula, por ilegal, la Acción de Personal No. 00014 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda, se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración por el término de Ley; y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 58 de 7 de febrero de 1992 (fs. 28-46), se opuso a las pretensiones del recurrente; y el funcionario demandado rindió el informe solicitado, por medio de su Nota No. 2358-DE de 6 de diciembre de 1991, visible de fojas 26 a 27 del expediente.

El demandante estima que el acto acusado infringe las siguientes disposiciones: el artículo 29 de la Ley 135 de 1943; el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, pero el texto del artículo que cita corresponde al 4 del Reglamento Interno de Personal del IDAAN; el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961; el artículo 5, literal A del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, por lo cual se reforma la Ley 135 de 1943; y los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Evacuados los trámites establecidos en la Ley, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

El recurrente considera que el acto administrativo impugnado viola el artículo 29 de la ley 135 de 1943, en forma directa, ya que los actos y actuaciones administrativos se enmarcan dentro de la teoría de la estricta legalidad, y la actuación del funcionario público que no se ciña a este principio, podrá ser atacada por ilegal.

El señor Procurador de la Administración considera, con relación a este cargo, que el demandante se ha limitado a señalar que la disposición ha sido directamente infringida, sin entrar a explicar en qué consistió la infracción, lo que no se ajusta a lo preceptuado en los artículos 16 y 28 numeral 4 de la Ley 33 de 1946.

La Sala estima que no se ha producido la alegada violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, debido a que si bien el acto atacado (fs. 1) no fue notificado personalmente al interesado, ni en el mismo se indica los recursos que por la vía gubernativa proceden, ni el término dentro del cual deben interponerse, esta omisión fue subsanada por el demandante, quien ocurrió oportunamente a la vía gubernativa interponiendo formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la acción de personal, produciéndose con ello la notificación a la que hace referencia el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, y agotó todos los medios de impugnación que la ley le concede contra el acto administrativo impugnado. Por tanto, debe desestimarse este cargo de ilegalidad que se le endilga al acto administrativo impugnado.

El actor también considera infringido el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, sin embargo el texto que cita en la demanda y el concepto de la infracción que expone, corresponde al artículo 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N. Señala que esta norma se violó, ya que el acto impugnado no señaló la causal en la que se basó la Administración para emitirlo. También considera que se ha violado el artículo 5 literal a) de dicho Reglamento por indebida aplicación, ya que si su mandante incurrió en inasistencia, falta de puntualidad o no realizó sus deberes, la falta que se debía imponer era de amonestación verbal o escrita o sanción de descuento de tres días, pero no la de destitución.

Sobre estos dos cargos de ilegalidad el agente del Ministerio Público indicó, en esencia, que el actor yerra en sus apreciaciones porque en el caso del artículo 4, ciertamente se exige que para que se remueva un funcionario debe expresarse la justa causa prevista en la Ley o en el reglamento de la institución, y en el caso que nos ocupa ha mediado causal legal ya que en la misma acción de personal demandada, se expone que la declaratoria de insubsistencia del cargo se da con fundamento, entre otros, en los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. Esta Ley de orden público estableció como causal de destitución la participación de los funcionarios públicos en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaran contra la democracia y el orden constitucional en Panamá, y estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1991.

Con relación al artículo 5, literal A del referido reglamento, el señor Procurador señala que la mención de dicha norma en el acto de destitución, no es más que un fundamento legal adicional, pero de menor jerarquía que la Ley formal, lo que indica que la medida que se adoptó en contra del trabajador; por un lado se encuentra justificada en una norma interna de la institución y por otro lado en lo dispuesto en la Ley 25 de 1990, de aplicación general para los empleados del sector público.

En cuanto a la alegada violación de las normas del Reglamento Interno del IDAAN, la Sala considera que el señor RIVAS, quien ocupaba la posición de chapistero en el IDAAN, según consta en la propia acción de personal, no estaba amparado por los beneficios de una Carrera Administrativa, que le garantizara estabilidad en suposición.

La carrera administrativa en Panamá fue regulada mediante Ley No. 11 de 1955, en la que se estableció un régimen de estabilidad para los empleados públicos. Posteriormente, se desarrolló mediante la Ley No. 4 de 13 de enero de 1961, sobre administración de personal en el sector público. Después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, el régimen de estabilidad de la referida Ley 4, fue suspendido mediante el Decreto de Gabinete No. 137 de 30 de mayo de 1969, que la reformó sustancialmente.

También el Decreto Ejecutivo No. 116 de 10 de octubre de 1984, por el cual se desarrollaba y reglamentaba la estabilidad de los servidores públicos, fue derogado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989, por ser incompatible con lo establecido en el último párrafo del artículo 300 de la Constitución Política.

De lo expuesto se infiere que en Panamá no existe ley que desarrolle el régimen de estabilidad de los servidores públicos, como lo dispone la Constitución Nacional. De allí que toda norma de inferior jerarquía a la ley, por ejemplo, un reglamento, que otorgue estabilidad a un funcionario público sería contrario a lo dispuesto en los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional, los cuales reservan a la ley el desarrollo de la carrera administrativa. Además, como lo señala la acción de personal, el funcionario demandado y el Procurador de la Administración, la destitución ordenada se llevó a cabo porque el funcionario incurrió en la causal de despido prevista en la Ley 25 de 1990, que tiene mayor jerarquía que el Reglamento invocado.

Por tanto, el Reglamento Interno del Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.) no puede aplicarse de conformidad con el artículo 15 del Código Civil, el cual preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes. De consiguiente, la Sala considera que no son aplicables, y por tanto, no han sido violados los artículos 4 y 5 literal A del Reglamento Interno del Personal del I.D.A.A.N.

En el libelo de la demanda el actor indica que también se ha violado el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, Orgánica del IDAAN.

El señor Procurador de la Administración, sobre la violación de esta norma opinó, que no son ciertas las alegaciones del demandante, pues la misma ley 98 de 1961 faculta al Director Ejecutivo para remover a los empleados del IDAAN.

La Sala estima que con fundamento en el propio artículo que se considera violado el Director Ejecutivo del IDAAN está facultado para remover discrecionalmente a los empleados subalternos del IDAAN, debido a que, como hemos expuesto, no existe una carrera administrativa que garantice el régimen de estabilidad de los servidores del IDAAN. Además, como lo señaló esta Sala al analizar los cargos de violación al reglamento de la institución, el funcionario demandado estaba autorizado para expedir esa clase de actos, por la Ley 25 de 1990. Por tanto, debe recharse ese cargo.

El recurrente alega que el acto administrativo atacado de ilegal, infringe de manera directa, los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946 que reforma la Ley 135 de 1943, porque mediante los recursos que agotan la vía gubernativa se persigue la aclaración del acto impugnado y las resoluciones dictadas al decidir estas impugnaciones "no han presentado aclaración de ningún tipo".

El representante del Ministerio Público expuso, sobre esta violación, que la norma transcrita enuncia los objetos de los recursos gubernativos desde el punto de vista del recurrente. Por su parte el artículo 22, no hace otra cosa que señalar los supuestos en que se considera agotada la vía gubernativa y puede entonces recurrirse ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso en estudio el funcionario administrativo resolvió el recurso, mientras no se había hecho uso de la vía contencioso administrativa, y por tanto la resolución fue emitida dentro de los parámetros legales y no puede calificarse de innecesaria, sino que es prueba fehaciente de la voluntad de la Administración de dar respuesta a los medios de impugnación y peticiones que ante ella se formulan. (fs.38-42)

Esta Superioridad considera no le asiste la razón al recurrente debido a que la administración al resolver los recursos de reconsideración y de apelación citó las normas legales que señalaban las causales por las cuales se declaró insubsistente el nombramiento del señor Jorge Rivas.

En cuanto a la alegación del demandante, de que el recurso de apelación en subsidio fue fallado extemporáneamente, tenemos que el artículo 22 de la Ley 33 de 1946 establece, entre otros supuestos, que se considerará agotada la vía gubernativa cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la ley 33 de 1946 (reconsideración o apelación) se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos. Esta norma otorga al que recurre en la vía gubernativa contra un acto administrativo, la potestad de invocar el silencio administrativo para que se considere agotada la vía y poder ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa., si el recurso interpuesto no se resuelve en el término de 2 meses. Esta figura jurídica denominada silencio administrativo tiene como fin que el interesado no sea afectado por la demora de la administración en resolver los recursos interpuestos; pero si la administración no resuelve los recursos interpuestos dentro del plazo de dos (2) meses no está impedida para resolverlos después, y las resoluciones que dicte la administración fuera de ese plazo no son extemporáneas.

Por lo expuesto estima la Sala que no se ha producido la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946.

Finalmente, el demandante señala que se violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 1990, ya que en dicha ley "se establece una investigación sumaria" para identificar a "los que supuestamente se enmarcan dentro de esa Ley". Sin embargo, esto no ha sido así, ya que las pruebas que sirven de base para la decisión no constituyen plena prueba, y por tanto, el acto administrativo emitido está enmarcado de subjetivismo.

A este respecto, el señor Procurador de la Administración reitera que en este caso se aplicó la Ley 25 de 1990, y que desde antes de entrar en vigencia esta Ley, los funcionarios públicos no gozaban de carrera administrativa, por lo que el funcionario demandado estaba facultado para destituir discrecionalmente.

A juicio de la Sala, esta Ley requiere para que se emita la orden de destitución, que se identifique previamente a los que participaron en la organización, llamado o ejecución de las acciones del 4 y 5 de diciembre de 1990, que atentaron contra la democracia y el orden constitucional, y en este caso, de la lectura de los actos administrativos se desprende el señalamiento de que el demandante incurrió en los hechos a los que se refiere la Ley 25 de 1990.

Además, no debe perderse de vista que el demandante era un servidor público que no estaba amparado por los beneficios de una carrera administrativa, por lo que el funcionario demandando tenía facultad discrecional para decretar la insubsistencia de su nombramiento. Por tanto, debe rechazarse el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Acción de Personal No. 00014 de 4 de enero de 1991, emitida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y NIEGA las otras declaraciones pedidas por el demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ALDO D'ANDREA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00007 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Villalaz y Asociados ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de **ALDO D'ANDREA**, para que se

declare nulos, por ilegales, la Acción de Personal No. 00007 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda, se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración por el término de Ley; y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 51 de 7 de febrero de 1992 (fs. 28-46), se opuso a las pretensiones del recurrente; y el funcionario demandado rindió el informe solicitado, por medio de su Nota No. 2357-DE de 6 de diciembre de 1991, visible de fojas 26 a 27 del expediente.

El demandante estima que el acto acusado infringe las siguientes disposiciones: el artículo 29 de la Ley 135 de 1943; el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, pero el texto del artículo que cita corresponde al 4 del Reglamento Interno de Personal del IDAAN; el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961; el artículo 5, literal A del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, por la cual se reforma la Ley 135 de 1943; y los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Evacuados los trámites establecidos en la Ley, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

El recurrente considera que el acto administrativo impugnado viola el artículo 29 de la ley 135 de 1943, en forma directa, ya que los actos y actuaciones administrativos se enmarcan dentro de la teoría de la estricta legalidad, y la actuación del funcionario público que no se ciña a este principio, podrá ser atacada por ilegal.

El señor Procurador de la Administración considera, con relación a este cargo, que el demandante se ha limitado a señalar que la disposición ha sido directamente infringida, sin entrar a explicar en qué consistió la infracción, lo que no se ajusta a lo preceptuado en los artículos 16 y 28 numeral 4 de la Ley 33 de 1946.

La Sala estima que no se ha producido la alegada violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, debido a que si bien el acto atacado (fs. 1) no fue notificado personalmente al interesado, ni en el mismo se indica los recursos que por la vía gubernativa proceden, ni el término dentro del cual deben interponerse, esta omisión fue subsanada por el demandante, quien ocurrió oportunamente a la vía gubernativa interponiendo formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la acción de personal, produciéndose con ello la notificación a la que hace referencia el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, y agotó todos los medios de impugnación que la ley le concede contra el acto administrativo impugnado. Por tanto, debe desestimarse este cargo de ilegalidad que se le endilga al acto administrativo impugnado.

El actor también considera infringido el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, sin embargo el texto que cita en la demanda y el concepto de la infracción que expone, corresponde al artículo 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N. Señala que esta norma se violó, ya que el acto impugnado no señaló la causal en la que se basó la Administración para emitirlo. También considera que se ha violado el artículo 5 literal a) de dicho Reglamento por indebida aplicación, ya que si su mandante incurrió en inasistencia, falta de puntualidad o no realizó sus deberes, la falta que se debía imponer era de amonestación verbal , escrita o sanción de descuento de tres días, pero no la de destitución.

Sobre estos dos cargos de ilegalidad el agente del Ministerio Público indicó, en esencia, que el actor yerra en sus apreciaciones porque en el caso del artículo 4, ciertamente se exige que para que se remueva un funcionario debe expresarse la justa causa prevista en la Ley o en el reglamento de la institución, y en el caso que nos ocupa ha mediado causal legal ya que en la misma acción de personal demandada, se expone que la declaratoria de insubsistencia del cargo se da con fundamento, entre otros, en los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. Esta Ley de orden público estableció como causal de destitución la participación de los funcionarios públicos en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaran contra la democracia y el orden constitucional en Panamá, y estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1991.

Con relación al artículo 5, literal A del referido reglamento, el señor Procurador señala que la mención de dicha norma en el acto de destitución, no es más que un fundamento legal adicional, pero de menor jerarquía que la Ley Formal, lo que indica que la medida que se adopto en contra del trabajador; está fundamentada en una norma interna de la institución y en lo dispuesto en la Ley 25 de 1990, de aplicación general para los empleados del sector público.

En cuanto a la alegada violación de las normas del Reglamento Interno del IDAAN, la Sala considera que el señor D`ANDREA, quien ocupaba la posición de oficinista I en el IDAAN, según consta en la propia acción de personal, no estaba amparado por los beneficios de una Carrera Administrativa, que le garantizara estabilidad en su posición.

La carrera administrativa en Panamá fue regulada mediante Ley No. 11 de 1955, en la que se estableció un régimen de estabilidad para los empleados públicos. Posteriormente, se desarrolló mediante la Ley No. 4 de 13 de enero de 1961, sobre administración de personal en el sector público. Después del golpe militar del 11 de

octubre de 1968, el régimen de estabilidad de la referida Ley 4, fue suspendido mediante el Decreto de Gabinete No. 137 de 30 de mayo de 1969, que la reformó sustancialmente.

También el Decreto Ejecutivo No. 116 de 10 de octubre de 1984, por el cual se desarrollaba y reglamentaba la estabilidad de los servidores públicos, fue derogado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989, por ser incompatible con lo establecido en el último párrafo del artículo 300 de la Constitución Política.

De lo expuesto se infiere que en Panamá no existe ley que desarrolle el régimen de estabilidad de los servidores públicos, como lo dispone la Constitución Nacional. De allí que toda norma de inferior jerarquía a la ley, por ejemplo, un reglamento, que otorgue estabilidad a un funcionario público sería contrario a lo dispuesto en los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional, los cuales reservan a la ley el desarrollo de la carrera administrativa. Además, como lo señala la acción de personal, el funcionario demandado y el Procurador de la Administración, la destitución ordenada se llevó a cabo porque el funcionario incurrió en la causal de despido prevista en la Ley 25 de 1990, que tiene mayor jerarquía que el Reglamento invocado.

Por tanto, el Reglamento Interno del Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.) no puede aplicarse de conformidad con el artículo 15 del Código Civil, el cual preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes. De consiguiente, la Sala considera que no son aplicables, y por tanto, no han sido violados los artículos 4 y 5 literal A del Reglamento Interno del Personal del I.D.A.A.N.

En el libelo de la demanda el actor indica que también se ha violado el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, Orgánica del IDAAN.

El señor Procurador de la Administración, sobre la violación de esta norma opinó, que no son ciertas las alegaciones del demandante, pues la misma ley 98 de 1961 faculta al Director Ejecutivo para remover a los empleados del IDAAN.

La Sala estima que con fundamento en el propio artículo que se considera violado el Director Ejecutivo del IDAAN está facultado para remover discrecionalmente a los empleados subalternos del IDAAN, debido a que, como hemos expuesto, no existe una carrera administrativa que garantice el régimen de estabilidad de los servidores del IDAAN. Además, como lo señaló esta Sala al analizar los cargos de violación al reglamento de la institución, el funcionario demandado estaba autorizado para expedir esa clase de actos, por la Ley 25 de 1990. Por tanto, debe recharse ese cargo.

El recurrente alega que el acto administrativo atacado de ilegal, infringe de manera directa, los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946 que reforma la Ley 135 de 1943, porque mediante los recursos que agotan la vía gubernativa se persigue la aclaración del acto impugnado y las resoluciones dictadas al decidir estas impugnaciones "no han presentado aclaración de ningún tipo".

El representante del Ministerio Público expuso, sobre esta violación, que la norma transcrita enuncia los objetos de los recursos gubernativos desde el punto de vista del recurrente. Por su parte el artículo 22, no hace otra cosa que señalar los supuestos en que se considera agotada la vía gubernativa y puede entonces recurrirse ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso en estudio, el funcionario administrativo resolvió el recurso mientras no se había hecho uso de la vía contencioso administrativa, y por tanto la resolución fue emitida dentro de los parámetros legales y no puede calificarse de innecesaria, sino que es prueba fehaciente de la voluntad de la administración de dar respuesta a los medios de impugnación y peticiones que ante ella se formulan. (fs.38-42)

Esta Superioridad considera no le asiste la razón al recurrente debido a que la administración al resolver los recursos de reconsideración y de apelación citó las normas legales que señalaban las causales por las cuales se declaró insubsistente el nombramiento del señor Jorge Rivas.

En cuanto a la alegación del demandante, de que el recurso de apelación en subsidio fue fallado extemporáneamente, tenemos que el artículo 22 de la Ley 33 de 1946 establece, entre otros supuestos, que se considerará agotada la vía gubernativa cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la ley 33 de 1946 (reconsideración o apelación) se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos. Esta norma otorga al que recurre en la vía gubernativa contra un acto administrativo, la potestad de invocar el silencio administrativo para que se considere agotada la vía y poder ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa., si el recurso interpuesto no se resuelve en el término de 2 meses. Esta figura jurídica denominada silencio administrativo tiene como fin que el interesado no sea afectado por la demora de la administración en resolver los recursos interpuestos; pero si la administración no resuelve los recursos interpuestos dentro del plazo de dos (2) meses no está impedida para resolverlos después, y las resoluciones que dicte la administración fuera de ese plazo no son extemporáneas.

Por lo expuesto estima la Sala que no se ha producido la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946.

Finalmente, el demandante señala que se violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 1990, ya que en dicha ley "se establece una investigación sumaria" para identificar a "los que supuestamente se enmarcan dentro de esa Ley". Sin embargo, esto no ha sido así,

ya que las pruebas que sirven de base para la decisión no constituyen plena prueba, y por tanto, el acto administrativo emitido está enmarcado de subjetivismo.

A este respecto, el señor Procurador de la Administración reitera que en este caso se aplicó la Ley 25 de 1990, y que desde antes de entrar en vigencia esta Ley, los funcionarios públicos no gozaban de carrera administrativa, por lo que el funcionario demandado estaba facultado para destituir discrecionalmente.

A juicio de la Sala, esta Ley requiere para que se emita la orden de destitución, que se identifique previamente a los que participaron en la organización, llamado o ejecución de las acciones del 4 y 5 de diciembre de 1990, que atentaron contra la democracia y el orden constitucional, y en este caso, de la lectura de los actos administrativos se desprende el señalamiento de que el demandante incurrió en los hechos a los que se refiere la Ley 25 de 1990.

Además, no debe perderse de vista que el demandante era un servidor público que no estaba amparado por los beneficios de una carrera administrativa, por lo que el funcionario demandando tenía facultad discrecional para decretar la insubsistencia de su nombramiento. Por tanto, debe rechazarse el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Acción de Personal No. 00007 de 4 de enero de 1991, emitida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y NIEGA las otras declaraciones pedidas por el demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE EUCLIDES MADRID, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 00013 DE 4 DE ENERO DE 1991, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma de abogados Villalaz y Asociados ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de EUCLIDES MADRID, para que se declare nulos, por ilegales, la Acción de Personal No. 00013 de 4 de enero de 1991, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda, se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración por el término de Ley; y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de conducta de acuerdo con lo establecido en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 55 de 7 de febrero de 1992 (fs. 28-46), se opuso a las pretensiones del recurrente; y el funcionario demandado rindió el informe solicitado, por medio de su Nota No. 2359-DE de 6 de diciembre de 1991, visible de fojas 26 a 27 del expediente.

El demandante estima que el acto acusado infringe las siguientes disposiciones: el artículo 29 de la Ley 135 de 1943; el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, pero el texto del artículo citado corresponde al 4 del Reglamento Interno de Personal del IDAAN; el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961; el artículo 5, literal A del Reglamento Interno de Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales; los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946, por lo cual se reforma la Ley 135 de 1943; y los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990.

Evacuados los trámites establecidos en la Ley, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia.

El recurrente considera que el acto administrativo impugnado viola el artículo 29 de la ley 135 de 1943, en forma directa, ya que los actos y actuaciones administrativos se enmarcan dentro de la teoría de la estricta legalidad, y la actuación del funcionario público que no se ciña a este principio, podrá ser atacada por ilegal.

El señor Procurador de la Administración considera, con relación a este cargo, que el demandante se ha limitado a señalar que la disposición ha sido directamente infringida, sin entrar a explicar en qué consistió la infracción, lo que no se ajusta a lo preceptuado en los artículos 16 y 28 numeral 4 de la Ley 33 de 1946.

La Sala estima que no se ha producido la alegada violación del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, debido a que si bien el acto atacado (fs. 1) no fue notificado personalmente al interesado, ni en el mismo se indica los recursos que por la vía gubernativa proceden, ni el término dentro del cual deben interponerse, esta omisión fue subsanada por el demandante, quien ocurrió oportunamente a la vía gubernativa interponiendo formal recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la acción de personal, produciéndose con ello la notificación a la que hace referencia el artículo 19 de la Ley 33 de 1946, y agotó todos los medios de impugnación que la ley le concede contra el acto administrativo impugnado. Por tanto, debe desestimarse este cargo de ilegalidad que se le endilga al acto administrativo impugnado.

El actor también considera infringido el artículo 4 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, sin embargo el texto que cita en la demanda y el concepto de la infracción que expone, corresponde al artículo 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N. Señala que esta norma se violó, ya que el acto impugnado no señaló la causal en la que se basó la Administración para emitirlo. También considera que se ha violado el artículo 5 literal a) de dicho Reglamento por indebida aplicación, ya que si su mandante incurrió en inasistencia, falta de puntualidad o no realizó sus deberes, la falta que se debía imponer era de amonestación verbal o escrita o sanción de descuento de tres días, pero no la de destitución.

Sobre estos dos cargos de ilegalidad el agente del Ministerio Público indicó, en esencia, que el actor yerra en sus apreciaciones porque en el caso del artículo 4, ciertamente se exige que para que se remueva un funcionario debe expresarse la justa causa prevista en la Ley o en el reglamento de la institución, y en el caso que nos ocupa ha mediado causal legal ya que en la misma acción de personal demandada, se expone que la declaratoria de insubsistencia del cargo se da con fundamento, entre otros, en los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990. Esta Ley de orden público estableció como causal de destitución la participación de los funcionarios públicos en la organización, llamado o ejecución de acciones que atentaran contra la Democracia y el Orden Constitucional en Panamá, y estuvo vigente hasta el día 31 de diciembre de 1991.

Con relación al artículo 5, literal A del referido reglamento, el señor Procurador señala que la mención de dicha norma en el acto de destitución, no es más que un fundamento legal adicional, pero de menor jerarquía que la Ley formal, lo que indica que la medida que se adoptó en contra del trabajador está fundamentada en una norma interna de la institución y en lo dispuesto en la Ley 25 de 1990, de aplicación general para los empleados del sector público.

En cuanto a la alegada violación de las normas del Reglamento Interno del IDAAN, la Sala considera que el señor MADRID, quien ocupaba la posición de tapicero en el IDAAN, según consta en la propia acción de personal, no estaba amparado por los beneficios de una Carrera Administrativa, que le garantizara estabilidad en su posición.

La carrera administrativa en Panamá fue regulada mediante Ley No. 11 de 1955, en la que se estableció un régimen de estabilidad para los empleados públicos. Posteriormente, se desarrolló mediante la Ley No. 4 de 13 de enero de 1961, sobre administración de personal en el sector público. Después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, el régimen de estabilidad de la referida Ley 4, fue suspendido mediante el Decreto de Gabinete No. 137 de 30 de mayo de 1969, que la reformó sustancialmente.

También el Decreto Ejecutivo No. 116 de 10 de octubre de 1984, por el cual se desarrollaba y reglamentaba la estabilidad de los servidores públicos, fue derogado por el artículo 3 del Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989, por ser incompatible con lo establecido en el último párrafo del artículo 300 de la Constitución Política.

De lo expuesto se infiere que en Panamá no existe ley que desarrolle el régimen de estabilidad de los servidores públicos, como lo dispone la Constitución Nacional. De allí que toda norma de inferior jerarquía a la ley, por ejemplo, un reglamento, que otorgue estabilidad a un funcionario público sería contrario a lo dispuesto en los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional, los cuales reservan a la ley el desarrollo de la carrera administrativa. Además, como lo señala la acción de personal, el funcionario demandado y el Procurador de la Administración, la destitución ordenada se llevó a cabo porque el funcionario incurrió en la causal de despido prevista en la Ley 25 de 1990, que tiene mayor jerarquía que el Reglamento invocado.

Por tanto, el Reglamento Interno del Personal del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.) no puede aplicarse de conformidad con el artículo 15 del Código Civil, el cual preceptúa que las órdenes y demás actos ejecutivos de gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria no tienen fuerza obligatoria y no deben aplicarse cuando sean contrarias a la Constitución o a las leyes. De consiguiente, la Sala considera que no son aplicables, y por tanto, no han sido violados los artículos 4 y 5 literal A del Reglamento Interno del Personal del I.D.A.A.N.

En el libelo de la demanda el actor indica que también se ha violado el artículo 18 de la Ley 98 de 29 de diciembre de 1961, Orgánica del IDAAN.

El señor Procurador de la Administración, sobre la violación de esta norma opinó, que no son ciertas las alegaciones del demandante, pues la misma ley 98 de 1961 faculta al Director Ejecutivo para remover a los empleados del IDAAN.

La Sala estima que con fundamento en el propio artículo que se considera violado el Director Ejecutivo del IDAAN está facultado para remover discrecionalmente a los empleados subalternos del IDAAN, debido a que, como hemos expuesto, no existe una carrera administrativa que garantice el régimen de estabilidad de los servidores del I.D.A.A.N.

Además, como lo señaló esta Sala al analizar los cargos de violación al reglamento de la institución, el funcionario demandado estaba autorizado para expedir esa clase de actos, por la Ley 25 de 1990. Por tanto, debe rechazarse ese cargo.

El recurrente alega que el acto administrativo atacado de ilegal, infringe de manera directa, los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 11 de septiembre de 1946 que reforma la Ley 135 de 1943, porque mediante los recursos que agotan la vía gubernativa se persigue la aclaración del acto impugnado y las resoluciones dictadas al decidir estas impugnaciones "no han presentado aclaración de ningún tipo".

El representante del Ministerio Público expuso, sobre esta violación, que la norma transcrita enuncia los objetos de los recursos gubernativos desde el punto de vista del recurrente. Por su parte el artículo 22, no hace otra cosa que señalar los supuestos en que se considera agotada la vía gubernativa y puede entonces recurrirse ante la jurisdicción contencioso administrativa. En el caso en estudio el funcionario administrativo resolvió el recurso, mientras no se había hecho uso de la vía contencioso administrativa, y por tanto la resolución fue emitida dentro de los parámetros legales y no puede calificarse de innecesaria, sino que es prueba fehaciente de la voluntad de la Administración de dar respuesta a los medios de impugnación y peticiones que ante ella se formulan. (fs. 38-42)

Esta Superioridad considera no le asiste la razón al recurrente debido a que la administración al resolver los recursos de reconsideración y de apelación citó las normas legales que señalan las causales por las cuales se declaró insubsistente el nombramiento del señor MIGUEL PRADO.

En cuanto a la alegación del demandante, de que el recurso de apelación en subsidio fue fallado extemporáneamente, tenemos que el artículo 22 de la Ley 33 de 1946 establece, entre otros supuestos, que se considerará agotada la vía gubernativa cuando interpuesto alguno o algunos de los recursos señalados en el artículo 20 de la ley 33 de 1946 (reconsideración o apelación) se entienden negados, por haber transcurrido un plazo de dos meses sin que recaiga decisión resolutoria sobre ellos. Esta norma otorga al que recurre en la vía gubernativa contra un acto administrativo, la potestad de invocar el silencio administrativo para que se considere agotada la vía y poder ocurrir a la jurisdicción contencioso administrativa, si el recurso interpuesto no se resuelve en el término de 2 meses. Esta figura jurídica denominada silencio administrativo tiene como fin que el interesado no sea afectado por la demora de la administración en resolver los recursos interpuestos; pero si la administración no resuelve los recursos dentro del plazo de dos (2) meses no está impedida para resolverlos después, y las resoluciones que dicte la administración fuera de ese plazo no son extemporáneas.

Por lo expuesto estima la Sala que no se ha producido la violación de los artículos 20 y 22 de la Ley 33 de 1946.

Finalmente, el demandante señala que se violaron los artículos 1 y 2 de la Ley 25 de 1990, ya que en dicha ley "se establece una investigación sumaria" para identificar a "los que supuestamente se enmarcan dentro de esa Ley". Sin embargo, esto no ha sido así, ya que las pruebas que sirven de base para la decisión no constituyen plena prueba, y por tanto, el acto administrativo emitido está enmarcado de subjetivismo.

A este respecto, el señor Procurador de la Administración reitera que en este caso se aplicó la Ley 25 de 1990, y que desde antes de entrar en vigencia esta Ley, los funcionarios públicos no gozaban de carrera administrativa, por lo que el funcionario demandado estaba facultado para destituir discrecionalmente.

A juicio de la Sala, esta Ley requiere para que se emita la orden de destitución, que se identifique previamente a los que participaron en la organización, llamado o ejecución de las acciones del 4 y 5 de diciembre de 1990, que atentaron contra la democracia y el orden constitucional, y en este caso, de la lectura de los actos administrativos se desprende el señalamiento de que el demandante incurrió en los hechos a los que se refiere la Ley 25 de 1990.

Además, no debe perderse de vista que el demandante era un servidor público que no estaba amparado por los beneficios de una carrera administrativa, por lo que el funcionario demandando tenía facultad discrecional para decretar la insubsistencia de su nombramiento. Por tanto, debe rechazarse el cargo.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Acción de Personal No. 00013 de 4 de enero de 1991, emitida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales y **NIEGA** las otras declaraciones pedidas por el demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA JOVANÉ, BIEBERACH & VALDÉS ROCA, EN REPRESENTACIÓN DE COMPAÑÍA PANAMEÑA DE BIENES RAÍCES, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.13-93 DE 7 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE ARRENDAMIENTOS DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN

OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma **Jované Bieberach & Valdés Roca** en representación de la **COMPAÑÍA PANAMEÑA DE BIENES RAÍCES, S.** A., para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.13-93 de 7 de mayo de 1993, emitida por la Dirección General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda mediante la cual se rechaza de plano el incidente de nulidad presentado por el demandante (dentro del proceso de alza ilegal de canon de arrendamientos) propuesto por Graciela Madrid contra Bienes Raíces N. Costarango (Nicos, S. A.) y Luis A. Yap y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda interpuesta por considerar que la misma no cumplía con los requisitos exigidos para su admisión debido a que no hay constancia que se hubiese agotado la vía gubernativa.

Por su parte el actor en la sustentación de su alzada se opone a la inadmisibilidad de la demanda incoada alegando que en este proceso en particular, el agotamiento de la vía gubernativa se presume.

El actor apoya su aseveración en el texto del artículo 42 de la Ley 135 de 1943 modificado por el artículo 25 de la Ley 33 de 1946, al estimar que la Resolución No.13-93 de 7 de mayo de 1993 no es susceptible de ninguno de los recursos señalados en la ley, es decir, es una resolución de carácter definitivo.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver la controversia planteada.

Aprecia este Tribunal ad-quem que el actor en el libelo de la acción incoada solicita que se declare nula por ilegal la Resolución No.13-93 de 7 de mayo de 1993, emitida por la Directora General de Arrendamiento. Sin embargo, como puede observarse a foja 1 del expediente en estudio, la Resolución mencionada se trata del rechazo de un incidente de nulidad presentado por el actor dentro de un proceso administrativo, en que no se apeló la decisión de primera instancia.

Esta Sala ha reiterado en diversas ocasiones que para acudir ante este tribunal de lo Contencioso Administrativo, la demanda debe tratarse de la ilegalidad de actos administrativos individuales, personales y que afecten derechos subjetivos y sólo puede ejercerse dentro de los dos meses siguientes de la notificación o ejecución del acto, además que es requisito indispensable agotar la vía gubernativa.

En el caso que nos ocupa, la Resolución demandada de ilegal, resolvió un incidente de nulidad propuesto dentro de un proceso administrativo, lo que no implica que se haya agotado la vía gubernativa, y sí consta que la decisión de primera instancia no fue apelada, ya que el incidente de nulidad se presentó cuando la decisión de primera instancia estaba ejecutoriada.

Aunado a lo anterior, es menester acotar que este tribunal de apelaciones ha detectado que el libelo presentado adolece de otros defectos, además de los señalados por el tribunal a-quo.

Cabe mencionar, que aunque el acto acusado de ilegal fuese un acto administrativo, la demanda Contenciosa Administrativa de Plena Jurisdicción fue extemporánea, toda vez que el artículo 42b de la Ley 135 de 1946 establece que la acción de Plena Jurisdicción prescribe al cabo de dos meses, a partir de la notificación, publicación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda.

Aprecia este tribunal que el recurrente cita como disposiciones violadas los artículos 22, 32 y 44 de la Constitución Nacional. Sobre este particular parece ser que el recurrente en el libelo de la demanda confunde el objeto de la Demanda de Plena Jurisdicción con el Recurso de Inconstitucionalidad. Según lo dispuesto en el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, reformada por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, el objeto de la acción de Plena Jurisdicción es la protección de los derechos subjetivos y puede proponerse contra actos administrativos individuales, personales, que lesionen dicho derecho. La demanda de Inconstitucionalidad se propone contra actos contrarios a la Constitución por cualquier norma de rango inferior a la misma; esto significa que la Sala Tercera carece de competencia para ventilar dicha demanda, sino que corresponde privativamente al Pleno de la Corte Suprema quien ejerce el control de la constitucionalidad.

Como se observa también, el actor en el libelo de la demanda designa como parte demandada al Director General de Arrendamientos del Ministerio de Vivienda o al propio Ministro de Vivienda, tal como se aprecia a foja 16 del expediente.

> "Como demandado deberá tenerse al Director General de Arrendamientos del Ministerio de la Vivienda, o al propio Ministro de Vivienda, quienes a su vez deberán ser representados judicialmente por el Procurador General de la Nación, Licenciado Jorge Ramón Valdés, cuyas oficinas están localizadas en el edificio sede de la Procuraduría General de la Nación, localizado en Ave. Perú y calle Ecuador, o bien por el Sr. Procurador de la Administración Lcdo. Donatilo Ballesteros, cuyas oficinas están ubicadas en el edificio

donde funcionan las dependencias del Ministerio Público, ubicadas en Ave. Perú y calle Ecuador, ambos de la ciudad de Panamá."

La Sala Tercera ha manifestado en diversas ocasiones la importancia de la designación de las partes en los procesos contencioso-administrativos. En el caso bajo estudio, este tribunal ha podido percatarse que el recurrente designó erróneamente las partes y sus representantes. No puede designarse a dos funcionarios indistintamente como parte demandada; se designa al funcionario que emitió el acto acusado de ilegal, por tanto en este negocio sería la Directora General de Arrendamientos y no el Ministro de Vivienda.

En todo procedimiento administrativo siempre una de las partes es una entidad estatal representada por el Procurador de la Administración, de acuerdo a lo establecido en el artículo 37 de la Ley 33 de 1946 y el artículo 348 numeral 2 del Código Judicial, por tanto, el Procurador General de la Nación en los procesos Contencioso Administrativos, no tiene ningún tipo de participación.

Ambos Procuradores intervienen indistintamente en los Recursos de Inconstitucionalidad, según lo preceptuado en el artículo 2554 del Código Judicial, que dice:

"ARTICULO 2554. Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, la consulta o una objeción de inexequibilidad, la Corte dará traslado del asunto, por turno, al Procurador General de la Nación o al Procurador de la Administración para que emita concepto, dentro de un término no mayor de diez (10) días, contados a partir del recibo del expediente."(el subrayado es nuestro)

Para finalizar, este tribunal estima que el actor ha presentado el libelo de la demanda incoada en forma desordenada, además que la misma ha sido dirigida inadecuadamente a los Magistrados de la Sala Tercera en conjunto, cuando la misma debió ser anunciada a la Sala de lo Contencioso Administrativo a través de su Magistrado Presidente, como lo establece el artículo 102 del Código Judicial.

Por todas las consideraciones anteriores, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN el auto de 20 de octubre de 1993, que decidió NO ADMITIR la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma forense Jované Bieberach & Valdés Roca, en representación de COMPAÑÍA PANAMEÑA DE BIENES RAÍCES, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ENRIQUE MON PINZÓN, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO CALDERÓN PALOMINO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.220-PH-39 DE 19 DE FEBRERO DE 1992, DICTADA POR EL ADMINISTRADOR REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE HERRERA, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Lcdo. **Enrique Mon Pinzón**, en representación de **ERNESTO CALDERÓN PALOMINO**, para que se declare nula por ilegal la Resolución No.220-PH-39 de 19 de febrero de 1992 emitida por el Administrador Regional de Ingresos de la Provincia de Herrera, mediante la cual se expide una liquidación adicional en su contra en concepto de impuesto sobre la renta, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador decidió no admitir la demanda instaurada por el Lcdo. **Mon**, por considerar que la misma no cumplía con uno de los presupuestos procesales previstos en la ley, al no acreditar el comprobante de haber consignado que ha pagado en calidad de depósito al Tesoro Nacional las sumas previstas en los actos administrativos, tal como lo requiere el artículo 49 de la Ley 135 de 1943.

Por su parte, el actor anunció recurso de apelación contra el auto de 17 de septiembre de 1993 que no admitió la demanda en estudio.

De inmediato se le concedió el término legal establecido, para que la parte demandante sustentara el recurso de apelación propuesto; sin embargo consta a foja 40 del expediente, que vencido el plazo para tal sustentación, no se presentó escrito alguno ante este Tribunal.

Como se trata de un recurso de apelación contra un auto, lo pertinente es declarar desierta la alzada, tal como establece el artículo 1122 del Código Judicial cuando señala:

"Artículo 1122: ...

Si el apelante no sustentare su recurso y se tratare de providencia o auto apelado, el Juez lo declarará desierto, con imposición de costas. ...".

En consecuencia el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN DESIERTO el recurso de apelación interpuesto por el Lcdo. Enrique Mon Pinzón, en representación de ERNESTO CALDERÓN PALOMINO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE TAYDE ARIADNA GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL NO.159 DE 21 DE MAYO DE 1993, EXPEDIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la providencia de 21 de octubre de 1993 que admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **GENARINO ROSAS**, en representación de **TAYDEE ARIADNA GORDÓN LÓPEZ**, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal N°159 de 21 de mayo de 1993, expedido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación, mediante el cual se ordena la destitución de la demandante, y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente en la sustentación de su alzada se opone a la admisión de la demanda incoada por considerar que la misma adolece de serias deficiencias de carácter formal que la hacen inadmisible.

Estima el Procurador de la Administración que el demandante no cumple con lo establecido en el artículo 28 ordinal 4 de la Ley 33 de 1946 que se refiere a la expresión de las disposiciones que se estiman infringidas y al concepto de la violación, al no establecer la forma en que la norma ha sido conculcada, pues el actor sólo menciona que el artículo 127 de la Ley 47 de 1946 fue violado en concepto de infracción literal del precepto legal, pero no específica cuál ha sido la infracción literal alegada.

Añade además, que el actor cita de manera global los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946, sin explicar de qué manera ha sido violado cada uno de los artículos mencionados.

Por último, señala que el recurrente confunde el status actual al momento de la destitución de su representada, pues sostiene que la misma es personal docente y no hace alusión que a partir del 2 de enero de 1990 fue nombrada como Asistente Administrativo II en el Despacho Superior.

Del Recurso de Apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso al mismo aduciendo que los motivos de ilegalidad de los actos administrativo son cuatro: infracción literal de los preceptos legales, falta de competencia o de jurisdicción, quebrantamiento de las formalidades y desviación de poder.

El actor estima que "al citar el concepto de la violación, el recurrente debe expresar en cuál de esos cuatro motivos de ilegalidad incurre el acto administrativo".

Añade también que "La infracción literal del precepto legal es una sola, y no se divide en lo administrativo en comisión y omisión, tal y como sí se exige en la casación civil. Por lo tanto, este argumento es traído por los cabellos y no basta por sí para impugnar el auto administrativo".

Con relación al último argumento esgrimido por el Procurador de la Administración, el demandante señala que el artículo 113 de la Ley 47 de 1946, en su acápite a, preceptúa que una vez que un educador adquiere el status de docente, no lo pierde por su traslado o ascenso a una función administrativa dentro del Ministerio de Educación.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la controversia planteada.

Estima este Tribunal de Apelaciones que el actor en el libelo incoado cumple con las formalidades exigidas por el artículo 43 numeral 4 de la Ley 135 de 1943, puesto que no sólo menciona la causal de la ilegalidad, que es la infracción literal del precepto legal, sino que indica que la misma se produjo en forma directa.

Se aprecia también que el demandante indica como disposiciones violadas los textos de los artículos 129, 130, 131 y 132 de la Ley 47 de 1946 y que los mismos son infringidos por el Decreto de Personal N°159 de 21 de mayo de 1993, por el motivo de quebrantamiento

de las formalidades que deben cumplirse, por tanto, disentimos de la opinión emitida por el Procurador de la Administración.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la providencia de 21 de octubre de 1993 que ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado GENARINO ROSAS ROSAS, en representación de TAYDEE ARIADNA GORDÓN LÓPEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ANÍBAL HERRERA PEÑA, EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL RESUELTO NO.DP-37-93 DE 31 DE MARZO DE 1993, DICTADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA PLANTA ESTATAL DE CEMENTO BAYANO, OTROS ACTOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la providencia de 11 de agosto de 1993 que admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado **ANÍBAL HERRERA PEÑA**, en representación de **VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ**, para que se declare nulo por ilegal, el Resuelto N°DP-37-93 de 31 de marzo de 1993, dictado por el Director General de la Planta Estatal de Cemento Bayano, por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento del demandante; y para que se declare nula por ilegal la Resolución No.DGR-01-93 de 15 de marzo de 1993, dictada por el Director General de Cemento Bayano y la Ministra de Planificación y Política Económica, y para que se hagan otras declaraciones.

El recurrente en la sustentación de su alzada se opone a la admisión de la demanda alegando que "En su petitorio el demandante solicita que se declaren nulos por ilegales dos actos administrativos y se restablezcan los respectivos derechos violados; siendo estos actos diferentes e independientes uno del otro e impugnables a través de acciones contencioso administrativas por su propia naturaleza, excluyente una de la otra".

> Añade además que:
> "La anterior petición que formula el demandante no puede ser objeto de una Acción de Plena Jurisdicción, ya que los actos creadores de situaciones generales, impersonales y objetivas deben ser demandados mediante el ejercicio de una Acción de Nulidad. Es pertinente volver a insistir en el hecho de que a través del contencioso de anulación, como también se le conoce a la acción pública de nulidad, la Ley le otorga a todos los ciudadanos sin excepción, el derecho de anular un acto contrario a ella. Con esta acción no se puede pretender el reconocimiento de situaciones jurídicas individualizadas, sino meramente su anulación.
> ...
> Por demás está decir que estas peticiones son incongruentes y excluyentes una de otra y no permiten entender con claridad cuál es la aspiración del demandante, si su reintegro o la concesión de su retiro voluntario".

Del Recurso de Apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso al mismo aduciendo "De manera que es evidente que en este proceso estamos atacando en esa dirección una resolución que si bien no especifica con nombre propio a mi representado, al relacionarla con las otras pruebas, se obtiene que ese es el propósito de esa resolución cuya nulidad se pide".

Considera el demandante que al no haber objeción del Procurador de la Administración de la Resolución que destituye al actor de su nombramiento, debe entenderse admisible la demanda.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera entran a resolver la controversia planteada.

Estima este Tribunal ad-quem que le asiste la razón al Procurador de la Administración, en el sentido que la Resolución N° DP-37-93 de 31 de marzo de 1993 y la Resolución N°DGR-01-93 de 15 de marzo de 1993, son de dos actos administrativos distintos, impugnables a través de acciones contencioso administrativas independientes.

El Resuelto N°DGR-01-93 de 15 de marzo de 1993, que revoca las resoluciones que admiten las renuncias para acogerse al programa de retiro voluntario, es un acto administrativo independiente y acusable por la vía Contencioso Administrativa ya sea a través del Recurso de Plena Jurisdicción pues lesiona los derechos subjetivos de quienes solicitaron el retiro voluntario o a través del Recurso de Nulidad pues, origina situaciones de carácter general.

Por otro lado, la Resolución N°DP-37-93 de 31 de marzo de 1993 mediante la cual se decreta la insubsistencia del nombramiento como Jefe de Mantenimiento de Equipo Industrial de Cemento Bayano, del señor **VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ**, es otro acto administrativo diferente, independiente, personal, acusable ante lo Contencioso Administrativo, una vez agotada la vía gubernativa, a través del Recurso de Plena Jurisdicción.

Con relación a lo anotado por el Procurador de la Administración, cuando expresa que la petición formulada por el demandante referente a la Resolución No.DGR-01-93 de 15 de marzo de 1993, que revocó las Resoluciones que admiten las renuncias para acogerse al programa de retiro voluntario que no fueron debidamente firmadas por el Director General de la Institución, es objeto de una Acción de Nulidad y no de Plena Jurisdicción, discrepamos de su opinión.

En este negocio específico, la pretensión del actor puede ser objeto de cualquiera de las dos acciones contencioso administrativa. Esto es así, pues aunque el acto en cuestión es originario de situaciones generales, lesiona el derecho subjetivo del señor **VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ** y este puede pedir el restablecimiento de su derecho conculcado.

Sin embargo, la afirmación del Procurador de la Administración referente a los efectos de la Resolución No.DGR-01-93 de 15 de marzo es acertada, pues surte efecto **"erga omnes"** es decir, que cualquier persona, aunque no estuviese directamente afectado por dicha Resolución, podría acudir ante esta Sala de la Corte para solicitar la nulidad del acto a través de una Acción de Nulidad en cualquier tiempo, puesto que es una acción imprescriptible.

No obstante, la demanda bajo estudio no puede acogerse pues no cumple con el requisito de individualizar el acto administrativo acusado de ilegal, pues el actor pretende que en una sola sentencia se declare la ilegalidad de dos actos administrativo distintos e independientes.

Además es menester señalar, que el actor dirigió inadecuadamente el libelo incoado a los Magistrados de la Corte Suprema en conjunto, cuando la misma debió dirigirse a través del Magistrado Presidente de la Sala Tercera, tal como lo establece el artículo 102 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, PREVIA REVOCATORIA de la providencia de 11 de agosto de 1993, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado ANÍBAL HERRERA PEÑA en representación de VÍCTOR MANUEL BROWN GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RUBÉN ELÍAS RODRÍGUEZ AVILA, EN REPRESENTACIÓN DE NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P.A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.3122-91 DG DE 21 DE FEBRERO DE 1991, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Rubén Elías Rodríguez Avila, en representación de **NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, P.A.**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No.3122-91 DG de 21 de febrero de 1991, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social por medio de la cual se condena a la demandante a pagar a la Caja de Seguro Social, la suma de B/.11,674.08 en concepto de Cuotas Obrero - Patronal, Prima de Riesgos Profesionales y Recargos de Ley, dejados de pagar durante el período comprendido entre el mes de enero de 1985 a marzo de 1990 y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda, por considerar que la misma fue presentada de manera extemporánea, puesto que al no resolver la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social el recurso de apelación interpuesto por el actor, debía entenderse negado en virtud del silencio administrativo, contando así con un término de dos meses para recurrir ante esta Sala, lo que a juicio del tribunal a-quo, transcurrió en exceso.

Por su parte el actor en la sustentación de su alzada, se opone a la inadmisibilidad de la demanda incoada, alegando que la misma fue presentada dentro del término de los dos meses siguientes a la notificación del último acto que agotaba la vía gubernativa, que fue el 1° de abril de 1993. La copia autenticada de estos actos con sus correspondientes notificaciones, observa el recurrente, fueron presentadas con la demanda "y que desconocemos las razones por las cuales no aparecen en el expediente; a pesar de

(sic) al momento de entregar la documentación probatoria en el #4 de la Sección de pruebas se dejó claramente establecido que se acompañaban ...".

Añade el demandante que: "Este aparte recibió el tradicional "ganchito" de conformidad de recibo por el funcionario receptor y constituye evidencia clara de que se entregaron las resoluciones (plural) confirmatorias."

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver la controversia planteada.

Observa este tribunal ad-quem que cuando el Magistrado sustanciador resolvió el caso bajo estudio, todo indicaba que en virtud del silencio administrativo, el actor había presentado la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción de manera extemporánea.

Sin embargo, el recurrente indica que acompañó con el libelo de la demanda copia debidamente autenticada con los sellos de las notificaciones de las Resoluciones No.3708-92 DG del 26 de febrero de 1993, las que comprueban que se había agotado la vía gubernativa, y que por error involuntario de la Secretaría de la Sala Tercera no aparecieron en el expediente contentivo de la demanda en cuestión.

Cabe señalar que como indica el actor, al momento de recibir la Demanda Contencioso Administrativa, el funcionario indicó con una marca el punto que se refiere a la copia autenticada de los actos confirmatorios de la Resolución No.3122-91 DG de 21 de febrero de 1991 emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Si bien es cierto, esto no es una prueba contundente que efectivamente los documentos fueron recibidos y los mismos se extraviaron, hay que acotar que en los nuevos documentos aportados por el actor, la fecha de autenticación concuerda con la del documento que reposa en el expediente, lo que crea una duda razonable a favor del demandante.

Aprecia este tribunal de apelaciones, que el actor en la sustentación del Recurso de Apelación, transcribe el contenido de las Resoluciones 3708-92 DG de 26 de mayo de 1992 y la Resolución No.7705-93 JD de 26 de febrero de 1993 y transcribe también los sellos de las correspondientes notificaciones. La transcripción de estas resoluciones fueron certificadas por el Notario Público Primero del Circuito de Panamá, lo que indica que la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción fue presentada en tiempo oportuno y por tanto procede la admisión de la misma.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA del auto de 15 de julio de 1993 ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Rubén Elías Rodríguez Avila, en representación de NATIONAL UNION FIRE INSURANCE COMPANY OF PITTSBURGH, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMAL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA GEOMARA GUERRA DE JONES, EN SU PROPIO NOMBRE, PARA QUE SE DECLAREN NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.9 DE 10 DE OCTUBRE DE 1989, EMITIDA POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: LUIS CERVANTES DÍAZ. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO).

VISTOS:

En la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula por ilegal la Resolución No.9 de 10 de octubre de 1989 proferida por los fiscales del Distrito de Panamá, Giomara Guerra de Jones ha solicitado la suspensión de los efectos de la resolución impugnada mediante la cual se le destituyó del cargo de Personera Cuarta Municipal de Panamá.

El Artículo 73 de la Ley 135 de 1943 establece lo siguiente:

> "ARTICULO 73. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, sí, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

Para sustentar su solicitud solo expresa la recurrente que la resolución impugnada es "notoriamente injusta y grave", ya que ella "no ha cometido delito ni falta a la ética profesional que amerite su destitución."

Para resolver, se considera.

Conforme al Artículo 331 del Código Judicial, los Personeros Municipales son designados por el término de tres (3) años.

La recurrente había sido nombrada Personera Segunda Municipal el 18 de febrero de 1983 y el 30 de diciembre se le confirmó en dicho cargo, nombrándosele el 26 de febrero de 1987 Personera Cuarta Municipal que es el cargo cuya insubsistencia ha motivado este recurso.

Aunque los miembros del Ministerio Público no forman parte del personal administrativo del Estado, es necesario que se pruebe este tribunal estimo necesario que se pruebe el status de la peticionaria como ex Personera Municipal, para resolver su solicitud de suspensión. La Lic. Guerra de Jones fue nombrada Personera Cuarta Municipal el 26 de febrero de 1987 pero los cambios "en que estuvo involucrada esta ex-funcionaria de 1983 a 1989 conduce a concluir, con cierta certeza, que los períodos, al menos el último, no eran completos. Y como ninguna prueba se ha presentado sobre el particular no puede esta sala" suspender los efectos de una destitución que incidirían en un período que desconoce.

Esa incertidumbre se extiende a la imposibilidad de discernir si la fecha en que fue nombrada, lo fue para completar un período iniciado o para iniciarlo y ello es de trascendental importancia si se considera que este tribunal no puede tutelar los vicios que previene el Artículo 381 del Código Judicial, si es que ello pudo haber ocurrido. En suma, la falta de la prueba que se hecha de menos impide a esta Corte suspender los efectos del acto impugnado como lo solicita la recurrente, porque para ello tendría que transitar por el camino de las conjeturas y las adivinanzas, lo cual es a todas luces incorrecto.

Por lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NIEGA la solicitud de suspensión del acto demandado.

Cópiese y Notifíquese.

(fdo.) LUIS CERVANTES DÍAZ

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ALBERTO MARTÍNEZ EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO MARTÍNEZ GARCÍA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO. 0042-90 DE 4 DE ENERO DE 1990, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Licdo. Alberto Martínez García ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el Director General de la Caja de Seguro Social. En la demanda se pide a la Sala que decrete que es nula la destitución del demandante y que ordene su reintegro a la posición que ocupaba en la Caja de Seguro Social, y que condene a ésta al pago de los salarios causados desde la fecha de su destitución.

El acto administrativo impugnado es la Resolución No. 0042-90 de 4 de enero de 1990, dictada por el funcionario demandado.

El Director General Encargado de la Caja de Seguro Social, profesor Héctor Peñalba, rindió informe de conducta mediante nota de 19 de junio de 1990, en la cual expresa que las razones para la destitución del demandante fueron varias, a saber: 1. Que el Licdo. Alberto Martínez García no se presentó a cumplir con las funciones de asesor legal ante la Dirección del Depto. de Asesoría Legal desde el 30 de agosto de 1989 hasta el 4 de enero de 1990, ya que era allí donde debía prestar servicios en razón de las funciones que le fueron asignadas mediante la Resolución No. 2833-89 de 30 de agosto de 1989, suscrita por el Director General de la institución. 2. La conducta del citado abogado también se enmarca en los artículos 1,2 y 6 del Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989, que autoriza a tomar medidas disciplinarias en relación con "aquellos elementos adictos al régimen castrense que se dedicaron al ultraje, intimidación, amenazas o cualquier otro tipo de falta o delito en perjuicio de sus compañeros de trabajo, de la ciudadanía en general o del patrimonio del Estado" (a foja 25).

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista No. 598 de 21 de noviembre de 1991. En dicho documento el Procurador se opone a la pretensión y considera que la destitución del Licdo. Martínez se fundamenta en el artículo 47, literal e, del Reglamento Interno de Personal, en el artículo 4 del Decreto -Ley No.2 de 1989 y en el Decreto de Gabinete No.1 de 1989.

La parte demandante considera que se ha violado el artículo 28-A del Decreto- Ley No. 14 de 1954, vigente al momento de la destitución, porque el demandante estaba cubierto por la estabilidad en el cargo por tener más de 15 años de servicios en la Caja de Seguro Social. Asimismo, considera violados los artículos 1, 7 y 47 literal e del Reglamento Interno de Personal de la Caja de Seguro Social.

El demandante pretende probar que durante el tiempo en que se le acusa de haber abandonado el empleo, se encontraba efectivamente prestando servicios, pero las pruebas por él presentadas no desvirtúan la presunción de legitimidad del acto administrativo por

él impugnado. Así, por ejemplo, los documentos que aparecen de fojas 41 a 53 son fotocopias que no se encuentran autenticadas. Tampoco puede aceptar la Sala una serie de fotocopias de notas como las de 8 de enero de 1990, que aparece a foja 62, y la de 12 de enero de 1990, que aparece de fojas 69 a 73, porque tampoco son documentos autenticados, por una parte, y porque, curiosamente, esta última que pretende ser una opinión detallada, está fechada el mismo día en que al demandante le fue notificada la destitución. Igual comentario se puede hacer con respecto a la nota suscrita por el demandante el 13 de febrero de 1990, visible a foja 79, y en la que adjunta un documento de trabajo, y utiliza papel membrete de la Caja de Seguro Social un mes después de haber sido destituido de la misma.

Es evidente, por otra parte, que los testimonios de José Denis y de Everardo Young Núñez presentados por el demandante son testimonios sospechosos porque ambos fueron destituídos también de la Caja de Seguro Social por la actual administración de la misma.

Si la Resolución No. 2833-89 de 30 de agosto de 1989 le asignó funciones al demandante éste, motu propio, no podía prestarlas en sitio distinto.

Por último, es evidente que no se aprecia que en la destitución del abogado Alberto Martínez haya existido desviación de poder ya que la motivación expresada en el informe de conducta revela que el funcionario demandado no actuó con fines distintos a los de persecución del interés público.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que no es ilegal la Resolución No. 0042-90 de 4 de enero de 1990, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ALEMÁN, CORDERO, GALINDO Y LEE, EN REPRESENTACIÓN DE CITIBANK,N. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. FECI N°1-90 DE 9 DE AGOSTO DE 1990, DICTADA POR LA COMISIÓN BANCARIA NACIONAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El CITIBANK, N.A ha promovido, por intermedio de sus apoderados judiciales especiales, la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee, proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra la Comisión Bancaria Nacional.

En la demanda se pide a la Sala que declare que son nulas la Resolución FECI 1-90 de 9 de agosto de 1990 y la Resolución FECI # 6-90 de 8 de noviembre de 1990, dictadas por la parte demandada, y además que se declare que la parte demandada esta obligada a reembolsar o compensar al CITIBANK,N.A., la suma de doscientos ocho mil veintisiete balboas con noventa y cuatro centésimos (B/.208,027.94), en concepto de intereses sobre préstamos hipotecarios concedidos al sector agropecuario a una tasa de interés preferencial.

El Procurador de la Administración contestó la demanda mediante la Vista 299 de 1 de julio de 1991, en la cual se opone a los pretensiones de la parte demandante.

Posteriormente esta Sala elevó consulta de constitucionalidad al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en resolución de 12 de agosto de 1992 y el pleno la resolvió en sentencia de 14 de mayo de 1993, mediante la cual declaró que son inconstitucionales el artículo 9 de la Ley 20 de 1980 reformado por el artículo 3 de la Ley 36 de 1984 y la Resolución 13-85 de 12 de abril de 1985, expedido por la Comisión Bancaria Nacional, por ser violatorios del numeral 14 del artículo 179 de la Constitución Nacional.

En realidad la parte demandada denegó la solicitud de reembolso o compensación de intereses pedida por la parte demandada porque expiró el plazo de sesenta días para presentarla previsto en el artículo 22 de la Resolución 13-85 de 12 de abril de 1985.

Es evidente que esta Sala no puede aplicar el artículo 22 de la Resolución 13-85 de 12 de abril de 1985 en este proceso, porque dicha resolución fue declarada inconstitucional mediante sentencia de la Corte Suprema de Justicia de 14 de mayo de 1993. La citada norma reglamentaria, por haber sido declarada inconstitucional carece de ultractividad a partir del 14 de mayo de 1993 y no puede ser aplicada en este caso.

De lo anterior se colige que la Sala debe acceder a la pretensión de la parte demandante, ya que las resoluciones impugnadas carecen de fundamento legal al haber sido declarada inconstitucional la norma reglamentaria en la cual se apoyaban.

En consecuencia la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que

son nulas la Resolución FECI 1-90 de 9 de agosto de 1990 y la Resolución FECI # 6-90 de 8 de noviembre de 1990 expedidas por la Comisión Bancaria Nacional, e igualmente DECLARA que ésta se encuentra obligada a reembolsar o compensar al CITIBANK, N. A., la cantidad de doscientos ocho mil veintisiete balboas con noventa y cuatro centésimos (B/.208,027.94) en concepto de intereses sobre préstamos hipotecarios otorgados por el CITIBANK, N. A., al sector agropecuario a la tasa de interés preferencial correspondiente a los meses de noviembre y diciembre de 1988, enero y febrero de 1989, y los solicitados mediante nota de 10 de octubre de 1989.

Notifíquese,

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA BENEDETTI Y BENEDETTI, EN REPRESENTACIÓN DE CALVIN KLEIN INDUSTRIES INC., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN, N°157 DE 21 DE OCTUBRE DE 1991, DICTADA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La firma de abogados Meléndez-Cruz y Asociados, ha presentado advertencia de inconstitucionalidad sobre el Decreto Ejecutivo N°28 de 1974 (Cfr. 308 y ss.). La advertencia ha sido presentada dentro del proceso contencioso administrativo promovido por la firma de abogados Benedetti y Benedetti, en representación de Calvin Klein Industries Inc., para que se declare nula por ilegal la Resolución N°157 de 21 de octubre de 1991, dictada por el Ministro de Comercio e industrias.

Como el artículo 2549 del Código Judicial exige que, una vez presentada la advertencia, el funcionario judicial que conoce del proceso, sin más trámite, eleve la Consulta al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Sala Procede de Conformidad con dicha norma.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONSULTA, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N°28 de 1974.

Copiese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS VILLAMONTE, EN REPRESENTACIÓN DE ORNILDA JIMÉNEZ PITTÍ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.0045-90 DE 1 DE ENERO DE 1990, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el Lcdo. **LUIS VILLAMONTE**, en representación de **ORNILDA JIMÉNEZ PITTÍ**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 0045-90 de 29 de diciembre de 1989, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social, a través del cual, se destituye de su cargo a la demandante y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda por considerar que la misma no cumple con el requisito establecido en el artículo 44 de la Ley 135 de 1943, en el sentido que la notificación del acto impugnado no estaba debidamente acreditada.

Añade además, que el actor no aportó la copia del recurso de reconsideración, por lo que no existe constancia alguna del agotamiento de la vía gubernativa, incumpliendo así con otro requisito de importancia exigido por la ley.

Por su parte, el actor en la sustentación de su alzada, alega que "somos del criterio que el recurso se interpuso siguiendo todos las formalidades de la ley, para lo cual presentamos copias debidamente autenticadas de los actos impugnados, que reposan en el expediente como pruebas No. 3, donde en su parte inferior existe el sello de

notificación de la Junta Directiva de la Caja del Seguro Social donde consta debidamente certificada la fecha de notificación del acto que impugnamos, que se dio el día 23 de agosto de 1993".

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que conforman la Sala Tercera, entran a resolver la controversia planteada.

Observa este Tribunal de apelaciones, que tal y como indica el Magistrado sustanciador, el actor no presenta con la copia del acto acusado, la constancia de la correspondiente notificación. Sin embargo, si consta a foja 3 contentiva del expediente, que la apelación de la decisión de primera instancia, fue presentada extemporáneamente, por tanto, había precluido el término legal previsto para promover este recurso en la instancia gubernativa.

Lo anterior significa que el acto administrativo impugnado quedó ejecutoriado en la vía gubernativa, por lo que la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción presentada, no puede dársele curso legal, tal como prevé el artículo 50 de la Ley 135 de 1943, reformada por el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

Aunado a lo anterior, es menester acotar que este tribunal ad-quem, ha detectado que el libelo presentado adolece de otros defectos, además de los señalados por el tribunal a-quo.

Aprecia este tribunal que el recurrente cita como disposiciones violadas los artículos 32, 70 y 295 de la Constitución Política de la República. Sobre este punto, parece que el recurrente confunde el objeto de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción con la Acción de Inconstitucionalidad.

Según lo dispuesto en el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, el objeto de la acción de Plena Jurisdicción es la protección de los derechos subjetivos y puede proponerse contra actos administrativos individuales, personales, que lesionen dicho derecho. La Acción de Inconstitucionalidad se propone contra actos contrarios a la Constitución por cualquier norma de rango inferior a la misma; por tanto, la Sala Tercera carece de competencia para ventilar dicha demanda, sino que corresponde privativamente al Pleno de la Corte Suprema, quien ejerce el control de la constitucionalidad.

Se observa también en el libelo de la demanda incoada por el **Licenciado Villamonte**, que la misma es inadecuadamente dirigida a los Magistrados de la Sala Tercera en conjunto, cuando la misma debió ser dirigida a la Sala Contencioso Administrativa, a través de su Magistrado presidente, como lo preceptúa el artículo 102 del Código Judicial.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN el Auto de 26 de octubre de 1993, expedido por el Magistrado Sustanciador que decidió NO ADMITIR la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Lcdo. Luis Villamonte, en representación de ORNILDA JIMÉNEZ PITTY.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ARIEL AMILCAR GORDÓN LÓPEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1024 DE 4 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración licenciado **DONATILO BALLESTEROS S.** ha presentado solicitud de que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **GENARINO ROSAS**, en representación de **ARIEL AMILCAR GORDÓN LÓPEZ**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N°1024 de 4 de mayo de 1993, emitida por el Ministro de Educación.

Sostiene el señor Procurador de la Administración para fundar su solicitud de impedimento:

> "Se nos ha corrido traslado de la demanda interpuesta por el **Licenciado Genarino Rosas, contra el Ministerio de Educación**, por la vía Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, y al revisar los documentos que se acompañan al libelo nos percatamos que el acto impugnado ha sido emitido teniendo como soporte opinión emitida por este Despacho en consulta que formulara el titular de la cartera educativa.
>
> Expresamos que en virtud de lo que antecede, la causal de impedimento contemplada en el Numeral 5° del Artículo 749 del Código Judicial, opera en

> este caso y por ello con nuestro habitual respeto solicitamos se reconozca este motivo y se nos separe del conocimiento en este juicio".

Es preciso reparar en el hecho de que la causal de impedimento invocada por el señor Procurador de la Administración hace referencia al supuesto de que este agente del Ministerio Público hubiese participado en el proceso o haya dictaminado por escrito con respecto a los hechos que dieron origen al proceso.

El texto legal del artículo 749 del Código Judicial en mención, es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5.- Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo.
> ...".

En el negocio subjúdice no se constata de manera fehaciente, la incidencia inmediata que tuvo la Nota N°229 de 26 de junio de 1991 en el origen del proceso que nos ocupa. En efecto, el señor Ministro de Educación sometió, mediante Nota DAL/91 de 9 de mayo de 1991 a consulta por parte del señor Procurador **DONATILO BALLESTEROS**, ciertos aspectos relativos a la aplicación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946 a los "empleados administrativos" del Ministerio de Educación.

Del contenido de la consulta elevada se colige claramente que ésta era de naturaleza genérica, y por supuesto su opinión no era vinculante de manera alguna.

Sin embargo, y a más de 2 años de absuelta la consulta del señor Ministro de Educación, éste procede a realizar ciertos movimientos de personal en su Ministerio, de manera individual y mediante actos administrativos particularizados, que afectan tanto a empleados administrativos como docentes.

Tal es el caso del señor **ARIEL GORDÓN** quien ha sido trasladado de un cargo de administrador a la Dirección Provincial de Educación de San Blas.

No encuentran quienes suscriben, que la argumentación del señor Procurador de la Administración en el sentido de que fue su opinión lo que dio origen al acto administrativo impugnado tenga asidero, dado que la Administración a través de sus diversos entes, entre ellos, el Ministerio de Educación, ha venido realizando ajustes de personal y reorganizándose estructural y administrativamente, como en el caso que nos ocupa, en que por las razones que a bien tuvo considerar (cfr. foja 2 del expediente), procedió al traslado de un funcionario determinado, y en la creación de este acto administrativo no tuvo incidencia directa la opinión vertida por el licenciado **BALLESTEROS**, quien se limitó a esbozar ciertos conceptos en relación a la estabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación, de los procedimientos de destitución, y de la posibilidad de que los Decretos de Gabinete N°1 de 1989; N°20 y N°48 de 1990 pudieran ser aplicados al momento de remover a los funcionarios de la institución. Estima la Sala por ende, que lo esgrimido por el señor Procurador de la Administración no constituye elementos convincentes ni suficientes para los propósitos del funcionario aludido, máxime cuando por disposición del artículo 348 numeral 2 del Código Judicial este funcionario está obligado a defender el acto acusado en los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción, por lo que debe negarse la solicitud de impedimento invocada.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por el señor Procurador de la Administración dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado GENARINO ROSAS en representación de ARIEL A. GORDÓN.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO, EN REPRESENTACIÓN DE MOISÉS MARRUGO ACOSTA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL DECRETO DE PERSONAL NO.348 DE 9 DE JULIO DE 1993, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración licenciado **DONATILO BALLESTEROS S.** ha presentado solicitud de que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO**, en representación de **MOISÉS MARRUGO ACOSTA**,

para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal No.348 de 9 de julio de 1993, emitido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Educación.

Sostiene el señor Procurador de la Administración para fundar su solicitud de impedimento:

> "Se nos ha corrido traslado de la demanda interpuesta por el **Licenciado Genarino Rosas, contra el Ministerio de Educación,** por la vía Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, y al revisar los documentos que se acompañan al libelo nos percatamos que el acto impugnado ha sido emitido teniendo como soporte opinión emitida por este Despacho en consulta que formulara el titular de la cartera educativa.
>
> Expresamos que en virtud de lo que antecede, la causal de impedimento contemplada en el Numeral 5° del Artículo 749 del Código Judicial, opera en este caso y por ello con nuestro habitual respeto solicitamos se reconozca este motivo y se nos separe del conocimiento en este juicio".

Es preciso reparar en el hecho de que la causal de impedimento invocada por el señor Procurador de la Administración hace referencia al supuesto de que este agente del Ministerio Público hubiese participado en el proceso o haya dictaminado por escrito con respecto a los hechos que dieron origen al proceso.

El texto legal del artículo 749 del Código Judicial en mención, es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5.- Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo.
> ...".

En el negocio subjúdice no se constata de manera fehaciente, la incidencia inmediata que tuvo la Nota N°229 de 26 de junio de 1991 en el origen del proceso que nos ocupa. En efecto, el señor Ministro de Educación sometió, mediante Nota DAL/91 de 9 de mayo de 1991 a consulta por parte del señor Procurador **DONATILO BALLESTEROS,** ciertos aspectos relativos a la aplicación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946 a los "empleados administrativos" del Ministerio de Educación.

Del contenido de la consulta elevada se colige claramente que ésta era de naturaleza genérica, y por supuesto su opinión no era vinculante de manera alguna.

Sin embargo, y a más de 2 años de absuelta la consulta del señor Ministro de Educación, éste procede a realizar ciertos movimientos de personal en su Ministerio, de manera individual y mediante actos administrativos particularizados,que afectan tanto a empleados administrativos como docentes.

Tal es el caso del señor **MOISÉS MARRUGO ACOSTA** quien ha sido trasladado del cargo de Subdirector Provincial de Educación de Bocas del Toro al de Profesor en el Instituto Profesional y Técnico El Silencio en Bocas del Toro.

No encuentran quienes suscriben, que la argumentación del señor Procurador de la Administración en el sentido de que fue su opinión lo que dio origen al acto administrativo impugnado tenga asidero, dado que la Administración a través de sus diversos entes, entre ellos, el Ministerio de Educación, ha venido realizando ajustes de personal y reorganizándose estructural y administrativamente, como en el caso que nos ocupa, en que por las razones que a bien tuvo considerar (cfr. fojas 3, 5 y 21 del expediente), procedió al traslado de un funcionario determinado, y en la creación de este acto administrativo no tuvo incidencia directa la opinión vertida por el licenciado **BALLESTEROS,** quien se limitó a esbozar ciertos conceptos en relación a la estabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación, de los procedimientos de destitución, y de la posibilidad de que los Decretos de Gabinete N°1 de 1989; N°20 y N°48 de 1990 pudieran ser aplicados al momento de remover a los funcionarios de la institución. Estima la Sala por ende, que lo esgrimido por el señor Procurador de la Administración no constituye elementos convincentes ni suficientes para los propósitos del funcionario aludido, máxime cuando por disposición del artículo 348 numeral 2 del Código Judicial este funcionario está obligado a defender el acto acusado en los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción, por lo que debe negarse la solicitud de impedimento invocada.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARAN QUE NO ES LEGAL** el impedimento manifestado por el señor Procurador de la Administración dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **CRISTÓBAL ARBOLEDA ALFARO** en representación de MOISÉS MARRUGO ACOSTA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE EIRA DEL C. CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL,EL DECRETO DE PERSONAL NO.158 DE 21 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, Y POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El señor Procurador de la Administración licenciado **DONATILO BALLESTEROS S.** ha presentado solicitud de que se le declare impedido y en consecuencia se le separe del conocimiento de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **GENARINO ROSAS**, en representación de **EIRA DEL C. CASTILLO**, para que se declare nulo por ilegal, el Decreto de Personal No.158 de 21 de mayo de 1993, emitido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Educación.

Sostiene el señor Procurador de la Administración para fundar su solicitud de impedimento:

> "Se nos ha corrido traslado de la demanda interpuesta por el **Licenciado Genarino Rosas, contra el Ministerio de Educación**, por la vía Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción, y al revisar los documentos que se acompañan al libelo nos percatamos que el acto impugnado ha sido emitido teniendo como soporte opinión emitida por este Despacho en consulta que formulara el titular de la cartera educativa.
>
> Expresamos que en virtud de lo que antecede, la causal de impedimento contemplada en el Numeral 5° del Artículo 749 del Código Judicial, opera en este caso y por ello con nuestro habitual respeto solicitamos se reconozca este motivo y se nos separe del conocimiento en este juicio".

Es preciso reparar en el hecho de que la causal de impedimento invocada por el señor Procurador de la Administración hace referencia al supuesto de que este agente del Ministerio Público hubiese participado en el proceso o haya dictaminado por escrito con respecto a los hechos que dieron origen al proceso.

El texto legal del artículo 749 del Código Judicial en mención, es del tenor siguiente:

> "ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5.- Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo.
> ...".

En el negocio subjúdice no se constata de manera fehaciente, la incidencia inmediata que tuvo la Nota N°229 de 26 de junio de 1991 en el origen del proceso que nos ocupa. En efecto, el señor Ministro de Educación sometió, mediante Nota DAL/91 de 9 de mayo de 1991 a consulta por parte del señor Procurador **DONATILO BALLESTEROS**, ciertos aspectos relativos a la aplicación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946 a los "empleados administrativos" del Ministerio de Educación.

Del contenido de la consulta elevada se colige claramente que ésta era de naturaleza genérica, y por supuesto su opinión no era vinculante de manera alguna.

Sin embargo, y a más de 2 años de absuelta la consulta del señor Ministro de Educación, éste procede a realizar ciertos movimientos de personal en su Ministerio, de manera individual y mediante actos administrativos particularizados, que afectan tanto a empleados administrativos como docentes.

Tal es el caso de la señora **EIRA DEL C. CASTILLO** quien ha sido destituida del cargo de Directora del Centro de Impresión Educativa.

No encuentran quienes suscriben, que la argumentación del señor Procurador de la Administración en el sentido de que fue su opinión lo que dio origen al acto administrativo impugnado tenga asidero, dado que la Administración a través de sus diversos entes, entre ellos, el Ministerio de Educación, ha venido realizando ajustes de personal y reorganizándose estructural y administrativamente, como en el caso que nos ocupa, en que por las razones que a bien tuvo considerar (cfr. fojas 1-3 del expediente), procedió a destituir a una funcionaria determinada, y en la creación de este acto administrativo no tuvo incidencia directa la opinión vertida por el licenciado **BALLESTEROS**, quien se limitó a esbozar ciertos conceptos en relación a la estabilidad de los funcionarios del Ministerio de Educación, de los procedimientos de destitución, y de la posibilidad de que los Decretos de Gabinete N°1 de 1989; N°20 y N°48 de 1990 pudieran ser aplicados al momento de remover a los funcionarios de la institución. Estima la Sala por ende, que lo esgrimido por el señor Procurador de la Administración no constituye elementos convincentes ni suficientes para los propósitos del funcionario aludido, máxime cuando por disposición del artículo 348 numeral 2 del Código Judicial este funcionario está obligado a defender el acto acusado en los procesos Contencioso Administrativos de Plena Jurisdicción, por lo que debe negarse la solicitud de impedimento invocada.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **DECLARAN QUE NO ES LEGAL** el impedimento manifestado por el señor Procurador de la Administración dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado **GENARINO** ROSAS en representación de EIRA DEL C. CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE LINA YOLANDA MONTEVERDE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.603-04-212-ALCN DE 31 DE JULIO DE 1992, PROFERIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CONSULAR Y NAVES DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTITRÉS (23) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Procurador General de la Administración ha interpuesto Recurso de Apelación contra la providencia de 13 de agosto de 1993, que admite la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por la firma **MORGAN Y MORGAN,** en representación de **LINA YOLANDA MONTEVERDE**, para que se declare nula por ilegal la Resolución No. 603-04-212 ALCN de 31 de julio de 1992, proferida por la Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante la cual se ordena debitar a la demandante la suma de diez mil diez (B/.10,010.00) balboas, correspondientes a la pérdida de 201 timbres de diez (B/.10.00) balboas cada uno, hecho ocurrido en el Consulado de Lugano, Suiza.

El recurrente sustentó su alzada señalando que el actor omitió solicitar el restablecimiento del derecho particular violado.

Del recurso de apelación se le corrió traslado a la parte actora, quien se opuso al mismo, aduciendo que la pretensión fundamental no persigue el reconocimiento de una prestación en favor de la demandante, sino la modificación de un acto administrativo que afecta la relación de la actora con el Fisco Nacional.

Añade además que en el libelo de la demanda se indica la prestación pretendida en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 33 de 1946.

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver la presente controversia.

Coincidimos con lo expresado por el Procurador General de la Administración, en el sentido que la demandante, **LINA YOLANDA MONTEVERDE**, se limitó a solicitar la nulidad del acto acusado de ilegal ante este Tribunal, más no el restablecimiento del derecho subjetivo lesionado.

En este sentido, este tribunal ha manifestado en innumerables ocasiones que la declaratoria de nulidad de un acto administrativo, no conlleva la reparación del derecho subjetivo per se. Es decir, la declaratoria de nulidad de un acto, no implica la restitución del derecho particular violado o la correspondiente prestación (v.gr auto de 21 de julio de 1981, de 15 de mayo de 1985, de 23 de noviembre de 1987, de 13 de septiembre de 1988, de 12 de julio de 1989, de 26 de noviembre de 1993).

La restitución del mismo, debe solicitarse tal como prevé el artículo 43a de la Ley 135 de 1943, que dice:

> "Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberán indicarse las prestaciones que se pretenden ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda. ...".

No obstante, hay que examinar cada caso en particular, con la finalidad de determinar, si para conocer de pretensiones contencioso administrativas de plena jurisdicción, es suficiente con que se solicite solamente la nulidad del acto administrativo impugnado, o si se debe solicitar el restablecimiento del derecho conculcado.

En este caso bajo estudio, la actora sólo ha solicitado que se declare la nulidad de la Resolución No.603-04-212 ALCN de 31 de julio de 1992, emitida por la Dirección General de Consular y Naves del Ministerio de Hacienda y Tesoro, sin embargo, considera este tribunal ad-quem que en caso que se diera la declaratoria de nulidad del acto impugnado, se restablecería por sí el derecho lesionado, que sería que a la demandante no se le debite la suma de B/.2,010.00

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran el resto de la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en

nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la Providencia de 13 de agosto de 1993, QUE ADMITIÓ la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la firma MORGAN Y MORGAN en representación de LINA YOLANDA MONTEVERDE.

Notifíquese,

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA ARMSTRONG, COLLAZOS Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL DEL VASTO, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO ADOPTADO POR EL COMITÉ ELECTORAL PARA LA JUNTA DIRECTIVA DEL CENTRO DE ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, FECHADO 17 DE NOVIEMBRE DE 1993, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Armstrong, Collazos y Asociados** dentro de la Demanda Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción, que propusieron en representación de **RAFAEL DEL VASTO**, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo adoptado por el Comité Electoral para la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica, fechado el 17 de noviembre de 1993, ha solicitado la previa suspensión de los efectos de la precitada resolución impugnada, armgumentando lo siguiente:

> "Basándonos en el artículo 73 de la ley 135 de 1943 solicitamos como cuestión previa la suspensión del acto atacado. Considerando que el grupo Futuro Estudiantil ganó las elecciones y que es el que actualmente ocupa el Centro de Estudiantes, lo más viable es mantenerlos al frente del Centro de Estudiantes hasta tanto se resuelva el Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción interpuesto.
>
> El daño moral cusado (sic) al estudiantado como consecuencia del desconocimiento del triunfo de Futuro Estudiantil, amerita la suspensión del acto, manteniendo la actual Junta Directiva del Centro de Estudiantes mientras esta alta Corporación decida sobre el particular.
>
> Causaría mayor trauma a la conciencia estudiantil el instalar a una nueva Junta Directiva que luego pudiese ser removida, que mantener la actual en espera de fallo de la Sala Tercera de la Corte Suprema."

Encontrándose el proceso en este estado, entramos a dilucidar la controversia sometida a nuestra consideración.

Primeramente observa el Magistrado sustanciador, que en el negocio bajo estudio se pone de relieve que el acto impetrado por el demandante, no pertenece a la categoría de acto administrativo recurrible ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo. Lo anterior se desprende de que todo acto administrativo debe proceder de una entidad estatal en ejercicio de sus facultades administrativas (no jurisdiccionales) y del ejercicio de un poder legal; ya sea que el mismo origine una situación jurídica general (reglamentos, acuerdos); una situación jurídica individual unilateral (como por ejemplo las multas); o bilateral (contratos); que confieran una situación jurídica general o status (actos condición); o que hagan constar una situación jurídica general individual o un hecho; lo cual no concurre en este proceso.

Diego Younes Moreno en su obra "Curso Elemental de Derecho Administrativo", estima que el acto administrativo requiere para su existencia dos requisitos esenciales cuales son, "que haya una decisión de la Administración, y que ella produzca efectos de Derecho".

De acuerdo con los artículos 10 y 33 de la Ley 17 de 9 de octubre de 1984, por la cual se organiza la Universidad Tecnológica de Panamá, los Órganos de Gobierno y las principales autoridades Universitarias son, en cuanto a los Órganos de Gobierno: el Consejo General Universitario; Consejo Académico; Consejo de Investigación, Post-grado y Extensión; Junta de Facultad; Junta de Instituto Tecnológico Regional y Junta de Centros Regionales. En cuanto a las autoridades Universitarias están compuestas: el Rector; los Vice-Rectores; el Secretario General; el Director Administrativo; los Decanos; los Vice-Decanos; los Directores de Institutos Tecnológicos Regionales; el Coordinador General de los Centros Regionales; los Directores de los Centros Regionales.

Los estudiantes forman parte de estos organismos de gobierno, como el Consejo General Universitario, 2 por cada facultad y 1 por cada Centro Regional (literales M y N del artículo 11); de la misma forma se integran en el Consejo Académico (artículo 14 literales LL y M); en el Consejo de Investigación Post-grado y Extensión, 2 estudiantes (literal G del artículo 17); en el Consejo Administrativo 2 estudiantes, (literal K del artículo 20); en las Juntas de Facultad y en las Juntas de Centros Regionales 1 estudiante por cada carrera (literal E-I artículo 23).

En el presente litigio se puede observar, que el acuerdo de 17 de noviembre de 1993 impugnado por el Sr. **RAFAEL DEL VASTO**, se refiere a una decisión adoptada por una

agrupación de varios grupos estudiantiles particulares de la Universidad Tecnológica de Panamá, en lo concerniente al control de la mesa directiva del denominado Centro de Estudiantes de la precitada casa de estudios, es decir, que no emana de Órgano de Gobierno o de Autoridad Universitaria. Aunado a lo anterior, es evidente que la disposición invocada como transgredida (numeral 5, capítulo III, del Acuerdo del Comité Electoral para decidir las elecciones del Centro de Estudiantes de la Universidad Tecnológica de Panamá), no constituye una norma legal de tipo formal o material expedida por un ente gubernamental facultado para tales efectos; por lo que notoriamente en este negocio no se cumple con el principio de la legalidad que requiere necesariamente que el acto administrativo acusado de ilegal, infrinja una excerta legal.

En la elaboración del Acuerdo aplicable al evento electoral, no interviene ningún estamento gubernamental ni tampoco consta en el expediente bajo estudio que el Comité Electoral en cuestión, pertenezca administrativamente a la Universidad Tecnológica de Panamá o haya sido reconocida por ésta; lo cual indica que dicha agrupación no es más que un colectivo de carácter particular. Como corolario de lo anterior, no podemos considerar que la reconsideración llevada a cabo ante el Comité de Elecciones de la Junta Directiva del Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad Tecnológica de Panamá, haya efectivamente agotado la vía gubernativa en este proceso, ya que el mismo no es de carácter administrativo, como alega el interesado. Y por otro lado, para que solamente el recurso de reconsideración haya agotado la vía gubernativa, sin necesidad de proponer la alzada, es indispensable que esta situación la contemple una disposición legal especial, debido a que lo contrario implica que las normas generales de lo Contencioso Administrativo (ley 135 de 1943 y ley 33 de 1946) rigen en toda su extensión.

Las excertas legales precitadas consagran como medios de impugnación tanto el Recurso de Reconsideración como el Recurso de Apelación para el agotamiento de la vía gubernativa de acuerdo a lo aplicable al negocio específico, lo cual descarta la aseveración del demandante que presupone que al no mediar norma alguna que trate el medular tema del agotamiento de la vía gubernativa, que en la situación que se nos presenta, solamente era necesario la utilización del Recurso de Reconsideración.

Por otro lado, para que una norma tenga fuerza vinculante, y que en consecuencia pueda ser aducida como conculcada, la misma debe ser expedida por una autoridad facultada para tan importante misión; lo cual no sustenta o fundamenta la presente litis.

Como consecuencia de lo hasta ahora expuesto, no confrontamos los rigores de un acto administrativo violatorio del ordenamiento panameño, dado que por el contrario, subsiste un comportamiento o actividad de carácter privado no revisable ante esta jurisdicción de lo Contencioso Administrativo.

Por último, es visible que el demandante tampoco dirigió correctamente el libelo de la presente acción de plena jurisdicción, ya que el interesado desconoce lo preceptuado en el artículo 102 del Código Judicial, que ordena que dicha demanda se proponga ante este Tribunal Colegiado a través de su presidente, y no de los señores Magistrados en Pleno.

En conclusión el presente caso es un problema de exclusivo conocimiento de las Autoridades Universitarias que no trasciende fuera de su campus.

En mérito de lo expuesto, el Magistrado que suscribe, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción propuesta por RAFAEL DEL VASTO, en contra del Comité Electoral de la Universidad Tecnológica de Panamá; y por motivos de economía procesal, no entraremos a resolver la solicitud previa de suspensión provisional de los efectos de la resolución de 17 de noviembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MINERA REMANCE, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. DEDC-GNAP-012-93 DE 24 DE MAYO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS, actuando en nombre y representación de MINERA REMANCE, S. A., ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la resolución de 21 de octubre de 1993, mediante la cual el Magistrado Sustanciador no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por MINERA REMANCE, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DEDC-GNAP-012-93 de 24 de mayo de 1993 expedida por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.).

De acuerdo al Magistrado Sustanciador, la demanda de plena jurisdicción no fue incoada oportunamente, ya que "la afectada por el documento antes descrito, al no optar

por la reconsideración inmediata, tenía dos meses a partir de la fecha del mismo, para interponer la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción ante este tribunal, es decir, hasta el 24 de julio de 1993; y no fue hasta el 6 de octubre del año en curso, que recurrió ante esta superioridad".

Agrega el Magistrado Sustanciador que consta en autos una solicitud de reconsideración con apelación en subsidio de la nota impugnada ante el Director General de la Institución, fechada el 2 de julio de 1993, pero que este recurso es extemporáneo, y así lo hace saber el propio Director de esa entidad, en su Nota No. DAL-404-93 de 7 de septiembre de 1993, en la que también se refiere a los errores formales y de fondo de la impugnación presentada.

La parte actora señala en la sustentación de su recurso, que en el presente caso la vía gubernativa fue agotada cuando se interpusieron los recursos que señala el artículo 33 de la Ley 135 de 1943 dentro del término de Ley. Observa que la nota impugnada no fue notificada personalmente ni por edicto, como lo exige el artículo 21 de la Ley 33 de 1946, y que en estos casos se debe aplicar lo previsto en el artículo 1007 del Código Judicial para los efectos de las notificaciones personales. Por tanto, la notificación se hizo el 5 de julio de 1993, cuando se promovió en recurso de reconsideración con apelación en subsidio.

Señala el recurrente que el artículo 22 de la Ley 33 de 1946, establece que una vez interpuesto los recursos y pasados dos meses se encuentra la vía gubernativa agotada, y a partir de allí se aplica el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, la Nota de 2 de julio de 1993, presentada por la firma forense AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS el 5 de julio de esa año, en la que solicitan "reconsideración y apelación en subsidio", constituye, en atención a lo dispuesto en el artículo 1007 del Código Judicial, el acto de notificación personal de la Nota No. DEDC-GNAP-012-93 de 24 de mayo de 1993.

Esta norma establece que si la persona a quien debe notificarse una resolución se refiere a dicha resolución **en escrito suyo en otra forma se manifiesta sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión con relación a la misma**, dicha manifestación o gestión sustituirá desde entonces, para la persona que la hace, **los efectos de una notificación personal.**

De manera que al expedir el Director General del I.R.H.E. su nota No. DAL-404-93 de 7 de septiembre de 1993, en la que rechaza los recursos promovidos en nota de 2 de julio de 1993, se agotó la vía gubernativa, y el afectado contaba con el término de dos meses siguientes a la notificación de este último acto para ocurrir a la vía contencioso administrativa.

De acuerdo a las constancias procesales, el demandante ocurrió ante esta vía antes de que venciera dicho término previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, ya que presentó su demanda el 6 de octubre de 1993.

El resto de los Magistrados de la Sala consideran que la presente demanda ha sido promovida oportunamente, y en consecuencia, previa revocatoria de la resolución de primera instancia, debe ordenarse su admisión.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 21 de octubre de 1993, ADMITEN la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma forense AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS, en nombre y representación de MINERA REMANCE, S. A., para que se declare nula, por ilegal, la Nota No. DEDC-GNAP-012-93 de 24 de mayo de 1993, expedida por el Director General del Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (I.R.H.E.).

Envíese copia de esta demanda al Director General del I.R.H.E., para que dicho funcionario rinda dentro del término de cinco (5) días un informe explicativo de conducta conforme a los dispuesto en el artículo 33 de la Ley 33 de 1946.

Córrasele traslado al Procurador de la Administración, por el término de cinco (5) días.

Abrase a pruebas la causa por igual término de cinco (5) días.

Téngase a la firma forense AMAYA, JIMÉNEZ Y ASOCIADOS, como apoderados judiciales de MINERA REMANCE, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GABRIEL MARTÍNEZ GARCÉS, EN REPRESENTACIÓN DE TELIA THOMPSON, PARA QUE SE DECLARE NULA,

POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 1 DE 14 DE ENERO DE 1988, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL PRIMER CICLO FRANCISCO BECKMAN, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 6 DE JUNIO DE 1988, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y, LA RESOLUCIÓN NO. 3 DE 2 DE FEBRERO DE 1989, ,EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante la Vista Fiscal No. 525 de 1 de diciembre de 1993, el Procurador de la Administración promovió y sustentó recurso de apelación contra la resolución fechada el 23 de noviembre de 1989, mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por el licenciado Gabriel Martínez Garcés en nombre y representación de Telia Thompson, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 14 de 14 de enero de 1988 dictada por la Directora del Primer Ciclo Francisco Beckman, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Señala el señor Procurador de la Administración que la parte actora no presentó la demanda en tiempo oportuno, ya que la notificación del acto administrativo impugnado se llevó a cabo el 3 de abril de 1989, y no fue sino hasta el 9 de noviembre de 1989 que ocurrió a la Sala, fuera del término de dos meses que contempla el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Evacuados los trámites de Ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

Del estudio de las constancias procesales se desprende que en efecto, la resolución No. 3 de 2 de febrero de 1989 dictada por el Ministro de Educación, por la cual se desestima el recurso de revisión promovido y se confirma el acto administrativo originario contentivo de la sanción de reprensión escrita impuesta a la parte actora, con la cual se agota la vía gubernativa, fue notificada a la demandante el 3 de abril de 1989, y la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción fue presentada el 9 de noviembre de 1989 (ver fojas 12), fuera del término exigido por el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Por tanto, previa revocatoria de la decisión de primera instancia, debe negarse la admisión de la demanda presentada.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 23 de noviembre de 1989, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción promovida por Telia Thompson, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 1 de 14 de enero de 1988 proferida por la Directora del Primer Ciclo Francisco Beckman, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LILIANA PINILLA EN REPRESENTACIÓN DE CALIXTO HIM ARCIA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA NO. 29 DE ABRIL DE 1991, DICTADA POR EL JEFE DE PERSONAL DEL INSTITUTO DE MERCADEO AGROPECUARIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Liliana Pinilla, en representación de CALIXTO HIM ARCIA, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la nota de 29 de abril de 1991, emitida por el Jefe de Personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario, mediante la cual se le comunica al señor HIM ARCIA que ha sido destituido del cargo de Ingeniero Agrónomo III, que venía desempeñando en esa Institución; y para que se haga otras declaraciones.

Admitida la demanda se le corrió traslado de la misma al Procurador de la Administración por el término de cinco (5) días; y al funcionario demandado se le solicitó rindiera un informe explicativo de su actuación en este caso, dentro del igual término.

El representante judicial del Ministerio Público, al contestar la demanda mediante la Vista Fiscal No. 352 de 14 de julio de 1992 (fs. 44-56) se opuso a las pretensiones del recurrente. Por su parte el funcionario demandado rindió oportunamente el informe explicativo de su actuación que se le requirió.

El demandante alega que el acto administrativo impugnado ha infringido los artículos 32 y 295 de la Constitución Nacional, el artículo 8, acápites a) e i), y el

artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, los artículos 65 y 66 de la Ley 4 de 1961, el artículo décimo quinto del Decreto de Gabinete 265 de 24 de septiembre de 1968, y por último los artículos 769 y 773 del Código Judicial.

El actor considera que han sido infringidos en concepto de violación directa el artículo 8, acápites a) e i), y el artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961 y el artículo décimo quinto del Decreto No. 265 de 24 de septiembre de 1968.

El señor Procurador de la Administración, sobre estos cargos de ilegalidad, manifestó en lo medular lo siguiente:

> "Este Despacho, se opone al planeamiento del demandante en cuanto a la infracción de las normas reproducidas, por lo siguiente: -La Ley No. 22 de 1961- establece disposiciones relativas a la prestación de servicios profesionales en Ciencias Agrícolas, y el Decreto No. 265 de 1968 aprueba el Reglamento Interno del Consejo Nacional de Agricultura. Así, pues, estos dos (2) instrumentos jurídicos, regulan directamente las destituciones de profesionales idóneos en las ciencias agrícolas que prestan servicios en las instituciones estatales.
>
> El acápite a) del artículo 8, la Ley 22 de 1961, le atribuye el Consejo Técnico Nacional de Agricultura, (C.T.N.A.) la función de velar por el cumplimiento de dicha Ley y sus reglamentos. Y en el artículo 10 ibidem, establece algunas de las causales, por las cuales podrá ser destituido un profesional de las Ciencias Agrícolas.
>
> En este aparte, es de importancia resaltar que la palabra solo que aparece subrayado en el artículo 10, fue declarada inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Sentencia de 28 de septiembre de 1984 ..." (fs. 50-51).

La Sala estima, en relación a los tres cargos a que nos venimos refiriendo, que el Decreto de Gabinete No. 1 de 26 de diciembre de 1989 que sirvió de fundamento legal para la acción de personal atacada, tiene la jerarquía de ley formal, y que por tanto, su aplicación prima sobre los decretos ejecutivos, resueltos o reglamentos con fundamento en el artículo 757 del Código Administrativo y 14 y 15 del Código Civil.

Además, el Decreto de Gabinete No. 1 de 1989, que le sirvió de fundamento legal al acto administrativo impugnado, es ley especial y posterior, por tanto, su aplicación prima sobre las leyes anteriores, como lo es la ley 22 de 1961, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 14 del Código Civil.

El referido Decreto de Gabinete No. 1 de 1989, en su artículo 5, autorizó a las nuevas autoridades superiores de las distintas dependencias del Estado, para que "declaren insubsistentes los nombramientos de los jefes y subjefes de los organismos ejecutivos, operativos, de dirección y **asesoría**" de los despachos que forman parte del Órgano Ejecutivo, e indicó que quedaban excluidos de la aplicación de este Decreto los servidores públicos que formen parte de las carreras públicas debidamente reglamentadas por la Ley, en cuyo caso, se seguirá el procedimiento establecido en la Ley respectiva de acuerdo con el artículo 6 del Decreto de Gabinete No. 1 de 1989.

Este Decreto de Gabinete fue subrogado por los Decretos de Gabinete No. 20 y 21 de febrero de 1990 y 48 de 20 de febrero de 1990. Este último señaló que a aquellas instituciones estatales regidas y organizadas por leyes especiales, no les serán aplicables estas leyes, sino los Decretos de Gabinete Nos. 20, 21 y 48 de 1990, directamente y con carácter retroactivo. En consecuencia, se derogó el parágrafo del artículo 1 del Decreto de Gabinete No. 20 de 1 de febrero de 1990 y el artículo 6 del Decreto No. 1 de 26 de diciembre de 1989, que establecían que a los empleados públicos regidos por leyes especiales, se les aplicaría estos decretos siguiendo el procedimiento establecido en las leyes especiales. Por último, tenemos que el Decreto No. 40 de 1990, prorrogó la vigencia del Decreto de Gabinete No. 21 de 1990 hasta el 8 de junio de 1990.

Además, como bien lo señala el representante del Ministerio Público la palabra solo del artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961 fue declarada inconstitucional, debido a que "al ser limitadas las causas de destitución de los servidores públicos en los términos del artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961, por la expresión SOLO PODRÁN excluyendo otras que surgen de los artículos 295 y 297, en la forma en que han sido examinados en esta resolución de la Corte, el término o expresión SOLO se torna inconstitucional, porque equivale a ÚNICAMENTE. Sin embargo, los funcionarios a quienes se refiere ese artículo 10 mencionado, PODRÁN ser destituidos por las causas específicas que se señalan en ese artículo, PERO TAMBIÉN PODRÁN SER DESTITUIDOS, se repite, por el incumplimiento de los deberes, expresamente señalados en la Constitución para todos los servidores públicos, y por las demás causas que se establezcan en Leyes y Reglamentos" (Sentencia de 28 de septiembre de 1984 dictada en Recurso de Inconstitucionalidad interpuesto por el LIC. CARLOS E. CARRILLO GOMILA contra la frase "SOLO PODRÁN" incluida en el artículo 10 de la Ley 22 de 30 de enero de 1961).

De lo antes expuesto se infiere que no es cierto que tal como lo alega el recurrente los profesionales de las Ciencias Agrícolas al servicio del Estado, sólo pueden ser destituidos por razones de incompetencia física, moral o técnica, ya que pueden ser destituidos por estas causas y por otras expresamente establecidas en la Ley, como las señaladas en el artículo 5 del Decreto de Gabinete No. 1 de 1989, que además faculta para hacer efectivo el despido a los Organismos Superiores de Dirección de los despachos que forman parte del Órgano Ejecutivo.

Por tanto, deben desestimarse los cargos de violación de los artículos 8, a, i y 10 de la Ley 22 de 1961 y el artículo décimo quinto del Decreto No. 265 de 1968, que se le endilgan al acto administrativo impugnado.

El actor también considera se ha infringido los artículos 65 y 66 de la Ley 4 de 1961.

La Sala en reiteradas ocasiones ha manifestado que la Ley No. 4 de 13 de enero de 1961, sobre administración de personal en el sector público, que estableció un régimen de estabilidad para los funcionarios públicos, después del golpe militar del 11 de octubre de 1968, fue reformada sustancialmente por el Decreto de Gabinete No. 137 de 30 de mayo de 1969, que dejó sin efectos el régimen de estabilidad y la carrera administrativa. De allí que los cargos de violación de los artículos 65 y 66 de la referida ley 4, que se refieren a las causales de terminación de funciones de los servidores públicos, deben ser desestimados. Como ya se expresó en esta resolución, el Decreto de Gabinete No. 1 de 1989, que tiene jerarquía de Ley, estableció causales de destitución que son aplicables al recurrente, por estar contempladas en una Ley posterior y especial sobre la materia (art. 14 del Código Civil).

El demandante considera que han sido infringidos los artículos 769 y 773 del Código Judicial, en concepto de violación directa.

El señor Procurador de la Administración manifestó que de ningún modo han sido violados los artículos 769 y 773 del Código Judicial, pues el primero se limita a señalarnos las clases de pruebas que existen en nuestro ordenamiento y la segunda norma se refiere a la obligación que tienen las partes dentro de un proceso de probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas que le son favorables.

La Sala estima que le asiste la razón al señor agente del Ministerio Público, ya que el artículo 769 del Código Judicial se limita a señalar los elementos que sirven como prueba en un proceso y el artículo 773 ibidem establece la obligación de las partes de probar los hechos o datos que constituyen el supuesto de hecho de las normas le son favorables, y en el caso en estudio se ha probado que el demandante actuaba como asesor y por tanto, podía ser destituido con fundamento en la facultad que le concedió a su superior jerárquico el artículo 5 del Decreto de Gabinete No. 1 de 1989. Por tanto, deben desestimarse los cargos de violación de los artículos 769 y 773 del Código Judicial.

Por último, en cuanto a la alegada violación de los artículos 32 y 295 de la Constitución Nacional, debe reiterarse que esta vía no es la idónea para resolver tales violaciones, tal como lo ha expresado en numerosos fallos esta Sala.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley **DECLARA QUE NO ES ILEGAL** la Nota de 29 de abril de 1991, dictada por el Jefe de Personal del Instituto de Mercadeo Agropecuario, mediante la cual se comunica al señor CALIXTO HIM ARCIA que ha sido destituido del cargo de Ingeniero Agrónomo III que desempeñaba en ese instituto; y en consecuencia, **NIEGA** las declaraciones solicitadas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR GUILLERMO MORENO DE GRACIA, EN REPRESENTACIÓN DE GLADYS MÉNDEZ Y MARITZA QUINTERO DE POLANCO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 329-93 DE 20 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor GUILLERMO MORENO DE GRACIA, actuando en nombre y representación de GLADYS MÉNDEZ BAYARD y MARITZA QUINTERO DE POLANCO, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula por ilegal, la Resolución No. 329-93 S.G. de 20 de agosto de 1993 expedida por la Juez del Tribunal Tutelar de Menores, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

Al resolver sobre la admisibilidad se observa que la demanda presentada no cumple con los requisitos exigidos por la Ley para su admisión, porque, en primer lugar, el demandante ha estimado infringidos los artículos 32, 295 y 297 de la Constitución Política, cargos cuya dilucidación no compete a esta Sala. En segundo lugar, las copias de los actos administrativos impugnados no han sido autenticadas, como lo exige el artículo 820 del Código Judicial, ni se ha hecho uso del derecho que le concede el artículo 46 de la Ley 135 de 1943, cuando la autenticación de dichos documentos le ha sido denegada.

Y en tercer lugar la acción promovida por la señora Gladys Méndez Bayard está prescrita. De acuerdo a las constancias procesales ésta se notificó del acto que agota la vía gubernativa el 25 de septiembre de 1993, y no es sino hasta el 10 de diciembre del

año en curso que ocurre a la vía contencioso administrativa, fuera del término de los dos meses previsto en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Como la presente demanda no cumple con los requisitos exigidos por la Ley para su admisión, no debe dársele curso a la misma, de acuerdo a lo normado en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada que suscribe, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa promovida por el doctor GUILLERMO MORENO DE GRACIA, en nombre y representación de GLADYS MÉNDEZ BAYARD y MARITZA QUINTERO DE POLANCO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE MÁRTIRES MARINO BAQUE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA PROVIDENCIA DE 6 DE OCTUBRE DE 1993, EMITIDA POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ. VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Licenciado **JULIO F. BARBA G.** presentó acción de Plena Jurisdicción en representación de **MÁRTIRES MARINO BAQUE**, con el propósito de que se declare nula, por ilegal, la **providencia** de 6 de octubre de 1993, proferida por el Ministerio de Educación, mediante la cual declara que no tiene competencia para conocer de un Incidente de Nulidad de lo actuado, con motivo de una solicitud de reintegro formulad por la parte actora y que fue improcedente por el **DIRECTOR DE EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA, DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN.**

Un examen del expediente demuestra que a la parte actora se le comunicó despido, por abandono del cargo, desde el 2 de julio de 19991, sin que conste en el proceso que haya recurrido contra dicho despido a través de los recursos que le ley pone a su alcance.

El día 14 de septiembre de 1992, presentó el señor **MÁRTIRES MARINO BAQUE**, una solicitud de reingreso, por haber sido absuelto del ilícito que se le imputaba y por la cual había sido supuestamente suspendido del cargo que desempeñaba. Dicha solicitud fue considerada improcedente mediante Nota N°DNE/DEPT/1899 de 24 de septiembre de 1992 del Director de Educación Profesional y Técnica y en la que se expresó lo siguiente:

> "Cabe señalar, que el Educador en mención fue destituido por abandono del puesto, en el Instituto Profesional y Técnico México-Panamá, en el año 1991, situación que nos permite confirmar que efectivamente, el Educador **MÁRTIRES MARINO BAQUE**, nunca estuvo suspendido, otro hecho que corrobora nuestra posición, es que haya aparecido en la Planilla de Pagos del Ministerio de Educación en los años comprendidos de 1988 hasta el momento que se hizo efectiva la destitución, y recibido los cheques correspondientes a esos períodos.

A foja 14 del expediente consta el Decreto de Personal No. 63 de 2 de julio de 1991, por el cual se ordena destituciones en el Ministerio de Educación por abandono del cargo, entre los cuales se encuentra el señor **MÁRTIRES MARINO BAQUE**, lo que indica que efectivamente la suspensión que alega el mencionado funcionario no se concretizó y que su despido se debió a causas distintas a los hechos ilícitos mencionados por el demandante.

Contra la Nota que declaró improcedente la solicitud de reingreso el señor **MÁRTIRES MARINO BAQUE** presentó un incidente de nulidad el cual fue rechazado por el Ministerio de Educación, por considerar "que no es competente para conocer de Incidentes de Nulidad, tal cual lo dispone nuestra Legislación actual".

El Magistrado Sustanciador de este caso, estima que contra el acto de despido que se dio el 2 de julio de 1991 esta prescrita la acción, razón por la cual el demandante ha tratado de revivir un proceso a través de un Incidente de Nulidad, que no contempla la Legislación que trata sobre la educación nacional.

Por las razones expuesta, el Magistrado Sustanciador en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado JULIO F. BARBA, en representación de MÁRTIRES BAQUE.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ERNESTO WALKER, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.2366 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1990, EXPEDIDA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, DEMÁS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **VILLALAZ Y ASOCIADOS** en representación de **ERNESTO WALKER**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, con la finalidad de que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal N°2366 de 5 de diciembre de 1990, expedida por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La Sociedad Profesional de Abogados argumenta básicamente en el memorial sustentatorio de su pretensión, que las resoluciones impugnadas contravienen el supuesto derecho de estabilidad del cual en su opinión disfrutaba el señor **ERNESTO WALKER** al ser destituido del I.D.A.A.N., añadiendo además, que su poderdante pertenecía al grupo M-16 (Sindicato en Formación) que lo exime de toda declaratoria de insubsistencia, fundamentada en el texto de los artículos 5° ordinal a; 6° ordinal a, y 41 ordinal d numeral 11 del Reglamento Interno de la Institución Gubernamental demandada.

Por su parte, el Director Ejecutivo del I.D.A.A.N. se opuso a las peticiones del actor, esgrimiendo lo siguiente:

> "1. El señor **ERNESTO WALKER** fue contratado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales bajo el número de empleado 0107352, en la Región de Colón, como Almacenista II y con un salario mensual de B/.345.00.
>
> 2. El 5 de diciembre de 1990, mediante Acción de Personal 02366, la nueva administración del IDAAN, previa evaluación lo despidió por infringir el Reglamento Interno del IDAAN, al no llevar a cabo labores asignadas (artículo 5o., ordinal a); realizar en horas laborables actividades, funciones o tareas que pugnen con sus obligaciones como funcionario público (artículo 6o., ordinal a); y llevar a cabo actividades que menoscabe y afecte el prestigio y la imagen de la Institución (artículo 41, ordinal d, numeral 11).
>
> 3. El día 11 de diciembre de 1990, el señor Walker, haciendo uso de sus derechos, interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio ante la Dirección Ejecutiva del IDAAN. Dicho recurso fue contestado el 13 de diciembre de 1990, mediante Resolución Ejecutiva 53-90 y en la misma se confirma en todas sus partes la Acción de Personal 02366 de 5 de diciembre de 1990.
>
> 4. Posteriormente, Villalaz y Asociados, en representación del señor **ERNESTO WALKER**, sustenta el Recurso de Apelación el 28 de enero de 1991, dirigido a los miembros de la Junta Directiva del IDAAN, quienes mediante Resolución de Junta Directiva 38-91 de 12 de junio de 1991 confirma en todas sus partes el contenido de la Resolución Ejecutiva 53-90 de 13 de diciembre de 1990, emitida por el Director Ejecutivo del IDAAN".

De igual forma, la Procuraduría de la Administración solicita que esta Corporación de Justicia desestime las declaraciones impetradas por la parte actora, puesto que considera que el Director Ejecutivo del I.D.A.A.N. "cumplió cabalmente con las normas contempladas en el Reglamento Interno del I.D.A.A.N. al señalar como sanción, la destitución y con fundamento en las atribuciones que le confiere la ley".

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver al fondo de la controversia incoada.

En lo concerniente al primer cargo de ilegalidad, estima la Sala que no le asiste razón al demandante, puesto que la posterior interposición tanto de los recursos de reconsideración, como de apelación ante la Junta Directiva del I.D.A.A.N., surtió los efectos de dicha notificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943. En consecuencia, no puede atribuírsele la calidad de ilegal a la conducta del Director Ejecutivo del I.D.A.A.N., ya que está conforme a lo estatuido en las normas de procedimiento de la jurisdicción administrativa, no procediendo el cargo endilgado.

En lo atinente a la segunda acusación de ilegalidad, primeramente debemos señalar, que la estabilidad invocada no se encuentra estatuida en una disposición de rango legal como asevera el actor, sino por el contrario, dicha excerta pertenece al articulado del Reglamento Interno de la Institución Gubernamental.

Lo anterior implica que la estabilidad argumentada por la impugnante carece de todo asidero legal, ya que la misma no fue consagrada mediante ley formal sino a través del ejercicio de la facultad reglamentaria.

Este Tribunal Colegiado ha externado en reiteradas oportunidades, que para que el estatus excepcional de la estabilidad alcance y ampare a un funcionario público determinado, es indispensable que tal derecho haya sido establecido específicamente a través de una disposición formal de rango legal; ya que en atención a las normas de

hermenéutica legal administrativa conforme al artículo 757 del Código Administrativo, al existir disposiciones en contraposición, se preferirá la ley con respecto al reglamento.

La explicación vertida también se aplica al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, señalado por el actor como conculcado por parte del I.D.A.A.N. en este proceso.

Así las cosas, debemos manifestar además, que al carecer los funcionarios gubernamentales del privilegio de la estabilidad, su posición continúa siendo de libre nombramiento y remoción al arbitrio de la entidad que lo emplee.

Por lo tanto, no prosperan los cargos segundo y tercero consistentes en los artículos 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N., y 18 de la Ley 98 de 1961.

En atención a los cargos 4° y 5° del libelo de la demanda bajo estudio, es importante indicar, que independientemente que un trabajador en particular, realice sus actividades de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Interno del I.D.A.A.N., el mismo puede ser declarado insubsistente en cualquier oportunidad por la autoridad nominadora competente; debido a que carece de estabilidad o carrera que lo proteja, consagrada en una disposición con rango de ley. De lo anterior se colige, que no le es permisible al afectado esgrimir como fundamento de derecho, para su restitución el mencionado Reglamento Interno de Personal de una Institución estatal, que en este caso específico es el I.D.A.A.N. Lo expuesto significa que aunque el Reglamento preceptúe diversas sanciones previas a la destitución, las mismas no son aplicables por carecer de fuerza legal de carácter formal.

Estos planteamientos son igualmente aplicables al cargo impetrado al artículo 41 ordinal d, numeral 11 del Reglamento Interno de Personal.

En consecuencia no proceden los cargos de ilegalidad.

Finalmente y con relación a la infracción invocada por el recurrente de los artículos 20 y 22 de la Ley 135 de 1943,reformada por la Ley 33 de 1946 deseamos puntualizar lo siguiente:

La administración cuenta con dos (2) meses para decidir los negocios sometidos a su consideración, configurándose de esta manera el denominado silencio administrativo constitutivo de la negativa tácita de la pretensión. Pasado tal período de tiempo, el actor tendrá dos (2) meses más para proponer la acción de plena jurisdicción ante esta Sala de la Corte o de lo contrario le prescribirá la acción. Sin embargo, si el actor deja pasar la oportunidad y no utiliza los beneficios del silencio administrativo que a su vez agota la vía gubernativa, y durante el mismo la administración se pronuncia, desaparece dicho silencio. En esta línea de pensamiento, si el actor discrepa del criterio vertido por la Institución Gubernamental puesto que considera su derecho transgredido y lesionado, tendrá que impugnar dicha resolución, y no el silencio administrativo; ya que el mismo desapareció al emitirse la precitada resolución como acotamos anteriormente. En otras palabras, el I.D.A.A.N. no conculcó los artículos 20 y 22 de la Ley 135 de 1943, dado que se ajustó al procedimiento que esta excerta preceptúa. Por otro lado, no podemos considerar como vicio de nulidad el hecho que la administración se retrase más del tiempo que la ley establece para resolver los asuntos bajo su jurisdicción, tal como lo ha sostenido este Tribunal de Justicia en reiteradas oportunidades, entre las cuales podemos citar, la sentencia de 30 de julio de 1992, en el caso **ROLANDO ALEX GRAHAM -vs- LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**, como se aprecia a continuación:

> "Según el autor español Fernando Garrido Falla, en su obra Régimen de Impugnación de los Actos Administrativos (pág.143), hay irregularidades procedimentales que no vician el acto administrativo. Esto puede decirse, en general, de los expedientes en cuya tramitación se emplea plazo superior al marcado por la ley".

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN las pretensiones formalizadas mediante demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, y DECLARAN QUE NO ES ILEGAL las Resoluciones N°02366 de 5 de diciembre de 1990, la N°53-90 de 13 de diciembre de 1990 y la N°38-91 de 12 de junio de 1991 emitidas por el I.D.A.A.N. en contra de ERNESTO WALKER.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA VILLALAZ Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE HUGO PÉREZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA ACCIÓN DE PERSONAL NO.00009 DE 4 DE ENERO DE 1991, DICTADA POR EL JEFE DE PERSONAL Y EL DIRECTOR EJECUTIVO DEL INSTITUTO DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS NACIONALES, DEMÁS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **VILLALAZ Y ASOCIADOS** en representación de **HUGO PÉREZ**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, con la finalidad de que se declare nula por ilegal, la Acción de Personal N°00009 de 4 de enero de 1991, dictada por el Jefe de Personal y el Director Ejecutivo del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

La Sociedad Profesional de Abogados argumenta básicamente en el memorial sustentatorio de su pretensión, que las resoluciones impugnadas contravienen el supuesto derecho de estabilidad del cual en su opinión disfrutaba el señor **HUGO PÉREZ** al ser destituido del I.D.A.A.N., añadiendo además, que su poderdante pertenecía al grupo M-16 (Sindicato en Formación) que lo exime de toda declaratoria de insubsistencia, fundamentada en el texto del artículo 5° literal a, 6° literal a, y el artículo 41 ordinal d, numeral 11 del Reglamento Interno de la Institución Gubernamental demandada.

Por su parte, el Director Ejecutivo del I.D.A.A.N. se opuso a las peticiones del actor, esgrimiendo lo siguiente:

> "1. El señor **HUGO PÉREZ** fue contratado por el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales bajo el número de empleado 0100455, en la Dirección de Administración, Departamento de Transporte y Talleres de Panamá, como Mecánico de Equipo Pesado y con un salario mensual de B/.433.00.
>
> 2. El 4 de enero de 1991, mediante Acción de Personal 00009, la nueva administración del IDAAN, previa evaluación lo declaró insubsistente en su cargo de acuerdo a los artículos 1o. y 2o. de la Ley 25 de 14 de diciembre de Reglamento Interno de Personal.
>
> 3. El día 11 de enero de 1991, el señor Pérez, haciendo uso de sus derechos, interpuso Recurso de Reconsideración con Apelación en Subsidio ante la Dirección Ejecutiva del IDAAN. Dicho recurso fue contestado el 10 de marzo de 1991, mediante Resolución Ejecutiva 20-91 y en la misma se confirma en todas sus partes la Acción de Personal 00184 de 1° de febrero de 1991.
>
> 4. Posteriormente, Villalaz y Asociados, en representación del señor **HUGO PÉREZ**, sustenta el Recurso de Apelación el 25 de junio de 1991, dirigido a los miembros de la Junta Directiva del IDAAN, quienes mediante Resolución de Junta Directiva 48-91 de 12 de junio de 1991 confirma en todas sus partes el contenido de la Resolución Ejecutiva 11-91 de 10 de marzo de 1991, emitida por el Director Ejecutivo del IDAAN".
>
> De igual forma, la Procuraduría de la Administración solicita que esta Corporación de Justicia desestime las declaraciones impetradas por la parte actora, puesto que considera que el Director Ejecutivo del I.D.A.A.N. "estaba plenamente facultado para declarar insubsistente el nombramiento del señor Hugo Pérez sin necesidad de una investigación sumaria , como indica la parte demandante, y es que las disposiciones de la Ley 25 son claras al señalar que se podrá, previa identificación, declarar insubsistente el nombramiento de los funcionarios públicos que participen en los actos descritos en su artículos 1, sin mencionar (sic) ninguna otro requisito."

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver al fondo de la controversia incoada.

En lo concerniente al primer cargo de ilegalidad, estima la Sala que no le asiste razón al demandante, puesto que la posterior interposición tanto de los recursos de reconsideración, como de apelación ante la Junta Directiva del IDAAN., surten los efectos de dicha notificación, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 32 de la Ley 135 de 1943. En consecuencia, no puede atribuírsele la calidad de ilegal a la conducta del Director Ejecutivo del I.D.A.A.N., ya que está conforme a lo estatuido en las normas de procedimiento de la jurisdicción administrativa, no procediendo el cargo endilgado.

En lo atinente a la segunda acusación de ilegalidad, primeramente debemos señalar, que la estabilidad invocada no se encuentra estatuida en una disposición de rango legal como asevera el actor, sino por el contrario, dicha excerta pertenece al articulado del Reglamento Interno de la Institución Gubernamental.

Lo anterior implica que la estabilidad argumentada por la impugnante carece de todo asidero legal, ya que la misma no fue consagrada mediante ley formal sino a través del ejercicio de la facultad reglamentaria.

Este Tribunal Colegiado ha externado en reiteradas oportunidades, que para que el estatus excepcional de la estabilidad alcance y ampare a un funcionario público determinado, es indispensable que tal derecho haya sido establecido específicamente a través de una disposición formal de rango legal; ya que en atención a las normas de hermenéutica legal administrativa conforme al artículo 757 del Código Administrativo, al existir disposiciones en contraposición, se preferirá la ley con respecto al reglamento.

La explicación vertida también se aplica al artículo 18 de la Ley 98 de 1961, señalado por el actor como conculcado por parte del I.D.A.A.N. en este proceso.

Así las cosas, debemos manifestar además, que al carecer los funcionarios gubernamentales del privilegio de la estabilidad, su posición continúa siendo de libre nombramiento y remoción al arbitrio de la entidad que lo emplee.

Por lo tanto, no prosperan los cargos segundo y tercero consistentes en los artículos 4 del Reglamento Interno del I.D.A.A.N., y 18 de la Ley 98 de 1961.

En atención al cuarto cargo del libelo de la demanda bajo estudio, (artículo 5° del precitado Reglamento) es importante indicar, que independientemente que un trabajador en particular, realice sus actividades de acuerdo a lo contemplado en el Reglamento Interno del I.D.A.A.N., el mismo puede ser declarado insubsistente en cualquier oportunidad por la autoridad nominadora competente; debido a que carece de estabilidad o carrera que lo proteja, consagrada en una disposición con rango de ley. De lo anterior se colige, que no le es permisible al afectado esgrimir como fundamento de derecho para su restitución el mencionado Reglamento Interno de Personal de una Institución estatal, que en este caso específico es el I.D.A.A.N.. Lo expuesto significa que aunque el Reglamento preceptúe diversas sanciones previas a la destitución, las mismas no son aplicables por carecer de fuerza legal de carácter formal.

En consecuencia no procede el cargo impetrado.

Con relación a la infracción invocada por el recurrente de los artículos 20 y 22 de la Ley 135 de 1943, reformada por la Ley 33 de 1946 deseamos puntualizar lo siguiente:

La administración cuenta con dos (2) meses para decidir los negocios sometidos a su consideración, configurándose de esta manera el denominado silencio administrativo constitutivo de la negativa tácita de la pretensión. Pasado tal período de tiempo, el actor tendrá dos (2) meses más para proponer la acción de plena jurisdicción ante esta Sala de la Corte o de lo contrario le prescribirá la acción. Sin embargo, si el actor deja pasar la oportunidad y no utiliza los beneficios del silencio administrativo que a su vez agota la vía gubernativa, y durante el mismo la administración se pronuncia, desaparece dicho silencio. En esta línea de pensamiento, si el actor discrepa del criterio vertido por la Institución Gubernamental puesto que considera su derecho transgredido y lesionado, tendrá que impugnar dicha resolución, y no el silencio administrativo; ya que el mismo desapareció al emitirse la precitada resolución como acotamos anteriormente. En otras palabras, el I.D.A.A.N. no conculcó los artículos 20 y 22 de la Ley 135 de 1943, dado que se ajustó al procedimiento que esta excerta preceptúa. Por otro lado, no podemos considerar como vicio de nulidad el hecho que la administración se retrase más del tiempo que la ley establece para resolver los asuntos bajo su jurisdicción, tal como lo ha sostenido este Tribunal de Justicia en reiteradas oportunidades, entre las cuales podemos citar, la sentencia de 30 de julio de 1992, en el caso **ROLANDO ALEX GRAHAM -vs- LA AUTORIDAD NACIONAL**, como se aprecia a continuación:

> "Según el autor español Fernando Garrido Falla, en su obra Régimen de Impugnación de los Actos Administrativos (pág.143), hay irregularidades procedimentales que no vician el acto administrativo. Esto puede decirse, en general, de los expedientes en cuya tramitación se emplea plazo superior al marcado por la ley".

Finalmente, y con respecto al artículo primero (1°) de la Ley N°25 de 14 de diciembre de 1990, invocado por el impugnante como conculcado es preciso señalar, que no se observa contravención alguna de dicha disposición especial, ya que la causal en virtud del cual se pretende aplicar sus efectos al señor **PÉREZ**, (artículo 5° ordinal a del Reglamento Interno de IDAAN) no se relaciona con el supuesto estatuido en el artículo 1° e inclusive 2° de la antes mencionada excerta legal. Por el contrario, es evidente que ambas normas contemplan motivos diferentes que a su vez generan sanciones disímiles. Es así como el artículo 1° de la Ley 25 de 14 de diciembre de 1990, alude a actividades o comportamientos cuya finalidad consistiera en el atentado contra la democracia y el orden constitucional, más no las ausencia o tardanzas de un funcionario determinado, en la institución gubernamental en la cual labore.

En este caso en particular, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (I.D.A.A.N.), no identificó al señor **PÉREZ** como miembro del movimiento desestabilizador del Gobierno Nacional y la Constitución, sino que más bien la entidad gubernamental esgrimió la falta de puntualidad del afectado en el ejercicio de sus obligaciones, como excusa del despido del mismo; tal como se aprecia a fojas 26 y 27 del expediente en litigio. Por lo tanto no prospera la acusación incoada.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGAN las pretensiones formalizadas mediante demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, y DECLARAN QUE NO ES ILEGAL las Resoluciones N°00009 de 4 de enero de 1991, la N°11-91 de 10 de marzo de 1991, y la N°48-91 de 12 de junio de 1991 emitidas por el I.D.A.A.N. en contra de HUGO PÉREZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDWIN RENÉ MUÑOZ, EN REPRESENTACIÓN DE ELECTRÓNICA COMERCIAL, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 265-AJ-DG-DAC DE 16 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL DIRECTOR ENCARGADO DE AERONÁUTICA CIVIL, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Edwin René Muñoz, actuando en nombre y representación de Electrónica Comercial, S. A., ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 265-AJ-DG-DAC de 16 de julio de 1993, emitida por el Director Encargado de Aeronáutica Civil, y para que se haga otras declaraciones.

El demandante solicita que antes de admitir la demanda, se suspendan los efectos de la resolución impugnada, a fin de evitar los graves perjuicios que la ejecución de la resolución impugnada causaría tanto a la Dirección General de Aeronáutica Civil.

Mediante el acto originario demandado, el Director de Aeronáutica Civil adjudicó definitivamente a la empresa Panamá Hardware, S. A., el concurso de precios No. 001-93/DAC para el suministro e instalación de un sistema de grabación de 40 canales y reproductora, en la torre de control del Aeropuerto Internacional de Tocumen, por la suma total de B/.69,279.00, "ya que es la que ofrece la oferta que cumple económicamente, técnica, administrativa y financiera y es la que resulta más cónsona a los intereses del Estado.

Como a juicio de la Sala, el demandante no ha probado los graves perjuicios que alega le causa el acto impugnado, ni son evidentes los vicios de ilegalidad que le imputa, la solicitud de suspensión de los efectos debe negarse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contenciosos Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de la Resolución No. 265-AJ-DG-DAC de 16 de julio de 1993, emitida por el Director Encargado de Aeronáutica Civil.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO F. BARBA, EN REPRESENTACIÓN DE AMINTA PELLICOT, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO NO. 156 DE 21 DE MAYO DE 1993, EMITIDO POR EL MINISTRO DE EDUCACIÓN, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE DE LA APELACIÓN: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIOCHO (28) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante su Vista Fiscal No. 413 de 9 de septiembre de 1993, el Señor Procurador de la Administración ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución, de 26 de julio de 1993, por la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, interpuesta por el licenciado Julio F. Barba, en representación de AMINTA PELLICOT, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto No. 156 de 21 de mayo de 1993, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación, y para que se haga otras declaraciones.

En la sustentación de su recurso, el señor Procurador manifiesta que la demandante no dirigió su demanda contra el acto originario, sino contra el Decreto No. 156 de 21 de mayo de 1993 que "se concreta a realizar una serie de nombramientos recaídos en educadores a nivel de distintas provincias escolares de la República". Continúa agregando lo siguiente:

> "No es aceptable, ni viable que la demandante dirija su acción contra cualquier acto de la Administración; ha de hacerlo, por imperativo legal, contra el acto jurídico administrativo que causa estado, esto es, aquél que agota la vía gubernativa, "lo que se entenderá cuando los actos o resoluciones respectivos no son susceptibles de ninguno de los recursos establecidos en los artículos 20 de la Ley 33 de 1946, y 38, 39 y 41 de la Ley 135 de 1943, o se han decidido, ya se trate de actos o resoluciones definitivas o de providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación", conforme lo ha señalado y reafirmado la Sala Tercera en auto de 20 de agosto de 1993. (Cfr. igualmente, auto de 29 de abril de 1993).
>
> De la lectura del expediente se extrae el hecho de que la actora a través de apoderado interpuso recurso de apelación para ante el Sr. Ministro de Educación de "la selección de las cuatro (4) vacantes sometidas a concursos público de antecedentes académicos y profesionales, en cuanto excluye de la misma a mi representada, (léase sra. AMINTA PELLICOT) a pesar de haber ocupado la mencionada educadora el primer lugar en cada una de las cuatro (4), vacantes sometidas a concurso ..." (Ver foja 27 y 28). Siendo que el acto jurídico que decidió esta impugnación (acto originario) lo es la Resolución No. 25 de 3 de junio de 1993, suscrita por el Sr. Ministro de

Educación y la Secretaria General de ese Ministerio (Ver p. 22 hasta la 24 inclusive).

Es del caso indicar que no existe una instancia superior luego de haber sido resuelta mediante la resolución ministerial precitada la impugnación efectuada por la Sra. PELLICOT a través de apoderado legal. Y es que la actora recurrió directamente para ante el Ministro de Educación impugnando "la abstención del Sr. Ministro de Educación de seleccionarla para ocupar la vacante de Supervisora de Educación Primaria de Panamá, sometida a concurso público" (ver. foja 27-30).

Es menester transcribir a este efecto el artículo 17 de la Ley 12 de 1956 tal cual fue modificado por el artículo 10 de la Ley 82 de 29 de noviembre de 1963:

"Artículo 17: Los concursos para llenar las vacantes permanentes de los maestros o profesores se harán en el mes de febrero. Los concursos se harán cada vez que se produzca la vacante, una semana después de haberse tenido conocimiento de la misma.

Inmediatamente después de examinados los méritos de cada candidato por los procedimientos que las disposiciones legales establezcan sobre el particular, la Dirección de Personal o la Junta de Personal, según sea el caso, presentará al Ministro de Educación una terna con los nombres de las personas idóneas que ocupan los tres (3) primeros lugares, a fin de llenar los puestos vacantes, permanentes o interinos.

La Dirección de Personal o la Junta de Personal, según sea el caso, antes de certificar la terna, notificará a cada interesado el lugar que ocupó, según los resultados del concurso. Este podrá solicitar la reconsideración en el plazo de tres (3) días, a partir de la notificación".

Se desprende, pues de la excerta que la primera instancia en este tipo de asuntos se ventila ante la Dirección de Personal o Junta de Personal del Ministerio de Educación, solicitando reconsideración de lo actuado en la selección de los concursantes y la integración de las ternas respectivas.

La actora permitió este procedimiento, acudiendo directamente en alzada para ante el Ministro de Educación (fojas 27 hasta la 30 inclusive) impugnación sobre la cual recayó resolución ministerial No. 25 de 3 de junio de 1993, que causó estado, agotándose así la vía gubernativa.

De esta manera nosotros no observamos cómo puede, en el presente caso, atacarse validamente el Decreto No. 156 de 21 de mayo de 1993, firmado por el Presidente de la República y el Ministro de Educación, ya que no se cumple con el requisito "sine qua non", antes explicado, o sea, no es este el acto administrativo originario que causa estado y por tanto, no es susceptible de ser atacado mediante una demanda de Plena Jurisdicción, como intenta, indebidamente, la actora" (fs. 53-56).

A este recurso se ha opuesto la parte demandante expresando lo siguiente:

"1o.) Que el apelante ha hecho un equivocado planteamiento de la situación jurídica que se debate; la cual no se compadece con la letra y el espíritu del Artículo 25 de la Ley 12 de 1956, el cual estipula el procedimiento para invalidar los nombramientos hechos en contravención a las normas de selección establecidas, en un plazo de quince (15) días contados desde la notificación o publicación del Decreto correspondiente, sin perjuicio de su derecho a interponer recurso contencioso administrativo dentro de los plazos legales.

2o.) Por consiguiente, la actora, se ha concretado a ajustar su acción a las exigencias del mencionado Artículo 25; ya que tratándose de nombramientos, éstos sólo pueden efectuarse mediante Decretos Ejecutivos, los cuales por su naturaleza, al no admitir recurso alguno, causan estado; y por ende, permiten ocurrir, sin más trámite a la jurisdicción Contencioso-Administrativa. No se trata, como erradamente supone el Sr. Procurador de la Administración, de cualquier acto, sino del que figura tipificado en el Artículo 25, tantas veces citado, circunstancia que lo convierte en un caso de evidente excepción" (fs.).

Evacuados los trámites de ley, el resto de los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada interpuesta, previas las siguientes consideraciones.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, no le asiste razón al señor Procurador de la Administración cuando afirma que la demandante no ha impugnado el acto administrativo originario o que causa estado.

Del estudio de las constancias procesales se desprende que el Ministerio de Educación sometió a concurso seis (6) vacantes para cargos de Supervisión para educadores en servicio. En estos concursos participó Aminta Pellicot. Luego de la evaluación del concurso, la Junta de Personal preparó las ternas respectivas para cada cargo concursado con los aspirantes que obtuvieron las 3 puntuaciones más altas, entre las cuales estaba Aminta Pellicot y posteriormente las remitió al Ministro de Educación para que procediera a seleccionar los candidatos que debían ser objeto de nombramiento por el Órgano Ejecutivo. El Ministro de Educación hizo la selección y con posterioridad se emitió el

Decreto Ejecutivo No. 156 de 21 de mayo de 1993, mediante el cual se hicieron nombramientos correspondientes, entre los cuales no está el de la demandante.

El resto de los Magistrados de la Sala consideran que dicho decreto ejecutivo constituye el acto originario -que causa estado- en el presente proceso, ya que mediante el mismo se nombra a las varias educadoras en las posiciones de supervisión sometidas a los concursos en los cuales participó la demandante AMINTA PELLICOT, quien no fue nombrada en ninguno de estos cargos.

A juicio del resto de los Magistrados de la Sala, la Resolución No. 25 de 3 de junio de 1993, expedida por el señor Ministro de Educación, no es el acto originario, como lo ha manifestado el señor Procurador en la sustentación de su recurso de apelación, ya que mediante la misma se resuelve una impugnación promovida por el apoderado de la señora PELLICOT contra la selección de los candidatos para ocupar las vacantes de los cargos de Supervisión de Educación Primaria sometidas al concurso No. 11-1C-92. A juicio del tribunal de alzada, el acto originario es el Decreto No. 156 de 21 de mayo de 1993 cuya declaratoria de ilegalidad se pide, ya que es el acto que puede impugnarse por la vía contencioso administrativa, de acuerdo con lo preceptuado en el artículo 25 de la ley 12 de 7 de febrero de 1956 (por la cual se crea la Dirección de Personal del Ministerio de Educación y se modifican algunos artículos de la Ley 47 de 1946). Esta norma dispone que cualquier persona puede pedir la reconsideración de los nombramientos, ascensos, descensos o traslados que se efectúen en contravención de las normas de selección o de las disposiciones legales, en un plazo de quince (15) días, contados desde la notificación o publicación del decreto o resuelto correspondiente, sin perjuicio de su derecho a interponer ulterior recurso contencioso administrativo dentro de los plazos legales.

Por tanto, el resto de los magistrados de la Sala estiman que debe confirmarse la resolución de primera instancia.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 26 de julio de 1993 por la cual se admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio F. Barba, en representación de AMINTA PELLICOT contra el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministro de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. ÁNGEL PADILLA BÉLIZ, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA R. LÓPEZ DE MARTÍN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO.1 DE 29 DE MARZO DE 1989, Y LA NO.2 DE 10 DE ABRIL DE 1989, DICTADA POR LOS FISCALES SUPERIORES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

Encontrándose en etapa de decidir el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción, promovido por Cecilia López de Martín contra los Fiscales Superiores del Primer Distrito Judicial de Panamá esta Sala considera que son aplicables al presente caso el artículo 52, el artículo 98 numeral 8 y la palabra "subsidiaria" del numeral 9 y el artículo 200 del Código Judicial.

El texto de estas normas es el siguiente:

"ARTICULO 52: El Estado responderá subsidiariamente cuando los funcionarios judiciales sean declarados responsables en el ejercicio de sus funciones y resulten insolventes.

ARTICULO 98: A la Sala Tercera le están atribuidos los procesos que se originen por actos, omisiones, prestaciones defectuosas o deficientes de los servidores públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos o autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas.

En consecuencia, la Sala Tercera conocerá en materia administrativa de lo siguiente:
...
8. De las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule;

9. De las indemnizaciones por razón de la responsabilidad subsidiaria del Estado, y de las restantes entidades públicas, en virtud de daños o

> perjuicios que originen las infracciones en que incurra en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerlas cualquier funcionario o entidad que haya proferida el acto administrativo impugnado;
>
> ARTICULO 200: Además de las sanciones penales y disciplinarias que establezca la Ley, los Magistrados y Jueces responderán por los perjuicios que causen a las partes en los siguientes casos:
>
> 1. Cuando proceden con dolo, fraude o en forma arbitraria;
>
> 2. Cuando rehusen, omitan o retarden injustificadamente una resolución que deben dictar de oficio o a requerimiento de parte; y,
>
> 3. Cuando violen la Ley por ignorancia inexcusable.
>
> La responsabilidad que en este artículo se consagra se hará exigible en proceso separado ante el respectivo superior o la Corte Suprema, se tramitará en única instancia, pero en el primer caso tendrá recurso de apelación si su cuantía lo permite."

Estima la Sala que debe consultar al Pleno la constitucionalidad de estas tres disposiciones legales, en ejecución de lo previsto en el artículo 2548 del Código Judicial.

Estimamos que el Pleno de la Corte Suprema debe determinar si los artículos 52, 98 numeral 8 y la palabra "subsidiaria" del numeral 9 y el 200 del Código Judicial son compatibles con lo dispuesto en el artículo 203 de la Constitución.

El principio previsto en el artículo 203, numeral 2 de la Constitución es que la responsabilidad por actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones que ejecuten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales y municipales corresponde primariamente al Estado. Las normas cuya constitucionalidad consultamos parecen contener el principio opuesto en cuanto a los servidores judiciales y agentes del Ministerio Público ya que consideran que la responsabilidad del Estado por actos de estos funcionarios es subsidiaria y no principal como parece establecerlo el artículo 203 de la Constitución.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONSULTA AL PLENO de la Corte Suprema de Justicia la constitucionalidad de los artículos 52, 98 numeral 8 y la palabra "subsidiaria" del numeral 9 y 200 del Código Judicial.

Cúmplase.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE LÁZARO Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE ENRIQUE A.NASHBOURNE, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 13-91 DE 12 DE ABRIL DE 1991, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE VIVIENDA NO. 3, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Lázaro y Asociados, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, en representación de ENRIQUE A. ASHBOURNE, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución No. 13-91 de 12 de abril de 1991, emitida por la Comisión de Vivienda No. 1, acto confirmatorio y para que se haga otras declaraciones.

Acogida la demanda se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración por el término de ley, y se solicitó al Presidente de la Comisión de Vivienda No. 1 que rindiera un informe de su actuación en el término de cinco días.

El demandante alega que el acto administrativo ha infringido el artículo 41 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, en concepto de violación directa por falta de aplicación.

> "Artículo 41. No procederá lanzamiento por mora de un bien inmueble destinado para vivienda cuando el arrendatario o las personas que habitan en él no están en condiciones de pagar el canon de arrendamiento por enfermedad, falta de trabajo o por carencia de otras fuentes de ingresos no salariales, condiciones que deberán ser debidamente comprobadas por la Comisión de Vivienda respectiva".

La parte actora fundamenta el concepto de la infracción argumentando que la Ley 93 de 1973 es de orden público, y por tanto, la aplicación del artículo 41 no es opción de la Autoridad Administrativa, a la cual le corresponde tramitar Juicio de Lanzamiento, sino que es una obligación, ya que señala en forma clara que no procederá el lanzamiento por

mora en un establecimiento dedicado a vivienda cuando el arrendatario no está en condiciones de pagar el canon por falta de trabajo.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda, mediante Vista Fiscal No. 79 de 12 de febrero de 1993, expresó lo siguiente:

> "A nuestro juicio al comprobarse la situación real del demandante (falta de trabajo) mediante una evaluación realizada por la Trabajadora Social (v. fs. 11 y 12 exp. adm.) recomendándose en dicho informe darle un plazo perentorio para reubicación del actor; del contenido del expediente administrativo y el expediente principal no consta ningún documento jurídico que compruebe que se le concedió un tiempo perentorio al demandante para su reubicación, sino que sólo aparece la notificación de la Resolución 13-91 que decreta el lanzamiento el día 21 de mayo de 1991 mediante boleta No. 20498 (v. f. 13 exp. adm.).
> ... Por tanto, este Despacho estima que si bien el principio de legalidad que garantiza este tipo de proceso, está presente en los actos impugnados, al darse la morosidad, su procedente el reclamo y haberse acreditado la relación deudor-acreedor, el principio de justicia también milita bajo el amparo del artículo 41 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, vigente a la fecha y que no puede ser desatendido" (fs. 22, 24).

Encontrándose el proceso en estado de resolver, a ello proceden los Magistrados de la Sala.

La aplicación del artículo 41 de la Ley 93 de 4 de octubre de 1973, transcrito en esta resolución, norma que el recurrente estima violada, se complementaba con los artículos 52 y 54 de la misma Ley. Mediante estos artículos se creó el **Fondo de Asistencia Habitacional** y se estipuló que en el caso de mora por las causales contempladas en el artículo 41, los canones de arrendamientos adeudados le serían cancelados al arrendador, a su solicitud, a través del mencionado fondo, hasta por un período de 6 meses.

Como los Artículos 52 y 54 de la Ley 93 de 1973, fueron subrogados por la Ley 29 de 31 de diciembre de 1986, mediante la cual se excluyó de los pagos que debe hacer el Fondo de Asistencia Habitacional, los canones de arrendamiento adeudados en caso de mora por las causas contempladas en el artículo 41 ya citado, esta norma no puede aplicarse, porque los arrendatarios no están obligados a asumir la obligación de que fue liberado el Fondo de Asistencia Habitacional.

Adicionalmente, la Sala observa que el Fondo de Asistencia Habitacional pagaba los canones de arrendamiento adeudados hasta por un período de seis (6) meses; sin embargo, al momento de ser dictada la Resolución impugnada, No. 13 - 91 de la Comisión de Vivienda No. 1, el señor **ENRIQUE ASHBOURNE** adeudaba la suma de B/.1,885.00 correspondiente a **29 mensualidades** morosas, período que excede en demasía los seis meses que debía cubrir el Fondo de Asistencia Habitacional de acuerdo con el artículo 54 de la Ley 93 de 1973 antes de ser modificado por la Ley 29 de 1986.

Por todo lo expuesto, la Sala desestima los cargos de violación del artículo 41 de la Ley 93 de 1973, por la resolución impugnada.

Por consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución 13-91 de 12 de abril de 1991, emitida por la Comisión de Vivienda No. 1, por medio de la cual se decreta el lanzamiento del arrendatario, ENRIQUE ASHBOURNE, y en consecuencia niega las declaraciones pedidas por el demandante.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. ORLANDO CARRASCO, EN REPRESENTACIÓN DE BALBINA ROBLES AVILA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO NO.6 DE 26 DE FEBRERO DE 1993, EMITIDO POR LA JUEZ DEL TRIBUNAL TUTELAR DE MENORES, ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

EL Licenciado **ORLANDO CARRASCO** en nombre y representación de **BALBINA ROBLES AVILA**, ha interpuesto Recurso de Reconsideración contra del auto de 4 de mayo de 1993 proferido por este Tribunal Colegiado.

Es importante señalarle al recurrente que el recurso propuesto no es viable en estos tipos de procesos, dado que las decisiones de la Sala Contencioso-Administrativa son finales, definitivas y obligatorias, tal y como lo preceptúa el artículo 203, numeral 2 de la Constitución Política. La norma en cuestión contempla lo siguiente:

"Artículo 203. La Corte Suprema de Justicia tendrá, entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:
...
2. La jurisdicción contencioso-administrativa respecto de los actos, omisiones, prestación defectuosa o deficiente de los servicios públicos, resoluciones, órdenes o disposiciones que ejecuten, adopten, expidan o en que incurran en ejercicio de sus funciones o pretextando ejercerlas, los funcionarios públicos y autoridades nacionales, provinciales, municipales y de las entidades públicas autónomas o semiautónomas. A tal fin, la Corte Suprema de Justicia con audiencia del Procurador de la Administración, podrá anular los actos acusados de ilegalidad; restablecer el derecho particular violado; estatuir nuevas disposiciones en reemplazo de las impugnadas y pronunciarse prejudicialmente acerca del sentido y alcance de un acto administrativo o de su valor legal. Podrán acogerse a la jurisdicción contencioso-administrativa las personas afectadas por el acto, resolución, orden o disposición de que se trate; y, en ejercicio de la acción pública, cualquier persona natural o jurídica, domiciliada en el país.

Las decisiones de la Corte en ejercicio de las atribuciones señaladas en este artículo son finales, definitivas, obligatorias y deben publicarse en la Gaceta Oficial." (subrayado es nuestro)

En este mismo sentido, y más específicamente, el artículo 100 del Código Judicial establece lo siguiente:

"Las sentencias que dicte la Sala Tercera, en virtud de lo dispuesto en esta Sección, son finales, definitivas y obligatorias y no admiten recurso alguno; las de nulidad deberán publicarse en la Gaceta Oficial." (Subrayado es nuestro)

Las disposiciones antes transcritas se le aplican a este caso en particular, dado que a pesar de que la Resolución de 2 de diciembre de 1993 es un auto y no una Sentencia, el mismo es final y definitivo desde el momento en que ha resuelto la controversia planteada en la segunda y decisiva instancia que contempla la Ley de lo Contencioso Administrativo para tales efectos, por parte de mayoría de los Magistrados que componen este Tribunal Colegiado, con la intervención inclusive de un Magistrado dirimente. En consecuencia es claro que no debe admitirse el precitado recurso propuesto por la parte demandante.

Por las anteriores consideraciones, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley RECHAZA DE PLANO el recurso de reconsideración propuesto por el licenciado ORLANDO CARRASCO, en representación de BALBINA ROBLES AVILA, contra el auto de 2 diciembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DR. PEDRO PABLO AROSEMENA, EN REPRESENTACIÓN DE EMELBA DE REPETTO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA NOTA NO.439 D.R.C. DE 30 DE AGOSTO DE 1991, EMITIDA POR EL DIRECTOR DE LA REGIÓN CENTRAL DEL INSTITUTO PANAMEÑO AUTÓNOMO COOPERATIVO (IPACOOP), ZONA DE VERAGUAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Doctor **Pedro Pablo Arosemena** en representación de **EMELBA DE REPETTO**, ha interpuesto demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Nota N°439 D.R.C. de 30 de agosto de 1991, emitida por el Director de la Región Central del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (IPACOOP), Zona de Veraguas, y para que se hagan otras declaraciones.

El licenciado **Arosemena** en el petitium del libelo de la demanda esgrimió lo siguiente:

"Solicitamos que previo cumplimiento de los trámites legales correspondientes, la Honorable Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, haga las siguientes declaraciones:

1° Que es ilegal por tanto nula la orden contenida en la Nota N° 439 DRC-91, emitida por el Director de Región Central del IPACOOP de Veraguas, la cual se resuelve "DECLARAR INSUBSISTENTE la posición que ocupaba la Sra. EMELBA DE REPETTO en esa Institución, a partir del 1° de Septiembre de 1991" toda vez que dicha declaración de ilegalidad constituya JUS INTEGRUM IN RESTITUTIO, el pago de las Indemnizaciones: los salarios caídos y otros derechos de Estabilidad de la Sra. EMELBA DE REPETTO.

> II° Que es igualmente ilegal y por tanto nula, la Nota N°439 DRC-91 del 30 de Agosto de 1991, del DIRECTOR DE REGIÓN CENTRAL DEL IPACOOP DE VERAGUAS, por carecer de la Base Legal, al no atender a las normas disciplinarias, Reglamento Interno y Estatuto de Personal, máxime como normas que señalan que los funcionarios públicos del ESTADO gozan de la ESTABILIDAD y su conducta se rige por normas de carácter disciplinario, cuando hay faltas y otros actos tipificados como comportamiento del servidor público; que esta consecuencia conlleve el REINTEGRO Y PAGO DE INDEMNIZACIONES a mi Representada consagrado en las Normas Constitucionales en sus Artículos 203, 295 y 297 y normas concordantes.
>
> III° Por lo antes expuesto debe NEGARSE el ilegal fundamento de la Nota 439 DRC-91 que declara la Insubsistencia de la posición que ocupaba la Sra. EMELBA DE REPETTO en la Institución en mención; por lo que debe declararse la RESTITUCIÓN INTEGRA DE DERECHO y el correspondiente pago de los Salarios caídos a mi Representada; como consecuencia de la decisión ilegal y arbitraria de la Nota 439 DCR-91."

A estos efectos, el Dr. **Arosemena** considera que el derecho de estabilidad del cual a su parecer disfruta la señora **DE REPETTO** como funcionaria pública (21 años continuos e ininterrumpidas), consagrada en el Reglamento interno del I.P.A.C.O.O.P., ha sido desconocido y en consecuencia conculcado. Sobre este particular, el actor señala transgredidas los artículos 203, 295 y 297 de la Constitución Nacional así como los artículos 3, 4, 5, 7, 16, 19, 78, 84 y 85 del precitado Reglamento Interno de personal de la Institución Gubernamental demandada.

El Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (I.P.A.C.O.O.P) Zona de Veraguas, en su informe explicativo de conducta, esgrime básicamente los siguientes planteamientos como motivos justificativos de la declaratoria de insubsistencia de la señora **REPETTO:**

1° El comportamiento inconveniente e inadecuado de la interesada, que desembocó en constantes conflictos y controversias tanto con los superiores como con sus compañeros de labores.

2° El hecho que la nota N°439-DRC de 30 de Agosto de 1991, no debe ser el acto acusado de ilegal en este proceso, dado que la misma no es más que la comunicación o notificación que se le hace a la Sra. **REPETTO** de su destitución.

3° Que como consecuencia de lo anterior, la parte demandada en la presente litis deberá ser el Director Ejecutivo del I.P.A.C.O.O.P. como máxima autoridad de esta institución gubernamental, y no su Director Regional cuya área territorial abarca únicamente la Zona de Veraguas.

4° Aunado a lo anterior, asevera la entidad demandada que la parte actora no agotó la vía gubernativa en este litigio, puesto que la decisión del Director Ejecutivo no fue apelada ante su junta Directiva y que como corolario de lo expuesto, es improcedente referirnos a la existencia del invocado silencio administrativo.

Por su parte, la Procuraduría de la Administración se opuso a las pretensiones del actor, indicando que se ha aplicado la sanción administrativa correspondiente de acuerdo a la actuación de la señora **REPETTO** en su calidad de funcionaria pública. Argumenta igualmente el representante del Ministerio Público, que en Panamá no está vigente la carrera administrativa y que además, y con respecto a las disposiciones constitucionales señaladas como transgredidas, debe declararse inhibida de todo pronunciamiento esta Sala de la Corte Suprema, por carecer de competencia; ya que el control de la constitucionalidad le corresponde privativamente al pleno de la precitada Corporación de Justicia, a tenor del artículo 203 N°2 de la Constitución Nacional y del artículo 87 del Código Judicial.

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo entran a resolver el fondo de la controversia incoada.

Al analizar las circunstancias que caracterizan esta situación en particular, deseamos puntualizar lo siguiente:
En lo concerniente a los tres primeros cargos impetrados por parte del licenciado **Arosemena** consistente en la infracción, de los artículos 203, 295 y 297 de la Constitución Nacional, es indispensable aludir precisamente al texto del artículo 203 numeral 2 de la Constitución Nacional que expresamente le confiere facultades a este Tribunal colegiado para dictaminar en cuanto a la legalidad de los actos de la administración, tomando como parámetro de revisión a la ley, y no a nuestra Carta Magna, del cual se desprende que esta Sala de lo Contencioso adolece de competencia para determinar si la destitución de la señora **REPETTO** se llevó a cabo conforme a las disposiciones constitucionales; debido a que ello solamente lo puede ventilar el Pleno de esta Corporación de Justicia; no procediendo las acusaciones en cuestión.

En esta línea de pensamientos, observa la Sala que en lo atinente al resto que los artículos invocados en este legajo tendiente a enervar el acto impugnado, se evidencia que los mismos son traídos a colación, dado que dichas normas contemplan el procedimiento que supuestamente debe realizar la institución demandada para sancionar a sus funcionarios por las faltas que cometieran, así como la cuestionable estabilidad a lo cual en opinión del demandante tienen derecho dichos adscritos del I.P.A.C.O.O.P.

Veamos el texto de los artículos del Reglamento Interno del I.P.A.C.O.O.P de los cuales estima el recurrente obtener la reparación de sus derechos:

"Artículo 3:
Las personas al servicio del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo, son Servidores Públicos y, como tales, están sujetos a las disposiciones contenidas en:
a- El Título XI de la Constitución Nacional;
b- Las Leyes que les sean aplicables; y
c- ESTE REGLAMENTO INTERNO.

Artículo 4:
La Dirección Administrativa del Instituto a través del Departamento de Personal, será la Unidad Administrativa responsable de:
a- La Correcta y Justa aplicación e interpretación de éste Reglamento.
...
c- Velar por los Directores de Línea y Regionales, para que éstos cumplan las obligaciones de dar a conocer y ejecutar entre sus subalternos las disposiciones de este Reglamento.

Artículo 7:
En los aspectos concernientes al nombramiento, selección, remuneración, ascensos, licencias, traslados, despidos jubilación del personal, se observaran las disposiciones legales vigentes que son aplicables a los Servidores Públicos, incluyendo sus adiciones y reformas en materia de administración de personal y regulación de las profesiones.

Artículo 16:
El Director Ejecutivo tendrá la máxima autoridad y responsabilidad del mando y administración de los asuntos y actividades de la Organización.

Artículo 19:
Los empleados al servicio del Instituto tendrán los siguientes derechos:
a- ESTABILIDAD EN EL EJERCICIO DEL CARGO, salvo los casos de remoción por causa determinada en la LEY y el REGLAMENTO INTERNO, mediante el procedimiento que ésta y los reglamentos señalan al efecto.

Artículo 78:
Las faltas graves serán sancionados con:
a- Manifestación escrita, con copia al expediente;
b- Multa hasta por quince Balboas (B/.15.00)
c- Suspensión temporal del cargo, sin goce de sueldo;
d- Descenso o rebaja de categoría;
e- Destitución del Cargo.

Artículo 84:
Las destituciones y descensos de categoría de los empleados serán hechas POR LA AUTORIDAD NOMINADORA, una vez que CONCLUYA LA INVESTIGACIÓN Y SE COMPRUEBEN LOS CARGOS IMPUTADOS o cualesquiera de las siguientes causales
...

Artículo 85:
En los casos contemplados en el Artículo anterior, el jefe inmediato o la respectiva UNIDAD ADMINISTRATIVA PRACTICARA LA INVESTIGACIÓN SUMARIA que no durará más de 60 días hábiles pasados los cuales se pondrá en conocimiento del empleado los CARGOS QUE SE LE HACEN, para que lo conteste en un plazo no mayor de 15 días hábiles. Pasado este término, el Jefe Inmediato, o la Unidad Administrativa, DETERMINARA Y RECOMENDARA LA SANCIÓN A LA AUTORIDAD NOMINADORA, quien tomará las medidas disciplinarias correspondientes.

Como expresamos anteriormente, las normas invocadas como conculcadas establecen supuestamente el derecho de estabilidad a la cual acceden los funcionarios del I.P.A.C.O.O.P. en opinión del actor. A estos efectos debemos recordar, que tal como esgrime el Sr. Procurador de la Administración, en Panamá no existe la denominada carrera administrativa, y el Instituto Panameño Autónomo Cooperativo carece de una ley especial que provea a sus funcionarios de tal privilegio.

En nuestro país, y a manera de excepción, ciertas entidades estatales y gremios disfrutan de los beneficios de la estabilidad cuando la misma es consagrada mediante una ley formal; ya que si dicha estabilidad es plasmada o reconocida solamente a través del Reglamento interno de una institución determinada, la misma no amparará al funcionario lesionado, quien continuará siendo de libre nombramiento o remoción. El tenor del artículo 757 del Código Administrativo nos indica que en caso de contradicciones se preferirá lo estatuido por una ley ante lo preceptuado en un reglamento.

Aunado a lo anterior, es evidente que tampoco puede considerarse eficaz que la ley delegue en la facultad reglamentaria del Ejecutivo, la capacidad o la legitimidad de consagrar o no los beneficios de la estabilidad a favor de un determinado grupo de funcionarios públicos, ya que las contradicciones y discrepancias entre las disposiciones de rango legal y el reglamento interno de personal, invariablemente continuarán; primando en todo momento lo preceptuado en la ley que en lo concerniente al I.P.A.C.O.O.P. omitió notoriamente el delicado tema de la estabilidad de sus adscritos.

Así las cosas, se colige que si la Ley no establece específicamente lo atinente al procedimiento para sancionar a un funcionario, así como las diversas sanciones aplicables a cada situación en particular, mal podrían invocarse éstas o solicitarse su ejecución, dado que desde el perfil del principio de la legalidad, tales categorías de sanciones y procedimientos son inexistentes. Es preciso recordar, que los funcionarios públicos únicamente pueden realizar aquellos actos que les permita u ordene la Ley expresamente, y no otras divergentes.

Todo lo expuesto implica que el recurrente no puede aducir el Reglamento Interno del I.P.C.O.O.P. como fundamento para su restitución, puesto que el mismo no lo ampara, no lo protege y en consecuencia, es inaplicable frente a situaciones contrarias derivadas de una norma con rango de Ley.

En mérito de lo expuesto, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Nota N°439 D.R.C. de 30 de agosto de 1991 impugnada mediante la demanda de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Pablo Arosemena en representación de EMELBA DE REPETTO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO BOLÍVAR CANO EN REPRESENTACIÓN DE TEÓFILO MORENO PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 14 DE OCTUBRE DE 1991, DICTADA POR LA DIRECTORA DEL COLEGIO SECUNDARIO PRIMER CICLO DE DAVID, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Licenciado BOLÍVAR CANO, actuando en nombre y representación de **TEÓFILO MORENO**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el acto contenido en la Resolución de 14 de octubre de 1991, dictada por la Directora del Colegio Secundario PRIMER CICLO DE DAVID, y para que se haga otras declaraciones.

Acogida la demanda se le corrió traslado de la misma al señor Procurador de la Administración, por el término de ley y se solicitó al funcionario demandado que rindiera un informe de su actuación en el término de cinco días.

El Procurador de la Administración al contestar la demanda, mediante Vista Fiscal No.235 de 15 de mayo de 1992 (fs. 51-54), se opuso a las pretensiones del recurrente.

Por su parte, el funcionario demandado, en cumplimiento de lo solicitado, rindió informe explicativo de su actuación en los siguientes términos:

> "Se efectuó la investigación de rigor, determinándose que había graves indicios de comisión de falta por parte del profesor Moreno, y dictándose en consecuencia la suspensión provisional de su cargo y de sus salarios hasta tanto se resuelva el caso, de conformidad con el artículo 141 de la Ley No. 47 de 1946, Orgánica de Educación.
>
> En este sentido el educador Teófilo Moreno está siendo sujeto de un expediente, el cual está sometido a las disposiciones legales que rigen esta materia, tal como lo ordena el artículo 129 y siguientes de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación."

El recurrente estima violado el artículo 133 de la Ley 47 de 1946 (Orgánica de Educación), el cual consagra que toda **sanción** dispuesta contra un miembro del personal docente será dictada por escrito en forma de resolución y deberá expresar claramente los motivos y fundamentos legales; agrega además, que el interesado se le conceden 24 horas desde el momento de la notificación para que apele ante el superior jerárquico.

En segundo lugar el demandante alega que el acto administrativo impugnado ha infringido el artículo 141 de la Ley 47 de 1946 (Orgánica de Educación), ya que "la citada Ley establece que sólo cuando se requiera una medida rápida por falta pública o de escándalo social se puede suspender el funcionario, no obstante deben llenarse inmediatamente los demás requisitos que la Ley establece y ellos son el Derecho a un Juicio justo; pero es el caso que hasta la fecha al Demandante no se le ha concedido medio alguno de impugnación". Agrega el recurrente que la medida fue proferida después de haberse iniciado una investigación, cuando ésta sólo puede tomarse en los casos en que se requiera una acción rápida.

El representante del Ministerio Público sobre estos cargos de ilegalidad expuso que no le asiste razón al demandante toda vez que se cumplió con los trámites legales, tales como queja presentada por la madre de la estudiante ofendida, declaraciones rendidas por la niña, sus compañeros y el Profesor Moreno, y luego de ponderar estas pruebas se dictó la suspensión provisional impugnada; y que el hecho de que no se haya presentado una denuncia penal contra el actor, no impide el proceso disciplinario instruido, ya que ante el escándalo público en que el Profesor Moreno se vio involucrado con una estudiante, tenían que adoptarse medidas que dejaran a salvo el prestigio del ramo de Educación.

Encontrándose el proceso en estado de resolver, a ello proceden los Magistrados de la Sala.

El acto administrativo impugnado dispone suspender provisionalmente de su cargo como docente al profesor **TEÓFILO MORENO ARRACERA**, así como suspenderle el pago de su salario hasta que se defina su responsabilidad ante los hechos que se le imputan. La medida cautelar se adoptó en virtud de la queja presentada en su contra por la madre de la alumna Yahaira Samudio, a quien incitó a cometer actos reñidos con la moral. Con motivo de esta queja rindió declaración la menor ofendida y el propio investigado y luego de valorar las pruebas recabadas por la Dirección, se consideró que existían los **indicios suficientes para aplicar las medidas de suspensión al docente implicado**, con el fin de salvar del desprestigio al Ramo de Educación.

En esa misma resolución se advirtió al afectado que esta medida preventiva no resuelve el fondo del negocio ni pone fin al mismo, por lo que no admite recursos de reconsideración y apelación.

En cuanto al primer cargo de violación, la Sala considera que no resulta aplicable a la resolución impugnada el artículo 133 de la Ley 47 de 1946, porque esta norma preceptúa que **las sanciones** que se impongan al personal docente y administrativo del ramo de educación serán dictadas por escrito, en forma de resolución motivada y fundamenta en derecho, y que esta resolución es apelable, pero la suspensión provisional del profesor **TEÓFILO MORENO ARRACERA**, de su cargo como docente y del pago de su salario, constituye una **medida cautelar** y no una sanción, y contra las resoluciones que imponen una medida cautelar, la ley Orgánica de Educación no consagra recurso alguno de impugnación en la vía gubernativa. Sin embargo, por tratarse de un acto administrativo, es recurrible ante la Sala Contencioso Administrativa.

Por tanto, la Sala considera que no se ha violado el artículo 133 de la Ley 47 de 1946.

El recurrente estima que la resolución impugnada, mediante la cual se decreta la medida de suspensión provisional del cargo y de sueldos contra el profesor **TEÓFILO MORENO ARRACERA** viola el artículo 141 de la Ley No. 47 de 24 de septiembre de 1946, Orgánica de Educación, en el cual se fundamenta.

Esta es una medida preventiva o cautelar, que constituye un acto autónomo que causa estado, que se decreta únicamente en los casos de faltas públicas o de escándalo social que requieran una acción rápida para salvar al Ramo Educativo del desprestigio consiguiente. Conforme a la norma que la autoriza, el funcionario a quien corresponda procederá a suspender de su cargo al inferior en falta y a llenar inmediatamente los demás requisitos que establece la Ley Orgánica.

La medida de suspensión fue dictada por la Directora del Primer Ciclo de David, superiora jerárquica del Profesor **TEÓFILO MORENO**, y funcionaria competente para proferirla, quien hizo la investigación sumarísima correspondiente, la cual consta de fojas 1 a 25 del expediente y contiene la declaración de la estudiante afectada; las declaraciones de otros estudiantes y profesores del plantel; la queja administrativa presentada por la madre de la menor Yajaira Samudio, señora Agustina Samudio; y la declaración rendida por el Profesor **TEÓFILO MORENO ARRACERA**.

La Sala considera que tratándose de una medida cautelar que puede ser decretada por el superior jerárquico del profesor **MORENO ARRACERA**, es decir, la Directora del Primer Ciclo de David, y que esta medida se decretó después de escuchar a las partes y de valorar las pruebas recabadas sumariamente, no existe violación alguna del artículo 141 de la Ley 47 de 1946.

En cuanto a la afirmación del actor, de que no se ha cumplido con el requisito del artículo 141 de la Ley 47 de 1946, que prevé que una vez decretada la medida cautelar, se deben llenar los demás requisitos establecidos por la Ley, la Sala observa que el recurrente no ha aportado prueba de que se han omitido los trámites legales posteriores a la suspensión y adicionalmente, en el informe de conducta presentado por la Directora del Primer Ciclo de David ella afirma que el educador **TEÓFILO MORENO ARRACERA** "está siendo sujeto de un expediente, el cual está sometido a las disposiciones legales que rigen esta materia, tal como lo ordena el artículo 129 y siguientes de la Ley 47 de 1946, Orgánica de Educación", los cuales consagran el procedimiento a seguir cuando exista una queja contra algún miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que deben desestimarse los cargos de violación del artículo 141 de la Ley 47 de 1946.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE NO ES ILEGAL**, la Resolución de 14 de octubre de 1991, dictada por la Directora del Colegio Secundario PRIMER CICLO DE DAVID.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE INTERPRETACIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. LUIS CEDEÑO MEREL, EN REPRESENTACIÓN DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ, PARA QUE LA SALA SE

PRONUNCIE SOBRE LA VIABILIDAD Y VALOR LEGAL DE UN ACTO ADMINISTRATIVO QUE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA SE HA NEGADO A REFRENDAR. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TRECE (13) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Procurador de la Administración ha interpuesto recurso de apelación contra el auto expedido por la Magistrada Sustanciadora el 18 de enero de 1993 mediante el cual se acoge la demanda contencioso administrativa de interpretación interpuesta por el Lcdo. Luis Cedeño Merel, en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá para que la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema se pronuncie sobre la viabilidad y valor legal de un acto administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá.

La Magistrada Sustanciadora admitió la demanda en vista de que la misma cumple, a su juicio, con los requisitos necesarios para su admisión.

El acto sobre el cual recae la petición de la Universidad Tecnológica lo constituye la "Escala Salarial y la Definición de los Niveles Correspondientes" elaborado dentro del Informe de la Comisión Permanente de Recursos Humanos, en sesión celebrada por el Consejo Administrativo de la Universidad Tecnológica de Panamá, el 17 de julio de 1992.

El Procurador de la Administración sustenta su recurso de apelación alegando que la vía utilizada por la Universidad Tecnológica de Panamá para obtener el reconocimiento de sus derechos no es válida toda vez que el contencioso administrativo de interpretación, tal como lo consagran el artículo 203 numeral 2° de la Constitución (Contencioso Administrativa) el 2 de diciembre de 1992, mediante el cual la Sala se pronunció en torno a la petición presentada por el Gerente General de los Casinos Nacionales, por la cual realiza el pago del 6% sobre la ganancia neta anual de los Casinos Nacionales a los funcionarios de dicha institución.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA) DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMAN la resolución fechada el 18 de agosto de 1993 mediante la cual se admite la demanda contencioso administrativa de interpretación interpuesta por el Lcdo. Luis Cedeño Merel, en representación de la Universidad Tecnológica de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROCESO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE INTERPRETACIÓN, INTERPUESTO POR EL LCDO. RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL, EN REPRESENTACIÓN DE LA LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA, PARA QUE LA SALA SE PRONUNCIE ACERCA DE LA VIABILIDAD JURÍDICA DE UN ACTO ADMINISTRATIVO EMITIDO POR LA CONTROLARÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **RODRIGO ANGUIZOLA SAGEL**, actuando en representación de la **LOTERÍA NACIONAL DE BENEFICENCIA**, ha promovido demanda para que la Sala se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del acto administrativo de la Contraloría General de la República consistente en la negativa tácita por silencio administrativo al refrendo de un pago por la suma de B/.11,270.00 al señor **OLMEDO SALINAS** en concepto de servicios prestados por presentaciones artísticas del Conjunto Típico de la Lotería Nacional de Beneficencia durante los años 1991 y 1992.

A foja 1 del expediente se aprecia la Nota No.93(120.01)1,110 de 1° de junio de 1993 mediante la cual el Director General de la Lotería Nacional de Beneficencia solicita a la Contraloría General de la República autorización para cancelar órdenes de pago al citado señor **OLMEDO SALINAS** en concepto de presentaciones del conjunto típico de la institución, correspondientes a los años 1991, 1992, y que ascienden a la suma de B/.11,270.00.

Posteriormente, se observa a foja 2 del expediente, la Nota No.93(120-01) 1337 de 23 de julio de 1993 en que se reitera la solicitud de autorización para el pago descrito, con fundamento en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984 Orgánica de la Contraloría, toda vez que la misma no había recibido respuesta alguna.

Transcurrido el término de dos meses sin que la petición presentada por la Lotería Nacional de Beneficencia obtuviese contestación, se acude ante la Sala Tercera para que ésta determine la viabilidad jurídica de la solicitud de orden de pago previamente descrita.

Manifiesta el demandante que la negativa tácita del refrendo de dicha orden de pago viola, en primer término, el artículo 74 de la Ley 32 de 1984.

La norma legal en mención es del tenor siguiente:

"Artículo 74. Toda orden de pago que se emita con cargo al Tesoro Nacional o contra cualquier otro tesoro público deberá ser sometida al refrendo de la Contraloría General, sin cuyo requisito no podrá ser pagada. A tal efecto la Contraloría verificará:

a) Que ha sido emitida de acuerdo con las disposiciones legales sobre la materia;
b) Que está debidamente imputada al presupuesto;
c) Que la partida presupuestaria respectiva tiene saldo disponible para cubrir la erogación;
ch) Que ha sido emitida para pagar bienes recibidos o servicios efectivamente presentados, salvo las excepciones establecidas en la ley; y
d) Que el beneficiario de la orden es titular efectivo del crédito."

Estima el recurrente que la infracción aducida se produce de manera directa por omisión, ya que la orden de pago ha cumplido con los requisitos legales establecidos en la norma transcrita. Estos es, emitida legalmente, cumple con el presupuesto, el beneficiario es el titular del crédito y el servicio se ha prestado.

La parte actora expone en los hechos de su demanda, que insistentemente se ha solicitado la autorización para el pago al señor **SALINAS** sin que medie solución, pese a que en el Presupuesto de la Vigencia Fiscal de 1993 están consignadas las partidas para los egresos del Conjunto Típico, por el orden de B/.11,290.00 y que dicho monto se consideró en el presupuesto con el fin de que se comprometiera con los gastos diferidos de los años 1991 y 1992 adeudados, en concepto de honorarios y viáticos.

La certificación visible a foja 5 del expediente emitida por el señor MARCO A. BOLAÑOS del Departamento de Presupuesto y Estadísticas de la Dirección de Finanzas de la Lotería Nacional de Beneficencia, señala claramente la circunstancia supraexpuesta, en el sentido de que se incluyó en el presupuesto de 1993 una partida para hacerle frente a los gastos de 1991 y 1992 en ese concepto.

La Sala Tercera debe indicar que el texto legal cuya infracción se impetra contiene los requisitos que deben contener las órdenes se pago que se giren con cargo al Tesoro Nacional, y que deben revestir tales órdenes de pago para que puedan obtener el refrendo respectivo por parte de la Contraloría General de la República, sin embargo tal norma no contiene como mandato imperativo que el refrendo debe hacerse de inmediato, al constatarse que tales requisitos concurren; sólo señala que éstos deben verificarse como elementos sustanciales para someter la orden al procedimiento de refrendo.

En el negocio bajo estudio, se puede apreciar que tales requisitos se han cumplido.

En efecto, consta en autos el número plural de gastos incurridos por el Conjunto Típico de la Lotería Nacional, los cuales se encuentran debidamente documentados con las órdenes de pago, indicación de los lugares y fecha de presentación, el nombre de la persona a quien se destina el pago, y se observa igualmente, que en las órdenes de pago remitidas a la Contraloría General se adjuntaba el listado de los integrantes y la invitación al evento respectivo.

El señor Contralor General de la República, al rendir su informe explicativo de actuación, fundamentó la objeción al pago solicitado aduciendo, en lo medular, que las órdenes de pago en referencia correspondientes a los gastos incurridos en los años 1991 y 1992 han sido negadas, ya que por ser de vigencia expirada, están bajo análisis y evaluación desde el punto de vista general del presupuesto del Estado, toda vez que las finanzas pública han registrado un comportamiento irregular, producto de una sobreestimación del saldo en caja del Presupuesto General del Estado, lo cual indujo a que esa institución adoptara una serie de medidas restrictivas.

Este Tribunal debe indicar, en este punto, que en lo relativo a las erogaciones ocasionadas por las presentaciones artísticas del conjunto típico en 1991, este gasto ya ha sido considerado como jurídico, y que se declaró viable jurídicamente la solicitud de pago por la suma de B/.3,490.00 mediante sentencia de 25 de octubre de 1993 emitida por la Sala Tercera.

Por ello basta examinar la viabilidad de las órdenes de pago correspondientes al año de 1992, y que ascienden a B/.7,780.00.

Dado que ya se ha acreditado como prueba en este cuaderno la existencia de la partida presupuestaria para hacerle frente a los gastos incurridos por el conjunto típico para el año de 1992, procede examinar las órdenes de pago giradas para ese período, en vías de determinar si cada una de ellas, individualmente, cumple con los requisitos legales pertinentes.

Sobre este particular considera la Sala, que las órdenes de pago distinguidas con los números 401; 531; 438; 532; 263; 560; 736; 709; 708; 718; 746; 769; 770; 807; 838; 859; 886; 892; 932; 985; 1046; 1062; 1237; 1314; 1430; 1463; 1530; 1520; 1557; 1565; 1583; 1593; 1612; 1642; 1643 y 1713 cumplen con los requisitos de ley para que las mismas sean refrendadas por el Señor Contralor General de la República, ya que se ha probado que el gasto para dicho pago está previsto en el presupuesto a través de las partidas 2.82.01.0.05.05.093 y 2.82.01.0.05.05.195 correspondientes a honorarios y viáticos respectivamente.

Sin embargo, la Sala observa que en lo relativo a las órdenes de pago No.257; 258; 259; 352; 394; 400; 537; 1013 y 1278 existe imprecisión en lo relativo al servicio

prestado y por quiénes, al no encontrarse debidamente documentados, pues no se remitió a Contraloría los nombres de las personas a quienes se destina el pago, ni cartas de invitación a las actividades u otros datos pertinentes que deben suministrarse con especificidad, para determinar si los músicos son o no empleados de la institución, y si los pagos se realizan en concepto de honorarios, viáticos, o ambos, y cuánto se destina a cada uno de los beneficiarios del pago. (cfr. cuadernillo adjunto al expediente).

En virtud de lo anterior, debe considerarse que no se cumplió con lo previsto en cuanto a estas órdenes de pago escasamente documentadas, por lo que las mismas no son viables jurídicamente.

Le asiste en este sentido razón parcial al señor Procurador de la Administración, quien mediante Vista Fiscal No.524 de 1° de diciembre de 1993 se opone a la viabilidad jurídica de las órdenes de pago en mención, cuando señala:

> "Por otra parte, el documento en mención (la orden de pago), contiene una seria deficiencia, toda vez que la misma no presta mérito ni hace prueba que en realidad la cantidad de bailarines a que se hace alusión, se presentaron, además del poco control que se lleva de los integrantes de dicho conjunto, los cuales van desde 2 hasta 30 por presentación."

Discrepa la Sala sin embargo, de los restantes argumentos esgrimidos por el Señor Procurador de la Administración en relación a las otras órdenes de pago, que sí han sido confeccionadas en debida forma, tal como el Tribunal ha examinado a todo lo largo del negocio, donde se aprecian los códigos presupuestarios a los que corresponden las partidas de los gastos, con el visto bueno de cada una de la direcciones de la Lotería Nacional.

Este Tribunal desea reiterar sin embargo, que el artículo 74 de la Ley 32 de 1984 no contiene un mandato imperativo para el Señor Contralor General de refrendar las órdenes de pago que se le presenten en debida forma, sino que detalla qué requisitos deben revestir las mismas para que puedan ser sometidas al procedimiento de refrendo.

En tal sentido debe la Sala indicar que no se ha transgredido el texto legal en mención, pues el mismo no obliga al refrendo sino que establece condiciones especiales en que deben presentarse órdenes de pago con cargo al Tesoro Nacional o cualquier otro Tesoro Público. Descarta la Sala por ende el cargo de ilegalidad aducido.

El segundo cargo de violación alegado por el recurrente, descansa en el artículo 77 de la Ley 32 de 1984, cuyo texto legal reproducimos a continuación:

> "Artículo 77. La Contraloría improbará toda orden de pago contra un tesoro público y los actos administrativos que afecten un patrimonio público, siempre que se funde en razones de orden legal o económico que amerite tal medida. En caso de que el funcionario u organización que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquélla o de éste, la Contraloría deberá cumplirlas o, en caso contrario, pedir a la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Corte Suprema de Justicia que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago o del cumplimiento del acto.
>
> No obstante lo dispuesto en el inciso anterior, el funcionario u organización improbado éste por la Contraloría, puede también someter la situación planteada al conocimiento del Consejo de Gabinete, de la Junta Directiva, Comité Directivo, Consejo Ejecutivo, Patronato o cualquiera otra corporación administrativa en la institución, a efecto de que ésta decida si se debe insistir o no en la emisión del acto o en el cumplimiento de la orden. En caso de que dicha corporación decida que el acto de emitirse o que la orden debe cumplirse, la Contraloría deberá refrendarlo, pero cualquier responsabilidad que del mismo se derive recaerá, de manera conjunta y solidara, sobre los miembros de ella que votaron afirmativamente. En caso de que la decisión sea negativa, el funcionario u organismo que emitió el acto o libró la orden se abstendrá de insistir en el refrendo. (La bastardilla es del memorialista)."

El actor al motivar la infracción imputada ha señalado:

> "La demandada, al negarse a refrendar o autorizar el pago de las presentaciones artísticas del Conjunto Típico de la Lotería Nacional de Beneficencia, guardando el denominado silencio administrativo. Es decir, sin dar respuesta alguna al requerimiento a propósito de la actora, viola directamente por omisión el artículo citado, puesto que por un lado no refrenda el pago a pesar de la insistencia al efecto y, por otro, no obstante la persistencia para que lo autorice, tampoco somete este asunto al parecer jurídico de la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera, de lo Contencioso Administrativo para que ésta se pronuncie acerca de la viabilidad legal o jurídica, o en derecho, de dicho acto administrativo."

Al confrontar la norma pretranscrita con la actuación del Señor Contralor General, la Sala concluye que el citado funcionario efectivamente ha incurrido en violación directa por omisión al texto legal, al no solicitar a la Sala, dentro del término oportuno, que ésta se pronunciara en cuanto a la viabilidad jurídica de las órdenes de pago cuya solicitud de refrendo ha insistido la Lotería Nacional de Beneficencia.

La parte final del primer inciso del artículo 77 es claro al indicar que en el caso de que el funcionario u organismo que emitió la orden de pago o el acto administrativo insista en el cumplimiento de aquella, la Contraloría deberá cumplirlo o pedir a la Sala Tercera de la Corte Suprema que se pronuncie sobre la viabilidad jurídica del pago.

La Sala estima que dicho trámite debe imprimirse inmediatamente, y no dilatar el momento de asumir una decisión al refrendo solicitado, o esperar que se configure la negativa tácita por silencio administrativo para que la viabilidad jurídica del pago cuyo cumplimiento se requiere sea sometido a la consideración de este Tribunal. Prospera en virtud de lo anterior el cargo imputado.

En atención a estas circunstancias no es preciso conocer del último cargo aducido, toda vez que en el negocio bajo estudio han quedado evidenciadas 3 situaciones medulares:

En primer término, que las órdenes de pago supracitadas, y seleccionadas por esta Sala, cumplen con los requisitos de ley para que proceda su refrendo conforme al artículo 74 de la Ley 32 de 1984; 2- que el citado gasto (que asciende a la suma de B/.6,395.00) ha sido debidamente autorizado mediante ley de presupuesto y que dentro de las partidas generales respectivas se ha incluido un renglón para cubrir dicha erogación; y 3- que la Sala Tercera ya ha señalado con anterioridad que la Lotería Nacional de Beneficencia puede desarrollar actividades culturales recreativas y de carácter folklórico que contribuyan a la propagación de nuestra cultura nacional, como las que celebra por intermedio de su Conjunto Típico, y que ello está contemplado en el artículo 30 de la Resolución No.86-06 de 2 de diciembre de 1986 que creó la Dirección de Desarrollo Social y Cultural de la Institución, por lo que si las erogaciones en este renglón están permitidas en el presupuesto del Estado, el desembolso en mención debe ser ejecutado por la Contraloría General de la República.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE SON VIABLES JURÍDICAMENTE las órdenes de pago No.401; 531; 438; 532; 263; 560; 736; 709; 708; 718; 746; 769; 770; 807; 838; 859; 886; 892; 932; 985; 1046; 1062; 1237; 1314; 1430; 1463; 1530; 1520; 1557; 1565; 1583; 1593; 1612; 1642; 1643 y 1713 elaboradas por la Dirección de Finanzas de la Lotería Nacional de Beneficencia a solicitud del Departamento Cultural en concepto de presentaciones del Conjunto Folklórico de la Institución, que ascienden a un total de B/.6,395.00, y en consecuencia el Contralor General de la República DEBE REFRENDARLAS; y DECLARA QUE NO SON VIABLES JURÍDICAMENTE las órdenes de pago No.257; 258; 259; 352; 394; 400; 537; 1013 y 1278 elaboradas por la Dirección de Finanzas de la Lotería Nacional de Beneficencia.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE DESACATO, INTERPUESTO POR EL LCDO. PABLO HASSÁN ROBLES, EN REPRESENTACIÓN DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CRÉDITO EL EDUCADOR, R. L., CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, POR NO CUMPLIR CON EL FALLO DE 19 DE NOVIEMBRE DE 1993, EMITIDO POR LA SALA TERCERA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA SOLICITUD DE INTERPRETACIÓN, PROMOVIDA POR EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE ÉSTA SE PRONUNCIARA SOBRE LA VALIDEZ LEGAL DE CIERTOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EMITIDOS POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Pablo Hassán Robles, actuando en nombre y representación de la **Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R. L.**, ha promovido **incidente para que se declare en desacato** al señor Jorge Endara Paniza, Director de la Caja de Seguro Social, por incumplimiento del fallo de 19 de noviembre de 1993 proferido por esta Sala dentro de la solicitud de interpretación prejudicial interpuesta por el Banco Nacional de Panamá, sobre la validez de algunos actos administrativos que debía ejecutar como consecuencia de lo actuado por el Director de la Caja de Seguro Social, en relación con los descuentos que esa entidad le hace a sus pensionados y jubilados para el pago de préstamos personales y comerciales otorgados por el Banco Nacional de Panamá.

Además, la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R. L. pide que se ordene al Director de la Caja de Seguro Social que restituya las sumas retenidas ilegalmente en concepto del 1.5% de "servicios contables", que se sirva practicar los descuentos autorizados por asociados jubilados y pensionados a favor de la Cooperativa incidentista y remitir sus respectivos montos y desglose contable, y que se ordene la inmediata suspensión de cualquier otro acto administrativo atentatorio contra esta asociación cooperativa.

Al resolver sobre la admisibilidad del incidente promovido, la Sala estima que el mismo es manifiestamente improcedente, ya que el fallo de 19 de noviembre de 1993 es una sentencia interpretativa, dictada en cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 11 del artículo 98 del Código Judicial que confiere a la Sala la competencia para conocer de la interpretación prejudicial acerca del alcance y sentido de los **actos administrativos** cuando la autoridad encargada de decidir un proceso o **la administrativa encargada de su ejecución**, lo solicite de oficio **antes** de resolver el fondo del negocio o **de ejecutar el acto**, según corresponda.

En ese mismo fallo, la Sala señaló -en consideración a otras peticiones que hacía la parte actora- que sólo debía resolverse "sobre el sentido y alcance de los actos administrativos que debe ejecutar el Banco Nacional de Panamá en virtud de los actos proferidos por la Caja de Seguro Social, y abstenerse de decidir si la Caja de Seguro Social está obligada a devolver las sumas retenidas en calidad de descuento, por no ser ésta una decisión propia del recurso contencioso de interpretación promovido, sino del contencioso de plena jurisdicción".

Esta decisión no constituye una "orden de hacer una cosa o de ejecutar algún hecho" cuyo incumplimiento constituya desacato que deba ser sancionado de conformidad con el ordinal 9 del artículo 1956 del Código Judicial, sino un pronunciamiento prejudicial acerca del valor legal de determinados actos administrativos que debe ejecutar el Banco Nacional de Panamá con motivo de actos emitidos por la Caja de Seguro Social.

Las comunicaciones hechas por la Caja de Seguro Social a la Cooperativa incidentista, presentadas como prueba, son actos administrativos que en el evento de que afecten derechos objetivos o subjetivos, deben ser demandados, previo cumplimiento de las formalidades de Ley, por la vía contencioso administrativa.

Además, la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R. L. no es parte ni tercero coadyuvante dentro del proceso contencioso administrativo de interpretación promovido por el Banco Nacional de Panamá y por tanto, no tiene personería legitimada para promover el presente incidente; y por último, esta Cooperativa, además de solicitar se decrete el desacato, pide se haga otras declaraciones relacionadas con asuntos que no pueden resolverse mediante un incidente, sino mediante un recurso contencioso administrativo.

Por todo lo expuesto, la Sala considera que el incidente promovido es manifiestamente improcedente, y en consecuencia, debe ser rechazado de plano, con fundamento en el artículo 697 del Código Judicial.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el Incidente de Desacato promovido por la Cooperativa de Ahorro y Crédito El Educador, R. L. contra el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE SANTANA, LEYDA COCIO, ALMA DE ARAÚZ Y LIDIA CABALLERO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO NO. 14 DE 2 DE JUNIO DE 1988, DICTADO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación de LEYDA COCIO, ALMA DE ARAÚZ y LIDIA DE CABALLERO, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 14 de 2 de junio de 1988, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

En la demanda presentada se solicita que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo No. 14 de 2 de junio de 1988, dictado por el Ministro Encargado de la Presidencia de la República y el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, mediante el cual se decreta **suspender los efectos de los contratos de trabajo, suscritos tanto por los educadores como por los trabajadores administrativos con los respectivos Centros de Enseñanza Particular, a partir del 12 de marzo al 29 de mayo de 1988.**

El Decreto Ejecutivo No. 14 de 1988 dispone además, "que las empresas o entidades educativas que hayan efectuado pagos en concepto de salario durante el período de suspensión, no podrán descontarlos con posterioridad al mismo."(fs. 2)

La parte actora estima violados los artículos 201 y 236 ordinales 3 y 5 del Código de Trabajo, cuyos textos transcribimos a continuación:

> "Artículo 201. Si el contrato de trabajo fuese suspendido por fuerza mayor o caso fortuito, el empleador tendrá la obligación de comprobar el hecho de que la constituye ante la Dirección General de Trabajo, dentro de los tres días siguientes a la fecha de la suspensión.
>
> Presentada la solicitud ante la Dirección General de Trabajo, ésta con la previa audiencia del Sindicato respectivo, o en su defecto, la representación de los trabajadores, se pronunciará dentro de los tres días

siguientes sobre la existencia o inexistencia de la causal alegada por el empleador".

"Artículo 236. Son aplicables las disposiciones de este Capítulo a los trabajadores que se dediquen a la enseñanza de una ciencia o arte en establecimientos docentes privados, de acuerdo con las siguientes normas:
...
3. El salario de un profesor de cátedra completa y el de un maestro de horario regular, no será en ningún caso inferior al salario básico inicial que, según su categoría, le correspondería si trabajase en un establecimiento de docencia oficial. Esta regla solamente se aplicará a los trabajadores que presten sus servicios en establecimientos de enseñanza pre-primaria, primaria, media académica, vocacional y universitaria.
...
5. Los períodos de suspensión de actividades docentes durante el año escolar o a la terminación de ésta serán remunerados, y excluyen las vacaciones legales en cuanto excedan de un mes, conforme al ordinal anterior. ..."

Antes de proceder al análisis de los cargos, debe tomarse en consideración que con posterioridad al Decreto Ejecutivo No. 14 de 1988, se dictó el Decreto Ejecutivo No. 10 de 1989 que decretaba la suspensión de los contratos de trabajo suscritos por los empleados docentes y administrativos de las escuelas privadas durante algunos días del mes de mayo de 1989, y que este decreto fue dejado sin efectos por el Decreto Ejecutivo No. 40 de 8 de septiembre de 1993, el cual dispone en su artículo primero: "DEJAR sin efecto el Decreto Ejecutivo No. 10 del 20 de junio de 1989, **que subroga el Decreto Ejecutivo No. 14 de 2 de junio de 1988**."

Es necesario aclarar que aún cuando el Decreto No. 40 expresa en su articulo primero que el Decreto Ejecutivo No. 10 de 1989 subrogó el Decreto Ejecutivo No. 14 de 1988, objeto de la presente demanda, en realidad no se dio tal subrogación porque ambos decretos ordenan la suspensión de contratos de los trabajadores administrativos y docentes de los centros privados de enseñanza en fechas distintas, y por tanto dicho decreto está vigente y puede ser impugnado.

En cuanto al primer cargo, el recurrente afirma que tratándose de un caso de fuerza mayor, tal como lo afirma el Decreto No. 14 de 1988, el artículo 201 del Código de Trabajo preceptúa que el empleador debe concurrir ante la Dirección General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en el término de los tres días siguientes a la suspensión del contrato de trabajo, a fin de que compruebe ante la Dirección los hechos que constituyen el motivo de suspensión, de lo contrario se estaría obviando el trámite ordenado por la ley laboral, y colocando en indefensión a los trabajadores y empleadores de los centros de enseñanza particular.

El señor Procurador de la Administración al contestar la demanda consideró que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se excedió en sus facultades al dictar el Decreto Ejecutivo No. 14 de 1988, "por cuanto que correspondía en todo caso al Ministerio de Educación diferir la fecha de inicio de labores escolares, lo cual hace que la medida que en ese sentido hubiese adoptado el Ministerio de Educación, si se constituía en un factor de fuerza mayor para los efectos del cumplimiento o incumplimiento de las relaciones de trabajo ..., tal situación concedía la oportunidad a los representantes legales de los mismos de acudir ante la autoridad laboral, para solicitar la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo. Se incurre así en una desviación de poder so pretexto de una reglamentación o de la toma de medidas en razón de una situación política transitoria, especialmente porque en ningún momento se suspendió el Código de trabajo ni sus disposiciones en forma parcial. De tal suerte que la suspensión adoptada por el Ministerio de Trabajo representa un desconocimiento al trámite previsto en la Ley para lograr el efecto deseado en ese decreto". (fs. 32-33)

Como se expresa en los considerandos del Decreto Ejecutivo No. 14 de 1988, por el cual se declara la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo en los centros de educación particular, éste fue dictado porque el inicio del año escolar fue prorrogado del 7 de marzo al 30 de mayo de 1988 mediante el Decreto No. 58 de 19 de mayo de 1988 dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación, situación que afectaba la relación de trabajo existente entre **los educadores** y **el personal administrativo** y **los establecimientos de enseñanza particular**, en lo relativo a las **obligaciones de prestar los servicios y de pagar los salarios**.

A juicio de la Sala, los razonamientos expuestos por la parte actora y por el señor Procurador de la Administración son válidos **sólo en lo referente a los trabajadores administrativos** cuyos contratos de trabajo les fueron suspendidos por el Decreto Ejecutivo impugnado, ya que el artículo 201 del Código de Trabajo **no es aplicable** a aquellos trabajadores que se dedican a la enseñanza de una ciencia o arte en establecimientos docentes privados. A estos últimos trabajadores la ley laboral les confiere el beneficio de que los "períodos de suspensión de actividades docentes durante el año escolar o a la terminación de éste" les sean "**remunerados**" (ordinal 5 del artículo 236 del Código de Trabajo).

En el caso de los trabajadores administrativos, la Sala estima que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social se excedió en sus facultades al dictar el mencionado decreto ejecutivo No. 14 de 1988, toda vez que conforme el artículo 201 del Código de Trabajo, corresponde a la **Dirección General de Trabajo** y no al Despacho Superior conocer y resolver las solicitudes de suspensión de los efectos de los contratos de trabajo, y es ante esta autoridad que **el empleador** debe probar el hecho que constituye la fuerza mayor, **con audiencia del sindicato respectivo, o en su defecto, de la representación de los trabajadores**.

De lo anterior se desprende además, que la suspensión de los efectos de los contratos de trabajo debe decretarse a petición de parte y no de oficio.

En este sentido la Sala considera que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social no puede mediante un decreto contra legem, suspender la remuneración ni de los trabajadores administrativos ni de los trabajadores docentes durante los períodos de suspensión de las actividades docentes decretadas por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación. Y en consecuencia debe resolverse que el Decreto Ejecutivo impugnado viola, por omisión, el artículo 201 del Código de Trabajo.

En cuanto al cargo de violación del ordinal 3 del artículo 236 del Código de Trabajo que se imputa al acto impugnado, el recurrente alega que existe una igualdad jurídica en las condiciones laborales entre los maestros al servicio del Estado y de los denominados colegios particulares, y en el caso que nos ocupa a los maestros al servicio del Estado se les pagó los salarios correspondientes al período de suspensión.

En autos no consta que los trabajadores al servicio del Estado hayan recibido su salario durante el período en que se suspendió los efectos de los contratos de trabajo de los educadores y docentes de los centros particulares de enseñanza, por lo que debe desestimarse este cargo de violación.

En cuanto a la violación del ordinal 5 del artículo 236 del Código de Trabajo, la Sala considera que el mismo ha sido violado, por falta de aplicación, porque mediante un decreto contra legem se suspendieron los efectos de los contratos de trabajo celebrados por los educadores con los centros de enseñanza privada, sin obligación para el empleador de pagar los salarios en vista de que el inicio del año escolar, programado para el 7 de marzo de 1988, se pospuso para el 30 de mayo de ese año por Decreto Ejecutivo No. 58 de 19 de mayo de 1988, lo que a juicio del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social representaba una circunstancia de fuerza mayor; pero es el caso de que el ordinal 5 del artículo 236 del Código de Trabajo señala que en el caso de **los trabajadores que se dediquen a la enseñanza de una ciencia o arte en establecimientos docentes privados**, los "períodos de suspensión de actividades docentes durante el año escolar **serán remunerados** y excluyen las vacaciones legales cuando excedan de un mes ..."

Por tanto, la Sala estima que el decreto impugnado es ilegal, ya que viola, por omisión, los artículos 201, y el ordinal 5 del artículo 236 del Código de Trabajo, y así debe declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivo No. 14 de 2 de junio de 1988, dictado por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA LCDA. EDNA RAMOS CHUE, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ARTÍCULOS 38, 39, 40, 41 Y 42 DE LA RESOLUCIÓN Nº.05 DE 4 DE AGOSTO DE 1993, EMITIDA POR LA JUSTA DE CONTROL DE JUEGOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

La Lcda. Edna Ramos Chue, actuando en su propio nombre y representación ha presentado demanda contencioso administrativa de nulidad, con el objeto de que se declaren nulos por ilegales, los efectos de los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Resolución No. 05 de 4 de agosto de 1993, emitida por la Junta de Control de Juegos.

Conjuntamente con la pretensión de la demanda, la parte actora solicita que la Sala decrete la suspensión provisional de los efectos de los artículos impugnados de la resolución No. 05 de 4 de agosto de 1993, emitida por la Junta de Control de Juegos que aprueba el nuevo Reglamento de Juegos de Suerte y Azar, de Actividades que originan apuestas y de Promociones Comerciales, aduciendo que el perjuicio notoriamente grave estriba en la vulneración del orden jurídico, toda vez que se equipara en categoría una ley reglamentaria a un acto ejecutivo reglamentario desconociendo así, la jerarquía de las normas y funciones atribuidas por la Constitución Política a los órganos del Estado.

Al examinar el criterio sustentado por la parte actora, la Sala considera que no se da el supuesto alegado para decretar la suspensión provisional del efecto de la resolución impugnada, dado que no basta sólo con enunciar que se ha producido un perjuicio notoriamente grave. A juicio de quienes suscriben, la demandante no ha probado en forma específica los perjuicios que puede sufrir, ni que los mismos sean de difícil o imposible reparación, requisito indispensable en esta materia, según lo establece el artículo 73 de la Ley 135 de 1943 y tal como lo ha reiterado esta Sala en jurisprudencia constante sobre esta materia.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA LA PETICIÓN DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL de los efectos de los artículos 38, 39, 40, 41 y 42 de la Resolución No. 05 de 4 de agosto de 1993 emitida por Junta de Control de Juegos.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE SOUSA, DE SOUSA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ENRIQUE PITTY CEBALLOS, PARA QUE SE DECLAREN NULAS POR ILEGALES, LAS DECISIONES DE 2 DE ABRIL Y DE 3 DE AGOSTO DE 1993, DE LA COMISIÓN DE AUTORIZACIÓN PREVIA DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA)

VISTOS:

La firma forense Sousa, De Sousa y Asociados ha presentado, en representación de Carlos Enrique Pitty Ceballos, demanda contencioso administrativa de nulidad con el objeto de que se declaren nulas por ilegales, las Decisiones de 2 de abril y de 3 de agosto de 1993, emitidas por la Comisión de Autorización Previa del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que aquélla pueda ser admitida.

Al examinar la demanda se observa que la misma no cumple con los requisitos establecidos en los artículos 44 y 46 de la Ley 135 de 1943, debido a que no se encuentran debidamente autenticadas las copias relativas al acto impugnado.

La autenticación del acto impugnado no es una formalidad superflua, sino un requisito de importancia exigido por ley. Observa quien suscribe que si bien es cierto que en el poder conferido a la firma Sousa, De Sousa y Asociados se le faculta entre otras cosas para formular peticiones previas como las que autorizan los artículos 46 y 73 de la Ley 135, no es menos cierto que en el libelo contentivo de la demanda no se formula de manera expresa la solicitud al Magistrado Sustanciador para que, previa admisión de la demanda, solicite en las oficinas en donde se encuentran ubicados los actos originales, copia autenticadas de los mismos.

Por último el Magistrado Sustanciador estima necesario hacer la aclaración que el artículo 46 antes mencionado, solamente establece la posibilidad de solicitar a la institución correspondiente la copia autenticada del acto impugnado, no así de cualquier otro documento.

En virtud de lo antes expuesto lo procedente es, pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Suscrito Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, **NO ADMITE** la demanda contencioso administrativa de nulidad, interpuesta por la firma forense Sousa, De Sousa y Asociados, en representación de Carlos Enrique Pitty Ceballos, para que se declaren nulas por ilegales, las Decisiones de 2 de abril y de 3 de agosto de 1993, emitidas por la Comisión de Autorización Previa del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. ROBERTO WILL GUERRERO, ACTUANDO EN NOMBRE PROPIO, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, EL RESUELTO DE PERSONAL NO.154-93 DE 6 DE MAYO DE 1993, MOVIMIENTO DE PERSONAL NO.5292 DE 3 DE MAYO DE 1993, NO.4144 DE 1 DE JUNIO DE 1993, NO.4142 DE 1O. DE JUNIO DE 1993, Y EL MOVIMIENTO DE PERSONAL DEL NOMBRAMIENTO DE IVÁN ZURITA CORDERO, SUSCRITOS POR EL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de los Magistrados que conforma la Sala Tercera de la Corte, de la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, interpuesta por el licenciado **ROBERTO WILL GUERRERO**, actuando en nombre propio, para que se declaren nulos por ilegales, el Resuelto de Personal No.154-93 de 6 de mayo de 1993, Movimiento de Personal N°5292 de 3 de mayo de 1993, N°4144 de 1 de junio de 1993, N°4142 de 1° de junio

de 1993, y el Movimiento de Personal del nombramiento de **IVÁN ZURITA CORDERO**, suscrito por el **INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE).**

El Magistrado Sustanciador estimó pertinente no admitir la demanda interpuesta por considerar que la misma adolecía de varios defectos.

Observa el Tribunal a-quo, que en el libelo de la demanda incoada, en la designación de las partes no se menciona al Procurador de la Administración como el funcionario a quien le corresponde la defensa del acto impugnado, en representación de la administración.

Añade además que el actor demanda simultáneamente, la ilegalidad de cuatro nombramientos de cuatro diferentes personas, en cuatro cargos distintos en el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación.

Por su parte, el actor en la sustentación de su alzada, se opone a la inadmisibilidad de la demanda Contencioso de Nulidad aduciendo que "la Ley NO LO EXIGE (sic) designar al, (sic) Procurador de la Administración, como PARTE DEMANDADA (sic), pues en estos procesos el funcionario no representa a la administración en la defensa del acto impugnado, como sí ocurre en la de PLENA JURISDICCIÓN. La actuación del Procurador se encauza a velar por el respeto y salvaguarda del ordenamiento jurídico de la Ley".

Con relación al segundo punto esgrimido por el Tribunal de Primera Instancia, considera el demandante que la norma exige que cada acto debe ser debidamente individualizado, pues la ley alude al aspecto adjetivo del acto administrativo y no sustantivo "o sea atiende a la cualidad o calidad del acto, vale decir su naturaleza No (sic) a la cantidad".

Encontrándose el proceso en ese estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte, entran a resolver la controversia planteada.

Considera este Tribunal de Apelaciones que efectivamente como señala el actor, en estos casos, de acciones de nulidad, al Procurador de la Administración no le corresponde la defensa del acto impugnado. Sin embargo, esta Sala ha reiterado en diversas y numerosas ocasiones que el Procurador de la Administración en los procesos Contencioso Administrativa de Nulidad actúa en defensa e interés del ordenamiento legal y por tanto forzosamente debe designarse en la demanda.

La omisión de tal designación impide que la demanda sea admitida, puesto que el criterio sostenido por la Sala Tercera ha recaído en el hecho que la designación del señor Procurador y la calidad en que actúa es un requisito exigible en las demandas incoadas en la Jurisdicción Contencioso Administrativa (v.g. fallo de 13 de julio de 1992, de 27 de julio de 1992).

Estima el Tribunal ad-quem que el demandante no cumplió con el artículo 43a de la Ley 135 de 1943 modificado por el artículo 29 de la Ley 33 de 1946 que preceptúa:

> "ARTICULO 43a. Si la acción intentada es la de nulidad de un acto administrativo, se individualizará éste con toda precisión; y si se demanda el restablecimiento de un derecho, deberá indicarse las prestaciones que se pretenden, ya se trate de indemnizaciones o de modificación o reforma del acto demandado o del hecho u operación administrativa que causa la demanda".

Como se aprecia el licenciado **WILL GUERRERO** demanda la ilegalidad de cuatro "actos-condición" mediante los cuales se realizaron los nombramientos de cuatro diferentes personas, es decir, cuatro actos administrativos diferentes, y el criterio inveterado de la Sala Tercera es que los actos administrativos impugnados deben individualizarse con toda precisión.

En este sentido, esta Sala de lo Contencioso Administrativo se ha pronunciado en diversas ocasiones (v.g. Auto de 27 de julio de 1992, Auto de 23 de noviembre de 1993) en el sentido que los actos acusados de ilegales deben presentarse de manera individual, lo que permitirá emitir una decisión de fondo en cada uno de los actos acusados de ilegalidad, toda vez que la Sala Tercera hace un análisis exhaustivo de las circunstancias particulares que rodean la emisión del acto acusado, por tanto, no sería procedente pronunciarse sobre la legalidad o ilegalidad de varios actos en un sólo proceso.

Por todas las consideraciones anteriores, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,CONFIRMA en todas sus partes el Auto de 26 de octubre de 1993 que NO ADMITIÓ la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad presentada por el licenciado ROBERTO WILL GUERRERO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LIC. CARLOS E. GONZÁLEZ, EN REPRESENTACIÓN DE NESTLÉ PANAMÁ, S. A. PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, EL ACTA N° 686 DE 13 DE ABRIL DE 1993, EMITIDA POR LA COMISIÓN ARANCELARIA DEL MINISTERIO DE

HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS E. GONZÁLEZ** actuando en representación de la empresa **NESTLÉ PANAMÁ, S. A.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nula por ilegal, el Acta N° 686 de 13 de abril de 1993, emitida por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

El Magistrado Sustanciador al proceder al análisis del libelo presentado, se percata que el actor ha incluido en su demanda, una solicitud especial con el fin de que se suspendan provisionalmente, los efectos del acto cuya nulidad se solicita.

En efecto, el recurrente al motivar conceptualmente las razones en que fundamenta la adopción de la medida cautelar urgente impretada, ha señalado:

> "Solicitamos la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado, en base a lo siguiente:
> **Numeral de Arancel Impuesto a Pagar**
>
> La partida 21.04.01.99
> Las Demás 40%
>
> La partida 21.04.01.04
> Salsa o Pasta de Tomate Condimentada 90%
>
> Esta diferencia de impuesto perjudica en forma directa, al productor y a la industria nacional de tomate, razón por la cual pedimos la suspensión provisional del Acta N°.686 del 13 de abril de 1993 emitida por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro".

La Sala Tercera procede al análisis de los argumentos esgrimidos por el actor, y sobre el particular desea externar lo siguiente:

La controversia sujeta al conocimiento de este Tribunal tiene su origen en la clasificación por parte de la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro, de un producto denominado "Salsa a base de tomate especial para spaguetti o pizza".

Observa la Sala que el producto en mención ha sido clasificado en 3 ocasiones distintas, en las cuales ha variado de la partida 21.04.01.99 a la 21.04.01.04 y posteriormente a la partida 21.04.01.99 nuevamente.

Dado que la diferencia entre una partida y otra estriba en que la protección a la industria nacional varía de un 40% de la partida 21.04.01.99 a un 90% de la partida 21.04.01.04.

El demandante ha señalado al presentar los motivos que ameritan la suspensión provisional de los efectos del acto administrativo impugnado, que la última clasificación del producto en la partida 21.04.01.99 ocasiona perjuicios a la industria nacional tomatera.

Este Tribunal estima en primer término, que los perjuicios aducidos por la parte demandante (que presume la Sala son de orden económico), sólo han sido enunciados, mas no comprobados, y no basta con aducir la existencia del perjuicio.

Es evidente que para poder apreciar si la ejecución del acto acusado conlleva un perjuicio notoriamente grave, es indispensable que se acompañen no ha demostrado de manera fehaciente, y en que medida se ha visto afectada la industrias nacional, máxime cuando según consta en el Acta N°686 contentiva del acto impugnado, se presentaron declaraciones en el sentido de que desde el año de 1990 se ha venido importando la "Salsa para spaguetti o pizza" en la partida 21.04.01.99 sin que la industria nacional hubiese reclamado la ocurrencia de perjuicios en su detrimento.

La Sala Tercera debe reparar en un aspecto aún importante: en las demandas contencioso administrativas de nulidad la Sala está obligada a examinar rigurosamente si el acto cuya suspensión se solicita, prima facie, parece conculcar de manera palmaria y ostensible el ordenamiento legal.

Tal circunstancia conllevaría justificadamente la adopción de la medida cautelar urgente impetrada, para evitar esa lesión potencial al orden jurídico. Ello indica que la violación al texto legal debe surgir manifiestamente del estudio que haga el Tribunal a las evidencias presentadas, aunque sin entrar a conocer el fondo de la transgresión aludida, por estar reservado tal análisis jurídico al momento de emitir una decisión de fondo del negocio.

En el caso subjúdice, no se aprecia una transgresión evidente a disposiciones de nuestro ordenamiento legal, pues la Comisión Arancelaria al clasificar el mencionado producto de una partida determinada, ha actuado según su criterio apreciativo, a los elementos científicos y técnicos de la clasificación, y en base a las facultades explícitas a ella otorgadas por el artículo 657 del Código Fiscal, por lo que esta Superioridad tendría irremediablemente que hacer un análisis de fondo de la controversia sujeta al litigio para determinar si la actuación de la Comisión Arancelaria está o no viciada de ilegalidad. En el evento de que así fuese, tal circunstancia no ha traslucido

de manera irrefutable en este negocio, por lo que según la apreciación discrecional de este Tribunal debe negarse la solicitud especial invocada.

Este juicio valorativo lo realiza la Sala en ejercicio de la potestad conferida por el artículo 73 de la Ley 135 de 1943, que puntualiza:

> "ARTICULO 73. El Tribunal de lo Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, sí, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave".

En consecuencia, la Sala Tercera de ka Corte suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ACCEDE a la solicitud de Suspensión Provisional de los efectos del Acta 686 de 13 de abril de 1993 emitida por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYO
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS CONTENIDOS EN LAS ESCRITURA N° 9845 DE 11 DE SEPTIEMBRE DE 1989 Y N° 10030 DE 15 DE SEPTIEMBRE DE 1989, AMBAS DE LA NOTARIA PRIMERA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.SALA TERCERA (CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Contralor General de la República, por medio de su apoderado judicial especial, el Lcdo. Amilcar Bonilla; ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declaren nulos por ilegales, los actos administrativos contenidos en las Escritura N° 9845 de 11 de septiembre de 1989 y N° 10030 de 15 de septiembre de 1989, ambas de la Notaria Primera del Circuito de Panamá.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si la misma cumple con requisitos exigidos por la ley para su admisión.

El demandante no ha dado cumplimiento a lo dispuesto en los numerales 1 y 4 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por el artículo 28 de la Ley 33 de 1946.

En primer lugar no se designan las partes en la demanda, ni se menciona al Procurador de la Administración como el funcionario a quién corresponde la defensa del acto impugnado en representación de la administración.

En segundo lugar, en el libelo no se realiza una exposición detallada del concepto de la violación alegado. Esta Sala ha señalado constantemente que el demandante, debe exponer las modalidades en que se haya producido la infracción literal de los preceptos legales la cual puede darse por violación directa, interpretación errónea o indebida aplicación .

Por todo lo antes expuesto, lo procedente, es pues, no admitir la demanda.

En consecuencia el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera (contencioso administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el Lcdo. Amilcar Bonilla en representación del Contralor General de la República, para que se declaren nulos por ilegales, los actos administrativos contenidos en las Escrituras N° 9845 de 11 de septiembre de 1989 y N° 10030 de 15 de septiembre de 1989, ambas de la Notaria Primera del Circuito de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JULIO C. MORALES, EN REPRESENTACIÓN DE IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A., Y EN EJERCICIO DE LA ACCIÓN POPULAR, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ACUERDO NO.11 DICTADO EL 20 DE ABRIL DE 1990 POR EL CONSEJO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Julio C. Morales** actuando en representación de **IBERIA, LÍNEAS AÉREAS DE ESPAÑA, S. A.**, ha presentado demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nulo por ilegal, el Acuerdo No.11 dictado el 20 de abril de 1990 por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá.

Considera el recurrente que el acto administrativo impugnado es violatorio de los artículos 17 numeral 9; 39; 75 numeral 48; 83 numeral 3; y 38, todos de la ley 106 de 1973, y del artículo 5 del Código Civil.

De la demanda instaurada se corrió traslado al Consejo Municipal del Distrito para que rindiese un informe explicativo de su actuación, encontrándose el mismo en el expediente contentivo de este negocio.

De igual forma se dio traslado al Señor Procurador de la Administración, quien consideró que debía desestimarse la pretensión del actor.

Una vez surtidos todos los trámites legales establecidos para estos procesos, la Sala Tercera procede al análisis de los cargos de violación aducidos.

El Acuerdo Municipal impugnado adolece de dos vicios fundamentales a juicio del actor, que podemos concretizar de la siguiente manera:

En primer término, establece una vigencia retroactiva para el impuesto que grava a las líneas aéreas dentro del renglón de "otras actividades lucrativas" , y que se extiende hasta el 1° de enero de 1987, a pesar que este Acuerdo fue sancionado por el Consejo Municipal el 20 de abril de 1990.

En segundo lugar, el mismo nunca recibió la debida publicación en la Gaceta Oficial, tal como exige imperativamente el artículo 39 de la Ley 106 de 1973.

El primer cargo de ilegalidad presentado descansa en la supuesta violación del artículo 17 numeral 9 de la Ley 106 de 1973.

Observa la Sala que por un error involuntario del recurrente, adujo como infringido el numeral 9 del artículo 17 de la Ley 106, cuando en realidad pretende señalar como transgredido, el numeral 8 del citado artículo, norma que es del tenor siguiente:

> "Artículo 17. Los Consejos Municipales tendrán competencia exclusiva para el cumplimiento de las siguientes funciones:
> ...
> 8. Establecer impuestos, contribuciones, derechos y tasas, de conformidad con las leyes, para atender a los gastos de la administración, servicios e inversiones municipales".

El demandante, al exponer el concepto de la violación alegada, ha señalado:

> "Esta norma ha sido infringida en forma directa por comisión, por el Consejo Municipal del Distrito de Panamá, pues si bien es cierto que dicha corporación edilicia está facultada, en forma exclusiva, por la ley para establecer impuestos, contribuciones y demás, no debe desconocer que tal facultad debe ejercerla de conformidad con lo que establece la ley. Y ocurre que la ley no lo faculta para establecer en forma retroactiva impuesto alguno, ni para diferir su vigencia a fecha anterior a la del propio acuerdo, pues esto constituye -si se hace- vicio de retroactividad."

Estima el Tribunal que debe examinarse tanto la disposición acusada como el concepto de infracción imputada, en asocio con los demás cargos de ilegalidad presentados por el recurrente, dado que en ello recae el punto medular de los vicios atribuidos al Acuerdo Municipal No.11 de 1990.

En efecto, los Consejos Municipales están facultados mediante Ley 106 de 1973 para establecer impuestos y otro tipo de tributos a nivel distrital, pero ello debe realizarse conforme a las leyes vigentes.

Dado que en las normas específicas relacionadas con la potestad tributaria normativa del Estado o de los Municipios no contienen disposiciones relativas a la retroactividad de las mismas, deben aplicarse las normas generales concordantes, tanto de la Constitución Nacional, como del Código Civil Panameño.

En este sentido debe hacerse énfasis en que estas disposiciones contemplan como principio genérico la no retroactividad de las leyes, salvo las excepciones que pueden ser contempladas por una ley, en que se autorice la retroactividad por razones de orden público, o en materia penal si éstas son favorables al reo. Salvo estas situaciones de excepción, que sólo pueden establecerse mediante **LEY**, no pueden expedirse normas con vigencia retroactiva en perjuicio de derechos adquiridos.

Los Consejos Municipales regulan la vida jurídica de los Municipios por medio de Acuerdos, pero tales actos están limitados, pues la potestad tributaria debe ejercerse de conformidad con el principio de legalidad, que sólo faculta a hacer aquello que la ley les permite.

En cuanto a este particular cabe recordar, que la Corte Suprema de Justicia a través de sentencia de 26 de febrero de 1993, en la demanda de Inconstitucionalidad propuesta por Alcibiades González reafirmó la situación en cuanto a la potestad tributaria de los Municipios, en el sentido de que ésta es derivada y limitada por la ley.

En ningún momento los instrumentos legales que regulan el funcionamiento y potestades del Consejo Municipal les faculta para expedir Acuerdos creando un tributo cuya carga impositiva recaerá sobre los sujetos pasivos de la obligación tributaria, y afectará un patrimonio que existía antes de que se hubiese definido el supuesto impositivo del gravamen. Se observa pues que el Acuerdo Municipal en estudio ha obviado la delimitación legal a la que hemos hecho referencia.

La Sala estima que la retroactividad de la carga impositiva definida en el Acuerdo Municipal No.11 ha desconocido o inadvertido uno de los supuestos o elementos de cualquier tributo, esto es, la creación del mismo tomando en consideración la capacidad contributiva del sujeto, y conectado el nacimiento de la deuda impositiva para la líneas aéreas a situaciones de hecho pasadas, sin importar si tales situaciones son reveladoras o no de la capacidad efectiva del contribuyente gravado, lo que podría causar una ruptura de la proporcionalidad que los cargas impositivas deben tener como premisa.

Estas situaciones han sido poco discutidas a nivel jurisprudencial o doctrinal en nuestro país, pero a nivel de derecho comparado podemos citar a José Luis Pérez de Ayala y a Eusebio González, quienes en su tratado de Derecho Tributario, sobre este tema han aportado:

> "El Derecho Tributario español y, consecuentemente, la Ley General Tributario, no recogió de un modo expreso el artículo 3.° del Código Civil, pero por estar el mismo incluido en el título preliminar de nuestro Código civil y también como una derivación lógica del artículo 20 de la Ley General Tributaria, hay que mantener la vigencia del mismo criterio que, por otra parte, está plenamente recogido en reiterada jurisprudencia por el Tribunal Supremo, afirmando que las leyes tributarias no tienen efecto retroactivo, salvo que dispusieron lo contrario.
>
> En esta jurisprudencia se llega, incluso, a establecer que el principio de la irretroactividad de las leyes tiene más fuerza en el Derecho Tributario que en el Derecho Civil, fundándose en el artículo 5.° de la Ley de Administración y Contabilidad de 1 julio 1911, norma que, aunque no se ocupa expresamente de la aplicación en el tiempo de las normas tributarias, al negar la posible aplicación extensiva o analógica de las mismas, entiende nuestro más alto Tribunal que impide de un modo especial la retroactividad de la ley tributaria, afectando a derechos adquiridos o hechos producidos con anterioridad, salvo que la propia Ley lo autorizase expresamente.
>
> Es interesante resaltar esta conexión que se establece en el Derecho Tributario español entre el principio de irretroactividad y la imposibilidad de interpretación extensiva o por analogía de la norma tributaria. Algún comentarista entiende que esta conexión es injustificada. Pero en cualquier caso pone de manifiesto cuál es el fundamento de aplicación que el principio de irretroactividad encuentra en el Derecho fiscal patrio: de una parte, el principio consagrado en el artículo 2.° del Código civil, y, de otra, la consideración de que la aplicación retroactiva puede subsumirse como una modalidad especial de la aplicación extensiva o por analogía de una ley tributaria, poco conforme a los criterios legales imperantes en nuestro Derecho Tributario positivo".(PÉREZ DE AYALA Y GONZÁLEZ, Eusebio. Curso de Derecho Tributario. Editorial de Derecho Financiero. Madrid, 1989, Tomo I, 5ª Edición págs. 73-74).

Por su parte, el artículo 38 de la Ley 106 de 1973, es claro al disponer que los Acuerdos de los Consejos Municipales serán de forzoso cumplimiento tan pronto sean promulgadas, salvo que se señale otra fecha para su vigencia, pero en ningún momento se autoriza al Consejo Municipal a expedir un Acuerdo con fecha de vigencia anterior a su sanción.

Como un defecto adicional a lo anotado en párrafos precedentes, observa la Sala que el Acuerdo Municipal No.11 de 1990, sancionado el 20 de abril de ese año, no había cumplido con el trámite de la obligatoria publicación en la Gaceta Oficial.

En este orden de ideas es pertinente citar el artículo 39 de la Ley 106 de 1973, que señala:

> "ARTICULO 39. Los Acuerdos se promulgarán por medio de su fijación en tablillas ubicadas en la Secretaría del Concejo en las de la Alcaldía y en las Corregidurías. Estos Acuerdos serán fijados por el término de diez (10) días calendarios a fin de que surtan sus efectos legales.
>
> Los Acuerdos referentes a impuestos, contribuciones, derechos, tasas y adjudicación de bienes municipales deben ser publicados en la Gaceta Oficial."

La Sala Tercera ha reiterado en situaciones similares a las que nos ocupan, que los Acuerdos Municipales referentes a impuestos (entre otros) deben ser publicados en la Gaceta Oficial (v.g. sentencias de 21 de junio de 1962; 22 de junio de 1966 y de 15 de enero de 1992).

Queda claramente expuesto por ende, que para su forzoso cumplimiento, los Acuerdos Municipales debe ser promulgados, y esto es la de darle la debida publicación formal al acto dispositivo, a fin de que este sea obligatorio y se ejecute su contenido.

Antes de la respectiva Publicación, los Acuerdos Municipales tienen existencia pero no rigen y por tanto no pueden ponerse en vigor sus disposiciones.

Hacemos este señalamiento, añadiendo que en autos no hay constancia de si a la fecha se ha realizado la publicación en mención. Mas ello no tiene mayores repercusiones en la decisión del negocio sub-júdice, puesto que el Acuerdo Municipal No.11 de 1990 se encuentra viciado sustancialmente, en virtud de la vigencia retroactiva asignada al mismo.

Esta formalidad, omitida al menos hasta el 30 de abril de 1991 (cfr. foja 11 del expediente), según consta al Tribunal en virtud de la certificación del Director de la Gaceta Oficial aportada por la parte actora, es un vicio que puede invalidar parcialmente un Acuerdo Municipal, esto es que no afecta la existencia o legalidad del mismo, sino su eficacia. En efecto, la falta de publicación sólo hubiese afectado parcialmente el Acuerdo citado si éste se hubiese expedido dentro de las premisas legales, pero la circunstancia del carácter retroactivo del mismo, produce la nulidad del acto, por las razones reiteradamente anotadas.

En virtud de lo anterior, proceden los cargos de ilegalidad imputados a los artículos 17 numeral 8, 38 y 39 de la Ley 106 de 1973, y no es necesario por lo expresado, conocer de los restantes cargos de transgresión legal aducidos por el actor.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES NULO, por ILEGAL, el Acuerdo Municipal No.11 de 20 de abril de 1990 emitido por el Consejo Municipal de Panamá.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PAGO PARCIAL, INTERPUESTA POR EL LCDO. ELÍAS DOMÍNGUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE AGRÍCOLA Y GANADERA BAYANO, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRES (3) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

En grado de apelación conoce el resto de la Sala Tercera de lo Contencioso, de la Excepción de Pago Parcial propuesta por el licenciado **ELÍAS DOMÍNGUEZ** en representación de **AGRÍCOLA Y GANADERA BAYANO, S. A.**, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el **BANCO NACIONAL DE PANAMÁ** a la empresa antes citada.

La resolución calendada el 8 de septiembre de 1993, que admite el incidente de excepciones antes descrito por parte del Tribunal a-quo, en esta oportunidad es impugnada por parte del Banco Nacional de Panamá, debidamente representado por la licenciada **ELSY DE VERNAZA**, como se observa a fojas 20 a la 24 del expediente bajo estudio.

El recurrente argumenta en su memorial contentivo de la alzada, dos situaciones bien definidas.

La primera de ellas se refiere a tenor del impugnante, a que supuestamente la excepción de pago fue presentada extemporáneamente, o lo que es igual decir, luego que transcurriera en exceso los ocho días de término preceptuado a manera general, para la proposición de las distintas excepciones, a la luz del artículo 1706 del Código Judicial.

Seguidamente se observa como derivación directa del señalamiento anterior esgrimido por el licenciado **DOMÍNGUEZ**, que debido a que precluyó el término antes indicado, que la excepción de pago en referencia debió estar acompañada por el recibo de pago correspondiente, y no solamente por las escrituras públicas N°342 de 10 de enero de 1989 y 11978 de 23 de agosto de 1989, que reflejan en su opinión, únicamente la existencia de un contrato de cesión de créditos con garantía hipotecaria. Para que operara eficazmente dicha cesión y se estimara que ocurrió el pago, dichos instrumentos públicos deben a su parecer inscribirse en el Registro Público, dado que no reposa en el expediente certificación alguna que compruebe lo contrario.

Por lo tanto, solicita el apoderado de la institución Bancaria que se rechace de plano por improcedente la excepción de pago parcial bajo análisis.

Por su parte, el licenciado **DOMÍNGUEZ** en representación de la sociedad **AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A.**, se opuso a las pretensiones del actor argumentando básicamente lo siguiente:

> "Quien suscribe, ELÍAS DOMÍNGUEZ, apoderado especial de la parte ejecutada y excepcionante a la vez, por medio del presente descorro el traslado de un recurso de apelación anunciado por la parte ejecutante, oponiéndome a la precitada apelación y solicitando la confirmación de la providencia admisoria de la Excepción de Pago Parcial, la cual está sustentada en prueba documental idónea, como lo es una Escritura Pública donde el Banco Nacional de Panamá se compromete a cancelar a CORPORACIÓN BEMAR, S. A. determinadas comisiones por la operación que realizó con el Banco de Iberoamérica y, a la vez, CORPORACIÓN BEMAR, S. A. cede al Banco Nacional dichos importes en

> favor de SOCIEDAD AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A. a fin de que le sean acreditados al préstamo que mediante este proceso se pretende ejecutar, negándole el reconocimiento de la obligación que el banco ejecutante asumió mediante Escritura Pública, la cual no ha sido anulada por autoridad jurisdiccional competente ni por todas las partes que en ella intervinieron, como lo manda el Libro Quinto del Código Civil.
>
> Por las razones expuestas solicito que se mantenga la providencia apelada, que dicho sea de paso no se encuentra dentro de las enumeradas en el artículo 1116 del Código Judicial como las resoluciones que pueden ser impugnadas mediante esta vía".

Por último, debemos añadir que previamente el Banco Nacional de Panamá mediante escrito de 1 de septiembre de 1993, manifestó su inconformidad en lo concerniente a la admisión de la excepción descrita, como reproducimos a continuación:

> "Advertimos que hemos recibido ese escrito por insistencia ya que consideramos que la excepción es extemporánea por cuanto el término de 8 días que da la ley ha transcurrido ya y dentro de él, interpusieron una excepción de fuerza mayor, la cual fue fallada en primera instancia y en apelación a favor del Banco; además la excepción que se permite con posterioridad a ese término es la de pago (no de pago parcial) y debe estar acreditado con el respectivo recibo de pago que tampoco aparece dentro de esos documentos.
>
> Por las razones expuestas, solicitamos que no se admita la excepción interpuesta, ya que la misma es solamente una cuestión dilatoria para impedir que el Banco pueda cobrar su acreencia, lo cual está tratando de hacer desde hace cerca de tres (3) años".

Encontrándose el proceso en este estado, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, entran a resolver, la situación jurídica sometida a nuestra decisión.

En lo que respecta a la prescripción alegada, es pertinente advertir que efectivamente reposa en el expediente principal en cuestión, tanto el memorial contentivo de la aludida excepción de pago y prescripción parcial presentado el 31 de agosto de 1993 ante el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, legible a foja 11 y 12 del presente legajo, así como la diligencia de notificación del auto ejecutivo de 1 de octubre de 1990, la cual se efectuó el 9 de noviembre del mismo año, visible a foja 81 del antecedente administrativo; siendo evidente que dicho incidente no se interpuso en tiempo oportuno; es decir, posterior al término de 8 días estatuido en el artículo 1706 del Código Judicial.

En esta línea de pensamientos, es preciso recordar el contenido del artículo 1768 del Código Judicial, que en relación a las excepciones permitidas en los juicios ejecutivos hipotecarios con renuncia de trámite, preceptúa lo siguiente:

> "ARTICULO 1768. Cuando en la escritura de hipoteca se hubiere renunciado a los trámites del proceso ejecutivo, el Juez con vista de la demanda y de los documentos que habla el Artículo 1758, ordenará la venta del inmueble con notificación del dueño actual del bien hipotecado; pero no se podrán proponer incidente ni presentar otra excepción que la de pago y prescripción. El pago puede efectuarse y comprobarse en cualquier estado del proceso. Si el ejecutado acreditare haber pagado antes de la interposición de la demanda no será condenado a pagar costas causadas. La prueba ha de consistir en documento auténtico, en documento privado o en actuación judicial de los cuales aparezca de manera clara que se ha efectuado el pago.
>
> Servirá de base para el remate, la suma fijada por las partes en la escritura de hipoteca. Si no se hubiere fijado precio al inmueble se aplicará lo dispuesto en el Artículo 1681. (el subrayado es nuestro)

Es pausible que no cabe la admisibilidad de esta excepción desde la perspectiva de la prescripción, ya que ella si debe proponerse dentro del término de 8 días contados a partir de la ejecutoria de la notificación del auto ejecutivo.

Por otro lado, en lo atinente a la excepción de pago parcial, es palmario que la excerta legal antes citada, no distingue la modalidad de pago que puede aducir el ejecutado dentro de estos procesos, como defensa tendiente a enervar la pretensión del actor. Es por ello que estimamos que es permisible interponer la excepción de pago tanto parcial como total de la obligación, aunado a que el deudor que incumplió con la obligación, tiene el derecho de comprobar que parte de la deuda adquirida ha sido cancelada, de modo que únicamente sea ejecutado por la cuantía que realmente adeuda, y no por otra suma superior. El no permitir la inclusión de excepciones de pago parcial en los procesos ejecutivos con renuncia de trámite, podría acarrear una cadena de injusticias, probablemente irreparables e irreversibles.

Sin embargo, dado que el memorial bajo estudio fue presentado ante la entidad ejecutante pasados los 8 días que preceptúa el antes aludido artículo 1706 del Código Judicial, es necesario que dicho incidente de pago parcial, sea acompañado como requisito indispensable de admisibilidad, de una prueba preconstituida y por demás definitiva, a tenor del texto del artículo 1710 de la precitada excerta legal. El actor propuso como medios probatorios en este caso en particular, lo siguiente:

> "PRUEBAS: Se aduce todo el expediente que contiene el proceso ejecutivo por cobro coactivo propuesto por el Banco Nacional de Panamá contra Sociedad Agrícola y Ganadera El Bayano, S. A. y otros. Presento copia autenticada de

las Escrituras Públicas números 342 y 11978 descritas en el libelo de la presente excepción. Presento copia de la carta fechada el 28 de agosto de 1989 de Corporación Bemar, S. A. al Banco Nacional de Panamá y copia de la carta de 12 de marzo de 1990 dirigida por el Banco Nacional de Panamá a la Sociedad Agrícola y Ganadera El Bayano, S. A.

INSPECCIÓN JUDICIAL: Pido que, con el apoyo de peritos o testigos actuarios, se practique una Inspección Judicial a los archivos del Banco Nacional de Panamá y del Banco de Iberoamérica, a fin de constatar el destino que el Banco Nacional de Panamá le dio a la suma de B/.1,200,000.00 depositados en el Banco de Iberoamérica, según lo pactado en las Escrituras N°342 de 10 de enero de 1989 y N°11,978 de 23 de agosto de 1989".

Notoriamente no es dable aceptar como prueba preconstituida la Inspección Judicial solicitada por el interesado, ya que la naturaleza de la misma supone el desplazamiento del Tribunal al lugar señalado por el excepcionante, contraviniéndose el espíritu de lo estatuido en el supracitado artículo 1710 del Código Judicial, que reproduciremos a continuación para mayor ilustración:

"ARTICULO 1710. Tratándose de la excepción de pago si ésta se propone dentro de los ocho (8) días siguientes al término previsto en el artículo 1706, este puede acreditarse mediante los medios comunes de prueba. Si se invoca con posterioridad a los ocho (8) días debe acompañarse la prueba documental. Lo dispuesto en este artículo se entiende sin perjuicio de las normas substanciales". (el subrayado es nuestro)

Si la diligencia en referencia se hubiese pedido dentro de los 8 días siguientes a la ejecutoria de la notificación del auto ejecutivo, la misma sería perfectamente viable.

En atención a lo expuesto, y de acuerdo con el contenido de los artículos 693, 1708 y 1712 del Código Judicial, si la prueba no requiere practicarse, entiende la Corte que la misma debe adjuntarse al memorial de excepciones al igual que en todo incidente que se proponga, ya que el término que se conceda posteriormente, el cual es extendible a un máximo de 20 días, será otorgado solamente para evacuar tales pruebas. No obstante, en el caso específico de la excepción de pago, podrá el ejecutado comprobar el mismo en cualquier etapa del proceso, pero siempre y cuando lleve consigo un fehaciente documento probatorio. Si la prueba aducida necesita practicarse como indicamos anteriormente, deberá aducirse dentro del período de los 8 días siguientes a la notificación del auto ejecutivo, o será extemporánea y por ende, inadmisible.

En cuanto a los documentos presentados, es pertinente expresar lo siguiente: Primeramente la carta fechada el 28 de agosto de 1989, no es más que una comunicación de un supuesto contrato de promesa de compra de la deuda que mantiene la sociedad **AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A.** para con el Banco Nacional de Panamá, por parte de la Corporación Bemar, S. A., sin que la misma sea respaldada por el instrumento auténtico en el cual conste dicha promesa irrevocable. La compra de la deuda del ejecutado en referencia, se efectuaría producto del excedente que genere el traspaso oneroso de las sumas adeudadas por ciertos clientes del Banco Nacional de Panamá, hacia el Banco de Iberoamérica.

Las mencionadas escrituras públicas aducidas en la litis como prueba del pago parcial por parte de la Sociedad **AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A.** al Banco Nacional de Panamá, tal como sostiene dicha institución crediticia, adolecen de los sellos que acrediten su inscripción en el Registro Público, o la correspondiente certificación en virtud de la cual el ente registrador ratifique la inscripción de dicha cesión al Banco de Iberoamérica. Así mismo sería necesario acreditar la existencia de los excedentes que dicha operación comercial hubiese arrojado, ya que ello es lo que en realidad comprobaría el pago de la deuda de la Sociedad **AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A.** para con la entidad bancaria ejecutante. A estos efectos, recordemos el texto de los artículos 1598, 1761 y 1791 del Código Civil que desarrollan esta materia:

"Artículo 1598. El crédito hipotecario puede enajenarse o cederse a un tercero, en todo o en parte, siempre que se haga en escritura pública, de que se dé conocimiento al deudor y que se inscriba en el Registro.

El deudor no quedará obligado por dicho contrato a más que lo que estuviere por el suyo.

El cesionario se subrogará en todos los derechos del cedente.

Si la hipoteca se ha constituido para garantizar obligaciones transferibles por endoso o títulos al portador, el derecho hipotecario se entenderá transferido con la obligación o con el título, sin necesidad de dar de ello conocimiento al deudor, ni de hacerse constar la transferencia en el Registro". (el subrayado es nuestro)

"Artículo 1761. Los títulos sujetos a inscripción que no están inscritos, no perjudican a terceros sino desde la fecha de su presentación en el Registro.

Se considerará como tercero aquél que no ha sido parte en el acto o contrato a que se refiere la inscripción.

No se considerará tercero al heredero o legatario respecto de los actos o contratos de su causante". (el subrayado es nuestro)

"Artículo 1791. Ninguno de los títulos sujetos a la inscripción o registro, según las estipulaciones que preceden, hará fe en juicio ni ante ninguna autoridad, empleado o funcionario público, si no se ha inscrito en el Registro Público, a menos que el referido título sea invocado por terceros como prueba en juicio contra alguna de las partes que intervinieron en el acto o contrato no inscrito o contra sus herederos o representantes, o que se invoque como prueba entre las mismas partes contratantes o sus herederos o representantes, en las acciones que ejerzan entre sí con motivo del contrato.

Lo dispuesto en este artículo no obsta para que se admitan como pruebas, escrituras públicas con las cuales se trate de comprobar hechos o actos que no impliquen dominio sobre bienes raíces". (el subrayado es nuestro)

Evidentemente, que al no comprobar el deudor la existencia del aludido pago parcial, se torna imposible aceptar los planteamientos del actor tendientes a comprobar la veracidad del pago parcial en este caso en particular.

Como indicamos anteriormente es indispensable contar con esta prueba preconstituida una vez pasados los 8 días que estatuye el artículo 1706 del Código Judicial, para que sea admitida la excepción de pago dentro de un proceso de ejecución.

Por lo tanto, y dado que el actor no cumplió con los requisitos exigidos por los artículos 1716 y 1768 de la precitada excerta legal y por motivos de economía procesal, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, PREVIA REVOCATORIA de la Resolución de 8 de septiembre de 1993, NO ADMITEN las excepciones de prescripción y pago parcial que interpuso el licenciado ELÍAS DOMÍNGUEZ en representación de la Sociedad AGRÍCOLA Y GANADERA EL BAYANO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD, INTERPUESTO POR EL LCDO. DEUSDEDITH F. ESCOBAR, EN REPRESENTACIÓN DE CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR JURISDICCIÓN COACTIVA QUE EL BANCO DE DESARROLLO AGROPECUARIO LE SIGUE A CECILIO GERARDO STERLING Y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA(CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA).

VISTOS:

El Lcdo. Deusdedith Fernando Escobar, que actúa en representación de Cecilia Ana Rodríguez de Sterling ha presentado INCIDENTE DE NULIDAD dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario contra CECILIO GERARDO STERLING y CECILIA ANA STERLING DE RODRÍGUEZ.

Estima el incidentista que el auto de mandamiento de pago de 23 de junio de 1992, debió ser notificado personalmente a su mandante y que el Señor Cecilio Sterling ha fallecido, razón por la cual no se debió seguir un proceso contra la sucesión del difunto.

El apoderado judicial especial del Banco de Desarrollo Agropecuario al contestar el incidente negó los hechos en que se fundamenta el mismo y señaló que el auto ejecutivo fue notificado al Curador Ad Litem de Cecilio Sterling el día 15 de septiembre de 1992, previa publicación del edicto emplazatorio los días 12, 13, 14, 15 y 16 de agosto de 1992 en el Periódico La Estrella de Panamá de conformidad con lo dispuesto en el artículo 1002 del Código Judicial.

El Procurador de la Administración contestó el incidente mediante la Vista 215 de 23 de abril de 1993. Dicho funcionario señala que el abogado incidentista carece de poder para actuar y que al Señor Sterling se le nombró defensor de ausente, el Lcdo. Agustín Santos Leone quién se notificó del auto ejecutivo.

La Sala observa que el incidentista no ha acreditado que el Señor Sterling haya fallecido, por una parte y por otra, la Señora Sterling de Rodríguez fue notificada de conformidad con lo señalado en los artículos 1670 y 1002 del Código Judicial. Por lo que debe desestimarse los cargos que se endilgan a la actuación del juzgado ejecutor del Banco de Desarrollo Agropecuario.

En Consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES NULO lo actuado en el proceso de cobro coactivo que le sigue el Banco de Desarrollo Agropecuario a Cecilio Gerardo Sterling y Cecilia Ana Sterling de Rodríguez.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXCEPCIÓN DE NOVACIÓN Y DE INEXISTENCIA DE LA OBLIGACIÓN, INTERPUESTAS POR EL LICDO. CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ CORNEJO, EN REPRESENTACIÓN DE ASTILLEROS BALBOA, S. A. DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL A LA EMPRESA ASTILLEROS BALBOA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Carlos Enrique González Cornejo** en representación de la Sociedad **ASTILLEROS BALBOA, S. A. (A.B.S.A.)**, ha interpuesto excepción de novación y de inexistencia de la obligación, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue la Autoridad Portuaria Nacional.

El excepcionante considera que le asiste la razón en el presente negocio sometido a nuestra consideración, y que por lo tanto, no le adeuda la suma de SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.7,975,629.99), debido a que a su parecer, mediante contrato N° 2-011-91 visible a foja 108 del antecedente administrativo bajo estudio, suscrito el 7 de octubre de 1991, entre el señor Director de la Autoridad Portuaria Nacional **Jerry Salazar**, y el representante de la empresa **ASTILLEROS BRADSWELL INTERNATIONAL, S.A Elliot S. Bradswell Jr.** nueva concesionaria de los derechos originalmente otorgadas por la Institución gubernamental a los **ASTILLEROS BALBOA, S. A.**, se acordó que la Sociedad **ASTILLEROS BRADSWELL INTERNATIONAL, S. A.** asumiría la deuda del concesionario antes citado. Sin embargo y de manera curiosa, argumenta igualmente el actor en el hecho tercero del escrito de excepciones en cuestión, que el monto del débito de **A.B.S. A.** que tendría que saldar **ASTILLEROS BRADSWELL INTERNATIONAL, S. A.**, ascendía únicamente a DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.2,500,000.00.).

Así las cosas observamos que el planteamiento del incidentista consiste medularmente en señalar que operó un cambio de deudor (novación) y que por lo tanto, adolece de toda obligación para con la Autoridad Portuaria Nacional. En consecuencia, estima el excepcionante como corolario de lo anterior, que carece de responsabilidad para con la Autoridad Portuaria Nacional ya que la misma es inexistente.

La Procuraduría de la Administración en su escrito de contestación se opuso a las pretensiones del actor, al disentir de la opinión vertida por el mismo, argumentando esencialmente lo siguiente:

> "Debemos dejar consignada nuestra inconformidad contra la procedencia de estas excepciones, presentadas de manera conjunta, toda vez que una excluye a la otra; ya que la novación implica la existencia del contrato y, por ende, la existencia de la obligación, salvo las modificaciones de una de las condiciones del contrato. De allí que no pueda hablarse de una inexistencia de la obligación, en los términos expresados por el excepcionante".

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Tercera de lo Contencioso, entran a resolver la controversia incoada.

Al respecto, debemos señalar que en el Anexo No.4 del Contrato 2-011-91, visible a fojas 15 a 18 del segundo antecedente de este proceso de ejecución forzosa, mediante el cual y a manera de plan de inversiones y declaración de deuda, **la empresa Astilleros Bradswell, International S. A.** , "dentro de su propuesta acepta y se obliga a conciliar del total de las sumas adeudadas por Astilleros Balboa, S. A.", el total de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (B/.2.500.000.00), en un período de 5 años. Ello también consta en el convenio de pago que celebraron tanto la empresa excepcionante como la entidad ejecutante, en la cláusula cuarta (4a) del mismo, legible a fojas 19 a la 22 del segundo antecedente de la ejecución administrativa, tal como se aprecia a continuación:

> "CUARTA: La Sociedad ASTILLEROS BRASWELL INTERNATIONAL, S. A. dentro de su propuesta acepta y se compromete a cancelar del total de la suma adeudada por ASTILLEROS BALBOA, S. A., DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BALBOAS CON 00/100 (B/2,500.000.00) a LA AUTORIDAD PORTUARIA, asumiendo este monto de la deuda".

De lo anteriormente indicado se desprenden tres situaciones claramente definidas:

1° Astilleros Bradswell International, S. A., asumió 2.5 millones de dólares de la deuda total que actualmente mantiene A.B.S.A. con la Autoridad Portuaria Nacional.

2° Derivado de lo expuesto, la sociedad Astilleros Balboa, S. A., solamente tiene la obligación de afrontar la diferencia entre SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE CON NOVENTA Y NUEVE BALBOAS (B/.7,974.827.99) y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL BALBOAS (B/.2,500.000.00), cantidad esta que asciende a CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE CON NOVENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS (B/.5,474.827.99.).

3° Que como consecuencia de lo señalado, opera en este negocio producto del anexo 4 del Contrato No. 2-011-91 y del convenio de pago No. 013-92, el fenómeno de la novación parcial de la obligación, y por lo tanto, la inexistencia de la obligación es igualmente parcial.

Así las cosas, es evidente que no le es dable a este Tribunal Colegiado acceder de manera íntegra a la petición del actor, por carecer de asidero jurídico.

Por las anteriores consideraciones, los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARAN PROBADA PARCIALMENTE las excepciones de Novación e Inexistencia de la obligación, propuesta por el Licenciado CARLOS ENRIQUE GONZÁLEZ CORNEJO en representación de la sociedad ASTILLEROS BALBOA, S. A., en lo atinente a la suma de dos millones quinientos mil balboas (B/.2,500,000.00) asumidos por la empresa ASTILLEROS BRADSWELL INTERNATIONAL S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE PERSONERÍA E INCIDENTE DE NULIDAD POR FALTA DE NOTIFICACIÓN PERSONAL, INTERPUESTOS POR EL LICENCIADO MIRLAN DE SONSA VIERA, EN REPRESENTACIÓN DE INGRID SÁEZ DE CASTILLO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL INSTITUTO PARA LA FORMACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE RECURSOS HUMANOS A RICARDO L. DURAN GARCÍA, NELSON NOVARRO Y ANTONIO VECCHIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Por medio de escrito del 7 de diciembre de 1993, el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola solicitó que se le separe del conocimiento del Incidente de nulidad por falta de personería e incidente de nulidad por falta de notificación personal, interpuestos por el licenciado Mirlan De Souza Viera, en representación de INGRID SÁEZ DE CASTILLO, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos a RICARDO L. DURAN GARCÍA, NELSON NOVARRO y ANTONIO VECCHIO.

La manifestación de impedimento mencionada se expone en los siguientes términos:

> "En el Incidente de nulidad por falta de personería e incidente de nulidad por falta de notificación personal, interpuestos por el licenciado Mirlan De Sonsa Viera, en representación de INGRID SÁEZ DE CASTILLO, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos a RICARDO L. DURAN GARCÍA, NELSON NOVARRO y ANTONIO VECCHIO, debo informarles que me encuentro impedido de conocer del mismo, toda vez que el licenciado ERWIN MOLINO quien funge como Juez Ejecutor del IFARHU, es mi hermano.
>
> Esta solicitud la fundamento en lo dispuesto en el numeral cuarto (4) del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en conjunto con el numeral quinto (5) del artículo 749 del Código Judicial.
>
> Las normas aludidas son del tenor siguiente:
>
> 'Artículo 78: Son causas de impedimentos y recusación en los miembros del Tribunal de lo contencioso-administrativo las siguientes:
> ...
> 4. Tener interés en la actuación o tenerlo alguno de los parientes expresados en el inciso anterior'.
>
> 'ARTICULO 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son casuales de impedimento:
> ...
> 5. Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el presente proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado, o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo.
> ...
> En vista de lo expresado, solicito respetuosamente a mis colegas de la Sala, se me declare impedido para conocer de este negocio".

La Sala estima que la solicitud de impedimento formulada por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola es fundada, pues se enmarca dentro del numeral 4 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 y el numeral 5 del artículo 749 del Código Judicial, motivo que es suficiente y que da lugar para separarlo del conocimiento de este negocio.

En virtud de lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Honorable Magistrado Edgardo Molino Mola, lo separa del conocimiento del negocio y para reemplazarlo designa al Magistrado RAÚL TRUJILLO MIRANDA de la Sala Civil quien le sigue en turno.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD POR ILEGITIMIDAD DE LA PERSONERÍA DE LA PARTE DEMANDANTE, INTERPUESTO POR LA FIRMA VÁSQUEZ Y VÁSQUEZ, EN REPRESENTACIÓN DE GIGANTE, S. A., DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, PROMOVIDA POR COTTER & COMPANY, MEDIANTE APODERADO JUDICIAL, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN NO. 261 DE 13 DE SEPTIEMBRE DE 1990, EMITIDA POR LA DIRECCIÓN DE COMERCIO INTERIOR, ACTO CONFIRMATORIO, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante escrito fechado y recibido el 3 de diciembre de 1993, la firma forense Vásquez y Vásquez, en representación de GIGANTE, S. A., promovió recurso de apelación contra la Resolución de 23 de noviembre de 1993, que RECHAZA DE PLANO el incidente de nulidad por ilegitimidad de la personería de la parte demandante, dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción presentado por COTTER & COMPANY, contra la Dirección de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias.

La resolución apelada fue notificada mediante el edicto No. 1088, fijado el 24 y desfijado el 25 de noviembre de 1993.

El recurso de apelación contra el auto que resuelve un incidente puede interponerse en el acto de la notificación o dentro de los dos días siguientes a la misma, conforme lo señalan los artículos 1117 y 1118 del Código Judicial.

En el caso que nos ocupa, el recurso de apelación fue interpuesto extemporáneamente el 3 de diciembre de 1993, cinco (5) días después de la notificación del auto que rechaza de plano el incidente.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, representada por la Magistrada que suscribe, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de apelación interpuesto por Vásquez y Vásquez en representación de GIGANTE, S. A. contra la resolución de 23 de noviembre de 1993.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL

RECURSOS DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LCDO. JOSÉ LUIS JIMÉNEZ, EN REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE), CONTRA LA SENTENCIA DE 23 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL:INSTITUTO DE RECURSOS HIDRÁULICOS Y ELECTRIFICACIÓN (IRHE) -VS- RÓMULO ROMERO VELÁZQUEZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Lcdo. José Luis Jiménez Alderete ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia expedida por el Tribunal Superior de Trabajo el 28 de junio de 1993, dentro del proceso promovido por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación, a quien representa el recurrente, contra Rómulo Borrero Velásquez.

Se trata de un proceso laboral en el cual la institución estatal demandante ha solicitado autorización para despedir al trabajador demandado, quien goza de fuero sindical. El juzgador de primera instancia no accedió a la pretensión y el Tribunal Superior de Trabajo confirmó la sentencia de primera instancia.

El recurrente estima que la sentencia de segunda instancia ha infringido el artículo 116, literal a), numerales 5 y 10, de la Ley 8 de 1975 y el artículo 383 del Código de Trabajo.

La Sala pasa a estudiar los cargos que se endilgan a la sentencia de segunda instancia.

El apoderado judicial de la parte demandante estima que la sentencia por él impugnada ha infringido el artículo 116, literal a), numerales 5 y 10, en forma directa

por falta de aplicación porque el demandado incurrió en la conducta que se tipifica en esas normas como justa causa de despido.

En realidad la conducta del demandado consistió en transportar en un vehículo de la empresa a una persona sin autorización de la institución y sin que el pasajero tuviera relación alguna con el IRHE. Es evidente que esta es una conducta prohibida en el Reglamento Interno de Trabajo del IRHE en el artículo 73 numeral 6. Es cierto también que esta conducta constituye un desobedecimiento de órdenes por parte del trabajador demandado, pero como bien lo anota el Tribunal Superior de Trabajo no estamos en presencia de una falta grave que haya acarreado perjuicios al empleador de tal naturaleza que amerite la destitución de un dirigente sindical, aunque éste sí está sujeto a una sanción disciplinaria de menor gravedad.

Si bien es cierto que el demandado tuvo un accidente de tránsito que acarreó perjuicios económicos a la empresa, hay que destacar que el Alcalde del Distrito de Macaracas absolvió de culpa al demandado en el citado accidente mediante la Resolución N°.51 de 1 de julio de 1992, visible a foja 105 del expediente por lo que no se ha podido establecer una conexión entre el accidente de tránsito y el hecho de que el trabajador demandado estuviera acompañado por otra persona en el vehículo. Se desestiman, pues, estos cargos.

Tampoco se ha producido la infracción del artículo 383 del Código de Trabajo porque, como queda dicho, no se han configurado las justas causas de despido invocadas por el IRHE.

En consecuencia, la Sala Tercera (Laboral) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 23 de junio de 1993, expedida por Tribunal Superior de Trabajo dentro del proceso laboral promovido por el Instituto de Recursos Hidráulicos y Electrificación (IRHE) -vs- Rómulo Borrero Velásquez.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICDO. AURELIO GUZMÁN, EN REPRESENTACIÓN DEL SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TABACALERA NACIONAL, CONTRA LA SENTENCIA DE 29 DE JUNIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA EMPRESA TABACALERA NACIONAL -VS- TABACALERA NACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA (LABORAL).

VISTOS:

El Licdo. Aurelio Guzmán Muñoz ha presentado recurso de casación laboral contra la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Trabajo el 29 de junio de 1993 dentro del proceso promovido por el Sindicato de Trabajadores de la empresa Tabacalera Nacional contra Tabacalera Nacional S. A. En el recurso se pide a la Sala que case la sentencia de segunda instancia y que condene a la empresa demandada al pago de siete (0.07) centésimos a partir del 1o. de enero de 1991 en concepto de aumento salarial.

Se trata de un proceso en el cual la parte demandante pide que la demandada sea condenada al pago de la suma arriba citada, según lo previsto en la cláusula décima de la convención colectiva de trabajo vigente, tal como fuera interpretada por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social mediante la Resolución No.D.M. 49-91 de 7 de junio de 1991. El juzgador de primera instancia accedió a la pretensión, pero el Tribunal Superior de Trabajo revocó la sentencia y absolvió a la parte demandada de la pretensión formulada en la demanda.

El recurrente considera que la sentencia de segunda instancia ha infringido el numeral 3 del artículo 1o. de la Ley 53 de 1975 y los artículos 6,8 y 732 del Código de Trabajo.

Los apoderados judiciales de la empresa demandada, la firma de abogados Alemán, Cordero, Galindo y Lee, presentaron escrito en el cual se oponen a los argumentos que se plantean en el recurso de casación y sostienen que no se han producido las citadas infracciones.

En cuanto al numeral 3 del artículo 1o. de la Ley 53 de 1975 se trata de una norma sobre competencia que no puede ser considerada en un recurso de casación laboral que sólo procede por errores in iudicando en los que hubiese podido incurrir el juzgador de segunda instancia.

Por otra parte, evidentemente los tribunales de justicia tienen facultad, para interpretar cualquier resolución judicial o acto administrativo que sea presentado como fundamento de la pretensión procesal, razón por la cual el juzgador de segunda instancia no solo tenía facultad sino que estaba en el deber de interpretar el sentido de la Resolución D.M. 49-91 de 1991.

En cuanto a las infracciones relacionadas con los artículos 6 y 8 del Código de Trabajo hay que señalar que los acuerdos de suspensión de ciertas condiciones de trabajo suscritos en 1990 son válidos a la luz de lo dispuesto en el Decreto de Gabinete No.10 de 12 de enero de 1990, el cual fue expedido en consideración a la difícil situación económica por la cual atravesaba el país.

En cuanto al acuerdo de suspensión del aumento salarial previsto en la convención colectiva y la resolución del Ministro, el Tribunal Superior de Trabajo señaló lo siguiente:

> "A juicio de este Tribunal si como dice la resolución el pacto de suspensión de los aumentos sólo era por el año de 1990, al finalizar ese año entra a regir la cláusula convencional, pero como la misma fue suspendida según el acuerdo, no puede pretenderse que lo que debió cumplirse en marzo de 1990, empiece a tener aplicación en enero de 1991, y que no sólo afectaría los meses de enero a marzo como señala la sentencia apelada sino que al otorgarse el pago de los aumentos a partir del 1o. de enero de 1991, toda la escala salarial variaría, ya que en marzo de 1991 se tendrían que ajustar los B/.0.07 de 1990 a los B/.0.09 de aumento de 1991.
>
> A juicio de este Tribunal en ninguna parte del acuerdo suscrito entre las partes se dice que la empresa queda relevada de conceder los aumentos exclusivamente durante el año de 1990, sino que en el mismo se señala que la empresa queda relevada de darle cumplimiento a la Cláusula 10 de la Convención Colectiva de Trabajo."

La Sala comparte el criterio esbozado por el Tribunal Superior de Trabajo ya que la suspensión del aumento salarial que debió hacerse en marzo de 1990 implica que la empresa no estaba obligada a efectuar el mismo con posterioridad.

Tampoco procede la infracción del artículo 732 del Código de Trabajo porque la misma no se ha formulado en relación con una norma sustancial o material que consagre un derecho a favor de la parte demandante.

En consecuencia, la Sala Tercera (LABORAL) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo el 29 de junio de 1993, dentro del proceso laboral entablado por el Sindicato de Trabajadores de la Empresa Tabacalera Nacional contra la Tabacalera Nacional, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO PLINIO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE CLEMENTE CONDE DEGAIZA, CONTRA LA SENTENCIA DE 17 DE OCTUBRE DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: PESCADORES UNIDOS, S. A. -VS- CLEMENTE CONDE DEGAIZA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

El licenciado **PLINIO CASTILLO** actuando en representación de **CLEMENTE CONDE DEGAIZA**, ha presentado Recurso de Casación Laboral contra la sentencia de 17 de octubre de 1993 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del Proceso Laboral: **PESCADORES UNIDOS, S. A. -vs- CLEMENTE CONDE DEGAIZA.**

El casacionista sustenta la pretensión incoada, aduciendo que la sentencia proferida por el Tribunal Superior de Trabajo es violatoria de los artículos 575; 981; 983 y 1062 del Código de Trabajo.

Del recurso presentado se corrió traslado a la empresa **PESCADORES UNIDOS, S. A.**, de acuerdo a lo preceptuado en el artículo 927 del Código de Trabajo, sin que ésta haya comparecido dentro del término de ley a exponer sus objeciones.

Encontrándose el proceso en este estado, la Sala Tercera procede a resolver la controversia planteada.

El señor **CLEMENTE CONDE DEGAIZA**, ha solicitado a este Tribunal de Casación Laboral, que se revoque la sentencia de 17 de octubre de 1993 emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, en la cual se confirma la decisión adoptada por la Juez Segunda de Trabajo de la Primera Sección mediante Sentencia N°32 de 31 de agosto de 1993, que revocó la orden de reintegro emitida a favor del señor **CLEMENTE CONDE DEGAIZA** en contra de la empresa **PESCADORES UNIDOS, S. A.**

Analizadas las circunstancias que rodean el negocio, este Tribunal observa que el Juzgado Segundo de Trabajo de la Primera Sección conoció de la solicitud de reintegro incoada en favor del señor **CONDE**, y una vez recibidos los documentos a los que alude el artículo 978 del Código de Trabajo, se procedió, mediante Auto 44 de 12 de febrero de

1993, a ordenar el reintegro del citado señor **CLEMENTE CONDE** y a condenar al pago de salarios caídos, pues de los documentos aportados se coligió que el trabajador había sido despedido sin mediar las formalidades que el Código de Trabajo prevé para los casos de trabajadores amparados por fuero sindical.

Una vez notificado el auto en mención, la parte empleadora impugnó el mismo, y mediante los trámites del proceso abreviado, éste desarrolló sus etapas correspondientes hasta quedar en estado de ser concluido mediante sentencia.

La empresa impugnante circunscribió su defensa ante la orden de reintegro proferida, alegando la prescripción para solicitar el reintegro, dado que si se toma como fecha del despido el día 30 de septiembre de 1992, el trabajador contaba con un plazo de tres meses para presentar su solicitud de reintegro, y la misma fue presentada el día 5 de febrero de 1993, más de 4 meses después del despido alegado.

En vista de esta circunstancia, la Juez Segunda de Trabajo de la Primera Sección concluyó, que efectivamente le asistía razón a la parte empleadora, por lo que revocó la orden de reintegro previamente dictada.

De esta sentencia apeló el apoderado judicial del señor **CLEMENTE CONDE**, por lo que el Tribunal Superior de Trabajo conoció en segunda instancia del proceso aludido.

Ese cuerpo colegiado estimó procedente deslindar ciertas situaciones relativas al señor **CLEMENTE CONDE**, en el sentido de que sí se encontraba amparado por fuero sindical al momento de cesar su relación de trabajo con la empresa, pues así quedó acreditado en la certificación No. 046-DOS.93 (visible a foja 7 del expediente contentivo del proceso de reintegro); sin embargo, la excepción de prescripción alegado por la empresa empleadora se ajustaba derecho pues entre la fecha de terminación de la relación laboral y la presentación de la solicitud de reintegro habían transcurrido más de 3 meses.

En la parte medular de la sentencia de 27 de octubre de 1993, el Tribunal Superior de Trabajo señaló:

> "La Juez a quo al declarar probada la excepción de prescripción alegada por la empresa impugnante PESCADORES UNIDOS, S. A. resolvió en Derecho, por lo que esta Superioridad debe pronunciarse en ese sentido, ya que la norma que es aplicable al caso subjúdice, el artículo 12 numeral 3, del Código de Trabajo, toda vez que al tenerse por cierto que el trabajador fue despedido el día 3 de septiembre de 1992, era a partir de esa fecha, en que el trabajador contaba con tres meses para presentar su solicitud de reintegro, lo que dejó precluir el tiempo, y no fue hasta el día 5 de febrero de 1993, cuando ya habían transcurrido los tres meses mencionados que presentó su solicitud de reintegro. De manera que lleva razón la parte demandada de que la acción del trabajador prescribió".

Este Tribunal procede al análisis de los cargos de infracción presentados por el casacionista, y al respecto externa lo siguiente:

El primer cargo incoado contra la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, descansa en la supuesta transgresión del artículo 981 del Código de Trabajo, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 981. El empleador puede impugnar el mandamiento dentro de los tres días siguientes a su notificación, en cuyo caso se seguirán los trámites del proceso abreviado de trabajo. En este sólo se resolverá respecto a la existencia de la relación de trabajo, del despido o del fuero".

Señala el casacionista al fundamentar el cargo aducido, básicamente lo siguiente:

> "La violación a la norma legal transcrita es directa, por cuanto que el Tribunal Superior de Trabajo al mantener la resolución de primera instancia resolvió la demanda de impugnación por materia distinta de la que expresamente le faculta la Ley; es decir, el Tribunal se excedió en su omisión y mandato".

En relación a lo esgrimido debe el Tribunal destacar que el Tribunal Superior de Trabajo sí resolvió respecto a la existencia del fuero sindical, tal como expresáramos en párrafos anteriores, declarando que efectivamente, el trabajador había estado protegido por fuero sindical, pero que no podía proceder el reintegro en virtud de que la acción para reclamarlo había prescrito. Esta situación no podía ser obviada por el Tribunal Superior de Trabajo, por lo que aunque reconoció la existencia del fuero sindical, no podía acceder al reintegro solicitado. Esta es una razón sobreviniente en el proceso, y podemos afirmar que los especialistas del Derecho de Trabajo consideran que uno de los inconvenientes del mismo es que la Ley sólo exige pruebas indiciarias de la relación laboral o de la existencia del fuero (según el artículo 980 del Código de Trabajo), para que inmediatamente proceda el reintegro, por lo que en el caso de que el trabajador no tuviese derecho a él (por tratarse de un trabajador por término definido o por obra cuyo contrato haya terminado puede obtener el mandamiento de reintegro; o en casos como el que nos ocupa en que la acción ha prescrito), y es el empleador el que recibe la carga de impugnar la actuación.

En atención a estas consideraciones debe la Sala descartar el cargo endilgado.

En cuanto a la supuesta violación del artículo 983 del Código de Trabajo, el Tribunal considera prudente aclarar lo siguiente:

El artículo 983 del Código de Trabajo, que se aduce infringido preceptúa:

"Artículo 983. A este proceso no se acumulará solicitud de autorización de despido, cuaderno de excepciones, reconvenciones, incidentes, peticiones ni procesos de otra naturaleza".

El casacionista ha motivado la transgresión acusada aduciendo:

"La violación a la norma legal transcrita arriba es directa, por cuanto que la resolución atacada por esta vía acumuló al proceso abreviado que nos ocupa la solicitud de EXCEPCIÓN de prescripción, y la norma prohíbe expresamente que tales excepciones no se pueden acumular en este proceso; no distingue la norma acusada de infringida que clase o tipo de excepción y en consecuencia el Tribunal no puede distinguir".

Disentimos de lo expresado por el actor, puesto que el artículo 983 contiene los principios relativos al Proceso de Reintegro, y no al Proceso Abreviado.

En estas circunstancias es obvio que la violación legal no se ha configurado, toda vez que en el proceso de reintegro no se hizo valer ninguna objeción, sino que fue a través del proceso abreviado que impugnó el reintegro en que se alegó tal circunstancia, por lo que no puede la Sala aceptar el cargo de ilegalidad propuesto.

En cuanto a la conculcación del artículo 575 del Código de Trabajo, se arguye que la excepción presentada es inadmisible, toda vez que quien debe proponer las excepciones es el demandado, y en este caso quien la propuso fue la parte demandante.

Sobre este particular debe la Sala indicar al recurrente, que quien podía interponer la excepción de prescripción para el reintegro del trabajador era la empresa empleadora, y ello debía verificarse una vez impugnado el auto de reintegro. Debe recordarse al recurrente que la prescripción en procesos de conocimiento sólo puede reconocerse en la sentencia, y no puede ser objeto de previo y especial pronunciamiento, de acuerdo al lo establecido en el artículo 577 del Código de Trabajo, que preceptúa:

"Artículo 577. Las excepciones en los procesos de conocimiento se deciden en la sentencia".

Considera este Tribunal que no debe negarse tajantemente (como hace el casacionista), la posibilidad de hacerse valer la excepción de prescripción en un proceso declarativo, basado en que la misma, por ser una excepción, sólo puede alegarse por vía de defensa.

Sobre el particular debe hacerse énfasis en la amplitud del artículo 527 del Código de Trabajo, que establece:

"Artículo 527. La persona que pretenda hacer efectivo algún derecho, que se declare su existencia o que se declare la inexistencia de uno adverso a sus intereses, o la existencia o inexistencia de una relación jurídica que le interese o afecte, o que se haga cualquier declaración que le interese o afecte, puede pedirlo ante los tribunales en la forma prescrita en este Código". (subrayado es nuestro)

Un examen cuidadoso de la norma nos permite inferir que existe en el caso que nos ocupa, un interés legítimo por parte de la empresa empleadora de hacer valer la situación de prescripción, más que como excepción liberatoria, como una necesidad de que se declare la inexistencia de un derecho (que dejó de existir por la inactividad del beneficiario), y que es adverso a su interés.

A nivel doctrinal sería conveniente revisar la opinión del tratadista PUGLIESE cuando resalta:

"para que en el imperante derecho se pudiera negar la potestad de hacer valer la prescripción por la vía de acción, sería preciso, o que el derecho que por ella se atribuye fuera de aquellos cuya función es la de ser exclusivamente defensiva, o que la ley, por una expresa disposición hubiese vedado oponerla como acción. Ni una ni otra cosa ocurre". (PUGLIESE, Prescrizione extintiva. Cit. por FABREGA, Jorge. Derecho Procesal de Trabajo (Individual y Colectivo). Panamá, Julio 1982. pág. 499).

Además de lo expresado, el artículo 12 del Código de Trabajo en su numeral 3° es claro al determinar que la acción del trabajador para solicitar el reintegro prescribe en tres meses, por lo que resulta evidente que quien podía hacer valer la prescripción extintiva de derecho de reintegro del trabajador, era la empresa empleadora. La norma en comento es diáfana al preceptuar:

"Artículo 12. La prescripción se regirá por las siguientes reglas:
...
3. La acción del trabajador para solicitar el reintegro prescribirá en tres meses. Lo dispuesto en este ordinal es sin perjuicio de las reglas sobre prescripción de las demás acciones derivadas de la terminación de la relación de trabajo. ...".

En atención a lo expresado, la Sala debe descartar el cargo de ilegalidad aducido.

Finalmente, se considera infringido el artículo 1062 del Código de Trabajo.

La norma en comento es del tenor siguiente:

"Artículo 1062. Sin perjuicio de las normas previstas en este Código, o en cualquier otra ley sobre apremio corporal por desacato, el Juez podrá, en lugar del apremio corporal, imponer sanciones pecuniarias compulsivas y progresivas tendientes a que se cumplan sus mandatos u órdenes, cuyo importe será a favor del litigante afectado por el incumplimiento.

Las condenas se graduarán en proporción al caudal económico de quien deba satisfacerlas y podrán ser dejadas sin efecto, o ser objeto de reajuste, si el afectado justifica parcial o totalmente la causa o causas de su renuencia o resistencia".

Sobre el cargo endilgado, manifestó el recurrente:

"La violación al precepto legal transcrito es directa, por cuanto que la resolución atacada por esta vía pretende calificar el período transcurrido después del 30 de septiembre de 1992 (fecha del nuevo despido) como objeto de excepción de prescripción, cuando de acuerdo a las constancias procesales se trata de un período de desacato continuado, ya que el despido no se dio contra las relaciones de trabajo originadas en un contrato de trabajo; sino, contra las relaciones de trabajo originadas en una resolución judicial a saber, el Auto N°85 de 31 de marzo de 1992, que ordenó el reintegro de mi representado, y contra el cual incurrió en desacato la demandante al despedirlo el 30 de septiembre de 1992".

Discrepa el Tribunal de lo expresado por el casacionista por las siguientes razones:

En primer término, porque a todo lo largo del expediente que se origina con la solicitud de reintegro, ha quedado aceptada como fecha del despido del trabajador **CLEMENTE CONDE DEGAIZA** el 30 de septiembre de 1992, y así lo alegó el propio trabajador (cfr. fojas 2 y 112 del expediente contentivo del proceso de reintegro).

Resulta por ende inaceptable el argumento del trabajador en el sentido de que el Tribunal Superior de Trabajo obvió que a partir del 30 de septiembre de 1992 no se configuraba el despido, sino que era la continuación de un período de desacato por parte de la empresa, al Auto N°85 de 31 de marzo de 1992 que había ordenado el reintegro del señor **CONDE.**

El auto al que alude el casacionista fue dictado dentro de un proceso anterior de reintegro, revocado posteriormente por el Juez Tercero de Trabajo de la Primera Sección, (Sentencia No.15 de 10 de junio de 1992), y esta decisión confirmada por el Tribunal Superior de Trabajo, mediante sentencia de 31 de agosto de 1992, por lo que no existía obligación para la empresa **PESCADORES UNIDOS, S. A.**, de reintegrar al trabajador **CLEMENTE CONDE DEGAIZA**, y de esta situación tenía perfecto conocimiento el actor (cfr. fojas 57-60; y 77-82 del expediente laboral).

La Sala estima por tanto, que la afirmación del recurrente no sólo no se ajusta a la realidad procesal, sino que inclusive pareciese que el casacionista pretendió sorprender la buena fe del Tribunal, alegando circunstancias que él conocía eran imprecisas.

Este Cuerpo Colegiado estima, una vez analizadas íntegramente las constancias del negocio subjúdice, que no existe vicios en la sentencia del Tribunal Superior de Trabajo, que sean violatorios de las normas legales aducidas, dado que la solicitud de reintegro del trabajador **CLEMENTE CONDE DEGAIZA** fue incoada fuera del término legal previsto para ejercer tal derecho, prescribiéndole la pretensión del trabajador, conforme lo preceptuado en el artículo 12 numeral 3° del Código de Trabajo.

En consecuencia, la Sala Tercera LABORAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia de 17 de octubre 1993, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN LABORAL, INTERPUESTO POR LA FIRMA TRISTÁN, MORALES Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS RAMÓN APARICIO, CONTRA LA SENTENCIA DE 27 DE JULIO DE 1993, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, DENTRO DEL PROCESO LABORAL: HOTELES CONTINENTALES, S. A. -VS- LUIS RAMÓN APARICIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICUATRO (24) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA. LABORAL.

VISTOS:

La firma de abogados Tristán, Morales y Asociados actuando en nombre y representación de LUIS RAMÓN APARICIO, ha promovido recurso de casación laboral contra

la sentencia de 27 de julio de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral seguido por HOTELES CONTINENTALES, S. A. contra LUIS RAMÓN APARICIO, mediante la cual se revocó la sentencia de primera instancia No. 15 de 15 de abril de 1993 expedida por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, y se autorizó a la empresa HOTELES CONTINENTALES, S. A. a despedir al trabajador LUIS RAMÓN APARICIO, quien estaba amparado por el fuero sindical, con base en el artículo 213, acápite A, numeral 10 del Código de Trabajo.

En la sentencia de primera instancia no se autorizó el despido del trabajador LUIS RAMÓN APARICIO porque, a juicio del Juzgador, no fue posible establecer la existencia de la causal de despido invocada consistente en la desobediencia del trabajador, porque no se probó "si existía o no la obligación para el trabajador de emplear todo el equipo que se menciona, en el memorándum fechado el día 15 de septiembre de 1990, máxime cuando los testigos han manifestado que el trabajador LUIS RAMÓN APARICIO, sí utilizaba su equipo reglamentario, cosa que algunos compañeros no hacían sin mayores consecuencias" (fs. 75-76).

El Tribunal Superior de Trabajo mediante fallo de 27 de julio de 1993 revocó la Sentencia de primera instancia y autorizó a la empresa HOTELES CONTINENTALES, S. A. a despedir al trabajador LUIS RAMÓN APARICIO, pues según el Tribunal Superior, el Juez a quo erró al establecer que en el contrato escrito de trabajo no se señala lo que concierne a la utilización del equipo reglamentario de los inspectores de seguridad, habida cuenta de que por un lado no existe constancia alguna en el expediente de la existencia de contrato de trabajo individual alguno que permita esa afirmación y menos aún para darle validez a la afirmación de uno de los testigos del demandado (fs. 75) y por otro lado, que el empleador en ejercicio de su facultad de dirigir la empresa puede muy bien dar las instrucciones y órdenes que considera conveniente en la ejecución del trabajo contratado y el trabajador a su vez; en razón de la subordinación jurídica en que se encuentra, viene obligado a acatar las instrucciones y órdenes que se le han impartido para la realización del trabajo convenido, sin necesidad de que consten expresa y detalladamente en un contrato de trabajo. El hecho de que con posterioridad, la empresa hubiera decidido limitar el uso del arma de fuego a disposición de los Inspectores de Seguridad, en modo alguno justifica la desobediencia en la que incurrió el trabajador, sin causa justificada al momento en que le fueran dada tales instrucciones. "Por otra parte, es evidente que el trabajador por el hecho de estar amparado en fuero sindical, no quedó excluido de su obligación de cumplir las órdenes impartidas por el empleador ..." (fs.93-94).

El casacionista al formalizar su recurso sostiene que la sentencia de segunda instancia infringió los artículos 1, 5, 70, 523, 813 y 969 del Código de Trabajo.

El recurrente sobre la violación de los artículos 5, 70, 813 y 969 del Código de Trabajo expuso en lo medular que el Tribunal al valorar el conjunto de las pruebas, se limitó a interpretar las pruebas documentales presentadas por el empleador, sobre todo, los llamados memorándum en los cuales se señalan órdenes al trabajador. Además no se tomó en consideración lo expresamente pactado en el contrato entre Hoteles Continental y Ramón Aparicio.

Por último, señala el recurrente que en el análisis del material probatorio el Tribunal asumió el mismo rol que el Juzgador a quo, como Juez de hecho, y no como Tribunal, que si bien puede incursionar en la búsqueda de la prueba, debe ceñirse más a la ponderación del valor de las pruebas. También el Tribunal como autoridad judicial laboral pudo haber pedido el contrato de trabajo a fin de evaluar el jus variandi del empleador y los perjuicios al trabajador.

Al analizar el presente negocio jurídico la Sala observa que fueron emitidos por la empresa Hoteles Continentales, S. A. varios memorandos (fs. 6, 7, 8, 9 y 10) al señor Aparicio en los cuales se le solicitaba que utilizara el equipo completo de trabajo que consistía en un sambrón, un revólver calibre 38, un porta tolete, un tolete y un par de esposas.

El señor Aparicio adujo como prueba los testimonios de los señores Germán Sucre y Roberto Paredes.

El señor Sucre manifestó en su declaración que "En los 7 meses que hace que se nos entregó el equipo, cada inspector usaba el equipo en sus 8 horas de trabajo, el compañero Luis Aparicio después de la primera práctica de tiró usó dicho equipo por espacio de un mes, posteriormente se abstuvo de usarlo, ya que según él no estaba capacitado ni tenía entrenamiento suficiente para el uso del mismo (fs. 44).

A fojas 53 del expediente laboral se lee una carta suscrita por el señor Aparicio, dirigida al Señor Argüelles, Jefe de Personal y Seguridad del Hotel Continental, en la cual se refiere al memorándum que se le envió con fecha 22 de noviembre de 1990. En dicha carta al Señor Aparicio en ningún momento niega su desobediencia a las órdenes impartidas por el empleador, por el contrario afirma que "por ser un dirigente sindical es que pudo ver y analizar lo que quizá otros intuyen pero no se sienten seguros de poder rebatir" y solicita que el problema sea llevado al comité de empresa, donde se le de un trato más imparcial y una respuesta equitativa por el bien del departamento.

Esta superioridad observa que el artículo 126 del Código de Trabajo señala entre las obligaciones de los trabajadores la de acatar las órdenes e instrucciones del empleador, o de su representante, de acuerdo con las estipulaciones del contrato.

En el expediente laboral no consta contrato de trabajo celebrado entre el señor Aparicio y la empresa Hoteles Continentales, S. A., pero este hecho no releva al señor Aparicio de cumplir las órdenes impartidas por el empleador sobre la ejecución del trabajo contratado, órdenes que le fueron dadas con claridad y cuyo incumplimiento perjudica al

empleador, porque la labor que desempeña un inspector de seguridad, no es efectiva si no porta el armamento necesario para la defensa de los bienes y personas que debe proteger.

El Señor Aparicio desempeñaba la función de Inspector de Seguridad en la empresa Hoteles Continentales, S. A., hecho aceptado por él al contestar la demanda, y dicha empresa mediante memorándum de 15 de septiembre de 1990, le comunicó a los inspectores de seguridad se le suministraría el equipo reglamentario consistente en: sambrón, revólver calibre 38, porta tolete, tolete y un par de esposas, para que pudieran desempeñar sus funciones de seguridad.

Como se observa en el expediente laboral en reiteradas ocasiones se le solicitó al Señor Aparicio que utilizara el equipo completo de seguridad, pero éste no cumplió con las órdenes impartidas por su empleador, a pesar de que el resto de los inspectores de seguridad sí utilizaba el equipo completo como se lee a fojas 13 del presente expediente.

De consiguiente, esta Superioridad considera debe desestimarse los cargos de violación de los artículos 5, 70, 813 y 969 del Código de Trabajo.

En cuanto a la alegada violación de los artículos 1 y 523 del Código de Trabajo, el casacionista no explica el concepto de la infracción de estas normas, por tanto, la Sala no entra a analizar los referidos cargos de violación.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Laboral, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la Sentencia de 27 de julio de 1993, emitida por el Tribunal Superior de Trabajo, dentro del proceso laboral promovido por HOTELES CONTINENTALES, S. A. contra LUIS RAMÓN APARICIO.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

DICIEMBRE 1993

## CARTA ROGATORIA

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL MUNICIPAL POPULAR DE BAYANO, SECCIÓN DE LO CIVIL, CUBA, DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO INSTAURADO POR LA SEÑORA ODALLIS EMILIANA MOGNA NAVARRO CONTRA PABLO GAINA ALVEO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales la comisión rogatoria librada por el Tribunal Municipal Popular de Bayano, Cuba, dentro del proceso de divorcio instaurado por la señora Odalis Emiliana Mogena Navarro contra Pablo Gaina Alveo.

La documentación procedente del Juzgado Municipal Popular de Bayano, Cuba aparece debidamente autenticada por la autoridad que la emitió en su lugar de origen. Sin embargo, al llevar a cabo el estudio de la carta rogatoria se puede apreciar, que por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

"a) Que entre la República de Cuba y Panamá, no existe Convención que regula la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Y que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación con la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de tres maneras a saber: 1) Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celebridad del tráfico y de los documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado, y solo en el caso de los países que han ratificado la Convención Americana en materia de exhortos basta la tramitación de la comisión por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que se autentican los documentos aportados y que sustentan lo pedido por la autoridad jurisdiccional cubana, no aparece en ninguna para el sello o la diligencia realizada por el funcionario panameño en el lugar de procedencia, y esta omisión no permite darle curso al exhorto librado por el Tribunal Municipal Popular de Bayano, Cuba dentro del proceso de divorcio instaurado por la señora Odalis Emiliana Mogena contra Pablo Gaina Alveo.

Por lo tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento del exhorto librado por el Tribunal Municipal Popular de Bayano, dentro del proceso de divorcio instaurado por la señora Odalis Emiliana Mogena Navarro contra Pablo Gaina Alveo, y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor a las autoridades cubanas por la vía diplomática, para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL JUZGADO PRIMERO DE LO CIVIL DE SAN JOSÉ, COSTA RICA, DENTRO DEL PROCESO INCOADO N° 894-88 RANCHO SAN RAFAEL S. A. CONTRA JEAN JACQUES HENNIN NICOLÁS Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales la comisión rogatoria librada por el Juzgado Primero de lo Civil de San José, Costa Rica, dentro del proceso incoado N° 894-88, Rancho San Rafael S. A. contra Jean Jacques Henin Nicolás y otros.

El presente exhorto tiene como finalidad obtener en nuestro país certificación del Registro Público del asiento de constitución de la sociedad domiciliada en Panamá denominada "Agro-Resources Incorporated".

Es oportuno señalar que Panamá y Costa Rica han ratificado la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, aprobada por nuestro ordenamiento mediante la ley 12 de 23 de octubre de 1975, de dicha consideración resulta aplicable al exhorto el aludido instrumento jurídico de Derecho Internacional.

Conforme al análisis del expediente que contiene la presente carta rogatoria, esta Sala puede percatarse que la misma no vulnera el orden público panameño, además que cumple con todos los requisitos que para este caso exige la Convención (arts. II, acápite b; IV y VI).

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA VIABLE la comisión rogatoria librada por el Juzgado Segundo de lo Civil de San José, Costa Rica, contra Jean Jacques Hennin Nicolás y otros, y ORDENA que, por economía procesal, el trámite correspondiente sea diligenciado por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro ordenamiento procesal vigente.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE JUSTICIA DE QUEEN S BENCH DIVISION DEL TRIBUNAL COMERCIAL, PARA QUE SE EMPLACE A NEW OXFORD CARRIER AND SHIPPING CORP., CON DOMICILIO EN CALLE 34 ESTE, EDIF. VICTORIA, 4O. PISO, PANAMÁ, REPÚBLICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, NUEVE (9) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, se remitió la comisión rogatoria librada por la Alta Corte de Justicia de Queen's Bench División Tribunal Comercial, para que se sirva diligenciar al demandado New Oxford Carrier and Shipping Corp, con domicilio en Calle 34 Este, Edificio Victoria, 4o. Piso. Panamá, República de Panamá, el emplazamiento y acuse de recibo de la notificación dentro del proceso de compensación de pagó interpuesto por Gambitt Traveller.

La Sala, al realizar el estudio de la carta rogatoria en cuestión, observa que no existe Convención en materia de exhortos o cartas rogatorias entre Inglaterra y Panamá. Sin embargo, le corresponde a esta Sala Cuarta el diligenciamiento en nuestro país, a la luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar muy en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de una carta rogatoria es si se encuentra debidamente traducida al idioma español, y si no es violatoria del orden público panameño, ya que, de lo anterior, aún y cuando exista alguna Convención entre el Estado requiriente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos. En el caso que nos ocupa la carta rogatoria se encuentra debidamente traducida y la violación al orden público no se presenta.

En el caso concreto que examinamos, los documentos que acompañan el exhorto han sido debidamente autenticados, pues en ellos se aprecia el sello de la apostilla que legaliza de los documentos surtidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley No.6 de 25 de junio de 1990, por la cual se aprueba el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros que fue aprobado tanto por el requiriente como por el Estado requerido.

Cabe destacar que como en la presente diligencia se solicita la notificación de una de las partes del litigio que se promueve en el extranjero, la Sala ha sostenido con anterioridad, que cuando dicho diligenciamiento implique una notificación, por motivos de economía procesal y reciprocidad internacional hacen razonable que la Secretaría de la Sala lleve a cabo la notificación.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECLARA VIABLE el cumplimiento en nuestro territorio del exhorto librado por la Alta Corte de Justicia de Queen s Bench, Tribunal Comercial para que se notifique a la empresa New Oxford and Shipping Corp, con domicilio en la Ciudad de Panamá, República de Panamá. Por lo tanto, y por motivos de economía procesal, ORDENA que la misma sea diligenciada por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la notificación.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR LA CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DEL TRIBUNAL DE LA REINA, EN LA DEMANDA INTERPUESTA POR LIMITED Y HICKORY LIMITES CONTRA IFCODEAN BUSINESS INC. MAGISTRADA PONENTE: AURA G. DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

El Director Encargado del Departamento Consular y de Legalizaciones, por medio de nota DGPE/DCL/2797/93 del 1° de diciembre de 1993, remitió la comisión rogatoria librada por la Corte Superior de Justicia, División del Tribunal de la Reina, para que se notifique a la IFCODEAN BUSINESS INC., cuyas oficinas están registradas a cargo de Morgan y Morgan, Calle 53, en el Edificio Torre Banco Sur, piso 16, en la ciudad de Panamá, República de Panamá y que es la parte demandada en el proceso que interpuso contra esa empresa, KVW LIMITED Y HICKORY LIMITED.

Por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá le corresponde a esta Sala Cuarta el conocimiento de estos asuntos para su cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país, a luz de lo establecido en el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial.

Uno de los aspectos que debe tomar en cuenta la Sala para determinar la viabilidad del cumplimiento de una carta rogatoria es si se encuentra debidamente traducida al idioma español, y si no es violatoria del orden público panameño, ya que, de lo contrario, aun y cuando existe alguna convención entre el Estado requiriente y el Estado requerido, debe negarse la práctica de dicha diligencia, puesto que prevalecen estos requisitos. En el caso que nos ocupa la carta rogatoria se encuentra debidamente traducida y la violación al orden público no se presenta.

En el caso que nos ocupa los documentos que acompañan la comisión rogatoria han sido debidamente autenticados, pues en ellos se aprecia el sello de la apostilla que legaliza los documentos surtidos en el Estado requiriente, siendo éste un requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria, pues su cumplimiento encierra la presunción de que los documentos han sido expedidos conforme a la ley local del país que los otorgó, según lo establece la Ley N° 6 de 25 de junio de 1990, publicada en Gaceta Oficial 21,571 de 3 de julio de 1990 y por la cual se aprueba el Convenio por el que se suprime la exigencia de legalización para los documentos públicos extranjeros que fue aprobado tanto por el Estado requiriente como por el Estado requerido.

Cabe destacar que como en la presente diligencia se solicita la notificación de unas de las partes del litigio que se promueve en el extranjero, la Sala ha sostenido con anterioridad que, cuando dicho diligenciamiento implique una notificación, motivos de economía procesal y reciprocidad internacional hacen razonable que la Secretaría de la Sala lleve a cabo la notificación.

En consecuencia, la Corte suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley DECLARA VIABLE el cumplimiento en nuestro territorio de la comisión rogatoria librada por la Corte Superior de División del Tribunal de la Reina para que se notifique a IFCODEAN BUSINESS INC., con domicilio en la ciudad de Panamá, República de Panamá. Por lo tanto, y por motivos de economía procesal, ORDENA que la misma sea diligenciada por Secretaría utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la notificación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA DENTRO DE LA DEMANDA CARATULADA WELTOVER INC., CONTRA LA REPÚBLICA ARGENTINA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director Encargado del Departamento Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, la comisión rogatoria dentro de la demanda caratulada Weltover Inc., contra la República de Argentina.

De acuerdo con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, le corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales la función de "recibir los exhortos y comisiones

rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

Observa la Sala Cuarta, que para resolver lo pedido es oportuno señalar que, tanto la República de Panamá como la de Argentina han ratificado la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias aprobada por nuestro orden jurídico mediante la ley N°12 de 23 de Octubre de 1975, así como también ambos Estados son signatarios de la Convención de La Haya de 5 de Octubre de 1961, que corresponde a nuestra Ley N°6 de 25 de junio de 1990.

En el caso que nos ocupa observa la Sala que el expediente contentivo de la presente comisión rogatoria, si bien pareciera adolecer de un error en cuanto a la legalización de los documentos que la acompañan, por parte de funcionarios consulares o agentes diplomáticos competentes; requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria y que se encuentra consagrado en el artículo 5, numeral 1 de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, pero como consta en el numeral 2 del mismo artículo se exceptúan los casos previstos en los artículos VI y VII, como en este caso, en que se tramitó la comisión rogatoria por la vía diplomática, a través de la oficina correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Los señalamientos que preceden conducen a este Tribunal a considerar que es posible acceder a lo impetrado, en la presente oportunidad, pues no se observan vicios que vulneren el orden público panameño, aspecto primordial que debe tomar en consideración esta máxima Corporación de Justicia para el cumplimiento de un exhorto o comisión rogatoria, más aun cuando se trata de un Estado ratificante de la Convención Interamericana sobre exhortos o comisiones rogatorias.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el cumplimiento de la comisión rogatoria dentro de la demanda caratulada Weltover Inc., contra la República de Argentina y, ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL DE TRABAJO NO.1 DE LA CIUDAD DE LA PLATA, ARGENTINA, DENTRO DEL PROCESO DE INVESTIGACIÓN DEL EXPEDIENTE CARATULADO CASTRO RODOLFO C/TECHINT, S. A. S/DESPIDO, CUYO EXPEDIENTE SE ADJUNTA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales el exhorto librado por el Tribunal de Trabajo No.1 de la ciudad de La Plata en los autos Castro, Rodolfo Ernesto c-Techint S. A.

El propósito del exhorto en cuestión, es que el Tribunal libre oficio a la Superintendencia de Compañías, con sede en la ciudad de Panamá, para que informe lo siguiente:

a) Si la sociedad TECHINT INTERNATIONAL CONSTRUCTION CORP (TENCO) se encuentra inscrita en la Dirección General del Registro Público,

b) Si se trata de una sociedad regularmente constituida,

c) Desde que fecha se encuentra inscrita,

d) Cual es su sede social,

e) Cual es su objeto social,

f) Requerir al Bank of Credit and Commerce International, con domicilio en los Jardines Comerciales del Panamá Hilton, Vía España, se sirva informar los extractos o movimientos en la cuenta corriente No.0101148 de Rodolfo Ernesto Castro, durante los meses de noviembre y diciembre de 1985, y enero, febrero y marzo de 1986. Asimismo, informar si en dicha cuenta el señor Castro realizaba libremente y por sí mismo, depósitos o extracciones.

Para resolver conviene señalar que las Repúblicas de Panamá y Argentina son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, aprobada en nuestro país por la ley 12 de 23 de octubre de 1975, por lo que dicha Convención es aplicable al exhorto planteado, conforme lo establece el artículo II de la misma.

Para determinar si es posible el cumplimiento de la carta rogatoria extranjera es importante verificar si ella es violatoria del orden público panameño, en el caso de darse dicha violación debe negarse la práctica de la diligencia solicitada.

Al analizar la presente carta rogatoria, la Sala observa que con anterioridad a este negocio, fue declarada viable otra carta rogatoria de idéntica pretensión mediante la resolución fechada el 21 de octubre del año que decurre a través de la cual se le solicitaba al Registro Público en Nota No.1261 de 26 de octubre, remitiera la información pedida en los puntos a, b, c, d y e de dicho exhorto, que para los efectos del presente caso constituyen los mismos puntos solicitados, pero la Sala hace la salvedad que hasta la fecha no se ha recibido dicha información.

Ahora bien, la Sala determina que en relación al exhorto que se examina en esta oportunidad, en lo que respecta al punto f del petitum; al otorgar de plano la información solicitada se estaría contraviniendo nuestro ordenamiento jurídico interno, una vez que la cuenta bancaria a la que se hace alusión en este documento y de la que se pide conocer su manejo de depósito o extracciones, se le debió dar el trámite tal cual lo establece el artículo 89 del Código de Comercio, en concordancia con el Decreto de Gabinete No.238 de 1970 que regula el régimen bancario, en los que se estatuye que se requiere acción exhibitoria para obtener datos relacionados con esta materia y en este caso no se ha presentado escrito proponiendo la acción aludida.

Por las razones expuestas, el Pleno de la Sala considera que no es posible acceder a lo pedido en el exhorto impetrado.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el exhorto librado por el Tribunal de Trabajo No.1 de La Plata, Argentina, dentro del proceso de investigación del expediente caratulado Castro Rodolfo c-Techint S. A., Y ORDENA devolver el expediente contentivo de la presente documentación a la Cancillería Panameña para los ulteriores trámites diplomáticos aplicables a esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.)AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

COMISIÓN ROGATORIA LIBRADA POR EL TRIBUNAL COMERCIAL PRIMERO DE ALEXANDRÍA. EGIPTO, EN EL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE LA DEMANDA CONTRA INGLISIDE PANAMÁ CON PROPIETARIOS DE OLYMPIC STAR LINER. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, TREINTA (30) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El departamento de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo a la Comisión Rogatoria librada por el Tribunal Comercial Primero de Alexandría, Egipto, en el proceso de notificación de la demanda contra Ingleside Panamá con propietarios de Olympic Star Line.

La documentación procedente del Tribunal Comercial Primero de Alexandría, Egipto, aparece en su primera versión del idioma árabe y a continuación se hace la traducción al idioma inglés, más sin embargo no se hace la traducción al idioma del Estado requerido en esta oportunidad, el cual es el idioma español; así como tampoco aparecen las autenticaciones de los documentos que acompañan el presente exhorto, otorgadas ante la autoridad consular panameña acreditada en el territorio egipcio. Ahora bien, al llevar a cabo el estudio de la carta rogatoria se puede apreciar, que por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a) Que entre la República de Egipto y Panamá no existe Convención que regule la materia de exhortos o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una Convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Que cuando en el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren debidamente autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos, esto se puede cumplir de tres maneras a saber: 1) Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celeridad del tráfico y de los actos o documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio de otro Estado,

y solo en el caso de los países que han ratificado la convención americana en materia de exhortos, basta con la tramitación de la comisión rogatoria por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, la Sala observa que la carta rogatoria que se expide en el Tribunal Comercial Primero de la ciudad de Alexandría, Egipto, no reúne los requisitos formales de traducción y autenticación de los documentos que se aportan como sustento de la diligencia solicitada, ni por traductor público autorizado, ni por parte de la autoridad consular panameña acreditada en el territorio del Estado que funge como requiriente en esta oportunidad, y estas omisiones no permiten darle curso al exhorto librado por el Tribunal Comercial Primero de Alexandría, Egipto, dentro del proceso de notificación de la demanda contra Ingleside Panamá con propietarios de Olympic Star Liner.

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento en la República de Panamá de la comisión rogatoria librada por el Tribunal Comercial Primero de Alexandría, Egipto, en el proceso de notificación de la demanda contra Ingliside Panamá con propietarios de Olympic Star Liner, y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor, y por la vía diplomática a las autoridades del Gobierno de Egipto para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

EL SEÑOR ÓSCAR NELSON VIERA-RUIZ SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE DE CIRCUITO DE LA CIUDAD DE NEWPORT NEWS, ESTADO DE VIRGINIA DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA LA CUAL VERSA SOBRE LA FINALIDAD DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA CON LA SEÑORA VIELKA DEL ROSARIO GREEN ARAÚZ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

ÓSCAR NELSON VIERA-RUIZ, solicita ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Newport News, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica de 10 de agosto de 1989, enmendada por las sentencias Nos. J-42208-2, J-42210-2 y J-42209-2 de 4 de octubre de 1991.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Que contrajo matrimonio con la señora Vielka del Rosario Green Araúz en la República de Panamá, el día 16 de abril de 1982, y dicho matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil en el Tomo 214 de la Provincia de Panamá, partida N° 1732.

**SEGUNDO:** Que mediante sentencia enmendada y fechada el 4 de octubre de 1991, proferida por la Corte Suprema de Newport News, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica, se decretó la finalización del vínculo matrimonial que lo unía con la señora Vielka del Rosario Green Araúz.

**TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de divorcio se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de Norteamérica la cual es también totalmente lícita en nuestro país.

**QUINTO:** Que el peticionario aporta para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por la Corte Suprema de Newport News, Virginia, Estados Unidos de Norteamérica de 4 de octubre de 1991."

El peticionario adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con la señora Vielka del Rosario Green Araúz.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 38 de 4 de octubre de 1993 señala lo siguiente:

"Analizada la documentación aportada por la recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país, a tenor de lo señalado por el Artículo 114 y siguientes del Código Civil.

> En cuanto a la rebeldía tratada en el numeral 2 del Artículo 1409, del Código Judicial, la misma no se da en el presente negocio ya que ambas partes se presentaron ante el tribunal que decidiera la causa expresando con ello su consentimiento. No obstante lo anterior, cabe señalar que es la parte demandada la que solicita la ejecución de la sentencia extranjera en Panamá, razón ésta que elimina la figura de la rebeldía.
>
> Observamos finalmente, que la sentencia está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes.
>
> Por las consideraciones anteriores, esta Procuraduría es de la opinión que la solicitud que se examina cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que se debe acceder a lo impetrado en este caso."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte Suprema de Newport News, Virginia de los Estados Unidos de Norteamérica, por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que une a los señores Óscar Nelson Viera-Ruíz y Vielka del Rosario Green Araúz.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIROSLABA ALICIA CASTILLO DE CORBETT, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR LA CORTE SUPREMA DE ARIZONA, CONDADO DE PIMA, DE FECHA 2 DE AGOSTO DE 1993, POR MEDIO DE LA CUAL SE DECRETA LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNE A OTIS LEE CORBETT. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

MIROSLABA ALICIA CASTILLO DE CORBETT, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte Suprema de Arizona, Condado de Pima, Estados Unidos de 2 de agosto de 1993, por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que la une a OTIS LEE CORBETT.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **PRIMERO:** Que contrajo matrimonio con el señor Otis Lee Corbett el día 1° de junio de 1990, en la República de Panamá, dicho matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil en el Tomo 239 de la Provincia de Panamá, partida N° 94.
>
> **SEGUNDO:** Que mediante sentencia fechada el 2 de agosto de 1993 proferida por la Corte Suprema de Arizona, Condado de Pima se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre la señora Miroslaba Alicia Castillo de Corbett y el señor Otis Lee Corbett.
>
> **TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.
>
> **CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de divorcio se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de Norteamérica la cual es también totalmente lícita en nuestro país.
>
> **QUINTO:** Que la peticionaria aporta para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por la Corte Suprema de Arizona, Condado de Pima, Estados Unidos de Norteamérica del 2 de agosto de 1993."

La peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público

autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con el señor Otis Lee Corbett.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 45 de 17 de noviembre de 1993 señala lo siguiente:

> "Analizada la documentación aportada por la recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país, a tenor de lo señalado por el Artículo 114 y siguientes del Código Civil.
>
> En cuanto a la rebeldía tratada en el numeral 2 del Artículo 1409, del Código Judicial, la misma no se da en el presente negocio ya que ambas partes se presentaron ante el tribunal que decidiera la causa expresando con ello su consentimiento. No obstante lo anterior, cabe señalar que es la parte demandada la que solicita la ejecución de la sentencia extranjera en Panamá, razón ésta que elimina la figura de la rebeldía.
>
> Observamos finalmente, que la sentencia está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes.
>
> Por las consideraciones anteriores, esta Procuraduría es de la opinión que la solicitud que se examina cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que se debe acceder a lo impetrado en este caso."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte Suprema de Arizona, Condado de Pima, Estados Unidos de Norteamérica por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que une a los señores Miroslaba Alicia Castillo de Corbett y Otis Lee Corbett.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUSTA ZENAIDA GARCÍA ARIAS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ LA SENTENCIA DE DIVORCIO DICTADA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL CONDADO DE LOUISA, ESTADO DE VIRGINIA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, CON EL NÚMERO 3161 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 1984. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

JUSTA ZENAIDA GARCÍA ARIAS, ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por la Corte del Circuito de Louisa, Estado de Virginia, Estados Unidos de América de 14 de noviembre de 1984, por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que la une al señor DAVID WALTON DIXON.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **PRIMERO:** Que contrajo matrimonio con el señor David Walton Dixon el día 4 de marzo de 1982, en la República de Panamá, que dicho matrimonio se encuentra inscrito en el Registro Civil en el tomo 214 del la Provincia de Panamá, partida N° 619.
>
> **SEGUNDO:** Que mediante sentencia fechada el 14 de noviembre de 1984 proferida por la Corte del Circuito de Louisa, Estado de Virginia, se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre la señora Justa Zenaida García Arias y el señor David Walton Dixon.
>
> **TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de divorcio se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de Norteamérica la cual es también totalmente lícita en nuestro país.

**QUINTO:** Que la peticionaria aporta para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por la Corte del Circuito de Louisa, Estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica del 14 de noviembre de 1984.

La peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con el señor David Walton Dixon.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 46 de 17 de noviembre de 1993 señala lo siguiente:

"Analizada la documentación aportada por la recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país, a tenor de los señalado por el Artículo 114 y siguientes del Código Civil.

En cuanto a la rebeldía tratada en el numeral 2 del Articulo 1409, del Código Judicial, la misma no se da en el presente negocio ya que ambas partes se presentaron ante el tribunal que decidiera la causa expresando con ello su consentimiento. No obstante lo anterior, cabe señalar que es la parte demandada la que solicita la ejecución de la sentencia extranjera en Panamá, razón ésta que elimina la figura de la rebeldía.

Observamos finalmente, que la sentencia está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes.

Por las consideraciones anteriores, esta Procuraduría es de la opinión que la solicitud que se examina cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que se debe acceder a lo impetrado en este caso."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por la Corte de Circuito de Louisa, Estado de Virginia, Estados Unidos de Norteamérica por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que une a los señores Justa Zenaida García Arias y David Walton Dixon.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

NILS JANSON, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE ADOPCIÓN PROFERIDA POR LA ALTA CORTE DE BOMBAY, INDIA, NUMERADA CASO 52. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISIETE (17) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

NILS JANSON ha presentado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de adopción N° 52 de 15 de abril de 1993, emitida por el Tribunal Superior de la Judicatura de Bombay, India, Jurisdicción Civil Ordinaria, donde se decreta la adopción de la menor Samita alias Emily, residente en Ashan Sadan, Rescue Home (Hogar de Rescate), Umerkhadi, Bombay-400-009.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

**PRIMERO:** El señor Nils Janson contrajo matrimonio con la ciudadana hindostana Jasbir Haur Bhandari, el día 12 de julio de 1983, el cual se encuentra debidamente inscrito en la Oficina del Registro Civil en el tomo 12, de matrimonios de Panameños en el exterior, partida N° 282.

**SEGUNDO:** Que mediante sentencia N° 52 de 15 de abril de 1993, el Tribunal Superior de la judicatura de Bombay, Jurisdicción Civil Ordinaria, en su jurisdicción general e inherente a petición extranjera de adopción, decretó la Adopción de la menor Samitas alias Emily, residente de Asha sadan, Rescue Home (Hogar de Rescate), Umerkadi, Bombay.400-009.

**TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de adopción se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de la República de la India, la cual es también totalmente lícita en nuestro país.

El peticionario adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de adopción copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con la señora Jasbir Haur Bandhari.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 49 de 6 de diciembre de 1993 señala lo siguiente:

"Analizada la documentación aportada por el recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país , en lo que se refiere a materia de adopción. La expresada sentencia se aportó debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes y traducida al idioma español por intérprete público autorizado tal y como lo establece el artículo 864 del Código Judicial. Además es de observar que no existe rebeldía en este caso.

Así las cosas, esta Procuraduría estima que la presente solicitud no conculca las disposiciones relativas a la materia de adopción establecida en nuestro Código Civil, por lo que considero se debe acceder a lo solicitado por el petente."

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Tribunal Superior de la Judicatura de Bombay, India, Jurisdicción Civil Ordinaria inherente a petición extranjera de adopción, por la cual se decretó la ADOPCIÓN de la menor Samita alias Emily, residente en Asha Sadan, "Rescue Home", (Hogar de Rescate), Umerkadi, Bombay 400-009, con base a la solicitud formulada por el señor Nils Janson.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de adopción en los términos de la presente resolución.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ANA ISABEL VILLAVERDE PÉREZ, SOLICITA SE RECONOZCA Y SE EJECUTE LA SENTENCIA DE DIVORCIO PROFERIDA POR EL JUZGADO UNDÉCIMO DE CIRCUITO DEL CONDADO DE DADE, FLORIDA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

**ANA ISABEL VILLAVERDE PÉREZ,** ha presentado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Undécimo de Circuito del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que la une al señor **ÓSCAR AGUSTÍN PÉREZ.**

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Que contrajo matrimonio con el Señor Óscar Agustín Pérez, el día 29 de octubre de 1983, en Panamá República de Panamá y dicho matrimonio se

encuentra inscrito en el Registro Civil en el Tomo 219 de la provincia de Panamá, partida No.949.

**SEGUNDO:** Que Mediante sentencia No.91-23415-FC-26 de 9 de marzo de 1992 proferida por el Juzgado Undécimo del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, se decretó la disolución del vínculo matrimonial celebrado entre la señora Ana Isabel Villaverde Pérez y el señor Óscar Augusto Pérez.

**TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**CUARTO:** Que dicho fallo no fue dictado en rebeldía, y que dicho proceso de divorcio se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de Norteamérica la cual es también totalmente lícita en nuestro país.

**QUINTO:** Que la peticionaria aporta para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por el Juzgado Undécimo del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de América, del 9 de marzo de 1992.

La peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el certificado de matrimonio emitido por la Dirección General del Registro Civil de Panamá, el cual hace constar la existencia del vínculo matrimonial vigente en la República contraído con el señor **Óscar Augusto Pérez.**

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista No.48 de 6 de diciembre de 1993 señala lo siguiente:

"Analizada la documentación aportada por la recurrente observamos que la sentencia ha sido dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal, de efectos lícitos en nuestro país, y que no fue dictada en rebeldía, además el recurrente ha aportado copia de la respectiva sentencia, autenticada por las autoridades consulares correspondientes, y traducida al idioma oficial de la República, tal como lo establece el 864 del Código Judicial.

Observamos finalmente, que la sentencia está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes.

Por las consideraciones expuestas, somos de opinión que es viable ordenar la ejecución de la sentencia demandada, toda vez que cumple con las exigencias establecidas en el artículo 1409 de la excerta legal antes señalada.

Observamos la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio proferida por el Juzgado Undécimo del Condado de Dade, Florida, Estados Unidos de Norteamérica por medio de la cual se decreta la disolución del vínculo matrimonial que une a los señores Ana Isabel Villaverde Pérez y Óscar Augusto Pérez.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ

(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EYRA VIVECA ORTEGA CERRUD, SOLICITA RECONOCIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR LA CORTE SUPERIOR DEL CONDADO DE RICHMOND, ESTADOS UNIDOS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

EYDA VIVECA ORTEGA CERRUD, ha presentado a la Sala Cuarta de la Corte Suprema solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de adopción N° D-1573-78 de 24 de octubre de 1978, proferido por la Corte Superior de Richmond, Estado

de Georgia, Estados Unidos de América, donde se decreta la adopción de la niña Eyda Viveca Ortega.

La peticionaria fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

**PRIMERO:** Que el fallo dictado por la Corte Superior del Condado de Richmond, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, fue dictado a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**SEGUNDO:** Que el fallo no dictado en rebeldía.

**TERCERO:** Que la anterior sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una pretensión personal.

**CUARTO:** Que dicho proceso de adopción se efectuó de acuerdo a la legislación procesal de los Estados Unidos de América, lo cual es totalmente lícita en nuestro país.

**QUINTO:** Que la peticionaria aporta para pedir la ejecución de esta sentencia extranjera: sentencia debidamente autenticada, proferida por la Corte Superior del Condado de Richmond, Estado de Georgia, Estados Unidos de América.

La peticionaria adjuntó a la solicitud de ejecución de sentencia de adopción copia autenticada de la misma debidamente traducida al español por intérprete público autorizado, e igualmente presentó el registro de nacimiento de Eyda Viveca Pineda Ortega emitido por el Departamento de Recursos Humanos de la Oficina de Registros Demográficos de Georgia, el cual hace constar la existencia de las generales de la menor, así como las de los padres de la misma.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador, quien en su Vista N° 50 de 9 de diciembre de 1993, considera lo siguiente:

"Al someter la solicitud impetrada a lo dispuesto en el artículo 1409 del Código Judicial, a los efectos de verificar el cumplimiento de las exigencias mínimas señaladas para el reconocimiento de sentencias extranjeras en Panamá advertimos, en primer término, que se trata de un proceso en el que fue dirimida una pretensión estrictamente personal. Nos llama la atención el hecho de que no se cuenta con información que aluda a la eventual notificación de comparecencia a juicio del padre natural de la adoptada, de quién se desconocen las generales, y si en definitiva, residía en el territorio nacional o en aquel país para entonces. Debe tomarse en cuenta que por tratarse la adopción de una materia con profundas connotaciones morales y éticas, del padre natural debió ser consultada, o al menos debió habérsele ofrecido esa oportunidad. Nuestra legislación, a pesar de lo riguroso en este aspecto, se flexibilidad ante esa circunstancia, al permitir que aún al darse esa situación, se admita el reconocimiento de la sentencia extranjera, si el no compareciente hubiese solicitado el reconocimiento de la sentencia de adopción, supuesto que como hemos podido constatar, no se da en este caso, pues es la propia beneficiada con la sentencia, la que demanda ese reconocimiento. Por tales razonamientos, opinamos que no procede la solicitud impetrada por el letrado Ramsey Morales, en nombre y representación de Eyda Viveca Ortega Cerrud".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa, que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, está debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondiente como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo que esta superioridad no comparte el criterio esbozado por el señor Procurador en su Vista Fiscal, en el sentido de que no es posible acceder a lo pedido en la solicitud examinada, una vez que el caudal probatorio aportado por la parte interesada deja entrever diáfanamente que la solicitud original de adopción la invoca el padre natural de la niña objeto de dicha acción jurídica, lo que deja de lado el hecho argüido por el señor Procurador, de que este, no conocía la medida adoptada por haberse omitido la notificación personal de este sujeto.

En cuanto a la falta de conocimiento de las generales personales del padre natural de la niña, a la que se le aplica la medida de la adopción, las mismas no aparecen claramente definidas en el Registro de Nacimientos del Departamento de Recursos Humanos de la Oficina de Registros Demográficos del Estado de Georgia, aportada por la solicitante y visible a foja tres (3) del expediente que se analiza.

Y en cuanto a que es la parte beneficiada con la sentencia, la que pide su ejecución en nuestro país, la Sala considera que ello no constituye motivo suficiente por el que dicha sentencia de adopción no pueda ser efectuada, una vez que las premisas generales y especiales que han de reunirse como requisitos para que este tipo de negocios surtan efectos en Panamá, se han cumplido en esta oportunidad al tenor de lo preceptuado por los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, los que han sido citados con amplitud en el desarrollo de la presente resolución.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de ADOPCIÓN proferida por la Corte Superior del Condado de Richmond, Estado de Georgia, Estados Unidos de América, por la cual se decreta la adopción de la niña Eyda Viveca Pineda Ortega, nacida el 29 de enero de 1974 en Panamá, República de Panamá; con base a la solicitud formulada por la señora Eyda Viveca Ortega Cerrud.

Se autoriza a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de adopción en los términos de la presente resolución.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ISAMU MANUEL MATSUYAMA HOYOS, SOLICITA SE DECLARE EJECUTABLE EN PANAMÁ, EL ACTO NO. 30 DE FECHA 30 DE OCTUBRE DE 1992 CONTENIDA EN LA ESCRITURA NO. 1402 DEL 31 DE MAYO DE 1993 Y ACLARADA CON LA ESCRITURA N°1843 DEL 14 DE JULIO DE 1993 DE LA NOTARÍA 16 DEL CIRCUITO NOTARIAL DE BOGOTÁ, REPÚBLICA DE COLOMBIA. MAGISTRADA PONENTE: AURA GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOS (2) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

La firma de abogados Arellano, Chalhoub y Asociados, actuando como apoderados legales del señor Isamu Manuel Matsuyama Hoyos, y Miriam Hoyos Matsuyama, quien actúa en su propio nombre y en representación de sus menores hijos Liliana Sayuri, Takesi y Harumi Matsuyama Hoyos, han presentado para que se declare ejecutable en nuestro país el Acta N°030 de fecha 30 de octubre de 1992, contenida en la Escritura N°1402 del 31 de mayo de 1993 y aclarada con la Escritura No.1843 del 14 de julio de 1993, de la Notaria 16 del Circuito de Bogotá, Colombia, las cuales contienen la partición y adjudicación de los bienes dentro de la Sucesión Intestada de Isamu Matsuyama.

De acuerdo con el numeral 2 del artículo 101 de nuestro Código de procedimiento, corresponde a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, examinar y declarar si las resoluciones judiciales pronunciadas por Tribunales extranjeros pueden ser ejecutadas en nuestro país.

De acuerdo al trámite para estos negocios, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, para que emitiera concepto, quien a través de la Vista No.41 de 29 de octubre de 1993 consideró lo siguiente:

> La resolución cuya ejecutabilidad se solicita, no cumple con un requisito fundamental para que dicha sentencia sea reconocida en Panamá, puesto que el artículo 1409 de nuestro Código Judicial establece la concurrencia de una serie de requisitos para que una sentencia extranjera sea ejecutable en Panamá, de ahí que la norma antes señalada establece en el numeral 4o. la necesidad de que se entregue la copia autenticada, como parte de las pruebas en estos menesteres. Por lo que consideramos, que la solicitud que se examina no cumple con los requisitos exigidos por la ley, por lo que debe concederse el término legal establecido a fin de subsanar la omisión puntualizada.

Devuelto el expediente al despacho de la Magistrada Sustanciadora se procede a resolver, previas las siguientes consideraciones. De acuerdo al caso que nos ocupa, la doctrina y la jurisprudencia han manifestado lo siguiente:

> a. Que en materia de ejecución de sentencias extranjeras, es menester presentar como requisito sine qua non un material probatorio que sustente lo pedido, es decir la resolución invocada y que se pide como ejecutable debe estar debidamente autenticada por la autoridad que la emitió en su lugar de origen, y otorgada ante autoridad consular panameña en el territorio del Estado que funge como requiriente, o en su defecto por la de una nación amiga.
> b. Y que efectivamente se trate de un acto o una resolución emitida por un órgano jurisdiccional, y no de un ente de carácter administrativo.

Por lo tanto, al analizar la documentación aportada por los apoderados de la parte interesada, la Sala observa que la misma no es una sentencia o una resolución de carácter judicial, y por el contrario se trata de Actas Notariales debidamente autenticadas por Notario Público del Circuito de Bogotá, Colombia, y otorgadas ante autoridad consular panameña acreditada en territorio colombiano, lo que arroja como resultado que esta instancia superior considere que no es posible acceder a lo impetrado, en virtud de que no se puede declarar ejecutable en nuestro país actos cuya naturaleza no es de orden público interno y contra las normas que rigen esta materia como lo son los artículos 1409 y concordantes del Código Judicial, artículo éste, que en su tenor literal establece lo siguiente:

**Artículo 1409: ...**

> Sin perjuicio de lo que se dispone en tratados especiales, ninguna sentencia dictada en país extranjero podrá ser ejecutada en Panamá, si no reúne los requisitos:
> ...
> **4. Que la copia de la sentencia sea auténtica. Más se entiende por sentencia la decisión que decide la pretensión.**

También observa la Sala, que al citar el artículo anterior se ratifica el hecho de que para poder ejecutar en nuestro país una sentencia o una resolución judicial, esta ha de llenar los requisitos anotados en esta transcripción, por lo que de acuerdo al caso concreto que examinamos, es un hecho cierto y determinado que el mismo no llena, ni cumple con lo que taxativamente exige la norma referida.

A lo expuesto cabe agregar que el artículo 1549 del Código Judicial que regula la materia de sucesión en general en su aspecto adjetivo, establece que cuando se trata de bienes en este caso, póliza de seguros, dejados en el territorio nacional debe procederse conforme el artículo 1534 y siguientes, por tanto es necesario considerar este aspecto.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO EJECUTABLE la solicitud de ejecución de sentencia extranjera hecha por Isamu Manuel Matsuyama Hoyos y Miriam Hoyos Matsuyama, en el proceso de sucesión intestada de los bienes del señor Isamu Matsuyama y ORDENA que por las consideraciones anteriormente expuestas se devuelva este documento a fin de que se subsanen las omisiones anotadas, y se enderece la acción en la forma que la ley nacional prevé.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E.GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO NO. 21268, LIBRADO POR EL JUZGADO DE MENORES DE LA CIUDAD DE ANTOFAGASTA, CHILE, DENTRO DEL PROCESO DE NOTIFICACIÓN DE PENSIÓN ALIMENTICIA EN CONTRA DEL SEÑOR ALBERTO ANTONIO ECHEVERRÍA PUMARINO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El departamento de consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a este despacho el cuaderno contentivo al exhorto No.21268 librado por el Juzgado de Menores de Antofagasta, Chile, dentro del proceso de notificación de pensión alimenticia, en contra de señor Alberto Antonio Echeverría Pumarino.

La documentación procede del Juzgado de Menores de Antofagasta, Chile, aparece debidamente autenticada por la autoridad que la emitió en su lugar de origen. Sin embargo, al llevar a cabo el estudio de la carta rogatoria se puede apreciar, por razón del contenido de la legislación que regula esta materia en Panamá lo siguiente:

a) Que entre la República de Chile y Panamá, no existe convención que regule la materia de exhorto o cartas rogatorias.

b) Que a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento de las atribuciones que le asigna el artículo 101, numeral 3 del Código Judicial, le corresponde el conocimiento de estos asuntos para el cumplimiento y diligenciamiento en nuestro país.

c) Que en los casos en donde no existe una convención entre los Estados, en acatamiento de las normas de Derecho Internacional, se aplica el principio de reciprocidad para los fines de una mejor cooperación procesal internacional.

d) Y que cuando el diligenciamiento de los exhortos o cartas rogatorias se realiza por la vía de la reciprocidad, es necesario que los documentos remitidos se encuentren autenticados por autoridad consular panameña acreditada en el país requiriente, que no sean violatorios del orden público interno, y que estén debidamente traducidos al idioma español, por lo que en relación a la autenticidad de los documentos esto se puede cumplir de tres maneras a saber: 1) Por la incorporación del sello de la apostilla, cuya finalidad es la supresión del trámite y proceso de legalización, y cuyo propósito real se sitúa en la celebridad del tráfico y de los documentos públicos extendidos por Estados extranjeros para producir efectos en el territorio del otro Estado, y solo en el caso de los países que han ratificado la convención americana en materia de exhortos, basta la tramitación de la comisión o carta rogatoria por la vía diplomática.

En el caso que nos ocupa, a pesar de que se autentican los documentos aportados y que sustentan lo pedido por la autoridad jurisdiccional chilena, no aparece en ninguna parte el sello o la diligencia realizada por el funcionario panameño en el lugar de procedencia y esta omisión no permite darle curso al exhorto No.21268 librado por el Juzgado de Menores de Antofagasta, Chile, dentro del proceso de notificación de pensión alimenticia en contra del señor Alberto Antonio Echeverría Pumarino.

Por lo tanto, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE el cumplimiento del exhorto No.21268 librado por el Juzgado de Menores de Antofagasta, Chile, dentro del proceso de notificación de pensión alimenticia en contra del señor Alberto Antonio Pumarino, y ORDENA que se le hagan las comunicaciones de rigor a las autoridades chilenas por la vía diplomática, para que en conocimiento de lo anterior se subsanen las omisiones anotadas, al tenor de la legislación vigente en la República de Panamá sobre esta materia.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO LETRADO DE PRIMERA INSTANCIA DEL NOVENO TURNO DE LA CIUDAD DE MONTEVIDEO, URUGUAY, DENTRO DEL JUICIO POR COBRO INSTAURADO POR FIRESTONE INTERNATIONAL CORPORTION CONTRA UVERAL, S. A. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Cursa en la Sala de Negocios Generales el exhorto librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Noveno Turno de la ciudad de Montevideo, Uruguay, dentro del juicio por cobro instaurado por FIRESTONE INTERNATIONAL CORPORATION contra UVERAL, S. A.

El presente exhorto tiene como propósito "tomar declaración (sic) al Sr. Iván ROBLES con domicilio en Calle 50, Edificio 'Plaza Bancouver', piso 19, Panamá, apartado postal 4912, Zona 5".

Analizada la cuestión planteada observa la Sala que tanto la República de Panamá como la de Uruguay son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, ratificada por en nuestro ordenamiento jurídico, mediante la Ley 12 de 23 de octubre de 1975.

Observa la Sala que el expediente contentivo del presente exhorto, si bien pareciera adolecer de un error en cuanto al cumplimiento del requisito de legalización de los documentos que acompañan al negocio, por parte de los funcionarios consulares o agentes diplomáticos competentes; requisito indispensable para declarar viable un exhorto o comisión rogatoria y que se encuentra consagrado en el artículo 5, numeral 1 de la Convención Interamericana sobre exhortos y cartas rogatorias, el numeral 2 del mismo artículo exceptúa los casos previstos en los artículos VI y VII como en éste, que se tramitó el exhorto por la vía diplomática a través de la oficina correspondiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Por todo lo antes expuesto y en virtud que no se observan vicios que vulneren el orden público panameño, aspecto primordial que debe tomar en consideración esta máxima Corporación de Justicia par el cumplimiento de un exhorto, más aun cuando se trata de un Estado ratificante de este convenio, es posible acceder a lo solicitado en esta oportunidad.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de Negocios Generales, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento en el territorio nacional del exhorto librado por el Juzgado Letrado de Primera Instancia del Noveno Turno de la ciudad de Montevideo, Uruguay, dentro del juicio por cobro instaurado por FIRESTONE INTERNATIONAL CORPORATION contra UVERAL, S. A., y ORDENA que el mismo sea diligenciado por la Secretaría de la Sala Cuarta utilizando para tales efectos las normas jurídicas de nuestro orden procesal vigente referente a la materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CRIMINAL DE LETRA "LL" DE LA CAPITAL FEDERAL DE LA REPÚBLICA DE ARGENTINA DENTRO DEL PROCESO DE QUERELLA INSTAURADO POR ROBERTO RANDO CONTRA WASERSZTROM, POR EL DELITO DE ESTAFA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto del Director de Consular y Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Extranjeros ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales el exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Letra "LL" de la capital

federal de la República Argentina dentro del proceso de querella instaurado por Roberto Rando contra Wasersztrom, por el delito de estafa.

El propósito del exhorto en cuestión, es que el Tribunal libre oficio a la Superintendencia de Compañías, con sede en la ciudad de Panamá, para que informe lo siguiente:

a) Si existe una sociedad denominada "PASADENA INTERNATIONAL CORPORATION"

b) Si se trata de una sociedad regularmente constituida.

c) Desde que fecha se encuentra inscrita,

d) Cual es su sede social,

e) Cual es su objeto social,

f) Se practiquen diligencias a fin de determinar si tiene registrada una o más compras de pieles a Raúl Wasersztrom y/o Natalio Waserstrom, debiendo proporcionar las fechas, montos de las operaciones y medios por los cuales se realizó el pago.

Para resolver conviene señalar que las Repúblicas de Panamá y Argentina son suscriptoras de la Convención Interamericana sobre exhortos o cartas rogatorias, aprobada en nuestro país por la ley 12 de 23 de octubre de 1975, por lo que dicha Convención es aplicable al exhorto planteado, conforme lo establece el artículo II de la misma.

Para determinar si es posible el cumplimiento de la carta rogatoria extranjera es importante verificar si ella es violatoria del orden público panameño, en el caso de darse dicha violación debe negarse la práctica de la diligencia solicitada.

Al analizar la carta rogatoria, podemos percatarnos que la misma no contraviene nuestro ordenamiento jurídico, y cumple con los requisitos señalados en los artículos V, VI, y VII de la citada Convención.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Criminal de Letra "LL" de la Capital Federal de la República Argentina dentro del proceso de querella instaurado por Roberto Rando contra Wasersztrom, por el delito de estafa y ORDENA que por Secretaría sea remitida al Registro Público la presente solicitud, a fin de que proporcione la información pedida sobre la sociedad que se investiga y que es objeto del presente exhorto.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.

(fdo.) CARLOS H, CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

INCIDENTE DE OPOSICIÓN, PRESENTADO POR EL LICDO. MARCO HERRERA MOW, EN REPRESENTACIÓN DE LA LICDA. OMAYRA GARCÍA DE BERBEY Y DENTRO DE LA DENUNCIA POR IRRESPETO A LA AUTORIDAD Y AGRESIÓN FÍSICA QUE INTERPUSIERA ANTE EL COLEGIO NACIONAL DE ABOGADOS DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados de Panamá ha remitido a esta Sala Cuarta un "incidente de oposición de juzgamiento y a la investigación" dentro del proceso disciplinario iniciado por la Licda. Aidelena Pereira mediante denuncia contra la Licda. Omayra García de Berbey por irrespeto a la autoridad y agresión física contra su persona.

El Licdo. Marco Antonio Herrera Mow, apoderado especial de la Licda. Omayra García de Berbey, sostiene que la denuncia presentada por la Licda. Pereira no debe ser admitida ya que fue presentada directamente al Colegio Nacional de Abogados por lo que se ha seguido una "indebida vía" en este proceso. En su escrito dicho abogado hace referencia a los artículos 202 del Código Judicial, 829 del Código Administrativo, 1003, 1008 y 991 del Código Judicial, 82 del Código Penal, 884 y 865 del Código Administrativo.

Las normas pertinentes en este caso no son las invocadas por el incidentista sino los artículos 21 y 23 de la Ley N° 8 de 16 de abril de 1993.

Si bien es cierto que el artículo 23 de la Ley 8 dispone que cuando la Corte Suprema de Justicia reciba alguna denuncia de parte interesada solicitará al Tribunal de Honor la investigación correspondiente no es menos cierto que el papel de este último es el de instruir el expediente respectivo, lo cual también puede hacer cuando se le presente

directamente una denuncia de parte interesada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la citada ley.

Por otra parte, los procesos disciplinarios que se sigan por faltas a la ética profesional cometidas en el ejercicio de la abogacía no están regidos por el Código Penal ni por el Código Administrativo, como pretende el incidentista, sino fundamentalmente por la Ley N° 8 de 1993 y por el Código Judicial en lo que fuere aplicable. En este sentido no existe norma expresa que consagre la nulidad para que el caso de que la denuncia no sea presentada ante la Corte Suprema de Justicia sino ante el Colegio Nacional de Abogados, cuyo Tribunal de Honor es siempre el que debe actuar como instructor. Tampoco ve la Sala en qué pudiese consistir el perjuicio que le pueda acarrear a la denunciada la presentación de la denuncia ante el Tribunal de Honor, razón adicional para estimar que no se ha producido la nulidad de este proceso.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES NULO lo actuado por el Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados en la denuncia interpuesta por la Licda. Aidelena Pereira contra la Licda. Omayra García de Berbey, y ORDENA que se continúe con la tramitación del proceso disciplinario.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA INTERPUESTA POR HILDA ESTHER HERRERA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES CONTRA LA LICENCIADA MARYBEL ESTRIBÍ DE ABREGO (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

A la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó el cuaderno contentivo de la denuncia por incumplimiento de servicios profesionales presentada por Hilda Esther Herrera contra la Lcda. Marybel Estribí de Abrego.

En nota remisoria, en la que aparece como Sustanciador el Lcdo. José A. Carrasco, se recomienda "la prescripción de la acción disciplinaria por haber transcurrido un término de más de dos (2) años desde que se interpuso la denuncia sin que haya ocurrido gestión o actuación efectiva en el presente caso."

Observa la Sala que como se desprende de lo dipuesto en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se restituye con modificaciones el Capítulo V, de la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, las acciones disciplinarias que se sigan contra los profesionales de la abogacía por faltas a la ética e infracción de la responsabilidad profesional de la abogacía, prescriben en un año y este lapso, se ha cumplido en exceso en este caso, ya que la denuncia, como consta a foja 1 del expediente, fue presentada ante la Comisión de Etica Profesional del Colegio Nacional de Abogados el 18 de abril 1991, y a la fecha han transcurrido dos (2) años, sin que se adelantara la investigación correspondiente.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRESCRITA la acción disciplinaria promovida por la Lcda. Hilda Esther Herrera contra la Lcda. Marybel Estribí de Abrego, por incumplimiento de contrato de servicios profesionales.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE SUSPENSIÓN PROVISIONAL DE IDONEIDAD DEL SEÑOR MIGUEL ANTONIO BERNAL VILLALAZ PARA EJERCER LA PROFESIÓN DE ABOGADO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

VISTOS:

El señor Sabas Rosales ha presentado, por intermedio de su apoderado judicial especial el Licdo. Guillermo Benítez, solicitud de suspensión provisional de la idoneidad del Dr. Miguel Antonio Bernal Villalaz para ejercer la profesión de abogado.

La petición del señor Rosales se fundamenta en que el certificado de idoneidad que expidió la Corte Suprema de Justicia no se apoyaba en el diploma o título de Licenciado en Derecho de Miguel Antonio Bernal Villalaz sino en una "atestación de admisión de la Universidad de Burdeos", lo cual infringe el artículo 5 del Reglamento General para la

Revalidación de Títulos de la Universidad de Panamá que señala que la solicitud de revalidación será acompañada del título o diploma registrado en el Ministerio de Educación. Igual infracción se da, según el Licdo. Benítez con respecto al artículo 1° del Reglamento de Reválida de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas.

El apoderado judicial especial del Dr. Miguel A. Bernal V., el Licdo. José Blandón Figueroa, contestó la petición presentada por el señor Rosales oponiéndose a la misma y señalando que el artículo 2 del Reglamento General para la Revalidación de Títulos de la Universidad de Panamá define el título o diploma como "el documento en que conste que una persona ha cumplido con los requisitos académicos exigidos por un centro de estudios superiores para graduarse en una profesión" y que la atestación de la Universidad de Burdeos se ajusta a dicha definición.

En el proceso cautelar promovido por el señor Rosales se practicaron pruebas testimoniales y periciales y se recibieron una serie de documentos aportados por ambas partes.

Los peritos Julio Elías Berríos Herrera y Juan Lombardi, Doctores en Derecho graduados en universidades francesas, coincidieron en señalar que la atestación o certificación expedida por la Universidad de Burdeos que obra a fojas 60 y 61 del expediente da cuenta "de que el Sr. Miguel Antonio Bernal Villalaz sí tiene el grado de licenciado en Derecho y una especialización en Derecho Público, expedida de conformidad con las leyes de la República Francesa" (a foja 101).

Posteriormente, antes de que este proceso cautelar entrara en la etapa de decisión, el señor Miguel A. Bernal V. presentó un diploma de la Universidad de Burdeos cuya traducción fue ordenada por el Magistrado Sustanciador en providencia que obra a foja 204 del expediente. La traducción al español fue efectuada por la señora Nazarena Navas King y aparece a fojas 205 y 206 del expediente, y en su parte pertinente señala lo siguiente:

> "REPÚBLICA FRANCESA - MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL - UNIVERSIDAD DE BURDEOS I.
> DIPLOMA DE LICENCIATURA EN DERECHO
>
> VISTOS los títulos iniciales presentados por el señor BERNAL, Miguel Antonio. Nacido en PANAMÁ (Panamá)., el 31 de octubre de 1949.
>
> VISTA el Acta de examen levantada en Octubre de 1973 por el Tribunal del DIPLOMA DE LICENCIATURA EN DERECHO constituido en el seno de la Universidad de BURDEOS I, en la cual se comprueba que el interesado ha pasado satisfactoriamente y dentro de los requisitos reglamentarios, las pruebas de control de conocimientos y de aptitudes para la obtención de este diploma, ... Se le confiere EL DIPLOMA DE LICENCIATURA EN DERECHO, accésit Derecho Público, al Señor BERNAL, Miguel Antonio con el fin de que entre en posesión y haga uso de los derechos y prerrogativas propias del mismo. Dado en Pessac, el 5 de febrero de 1986."

Por su parte, el Licdo. Guillermo Benítez presentó un incidente de insuficiencia y extemporaneidad en contra de la prueba documental arriba citada, y el cual se resuelve en esta sentencia.

La Sala pasa a resolver la petición formulada en este proceso cautelar.

El señor Miguel A. Bernal V. ha acreditado ampliamente que es poseedor del título de Licenciado en Derecho expedido por la Universidad de Burdeos. Así consta en la copia autenticada del diploma, que fue confrontada con el original presentado ante la Secretaría General de esta Corte Suprema, y que obra a foja 187 del expediente con su respectiva traducción al español que ha sido reproducida parcialmente en esta resolución judicial. Este documento confirma lo que ha ya había sido acreditado ante esta Corte Suprema mediante la atestación que obra a foja 60 y 61 del expediente que fue expedida por la Universidad de Burdeos y que fue el documento en el cual se apoyó la Corte Suprema para expedir el certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado en favor del señor Miguel A. Bernal V.

Esta Sala considera correcta la apreciación de los peritos, doctores Julio Berríos y Juan Lombardi, en cuanto a que la atestación expedida por la Universidad de Burdeos es una prueba fehaciente que sirve para acreditar ante esta Corte Suprema de Justicia que el señor Miguel Antonio Bernal Villalaz posee el título de licenciado en Derecho otorgado en la Universidad de Burdeos I, Francia.

Es un hecho notorio que las universidades de algunos países de Europa no expiden un diploma en el cual consta el título de un egresado sino después de varios años a la fecha en que el interesado lo obtuvo efectivamente y esto se acredita con una certificación o atestación que, para los efectos de la expedición de un certificado de idoneidad para ejercer la profesión de abogado, acredita plenamente que la persona en cuyo favor se expidió tiene el título que se plasma en la atestación, siempre que ésta provenga de una Universidad seria y acreditada como en este caso lo es, sin duda alguna, la Universidad de Burdeos.

En cuanto al incidente presentado por el Licdo. Benítez, es obvio que el mismo es improcedente ya que lo que debió hacer el citado abogado fue impugnar mediante algún recurso ante el resto de la Sala la admisión de la citada prueba documental, lo cual no hizo en tiempo oportuno.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a

la petición de suspensión provisional de la idoneidad del señor Miguel Antonio Bernal Villalaz para ejercer la profesión de abogado, DECLARA que es improcedente el incidente de insuficiencia y extemporaneidad presentado dentro de este proceso cautelar por la parte demandante, y CONDENA al señor Sabas Rosales a pagar costas en favor de Miguel Antonio Bernal, las cuales se fijan en quinientos balboas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ (fdo.) AURA E.GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) HUMBERTO CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DENUNCIA PRESENTADA POR LOS SEÑORES ELIOFE QUINTERO, BALTAZAR QUINTERO, MARÍA QUINTERO Y JORGE QUINTERO, POR PRESUNTA FALTA A LA ÉTICA PROFESIONAL EN CONTRA DEL LICENCIADO ORLANDO ALONSO RODRÍGUEZ (TRIBUNAL DE HONOR). MAGISTRADO PONENTE: CARLOS LUCAS LÓPEZ T. PANAMÁ, DIECISÉIS (16) DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES (1993).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES).

VISTOS:

A la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, procedente del Tribunal de Honor del Colegio Nacional de Abogados, ingresó el cuaderno contentivo de la denuncia por presunta falta a la ética profesional presentada por los señores Eliope Quintero, Baltazar Quintero, María Quintero y Jorge Quintero, contra el Lcdo. Orlando Alonso Rodríguez.

En nota remisoria, en la que aparece como Sustanciador el Lcdo. José Pío Castillero, se solicita que se declare "la prescripción de la acción disciplinaria en la denuncia por falta a la ética profesional en contra del licenciado ORLANDO ALONSO RODRÍGUEZ".

Observa la Sala que como se desprende de lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley 8 de 16 de abril de 1993, por la cual se restituye con modificaciones el Capítulo V, de la Ley 9 de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía en Panamá, las acciones disciplinarias que se sigan contra los profesionales de la abogacía por faltas a la ética e infracción de la responsabilidad profesional de la abogacía, prescriben en un año y este lapso, se ha cumplido en exceso en este caso, ya la denuncia, como consta a foja 3 del expediente, fue presentada ante la Comisión de Ética Profesional del Colegio Nacional de Abogados el 7 de junio de 1990, y a la fecha han transcurrido tres (3) años, sin que se adelantara la investigación correspondiente.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala Cuarta (Negocios Generales), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA PRESCRITA la acción disciplinaria promovida por los hermanos Quintero contra el Lcdo. Orlando Alonso Rodríguez, por presunta falta a la ética profesional.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS LUCAS LÓPEZ T.
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=